

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 1 de febrero de 2009 se recibió en esta honorable Cámara de Diputados oficio de la Cámara de Senadores mediante el cual remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Contenido de la minuta

Que en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asunto Migratorios.

Propone incorporar en su modificación al párrafo segundo de la fracción III del artículo 42 de la Ley General de Población los "trabajos remunerativos en el sector agrícola, en la rama de la construcción y en la prestación de los servicios".

En la reforma al artículo 138 de la Ley General de Población se propone incrementar la pena de prisión y la multa de salarios mínimos a aquellas personas que pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación requerida.

En este mismo artículo se propone incorporar como un elemento más que puede aumentar las sanciones, los tratos inhumanos que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

En la reforma al artículo 143 de la Ley General de Población se propone que los delitos contenidos en el artículo 138 de la misma ley serán perseguidos de oficio debiendo en todo momento la autoridad migratoria proporcionar al Ministerio Público Federal todos los elementos de convicción para la persecución del delito.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión, posterior al estudio y análisis de las minutas e iniciativa referidas en el apartado de antecedentes, procede a dictaminar lo siguiente:

Primero. Que si bien esta comisión inicia sus trabajos luchan o y apoyando la protección de los derechos humanos de los migrantes, y también apoyando aquellas actividades que realizan y que son recreativas, de manera lícita, y que pueden llegar a generar oportunidades de empleo en el país, es más ahora cuando debemos otorgarles una garantía de que sus actividades o derechos están asegurados con reformas tendientes a la promoción de este tipo de actividades.

Segundo. Debemos garantizarles el mínimo de protección que nuestra Carta Magna ofrece a los individuos, toda vez que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten los mismos derechos a nuestros connacionales y esta sería una forma más de mandar las señales de que en nuestro país se avanza en la lucha de los derechos a ningún individuo.

Tercero. Que si también se ha considerado que las sanciones provenientes del tráfico de personas o en este caso de indocumentados han sido ya algo obsoletos, por los costos que implica ante la gravedad de las acciones, esta comisión considera que hay que llevar a cabo las reformas pertinentes para que las sanciones vayan ad hoc a los actos cometidos.

Cuarto. Es por eso que si en algunos momentos las acciones de ejecución de la justicia, llegan a quedar limitadas por una serie de trámites o requisitos que se deban cumplir, creemos y apoyamos los esfuerzos para que, en determinados casos o tipos de actos éstos se puedan perseguir de oficio y no necesariamente por medio de una querrela que pudiera hacer retardado o difícil llevar a cabo el procedimiento.

Quinto. De esa misma manera, siempre se ha buscado la defensa de los derechos humanos de las personas en general, sean migrantes o no, y que los electos estudiados y que son parte de los contenidos de la minuta e iniciativa que hoy se dictaminan han sido de gran apoyo y sustento para la realización del presente documento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población

Artículo Único. Se reforman los artículos 42, fracción III; 138, párrafos primero y cuarto, y 143 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. y II. ...

III. Visitante. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año.

Cuando el extranjero visitante, durante su estancia, viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior; su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas; se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares; realice trabajos remunerativos en el sector agrícola, en la rama de la construcción y en la prestación de servicios; se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas; podrán conceder e hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salida múltiples.

IV. a XI. ...

...

Artículo 138. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, a quien, por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

...

...

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.

Artículo 143. El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta ley se refiere, estará sujeto a la querrela que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación, no así en relación con el artículo 138 de esta ley, pues este delito se perseguirá de oficio, quedando obligada la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal todos los elementos de convicción necesarios para la persecución de este delito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).

Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RATIFICA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 26 de febrero de 2010, el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, hizo entrega al H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Senadores, la Estrategia Nacional de Energía.

Segundo. En sesión celebrada el día 25 de marzo de 2010, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de decreto que ratifica la Estrategia Nacional de Energía.

Tercero. El 25 de marzo de 2010, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política relativa a preguntas sobre la Estrategia Nacional de Energía, las cuales se remitieron a la Secretaría de Energía el 26 de marzo de 2010 del presente.

Cuarto. En su sesión del 6 de abril de 2010, la Presidencia dio a conocer que se había recibido del Senado de la República la Minuta proyecto de Decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía. El Presidente dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".

Quinto. El 9 de abril del presente la Secretaría de Energía respondió en tiempo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las preguntas planteadas por los distintos Grupos Parlamentarios respecto a la referida Estrategia Nacional de Energía.

Sexto. El 8 de abril de 2010, el presidente de la Comisión de Energía solicita a los diversos Grupos Parlamentarios que remitan las observaciones que tengan a bien formular respecto a la Estrategia Nacional de Energía, poniendo como plazo para recibirlas el día 12 de abril.

Séptimo. El 9 de abril de 2010 por instrucciones del C. Presidente de la Mesa Directiva se remitió a la Junta de Coordinación Política las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas a la titular de la Secretaría de Energía con relación a la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía.

Una vez que la Comisión de Energía recibió el documento referido, procedió a su análisis y formulación del dictamen, al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones

Primera. En octubre de 2008 el Congreso de la Unión concluyó un prolongado proceso de discusión de diversas iniciativas que concluyeron con una importante reforma al marco jurídico del sector Hidrocarburos.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran nuevas disposiciones en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se definen las atribuciones de la Secretaría de Energía.

Señala la fracción VI del artículo mencionado que "El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía."

La importancia de esta nueva disposición estriba en fortalecer las relaciones de colaboración entre los poderes de la Unión al disponer que el Ejecutivo formulará un instrumento de dirección de la política energética y el Legislativo habrá de ratificarlo.

Segunda. En su reunión plenaria del día 7 de abril de 2010, la Comisión de Energía se declaró en sesión permanente con el fin de recibir las observaciones que los diferentes grupos parlamentarios representados hicieran llegar a la Presidencia de la misma y se incorporaran al presente dictamen.

Un apoyo importante de los integrantes de la Comisión de Energía para la formulación de sus observaciones fue el documento mediante el cual la Secretaría de Energía dio respuesta a las preguntas parlamentarias que, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política se plantearon a la titular de dicha dependencia.

III. Observaciones de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a la Estrategia Nacional de Energía.

En el marco de las deliberaciones, se expresaron diversas observaciones que a continuación se presentan de manera resumida, con el propósito de que a partir de ellas el Ejecutivo Federal realice las adecuaciones pertinentes a la Estrategia Nacional de Energía:

- a) La visión 2024 debería incluir elementos que permitan caracterizar la estructura y dimensión del sector energía. Por ello se requiere, entre otros aspectos, elaborar

escenarios de la matriz energética en términos de oferta y demanda, así como responder a las siguientes interrogantes: cuál va a ser la estructura deseable de producción del sistema nacional de refinación; qué proporción de la oferta energética será para el consumo nacional y cuál para el exterior; cuál será la intensidad del uso de energía para la economía en su conjunto y por componentes. La Visión 2024 debe ser congruente con los procesos de planeación que llevan a cabo Pemex y Comisión Federal de Electricidad, atendiendo el Plan de Negocios del primero y el programa de obras e inversiones del sector eléctrico.

Asimismo, sería conveniente incluir la eficiencia con la que va a trabajar el sector, la sustentabilidad ambiental y en qué medida se habrá desarrollado la transición energética en un horizonte de 15 años.

Otra cuestión fundamental que debiera responderse sobre este apartado es cómo contribuirá el sector energético al desarrollo nacional, en particular a la creación de cadenas productivas y proveedores nacionales y cuál es la evolución prevista de las instituciones públicas y la participación de particulares que debiera tener el país para lograr los objetivos y metas que se señalan en la Estrategia.

b) En el eje rector de la seguridad energética, se requiere ampliar el concepto y sus alcances, en términos de reservas probadas de hidrocarburos en relación con la producción anual, grado de autosuficiencia en la producción de petrolíferos y capacidad de abasto para el consumo de los mismos, vinculada con la capacidad de almacenamiento y distribución.

Asimismo, se requiere precisar el margen de reserva de generación de energía eléctrica respecto del consumo. Por otro lado, deberían desarrollarse los objetivos y líneas de acción que permitan la reducción del consumo de combustibles en el transporte y su sustitución por fuentes de energía más eficientes y con costos económicos y ambientales menores.

c) En relación con el segundo eje rector, la eficiencia económica y productiva, se deben incluir también metas de eficiencia del sistema nacional de refinación de hidrocarburos, y detallar explícitamente la forma en que se va a reducir el margen de reserva de electricidad, modulando las inversiones, sustituyendo instalaciones obsoletas y de alto costo, así como cambiando la estructura de plantas de generación de electricidad con base en las diversas tecnologías disponibles. Asimismo, se deben establecer las metas de producción de crudo por año y la dependencia del exterior en materia de petrolíferos

d) En materia de sustentabilidad ambiental, tercer eje rector, es conveniente hacer explícitas las acciones necesarias para atenuar los efectos ambientales vinculados a la disponibilidad de coque de petróleo que de acuerdo a las previsiones se cuadruplicará, debido a las reconfiguraciones de las refinerías.

Hace falta describir puntualmente la forma en que se alcanzará la meta de aprovechar el 99.4% del gas natural y delinear la estrategia para alcanzar la

transición energética. Esta meta debe ser prioritaria y cumplirse en un plazo mucho más cercano, definido explícitamente en la Estrategia Nacional de Energía como alternativa para fortalecer la oferta y la seguridad energética nacional.

También es necesario dimensionar adecuadamente los logros actuales y previsibles en materia de control de emisiones al ambiente, a partir de la producción y consumo de combustibles automotrices e industriales de mayor calidad y con menores contenidos de elementos contaminantes.

e) En función de lo anterior, convendría incluir un cuarto eje rector que reconociera al sector energético como palanca del desarrollo nacional, en especial en lo relacionado con el contenido de origen nacional en las obras y adquisiciones del sector y la producción de materias primas para producir fertilizantes e impulsar las industrias de químicos y petroquímicos.

En este sentido, será necesario desarrollar los objetivos, líneas de acción y metas como sucede con los otros ejes rectores, en lugar de lo presentado en la sección de elementos facilitadores. Lo que se requiere es un modelo económico de sustitución de importaciones que permita incrementar la proveeduría nacional y que establezca los mecanismos y las metas cuantificables.

f) Un quinto eje debiera ser el de la sustentabilidad financiera de la Estrategia. Es necesario identificar y cuantificar los requerimientos de inversión en las diversas áreas del sector energético y sus fuentes de financiamiento, en los plazos definidos en el inciso l). Esto en sustitución de las referencias incluidas en el apartado de elementos facilitadores.

Entre otros elementos, deberían incluirse el mejoramiento de la estructura financiera de las entidades paraestatales, un régimen fiscal que equilibre su contribución a las finanzas públicas y sus necesidades de inversión, reduciendo la carga tributaria; así como establecer una política de subsidios que no vulnere la economía de las familias ni afecte la competitividad del sector productivo.

g) Se requiere mayor abundamiento y precisión sobre el objetivo y la línea de acción que plantean la eliminación gradual de los subsidios. Resulta inaceptable que en las circunstancias económicas actuales se considere como parte de la Estrategia la supresión de subsidios. Es indispensable explicitar la política en esta materia a lo largo del periodo para combustibles, electricidad, gas y productos petroquímicos.

h) Respecto al objetivo de restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural, deben incluirse metas específicas de restitución de reservas en los plazos definidos en el inciso l); asimismo, deben incluirse previsiones y líneas de acción en relación con la exploración y el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos. Asimismo, se requiere eliminar el concepto de "contratos de desempeño" que se utiliza en dos ocasiones en los apartados de objetivos y metas, toda vez que dicho enunciado no existe en

ninguna definición jurídica del marco que regula el sector energético, en particular en la legislación relacionada con el petróleo.

Es necesario que el ritmo de restitución de reservas probadas sea un objetivo primordial alcanzable en el corto plazo. Ello no excluye la necesidad de que el ritmo de inversiones en exploración y de restitución deba mantenerse como un objetivo crítico y permanente hasta el año 2024, ya que constituye un requisito clave para consolidar un sector petrolero nacional competitivo.

i) Es conveniente que se precisen las estrategias y líneas de acción para la cogeneración de energía eléctrica.

j) El objetivo de incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía requiere mayor precisión en cuanto al fomento del aprovechamiento sustentable de la energía y sobre los esquemas de precios y tarifas.

k) El objetivo de gestión tecnológica debe proporcionar los elementos necesarios para tomar decisiones y actuar con efectividad en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, de forma tal que se tenga la capacidad de respuesta ante los objetivos de sustentabilidad, rentabilidad y viabilidad de largo plazo de Pemex.

l) Se requiere establecer con mayor amplitud y desglose las metas de resultados para cada uno de los ejes rectores entre el año 2009 y el 2024, correspondientes a los años 2012, 2015, 2018 y 2021.

m) Toda vez que se está proponiendo la inclusión del eje rector sobre el sector energético como palanca del desarrollo nacional, habría que considerar, al menos, metas vinculadas al contenido nacional y la producción de materias primas.

n) Hay que definir las metas operativas vinculadas a las metas de resultados para los años 2010, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024 que deberán ser definidas y alcanzadas por las dependencias, organismos públicos descentralizados y órganos desconcentrados involucrados en la instrumentación de la Estrategia.

IV. Observaciones de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a la Estrategia Nacional de Energía.

A continuación, se exponen las observaciones de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Para los integrantes de esta comisión, la Estrategia requiere en diversos aspectos de profundidad y precisión, muchos de los cuales el Senado señaló de manera adecuada. De este modo, consideramos que las observaciones del Senado son pertinentes, con base a ello, por nuestra parte enfatizamos lo siguiente:

a) Se ratifica la necesidad de que la estrategia incorpore la memoria de cálculo de producción por campo y por año y la de restitución de reservas de la misma manera, incluyendo sus escenarios definidos por techos presupuestales, plataformas de producción y generación de valor económico. Aguas profundas. En particular, la Sener asegura que la mitad de las reservas están ahí pero no presenta la estrategia que seguirá el país para explotarlas. Se insiste: es imprescindible que Sener precise las acciones que permitirán desarrollar estos recursos.

b) Para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, se acepta la explicación de que ha sido un error y que deberá terminarse de conceptualizar. Sin embargo la SENER deberá incorporar en la Estrategia, las correcciones al alcance de este proyecto tanto en la plataforma de producción como en el proceso de restitución de reservas.

c) Se solicita incorporar al documento de Estrategia los indicadores físicos y financieros de la evolución esperada de la inversión, producción y consumo de combustibles en el SNR, independientemente de que estén contenidos en algún otro instrumento de planeación de la Sener.

d) No se aclara cual será la ruta de inversión y producción de combustibles. Se solicita que se exponga el plan de inversiones, financiamiento, producción por tipos de combustible y plantas. No es aceptable decir que todo depende de "la asignación oportuna de recursos..." y de: "Coordinación de planeación de inversiones...". Se solicita que la Sener incluya dentro de su horizonte de planeación la posibilidad de contar con combustibles mas limpios que las 2 versiones de gasolina y diesel que actualmente se comercializan en nuestro país.

e) Crecimiento del sector Eléctrico: Precisar como se prevé la inversión, producción y uso de plataformas tecnológicas a lo largo del tiempo.

f) Recuperación secundaria en yacimientos: Se requiere a Sener para que incorpore un apartado donde se prevea donde se van a utilizar las diversas modalidades de Recuperación Secundaria; cuanto se prevé invertir en ellas por año y que resultados se han previsto (como factor obligado de aportación a la plataforma de producción nacional).

g) Es necesario aclarar cómo se va a utilizar la capacidad instalada de CFE: Año por año definir cómo se utilizaran las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas de CFE vs. las plantas privadas. Demostrar cuantitativamente que no se ha dejado, ni dejará en los próximos 15 años, en desuso la capacidad estatal, para comprar energía a las privadas. Que la CFE señale con precisión los años en que entrarán en operación nuevas plantas de generación basadas en energías renovables, excluyendo expresamente de este criterio a las plantas hidroeléctricas y de energía nuclear.

h) Ineficiencia por altitud y distancia. Se solicita un cálculo técnico y económico y no una serie de enunciados de buenas rutinas de análisis.

i) Importación de gas y desuso de crudos pesados nacionales. Será necesario que la Comisión de Energía trabaje sistemáticamente en revisar las tecnologías de uso más intensivo de los hidrocarburos, y los presente en el documento de la Estrategia.

j) Energías alternativas. No se delinearán los pasos sucesivos para su desarrollo. Requerimos que la Estrategia incorpore como mínimo los siguientes puntos:

k) La memoria de cálculo que exprese detalladamente la disponibilidad de las diversas fuentes energéticas y su participación prevista cada año en la capacidad instalada de generación eléctrica.

- Los tipos de contratos que se piensa aplicar y las inversiones que se calculan necesarias, es decir la cogeneración a partir de energías renovables.

- Los estímulos e incentivos que se implementarán para el fomento de los proyectos de energías renovables, en las modalidades de producción que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

- Incorporar gradualmente la internalización de costos de las diversas fuentes energéticas, para disminuir el impacto social y ambiental que actualmente tiene el sector energético.

- Presentar un plan específico para concretar en un plazo razonable la elaboración del inventario nacional de energías renovables.

l) Bioenergéticos. No se cuenta con ningún elemento sólido que pueda considerarse como pasos estratégicos. Si la Sener cuenta con análisis u otros elementos medibles en algunos otros documentos, deberá conjuntarlos y presentarlos en ésta Estrategia. Asimismo establecer de manera precisa los porcentajes de los biocombustibles en la producción de combustibles para el mediano y largo plazo.

m) Energía Nuclear. La Sener afirma categóricamente que los costos de combustibles y la disposición y resguardo de desechos no constituye problema alguno, por lo que se solicita el cálculo anualizado de producción e inversiones 2010-2024.

n) Se considera conveniente que el Ejecutivo Federal, incorpore los montos estimados o presupuestados para cumplir las metas establecidas en la estrategia. Lo anterior por que es responsabilidad de la H. Cámara de Diputados el aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

o) Incorporar objetivos y líneas de acción más específicos que permitan reducir emisiones en cada subsector energético, de manera congruente con la meta de nuestro país de reducir el 50% de las emisiones de CO₂ para el año 2050.

- p) Se incorporen en la Estrategia Nacional de Energía, todos los criterios contemplados en el Artículo 4º Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
- q) Considerando que el pasivo financiero ya superó el valor de todos los activos de Pemex, el Gobierno debe presentar una estrategia clara para abordar el régimen fiscal de la empresa. Mismo proceso que deberá aplicarse para la Comisión Federal de Electricidad.
- r) La estrategia no presenta la inversión en explotación específicamente de Gas Natural asociado y no asociado, por ser uno de los principales insumos utilizados en la industria eléctrica nacional, así como del sector industrial. Deberá especificar la mayor inversión en su exploración para la restitución de las reservas.
- s) Además de la reconfiguración de las refinerías existentes y la construcción de una nueva en Tula, Hidalgo, es necesario precisar cuántas refinerías adicionales son indispensables para que en 2024 se elimine totalmente la importación de combustibles.
- t) Es preciso transparentar los componentes de los precios de los energéticos, la estrategia debe incluir una estructura financiera que equilibre sus finanzas con un régimen fiscal adecuado, que no le afecte en su competitividad con los sectores productivos, ni impida sus necesidades de inversión.
- u) Para el desarrollo tecnológico y del capital humano del sector energético, se plantea que las paraestatales y la Secretaría de Energía precisen la vinculación y el apoyo financiero a las instituciones educativas y centros de investigación.
- v) La Estrategia debe contener líneas de acción específicas para tener claridad en el destino de los recursos del Fondo para la Transición Energética.
- w) Incorporar acciones específicas, para lograr que tanto CFE como Pemex, alcancen en su operación niveles comparables a estándares internacionales. Y que en este sentido estas acciones no impliquen un aumento de tarifas a los usuarios.
- x) Que se considere la producción de bioenergéticos a través de algas marinas, dentro de las tecnologías de desarrollo de biocombustibles que no comprometen la seguridad alimentaria, Lo anterior en base a lo establecido en el Artículo 1, fracción I, de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
- y) Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, analizar la adecuada clasificación de la Energía Nuclear dentro de la ENE. Además, es necesario considerar el adecuado tratamiento de los residuos radioactivos en congruencia con lo mencionado en el eje de Sustentabilidad Ambiental de la propia ENE.

z) La Estrategia Nacional de Energía que el Titular del Ejecutivo Federal envió al Senado, contiene un planteamiento aceptable en términos generales, tiene como base la llamada Visión 2024 y está conformada por tres Ejes Rectores, que son Seguridad Energética, Eficiencia Económica y Productiva, y Sustentabilidad Ambiental.

aa) Sin embargo, la Estrategia carece de precisión y profundidad en diversos aspectos, muchos de los cuales el Senado señaló de manera adecuada. De este modo, consideramos que las observaciones del Senado son pertinentes. Con base en ello, por nuestra parte enfatizaríamos lo siguiente:

bb) El artículo 4 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, establece lo siguiente: "Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía".

cc) En este sentido, la ENE que propone el Ejecutivo Federal, ciertamente aborda los aspectos que establece el artículo antes señalado, pero no establece ni de manera conceptual ni de manera estadística, por qué esos objetivos conforman el interés nacional en lo que a Petróleos Mexicanos se refiere. Al contrario, en el texto de la ENE, se dice que esta parte del planteamiento y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

dd) Esto significa que la Estrategia Nacional de Energía parte de un Plan Nacional que, por definición, constituye la visión particular de un grupo gobernante; cuando lo que dispone la Ley citada es que se definan los intereses nacionales al respecto, lo cual necesariamente implica una mayor apertura e inclusión respecto a las diversas voces que tienen una visión específica sobre el futuro de PEMEX.

ee) En resumen, consideramos que la Estrategia Nacional de Energía debe precisar con claridad y amplitud, por qué el interés nacional respecto a Pemex se refleja en los Ejes Rectores, los objetivos acciones que contiene dicha Estrategia. Asimismo, debe incorporarse una reflexión en torno a la noción de Soberanía Energética, en un sentido que va más allá de la Seguridad Energética; es decir la ENE tiene que pronunciarse respecto al modo en que se garantizará que el país mantenga el poder de decisión sobre los energéticos que son propiedad de la nación.

ff) Como lo establecen los Senadores, es necesario que la Estrategia Nacional de Energía, incluya un cuarto Eje Rector, con el fin de establecer los objetivos históricos y sociales del sector energético, y manifestar que éste debe reconocerse como palanca del desarrollo nacional.

gg) Es decir, la ENE tiene que desarrollar una visión del contexto nacional, de tal manera que ubique al sector energético como palanca del desarrollo nacional, a la vez que establezca con toda precisión las responsabilidades sociales que deben observarse, en una sociedad como la mexicana, marcada por una profunda desigualdad, una pobreza que no disminuye y una economía que continuamente se estanca y no crece en la medida que se requiere.

hh) La Seguridad Energética no puede plantearse sin referirse a la sustentabilidad ambiental. Es cierto que se tiene que proyectar a mediano y largo plazo la manera en que se garantizará que el país satisfaga sus necesidades de energía, pero ese objetivo estratégico no puede desligarse de la necesidad de impulsar una transición energética que impulse seriamente otras fuentes de energía, a la vez que se garantice permanentemente la sustentabilidad ambiental de estos procesos.

ii) Por ello, la Estrategia Nacional de Energía, tiene que establecer con precisión cuáles son los objetivos y metas, para realizar una Transición Energética que contemple la utilización sostenida y creciente de otras fuentes de energía, como la solar, la eólica, la geotérmica y la mini hidráulica.

jj) Por otra parte, el tema de las fuentes de financiamiento para lograr las metas y objetivos de la Estrategia Nacional de Energía es fundamental. La ENE plantea, entre otros objetivos estratégicos, restituir las reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural; diversificar las fuentes de energía; promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector energético. Lograr esos objetivos requiere de fuertes inversiones de recursos.

kk) Por ello, la estrategia Nacional de Energía tiene que establecer con la mayor precisión, cuál va a ser el origen de los montos de los recursos financieros necesarios para realizar los objetivos trazados. Sobre todo, se tiene que especificar con pulcritud, si el origen de esos recursos deben provenir siempre de fuentes establecidas como válidas y legítimas por la Constitución y las leyes, o si es necesario habilitar en términos legales otras fuentes de financiamiento y en qué condiciones se darían. En todo caso, el financiamiento al desarrollo del sector energético, debe realizarse garantizando la Seguridad Energética y la propiedad de la Nación sobre los recursos naturales del país.

ll) Por último, el tema de la transparencia y rendición de cuentas es ineludible en la definición de la Estrategia Nacional de Energía. La utilización eficaz y honrada de los recursos financieros es una exigencia poderosa de parte de la sociedad. Esto no solamente tiene que ver con la aplicación justificada, regular y comprobada de los recursos, sino que también se refiere un correcto desempeño que garantice que los objetivos y metas de las políticas públicas se cumplan cabalmente.

mm) En este sentido, la Estrategia Nacional de Energía tiene que contemplar un compromiso claro en materia de transparencia y rendición de cuentas, de tal manera que no se repitan casos similares al conocido como Chicontepec, donde se han invertido más de 600 mil millones de pesos y, hasta la fecha no se ha obtenido el

resultado esperado debido a errores costosos en materia de proyección, cálculo y ejecución, de acuerdo a una valoración elaborada por la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos.

De la misma forma que resolvió la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, esta dictaminadora considera procedente requerir a la Secretaría de Energía y al Consejo Nacional de Energía el que se consideren las observaciones expresadas por los legisladores que se expusieron en este dictamen, a fin de que se hagan los cambios pertinentes, por lo que el Ejecutivo Federal deberá remitir en el plazo establecido en el artículo Tercero del decreto que forma parte de este dictamen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LXI Legislatura, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción VI, último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.

Artículo Segundo. Se requiere al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Energía, tome en cuenta todas y cada una de las observaciones expresadas por los legisladores en el presente dictamen, a fin de que se lleven a cabo las precisiones, ampliaciones y correcciones pertinentes en la Estrategia Nacional de Energía.

Se requiere al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, para que en toda publicación y difusión que realice de la Estrategia Nacional de Energía se anexas las observaciones que haya formulado el Congreso de la Unión sobre la misma.

Artículo Tercero. Se solicita que, en un plazo de noventa días, el Ejecutivo Federal remita a esta Soberanía la Estrategia Nacional de Energía modificada, dando atención a las observaciones a que se refiere el artículo anterior y las mismas sean consideradas en la Estrategia Nacional de Energía del año 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica); Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica, en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis

Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, Cesar Francisco Burelo Burelo.

Fe de erratas

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, AL DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE RATIFICA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 14 de abril de 2010.

Diputado **Francisco** **Javier** **Ramírez** **Acuña**
Presidente **de** **la** **Mesa** **Directiva**
Cámara **de** **Diputados** **del** **Honorable** **Congreso** **de** **la** **Unión**
Presente

El pasado 13 de abril de 2010, la Comisión de Energía hizo entrega a la Presidencia de la Mesa directiva el dictamen de la minuta proyecto de decreto que ratifica la Estrategia Nacional de Energía.

Al respecto, me permito solicitarle sea publicada en la Gaceta Parlamentaria la siguiente fe de erratas, a fin de solventar un error en la página 7 de dicho documento:

Dice:

"j) Energías alternativas. No se delinear los pasos sucesivos para su desarrollo. Requerimos que la Estrategia incorpore como mínimo los siguientes puntos:

k) La memoria de cálculo que exprese detalladamente la disponibilidad de las diversas fuentes energéticas y su participación prevista cada año en la capacidad instalada de generación eléctrica.

..."

Debe decir:

"j) La memoria de cálculo que exprese detalladamente la disponibilidad de las diversas fuentes energéticas y su participación prevista cada año en la capacidad instalada de generación eléctrica.

k) Energías alternativas. No se delinear los pasos sucesivos para su desarrollo. Requerimos que la Estrategia incorpore como mínimo los siguientes puntos:

..."

Atentamente

Diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica)

Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA).

Las Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 39, numerales 1 y 2, fracciones IV y XXVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 25 de octubre de 2005 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley a través de la cual se crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), presentada por el diputado Moisés Jiménez Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comentario a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
2. El 26 de abril de 2006 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), misma que fue enviada al Senado de la República, turnándose para sus efectos a las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.
3. El 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva del Senado de la República, aprobó la participación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para emitir opinión sobre el Dictamen de la Iniciativa en comentario.
4. Con fecha 9 de octubre del mismo año, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, remitió sus comentarios al proyecto de decreto, los cuales fueron analizados por las Comisiones dictaminadoras.

5. El 4 de noviembre de 2008, se presentó al Pleno del Senado de la República el Dictamen de la Minuta en cuestión, a través del cual se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, mismo que fue aprobado y turnado a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso E) del artículo 72 Constitucional.

6. El 6 de noviembre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA).

7. El 3 de diciembre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, modificó el turno dictado a la Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándola a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública.

8. Las Comisiones responsables del dictamen convocaron a diversas reuniones de trabajo con la finalidad de analizar el impacto presupuestal del proyecto, tomando en consideración la opinión de impacto presupuestario emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; asimismo, fueron tomadas en consideración las experiencias de representantes de instituciones relacionadas con la materia y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen.

II. Consideraciones

Primera: La minuta tiene por objeto la creación de la Agencia Espacial Mexicana, cuyo propósito central es la de constituirse como una entidad encargada de proponer y ejecutar la política espacial de México, a fin de impulsar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas asociadas a la materia espacial, así como de promover la formación de especialistas en la misma.

Segunda: Que el acelerado desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, exige que nuestro país de prioridad a las políticas dirigidas al desarrollo educativo, tecnológico y de la investigación. El apoyo a las actividades científicas es una condición indispensable para garantizar un futuro más promisorio. Existen indicadores y ejemplos que demuestran que la inversión en ciencia y tecnología constituye un detonador de la economía y mejora las condiciones de competitividad de las naciones.

Tercera: La creación de una Agencia Espacial Mexicana, que cuente con el apoyo del Estado mexicano, permitirá al país integrarse en la Comunidad Espacial Internacional. Con ello se daría un paso adelante en la generación de condiciones para contar, en el corto plazo, con el acceso a tecnologías a las que sólo podría acceder en un largo plazo y a un alto costo.

Cuarta: La Agencia Espacial Mexicana, traerá consigo beneficios para el país en sectores como la educación, la industria, el medio ambiente y el desarrollo económico.

Quinta: Conscientes de la situación económica que se vive a nivel mundial, se considera que la creación de la Agencia Espacial Mexicana no provoca un gasto oneroso al país, en virtud de que la inversión para su inicio es mínima, aunado a que su patrimonio se integrará con los ingresos autogenerados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o extranjeros.

Se ha demostrado que la National Aeronautics and Space Administration (NASA), por cada dólar invertido en proyectos espaciales, obtiene siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas. Es así que China con la China National Space Administration (CNSA), ha manifestado que por cada dólar que invierte su economía crece de 8 a 14 dólares.

Entre los muchos beneficios que una agencia espacial aporta es el que la mayoría de la tecnología desarrollada se acaba comercializando, lo que hace que las agencias espaciales sean industrias redituables. Ejemplo de ello es *Embraer en Brasil*, que se ha convertido en la tercera empresa aeronáutica más importante en el planeta.

México está en una posición idónea para crear su agencia espacial, en virtud de que:

- La fuerza laboral mexicana es una de las más jóvenes en el mundo.
- Su geografía lo hace idóneo para operaciones espaciales.
- Hemos caído en competitividad mundial al nivel 60 por debajo de Costa Rica.
- Entrar a la comunidad espacial internacional ha beneficiado a más de 40 países, entre los que se incluyen: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela.

Sexta: Se detectaron tres vertientes de oportunidad para México en materia espacial, entre ellas se encuentran: el desarrollo del terreno lunar gracias a nuestra capacidad probada en la industria automotriz; el desarrollo en el área textil, para la construcción de hábitats lunares, y la operación nacional de sistema de GPS, en el área de pequeños satélites.

Séptima: Resulta importante destacar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, aprobado por esta Soberanía, fueron asignados recursos a la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), por un monto por 10 millones de pesos, con lo cual se garantiza la suficiencia presupuestal necesaria para dar inicio a su diseño institucional.

Octava: Por lo anterior las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, aceptan las modificaciones propuestas por la Cámara

de Senadores a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Agencia Espacial Mexicana, porque se considera que la propuesta de la legisladora da una mejor estructura y certeza jurídica al Proyecto de Decreto aprobado por esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 Constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana

Artículo Único. Se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

Capítulo

I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Se crea la Agencia Espacial Mexicana como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El organismo formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios convencionales en cualquier parte del país.

Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto:

- I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la Política Espacial de México, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales;
- II. Ejecutar la Política Espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales;
- III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial;
- IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de autonomía nacional en la materia;
- V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México;

VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales;

VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las actividades espaciales y que permitan la integración activa de México a la Comunidad Espacial Internacional;

VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía;

IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la Administración Pública Federal;

X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, seguridad, paz y prevención de problemas de seguridad nacional en México, y

XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área espacial para su estudio y consideración.

Artículo 3. Son instrumentos de la Política Espacial de México:

I. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas nacionales;

II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos;

III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de interés y para el beneficio de la sociedad mexicana;

IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales;

V. Las investigaciones en materia espacial y la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la infraestructura necesaria para dicho fin;

VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la investigación espacial;

VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales y extranjeras;

VIII. El intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias espaciales;

IX. La participación de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria para proveer de equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan protocolos de intercambio y colaboración, y

X. La adecuación del sector productivo nacional para participar y adquirir competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales.

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tendrá las siguientes funciones:

I. Impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las áreas prioritarias de atención definidas en el Programa Nacional de Actividades Espaciales;

II. Establecer y desarrollar actividades de vinculación con instituciones nacionales de carácter académico, tecnológico y profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas con la materia;

III. Promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, tanto en esta materia como en lo que a la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y todas sus aplicaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología espacial corresponde;

IV. Apoyar la adecuación de los sectores relacionados con la política espacial, particularmente el productivo, para que se incorporen y participen competitivamente en los mercados de bienes y servicios espaciales;

V. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre instituciones, organismos públicos y privados nacionales, extranjeros o internacionales, que realicen actividades en materia espacial, así como el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología, infraestructura y formación de los recursos humanos necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México;

VI. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al Gobierno Federal en la implementación de los mismos, así como en la interpretación de textos internacionales relativos;

VII. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias y tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con las instancias de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil interesadas;

VIII. Definir y promover programas, proyectos y acciones para fortalecer conocimiento y el desarrollo de la investigación espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo económico;

IX. Impulsar investigaciones a través de las instituciones de investigación básica y aplicada y/o empresas especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones;

X. Realizar investigaciones, trabajos, peritajes y emitir opiniones de carácter técnico, científico y legal sobre la materia;

XI. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y sus disciplinas afines, mediante la vinculación de actividades y programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación;

XII. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la producción de materiales de divulgación;

XIII. Crear y operar un sistema de información y consulta en la materia; llevar el registro nacional de las actividades relativas y promover el desarrollo y la educación espacial formal, así como la divulgación de estudios sobre investigación espacial, y

XIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia.

Artículo 5. Son atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana:

I. Coordinar el desarrollo de los sistemas de normalización, acreditación y certificación en la materia, en colaboración con las dependencias nacionales y organismos extranjeros e internacionales competentes;

II. Difundir lo dispuesto en la Constitución, esta Ley y los tratados internacionales ratificados por México en la materia, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que puedan permitir estos últimos, y expedir a los tres órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y aprovechamiento;

III. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme a las leyes aplicables en las entidades federativas y de acuerdo a sus realidades, necesidades y capacidades de participación en proyectos;

IV. Formular el Programa Nacional de Actividades Espaciales, gestionar y ejercer el presupuesto necesario para la realización de sus fines, así como procurar fuentes alternas de financiamiento;

V. Asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas de gobierno, sobre los problemas relativos a

concesiones, permisos y autorizaciones de uso, desarrollo y aplicaciones tecnológicas en materia espacial;

VI. Realizar eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, donde participen integrantes de la agencia y especialistas invitados nacionales y extranjeros;

VII. Proponer la designación de los representantes del país ante las instancias internacionales en materia espacial de las que México sea parte y establecer la postura nacional en materia de su competencia;

VIII. Realizar y participar en acciones y eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, con el fin de incrementar la competencia técnico científica nacional, y

IX. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones.

Capítulo

II

Organización y Funcionamiento

Artículo 6. La Agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno:

I. Junta de Gobierno;

II. Dirección General;

III. Órgano de Vigilancia, y

IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, que serán:

I. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien la presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de Gobernación que deberá tener nivel de subsecretario;

III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que deberá tener nivel de subsecretario;

IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública que deberá tener nivel de subsecretario;

V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberá tener nivel de subsecretario;

VI. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional que deberá tener nivel de subsecretario;

VII. Un representante de la Secretaría de Marina que deberá tener nivel de subsecretario;

VIII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

IX. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;

X. El Director General del Instituto Politécnico Nacional;

XI. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;

XII. El Presidente de la Academia de Ingeniería;

XIII. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina;

XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

XV. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por cada miembro propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener el nivel de director general o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la Junta, cuando el propietario respectivo no concurra.

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año y las sesiones que celebre podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros; y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Sólo en caso de empate, el presidente de la Junta de Gobierno decidirá con voto de calidad.

La Junta de Gobierno tendrá un Secretario Técnico y un Prosecretario, quienes serán los responsables de preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos.

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la Política Espacial de México y, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales;

II. Definir prioridades, conocer y aprobar programas y proyectos de la Agencia;

- III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial;
- IV. Proponer y aprobar acciones que aseguren el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en la materia;
- V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la Agencia;
- VI. Conocer y en su caso aprobar los informes del Director General;
- VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones en su ejercicio;
- VIII. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros de la Agencia y autorizar su publicación;
- IX. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones;
- X. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración con autoridades e instituciones, particulares y grupos sociales e instituciones autónomas;
- XI. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas;
- XII. Analizar y en su caso aprobar el Reglamento, Estatuto Orgánico, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Servicios de la Agencia, y
- XIII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos.

Artículo 10. El Director General de la Agencia será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional.

Para ser Director General deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
- II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia técnica y espacial por lo menos cinco años, y

III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 11. Son causas de remoción del Director General, aquellas que marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el marco legal aplicable.

Artículo 12. El Director General es el responsable de la conducción, administración y buena marcha de la Agencia, y tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar el Programa Nacional de Actividades Espaciales y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;

III. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley;

IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

V. Formular querellas y otorgar perdón;

VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo;

VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;

VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial;

IX. Informar a la Junta de Gobierno respecto a sus actividades;

X. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno, Estatuto Orgánico, el Manual de Organización General, los de Procedimientos y de Servicios al Público de la Agencia.

XI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;

XII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno, y

XIII. Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico, la presente ley y otros ordenamientos.

Artículo 13. La vigilancia del organismo estará a cargo del Gobierno Federal, por conducto de un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la

Función Pública; lo anterior, sin perjuicio de sus propios órganos internos de control que sean parte integrante de la estructura del organismo.

El Comisario Público asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.

Artículo 14. El Comisario Público evaluará el desempeño global y por áreas del organismo, su nivel de eficiencia, y el apego a las disposiciones legales, así como el manejo de sus ingresos y egresos, pudiendo solicitar y estando el organismo obligado a proporcionar toda la información que requiera para la realización de sus funciones.

Tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren los artículos correspondientes de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las del Reglamento Interno de la Agencia y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 15. Las relaciones laborales entre la Agencia Espacial Mexicana y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y reglamentarias de la misma.

Capítulo Del Presupuesto y Patrimonio

III

Artículo 16. La Agencia administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los programas y presupuestos que formule anualmente y que apruebe su Junta de Gobierno.

Artículo 17. El patrimonio de la Agencia se integrará con:

- I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;
- II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento;
- III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste;
- IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor;
- V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal;
- VI. Los ingresos de la Agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la Agencia, y

VII. Los recursos que ingresen a la Agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior, deberán ser aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por la Junta Directiva.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Junta de Gobierno se instalará en un periodo no mayor a los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Una vez instalada la Junta de Gobierno, ésta organizará y convocará a foros y mesas permanentes de trabajo para que en un plazo no mayor a ciento ochenta días, expertos en materia espacial, tanto nacionales como extranjeros, así como Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación, discutan y formulen las líneas generales de la Política Espacial de México que será desarrollada por la Agencia Espacial Mexicana.

Artículo Cuarto. Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el Presidente de la Junta de Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del Director General de la Agencia Espacial Mexicana, quien será nombrado en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a partir de la expedición de dicha convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto.

Artículo Quinto. El Director General de la Agencia contará con un plazo de noventa días naturales a partir de su nombramiento para elaborar y presentar el Programa Nacional de Actividades Espaciales, el proyecto de Reglamento Interior, así como el proyecto de Estatuto Orgánico que le permitan a la Agencia cumplir sus funciones, los cuales serán aprobados por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de su presentación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza, José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en contra), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica)

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Roberto Albores Gleason (rúbrica), Claudia Anaya Mota, Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Cruz López Aguilar, Fernando Morales Martínez, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), (rúbrica) Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Armando Ríos Piter, Rigoberto Salgado Vázquez, María Esther Sherman Leño (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Enrique Octavio Trejo Azuara, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández.

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente: minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo anterior, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el jueves 3 de septiembre 2009, los ciudadanos secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

En fecha 9 de julio 2008, los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa para adicionar un artículo 34 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual en esa fecha fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Seguido su trámite legislativo en fecha 30 de abril 2009, la iniciativa de referencia fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores y posteriormente, en esa misma fecha, fue enviada a esta Cámara de Diputados.

En fecha 3 de septiembre 2009, la minuta de referencia fue turnada por la Mesa Directiva de esta Cámara, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segunda. Que la minuta de referencia en resumen propone lo siguiente:

Establecer la obligación a los proveedores de, además de exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezcan al consumidor, que exhiban desglosado el precio, impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con la adquisición o contratación respectiva, sea al contado o a crédito.

Tercera. Que el dictamen que aprobó la minuta referida, establece como fundamento de su posición –que modificó la iniciativa original– lo siguiente

Consideraciones

La iniciativa objeto de este dictamen propone la siguiente adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor:

"Artículo 34 Bis. La publicidad deberá incluir en los precios el monto de las contribuciones que con motivo de la adquisición de bienes o la prestación de servicios tengan que pagar los consumidores."

Estas comisiones destacan que en el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor ya se establece la obligación por parte del proveedor de informarle al consumidor el costo o monto total a pagar por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio, al respecto establece:

"Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor."

Asimismo, en la publicidad que de éstos se realice (adquisición de un bien o la prestación de un servicio), deberá estarse a lo señalado en el artículo 6 del Reglamento de la citada Ley, en que se define que se entiende por costo o monto total a pagar:

"Artículo 6. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 1, fracción III, 7 Bis; 43; 66, fracción III; 73 Bis, fracción IX; 73 Ter, fracción VII y demás relativos de la ley, se entiende por precio total, costo total o monto total a pagar, el precio, costo o monto relativo a operaciones al contado o a crédito que incluya, según corresponda, los conceptos siguientes: impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la

adquisición o contratación respectiva, tales como los relativos a la investigación, apertura de crédito, avalúos, administración y envío.

...

En la publicidad y en cualquier medio por el cual se proporcione información relativa al precio de los bienes o servicios que los proveedores ofrezcan, deberá señalarse de manera notoria el precio total, costo total o monto total a pagar relativo a operaciones al contado, según corresponda y, tratándose de operaciones a crédito, también deberá señalarse de manera notoria el Costo Anual Total respectivo."

No obstante lo anterior, estas comisiones consideran relevante que esta información que se incluya en la publicidad de cualquier bien, producto o servicio que se ofrezca a los consumidores sea incluida en el texto de la ley para darle así la relevancia y firmeza que el principio de autoridad formal de la ley le conferiría a esta regulación que pretende precisamente evitar cualquier tipo de engaño o abuso en la oferta que se hace a los consumidores.

Por lo anterior, se plantea la posibilidad de incluir el sentido de la iniciativa propuesta no en el artículo 34 Bis como originalmente se plantea si no en un segundo párrafo del artículo 7 Bis, que actualmente establece la obligación de los proveedores de exhibir de manera visible el monto total a pagar por los consumidores.

De esta manera, el segundo párrafo adicionado establecería:

"Dicho monto deberá incluir el precio así como los conceptos siguientes: impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito, los cuales deberán ser desglosados."

Cuarta. Que esta Comisión de Economía estima legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores.

Asimismo, estima atinadas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar modificaciones a la iniciativa original y establecer la materia de la iniciativa en el artículo 7 Bis, pues de esa manera se conserva la lógica que sigue la Ley Federal de Protección al Consumidor.

No obstante lo anterior esta Comisión de Economía estima que el hecho de que se establezca la obligación de desglosar cada uno de los impuestos, intereses, etcétera, y cualquier otro cargo que se requiera cubrir por motivo de la adquisición o contratación respectiva, es excesiva y podría tener cargas adicionales a los proveedores, pues el bien jurídico que se está tutelando es la transparencia hacia el consumidor respecto del costo verdadero que debe cubrir, sin que existan cargos adicionales o escondidos.

En este sentido, esta Comisión estima que se debe omitir el término "desglosados" y se debe añadir al actual artículo 7 Bis las palabras "forma notoria", para de esta forma resaltar

la obligación del proveedor de exhibir el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca, respetando con ello al consumidor en su elección de preferencia, homologando esta disposición con las actuales obligaciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Quinta. En virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar, con la modificación apuntada, la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, remitiéndose a la consideración de la Colegisladora para los efectos del artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), María Matilde Díaz de León Macías, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña, José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO

A las Comisiones de Economía y de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, suscrita por integrantes de la Comisión de Economía el 2 de abril 2009. Lo anterior, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94, último párrafo, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa referida al tenor de los siguientes

Antecedentes del proceso legislativo

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 2 de abril de 2009, los secretarios dieron cuenta de la iniciativa citada al rubro, suscrita por diversos diputados, en ejercicio del derecho conferido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Tórnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero. Que la iniciativa objeto de este dictamen propone reformas al Código de Comercio que establecen y conforman los juicios de substanciación oral, procurando el perfeccionamiento y adecuación de la regulación mercantil respectiva.

Cuarto. Con fecha 17 de septiembre 2009, la Mesa Directiva de esta LXI Legislatura Federal acordó que los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y las proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, para poder ser conocidos por el pleno, deberán reiniciar su trámite legislativo.

Quinto. En fecha 9 de diciembre 2009, la Comisión de Economía dictaminó positivamente la iniciativa que nos ocupa, realizando las modificaciones que se mencionan en la consideración decimosexta.

Sexto. En fecha 14 de diciembre 2009, la Comisión de Justicia presentó en su sesión ordinaria, para su discusión y aprobación, el dictamen correspondiente y seguido su trámite

legislativo, en fecha 10 de febrero 2010 fue aprobado el dictamen correspondiente, con las modificaciones que se mencionan en la consideración decimoséptima.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Comercio, presentada por integrantes de la Comisión de Economía.

Segunda. Que con base a los antecedentes indicados, la Comisión de Justicia, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de ley referida.

Tercera. Que nuestra Constitución consagra la prerrogativa legal universal de una administración de justicia mediante tribunales expeditos, con resoluciones completas, procuradas de manera pronta, imparcial y gratuita. De lo que se desprende una clara intención de establecer las bases para contar con procedimientos jurisdiccionales cuyo objetivo primordial fuera la persona, como sujeto principal en el que recaigan sus determinaciones, pues de éstas depende el respeto de sus garantías y prerrogativas, por lo que es indispensable que las normas vigentes cuenten con la característica de expeditos, integralidad e imparcialidad.

En ese sentido es evidente que las leyes vigentes y los instrumentos para atender la demanda de justicia, han sido anacrónicas e insuficientes, por lo que atendiendo a la aspiración del constituyente de 1917, de contar con un sistema de impartición de justicia eficaz y suficiente, cuya prontitud y eficiencia fueran ciertas para atender las necesidades de la población, es que resulta evidente una readecuación de la sustanciación y procedimientos judiciales para la solución de controversias del orden mercantil.

Cuarta. Que en la actualidad es reiterada solicitud de la sociedad que se cuente con juicios expeditos y que su tramitación sea dinámica, ágil y que exista la certidumbre e integralidad de las resoluciones judiciales, por ello es que la propuesta legislativa en estudio prevé la incorporación al sistema jurídico vigente de un sistema de impartición de justicia cuya base sea la preeminencia de la oralización de los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, toda vez que estos son el mayor número de los existentes en los tribunales, y de los que se encuentra saturado el sistema judicial.

De acuerdo a lo anterior, es evidente la necesidad de adecuar nuestro sistema jurídico a las necesidades y circunstancias actuales evitando ser anacrónico, que se reduzcan los formalismos, requisitos y trámites inocuos atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población.

Quinta. Que este juicio sólo será empleado para los procedimientos ordinarios cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos 48 centavos, cantidad que resulta de la indexación anual que el mismo tribunal realiza para los efectos de la cuantía de los asuntos,

conforme a lo que disponen el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 1253, y el artículo 1340 del mismo ordenamiento, dejándose incólumes aquellos asuntos que tengan prevista una tramitación especial en el mismo código, tal y como son los ejecutivos mercantiles, especiales de fianzas, ejecución de prenda sin transmisión de la posesión, efecto de evitar incongruencias en ellos.

Sexta. Que la iniciativa refrenda la intención de la norma vigente, por dotar a los procedimientos en materia mercantil de mayor agilidad, brindando la oportunidad de sustanciar procedimientos orales, teniendo como base, en primer término, que habrá de observar como principios, los de oralidad, publicidad, igualdad, intermediación, contradicción, continuidad y concentración.

Al respecto, es importante recalcar que este procedimiento que se propone, implica el establecimiento de la garantía de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a personas con capacidades diferentes y a grupos vulnerables, mediante la designación de intérpretes para personas que no puedan hablar, oír, padezcan invidencia o no hablen español, garantizando con ello el efectivo acceso a la justicia.

Séptima. Que la certeza jurídica es un resultado intrínseco que las normas deben brindar siempre, sin detrimento de la agilidad y rapidez de los procesos; por ello, dada la naturaleza del procedimiento oral, se consideró necesario dotar al juez de los mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar la mejor conducción del juicio. Para tal efecto, se le otorgan las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden en las audiencias, incluido el poder de mando de la fuerza pública; la limitación del acceso del público a las mismas; así como decretar recesos de estimarlo necesario, sin que ello implique dilación del procedimiento.

Con la finalidad de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza oral, se plantea suprimir la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno a la garantía de audiencia. Asimismo, se tienen por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciados en las audiencias, aun cuando no acudan las partes.

Octava. Que previendo lograr la agilidad del desarrollo de las audiencias y acorde a la oralidad que impera en las mismas, se considera adecuada la incorporación tecnológica para su registro, sin que ello implique el desuso de otras formas establecidas de registro como son los medios tradicionales. Se hace la precisión de que los medios electrónicos utilizados habrán de ser considerados como instrumentos públicos constituyendo prueba plena. Independientemente de los medios que se utilicen para el registro de las audiencias, también se propone que se levante un acta para describir, en forma breve, el lugar y fecha en que tuvo lugar la diligencia, así como los nombres de las personas que intervinieron en la audiencia, con la firma del juez y el secretario, sin perjuicio de que puedan asentarse mayores datos, si lo estimare necesario el juez.

Novena. Que el proyecto de decreto en la estructura del juicio oral, establece la figura de la audiencia preliminar, misma que tiene como propósito la depuración del procedimiento,

mediante la conciliación de las partes con intervención directa del juez; fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos para dar mayor agilidad al desarrollo del desahogo de pruebas, ya que éstas son la actividad de las partes encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se afirman, por lo que su correcto ofrecimiento y desahogo hace más efectiva la aplicación de justicia, fijar acuerdos probatorios, pronunciarse respecto de la admisión de pruebas para evitar duplicidad en su desahogo, y pasar a la fase siguiente del procedimiento.

Décima. Que con la finalidad de que el procedimiento sea ágil y el desahogo de pruebas se realice en una sola audiencia (audiencia de juicio), el proyecto de decreto establece la carga para las partes en la preparación de sus pruebas, así como que en caso de no encontrarse debidamente preparadas, se dejarán de recibir. Lo anterior, para que el juicio oral no pierda agilidad, evitando, en la medida de lo posible, tácticas dilatorias y el retardo injustificado del procedimiento.

Cabe mencionar que dicha fórmula se ha venido utilizando en materia de arrendamiento inmobiliario en el Distrito Federal, con gran éxito desde 1993, disminuyendo drásticamente la carga de los tribunales de la materia, lo que se ve reflejado en la agilidad y eficacia de la sustanciación de los procedimientos correspondientes.

Undécima. Que en el proyecto legislativo se dota al juez de las más amplias facultades de dirección para efectos de conciliar a las partes, con el propósito de solucionar las controversias que se plantean ante los tribunales de manera aún más rápida. Acorde a lo anterior, se conmina la asistencia de las partes mediante la imposición de una sanción, dado que es necesaria la presencia de las mismas para lograr acuerdos conciliatorios entre ellas; también se impone la obligación de que quien acuda en representación de alguna de las partes cuente con facultades expresas, tanto para conciliar como para celebrar convenios con el propósito de que exista una posibilidad real de avenir.

Duodécima. Que por la necesidad e importancia de que los órganos jurisdiccionales cuenten con las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, por ser el cumplimiento de éstas de orden público y ante la ausencia en el Código de Comercio de una disposición específica que regule los medios de apremio, se adiciona el artículo 1067 Bis, para regular expresamente estas medidas de apremio, y por idénticas razones se incluyen también en el juicio oral mercantil.

Decimotercera. Que de igual manera esta reforma contiene adecuaciones respecto de los medios de solución de controversias alternativos y dada la relevancia que reviste el arbitraje en este sentido para la materia comercial, se considera necesario reglamentar puntualmente la intervención judicial y los requisitos que se deben observar cuando se solicite la remisión al arbitraje a que se refiere el artículo 1424 del Código de Comercio.

Respecto de la designación de árbitros, la adopción de medidas previstas en el articulado, la solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas y la consulta sobre honorarios del tribunal, se establece que su tramitación será en vía de jurisdicción voluntaria y, en tal sentido, se hace la remisión a los preceptos correspondientes del Código Federal de

Procedimientos Civiles, previendo dar firmeza a las resoluciones del juez en la intervención que tiene en el arbitraje y estableciendo la improcedencia de recurso alguno en contra de sus resoluciones, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros.

Asimismo, para hacer más ágil el reconocimiento y ejecución de los laudos se establece que no se requiere de homologación, salvo que se solicite tal reconocimiento y ejecución como defensa en un juicio u otro procedimiento, también se regula la forma de tramitación del juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, se establece la responsabilidad tanto del Tribunal Arbitral como de quien la solicita por los daños y perjuicios que se pudieren ocasionar

Decimocuarta. Se considera conveniente la adición de un artículo 1339 Bis, dado que a partir de la entrada en vigor de las reformas que sufrió este código en 2008, se han suscitado diversos criterios en cuanto a si los asuntos de cuantía indeterminada resultan apelables o no. Debemos recordar que la intención del legislador en la reforma de 2008, respecto a la inapelabilidad de los asuntos en materia mercantil, fue únicamente encaminada a los asuntos en los que se reclaman prestaciones de tipo pecuniario y no así respecto de las que no contienen prestaciones de este tipo. Por lo anterior, a efecto de evitar disparidad de criterios y a fin de unificar de manera expresa en la ley esta situación, es que resulta necesaria la inclusión de este artículo en el texto del código.

Decimoquinta. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada ante esta soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana en materia de administración de justicia, agilizando y adecuando de manera eficiente la aplicación de la legislación procesal, reflejándose en juicios más justos y rápidos, que brindan seguridad y certeza jurídica necesaria.

Decimosexta. Que la Comisión de Economía estimó modificar el proyecto original de reforma en lo que respecta a los artículos 1067 Bis, fracción III, 1339 Bis, 1390 Bis 4, 1390 Bis 6, 1390 Bis 8, 1390 Bis 16, 1390 Bis 23 y 1390 Bis 26, 1390 Bis 33, 1390 Bis 49, 1463, 1480; por la razón de que se estima necesario incluir como medida de apremio en los procedimientos mercantiles el rompimiento de cerraduras, ante la omisión actual del Código de Comercio, respecto a ese punto, así como hacer referencia de forma expresa sobre la posibilidad de aplicar esos medios de apremio en los juicios orales; se estableció la recurribilidad vía apelación de los juicios de cuantía no determinada; por otra parte se estimó que el proyecto original no plasmaba atinadamente el principio de convalidación de actuaciones cuando se reclama su nulidad, específicamente en lo que respecta al emplazamiento; y se aclaró que la admisión de las pruebas en el juicio oral, son todas las que ya se permiten en materia mercantil, con algunas modificaciones para este tipo de juicios; asimismo se modificó la presunción legal respecto de los hechos de la demanda, cuando ésta no es contestada por la parte demandada, pues se estimó que contrariaba el principio lógico procesal de la carga de la prueba que ya se encuentra consagrado en los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, y que básicamente establece que el que afirma está obligado a probar, partiendo de que este tipo de juicio está dirigido a procedimientos en los que no se tienen acciones preconstituidas; también se modificó

porque establecía facultades al juez que conoce del procedimiento que contrarían los principios de transparencia y publicidad, que han estado permeando en todo nuestro sistema jurídico, y que inclusive ya se encuentran en el mismo Código de Comercio en el artículo 1080, fracción I, que establece que todas las audiencias serán públicas; se modificó a fin de aclarar que los medios idóneos en los que se puede dejar constancia de las actuaciones del juicio oral, pueden ser los tradicionales, previendo que por alguna circunstancia algunos tribunales en un momento específico no pudieran echar mano de los medios electrónicos; se ajustó la numeración de las fracciones del artículo 1390 Bis 49, de números arábigos a números romanos, para dar armonía con el sistema que sigue el Código de Comercio; se decidió conservar el primer párrafo del artículo 1463, para mantener la posibilidad de aplazar la decisión de reconocimiento o ejecución del laudo cuando en el país en el que se dictó se solicitó su nulidad o suspensión; asimismo, se omitió que la multa por no asistir a la audiencia preliminar sea a favor del colitigante, pues se estima que el perjuicio es para el Estado que tiene interés en depurar los procedimientos; se estableció la responsabilidad de daños y perjuicios para quien pide una medida cautelar y resultare improcedente la ejecución del laudo arbitral; se suprimió el artículo 1481, pues se consideró que el Código de Comercio ya contiene su sistema de notificaciones debidamente reglamentado; y por último, se modificaron los transitorios segundo y tercero para facilitar la aplicación de las presentes reformas.

Decimoséptima. Que la Comisión de Justicia estimó modificar el dictamen aprobado por la Comisión de Economía en lo que respecta a los artículos 1390 Bis 12, 1390 Bis 14, 1390 Bis 24, 1390 Bis 32, 1390 Bis 35, 1390 Bis 37, 1390 Bis 38 y 1473, a fin de que el juicio sea lo suficientemente ágil y rápido que demanda la sociedad, por lo cual se redujeron los términos para cumplir la prevención para aclarar la demanda de cinco a tres días; para contestar la demanda de quince a nueve días; para la celebración de la audiencia del juicio de cuarenta a treinta días; para el dictado de la sentencia de quince a diez días; y para contestar la demanda en el juicio especial sobre transacciones especiales y arbitraje de diez a cinco días; y se estimó incluir la mediación como posibilidad para resolver el juicio.

Decimoctava. Que se estima que lo anterior logrará un equilibrio entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además de resoluciones justas y contundentes.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones de Economía y Justicia someten a la consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforman los artículos 1464 a 1480, que comprenden el Capítulo X, "De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje"; se adicionan los artículos 1067 Bis; 1339 Bis, y un Título Especial que se denominará "Del Juicio Oral Mercantil", que comprende los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 49, y se derogan los artículos 1460 y 1463, segundo párrafo del Código de Comercio; para quedar como sigue:

Artículo 1067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala:

I. Amonestación;

II. Multa hasta de seis mil pesos, monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI;

III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria; y

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público.

Artículo 1339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.

Título
Del Juicio Oral Mercantil

Especial

Capítulo
Disposiciones Generales

I

Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos 48 centavos, moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.

La cantidad referida en el párrafo anterior deberá actualizarse en forma anual, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1253 fracción VI de este código.

El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de los estados tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción el factor de actualización a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 1390 Bis 1. No se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente código y en otras leyes.

Artículo 1390 Bis 2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, intermediación, contradicción, continuidad y concentración.

Artículo 1390 Bis 3. Quienes no puedan hablar, oír, o no hablen el idioma español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se designará de entre aquellos autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas,

relatándose sus preguntas o sus contestaciones en la audiencia y, si así lo solicitare, permanecerá a su lado durante toda la audiencia.

En estos casos, a solicitud del intérprete o de la parte, se concederá el tiempo suficiente para que éste pueda hacer la traducción respectiva, cuidando, en lo posible, que no se interrumpa la fluidez del debate.

Los intérpretes, al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho.

Artículo 1390 Bis 4. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.

Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede hacer uso de las medidas de apremio que se mencionan en el artículo 1067 Bis, en los términos que ahí se especifican.

Artículo 1390 Bis 5. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia territorial, deberán ser presididas por el juez, registradas por personal técnico adscrito al Poder Judicial de la entidad federativa o del Poder Judicial de la federación, según corresponda, por cualquiera de los medios referidos en el artículo 1390 Bis-26 del presente título y certificadas de conformidad con lo dispuesto para el desarrollo de las audiencias en el juzgado.

Artículo 1390 Bis 6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta. La del emplazamiento podrá reclamarse en cualquier momento, pero si la persona se hace sabedora del juicio sin reclamar la nulidad, la notificación no realizada o mal hecha, surtirá sus efectos como si se hubiere hecho conforme a derecho.

Artículo 1390 Bis 7. La recusación del juez será admisible hasta antes de la admisión de las pruebas en la audiencia preliminar.

Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir del momento en que se interpuso la recusación.

Artículo 1390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título. De igual manera serán admisibles todos los medios probatorios que puedan generar certeza en el juzgador en los términos del artículo 1205, sin perjuicio de las reglas especiales que se establecen en este título especial.

Artículo 1390 Bis 9. Salvo lo dispuesto en este título, las promociones de las partes deberán formularse oralmente durante las audiencias. Los tribunales no admitirán promociones frívolas o improcedentes, y deberán desecharlas de plano, debiendo fundamentar y motivar su decisión.

Artículo 1390 Bis 10. En el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.

Capítulo
Del Procedimiento Oral

II

Sección
Fijación de la Litis

Primera

Artículo 1390 Bis 11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los requisitos siguientes:

- I. El juez ante el que se promueve;
 - II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones;
 - III. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio;
 - IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios;
 - V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos.
- Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión;
- VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables;
 - VII. El valor de lo demandado;
 - VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio; y
 - IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias.

Artículo 1390 Bis 12. Si la demanda fuere oscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos que señala el artículo anterior, el juez señalará, con toda precisión, en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión.

El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez, en un plazo máximo de **tres**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el término, el juez la desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo.

Artículo 1390 Bis 13. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas, las partes ofrecerán sus pruebas relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este párrafo, así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver, que deberán rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los términos del artículo 1061 de este código.

Si las partes no cumplen con los requisitos anteriores en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente.

Artículo 1390 Bis 14. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin de que dentro del plazo de **nueve** días entregue su contestación por escrito.

Artículo 1390 Bis 15. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación.

El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado.

La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser

notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada.

Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda.

El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento.

Artículo 1390 Bis 16. Transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda, sin que lo hubiere hecho y sin que medie petición de parte, se procederá en los términos del artículo 1390 Bis 20. El juez examinará, escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad, si el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal.

Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo.

Artículo 1390 Bis 17. El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por el término de 3 días para que desahogue la vista de la misma.

Artículo 1390 Bis 18. El demandado deberá dar contestación y, en su caso, formular la reconvencción. Se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste dentro de los **cinco** días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del auto que la admita.

Artículo 1390 Bis 19. El demandado podrá allanarse a la demanda; en este caso el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de **diez** días, en la que se dictará la sentencia respectiva.

Artículo 1390 Bis 20. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvencción, o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los diez días siguientes.

En el mismo auto, el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente.

Sección De las Audiencias

Segunda

Artículo 1390 Bis 21. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este código, además de contar con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente.

Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.

Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez. Serán públicas siguiendo en lo que les sea aplicable las reglas del artículo 1080 de este código.

El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento de las formalidades que correspondan y moderará la discusión, podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho.

El juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante el debate y durante las audiencias, para lo cual podrá ejercer el poder de mando de la fuerza pública e imponer indistintamente las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 Bis.

Artículo 1390 Bis 24. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas.

La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento en la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de la facultad del juez en materia de conciliación **y/o mediación.**

Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención, a petición de ellos podrán ausentarse del recinto oficial cuando el juez lo autorice.

Artículo 1390 Bis 25. Durante el desarrollo de las audiencias, de estimarlo necesario, el juez podrá decretar recesos.

Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá suspenderla o diferirla, y deberá fijarse, en el acto, la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello resultare materialmente imposible, y ordenar su reanudación cuando resulte pertinente.

Artículo 1390 Bis 26. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo como los tradicionales a juicio del juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieran derecho a ella.

Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar oralmente en el registro a que se hace referencia en el párrafo anterior la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado, y demás personas que intervendrán.

Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán rendir previamente protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario del juzgado les tomará protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad.

Artículo 1390 Bis 27. Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos:

- I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;
- II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce;
- III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y
- IV. La firma del juez y secretario.

Artículo 1390 Bis 28. El secretario del juzgado deberá certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.

Artículo 1390 Bis 29. Se podrá solicitar copia simple o certificada de las actas o copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento, la que deberá ser certificada en los términos del artículo anterior a costa del litigante y previo el pago correspondiente.

Tratándose de copias simples, el juzgado debe expedir sin demora alguna aquéllas que se le soliciten, bastando que la parte interesada lo realice verbalmente.

Artículo 1390 Bis 30. La conservación de los registros estará a cargo del juzgado que los haya generado, los que deberán contar con el respaldo necesario, que se certificará en los términos del artículo 1390 Bis 28. Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro afectando su contenido, el juez ordenará reemplazarlo por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispone de ella directamente.

Artículo 1390 Bis 31. En el tribunal estarán disponibles los instrumentos y el personal necesarios para que las partes tengan acceso a los registros del procedimiento, a fin de conocer su contenido.

Sección De la Audiencia Preliminar

Tercera

Artículo 1390 Bis 32. La audiencia preliminar tiene por objeto:

- I. La depuración del procedimiento;
- II. La conciliación **y/o mediación** de las partes por conducto del juez;
- III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos;
- IV. La fijación de acuerdos probatorios;
- V. La admisión de pruebas; y
- VI. La citación para audiencia de juicio.

Artículo 1390 Bis 33. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A quien no acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser inferior a dos mil pesos, ni superior a cinco mil pesos, monto que se actualizará en los términos del artículo 1253, fracción VI, de este código.

Artículo 1390 Bis 34. El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá, en su caso, a resolver las excepciones procesales con el fin de depurar el procedimiento.

Artículo 1390 Bis 35. En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales, o si no se opone alguna, el juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el juez proseguirá con la audiencia.

Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación **y/o mediación**.

Artículo 1390 Bis 36. Durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos.

Artículo 1390 Bis 37. El juez podrá formular proposiciones a las partes para que realicen acuerdos probatorios respecto de aquellas pruebas ofrecidas a efecto de determinar cuáles resultan innecesarias.

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo probatorio, el juez procederá a pronunciarse respecto de la admisión de las pruebas, así como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declararán desiertas de oficio las mismas por causas imputables al oferente. Las pruebas que ofrezcan las partes

sólo deberán recibirse cuando estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados.

La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás, pruebas que les hayan sido admitidas; y sólo de estimarlo necesario, el juez, en auxilio del oferente, expedirá los oficios o citaciones y realizará el nombramiento del perito tercero en discordia, en el entendido de que serán puestos a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que preparen sus pruebas y éstas se desahoguen en la audiencia de juicio.

En el mismo proveído, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia de juicio, misma que deberá celebrarse dentro del lapso de diez a cuarenta días.

Sección

Cuarta

De la Audiencia del Juicio

Artículo 1390 Bis 38. Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente, al efecto contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento; dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, las que se declararán desiertas por causas imputables al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes y por un máximo de 15 minutos para formular sus alegatos.

El juez tomará las medidas que procedan a fin de que las partes se sujeten al tiempo indicado.

Enseguida se declarará el asunto visto y citará a las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de **diez** días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente.

Artículo 1390 Bis 39. El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia.

En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juzgado persona alguna, se dispensará la lectura de la misma.

Capítulo

III

De los Incidentes

Artículo 1390 Bis 40. Los incidentes que no tengan tramitación especial sólo podrán promoverse oralmente en las audiencias y no suspenderán éstas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho.

Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días.

Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, sin que pueda dictar sentencia definitiva, hasta que se resuelva el incidente.

Capítulo De las Pruebas

IV

Sección Confesional

Primera

Artículo 1390 Bis 41. La prueba confesional en este juicio se desahogará conforme a las siguientes reglas:

I. La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios que, en el acto de la audiencia se formulen;

II. Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. El juez, en el acto de la audiencia, examinará y calificará las preguntas cuidadosamente antes de que se formulen oralmente al declarante; y

III. Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se le declarará confeso y se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar, salvo prueba en contrario.

Sección Testimonial

Segunda

Artículo 1390 Bis 42. Cuando se trate de testigos que deban ser citados, se les apercibirá que en caso de desobediencia se les aplicará un arresto hasta por treinta y seis horas, o se les hará comparecer por medio de la fuerza pública. La citación se hará mediante cédula por lo menos con dos días de anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración.

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente

una sanción pecuniaria a favor del colitigante que no podrá ser inferior de dos mil pesos ni superior a cinco mil pesos, montos que se actualizará en los términos previstos en el artículo 1253, fracción VI, de este código. El juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose desierta de oficio la prueba testimonial.

Artículo 1390 Bis 43. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juez puede de oficio interrogar ampliamente a los testigos sobre los hechos objeto de esta prueba. Las partes también pueden interrogar a los testigos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos, debiendo el juez impedir preguntas ociosas o impertinentes.

**Sección
Instrumental**

Tercera

Artículo 1390 Bis 44. Los registros del juicio oral, cualquiera que sea el medio, serán instrumentos públicos; harán prueba plena y acreditarán el modo en que se desarrolló la audiencia o diligencia correspondiente, la observancia de las formalidades, las personas que hubieran intervenido, las resoluciones pronunciadas por el juez y los actos que se llevaron a cabo.

Artículo 1390 Bis 45. Los documentos que presenten las partes podrán ser objetados en cuanto su alcance y valor probatorio, durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Los presentados con posterioridad deberán serlo durante la audiencia en que se ofrezcan.

La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la contestación de la demanda y hasta diez días antes de la celebración de la audiencia de juicio.

**Sección
Pericial**

Cuarta

Artículo 1390 Bis 46. Si se ofrece la prueba pericial en la demanda, la contraparte, al presentar su contestación, deberá designar perito de su parte y proponer la ampliación de otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen.

En el caso de que la prueba pericial se ofrezca al contestar la demanda, formular la reconvencción o contestar esta última, la contraria deberá designar el perito de su parte en la misma forma que el párrafo anterior, dentro de los cinco días siguientes al auto que recaiga a los escritos de referencia.

De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá y señalará un plazo de diez días para exhibir el dictamen, salvo que existiera causa bastante por la que tuviere que modificarse la fecha de inicio del plazo originalmente concedido.

Artículo 1390 Bis 47. En caso de que alguno de los peritos de las partes no exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá su derecho para hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos exhiba su dictamen en el plazo señalado se dejará de recibir la prueba.

Cuando los dictámenes exhibidos resulten sustancialmente contradictorios de tal modo que el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño; asimismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el Juez, y serán cubiertos por ambas partes en igual proporción.

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de juicio, y su incumplimiento dará lugar a que el Juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el Juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se trate o a la presidencia del tribunal según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar.

En el supuesto del párrafo anterior, el Juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión.

Artículo 1390 Bis 48. Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las preguntas que el juez o las partes les formulen. En caso de no asistir los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y de no presentarse el perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes.

Sección Prueba Superveniente

Quinta

Artículo 1390 Bis 49. Después de la demanda y contestación, reconvencción y contestación a la reconvencción en su caso, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:

- I.** Ser de fecha posterior a dichos escritos;
- II.** Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia;

III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada.

Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental superveniente, deberá ofrecerla hasta antes de que concluya la audiencia de juicio y el juez, oyendo previamente a la parte contraria en la misma audiencia, resolverá lo conducente.

Artículo 1460. Se Deroga.

Artículo 1463. Si solicitó a un juez del país en que, o conforme a su derecho, fue dictado el laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicita el reconocimiento o la ejecución de laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías suficientes.

Capítulo

X

De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje

Artículo 1464. Cuando una parte solicite la remisión al arbitraje en los términos del artículo 1424, se observará lo siguiente:

I. La solicitud deberá hacerse en el primer escrito sobre la sustancia del asunto que presente el solicitante.

II. El juez, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato.

III. Si el juez ordena remitir al arbitraje, ordenará también suspender el procedimiento.

IV. Una vez que el asunto se haya resuelto finalmente en el arbitraje, a petición de cualquiera de las partes, el juez dará por terminado el juicio.

V. Si se resuelve la nulidad del acuerdo de arbitraje, la incompetencia del Tribunal Arbitral o de cualquier modo el asunto no se termina, en todo o en parte, en el arbitraje, a petición de cualquiera de las partes, y previa audiencia de todos los interesados, se levantará la suspensión a que se refiere la fracción III de este artículo.

VI. Contra la resolución que decida sobre la remisión al arbitraje no procederá recurso alguno.

Artículo 1465. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión del procedimiento judicial y la remisión al arbitraje se harán de inmediato. Sólo se denegará la remisión al arbitraje:

a) Si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje; o

b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje. Al tomar esta determinación el juez deberá observar un criterio riguroso.

Artículo 1466. Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles:

I. La solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas previstas en las fracciones III y IV del artículo 1427 de este código.

II. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el artículo 1444 de este código.

III. La consulta sobre los honorarios del tribunal arbitral prevista en el artículo 1454 de este código.

Artículo 1467. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, al designar árbitro o árbitros o adoptar las medidas a que se refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente:

I. El juez deberá oír previamente a las partes, a cuyo efecto podrá, si lo estima conveniente, citarlas a una junta para oír sus opiniones.

II. El juez deberá previamente consultar con una o varias instituciones arbitrales, cámaras de comercio o industria designadas a su criterio.

III. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine discrecionalmente que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso, el juez observará lo siguiente:

a) Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos;

b) Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el nombre o los nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de su preferencia. Si una parte no hace comentarios, se entenderá que presta su conformidad a la lista remitida por el juez;

c) Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o árbitros de entre las personas aprobadas en las listas devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes; y

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al árbitro o árbitros.

IV. Antes de hacer la designación, el juez pedirá al árbitro o árbitros designados, que hagan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428.

Artículo 1468. Contra la resolución del juez no procederá recurso alguno, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros, en los términos del acuerdo de arbitraje o, en su defecto, las disposiciones del artículo 1429.

Artículo 1469. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, la asistencia en el desahogo de pruebas se dará previa audiencia de todas las partes en el arbitraje.

Artículo 1470. Se tramitarán conforme al procedimiento previsto en los artículos 1472 a 1476:

I. La resolución sobre recusación de un árbitro a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1429.

II. La resolución sobre la competencia del tribunal arbitral, cuando se determina en una resolución que no sea un laudo sobre el fondo del asunto, conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1432.

III. La adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425.

IV. El reconocimiento y ejecución de medidas cautelares ordenadas por un tribunal arbitral.

V. La nulidad de transacciones comerciales y laudos arbitrales.

Artículo 1471. Para el reconocimiento y ejecución de los laudos a que se refieren los artículos 1461 a 1463 de este código, no se requiere de homologación. Salvo cuando se solicite el reconocimiento y ejecución como defensa en un juicio u otro procedimiento, el reconocimiento y ejecución se promoverán en el juicio especial a que se refieren los artículos 1472 a 1476.

Artículo 1472. El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, a que se refieren los artículos 1470 y 1471, se tramitará conforme a los siguientes artículos.

Artículo 1473. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar a las demandadas, otorgándoles un término de quince días para contestar.

Artículo 1474. Transcurrido el término para contestar la demanda, sin necesidad de acuse de rebeldía, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes.

Artículo 1475. Si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria previo a la celebración de la audiencia, se abrirá una dilación probatoria de diez días.

Artículo 1476. Celebrada la audiencia el juez citará a las partes para oír sentencia. Las resoluciones intermedias dictadas en este juicio especial y la sentencia que lo resuelva no serán recurribles.

Artículo 1477. Los juicios especiales que versen sobre nulidad o reconocimiento y ejecución de laudos comerciales podrán acumularse. Para que proceda la acumulación, es necesario que no se haya celebrado la audiencia de alegatos. La acumulación se hará en favor del juez que haya prevenido. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en jurisdicciones territoriales diversas o en el extranjero, ni entre tribunales federales y los de los estados. La acumulación se tramitará conforme a los artículos 73 a 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrecurrible.

Artículo 1478. El juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425.

Artículo 1479. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el juez competente, cualquiera que sea el estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 1480.

La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará sin demora al juez de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.

El juez ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros.

Artículo 1480. Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:

I. Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al juez le consta que:

a) Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos enunciados en los incisos a), b), c) o d) de la fracción I del artículo 1462; o

b) No se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la prestación de la garantía que corresponda a la medida cautelar otorgada por el tribunal arbitral; o

c) La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal del estado en donde se

tramite el procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó; o

II. Si el juez resuelve que:

a) La medida cautelar es incompatible con las facultades que se le confieren, a menos que el mismo juez decida reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su contenido; o bien que

b) Alguno de los motivos de denegación enunciados en la fracción II del artículo 1462 es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar.

Toda determinación a la que llegue el juez respecto de cualquier motivo enunciado en la fracción I del presente artículo será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El juez al que se solicite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar.

De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, así como el tribunal arbitral que la dicta, por consiguiente son de su cargo los daños y perjuicios que se causen.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo relativo al Título Especial, "Juicio Oral Mercantil", que entrará en vigor al año siguiente de dicha publicación.

Segundo. Las instancias judiciales realizarán las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 3 de la presente ley, para lo cual podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas a fin de poder contar con el servicio de interpretación y traducción a que se refiere la disposición.

Tercero. Las erogaciones que se deriven de la entrada en vigor de la presente reforma, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para ese efecto para los tribunales superiores de justicia de los estados, del Distrito Federal y al Poder Judicial de la Federación por la Cámara de Diputados, los congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus respectivos presupuestos.

Cuarto. Los procedimientos de nulidad a que se refiere el artículo 1460 vigente, que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de la presente reforma, seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto en el mismo.

Quinto. Los procedimientos de reconocimiento o ejecución a que se refiere el artículo 1463 vigente, que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor de la presente reforma, seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto en el mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Roberto Borge Angulo, Noé Fernando garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica en abstención), María Matilde Díaz de León Macías, Sergio Gama Dofour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña, José Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).

La Comisión de Justicia

Diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huevo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 243, que contiene la iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 6 de octubre de 2009, el diputado Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Cámara la iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En la misma fecha, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión bajo el expediente No. 243 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la iniciativa

La exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina señala que, históricamente, las sociedades humanas han utilizado la atmósfera terrestre como un receptor de emisiones de los gases derivados de las actividades agropecuarias, industriales, de generación de energía eléctrica y de transporte. Esto ha generado un incremento de los

gases de efecto invernadero, en especial el bióxido de carbono, que rebasa las capacidades de los procesos geológicos y biológicos naturales para capturar y almacenar el carbono emitido, lo cual ha tenido como consecuencia un aumento en la temperatura global del planeta, propiciando el fenómeno que conocemos como cambio climático.

No obstante, esta iniciativa destaca que el hecho de no contar con una ley reglamentaria en materia de cambio climático, genera una falta de certeza jurídica en relación con los conceptos relacionados con este fenómeno y podría dar cabida a una inexacta aplicación de las políticas públicas adoptadas en concordancia con los compromisos multilaterales asumidos por nuestro país.

En ese sentido, propone reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente incorporando a su artículo 3 las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero, bajo la siguiente redacción:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a V. ...

VI. Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

VII. a XVII. ...

XVIII. Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y un periodo de tiempo especificados.

XIX. a XX. ...

XXI. Gases de efecto invernadero: Componentes naturales de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja.

XXII. a XL. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Consideraciones

En los últimos cinco años el mundo ha sido testigo de cambios sin precedente no sólo en la temperatura global, sino también en otros fenómenos naturales que se encuentran estrechamente vinculados con el cambio climático.

El cambio climático es un problema con características únicas, ya que es de naturaleza global, sus impactos mayores serán en el largo plazo e involucra interacciones complejas entre procesos naturales (fenómenos ecológicos y climáticos) y procesos sociales, económicos y políticos a escala mundial.¹

De acuerdo con información del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la Agencia Espacial Norteamericana, los ocho años más cálidos del planeta se han registrado a partir de 1988 y los 14 años más cálidos que ha registrado el planeta han ocurrido a partir de la década de 1990. Más aún, los últimos siete años han sido años en que se han roto records de temperaturas extremas y se prevé que el año 2008 continúe esta tendencia. De hecho, la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha informado que durante los últimos 50 años, la temperatura extrema diaria se ha incrementado en 4°C, estos cambios en el clima han provocado una serie de acontecimientos los últimos años, entre los que podemos señalar:

El incremento de la temperatura superficial del océano y la relación que guarda con la formación de huracanes que alcanzan los cinco puntos en la escala. El ejemplo más reciente para México fue en el año 2005 con el huracán Willma, pero no hay que perder de vista que en enero y febrero de 2008 no sólo países asiáticos con costa en el océano Pacífico padecieron los estragos de las lluvias torrenciales, sino también países latinoamericanos como Bolivia, Perú y Ecuador.

El retraimiento y desprendimiento de los glaciales en el Ártico y el Antártico. En el año se registró el desprendimiento del fiordo de Ellesmore (Ártico), mientras que en el año 2008 la capa de hielo Barnes la más antigua de Canadá registró un deshielo sin precedentes, en el periodo 2002-2005 la capa de hielo del antártico perdió 152 kilómetros cúbicos y, el pasado 26 de marzo, la placa de hielo antártico Wilkins perdió 415 kilómetros cuadrados.

El retraimiento y desprendimiento de los glaciares interiores de Bolivia, Perú, Suiza, India, entre otros. Cabe destacar que se éstos depende el abastecimiento de agua dulce de millones de personas.

La amenaza a la supervivencia de especies como el oso polar, anfibios, aves y bosques mundiales es patente. De hecho, la Lista Roja 2007 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que de las 41,415 especies registradas, 16,306 se encuentran en peligro de extinción, mientras que el número total de especies extintas asciende a 785. En términos generales, uno de cada cuatro mamíferos, una de cada ocho aves, un tercio de todos los anfibios y el 70% de las plantas que han sido evaluadas en la Lista Roja están en situación de riesgo.

El blanqueamiento de los corales, con consecuencias devastadoras para todo el ecosistema marino porque inevitablemente se perderán incontables especies de invertebrados y peces; la seguridad de las comunidades asentadas en las zonas costeras al ser más vulnerables a los embates de fenómenos.

La aparición de enfermedades infecciosas respiratorias e intestinales en lugares donde no son comunes.

El recrudecimiento del proceso de desertificación, así como cambios en los patrones de precipitación que afectan no sólo las actividades agrícolas y con ello la producción de alimentos, sino también el abasto de energía eléctrica.

Este es un fenómeno sin precedentes que desde hace ya unas décadas ha sido abordado como tema en la agenda internacional de casi todas las naciones, ha sido definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la intención de unificar criterios, como aquel fenómeno atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.²

En el ánimo de promover acciones globales en la materia, a mediados de la década de los ochenta, la comunidad internacional comenzó a ocuparse de este fenómeno a través de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, organizó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el cual estuvo integrado por destacados científicos especialistas en la materia de diversos países, cuyos anuncios y resultados impulsaron la negociación de una Convención internacional, al amparo de las Naciones Unidas.

Así, a finales de 1990, se inició el proceso de negociación para llegar a acuerdos que se consolidaron en la elaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuyos resultados tras varias reuniones y negociaciones se consolidaron en su protocolo.

El mayor éxito de la Convención fue sin duda la amplia participación de los países miembros de las organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, tanto aquellos que podrían resultar perjudicados, como los que pudiesen resultar beneficiados por los acuerdos.

Todos los países adquirieron compromisos aquellos incluidos en el anexo I o anexo II, lo que implica para los primeros la aceptación del compromiso de disminuir emisiones (que en la Convención se estableció equivalente a la reducción a los niveles de 1990 para el año 2000), mientras que los países del Anexo II han asumido compromisos de financiamiento hacia países en desarrollo.³

En este contexto, México firmó el Protocolo de Kioto, referente al cambio climático el 9 de junio de 1998, ratificado por el Senado de la Republica el 29 de abril de 2000, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2001 entrando en vigor el 16 de febrero de 2005.

Mediante este instrumento de derecho internacional, México se comprometió a llevar a cabo acciones que confronten el cambio climático, a efecto de mitigar sus efectos y en lo posible, prevenirlos. Asimismo y tal como lo establece el diputado promovente de la

presente iniciativa, el 25 de mayo de 2007 el presidente Felipe Calderón ordenó que, con fundamento en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se elaborase un Programa Especial de Cambio Climático.⁴

Se debe reconocer que los efectos del cambio climático sobre nuestro país son claramente visibles, e incluso se han realizado algunos estudios al respecto,⁵ se prevé desde el punto de vista climatológico, que el cultivo de maíz de temporal sea altamente vulnerable ya que el 59.6% del territorio no es apto para este tipo de producto.

En cuanto a las áreas forestales, las modificaciones en el uso del suelo, la deforestación y los incendios acentuarán los efectos del cambio climático, particularmente en aquellas áreas de clima templado.

Por lo que toca a la sequía meteorológica y su severidad, un tercio del país ya presenta erosión hídrica severa. Esta es mucho más patente en la región norte y en las zonas densamente pobladas.

Con relación a los efectos hidrológicos, es decir, la disponibilidad, el consumo, la extracción y el almacenamiento del agua, la región Centro, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y la región de Baja California resultarán, en el mediano plazo las más vulnerables.

El incremento de los costos económicos y sociales relacionados con los daños ocasionados por los efectos del cambio climático nos debe preparar, por una parte, a adoptar políticas de mitigación, entre las que debe incluirse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el metano. Por otra parte, nos debe alertar sobre el alto grado de vulnerabilidad en que México se encuentra, lo cual debe traducirse en políticas más estrictas que contribuyan a reducir los efectos negativos de este problema ambiental.

A pesar de todo esto, aun no contamos con una Ley específica en la materia, sin embargo, se tienen diferentes instrumentos jurídicos e incluso normativos que se relacionan directa o indirectamente con éste.

No obstante, ahora que el tema ha cobrado relevancia se han urgido reformas legales que permitan al estado hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Por lo cual esta comisión dictaminadora externa su reconocimiento al diputado promovente de la presente iniciativa por su interés en fortalecer jurídicamente el tema, por lo cual se procederá puntualmente a realizar un análisis y estudio pormenorizado de cada una de las reformas propuestas, todas ellas adiciones al artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

1. La primera propuesta de reforma, pretende incorporar el concepto de "cambio climático" mediante la adición de una fracción VI al artículo 3, cuya redacción resulta perfectamente viable, ya que corresponde a la determinado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su artículo 1, numeral 2, instrumento que al amparo del artículo 133 constitucional, México firmó y ratificó por lo que es Ley Suprema de toda la Unión; desafortunadamente, esta comisión estima pertinente desechar dicha propuesta de reforma,

en razón de que actualmente se encuentran turnadas al Senado de la Republica 2 minutas sobre el mismo tema,⁶ una de ellas aprobada recientemente en el pleno de esta Cámara de Diputados, las cuales fueron presentadas con anterioridad y tiene un proceso legislativo más avanzado en ambas Cámaras.

2. La segunda propuesta de reforma pretende incorporar el concepto de emisiones, mismo que corresponde al determinado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su artículo 1 numeral 4, sin embargo, del análisis y estudio realizados, esta comisión ha concluido que el hecho de realizar la adición de dicho concepto en los términos propuestos generaría una incongruencia en su aplicación a diversos artículos de la LGEEPA, como a continuación se señala:

La propuesta de reforma determina que se definirá como emisiones "Liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y un periodo de tiempo especificados", como se ha señalado este concepto fue determinado dentro del Convenio Marco sobre Cambio Climático, en razón de que las disposiciones contenidas en dicho instrumento aluden al término y se restringen al tema contenido, lo cual no sucede al tratar de trasladarlo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dentro del articulado de la LGEEPA podemos encontrar que el término "emisiones" es "genérico" y se aplica indistintamente a "emisiones contaminantes a la atmosfera"⁷ o "emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica",⁸, por lo que restringir el concepto a "la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores a la atmosfera" contravendría lo determinado por la ley general, en particular en los artículos que se refieren a las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, además de que no necesariamente toda emisión de gases contaminantes provoca un efecto invernadero en la atmosfera.

Por otra parte, la LGEEPA no define lo que se entenderá por emisión, sin embargo existen artículos en que se ordena la regulación de emisiones, para prevenir cierto tipo de contaminación, que no se encuentran cabalmente definidos en los reglamentos, por ejemplo:

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación **por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.**

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes ⁹ dentro de su artículo 3, fracción V, establece:

"Artículo 3o. Sin perjuicio de las definiciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos, para los efectos del presente Reglamento, se considerarán las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las siguientes:

I. a IV. ...

V. Emisión: Sustancia en cualquier estado físico liberada de forma directa o indirecta al aire, agua, suelo y subsuelo;

..."

Por otro lado, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera,¹⁰ en su Artículo 6 determina:

"Artículo 6o. Para los efectos de este Reglamento se estará a las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las siguientes:

Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de energía.

..."

De lo anterior se observa que la definición de emisión determinada por los reglamentos de la LGEEPA, no puede aplicarse indistintamente a cada uno de sus articulados del cuerpo normativo que los contiene, por lo cual derivado de dicho análisis, esta Comisión Dictaminadora ha determinado incorporar a la Ley General el concepto de "emisión", con el objeto de que pueda ser aplicado indistintamente a cada una de las disposiciones de esta Ley sin contraponerse con lo determinado por sus reglamentos. De tal forma que se propone la redacción siguiente:

Emisión. Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.

3. La tercera propuesta de adición corresponde al concepto de "gases de efecto invernadero", el cual, se encuentra contenido dentro Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su artículo 1, numeral 5. No obstante lo anterior, al referirnos a la Ley sobre la cual versa esta reforma, y su aplicabilidad, esta Comisión ha determinado desechar dicha propuesta, ya que a pesar de ser un concepto novedoso, que no obraba en ninguno de los artículos de la LGEEPA, consta únicamente de una definición de carácter conceptual, por lo que no incorpora ningún elemento normativo o de carácter regulatorio en materia de gases de efecto invernadero en específico, por lo cual resultaría inaplicable aprobar dicho concepto, si no es determinado como tal en ninguno de los artículos que integran la ley e incluso sus 6 reglamentos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes al **artículo 3o.** de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XVI. ...

XVII. Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.

XVIII. a XXXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Fernández Bremauntz, Adrián, y Martínez, Julia. *Cambio climático: una visión desde México*. Prologo. P. 15.
2. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1992, artículo 1, numeral 2.
3. De Alba, Eduardo. "La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". *En Cambio climático: una visión desde México*. México. INE. P. 151.
4. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de agosto de 2009.
5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Instituto Nacional de Ecología. 2001. 2a Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México
6. Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Javier Obregón Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el 21 de febrero de 2008 y la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada María del Carmen Pinete Vargas, en nombre propio y de los diputados Emilio Gamboa Patrón y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de julio de 2007.
7. Artículo 109 Bis. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de **emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo**, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los estados, y en su caso, de los municipios.
8. Artículo 155. Quedan prohibidas las **emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica** y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
9. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 2004.
10. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1988, última reforma publicada el día 3 de junio de 2004.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 17 de febrero del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaña (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón, Francisco Alejandro Moreno Merino, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la "minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social" enviada por la honorable Cámara de Senadores, de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 57, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como al segundo párrafo del artículo 38 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, es que se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

A. Antecedentes de trámite legislativo

I. En sesión ordinaria del 22 de abril de 2008, el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, registró una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. Durante la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2009, el senador Rogelio Rueda Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

III. En la sesión del 8 de octubre de 2009 la senadora Beatriz Zavala Peniche, presentó a nombre propio y de los senadores Gabriela Ruiz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel

Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

IV. El Presidente de la Mesa Directiva turnó las iniciativas referidas a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo.

V. En la sesión de la Cámara de Senadores del 15 de diciembre de 2009, fue presentado a la asamblea el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Dicho dictamen fue aprobado por 78 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión.

VI. El 2 de febrero pasado, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social para efectos de su estudio y dictamen correspondiente.

VII. La Comisión de Desarrollo Social en su sexta sesión ordinaria, celebrada el 9 de febrero dio entrada a la discusión de la minuta en comento y acordó realizar un foro de consultas públicas con especialistas en la materia a fin de que los integrantes de la comisión profundizaran sobre la pertinencia de las modificaciones y adiciones propuestas.

VII. En su séptima sesión ordinaria instalada el 6 de abril, la Comisión en pleno entró al análisis y estudio en lo general y en lo particular de los 22 artículos con modificaciones y adiciones planteados en la minuta del Senado.

B. Contenido de la Minuta

La minuta recibida el pasado 3 de febrero por la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura, plantea la necesidad de seguir avanzando en la construcción de una política social de Estado, orientada hacia el objetivo de hacer realidad los derechos sociales consagrados en la Constitución.

Reconoce la importancia del proceso de institucionalización de la política de desarrollo social, a fin de dotar a dicha política de mejores instrumentos para enfrentar con efectividad los grandes retos del país en materia de desigualdad, pobreza, marginación y de exclusión social, y para lograr el acceso de todos los mexicanos al desarrollo social.

Integra en un solo proyecto, tres iniciativas presentadas por los senadores Graco Ramírez Garrido Abreu, Rogelio Rueda Sánchez, y la senadora Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de los senadores Gabriela Ruiz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, que

reforman y adicionan un total de 22 artículos de la Ley General de Desarrollo Social, mismos que se agrupan de la forma siguiente:

I. Fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza

La propuesta enviada a la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados, busca precisar la redacción de la **fracción V, artículo 10**, para determinar como derecho de los beneficiarios, el de "recibir las prestaciones, bienes y servicios que se otorgan a través de los programas sociales orientados a combatir y superar la pobreza y la marginación, conforme a sus reglas de operación o a la normatividad correspondiente, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada". Además, **se adicionan al mismo artículo, dos párrafos** para disponer que: Cuando se trate de transferencias de dinero se emplearán preferentemente mecanismos que promuevan el uso del Sistema Bancario Nacional o el uso de Instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional autorizados para el manejo de recursos monetarios, que sean ampliamente conocidos por la población objetivo e independientes de los programas de desarrollo social. En dicho caso, no deberá implicar un costo para los beneficiarios de los programas y se garantizará la existencia de instrumentos adecuados para la rendición de cuentas.

Establece que la determinación del uso del Sistema Bancario en el caso de los programas que impliquen transferencias económicas, constituye una medida para mejorar el control y evitar que a través de intermediarios exista una posibilidad de condicionamiento de cualquier índole. Se dispone a su vez que el uso del Sistema Bancario no implique un costo para los beneficiarios, dada su situación de pobreza y marginación.

En este mismo artículo, se propone **reformular la fracción VIII**, para establecer como obligación para los beneficiarios, además de informar de su situación socioeconómica, si reciben alguna transferencia o apoyo público. El objetivo de la modificación es evitar duplicidades y contar con mayores recursos para ampliar la cobertura de los programas sociales.

Propone modificar el **artículo 14**, referido a la Política de Desarrollo Social, para establecer que tanto las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, como las de entidades federativas y los municipios, deben incluir cuando menos las vertientes que señala el citado artículo. Lo anterior, dará un mayor grado de articulación entre las políticas de los distintos ámbitos de gobierno. De esta manera, se elimina de la fracción I, que contiene la vertiente de superación de la pobreza, lo relativo a generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, que se convierte en la nueva fracción VI. Con ello se busca dar un mayor realce a los temas del empleo y el ingreso, que vincula la política social y la política económica, y el cual tendrá una vertiente específica dentro de la política de desarrollo social.

La colegisladora propone incluir un **artículo 15 bis**, con el fin de promover una mayor correspondencia de las políticas y programas públicos de combate a la pobreza con el Programa Nacional de Desarrollo Social. Determina también que este programa contemple

una estrategia integral, esto con el fin de disminuir la discrecionalidad y dar mayor transparencia al cumplimiento de acciones y asignación de recursos. La propuesta de reforma busca que la determinación de prioridades sea basada en los datos de un órgano especializado como es el Coneval, evitando la utilización de criterios político-partidistas o electorales.

II. Transparencia, integralidad y coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno

Por lo que atañe a este tema, la minuta en comento propone modificar el artículo 16 de la ley vigente, que dispone que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal deben hacer del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos. La Colegisladora considera que esta disposición debe complementarse con la obligación por parte de los tres ámbitos de gobierno, de remitir a la Auditoría Superior de la Federación la información relativa a los programas que utilicen recursos públicos federales, de tal manera que esta instancia cuente con mejores elementos para revisar el ejercicio del gasto público federal.

Con el fin de avanzar en la integralidad y la coordinación entre ámbitos de gobierno, se propone la creación del **artículo 23 bis**, que ratifica a los Convenios de Coordinación como los principales instrumentos de convergencia de las políticas, programas y acciones de desarrollo social. Además, se establece que para el caso de los programas y acciones que no se ejecuten de manera coordinada, las dependencias o entidades ejecutoras deberán hacer pública, a través de medios electrónicos, la información relativa a sus programas, particularmente al ámbito territorial, los avances, la cobertura y el desarrollo de los mismos durante el ejercicio fiscal y los resultados y metas alcanzados al cierre de éste. También se dispone que cuando exista coincidencia en la población objetivo, el tipo de apoyo y la naturaleza de los programas que ejecuten dos o los tres ámbitos de gobierno, podrá establecerse la forma de evitar duplicidades vía los Convenios o Acuerdos de Coordinación.

Además, el nuevo artículo establece que la distribución de recursos de los programas sociales en las entidades federativas deberá tener un carácter "progresivo" y debe tomar en cuenta el Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social.

La minuta en comento, plantea que el **artículo 26** vigente obliga al gobierno federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas sociales así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Propone que en el caso de los gobiernos de las entidades federativas, exista la obligación de publicar a su vez la distribución que realicen de los recursos federales entre sus municipios. De la misma forma, estima necesario fortalecer esta última disposición, incluyendo la obligación de publicar las reglas de operación de los programas estatales, tal y como existe para la federación. De igual forma, se estipula que debe publicarse el origen de los recursos cuando se trate de programas convenidos con la federación.

La colegisladora propone crear, en el **artículo 41**, la obligación para los gobiernos de las entidades federativas, de informar públicamente de los recursos que les sean asignados por convenio de coordinación.

Aunado a lo anterior, propone que tanto los gobiernos estatales como los ayuntamientos, deberán informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre el avance, ejercicio y resultados de la aplicación de recursos federales, de acuerdo con las adiciones respectivas de los **artículos 44 y 45**.

Un aspecto fundamental de la minuta enviada por la colegisladora, es la importancia de contar con instrumentos efectivos para asegurar una mayor transparencia, fortaleza en la coordinación y el intercambio de información sobre los beneficiarios de los programas sociales que implementan el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Por tanto, propone la creación de las Bases de Datos de Desarrollo Social, que contendrán la información georeferenciada de los beneficiarios de los programas sociales federales, estatales y municipales, las prestaciones sociales, el presupuesto por programa y las reglas de operación, cuando sea el caso. Para tal efecto, la minuta establece su definición a través de la **fracción X del artículo 5** y dichas bases estarán reguladas mediante una adición al **artículo 27** de la Ley.

La propuesta señala que toda la información de las bases de datos, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles, lo cual facilitará su integración, consulta y el intercambio de información. Para su operación se podrán celebrar convenios de asistencia técnica con instituciones de educación superior y de investigación científica. También se podrán celebrar convenios entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de transparentar la información y propiciar una mayor coordinación en los programas y acciones de desarrollo social.

En la propuesta de la colegisladora, se incluye un nuevo **artículo 27 bis**, para prohibir la utilización de la información o documentación de las bases de datos y de los padrones de beneficiarios, con fines de promoción de un servidor público o de un partido político, y en general para fines electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto.

En cuanto a la publicidad y la información de los programas sociales, la minuta en comento plantea identificar con el escudo nacional, los de las entidades federativas o ambos, según sea el caso el origen de los recursos con que sean financiados, de conformidad con el **artículo 28**. Asimismo, en el **artículo 28 Bis**, se dispone la obligación de señalar en lugar visible dicho origen.

III. El Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social

Los senadores proponentes consideran que es necesario avanzar hacia un diagnóstico más integral de la situación social del país. Por tanto, proponen crear el capítulo del "Sistema

Nacional de Indicadores de Desarrollo Social", cambiando la denominación del capítulo de "Medición de la Pobreza" que estaba en la Ley.

La colegisladora considera la creación de este sistema factible, dado que actualmente se cuenta con un organismo especializado como es el Coneval, que en los hechos ya ha aportado datos de gran relevancia para conocer la evolución de las políticas sociales. El sistema se concibe como un instrumento público que permita conocer el grado de ejercicio de los derechos sociales de la población, así como los rezagos en la materia, acorde con el objetivo de la ley.

IV. De los servidores públicos que operen políticas y programas de desarrollo social

La minuta enviada por la colegisladora considera que la aplicación imparcial de los recursos públicos destinados al desarrollo social es un aspecto fundamental para contar con una política de estado en la materia. Por tanto, se incluye un artículo 60 bis que contempla un perfil para los servidores públicos que funjan como delegados de las dependencias federales, los servidores públicos estatales o municipales, así como los del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales.

Aunado a lo anterior, se considera necesario incluir un nuevo **párrafo segundo al artículo 26** para reiterar que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios que operen programas de desarrollo social, deberán apegarse de manera estricta a lo dispuesto por el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además se estimó conveniente enumerar una serie de infracciones en las cuáles pueden incurrir los servidores públicos en materia de desarrollo social, por lo que se propone crear un **Título Sexto**, así denominado, "de las infracciones".

La minuta en comento propone crear también un **artículo 87** para determinar que las organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos o tengan bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales, deberán observar lo establecido en la Ley y que serán sancionadas en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En el **artículo 67** vigente se contempla el derecho que tiene toda persona u organización para presentar denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la Ley. En este caso, se adicionan los siguientes supuestos "se busque condicionar, presionar, o inducir a los beneficiarios para orientar su voto a favor de algún partido político o candidato mediante los programas de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno". Asimismo, podrá denunciar cualquier conducta dirigida a identificar, vincular o asociar una prestación, bien o servicio sociales de carácter público con algún partido político o candidato.

V. Impacto de las evaluaciones en la planeación y programación de la política de desarrollo social

La minuta considera que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ha jugado un papel de enorme relevancia para que tanto la medición de la pobreza como la evaluación de la política de desarrollo social, se lleven a cabo con criterios objetivos e imparciales.

Dada la importancia de las evaluaciones para la planeación y programación de las políticas y programas sociales, se propone que los resultados, además de ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y a la Sedesol, sean remitidos a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, a la Comisión Intersecretarial, y a la Auditoría Superior de la Federación. Ello permitirá que las evaluaciones también apoyen la labor de transparencia, coordinación y fiscalización. Lo anterior, queda regulado en el **artículo 79**. Asimismo, se adiciona un **párrafo segundo** en donde se considera que las evaluaciones deben ser analizadas en el proceso de programación, presupuestación, ejercicio y control de gasto público, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

VI. Fortalecimiento del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval)

Finalmente, en lo relativo a las atribuciones del Coneval, la minuta enumera en el **artículo 81**, nuevas atribuciones. Se retoman dos atribuciones ya existentes, normar y coordinar la evaluación de la política de desarrollo social, así como los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.

C. Análisis de la Minuta

La Comisión de Desarrollo Social coincide plenamente con el objetivo de la legisladora de fortalecer el proceso de institucionalización de la política nacional de desarrollo social, y de dotarla de mejores instrumentos para lograr mayor efectividad al enfrentar los grandes retos del país en materia de desigualdad, combate a la pobreza y marginación; y disminución de la exclusión social.

La minuta en comento fue analizada bajo los siguientes criterios: reciprocidad en las obligaciones de informar el ejercicio de recursos para programas sociales; no acotar la política nacional de desarrollo social sólo al combate a la pobreza y la marginación; evitar que las modificaciones permitan eludir la exigibilidad de los derechos sociales; y, evitar duplicar funciones e impulsar una mayor coordinación entre federación estados y municipios.

Con estos criterios, la comisión acordó aprobar en sus términos 13 artículos; y proponer modificaciones a la legisladora en 7 artículos. De la misma forma, rechazó 2 artículos por considerarlos contrarios o redundantes con otras normas jurídicas.

Artículos aceptados en sus términos

La Comisión decidió aceptar en sus términos las modificaciones y adiciones de los siguientes artículos, por considerarlas suficientemente motivadas y fundadas:

- **Reformas** en los términos propuestos a los artículos 14, párrafo primero, y fracción I; los artículos 16; 28; la denominación del Capítulo VI del Título Tercero; los artículos 41, 44, fracción VI, 45 fracción V; 67; y 79.
- **Adiciones** en los términos propuestos a la fracción VI del artículo 14; el artículo 23 Bis; un párrafo segundo al artículo 26; el artículo 27 Bis; el artículo 28 Bis; los nuevos párrafos primero y segundo del artículo 36, recorriéndose los subsecuentes; el párrafo segundo del artículo 79; y los artículos 86 y 87.

Artículos con propuesta de modificación

La comisión acordó sugerir a la legisladora modificaciones a los siguientes artículos conforme a lo que se fundamenta:

Artículo 5. La legisladora propone sustituir la fracción X que define el término "padrón" por la de "base de datos", que es consecuente con la reforma propuesta que pretende impulsar la homologación de información entre Federación, estados y municipios. Bajo los criterios utilizados por esta comisión, se sugiere no suprimir la definición de "padrón" y si agregar una fracción XI al artículo en comento, toda vez que el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, hace uso de dicha definición en diversos artículos.

Artículo 10. Se considera poco acertado acotar los derechos sociales a las acciones y programas para la superación de la pobreza y marginación. Por tanto, debe eliminarse de la propuesta de la Legisladora, la parte que señala "orientados a combatir y superar la pobreza y la marginación".

Artículos 15 Bis. El primer párrafo de esta adición a la actual Ley General de Desarrollo Social restringe la política nacional de desarrollo social sólo al ámbito del combate a la pobreza y marginación. Por ello, se propone eliminar el citado párrafo y adecuar la redacción de los párrafos subsecuentes.

Artículo 21. Conforme el artículo 93 constitucional, y el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso, se faculta a las comisiones legislativas a solicitar la información que requieran para el análisis de los asuntos legislativos. Por tanto, se propone modificar la redacción del artículo en comento eliminando el segundo párrafo por considerarlo redundante con la Ley Orgánica del Congreso.

Artículo 26. La comisión está de acuerdo con la obligación que establece el artículo de publicar las reglas de operación de los programas estatales, tal y como existe para la federación. Sin embargo recomienda sustituir en la redacción del primer párrafo la frase "convenidos por convenio" por la de "convenidos por acuerdo de coordinación", para evitar redundancias. En el segundo párrafo se propone cambiar

la redacción de "cualquier proceso electoral" por "todo proceso electoral Constitucional" dado que existen diversos procesos electorales tales como sindicales, partidistas, etcétera.

Artículo 27. Si bien la propuesta resulta una adición pertinente para robustecer la transparencia y manejo de información sobre los programas sociales en los tres órdenes de gobierno, no queda claro cómo y quién será el responsable de la homologación y establecimiento de criterios para la construcción, resguardo y mantenimiento de las bases de datos.

- La homologación de las bases de datos, puede considerarse como una extralimitación de las facultades que tiene actualmente la Secretaría de Desarrollo Social. De tal forma, se sugiere agregar al final del segundo párrafo del citado artículo, la frase "bajo los lineamientos del Coneval". De tal forma, se otorga la facultad de homologación a una entidad técnica que ha probado su efectividad.

Artículo 36. Se propone adecuar en el párrafo tercero de la propuesta de la legisladora el nombre del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, toda vez que cambió su denominación a Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Artículos rechazados

La Comisión de Desarrollo Social decidió rechazar los términos propuestos en la minuta referentes a las modificaciones y adiciones en los artículos 60 Bis y 81 de la Ley General de Desarrollo Social con la siguiente fundamentación:

La minuta en comento propone la adición de un artículo 60 Bis, la comisión acordó rechazar dicha modificación debido a la redundancia jurídica y posible contraposición con lo normado por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 17 Bis, establece las características, y requisitos que deben cubrir los titulares de las delegaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal. Además, en dicho artículo, está clara la sujeción a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; y separación del cargo.

La minuta en comento lejos de dar mayor claridad respecto al ámbito de competencia del Coneval, elimina el objeto del organismo público y mezcla en su propuesta funciones y nuevas atribuciones, dejando una laguna jurídica respecto a su lugar en la administración pública federal.

La propuesta pretende otorgar autonomía presupuestaria al Coneval. Debe destacarse que el Constituyente permanente ha otorgado este tipo de autonomía únicamente a aquellos órganos que atendiendo a sus funciones y atribuciones

justifiquen dicho nivel de autonomía. Existen órganos públicos diferentes a los órganos constitucionales autónomos que cuentan por disposición legal con autonomía presupuestaria. Dicha autonomía les ha sido otorgada por el Poder Legislativo en aquellos casos en que atendiendo al objeto y las funciones del órgano público, es técnicamente necesario que cuente con dicho nivel de autonomía, por ejemplo el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, el dictamen en comento no incorpora justificación alguna que incluya la base técnica en la cual se sustente la mencionada autonomía presupuestaria, atendiendo a las funciones y atribuciones del Coneval.

Es preciso analizar la conveniencia de establecer compromisos de gasto para la federación a través de una Ley de carácter secundario, ya que debe tomarse en cuenta que la inclusión de obligaciones anuales en materia de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, podría implicar la afectación del presupuesto destinado a otros programas de carácter prioritario. Aunado a lo anterior, la propuesta es contraria al espíritu de la reforma al artículo 134 constitucional, publicada el 7 de mayo de 2008, en donde se establece a nivel constitucional el presupuesto basado en resultados, incorporando como herramienta de retroalimentación para el proceso de programación-presupuestación a la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de los programas. Se considera que al contarse con un presupuesto de gasto "garantizado", el ejecutor del gasto podría no contar con incentivos para ser más eficiente en el ejercicio de los recursos públicos.

La minuta en comento no es el instrumento adecuado para incorporar disposiciones de carácter presupuestario, ya que dicha materia debe regirse por lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Reglamentaria de los Artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Desarrollo Social, se permite someter a la consideración de esta soberanía, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se **reforman** los artículos 10, fracciones V y VIII; 14, primer párrafo y fracción I; 16; 26; 27; 28; la denominación del Capítulo VI del Título Tercero, "Del Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social"; 36, actual primer párrafo; 41; 44, fracción VI; 45, fracción V; 67; 79; se **adicionan** los artículos 5, con una fracción I, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 14, con una fracción VI; 15 Bis; 21, con un segundo y tercer párrafos; 23 Bis; 27 Bis; 28 Bis; 36, con un primer y segundo párrafos, recorriéndose el actual primero para pasar a ser tercer párrafo; un Título Sexto, denominado

"De las Infracciones", con un Capítulo Único que comprende los artículos 86 y 87 a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Bases de Datos: Las Bases de Datos de Desarrollo Social, son Instrumentos públicos que contiene la información relativa a los programas de desarrollo social de la federación, estados y municipios y los beneficiarios de los programas sociales que son atendidos por cada orden de gobierno.

II. a XI. ...

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a IV. ...

V. A recibir las prestaciones, bienes y servicios que se otorgan a través de los programas sociales, conforme a sus reglas de operación o a la normatividad correspondiente, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.

Cuando se trate de transferencias de dinero se emplearán preferentemente mecanismos que promuevan el uso del Sistema Bancario Nacional o el uso de Instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional autorizados para el manejo de recursos monetarios, que sean ampliamente conocidos por la población objetivo e independientes de los programas de desarrollo social.

En dicho caso, no deberá implicar un costo para los beneficiarios de los programas y se garantizará la existencia de instrumentos adecuados para la rendición de cuentas;

VI. y VII. ...

VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, e informar si en el año en curso ha recibido alguna transferencia monetaria o apoyo en especie de algún programa público, en los términos que establezca la normatividad correspondiente. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la negativa o en su caso, a la suspensión temporal de la prestación, bien o servicio, y

IX. ...

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social, la que instrumentan las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, al igual que las de los estados y municipios, debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación.

II. y III. ...

IV. Infraestructura social básica;

V. Fomento del sector social de la economía, y

VI. Generación de ingresos y empleo mediante la capacitación y el fomento de opciones productivas para la economía familiar y el autoempleo.

Artículo 15 Bis. El Programa Nacional de Desarrollo Social deberá asegurar la existencia de una estrategia integral para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y el acceso al desarrollo social de las personas que habitan en las regiones, localidades y comunidades en situación de pobreza y marginación. De igual forma, deberá contemplar los siguientes lineamientos:

I. La cobertura de sus programas deberá abarcar al menos las zonas de atención prioritaria que se determinarán de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV de esta Ley, sin que ello perjudique a las acciones dirigidas a hogares y personas en pobreza que no habitan en dichas zonas.

II. La planeación y programación de acciones y programas, se basará en un diagnóstico claro de las problemáticas e enfrentar, en los mapas de pobreza y en los datos que genere el Consejo Nacional de Evaluación.

III. La solidaridad entre los beneficiarios deberá promover la cohesión social.

Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos. **También remitirán en el mismo plazo a la Auditoría Superior de la Federación la información que se especifique en la normatividad correspondiente relativa a los programas que utilicen recursos públicos federales.**

Artículo 21. ...

El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán remitir a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación, en el mes de agosto de cada año, un informe del presupuesto que asignarán por medio de los programas sociales financiados total o parcialmente con recursos federales, así como los criterios utilizados para hacer su distribución a nivel nacional, en el caso de la federación, y estatal y municipal en el caso de las entidades federativas.

La Cámaras del Congreso de la Unión por conducto de sus Mesas Directivas o de las Comisiones Ordinarias correspondientes podrán requerir información adicional.

Artículo 23 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las de las entidades federativas y el Distrito Federal así como los municipios que tengan bajo su cargo la ejecución de programas o acciones de desarrollo social deberán sujetarse a lo siguiente:

I. Los Convenios de Coordinación serán instrumentos de convergencia de las políticas, programas y acciones de desarrollo social.

II. En el caso de los programas y acciones que no se ejecuten de manera coordinada, las dependencias o entidades ejecutoras harán pública, a través de medios electrónicos, la información relativa a su ámbito territorial, los avances, la cobertura y el desarrollo de los mismos durante el ejercicio fiscal y los resultados y metas alcanzados al cierre de éste.

III. Cuando exista coincidencia en la población objetivo, el tipo de apoyo y la naturaleza de los programas que ejecuten dos o los tres ámbitos de gobierno, podrá establecerse la forma de evitar duplicidades vía los Convenios o Acuerdos de Coordinación.

IV. La distribución de recursos de los programas respectivos sociales en las entidades federativas deberá tener un carácter progresivo y tomar en cuenta los indicadores del sistema a que se refiere el artículo 36 de la presente ley.

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el **Diario Oficial de la Federación** las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, **las reglas de operación de todos los programas sociales y el origen y distribución de los recursos de programas sociales convenidos por acuerdos de coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal.**

Durante todo proceso electoral constitucional, los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios que operen programas de desarrollo social, deberán apegarse de manera estricta a lo dispuesto por el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, **integrarán sus respectivas bases de datos.**

Las bases de datos contendrán la información georeferenciada de los beneficiarios de los programas sociales, las prestaciones sociales, los padrones, el presupuesto por programa y las reglas de operación cuando sea el caso, así como la información que se

estime pertinente, toda la información se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan convenir la consulta de la información.

Se podrán celebrar convenios de asistencia técnica para la operación de la Base de Datos Nacional con instituciones de educación superior y de investigación científica. De igual forma se podrán celebrar convenios con los distintos órdenes de gobierno para la consulta de la información, bajo los lineamientos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social.

Artículo 27 Bis. Queda prohibida la utilización de la información o documentación de las bases de datos y de los padrones de beneficiarios, con fines de promoción de un servidor público o de un partido político, y en general para fines electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto. El uso indebido será sancionado en términos de la legislación aplicable.

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional, cuando éstos cuenten con recursos federales y se identificará también con el de la entidad federativa cuando cuenten con recursos estatales, en los términos que establece la ley correspondiente e incluirán la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Artículo 28 Bis. La publicidad, información y documentación de los programas, obras, prestaciones y servicios sociales deberá señalar en lugar visible el origen de los recursos públicos utilizados para su financiamiento, ya sea federal, estatal o municipal, o en coparticipación de dos o los tres órdenes de gobierno.

Capítulo

VI

Del Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social

Artículo 36. El Sistema Nacional de Indicadores es un instrumento público que permite conocer, desde una perspectiva integral el grado de impacto y eficacia de los programas de desarrollo social en la promoción de condiciones para el ejercicio de los derechos sociales y en el combate de la pobreza y la marginación.

Corresponde al Consejo Nacional de Evaluación la determinación de los indicadores que conforman el Sistema a que se refiere el párrafo anterior.

Los **indicadores**, lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. a VIII. ...

Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y de manera coordinada con el gobierno federal, vigilarán **e informarán públicamente** que los recursos públicos **que les sean asignados por convenio de coordinación** se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.

Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I. a V. ...

VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría y **a la Auditoría Superior de la Federación** sobre el avance, ejercicio y resultados generados con los mismos;

VII. a IX. ...

Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría y **a la Auditoría Superior de la Federación**, sobre el avance, **ejercicio** y resultados de esas acciones;

VI. a IX. ...

Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, **o que busque condicionar, presionar, o inducir a los beneficiarios para orientar su voto a favor de algún partido político o candidato mediante los programas de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, podrá denunciar cualquier conducta dirigida a identificar, vincular o asociar una prestación, bien o servicio sociales de carácter público con algún partido político o candidato.**

Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaría, **a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial, a la Auditoría Superior de la Federación, para efectos de transparencia.**

Los resultados de las evaluaciones serán remitidos al Ejecutivo federal y deben ser analizadas en el proceso de programación, presupuestación, ejercicio y control de gasto público, en los términos de esa ley, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**TÍTULO
DE LAS INFRACCIONES**

SEXTO

Capítulo Único

Artículo 86. Constituyen infracciones a la presente ley, y serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable, cuando los servidores públicos:

I. Utilicen los programas, padrones, bases de datos, fondos presupuestales o recursos humanos y materiales de los programas de desarrollo social para fines electorales o con propósitos políticos;

II. Desvíen o malversen los fondos o recursos destinados a actividades de desarrollo social;

III. Condicionen, nieguen o retrasen, sin causa justificada la canalización de subsidios, el acceso a los bienes o la prestación de los servicios garantizados en la presente Ley;

IV. Violan la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas u organizaciones sin derecho a recibir beneficios;

V. Usen la información de los programas y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la ley, y

VI. Las demás que establezca la presente ley.

Artículo 87. Las organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos o tengan bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales, deberán observar lo establecido en la presente ley y serán sancionadas en términos de lo que establece el Capítulo Sexto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

A la Comisión de Equidad y Género le fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen, diversas iniciativas que reforman y adicionan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de conformidad con la siguiente

Metodología

- I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las iniciativas referidas y de los trabajos previos de la comisión.
- II. En el capítulo "Contenido de las iniciativas" se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio, así como una referencia de los temas que las componen.
- III. En el capítulo "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que respaldan sus decisiones de aprobar, desechar o modificar las propuestas contenidas en las citadas iniciativas.

I. Antecedentes

1. El 30 de abril de 2009, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV Bis al título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa de referencia, turnándola a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen.
2. El 27 de mayo de 2009, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó, ante el pleno de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

3. El 29 de octubre de 2009, las diputadas Angélica Araujo Lara, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Luz Carolina Gudiño Corro y Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron, ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

4. El 26 de noviembre de 2009, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

5. El 2 de febrero de 2010, la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

6. El 16 de febrero de 2010, la diputada Laura Estrada Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Atendiendo el orden cronológico de su presentación, enseguida se da conocer el contenido, en lo sustancial, de las diversas iniciativas.

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IV Bis al Título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda

En la justificación de la iniciativa, el autor legislador señala que en los tiempos actuales, en los que la tecnología avanza a grandes pasos, también han cambiado las formas de cometer actos ilícitos, ya que las tecnologías de la información y de las comunicaciones nos ayudan a simplificar nuestras labores diarias, pero también se han vuelto un nuevo medio para realizar conductas que menoscaban la integridad física y mental de las personas.

Entre las principales víctimas de esas conductas se encuentran las mujeres que, con frecuencia, son objeto de violencia, lo que resulta en un daño que afecta considerablemente el desarrollo normal de sus actividades cotidianas.

El promovente señala que ahora se tiene mayor facilidad para acceder al uso de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, las cuales son inevitablemente utilizadas por ciertas personas para atemorizar sistemáticamente a su víctima, en este caso particular a las mujeres.

Los agresores hacen uso de los teléfonos celulares, haciendo llamadas o enviando mensajes repetidos para causar miedo en las víctimas, o el correo electrónico y las páginas *web* para difamar, extorsionar o llevar a cabo cualquier acción que denigre o violente los derechos humanos de las mujeres.

El autor define que *las tecnologías de la información y de las comunicaciones son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, el almacenamiento, la producción, la comunicación, el registro y la presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.*

Pero como estas herramientas son mal utilizadas por ciertas personas para causar daño en los derechos de las personas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, la mensajería instantánea, la utilización de *software* espía para monitorear constantemente los correos electrónicos de las víctimas, las páginas *web*, las redes sociales y los *blogs*, pueden representar un arma que utilicen los agresores de adultas y de niñas.

El uso de estas tecnologías, menciona, es creciente, por lo que –sin duda– problemáticas como el acoso se han trasladado al espacio cibernético, donde los agresores buscan ocultar su identidad por medio de la utilización de computadoras y telefonía móvil. Es muy probable que las niñas y las adultas víctimas de ese tipo de violencia cibernética sufran problemas de diversa índole, como estrés, depresión, enfermedad física o mental, que provocan la pérdida de confianza en sí mismas.

Sostiene asimismo el autor que las tecnologías de la información y de las comunicaciones no sólo han traído beneficios en todos los ámbitos de la vida, sino que se han convertido rápidamente en nuevos canales para ejercer violencia hacia el sexo femenino. Por ello, asegura, como legisladores, no podemos dejar pasar inadvertida esta nueva modalidad de violencia hacia el sexo femenino.

Que en razón de lo anterior, dicho autor propone adicionar un Capítulo IV Bis al Título II a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con objeto de que se reconozca y se regule la violencia que se ejerce hacia el sexo femenino mediante el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los siguientes términos:

Capítulo	IV	Bis
De la violencia por medio del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones		

Artículo 20 bis. Este tipo de violencia consiste en las conductas o actos que se realizan mediante el empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones y que tienen como finalidad acosar, hostigar, extorsionar, ofender o abusar, con fines lascivos, sexuales o de otra índole, a las mujeres y las niñas de tal manera que impliquen violencia moral, se vulnere su dignidad, seguridad, derechos humanos o que impidan su normal desarrollo en todos los ámbitos de la vida.

Las autoridades competentes de la federación y de las entidades federativas dispondrán de mecanismos de investigación, persecución y sanción de estas conductas, impliquen o no un delito; y promoverán acciones tendentes a fomentar su prevención mediante campañas de orientación entre proveedores de servicios de Internet, telefonía celular y otros instrumentos que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián

En la Ley General de Acceso de las Mujeres se establece que la Secretaría de Salud es una de las dependencias que están obligadas a brindar atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, de conformidad con lo señalado por el artículo 46.

La autora de la iniciativa afirma que la ley vigente establece que la Secretaría de Salud creará programas de capacitación para el personal del sector salud, garantizando la atención de las víctimas y la aplicación de la *NOM 190-SSA1-1999: Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar*.

No obstante, precisa, la citada norma oficial tuvo un proceso de actualización por lo que, el 16 de abril de 2009, fue publicada, en el *Diario Oficial de la Federación*, la *NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención*, la cual contiene lineamientos específicos que se deben observar todas las autoridades federales y estatales.

Que precisamente por ello, aduce, es necesaria la reforma a la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de actualizarla de acuerdo con la norma oficial vigente.

Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I a II...

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de la **NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención;**

IV a XIV...

Transitorio

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por las diputadas Angélica Araujo Lara, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Luz Carolina Gudiño Corro y Sandra Méndez Hernández

Las promoventes señalan que el marco jurídico de los derechos de las mujeres se encuentra consagrado en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los cuales queda prohibida la discriminación en forma ilimitada, de cualquier clase y forma garantizando la igualdad entre todos los habitantes, con especial énfasis en la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, como uno de los pilares fundamentales de la organización social y respeto a la dignidad humana de todos los mexicanos.

En el ámbito internacional, aseguran, se constituye principalmente por la *Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres* de 1981, la *Declaración para la eliminación de la violencia contra las mujeres* de 1993, y la *Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará*.

Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se visibilizó la problemática de la violencia a la que son sujetas las mujeres; así, bajo la identificación de factores que han incidido en la permanencia de la violencia por décadas, se establecieron políticas públicas y directrices generales y obligatorias para lograr unificar criterios en todo el territorio nacional con el objeto de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en México.

Expresan que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.

En ese sentido, una de sus principales propuestas es la de adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 11, para establecer la prohibición de cualquier solicitud de no gravidez como requisito para obtener empleo, cargo o promoción laboral, o bien como causal de despido, excepto cuando por naturaleza de las actividades profesionales concretas o del contexto donde se lleven a cabo, se constituya una causa legítima, determinante y esencial que ponga en riesgo a la mujer.

Dentro de las acciones positivas en el ámbito familiar, proponen incorporar el trabajo de los medios de comunicación, adicionando la fracción V al artículo 8, quienes, a través de las medidas conducentes con la Federación, estados y municipios, serán alentados para que elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan a erradicar la violencia familiar en todas sus formas y, en general, difundir el respeto a la dignidad de la mujer.

En lo referente a la violencia en la comunidad, aseguran, se amplía para considerar ilícita la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto, legitimando a las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad para solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno; ello, adicionando un segundo párrafo al artículo 16.

Las promoventes de la iniciativa sostienen que se refuerzan las obligaciones de los tres órdenes de gobierno, reformando el artículo 20 y adicionando las fracciones I, II, III y IV, mediante la implementación de sanciones a los servidores públicos que no brinden la debida tramitación a la denuncia por violencia o bien la dilaten o dificulten; también, se les obliga a capacitar a los servidores públicos sobre el contenido de la ley, en especial de los encargados de su aplicación; se establece la obligatoria tipificación del delito de violencia por género en los códigos penales de los estados, cuya agravante sería que se realizare por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y por último, debido a la transversalidad del tema, se procurará integrar los principios de equidad y género en el trabajo cotidiano.

En ese contexto, plantea adicionar un título IV, de las responsabilidades y sanciones administrativas, con los artículos 64, 65 y 66.

Asimismo, propone complementar el sistema de sanciones a los agresores, adicionando el capítulo VI al título III, con el fin de crear los centros de atención a la violencia masculina, cuya premisa será la reeducación; adicionar la fracción IX para que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga la facultad de promover la creación de centros de atención a la violencia masculina en las entidades federativas; y, la adición de la fracción V al artículo 49 para que entidades federativas y al Distrito Federal impulsen la creación de centros de atención a la violencia masculina.

Por último, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se reforma el artículo 20 y se le adicionan las fracciones I, II, III y IV; se adicionan la fracción V al artículo 8, recorriéndose la numeración de las fracciones; los párrafos segundo y tercero al artículo 11; el segundo párrafo al artículo 16; la fracción IX al artículo 48, recorriéndose la numeración de las

fracciones; la fracción V al artículo 49, recorriéndose la numeración de las fracciones; el capítulo VI al título III, de los centros de atención a la violencia masculina y un título IV, de las responsabilidades y sanciones, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 8...

I a IV...

V. Proponer a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión con respecto a la atención, prevención y erradicación de la violencia en todas sus formas y en especial a promover el respeto a la mujer;

VI y VII...

Artículo 11...

Queda prohibida cualquier clase de solicitud o condicionante de certificados de no gravidez para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de embarazo.

No se considerará discriminación en el acceso al empleo incluido la formación necesaria, una diferencia de trato cuando por motivo de la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto donde se lleven a cabo, se constituya una causa legítima, determinante y esencial que ponga en riesgo a la mujer.

Artículo 16...

Se considera ilícita la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad podrán solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

Artículo 20. Para cumplir su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige, **para tal efecto deberán:**

I. Implantar sanciones a los servidores públicos que no brindaran la debida tramitación a la denuncia por violencia o bien, la dilaten o dificulten;

II. Fomentar la educación y capacitación del personal de la administración pública, del Poder Judicial, en general del personal encargado de aplicar las políticas para la atender, prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer establecidos en la presente ley;

III. Tipificar el delito de violencia por género, tomando en cuenta como agravante el que se tratare de un servidor público, en ejercicio de sus funciones; y

IV. Integrar los principios establecidos en el artículo 4 de la presente ley, en sus respectivas competencias.

Artículo 48...

I a VIII...

IX. Promover la creación de centros de atención a la violencia masculina en las entidades federativas, como medida efectiva para romper el ciclo de la violencia;

X y XI...

Artículo 49...

I a IV...

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, así como centros de atención a la violencia masculina prevista en esta ley;

VI a XXIII...

Título III

Capítulo

VI

De los centros de atención a la violencia masculina

Artículo 60. Los centros de atención a la violencia masculina son las áreas encargadas de brindar ayuda profesional a los hombres que ejercen violencia, mediante la modificación de las actitudes que generan violencia, a fin de erradicar la situación de violencia que dio origen a la intervención de la autoridad, por medio del tratamiento psicológico psiquiátrico, la aplicación de modelos psicoterapéuticos y talleres educativos.

En los modelos de tratamiento para hombres que ejercen violencia deberá considerarse la posible condición de víctima.

Artículo 61. Los centros de atención a la violencia masculina deben funcionar en lugar diferente de los refugios o centros de atención de mujeres víctimas de violencia.

Artículo 62. El juez que conozca de la causa de violencia contra las mujeres deberá decretar como parte de la sanción impuesta, la necesaria integración del agresor a los centros de atención a la violencia masculina, valorando la gravedad de la conducta y de los hechos cometidos.

Artículo 63. Los centros de atención a la violencia masculina tendrán las obligaciones siguientes:

I. Promover dentro de sus programas la modificación de los patrones socioculturales de conducta de los agresores;

II. Diseñar programas de educación, con el fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de cualquiera de los géneros o en los estereotipos para el hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra las personas;

III. Contar con el personal debidamente capacitado, sensibilizado acreditado en materia de violencia; y

IV. Mantener informado al juez que ordenó la medida, de su cumplimiento.

Título	IV
De las responsabilidades y sanciones	

Capítulo	único
De las responsabilidades y sanciones	

Artículo 64. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley, considerando especialmente grave el no atender con la diligencia necesaria o negarse a brindar atención a las víctimas de violencia.

Artículo 65. Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones serán las siguientes:

I. Apercibimiento público, que consistirá en la prevención escrita que se hará al infractor en el sentido de que de incurrir en una nueva falta, se le aplicará una sanción económica, en términos de lo previsto por esta ley. Dicho apercibimiento se fijará en el lugar de trabajo o domicilio donde hubiere ocurrido la infracción;

II. Multa de 120 a 220 días de salario mínimo general vigente al momento de cometerse la infracción;

III. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de un año;

IV. Destitución del puesto; o

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Las sanciones administrativas consignadas en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

Artículo 66. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente capítulo, deberá seguirse el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Transitorios

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Artículo tercero. Las legislaturas de los estados deberán llevar a cabo las adecuaciones producto de las presentes reformas, en un término de seis meses, a partir de su entrada en vigor.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera

La iniciadora señala que una de las etapas en que la mujer requiere cuidados especiales es el embarazo y el Estado tiene la obligación de generar condiciones adecuadas para que en el proceso de ser madre, desde el momento de la concepción y hasta los 42 días después que ocurra el nacimiento, sea atendida por personal de salud capacitado y profesional.

Expresa también que el embarazo somete a la mujer a riesgos de salud que pueden afectar tanto a la futura madre como al bebé. La norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido señala que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales durante el embarazo; asimismo, recomienda limitar la proporción de cesáreas entre 15 y 20 por ciento en relación con el total de nacimientos atendidos.

Para el cumplimiento de estas condiciones se requieren instituciones de salud con personal especialmente calificado en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también con gran sentido de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo en la atención de la mujer en estado de gestación.

Sin duda, asevera, una atención de calidad para la mujer durante el embarazo determina las condiciones del parto y del puerperio. Sobre el tema, cita, la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, en el artículo 12, punto 2, se determina lo siguiente: *Los estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.*

Al respecto, señala, para cumplir este mandato es necesario efectuar protocolos de atención de la embarazada en las instituciones de salud. En esa tarea, el personal que la atiende en su ruta crítica desempeña un papel determinante.

Por ello, la forma y los tiempos de atención con que el personal de salud actúa son decisivos para la vida de la madre y del bebé. Ante tal exigencia, es necesario reconocer que las mujeres, especialmente las de zonas rurales y las más pobres, no siempre son atendidas de manera expedita y con la solicitud que toda urgencia obstétrica requiere. Contravenir tales disposiciones puede traer como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad materna.

Subraya la promovente que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es uno de los países donde más cesáreas se practican sin justificación, con una tasa superior (39.1 por ciento) al promedio registrado en América Latina (29.1)

Tal indicador da cuenta de una mortalidad materna relativamente alta, por lo que su sistema de salud debe ser investigado para determinar si ofrece una atención adecuada.

Según la iniciadora, este indicador muestra que estamos ante un problema obstétrico que debe ser atendido y superado.

Para salvaguardar la salud de las mujeres, propone, es necesario determinar en la ley, adicionando una fracción VI al artículo 6, que la omisión o deficiencia, y los abusos, en la atención de la embarazada por parte del personal de salud debe considerarse como un tipo de violencia, pues pone en riesgo su salud y la de su hijo.

Por otro lado, menciona la necesidad de incorporar, en el capítulo de la atención a las víctimas, en el ejercicio de los derechos tutelados en la ley que nos ocupa, que la víctima deberá contar con información suficiente y clara para orientar sus decisiones. Con esto se busca incluir la tutela para el acceso a los derechos establecidos en la presente ley a las mujeres con discapacidad, así como una protección específica dirigida a las mujeres indígenas, otorgándoles asistencia integral gratuita, provista de intérpretes y defensores de oficio con conocimiento de su lengua y cultura.

La promovente señala que si bien no hay un instrumento internacional vinculante en materia de derechos indígenas para el Estado mexicano, la Carta Magna, en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, establece que, para su acceso pleno a la jurisdicción del Estado,

los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

En ese sentido, sostiene la autora, el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción III, "de los derechos de la víctima o del ofendido", establece como un derecho *recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia*, por lo que, para hacer efectiva esta garantía para las indígenas, es indispensable que las asista un intérprete que hable su lengua.

Por ello, asegura, la Ley General de Acceso debe incorporar en su contenido que la atención a la mujer con discapacidad e indígena sea brindada de manera clara y en su lengua.

Por último, propone adicionar un párrafo segundo al artículo 53 donde se señale la prohibición de someter a la víctima a mecanismos de conciliación o mediación con su agresor, en tanto dure la situación de violencia.

Tal disposición, expresa, ya se encuentra en la fracción IV del artículo 8, relativo a la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, debido a que el riesgo para la víctima frente al agresor es el mismo en todas las modalidades de violencia, se considera necesario establecer tal prohibición en el capítulo IV, "de la atención a las víctimas".

Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se adicionan la fracción VI al artículo 6, y se recorre el numeral de la subsiguiente, para quedar como VII; un último párrafo al artículo 52, así como un segundo párrafo al artículo 53 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6...

I a V...

VI. La violencia obstétrica. Cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece durante el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir atención oportuna y eficaz de las urgencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del niño con la madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, y practicar el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural, estas dos últimas, sin obtener el consentimiento informado de la mujer; y,

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Artículo 52...

I a VIII...

En el ejercicio de los derechos tutelados en la presente ley, la víctima contará con información suficiente, de manera inteligible, para orientar sus decisiones; en caso de tratarse de mujeres indígenas, éstas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Artículo 53...

Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación o cualquier otro alternativo con el agresor en tanto dure la situación de violencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz

Para la diputada iniciadora, la atención médica inmediata después de una violación y otras formas de violencia sexual puede paliar extraordinariamente el daño causado, aun cuando nunca se pueda reparar por completo. De hecho, en la fracción III del artículo 46 del texto vigente de la referida ley, se hace un reenvío a la *NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar*, a fin de contribuir a garantizar la atención a las víctimas.

Sin embargo, alega, por disposición de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, toda norma oficial debe revisarse cada cinco años para verificar su vigencia, si debe modificarse o, en su caso, eliminarse.

Así, la *NOM-190-SSA1-1999* ha sido actualizada por la *NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención*, y ésta, a su vez, será actualizada en su momento.

Por ello, dados los tiempos actuales, en los que el fenómeno de la violencia contra las mujeres se hace cada vez más visible y requiere entonces su oportuna atención, sanción y erradicación, dicha ley deberá modificarse debido a los actos administrativos de carácter general que surjan en apoyo a los ya existentes para atender tal fin.

De esta forma, asegura, y en virtud de que la propuesta que se presenta hace referencia a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia y no a una norma específica, esta reforma resulta inclusiva y pretende que no se requieran modificaciones constantes, conservando su vigencia por un periodo más largo.

Por lo anteriormente expuesto, la autora presenta la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:

Único. Se reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 46...

I a II. ...

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas **de conformidad con los reglamentos, normas oficiales mexicanas y otros actos administrativos de carácter general que se emitan en la materia;**

IV. a XIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la Diputada Laura Estrada Rodríguez

En la justificación de la iniciativa la iniciadora estipula que la familia es un vínculo privilegiado en la transmisión de los más altos valores en los niños, jóvenes y nuevas generaciones; la célula básica de la sociedad y primera comunidad natural de solidaridad donde se desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Reconoce, de acuerdo con datos estadísticos del INEGI, varios tipos de familias; 97.7 por ciento de la población se agrupa fundamentalmente en hogares familiares, donde los miembros tienen relaciones de parentesco con el jefe del hogar; 67.5 por ciento de las familias están integradas por el jefe, la cónyuge y los hijos; 17.9 por ciento de las familias están integradas por uno de los padres y sus hijos; y, 11.2 por ciento de las familias están constituidas por parejas sin hijos.

Puntualiza que los hogares monoparentales registran un paulatino y constante aumento, aunque no presenta cifras.

En sus numerosas formas, abunda, la familia es la unidad básica de la sociedad, la cual sigue experimentando cambios fundamentales en su estructura y funciones.

Advierte que la escuela y la familia son las instancias que más influyen en la vida y desarrollo de las niñas y niños, ya sea en la formación como en la educación temprana; vivir en familia, para los infantes, resulta una experiencia dolorosa, en muchos casos, debido a la desintegración, a la violencia o a la falta de responsabilidad de uno o de ambos padres, lo que representa un escenario propicio para que busquen otras alternativas de vida como son la violencia, la delincuencia o la drogadicción, por mencionar algunas.

Frente a ese panorama, existe la necesidad de fortalecer la institución familiar propiciando la estabilidad y la resolución no violenta y satisfactoria de sus conflictos, promoviendo la solidaridad entre sus integrantes y fomentando la responsabilidad de sus miembros al interior del núcleo familiar y hacia la comunidad, incentivando la compatibilidad entre las responsabilidades equitativas ambos padres.

También, es indispensable crear una cultura al interior de las aulas para enseñarles a comprender la importancia de la paternidad y maternidad responsables, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de los hijos. Mediante programas educativos se contribuirá a la prevención de estereotipos respecto de las responsabilidades del hogar, fortaleciendo los valores de respeto, protección e integridad de la familia.

Para la promovente, la propuesta complementa las disposiciones previstas en la legislación educativa relativa a la finalidad de ésta para crear conciencia sobre la planeación familiar y la paternidad responsable.

Por lo anteriormente expuesto, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:

Artículo único. Se reforma la fracción II del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I...

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; **así como la comprensión adecuada de la paternidad y la maternidad responsables, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos;**

III. a XVI...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora expone las siguientes valoraciones de las iniciativas:

1. Que adiciona un Capítulo IV Bis al Título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda

Primer párrafo (artículo 20 Bis)

Esta comisión dictaminadora concuerda con el diputado promovente al señalar que en los tiempos actuales la tecnología avanza a grandes pasos y que las llamadas tecnologías de la información y de las comunicaciones, definidas por el autor como *el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, el almacenamiento, la producción, la comunicación, el registro y la presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética*, juegan hoy un papel primordial en distintos órdenes de la vida social.

No obstante, el iniciador propone, en la exposición de motivos, la inclusión de una nueva modalidad de violencia sin percatarse que la definición de la misma, prevista en el artículo 5, fracción V, hace referencia a modos de proceder, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia donde se registra la violencia de género; de ahí que el título II establezca claramente las modalidades de la violencia: en los ámbitos familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida.

En tanto, los tipos de violencia, definidos y previstos en los artículos 5, fracción IV, y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se circunscriben a los daños o afectaciones derivados de actos u omisiones de los agresores.

Esto es, las definiciones establecidas en la ley vigente no hacen referencia a la utilización de los medios de los que se valen los agresores para infringir perjuicio a sus víctimas. Los medios no son un factor preponderante para determinar la existencia o no de violencia de género.

En ese contexto, el iniciador alude, a la postre, en el texto propuesto del artículo 20 bis, a un *tipo de violencia que consiste en las conductas o actos que se realizan mediante el empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones*; esto es, no acierta a definir si habla de una modalidad o de un tipo.

Asimismo, hace referencia específica a la denominada *violencia moral*, como una implicación de la violencia perpetrada mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, sin definirla.

De lo anterior, para esta comisión dictaminadora resulta claro que se trata de una propuesta inviable.

Segundo párrafo (artículo 20 bis)

Por otro lado, en lo relativo al segundo párrafo planteado, resulta ambiguo exponer que las autoridades competentes de la Federación investigarán, perseguirán y sancionarán las conductas citadas *impliquen o no un delito*, aun y cuando el Código Penal los tipifique como tales.

Cabe destacar que las conductas que pretende abatir, si bien es cierto no con perspectiva de género, se encuentran previstos en el Código Penal Federal, nos referimos al hostigamiento sexual y al abuso sexual, capítulo I del título decimoquinto, y a la extorsión, capítulo III bis del título vigésimo segundo.

Incluso, la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro del capítulo II, incluye y define el acoso y el hostigamiento sexual como formas de violencia presente en los ámbitos laboral y docente, para enseguida facultar a las entidades y al Distrito Federal, en el artículo 14, a establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; a fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; así como a promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo no contempla concretamente el hostigamiento sexual en la esfera laboral, aunque sí lo hace de manera general en los artículos 3o., 51 y 132.

En lo que concierne a la promoción de *acciones tendentes a fomentar su prevención mediante campañas de orientación entre proveedores de servicio de internet, telefonía celular y otros instrumentos que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones* se tienen presentes las competencias de la Secretaría de Gobernación, en la Ley Federal de Radio y Televisión, las cuales se enumeran en el artículo décimo:

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación:

I. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos;

II. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.

III. Se deroga.

IV. Vigilar la eficacia de las transmisiones a que se refiere el artículo 59 de esta ley;

V. Imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones y denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de esta ley, y

VI. Las demás facultades que le confieren las leyes.

Por su parte la Ley Federal de Radio y Televisión prevé en el capítulo tercero del título cuarto, artículo 59 ter, que la programación general dirigida a la población infantil deberá estimular su creatividad, la integración familiar, la solidaridad humana, procurar la comprensión de los valores nacionales, promover el interés científico, artístico y social, así como proporcionar diversión y coadyuvar al proceso de formación de los niños y niñas.

También:

Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Para el caso de la coordinación y vigilancia, la ley precisa que, en el título quinto, capítulo segundo que:

Artículo 96. La Secretaría de Gobernación, para cumplir con las funciones y atribuciones que esta ley le señala, podrá practicar las visitas de inspección que considere pertinentes.

Artículo 97. El concesionario o permisionario está obligado a atender las observaciones que por escrito le haga la Secretaría de Gobernación, si a juicio de ésta las transmisiones no se ajustaren a la presente ley y su reglamento.

En términos de las infracciones y sanciones, el título sexto, capítulo único, artículo 101 establece:

Artículo 101. Constituyen infracciones a la presente ley:

(...)

XIII. La desobediencia a cualquiera de las prohibiciones que para la correcta programación prevé el artículo 63 de esta ley;

(...)

XX. No acatar las observaciones que haga la Secretaría de Gobernación en los términos del artículo 97;

Finalmente, en lo relativo a la telefonía móvil, la Ley Federal de Telecomunicaciones prevé, con el fin de combatir los delitos:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

(...)

XI. Llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:

a) Número y modalidad de la línea telefónica;

b) Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente;

c) En caso de personas morales, además de los datos de los incisos a) y b), se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar.

(...)

XII. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

b) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

d) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

- e) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y
 - f) La obligación de conservación de datos a que se refiere la presente fracción cesa a los doce meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.
- (...)

XIII. Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

En suma, la propuesta del diputado promovente resulta inviable debido a que la Ley de Radio y Televisión vigente señala competencias, establece las características de las transmisiones y determina las infracciones y sanciones para aquellos concesionarios que violen la ley. Igualmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones señala el procedimiento mediante el cual los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones deberán llevar el registro y control de sus usuarios y los obliga a entregar los datos conservados a la autoridad ministerial federal y de los estados *cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.*

2. Que reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián

De conformidad con la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Salud tiene la encomienda de crear programas de capacitación para el personal de salud, respecto de la violencia contra las mujeres, garantizando la atención a las víctimas y la aplicación de la norma oficial mexicana *NOM 190-SSA1-1999: Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar;*

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide con la iniciadora cuando afirma que la norma oficial mexicana a la que se hace referencia sufrió un proceso de revisión, luego de que, el 16 de abril de 2009, fue publicada, en el *Diario Oficial de la Federación*, la *NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención*, por lo que procede reformar la fracción III del artículo 46 de la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para actualizar su denominación y número de clave.

De esta manera el precepto legal reformado establece acciones y medidas renovadas que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben observar en la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

No obstante, dado que su revisión quinquenal, a partir de la fecha de publicación, está prevista en el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, así como de su posible cambio de denominación y número de clave en el artículo 28 del reglamento de la ley citada, y con el propósito de no recurrir periódicamente a la presentación de una iniciativa de reforma a la ley para reajustar el nombre de la norma, se sugiere la siguiente redacción:

Artículo 46...

I y II...

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las **normas oficiales mexicanas vigentes en la materia;**

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por las diputadas Angélica Araujo Lara, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Luz Carolina Gudiño Corro y Sandra Méndez Hernández

De su revisión y análisis, la comisión dictaminadora hace las consideraciones siguientes:

Adición de la fracción V al artículo 8

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, en el artículo 27, fracción XXVII, que a la Secretaría de Gobernación le corresponde formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información.

Por su parte, la Ley Federal de Radio y Televisión, fracción I del artículo 10, que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos. Asimismo, la Ley General de Acceso, dispone en su artículo 42, fracción X, que a la Secretaría de Gobernación le corresponde vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres;

En este contexto, en la exposición de motivos de la iniciativa, las promoventes plantean que los medios de comunicación serán alentados para que elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan a erradicar la violencia familiar en todas sus formas y, en general, difundir el respecto a la dignidad de la mujer

En ese sentido, para alcanzar ese objetivo, especificando la autoridad responsable a la luz de la legislación vigente, se propone adecuar el párrafo propuesto, para dejar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación la promoción, que no imposición, observando las disposiciones constitucionales en la materia, de las citadas directrices.

Para ello, esta dictaminadora propone reformar la fracción X del artículo 42, para quedar como sigue:

Artículo 42.

...

X. Vigilar y **promover directrices para** que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad **y el respeto hacia las mujeres;**

Adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 11

En cuanto a la adición de un segundo párrafo al artículo 11 –para prohibir cualquier clase de solicitud o condicionante de certificados de no gravidez para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de embarazo–, la comisión dictaminadora considera que la situación planteada tiene que ver directamente con discriminación de género, ya contemplada en el primer párrafo del artículo 11 vigente. Del mismo modo, su materia corresponde a otro ordenamiento jurídico, la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, se desecha.

Por lo que se refiere a la adición del tercer párrafo, esta comisión valora que las medidas de protección para mujeres embarazadas tienen sustento en la fracción V del apartado A del artículo 123 y en el artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo; por ello, la propuesta se desecha.

Adición del segundo párrafo al artículo 16

En cuanto a la adición de un segundo párrafo al artículo 16, en el texto de la propuesta se usa el término ilícito (a) lo que nos remite a un acto contrario a una norma específica; pese a ello la autora no hace referencia a ésta ni a la autoridad responsable de sancionarla. Por demás, resulta obvio que la tipificación de actos ilícitos corresponde hacerlo en otro cuerpo normativo.

Dado que lo relativo a los medios de comunicación cae dentro del ámbito de responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, la propuesta es improcedente.

Reforma al artículo 20 y adición de las fracciones I, II, III y IV

En el capítulo de violencia institucional las iniciadoras proponen adicionar varias fracciones al artículo 20 para detallar lo que ya, de suyo, el propio artículo precisa.

Ya el artículo 8 dispone, para los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de un modelo de sanción, así lo concibe el Ejecutivo federal dentro del Reglamento de la Ley General de Acceso (capítulo III, de las sanciones) el cual señala las directrices de apoyo para servidores públicos, las sanciones conforme a la legislación correspondiente, la capacitación necesaria para el personal de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, entre otras.

Por demás, el programa integral, previsto en el artículo 38 establece que entre las acciones que contendrá figuran:

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género;

Por tanto, las dos primeras fracciones son improcedentes.

En el caso de la fracción III, la tipificación de los delitos no corresponde a los órdenes de gobierno sino al Poder Legislativo, por lo que se desecha.

En cuanto a la fracción IV, debe atenderse que el artículo 4 de la ley vigente los señala y mandata su observancia elaborar y ejecutar las políticas públicas federales y locales, por lo que la propuesta es inviable.

Adición de la fracción IX al artículo 48 y un capítulo VI al título III

Por lo que se refiere a la adición de la fracción IX al artículo 48, para facultar al Instituto de las Mujeres a promover la creación de centros de atención a la violencia masculina en las entidades federativas, esta comisión dictaminadora acuerda desecharla debido a que en el artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se advierte con toda claridad su fin esencial, y esta propuesta rebasa los fines de la misma:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar (...)

Respecto a la adición del capítulo VI al título III, de los centros de atención a la violencia masculina, los modelos de atención previstos en el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia están dirigidos a víctimas y agresores; particularmente, la fracción II señala que dentro de los modelos de atención establecidos por los tres órdenes de gobierno se deben tomar en consideración brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia. Tal aspecto se reitera en los artículos 9, 14, 30, 38, 46, 49 y 50 del citado ordenamiento, para que:

- a) Los poderes legislativos federal y locales, consideren incluir la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales;
- b) Las entidades federativas y el Distrito Federal diseñen programas que brinden servicios reeducativos integrales;
- c) Los servicios reeducativos que brinden las instituciones públicas sean considerados órdenes de protección preventivas;
- d) El programa integral contenga la formulación de esquemas y acciones de educación con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas;
- e) Corresponda a la Secretaría de Salud brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;
- f) Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios tienen la facultad de impulsar y apoyar los programas reeducativos integrales dirigidos a los agresores

En esa circunstancia, la elaboración y expedición del reglamento respectivo es congruente con lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; particularmente nos referimos al capítulo II, denominado "de la atención", y al artículo 62, fracción IX, para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como parte integrante del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres tenga la atribución de brindar a los agresores servicios de rehabilitación psicológica y social, atendiendo los modelos, en los centros de atención de asistencia social.

Bajo esta perspectiva, la propuesta cae en un terreno que distrae el propósito central de la ley, además de representar importantes implicaciones presupuestales para la Federación, estados y municipios.

En suma, la atención de los agresores, a través de modelos de atención con perspectiva de género, ya está prevista en la ley vigente por lo que las propuestas de la iniciadora resultan inviables.

Adición de la fracción V al artículo 49

En cuanto a la adición de la fracción V al artículo 49, se propone adecuar el texto y reformar la fracción vigente, dando prioridad a las víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 49...

I a IV...

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

Adición de un título IV

En lo que se refiere a la adición de un título IV, de las responsabilidades y sanciones, considerando la existencia de diversas leyes que regulan el quehacer de los servidores públicos, tales como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales permiten la investigación y posible sanción de las conductas que configuren responsabilidades administrativas, la comisión dictaminadora propone considerar parte del texto del artículo 64 planteado, en los siguientes términos:

Título	IV
De las responsabilidades y sanciones	

Capítulo	único
De las responsabilidades y sanciones	

Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia.

Lo anterior, debido a la existencia de legislación aplicable en los órdenes penal, civil y administrativa.

Finalmente, los artículos transitorios, resultan innecesarios puesto que no existen normas o disposiciones derivadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la dictaminadora desechó las propuestas que afectaban a las entidades.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a, propuesta por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera

Las diputadas y diputados de esta comisión dictaminadora concuerdan con la promovente cuando apunta que los servicios de salud son de vital importancia durante embarazo, el parto y puerperio.

En ese tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo tercero del artículo 4o., que *toda persona tiene derecho a la protección de la salud*, en tanto que el artículo 73, fracción XVI, faculta al Congreso de la Unión *para dictar leyes sobre (...) salubridad general de la República*, del mismo modo dicta que *la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general*.

En el mismo orden de ideas, resulta pertinente expresar, como lo hace la promovente, acerca de la existencia de la *Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993*, cuyo objetivo es, consecuentemente, el de establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y la atención del recién nacido; la norma es obligatoria para todo el personal de salud en las unidades de salud de los sectores público, social y privado a nivel nacional. Así también, la vigilancia de la aplicación corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Adición de la fracción VI al artículo 6

En lo referente a la propuesta de adicionar la fracción VI al artículo 6, de la revisión de su redacción, la comisión dictaminadora concluye que se trata no de un nuevo tipo sino de una eventual variante de la violencia institucional, modalidad prevista en el capítulo IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya definición se encuentra en el artículo 18:

Artículo 18. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Además, contradice la generalidad de la ley, principio básico de todo cuerpo normativo, al referirse a un caso específico de violencia.

Cabe destacar, que la preocupación de la iniciadora se subsana con la aplicación de la Ley General de Salud, en lo que corresponde, y la norma oficial mexicana que establece los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Por ello, la dictaminadora desecha la propuesta citada.

Adición de un último párrafo al artículo 52 y de un segundo párrafo al artículo 53

La propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 52, referido a los derechos de las víctimas con el objeto de que cuenten con información suficiente y entendible para orientar sus decisiones, y que las mujeres indígenas sean asistidas gratuitamente por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

En lo que se refiere a la primera parte del párrafo, dado que la fracción tercera del mismo artículo prevé el derecho de las víctimas a recibir información veraz y clara; y de que, igualmente, la fracción V del artículo 54 establece que los refugios para las víctimas, desde una perspectiva de género, brindarán la información necesaria que les permita decidir sobre opciones de atención, la comisión dictaminadora aprueba desecharla.

En cuanto a la propuesta relativa a las mujeres indígenas se considera viable puesto que armoniza la legislación vigente, reforzando lo dispuesto por la Carta Magna, en la fracción VIII, apartado A, del artículo 2o., que a la letra dice:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

(...)

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Por lo que toca a la adición de un segundo párrafo al artículo 53, para la comisión dictaminadora –prohibir que se someta a la víctima a mecanismos de conciliación–, resulta pertinente al quedar inserta dentro del capítulo de la atención de las víctimas; no obstante, considera que es más apropiado adicionarla, previa adecuación de su redacción, como una fracción IX del artículo 52, del mismo capítulo, adquiriendo con ello el carácter de derecho de las víctimas.

De esta manera, ambas propuestas quedan como sigue:

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I a VIII...

IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

5. Que reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz

La comisión dictaminadora coincide plenamente con la promovente cuando señala la necesidad de actualizar la norma prevista en la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de que fue publicada la *NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención*.

Sobre el particular, esta comisión considera adecuado establecer en la ley la referencia única a las normas oficiales mexicanas, toda vez que, jerárquicamente, los reglamentos, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia, en su tesis P/J79/2009, *son por definición constitucional, actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la ley correspondiente, por lo que no pueden abordar novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del congreso de la unión y debes estar precedidos de una ley, cuyas disposiciones desarrolla, complementa o detalla*.

Esto es, los reglamentos están sujetos a las leyes de las que proceden, su expedición se establece en las mismas y recae bajo la responsabilidad del Ejecutivo federal, por lo que resulta improcedente, por innecesario, su inclusión como lo propone la iniciadora.

Por otra parte, las normas oficiales mexicanas son definidas en la fracción XI del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización:

XI. La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

Asimismo, el artículo 51, de la misma ley, establece que la modificación de las normas, cada cinco años, debe seguir un procedimiento de elaboración.

En congruencia, el Reglamento de la Ley sobre Metrología señala, en su artículo 28, establece los criterios a los que se ajustaran los contenidos de las mismas en lo que se refiere a:

Su denominación, la clave o código, ser redactadas y estructuradas de acuerdo a lo que establezcan las normas mexicanas expedidas para tal efecto, señalar el grado de concordancia con normas internacionales y normas mexicanas, para lo cual se mencionará si ésta es idéntica, equivalente o no equivalente, incluir en el capítulo de bibliografía las normas o lineamientos internacionales y normas o regulaciones técnicas extranjeras que, en su caso, se tomen como base para la elaboración de una norma oficial mexicana, y señalar si la evaluación de la conformidad podrá ser realizada por personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes, y cuando exista concurrencia de competencias, contener la mención expresa de las autoridades que llevarán a cabo dicha evaluación o vigilarán su cumplimiento.

Otros artículos de la misma ley establecen las opciones que tienen las dependencias para elaborar anteproyectos de norma oficial mexicana; la forma de coordinación, entre ellas, para la elaboración, expedición y publicación conjunta, así como de la observancia de las mismas, entre otras.

En ese orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública, precisa la facultad de la Secretaría de Salud:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento;

Por su parte la Ley General de Salud, en el capítulo de la distribución de competencias señala:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;

(...)

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general, y

También, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en salud, especifica que:

Artículo 70. La terminología a emplear, las clasificaciones de enfermedades, procedimientos médicos y definiciones utilizadas en el Sistema Nacional de Información en Salud se regirán por lo establecido en las normas oficiales mexicanas que para el efecto se hayan emitido.

En suma, tanto la Ley Federal sobre Metrología como la Ley General de Salud y sus reglamentos determinan, concretamente, responsabilidades en la elaboración, verificación y revisión de las normas oficiales, por lo que se colige que se trata de regulaciones derivadas de ellas. Al respecto, la comisión dictaminadora considera viable su inclusión en la fracción III.

Por último, la iniciadora propone incluir los actos administrativos, sin embargo no define su naturaleza; en todo caso, si están referidos a reglas de operación internas de las instituciones responsables de la atención a las víctimas, resulta innecesaria su inserción en este ordenamiento.

6. Que reforma la fracción II del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la Diputada Laura Estrada Rodríguez

La comisión dictaminadora concuerda con la iniciadora cuando reconoce, según cifras del INEGI, la existencia de varios tipos de familias y puntualiza que, en sus numerosas formas, la familia es la unidad básica de la sociedad, la cual sigue experimentando cambios fundamentales en su estructura y funciones.

En esta misma materia, es conveniente considerar que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia, que los niños y niñas tienen el derecho a satisfacer sus necesidades alimenticias, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

También, el artículo 3o. constitucional, en su segundo párrafo, asienta que:

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

Por su parte, la Ley General de Educación, artículo 7o., fracción X, establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tendrá, entre otros fines, además de los establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política, *desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;*

En la misma ley, el artículo 8o. ordena que:

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Además, en el artículo 65 se apuntan –en el capítulo de la participación social en la educación, sección 1, de los padres de familia– los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, y en el 66 las obligaciones en esta materia.

En el campo internacional, el inciso b) del artículo 5 de la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer* dispone que los estados parte tomarán medidas para *garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos;* en tanto que uno de los objetivos de la *Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo*, de la cual nuestro país es participante, es *promover la igualdad de los sexos en todas las esferas de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, alentando a los hombres a que se responsabilicen de su comportamiento sexual y reproductivo y a que asuman su función*

social y familiar, para tal fin los gobiernos deberán promover y alentar la participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas las esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas, incluidas la planificación de la familia, la crianza de los hijos y las labores domésticas.

Por lo antes expuesto, y con el propósito de reforzar las disposiciones constitucionales en materia educativa, encauzadas a fomentar los derechos y obligaciones de las personas en el seno familiar, haciéndolas congruentes con la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer* y con los compromisos asumidos en la *Conferencia internacional sobre población y desarrollo*, esta comisión dictaminadora sugiere la siguiente redacción:

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. ...

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; **así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos;**

III a XVI...

En mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se **reforman** las fracciones X del artículo 42, II del artículo 45, III del artículo 46 y V del artículo 49; se **adicionan** la fracción IX y un último párrafo al artículo 52 y un Título IV "De las Responsabilidades y Sanciones", con un Capítulo Único, que comprende el artículo 60, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a IX. ...

X. Vigilar y **promover directrices para** que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad **y el respeto hacia las mujeres;**

XI. a XV. ...

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. ...

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; **así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos;**

III. a XVI. ...

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. y II. ...

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las **normas oficiales mexicanas vigentes en la materia;**

IV. a XIV. ...

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a IV. ...

V. **Fortalecer e impulsar la creación de las** instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. a XXII. ...

...

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. a VI. ...

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;

VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y

IX. **La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.**

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Título IV

De las Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Único

De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de marzo de 2010

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Martha Elena García Gómez (rúbrica), presidenta; Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Ana Estela Duran Rico, Luz Carolina Gudiño Corro, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), secretarías; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarerna (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme, Laura Felicitas García Dávila (rúbrica en contra).

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente dictamen a diversas iniciativas en materia de Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Que en fecha de 20 de octubre del 2005, fue turnada la Iniciativa que reforma el artículo 128 de la Ley General de Población. Presentada por la diputada Martha Laguette Lardizábal del Partido Revolucionario Institucional.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

2. Que en fecha 10 de noviembre de 2005, fue turnada la iniciativa presentada por la diputada federal Blanca Eppen Canales, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, que adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Ley General de Población.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

3. Que en fecha 11 de enero de 2006, fue turnada la iniciativa presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, que adiciona el artículo 71 de la Ley General de Población.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

4. Que en fecha 2 de febrero de 2006, fue turnada la iniciativa presentada por la diputada Ruth T. Hernández Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, que reforma el artículo 7 y 71; y se adicionan los artículos 7 bis, 7 ter, 7 Quater, 71 bis y 71 Ter, de la Ley General de Población.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

5. Que en fecha 7 de marzo de 2006, fue turnada la Iniciativa presentada por la diputada Marisol Urrea Camarena, integrante del grupo parlamentario del PAN, que reforma la fracción VII del artículo 48 de la Ley General de Población.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

6. Que en fecha 24 de mayo de 2006, se presentó la iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Marisol Vargas Barcena, PAN.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

7. Que en fecha 17 de abril de 2007, se presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

8. Que en fecha 24 de abril de 2007, se presentó la iniciativa que reforma los artículos 6, 10, 124 y 145 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, PRI.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

9. Que en fecha 29 de noviembre de 2007, se presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, PRD.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

10. Que en fecha 30 de abril 2008, se presentó la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16, 71, 113 y 152 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, PRI.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

11. Que en fecha 7 de octubre de 2008, se presentó la iniciativa que reforma el artículo 94 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

12. Que en fecha 11 de diciembre de 2008, se presentó iniciativa que adiciona una fracción VIII al Artículo 3, de la Ley General de Población, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel, PNA.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

13. Que en fecha 24 de febrero de 2009, se presentó la iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.

Contenido de las iniciativas

La diputada Martha Laguette Lardizábal, propone con la adición de un segundo párrafo al artículo 128, prohibir el uso de los centros penitenciarios en los tres niveles de gobierno, como lugares de retención o aseguramiento de extranjeros, cuando se hayan internado de forma irregular o ya sean sujetos de proceso de expulsión.

La diputada Blanca Eppen Canales propone mediante adición al artículo 42, respecto a los extranjeros con calidad de no inmigrante, que el lapso de tiempo que permanezcan con permisos no les sea computable para la obtención de la nacionalidad mexicana.

La diputada Irma Figueroa Romero, propone mediante adición al artículo 71, que el aseguramiento de extranjeros en las estaciones migratorias sea llevado a cabo con respeto a los derechos humanos y en apego a la legalidad, notificando a las representaciones

consulares respectivas. Asimismo, propone que las instalaciones de las estaciones migratorias cuenten la infraestructura y servicios adecuados para una estancia digna.

La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, propone que el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, denominado Instituto Nacional de Migración, sea una instancia regulada en la presente Ley como la encargada de ejercer las facultades en materia de la política migratoria nacional, refiriendo su objeto, atribuciones y estructura administrativa. Por lo que hace al artículo 71 Bis, resulta coincidente con el criterio asumido en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de los emigrantes.

La diputada Marisol Urrea Camarena, propone incluir el concepto de residencia en territorio nacional. En un segundo aspecto plantea abrir la posibilidad de realizar actividades económicas, remuneradas o lucrativas a familiares de los Inmigrantes.

La diputada Marisol Vargas, propone reducir el tiempo de respuesta de parte de las autoridades migratorias, de 90 a 45 días naturales, modificando el artículo 150 de la Ley General de Población.

Esto es derivado de un incremento en el número de extranjeros que pretenden establecer su domicilio en el país o que desean realizar negocios o actividades lícitas, y ante las diversas acciones que se han emprendido en la administración pública así como las instituciones de migración, con el fin de reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes hechas por los nacionales y/o extranjeros, se han allegado de la tecnología necesaria así como de mecanismos de control que permiten y ayudan a reducir los mismos, sumándose a estas actividades los objetivos que se han fijado de facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico y social del país.

El diputado Tomás Gloria, propone la reforma a los artículos 123 y 128 de la Ley, para incorporar en los mismos que en todo momento desde su detención se respeten los derechos humanos y las garantías individuales a los migrantes de conformidad con lo establecido por los tratados internacionales firmados, así como aquellos establecidos por la Constitución Política.

Expone en su iniciativa, que el migrante indocumentado que entra por la frontera sur de nuestro país enfrenta entre otras dificultades de parte de las autoridades migratorias mexicanas, casos de extorsión, abusos, vejaciones y humillaciones así como de la Policía Federal, la estatal, municipal, y de las guardias de seguridad privada que trabajan en los trenes de carga, que estos abordan con un enorme riesgo, incluso se enfrentan a las redes organizadas de tráfico de personas a quienes se les conoce como "polleros" o "coyotes".

Y que ante los diversos tratados internacionales firmados por México, no se ha establecido en la Ley General de Población, la protección de sus derechos humanos y respeto de sus garantías.

La propuesta de reforma del diputado Vargas Landeros, propone actualizar los nombres de las Secretarías que forman parte del Consejo Nacional de Población, así como los nombres de dos leyes federales para que estén acordes a los textos vigentes de las mismas.

La diputada Maricela Contreras, propone en su iniciativa que entre las facultades con las que cuenta la Segob, se encarguen de los lineamientos de la política migratoria.

Asimismo dentro de esas facultades, propone que la Segob, se encargue de la protección de los derechos humanos y que garantice la libertad de los derechos sexuales de los migrantes, y que los funcionarios que se encargan de la política migratoria tengan la capacitación para asegurar lo anterior.

Por otro lado se busca que se brinde una mayor protección a las mujeres migrantes, y de una mayor protección y atención de las personas, y a los funcionarios públicos se les sancione, si estos cometen algún tipo de violencia hacia las mujeres de las estipuladas en otras leyes u ordenamientos.

De la iniciativa presentada por la diputada Bertha Yolanda, propone brindar una mayor protección a las mujeres y a las personas, que por su circunstancia especial de edad o discapacidad, requieran de apoyos especiales para entrar o salir del país sean nacionales o extranjeros.

Así como propone una atención especializada a las mujeres embarazadas que se encuentren en las estaciones migratorias, buscando en todo momento que se respete plenamente sus derechos humanos, y que se brinde atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa presentada por el diputado Portilla Diéguez, propone que las autoridades de los tres ordenes de gobierno, puedan tomar como documento de identificación oficial a la CURP, y no se exija de esta manera la presentación de otra identificación, siempre y cuando no se trate de trámites que requieran la identificación física del promovente.

La iniciativa presentada por el diputado Dávila Esquivel, propone incorporar en la Ley General de Población a los transmigrantes, entendidos estos como las personas que están de paso por el territorio nacional con miras a otro destino, con esto pretende que al incorporar dicho grupo, estos puedan gozar de los beneficios y garantías que brindan nuestras leyes.

Las iniciativas presentadas por el diputado Alejandro Chanona proponen por un lado que referente a las autorizaciones que debe emitir la Secretaría de Gobernación, para permitir que extranjeros se casen con mexicanos, ésta resolución se pueda obtener vía electrónica, tomando como base los datos del Registro Nacional de Extranjeros.

Consideraciones de la Comisión

Esta Comisión, posterior a la realización del estudio y análisis pertinente de las iniciativas listadas en el apartado de antecedentes y derivado de la exposición de sus contenidos

respectivos en el apartado que antecede, ha tomado en cuenta las mismas al igual que los objetivos que dieron origen a su presentación, los cuales han sido enriquecedores para la realización de este documento que es la dictaminación de las iniciativas de referencia.

Desde el inicio de esta LX Legislatura, esta Comisión ha manifestado que entre sus objetivos rectores y de trabajo, se encuentra de manera preponderante el de buscar la defensa de los derechos humanos de los migrantes, así como nuestro país lo ha solicitado a otras naciones en el trato que se brinda a nuestros connacionales.

Se han realizado reformas importantes como parte de los objetivos estructurales de esta Comisión, así lo fue desde el momento en que se aprobó la despenalización de la migración indocumentada, la cual significó un paso muy importante, ya que también buscamos en todo momento que las leyes sancionen a los funcionarios públicos que no brinden los tratos dignos, humanos y de respeto a las personas.

Es por eso que esta Comisión, considera solventada la propuesta planteada por la diputada Laguette Lardizábal, al proponer la no utilización de los centros penitenciarios en los tres niveles de gobierno, como lugares de retención o aseguramiento de extranjeros, cuando se hayan internado de forma irregular o ya sean sujetos de proceso de expulsión, toda vez que esa reforma ya se encuentra planteada en otro proyecto de dictamen que ya fue aprobado por los integrantes de la misma.

En ese mismo tenor, no se considera prudente ni viable la incorporación en los resolutivos, la propuesta de reforma al artículo 42, planteada por la diputada Blanca Eppen Canales, al buscar que los extranjeros con calidad de no inmigrante, y que en el lapso de tiempo que permanezcan con permisos no les sea computable para la obtención de la nacionalidad mexicana. Esto significaría un retroceso en los avances que ha impulsado la Comisión en pro de los migrantes en otros países y hablaría de un falso discurso de parte de los legisladores y a su vez ocasionaría una mayor acción por evitar la regularización de la estancia de los extranjeros y de su control en cuanto a las entradas o salidas del país.

Si bien por otro lado se encuentra ya solventada la propuesta de reforma presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, toda vez que han sido aprobadas en esta Comisión reformas que de fondo tocan el objetivo esencial de respeto a los derechos humanos de los migrantes en su aseguramiento en las estaciones migratorias y que estos se lleven con apego a la legalidad, y que acciones o trámites como la notificación a las representaciones consulares respectivas es una práctica que ya se realiza no hay sustento para modificar la Ley. Asimismo, en cuanto a que las instalaciones de las estaciones migratorias cuenten la infraestructura y servicios adecuados ya son elementos considerados en el presente proyecto y que han sido mejorados en su redacción manteniendo su objetivo esencial.

Tampoco se considera procedente la propuesta de reforma planteada por la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, al buscar que el Instituto Nacional de Migración, sea la encargada de ejercer las facultades en materia de la política migratoria nacional, porque si bien esta es una actividad que ya realiza y que de alguna manera tiene que estar en coordinación con la Secretaría de Gobernación, al ser ésta última la encargada de la política

interna en el país; y por lo que hace al criterio asumido en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de los emigrantes, son temas de reformas que ésta Comisión ha impulsado y aprobado en reformas anteriores.

Podemos mencionar que no es procedente la propuesta de reforma de la diputada Marisol Urrea Camarena, al pretender incluir en los tipos de inmigrantes, el concepto de "**familiares**", para exigir la residencia en territorio nacional, y de esta manera abrir la posibilidad de realizar actividades económicas, remuneradas o lucrativas a familiares de los inmigrantes, puesto que de esta manera estaríamos dejando de incentivar el trabajo legal en el país y dando paso a posibles explotaciones de los migrantes.

Siempre hemos pugnado por una mejora en la administración pública, en los tiempos de respuesta de los trámites realizados ante las autoridades migratorias de parte de los extranjeros, y conscientes de los costos y beneficios que esto implica, es que esta Comisión apuesta a la mejora de la tecnología y los beneficios que acarrearía ante una realidad que día con día nos muestra que de no avanzar en ese sentido nos estancaremos en el camino.

Es de ese modo que hemos impulsado reformas a los marcos legales referentes a nuestra materia, para poder garantizarle a los migrantes que así como nuestro país ha firmado convenios y tratados internacionales, somos congruentes y llevamos los compromisos más allá de simples firmas sin que generen algún impacto; es por eso que esta Comisión también ha realizado las propuestas de reformas y aprobado aquellas que son congruentes con este tipo de documentos internacionales que nuestro país ha signado y que se refieren a la defensa y protección de los derechos humanos, buscando en todo momento que exista una claridad en los textos legales de nuestro país, para evitar vacíos legales o malinterpretaciones.

Siendo congruentes con las actividades que nuestro país ha desempeñado, referentes a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, ya sean nacionales o extranjeras, y más aún cuando está de por medio un proceso de deportación, expulsión o repatriación, dejando en claro que se pondrá más atención en sus derechos cuando se encuentre en las estaciones migratorias, y con especial énfasis cuando se encuentren en estado de gestación, o lleven niños menores con ellas y el hecho de poderles brindar seguridad ante los abusos de aquellos cónyuges con los que hayan contraído matrimonio.

Ante la lucha en el tráfico de personas, y aquellas que ayudan a extranjeros a cruzar o entrar el país sin la documentación pertinente, esta Comisión apuesta y en todo momento ha buscado brindar ciertas garantías y protección a los migrantes tanto en su desplazamiento en el interior del país, así como en su intento por cruzar, tratando de evitar prácticas que lesionen su integridad física y moral, y buscando dar una batalla frontal no sólo contra aquellas personas que ya hayan cometido el ilícito sino también contra aquellas que pretendan llevarlo a cabo.

Así también entre otras cosas esta Comisión ha considerado los motivos que originaron la presentación de Iniciativas que pretenden reformar artículos específicos y de esta manera

actualizar los nombres de las Secretarías que forman parte del Conapo, y de la actualización de los nombres de algunas leyes que tienen impacto en esta Ley General de Población.

Es por todo esto, que esta Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, siempre ha luchado e impulsado aquellas reformas que permiten brindar un mejor trato a los migrantes en congruencia con los tratados internacionales que se han signado por el Ejecutivo y los cuales han sido ratificados por el Senado de la República, así también se ha apoyado el esfuerzo del gobierno de luchar de manera frontal contra el abuso y extorsión de parte de servidores públicos, así como se han realizado las reformas pertinente que nos ayudan a brindar un trato digno a los migrantes independientemente de su situación.

Y que en todo caso las reformas que se impulsan y se han aprobado por esta Comisión, han ido acorde con el objetivo de tener una ley acorde a las nuevas exigencias de los tiempos y de las circunstancias que se viven en el país y el entorno internacional.

Por las consideraciones expresas, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos al Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población

Artículo Único. Se **reforman** los artículos 1o.; 10, párrafo primero; 16; 39, párrafo segundo; 68, párrafo primero; 94; 150, párrafo segundo; 152; y 154, párrafo primero; se **adicionan** los artículos 3o., con una fracción XIV, pasando la actual XIV a ser XV; y 113, fracción VI; y, **se deroga** el párrafo tercero del artículo 68; a la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, **bajo los principios de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos de todo individuo que se encuentre en territorio nacional, independientemente de su situación migratoria.**

Artículo 3. ...

I. a XII. ...

XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre;

XIV. Promover la capacitación de los funcionarios de las dependencias encargadas de la prestación de los servicios migratorios, con la finalidad de

garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su situación migratoria, y

XV. Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, **Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación** y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.

...

Artículo 16. El personal de los servicios de migración dependientes de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal Preventiva tienen prioridad, con excepción del servicio de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República. **Para tales efectos, la autoridad procurará brindar la atención necesaria a menores de edad, las mujeres que se encuentren en estado de gestación, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, o a quienes requieran de apoyos especiales para su movilidad en dicho proceso.**

Artículo 39. ...

Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial, o dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, por parte del cónyuge extranjero, **la autoridad migratoria podrá cancelar la calidad migratoria al extranjero, fijarle un plazo para que abandone el país, regularizarlo o resolver lo conducente, reconociéndole los derechos que haya adquirido el mismo.**

Artículo 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento **de menores de edad**, y de defunción, en los términos que **establecen los artículos 67 y 68 del Reglamento de esta Ley, así como la legislación civil que corresponda a cada entidad federativa.** Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

...

(Se deroga)

Artículo 94. Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en

materia de registro de población, **y deberán adoptar el uso de la Clave Única de Registro de Población como fuente de información para la realización de trámites oficiales, procurando evitar solicitar a las personas documentos adicionales para la obtención de datos de identidad que no requieran elementos de identificación física.**

Artículo 113. ...

I. a III. ...

IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida;

V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, y

VI. Cometan actos u omisiones graves que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 150. ...

La autoridad migratoria contará con un plazo de hasta noventa días naturales para dictar la resolución correspondiente, contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables; transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo, **aplicándose de forma supletoria lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

Artículo 152. Si con motivo de la verificación se desprende alguna infracción a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite la expulsión del extranjero, el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento, **cuidando en todo momento el respeto a los derechos humanos.**

Artículo 154. La Secretaría de Gobernación, al requerir la comparecencia del extranjero a que se refiere la fracción II del Artículo 151 de esta Ley, **observará la garantía de debido proceso legal, cuyo ejercicio deberá realizarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y deberá cumplir con las siguientes formalidades:**

I. y II. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumerindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla, Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo.

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002

Honorable Asamblea:

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en el año 2002, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2002 fue recibida por la H. Cámara de Diputados en tiempo y forma, el 10 de junio del 2003.

En vista de lo anterior, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII, y 45, numerales 5 y 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a discusión y, en su caso aprobación, de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. Como lo ordena el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Segunda. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es una comisión ordinaria a la que corresponde entre otros aspectos, la dictaminación de las cuentas públicas, conforme lo establecen los artículos 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en el 2002; Cuarto Transitorio, fracciones II y IV del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Mayo de 2008 y 67, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada en el citado Diario el 29 de diciembre de 2000 y vigente hasta el 29 de mayo de 2009.

Tercera. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos de lo que disponen los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII, y 45, numerales 5 y 6 Incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 65, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis y dictaminación la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2002.

Cuarta. Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, asumieron la responsabilidad de integrar y emitir el presente dictamen con el

propósito de cumplir con el marco legal y normativo y, sobre todo, satisfacer la permanente exigencia de la sociedad de transparentar el destino de los recursos públicos federales.

Quinta. Las fuentes de información para la integración del presente Dictamen fueron las siguientes: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002, presentada por el Ejecutivo Federal el 10 de Junio de 2003; el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en marzo de 2004; la Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 elaborado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) en noviembre de 2004.

Sexta. En sesión celebrada el 15 de abril de 2009, se sometió al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el Dictamen relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2002, aprobado con fecha 2 de septiembre de 2008 por el pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El Dictamen no fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que éste se devolvió a dicha Comisión.

ANTECEDENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2002

Durante 2002, las finanzas públicas registraron un déficit presupuestario de 83 mil 827.4 millones de pesos, lo que representó el 1.36% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que rebasó la meta de déficit fijada en 0.65% del PIB. Este resultado fue generado por el impacto presupuestario de 48 mil 878 millones de pesos, derivado de las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera Rural.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2002
(Millones de Pesos)

Concepto	Original	Ejercido	Variación		Proporción del PIB	
			Importe (2)-(1) (3)	% (3)/(1) (4)	Original (5)	Ejercido (6)
Ingresos Presupuestarios	1,404,863.8	1,387,500.4	(17,363.4)	-1.2	22.7	22.6
Gasto neto Presupuestado pagado	1,445,057.9	1,471,327.8	26,269.9	1.8	23.4	23.9
Déficit Presupuestario	40,194.1	83,827.4	43,633.3	108.6	0.7	1.4
Endeudamiento Neto	158,878.0	106,960.5	(51,917.5)	(32.7)	2.6	1.7

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

Los ingresos presupuestarios sumaron 1 billón 387 mil 500.4 millones de pesos, cifra superior en 4.3% en términos reales en comparación con el 2001, con lo que se ubicaron en 22.6% como proporción del PIB. Este crecimiento se debió al incremento en la recaudación tributaria del 6.3% real y de los ingresos propios de los organismos y empresas bajo control directo presupuestario del 14.5% en términos reales, mientras que los ingresos no tributarios experimentaron una contracción del 12.2% real.

El crecimiento de los ingresos tributarios se debió fundamentalmente al aumento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) en 6.6% real y del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del 17.7% real; lo anterior derivado de la aprobación de las reformas fiscales en diciembre de 2001, así como de la disminución a los precios de las gasolinas y el diesel respectivamente.

A pesar del crecimiento respecto al 2001, la captación fue inferior en 17 mil 363.4 millones de pesos respecto a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio fiscal, lo que se debió principalmente a la baja en la actividad económica, así como por no haber alcanzado las metas de captación propuestas con la reforma fiscal.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN 2002

(Millones de pesos)

Concepto	Ley de Ingresos	Recaudación	Variación	
			Importe (2)-(1) (3)	% (3)/(1) (4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
TOTAL	1,404,863.8	1,387,500.4	(17,363.4)	1.2
Gobierno Federal	1,026,235.5	989,353.4	(36,882.1)	(3.6)
Tributarios	806,300.8	728,283.7	(78,016.3)	(9.7)
Renta e impuesto al activo	367,734.5	318,380.3	(49,354.2)	(13.4)
Producción y servicios	155,075.1	136,257.2	(18,817.9)	(12.1)
Valor agregado	223,738.1	218,441.7	(5,296.4)	(2.4)
Otros	59,752.3	55,204.5	(4,547.8)	(7.6)
No Tributarios	219,935.5	261,069.7	(41,134.2)	18.7
Aprovechamientos	72,951.9	96,706.4	(23,754.5)	32.6
Derechos	140,994.8	159,097.3	(18,102.5)	12.8
Otros	5,988.8	5,266.0	(722.8)	(12.1)

Entidades con control

presupuestario directo	378,628.3	398,147.0	19,518.7	5.2
Venta de bienes y servicios	266,113.9	279,297.5	13,183.6	5.0
Otros	112,514.4	118,849.5	6,335.1	5.6

Se excluyen aportaciones al ISSSTE por 18,125.5 y 19,093.6 millones de pesos en Ley de Ingresos y Recaudación 2002, respectivamente, con el propósito de no duplicar su registro.

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

En 2002, el gasto neto total del sector público presupuestario ascendió a 1 billón 484 mil 256.1 millones de pesos, monto superior en 20 mil 921.9 millones de pesos respecto a lo programado y mayor en 6.9% real respecto a 2001, con lo que se ubicó en 24.1% del PIB.

El crecimiento del gasto neto total se debió a las erogaciones relacionadas con BANRURAL y Financiera Rural por 48 mil 878 millones de pesos.

En ese mismo año, el gasto programable ascendió a 1 billón 029 mil 982.5 millones de pesos, equivalente al 16.7% del PIB. El gasto no programable fue de 405 mil 395.6 millones de pesos, monto inferior en 0.6% a lo ejercido en el 2001.

El gasto corriente ascendió a 874 mil 308 millones de pesos, cifra superior en 7.4% en términos reales respecto al ejercicio 2001, representado así el 85% del gasto programable.

El gasto de capital ascendió a 155 mil 674.5 millones de pesos, monto superior en 8 mil 124.7 millones de pesos al autorizado. Éste se originó básicamente en el capítulo de obras públicas; en el concepto de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) asociados a erogaciones adicionales en obras realizadas por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de generación, transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica; y en las amortizaciones que realizó esa entidad, también por concepto de PIDIREGAS.

GASTO PROGRAMABLE NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2002

(Millones de Pesos)

Concepto	Original (1)	Modificado (2)	Ejercido (3)	Economías / Subejercicios	
				Original (1)-(3)	Modificado (2)-(3)
TOTAL	1,026,550.8	1,043,810.4	1,029,982.5	-3,431.7	13,827.9
Gasto Corriente	879,001.0	885,354.3	874,308.0	4,693.0	11,046.3
Servicios Personales	459,050.0	461,657.5	457,932.1	1,117.9	3,725.4
Otros	419,951.0	423,696.8	416,375.9	3,575.1	7,320.9
Gasto de Capital	147,549.8	158,456.1	155,674.5	-8,124.7	2,781.6
Inversión Física	144,800.3	155,457.0	152,616.0	-7,815.7	2,841.0
Obras Públicas	68,386.3	73,754.6	72,659.2	-4,272.9	1,095.4
Bienes Muebles e Inmuebles	9,965.4	10,871.2	9,992.0	-26.6	879.2
Otros de Inversión Física	66,448.6	70,831.2	69,964.8	-3,516.2	866.4
Otros de Capital	2,749.5	2,999.1	3,058.5	-309.0	-59.4
Liquidación de BANRURAL		48,878.0	48,878.0	48,878.0	0.0
Transferencias para Servicios Personales		15,681.0	15,681.0		
Transferencias para Pago de Pasivo		33,197.0	33,197.0		

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

Comportamiento del Gasto Corriente 2001-2002

El gasto corriente del Sector Público Presupuestario pasó de 778 mil 193.6 millones de pesos en 2001 a 874 mil 308.0 millones de pesos en 2002, es decir, un incremento de 96 mil 114.4 millones de pesos aproximadamente, lo que representó una variación real de 6.3%.

**Gasto Corriente del Sector Público Presupuestario
2001-2002
(Millones de Pesos)**

Año	Monto	Variación Absoluta	Var. % Real
2001	778,193.6		
2002	874,308.0	96,114.4	6.3

Cifras brutas en millones de pesos.

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

Considerando las erogaciones en servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales del Sector Público Presupuestario, se puede observar que el 53.2% del incremento se destinó a estos conceptos.

Es decir, servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales aumentaron 51 mil 110.2 millones de pesos, lo que significó un crecimiento real de 3.5% con respecto al ejercicio fiscal 2001.

**Gasto Corriente en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales
del Sector Público Presupuestario
2001-2002
(Millones de Pesos)**

Año	Monto	Variación Absoluta	Var. % Real
2001	545,197.2		
2002	596,307.2	51,110.0	3.5

Cifras brutas en millones de pesos.

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

Asimismo, el gasto corriente de la Administración Pública Centralizada presentó un incremento de 15% en términos reales, lo que se traduce en un aumento de 53 mil 371.9 millones de pesos con respecto a lo ejercido en 2001.

**Gasto Corriente de la Administración Pública Centralizada
2001-2002
(Millones de Pesos)**

Año	Monto	Variación Absoluta	Var. % Real
2001	335,740.9		
2002	408,250.0	53,371.9	15.0

Cifras brutas en millones de pesos.

Excluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

De 2001 a 2002, el gasto corriente de la Administración Pública Centralizada, en particular lo referente a servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, presentó un incremento real de 4.1% .

**Gasto Corriente en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales
de la Administración Pública Centralizada
2001-2002
(Millones de Pesos)**

Año	Monto	Variación Absoluta	Var. % Real
2001	96,893.0		
2002	106,587.3	9,694.3	4.1

Cifras brutas en millones de pesos.

Excluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002.

En ese sentido se concluye que, en comparación con 2001, el gasto corriente de la Administración Pública Federal presentó un mayor crecimiento real en comparación con la totalidad del Sector Público Presupuestario.

REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2002

I. RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS

Cumpliendo con las obligaciones encomendadas, la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe correspondiente a la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2002, cubriendo una muestra de revisiones a 127 entes fiscalizados, entre los que se incluyeron 19 dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 53 Entidades Paraestatales Coordinadas Sectorialmente, 2 Entidades Paraestatales No Coordinadas Sectorialmente, 16 órganos desconcentrados, 2 órganos autónomos y las 32 entidades federativas.

En este sentido, la ASF llevó a cabo auditorías que, de acuerdo con su objetivo, se clasificaron en 3 grandes grupos: de Desempeño, de Regularidad y Especiales, dentro de las cuales, las de Regularidad fueron del tipo Financieras y de Cumplimiento, de Inversiones Físicas, en las que se incluyeron las obras públicas y las adquisiciones, y de Sistemas. Asimismo, realizó auditorías de Seguimiento, cuyo objetivo fue constatar y evaluar las gestiones realizadas por las entidades fiscalizadas para atender las observaciones, recomendaciones y demás acciones emitidas por la ASF en ejercicios anteriores.

En la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2002, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación practicó 336 auditorías, realizando las siguientes revisiones:

- 24 de Desempeño;
- 129 Financieras y de Cumplimiento, 68 revisiones a los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del ramo general 33, 60 de Inversiones Físicas y 3 de Sistemas;
- 52 auditorías especiales que requirieron el análisis de aspectos financieros, presupuestales, legales, de sistemas y de resultados en la mayoría de los casos

evaluados. La ASF destacó el sector Hacienda y Crédito Público, al que se le practicaron 28 auditorías de este tipo.

**Resumen de Tipo de Auditorías practicadas en la Revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2001-2002**

Tipo de Revisión	2001		2002		Var. % 2001-2002
	Realizadas	%	Realizadas	%	
De Desempeño	30	8.5	24	7.1	-20.0
De Regularidad	286	80.6	260	77.4	-9.1
Financieras y de Cumplimiento	134	37.7	129	38.4	-3.7
Obra Pública e Inversiones Físicas	54	15.2	60	17.9	11.1
Sistemas	10	2.8	3	0.9	-70.0
Recursos Federales a Entidades Federativas	20	5.6	21	6.3	5.0
Recursos Federales a Municipios	68	19.2	47	14.0	-30.9
Especiales	39	11.0	52	15.5	33.3
Total	355	100.0	336	100.0	-5.4

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001 y 2002.

De las 260 auditorías de Regularidad, 129 fueron auditorías financieras y de cumplimiento las cuales incluyeron, adicionalmente al objeto propio de la revisión, la verificación de los aspectos legales y normativos que sustentan las operaciones. Asimismo, se practicaron 60 auditorías de obra pública e inversiones físicas que requirieron la revisión de 128 contratos.

En total se determinaron 2,584 observaciones, de las cuales se derivaron 3,410 acciones promovidas, correspondiendo 2,505 a acciones preventivas (recomendaciones) y 905 a acciones de carácter correctivo, tal y como se muestra a continuación:

Acciones Promovidas	
Acciones preventivas (recomendaciones)	2,505
Acciones de carácter correctivo	905
Pliegos de observaciones	80
Solicitudes de aclaración	336
Solicitudes de intervención de la instancia recaudadora	20
Promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias	5
Solicitudes de intervención de los Órganos Internos de Control	464
Total de Acciones Promovidas	3,410

Fuente: Tomo Ejecutivo, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002

Cabe señalar que dentro de las recomendaciones emitidas por la ASF destacan: fortalecer la gestión operativa y administrativa de las entidades fiscalizadas; mejorar los sistemas de rendición de cuentas, así como los registros presupuestales y contables; cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente e implementar un sistema de indicadores estratégicos, entre otras. Al 30 de noviembre de 2009, de las 2,505 acciones preventivas que se emitieron, en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, ya no se reportan acciones en proceso.

A las acciones correctivas, se han agregado 52 correspondientes a: 26 pliegos de observaciones, 25 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y una solicitud de aclaración.

Cuantificaciones Monetarias

Del Programa de Auditorías aplicadas a la Cuenta Pública 2002, las cuantificaciones monetarias que se obtuvieron de las observaciones determinadas por la ASF que fueron incluidas en el Informe del Resultado presentado a esta Soberanía, ascendió a 77 mil 682.8 millones de pesos. La ASF determinó que dicho monto no necesariamente constituye resarcimientos o daños patrimoniales a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, o bien, promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Asimismo, estableció que únicamente 4 mil 528.2 millones de pesos correspondían a recuperaciones determinadas.

A continuación se muestra la conformación por sector del monto correspondiente a los efectos económicos:

CUANTIFICACIONES MONETARIAS		
ENTIDAD / SECTOR	Millones de Pesos	%
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	67,610.90	87.03
Sector Hacienda y Crédito Público	4,563.60	5.87
Sector Energía	2,305.10	2.97
Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1,017.20	1.31
Entidades no Coordinadas Sectorialmente	671.20	0.86
Sector Educación Pública	536.30	0.69
Sector Turismo	170.40	0.22
Sector Comunicaciones y Transportes	128.70	0.17
Sector Seguridad Pública	41.80	0.05
Sector Desarrollo Social	23.70	0.03
Sector Salud	20.10	0.03
Sector Economía	1.20	0.002
Universidades Públicas Estatales	22.80	0.03
Estados y Municipios (Ramo General 33)	569.80	0.73
MONTO TOTAL OBSERVADO	77,682.80	100.00

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002.

Al 30 de noviembre de 2009, según datos de la ASF, el monto actualizado de recuperaciones determinadas asciende a 6 mil 772.7 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 949.7 millones de pesos y justificado 5 mil 788.8 millones de pesos, con un saldo pendiente por recuperar o justificar de 34.2 millones de pesos.

Ramo General 33

Durante 2002, el monto total transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ascendió a 226.1 mil millones de pesos, monto que representó el 22% del gasto federal programable del Sector Público Presupuestario, el cual se ubicó en un mil 43.8 millones de pesos.

La ASF llevó a cabo la fiscalización de los fondos federales del ramo general 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". Para ello, realizó 19 revisiones directas y se coordinó con las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales (EFSL) para llevar a cabo 37 revisiones.

Las 68 auditorías a los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a los fondos del Ramo General 33, se detallan a continuación:

**Auditorías practicadas a los Recursos Federales Ejercidos
Por las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F.**

ENTIDAD FEDERATIVA	FAIS	FORTAMUN- DF	FASSA	FAEB	FAM	FAETA	FASP	TOTAL
Aguascalientes	1	1						2
Baja California		1	1					2
Baja California Sur	1	1						2
Campeche	1	1						2
Chiapas	1	1		1				3
Chihuahua	1							1
Coahuila		1			1			2
Colima	1	1						2
Distrito Federal					1			1
Durango	1							1
Estado de México	1	1						2
Guanajuato	1	1				1		3
Guerrero	2	1		1				4
Hidalgo	1					1		2
Jalisco		1		1				2
Michoacán	1	1					1	3
Morelos	1	1						2
Nayarit	2			1	1	1	1	6
Nuevo León		1						1
Oaxaca	2	1						3
Puebla		1						1
Querétaro	1	1						2
Quintana Roo	1	1						2
San Luis Potosí	1	1						2
Sinaloa		1			1			2
Sonora	1							1
Tabasco	2	1						3
Tamaulipas	1				1			2
Tlaxcala	1	1					1	3
Veracruz		1						1
Yucatán	1							1
Zacatecas	1	1						2
Total	28	24	1	4	5	3	3	68
% de revisión por fondo	41.2%	35.3%	1.5%	5.9%	7.4%	4.4%	4.4%	100.0%

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2002.

El importe total de las observaciones relevantes fue de 569.8 millones de pesos; se realizaron 32 pliegos de observaciones con un importe de 241.4 millones de pesos, cuyo importe de recuperación se estimó en 44.0 millones de pesos.

Se formularon 475 observaciones de auditoría, que dieron lugar a 518 acciones emitidas, las cuales tuvieron la siguiente composición: 414 Recomendaciones; 32 Pliegos de Observaciones; 39 Solicitudes de Aclaración; y 33 Solicitudes al Órgano Interno de Control.

**Resumen de las Observaciones y Acciones Emitidas
Recursos Federales de Entidades Federativas y Municipios**

Fondo	OBS	Acciones Emitidas				Total
		REC	SA	PO	SIOIC	
FAIS	165	162	10	4	3	179
FAEB	78	39	17	25		81
FASSA	5	5				5
FORTAMUN-DF	92	91		1		92
FAM	33	30	1	2	13	46
FAETA	46	46			3	49
FASP	56	41	11		14	66
Total	475	414	39	32	33	518

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2002.

OBS = Observaciones

REC = Recomendaciones

SA = Solicitudes de Aclaración

PO = Pliegos de Observaciones

SIOIC = Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

Asimismo, las observaciones más comunes se presentan en la siguiente tabla:

Recurrencia de las observaciones más comunes		
Tipo de observación	No. de auditorías	No. de observaciones
Incumplimiento de normatividad aplicable	37	255
Deficiencias de control interno	17	45
Obra pagada no ejecutada	12	34
Falta de documentación comprobatoria	17	29
Deficiencias en la integración de expediente técnico	10	26
Recuperación de recursos	9	20
Mala calidad de la obra	6	14
Manejo de los fondos en una sola cuenta	12	13
Diferencia en registro contable	9	10
Total	129	446

Fuente: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2002.

II. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

De conformidad con lo establecido por la ASF, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002 se ajustó, con algunas excepciones, a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; es decir, se definió con precisión el ente y su existencia, se cuantificaron los recursos en moneda nacional, se mostraron las operaciones del periodo y el costo histórico de sus activos, se respetó la base de registro, se dio revelación suficiente de la información, se presentó la importancia relativa de los aspectos significativos, se observó consistencia en los registros y se cumplió con las disposiciones legales para el registro de las operaciones, lo cual permitió el control presupuestario y la integración de la información.

No obstante, en las revisiones efectuadas por la ASF a dicha Cuenta Pública, se detectaron algunas inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades fiscalizadas, siendo las más importantes las referentes a la base de registro, la revelación suficiente y el cumplimiento de disposiciones legales.

En el primer caso, se registraron extemporáneamente gastos devengados o ingresos recibidos; en el segundo, en los estados financieros no se incluyó toda la información aclaratoria de varias operaciones efectuadas; y en el último caso, ciertas operaciones y su consecuente registro no se apegaron a todas las disposiciones que establecen las leyes y reglamentos aplicables.

Por sector de la Administración Pública Federal, los que registraron mayor número de inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental fueron: el Sector Energía; Hacienda y Crédito Público; Educación; Comunicaciones y Transportes; las

Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente; y el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

La ASF tiene el mandato de reportar en su Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública lo relativo al nivel de cumplimiento de los ordenamientos legales normativos aplicables, lo anterior con la finalidad de verificar si las operaciones realizadas y registradas en la contabilidad se ajustaron a los mismos.

La ASF reportó que en lo general se observaron satisfactoriamente los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas. No obstante, la ASF reporta que se incumplieron 314 ordenamientos diversos, mismos que a continuación se detallan:



Ordenamientos Jurídicos:

- 1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- 2) Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001.
- 3) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001.
- 4) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
- 5) Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
- 6) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 7) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- 8) Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- 9) Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- 10) Ley de Coordinación Fiscal.
- 11) Ley de Planeación.
- 12) Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
- 13) Otras Disposiciones.

(*) Incluye los Órganos Desconcentrados del ISSSTE (FOVISSSTE y SITyF).

Las normas que presentaron mayor incumplimiento fueron: Otras Disposiciones de Carácter Específico con un total de 92, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con 34, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (antes Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal) y su Reglamento con 82 incumplimientos, entre otras.

En lo relativo a los Poderes, Sectores y Ramos, destacan por su incumplimiento el sector energía con 58, el ramo general 33 con 42, el sector Hacienda y Crédito Público con 30, el sector Comunicaciones y Transportes con 30 y el sector Educación Pública con 27 faltas respectivamente.

IV. PRINCIPALES AUDITORÍAS REALIZADAS – RESULTADOS

A. Sector Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Evaluación del Ejercicio del Sector Público Presupuestario en el Ejercicio 2002

Objetivo: Comprobar si las principales variaciones que se registraron en el gasto programable (corriente y de capital) y en el gasto no programable del Sector Público Presupuestario en 2002, así como las adecuaciones presupuestarias, se realizaron de conformidad con la normatividad establecida.

Dictamen: En 2002, el Sector Público Presupuestario registró un déficit mayor que el aprobado por el H. Congreso de la Unión en 0.71 puntos porcentuales del PIB, con motivo de los menores ingresos presupuestarios y por el significativo incremento del gasto neto, derivado de la liquidación de BANRURAL y la creación de la Financiera Rural. Sin considerar esto último, el monto del déficit presupuestario habría sido inferior en 13.0% en relación con lo estimado.

Las dependencias Trabajo y Previsión Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales registraron economías en programas financiados con crédito externo, debido a que la SHCP les congeló parte de los recursos disponibles porque hasta el mes de septiembre no habían ejercido una suma importante de éstos, lo cual afectó principalmente a los Programas de Apoyo a la Capacitación y el Empleo (PACE) y de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA), respectivamente.

Las entidades Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejercieron recursos presupuestarios no autorizados.

En general, sin considerar la liquidación de BANRURAL y la creación de la Financiera Rural, el gasto neto del Sector Público Presupuestario registró un subejercicio, debido a las economías que registraron las dependencias y entidades de control presupuestario directo. Una de las causas que dieron origen al subejercicio fue la inadecuada programación de los recursos por parte de la SHCP, debido a que no contaba con un mecanismo de control en la programación presupuestaria que permitiera detectar los recursos autorizados no ejercidos, y que éstos a su vez se pudieran reasignar a programas prioritarios.

En este sentido, se concluye que en 2002 hubo un subejercicio en el gasto neto programable del Sector Público Presupuestario de 13,827.9 millones de pesos, explicado principalmente

por las economías presupuestarias derivadas en 39% por medidas de disciplina y ahorro presupuestario, 36% por causas imputables a terceros (proveedores y contratistas) y 25% a una inadecuada programación.

Las dependencias y/o entidades que registraron sobrejercicio fueron: CFE con 2 mil 895.2 millones de pesos, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) con 371.6 millones de pesos, Procuraduría General de la República (PGR) con 97.9 millones de pesos y Lotería Nacional (LOTENAL) con 17.9 millones de pesos; mientras que los ramos, entidades y/o dependencias que mostraron mayores subejercicios fueron: Provisiones Salariales y Económicas con 6 mil 504.2 millones de pesos, PEMEX con 3 mil 864.2 millones de pesos, Educación Pública 860.2 millones de pesos, y SHCP con 842.6 millones de pesos. Lo anterior se puede apreciar en la tabla que a continuación se detalla:



Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Auditoría de Regularidad al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8

Objetivo: Verificar que en el ejercicio de 2002 los ingresos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), así como los depositados en el Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento aduanero, se hubiesen enterado a la Tesorería de la Federación y se registraron y presentaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de acuerdo con la normativa en la materia.

Muestra Auditada: 476,261.2 miles de pesos

Dictamen: En mayo de 1993, la SHCP constituyó en Nacional Financiera, S.N.C. el Fideicomiso núm. 954-8, conocido como Aduanas 1, con una aportación inicial de 200.5 millones de pesos. En junio de 1993, el Fideicomiso constituyó la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA), para realizar los servicios de procesamiento electrónico de datos de la SHCP y del SAT; por la fecha de su constitución, ésta no cumplió con los cinco años de experiencia previstos en la Ley Aduanera.

La SHCP y el SAT a través del Fideicomiso le estuvieron pagando a ISOSA por los servicios que les prestó, sin que existiera instrumento jurídico alguno en el que se definiera la calidad, cantidad y precio de los mismos. Ambas entidades sostuvieron que ISOSA es una empresa privada, aún y cuando ésta tenía características de una empresa de participación estatal mayoritaria, ya que NAFIN poseía el 99.99% de sus acciones. Asimismo, manifestaron que el Fideicomiso era privado, aunque estuvo inscrito desde 1997 como fideicomiso público con la clave 7000106300153 en el Registro de Mandatos y Fideicomisos de la Administración Pública Federal, habiéndose dado de baja en julio de 2003. En el contrato de Fideicomiso Aduanas 1, la SHCP y el SAT aparecen en su oportunidad cada uno, como fideicomitentes y fideicomisarios.

En opinión de la ASF, no son transparentes la captación y aplicación de los ingresos provenientes del DTA, ya que éstos se canalizaron al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero. El SAT inusualmente registró 194.0 millones de pesos como devoluciones del DTA sin justificación.

Se determinó que el SAT no atiende el Área Estratégica denominada "Rendición de Cuentas", ya que **con la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se pudo evaluar y comprobar mediante los resultados de la auditoría practicada, que no se enteraron a la TESOFE 2,002,493.1 miles de pesos de los ingresos provenientes del DTA, ya que se canalizaron al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 1078-5 (actualmente Fideicomiso núm. 954-8), para el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control de despacho aduanero.**

Impacto de las Observaciones

No se enteraron recursos a la TESOFE

Importe: 2,002,493.1 miles de pesos

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB): Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)

Auditoría Especial a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca

Objetivo: Comprobar que los apoyos financieros que otorgó el Gobierno Federal al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en el ejercicio fiscal de 2002, por 28,493.6 millones de pesos para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se ejercieron y registraron conforme a la normativa.

Muestra Auditada: 28,493.6 millones de pesos.

Dictamen: Los programas cumplieron con el objetivo social para el que fueron creados; sin embargo, en su instrumentación, se careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la toma de decisiones, falta de transparencia en algunas operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los mismos.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS)

Cuentas de Balance-Pasivo, "Colocación de Pagarés de Indemnización Carretera"

Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC)

Objetivo: Verificar que BANOBRAS fiduciario del FARAC reportara los recursos de las colocaciones de los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC's) en los Estados Financieros del FARAC y que los avales otorgados por el Gobierno Federal, a dichas colocaciones, se reflejaran en la Cuenta Pública del ejercicio 2002 de conformidad con la normatividad aplicable.

Muestra Auditada: 48,821,465.2 miles de pesos

Dictamen: La ASF recomendó que la SHCP revelara en la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal los pasivos del FARAC, avalados y garantizados por el Gobierno Federal.

El FARAC careció de bases contables razonables y de formulación de estados financieros, las cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico.

Asimismo, el FARAC no reconoció en el activo los derechos de las concesiones fideicomitadas, de los tramos carreteros y vías generales de comunicación otorgadas por el Gobierno Federal entre 1997 y 2002, y reconoció el valor de 23 indemnizaciones y 4 concesiones desincorporadas de CAPUFE y pagadas a la SHCP como una cuenta por cobrar al Gobierno Federal; además, no contó con el debido reconocimiento de la SHCP de tal adeudo, para registrarlo como adeudo gubernamental. Los déficits acumulados se registraron como cuentas por cobrar y se deben transferir a un rubro de activo diferido, de acuerdo con bases contables razonables y de formulación de estados financieros, que deberá sancionar y emitir su Comité Técnico.

Adicionalmente, el Gobierno Federal otorgó al FARAC 10 tramos carreteros para mejorar su perfil financiero, sin que mediara pago alguno. Cabe señalar que dichos tramos no fueron valuados o reflejados en el activo como concesiones ni en el patrimonio del fideicomiso como aportación. Los ingresos de los 37 tramos concesionados y que se encontraban en operación se registraron en el rubro de "Ingresos por cuotas de peaje".

Impacto de las Observaciones

Se sugirió que revelaran en la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal los avales gubernamentales a los pasivos del FARAC por 143,442,180.0 miles de pesos y que el valor de las 10 concesiones aportadas por el Gobierno Federal hasta el año 2002, de los que el FARAC no efectuó pago alguno, se reconocieran en el activo con su correspondiente efecto en el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con las bases contables razonables y de formulación de estados financieros sancionadas y emitidas por el Comité Técnico del FARAC.

B. Sector MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Evaluación de las Acciones Realizadas por la CONAFOR para Desarrollar y Conservar los Recursos Forestales

Objetivo: Comprobar que el desempeño de la CONAFOR, relativo a las acciones realizadas para el desarrollo y conservación de los recursos forestales, se efectuó en los términos de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las metas programadas y en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados en 2002.

Dictamen: Con la revisión practicada, se determinó que la CONAFOR no cumplió satisfactoriamente con su objetivo de detener y revertir la deforestación que se tiene en el país, ni implementó acciones efectivas de corrección, ya que únicamente reforestó 165.3 miles de hectáreas mientras que se destruyeron 600.0 miles de hectáreas por año. Al inicio de sus actividades incurrió en deficiencias en la operación y control de los programas Nacional de Reforestación y de Desarrollo Forestal, ya que el número de árboles plantados en 2002 ascendió a 202.7 millones de árboles plantados, cifra inferior a los 250.8 millones de árboles plantados que reportó en la Cuenta Pública; además en el Programa de Desarrollo Forestal para el que se asignaron 332,788.2 miles de pesos, en el año de análisis únicamente operó 94,273.1 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de asignación 238,151.1 miles de pesos y tenía cantidades pendientes de pago a partir de 1999. Por lo anterior, se sugirió a la CONAFOR impulsar la calidad de su gestión, mediante el establecimiento de sistemas de control y de información eficaces que evitaran actos indebidos y se tuvieran confiabilidad en sus registros, para garantizar su operación.

C. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

Evaluación del Programa de Inspección y Verificación de los Concesionarios y Permissionarios

Objetivo: Evaluar el desempeño de la COFETEL en su Programa de Inspección y Verificación de los Concesionarios y Permissionarios en términos del objetivo relativo a vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, permisos y constancias, a fin de prestar servicios de telecomunicaciones con calidad y conforme a las tarifas establecidas, en beneficio de los usuarios; asimismo, analizar la eficacia con que se cumplieron las metas operativas; la eficiencia con que se aplicaron los recursos presupuestarios asignados; la situación presupuestaria de la entidad fiscalizada; así como la productividad laboral del personal en las acciones de monitoreo e inspección.

Dictamen: La entidad fiscalizada no dispuso de una base de datos sistematizada que permitiera la evaluación integral del padrón de concesiones, permisos y constancias otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Respecto del Registro de Telecomunicaciones, que constituye una de las atribuciones de ese órgano desconcentrado, se determinó que al término de 2002 se habían inscrito en dicho Registro 1,124 de los 4,752 documentos expedidos, lo que representó un índice de integración del 23.6%.

La COFETEL no contó con la cuantificación del número de prestadores que cumplieron con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, permisos y constancias, porque no dispuso de un sistema de control que le permitiera obtener esta información y la cobertura de revisión de expedientes respecto del padrón fue variable, toda vez que pasó del 0.9% en 1998 a 12.2% en 2002, lo cual denotó la falta de un estándar anual de verificación representativo en función de los padrones correspondientes.

En cuanto al monitoreo del espectro radioeléctrico, se precisó que la infraestructura utilizada por la COFETEL para detectar posibles irregularidades en la operación de los servicios de telecomunicaciones presentaba obsolescencia; además, la mayor parte de las estaciones de monitoreo de los Centros SCT se encontraba en malas condiciones, lo que limitó cumplir con las metas previstas de monitoreo.

Con las visitas de inspección efectuadas en los años 2001 y 2002, la COFETEL detectó en promedio 35 operadores ilegales. Con base en esta información, la ASF estimó que en esos años existieron 1,562 operadores que no contaban con la autorización para prestar servicios de telecomunicaciones, por lo que la prestación de los servicios no se realizó conforme a la legislación aplicable en la materia.

De las 1,409 propuestas de sanción que derivaron de las visitas de inspección realizadas en conjunto por la COFETEL y los Centros SCT, 1,086, que representaron el 77.1%, se encontraban en proceso de revisión en la SCT; en 305 casos, el 21.6%, no se aplicaron las sanciones por falta de elementos; y en 18 casos, el 1.3%, se aplicaron sanciones. El rezago en la revisión y dictaminación de propuestas de sanción, por parte de esa dependencia, provocó la falta oportuna de aplicación de sanciones para corregir las irregularidades.

Como resultado de la evaluación de los parámetros de calidad de los servicios de telecomunicaciones, se determinó que la COFETEL únicamente estableció este tipo de indicadores para el servicio de telefonía fija y celular, no obstante, en estos casos el número de parámetros era muy limitado en comparación con los utilizados por los países miembros de la OCDE, lo que impidió una evaluación completa de la calidad de estos servicios. Para el resto de los servicios, ese órgano no contempló ningún plan de calidad durante el periodo analizado.

Por lo que se refiere a la evaluación de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, se precisó que la COFETEL no registró con oportunidad las solicitudes presentadas por los prestadores de los servicios para este trámite; no realizó estudios sobre la evolución tarifaria para todos los servicios; y los precios que se aplican en México para la prestación de los servicios de telefonía fija y celular resultaron ser los más caros en comparación con algunos países de la OCDE y en relación con socios comerciales.

Respecto de la productividad laboral, se observó que la distribución del personal técnico e inspector tanto de la COFETEL como de los Centros SCT no fue equilibrada para llevar a cabo las mediciones de monitoreo y las visitas de inspección en el ámbito nacional.

D. SECTOR TURISMO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)

Evaluación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica

Objetivo: Evaluar el desempeño del FONATUR en el cumplimiento del objetivo del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica, relativo a desarrollar, consolidar y mantener los cinco Centros Integralmente Planeados (CIP) de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco para ser competitivos en el ámbito nacional e internacional, promuevan el desarrollo regional, e impulsen la inversión; se determinó si el FONATUR contaba con los programas, criterios, mecanismos y plazos específicos para concluir el desarrollo y consolidación de los CIP, así como para la transferencia de estos centros a los municipios correspondientes; asimismo, se analizó la eficacia con que se cumplieron las metas; la eficiencia con que se aplicaron los recursos presupuestarios asignados; la situación presupuestaria del programa; así como la inversión realizada por el Fondo en los desarrollos turísticos.

Dictamen: El FONATUR no concluyó el desarrollo de ningún CIP a pesar de los avances registrados; no contó con una programación de corto y mediano plazo que le permitiera evaluar el grado de cumplimiento de los planes y no definió las estrategias y acciones concretas para concluir con el desarrollo de los centros turísticos. Asimismo, se observó un estancamiento generalizado en las obras de urbanización y de equipamiento turístico y no precisó los criterios para efectuar su entrega a los municipios donde se ubican dichos centros.

En cuanto a la consolidación de centros turísticos, los indicadores mostraron que en general los CIP mantienen un liderazgo en la oferta de alojamiento, turistas, estadía, empleos generados e índice de marginación en el ámbito nacional.

El FONATUR no contó con las metas de los indicadores turísticos y de desarrollo regional que pretendía alcanzar para concluir su participación en los CIP conforme a los planes maestros establecidos para el efecto.

Durante 2002, el FONATUR canalizó un monto de 603.7 millones de pesos para la operación de la infraestructura turística y la prestación de los servicios públicos de los CIP, lo que representó el 32.6% de la inversión total de 1,853.4 millones de pesos efectuada en el periodo 2000-2002, lo anterior permitió mantener en condiciones de operación la infraestructura y equipamiento urbano y turístico de los CIP.

Se observó que el organismo no cuenta con un programa específico donde se indiquen las fechas de inicio y término de las acciones que sería necesario realizar para iniciar la transferencia de los servicios públicos a los diferentes municipios donde se ubican los CIP, y no formalizó los instrumentos jurídicos que amparaban la legalidad de sus actuaciones.

E. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Evaluación de las Acciones Realizadas para la Atención de Alumnos en Educación Secundaria en el Marco del Subprograma Sectorial de Educación Básica

Objetivo: Evaluar el desempeño de la atención de alumnos en el nivel secundaria del Subprograma Sectorial de Educación Básica que realizó el Ejecutivo Federal durante el periodo 2000-2002, en términos de la congruencia de las acciones realizadas con la normatividad aplicable, las prioridades nacional y sectorial, y con la estructura programática; la eficacia con que se cumplió el objetivo de ampliar la cobertura y la equidad en la generación de oportunidades de acceso de jóvenes de 12 a 15 años de edad; el mejoramiento de la calidad de la enseñanza mediante el análisis de los contenidos temáticos de los planes y programas de estudio, libros de texto y de apoyo a la labor docente, así como de los cursos de formación, actualización y capacitación; el logro educativo de los estudiantes medido con los índices de absorción, reprobación, deserción y la eficiencia terminal; y la eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto.

Muestra Auditada: 33,256,588.2 miles de pesos

Dictamen: En la revisión practicada a la atención de alumnos en educación secundaria del Subprograma Sectorial de Educación Básica, se observó que la SEP no cuenta con metas de mediano plazo respecto de la cobertura de la demanda potencial.

Asimismo, se detectó que la SEP, como resultado de su interpretación a la normativa en ese momento, cumplió parcialmente sus facultades para requerir a las entidades federativas la información financiera y operativa de la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por entidad y nivel educativo, en consecuencia la entidad fiscalizada no realizó un ejercicio integral de evaluación del costo beneficio de la atención de alumnos. Estas situaciones reflejaron la debilidad del sistema de indicadores y limitaron la evaluación respecto del cumplimiento de su objeto social.

Se sugirió a la SEP instrumentar las acciones correspondientes para que los estados que recibieron recursos del FAEB proporcionaran la información financiera y operativa, a fin de evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos; asimismo, que realizara actividades para reforzar el control y la supervisión de la prestación del servicio, a fin de garantizar el acceso a la población demandante, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el programa sectorial de mediano plazo y los propósitos curriculares definidos en el plan y los programas de estudio.

F. SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Evaluación del Proyecto I002 "Instrumentar Programas para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" (PDPCI)

Objetivo: Evaluar el desempeño del PDPCI en términos de la congruencia del objetivo del proyecto con el mandato constitucional en materia indígena y los lineamientos establecidos en los documentos normativos de mediano y corto plazo; la eficacia en la cobertura geográfica y de atención a los beneficiarios; la eficacia en la operación del proyecto, por lo que toca a la promoción y divulgación de las acciones, la atención de la demanda, el cumplimiento de los requisitos para acceder a los proyectos, la evaluación y validación de los proyectos, el monto de los apoyos otorgados, el seguimiento físico-financiero de éstos y la entrega-recepción de las obras de infraestructura; la eficacia en el cumplimiento del objetivo del proyecto, que impulsara el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la generación de proyectos de infraestructura, de alcance regional, detonadores de su desarrollo, así como productivos que respondieran a sus demandas e impactaran significativamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida, con pleno respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos; y la eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros asignados al proyecto.

Dictamen: Los resultados de la auditoría practicada al PDPCI revelaron que las reglas de operación fueron diseñadas en forma adecuada para promover la ejecución de las acciones con prácticas sanas en beneficio de la población indígena; y que se establecieron metas de mediano plazo para mostrar el avance respecto de los compromisos asumidos por el gobierno federal.

También, mostró que era necesario crear indicadores estratégicos para valorar el cumplimiento de los objetivos del programa y favorecer una administración por resultados; así como reforzar los mecanismos de control y supervisión de las acciones realizadas que permitieran la detección oportuna de irregularidades y desviaciones y fomentaran la cultura de la rendición de cuentas en forma clara y transparente, por parte de los operadores del programa.

Asimismo, evidenció que resultaba indispensable que los ejecutores contaran con toda la documentación e información que comprobara y justificara sus operaciones, a efecto de observar el cumplimiento de las reglas de operación del PDPCI y los Lineamientos Específicos para el ejercicio de los Programas de Desarrollo Social y Humano; así como de promover las mejores prácticas gubernamentales con observancia a las disposiciones jurídicas aplicables.

Evaluación del Proyecto P010 "Instrumentar Programas de Dotación de Infraestructura y Equipamiento Básico en Regiones de Alta Marginación" (Programa de Microrregiones)

Objetivo: Evaluar el desempeño del programa de microrregiones, en términos de la congruencia de sus objetivos con los instrumentos de planeación de mediano y corto plazo; la eficacia con que la dependencia cumplió el propósito de promover el desarrollo integral y sustentable de los espacios territoriales con los índices más altos de marginación del país; la eficacia en la cobertura de atención de las localidades ubicadas en dichos espacios, y en la operación del programa; y la eficiencia con que se aplicaron los recursos presupuestarios para el efecto.

Dictamen: La auditoría reveló que, para el programa de microrregiones, la SEDESOL no estableció indicadores estratégicos, ni metas anuales en función de sus compromisos de mediano plazo, ni contó con un sistema de información que permitiera medir el cumplimiento de sus objetivos, establecer una administración por resultados, garantizar un adecuado control y supervisión y disponer de información para la toma de decisiones; también que, a un año de su inicio, las reglas de operación del programa debían ser revisadas, a efecto de que fueran interpretadas de manera objetiva y se propiciara la rendición de cuentas clara y transparente.

Asimismo, mostró que esta Secretaría careció de un sistema de información consolidado de la participación de otras dependencias federales, de los gobiernos estatal y municipal y de los sectores social y privado en el financiamiento de las obras, acciones y proyectos productivos del programa, que garantizara el control, la supervisión y la toma de decisiones.

Instituto Nacional Indigenista (INI)

Evaluación al Instituto Nacional Indigenista en los Fondos Regionales para el Desarrollo Económico y Productivo de los Pueblos Indígenas

Objetivo: Evaluar el desempeño del INI en la operación de los Fondos Regionales para el Desarrollo Económico y Productivo de los Pueblos Indígenas durante el periodo 2000-2002, en términos de la congruencia de su objetivo con el mandato constitucional en materia indígena y con los lineamientos establecidos en los documentos normativos de planeación de mediano y corto plazo; la eficacia en la cobertura geográfica y de beneficiarios; la eficacia en la operación de los fondos, por lo que toca al funcionamiento de los mismos, la atención a las comunidades, grupos y organizaciones indígenas, el desarrollo de los proyectos productivos y la ejecución de las actividades de supervisión, seguimiento y control en la operación de los Fondos Regionales y los proyectos productivos; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de los fondos, de brindar apoyo financiero a proyectos productivos viables y recuperables de las comunidades, grupos y organizaciones indígenas para incrementar su infraestructura productiva y su capital de trabajo, fortalecer sus procesos de organización y consolidar mecanismos financieros de carácter social; la percepción que tienen los productores beneficiarios acerca de los apoyos otorgados mediante los Fondos Regionales; y la eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto.

Dictamen: Se observó que el Instituto carecía de información sobre la meta de mediano plazo que debía cubrir la entidad al término de la administración, y de los indicadores estratégicos que le permitieran medir el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, los objetivos, cobertura e impacto socioeconómico del programa.

En la operación de los fondos, se sugirió reforzar los mecanismos de control y supervisión en los Centros Coordinadores Indigenistas para que se dispusiera de la documentación que sustentara la asignación, aplicación y recuperación de los recursos fiscales autorizados a

cada uno de los fondos, con el propósito de que se impulsara la calidad de la gestión pública.

En el marco de la rendición de cuentas, se sugirió que la entidad vigilara el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos que regían la operación de los Fondos Regionales, en favor de los grupos y organizaciones indígenas beneficiarias.

Impacto de las Observaciones:

Se presumió un probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 380.0 miles de pesos, por concepto de la entrega de recursos federales en 2002 a las organizaciones indígenas "Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, A.C." y "Agrupación Mazahua Las Torres", en el Distrito Federal, que no estaban afiliadas a los Fondos Regionales.

G. SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Egresos Presupuestales del Concepto 4100 "Subsidios", Proyecto P005 "Programa de Empleo Temporal en Zonas Cafetaleras" (PETZC)

Objetivo: Verificar que el presupuesto asignado en 2002 al proyecto P005 "Programa de Empleo Temporal en Zonas Cafetaleras" en el concepto 4100 "Subsidios" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 38,672.4 miles de pesos

Dictamen: Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que no se atendió el área estratégica "Rendición de Cuentas", ya que fue necesaria la intervención de esta entidad de fiscalización superior de la Federación para que se determinaran deficiencias en la programación y ejercicio de los recursos del PETZC, en específico en el estado de Oaxaca y se realizara el entero de los impuestos no retenidos en el pago de honorarios.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Impacto económico por 516.9 miles de pesos al no reintegrarse los recursos.

Egresos Presupuestales del Concepto 4100 "Subsidios", Proyecto P006 "Fondo de Estabilización Cafetalero"

Objetivo: Verificar que el presupuesto asignado al Proyecto P006 "Fondo de Estabilización Cafetalero" en el Concepto 4100 "Subsidios", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 1,439,496.0 miles de pesos

Dictamen: Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que no había una clara rendición de cuentas, asimismo, se identificaron deficiencias en la ejecución, operación, seguimiento y control de los recursos del Fondo de Estabilización Cafetalero, ya que no realizó un estudio para garantizar que el designar al Consejo Mexicano del Café A.C. como agente técnico fuese el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que pretendía la SAGARPA, ya que tuvieron que intervenir tanto el órgano administrativo desconcentrado de dicha dependencia denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), como los consejos estatales. Además, se detectaron deficiencias administrativas y financieras; y no contaba con un procedimiento que garantizara el control de los recursos ni mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitieran ajustar las modalidades de superación o decidir sobre su terminación.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Impacto económico por 894,832.6 miles de pesos ocasionado por no otorgar los apoyos a los cafeticultores durante el ejercicio de 2002; 28,912.9 miles de pesos correspondientes a pagos de gastos financieros con recursos destinados para otorgar apoyos a los cafeticultores, pagos duplicados y en exceso, cheques extraviados, gastos de operación superiores a lo autorizado y efectuados antes de la publicación de las reglas de operación y de la suscripción del Convenio de Concertación, bienes no recibidos, falta de documentación comprobatoria y destinar recursos para fines distintos a lo autorizado; así como por 1516.7 miles de pesos por adquirir formatos que no serán utilizados y 356.6 miles de pesos del pago de recargos y actualización por omitir el pago de impuestos oportunamente.

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA)

Evaluación de la Operación del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero

Objetivo: Comprobar que la operación del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y la administración de los 27 ingenios azucareros expropiados se ajustaron a la normativa; que las transferencias de recursos fiscales al FEESA en 2002 por 1,000,000.0 miles de pesos para la operación de los 27 ingenios azucareros expropiados y los ingresos generados por los mismos con motivo de la comercialización del azúcar producida y los subproductos se ejercieron, controlaron y registraron de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

Muestra Auditada: 1,415,232.0 miles de pesos

Dictamen: Con la revisión de la operación del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, se determinaron diversos incumplimientos e irregularidades en lo siguiente: en la autorización de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FEESA; en los manuales de organización y de procedimientos; en el registro contable y control de los recursos fiscales transferidos al FEESA y de los ministrados a los ingenios azucareros; en el control de los recursos depositados por los ingenios en la cuenta concentradora; en la documentación justificativa y comprobatoria en las pólizas de registro contable; y en las adquisiciones realizadas por los ingenios en 2002.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 15,346.4 miles de pesos.

H. SECTOR ENERGÍA

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

PEMEX Exploración y Producción

Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", Proyecto K046 Registro Cantarell en los Estados de Tabasco y Campeche

Objetivo: Comprobar que los servicios se contrataron y ejecutaron de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los contratos respectivos; que el gasto se ajustó a las asignaciones presupuestarias autorizadas; que las adquisiciones se efectuaron conforme al proyecto respectivo y las normas generales y específicas aplicables.

Muestra Auditada: 70,091.6 miles de pesos y 12,416.0 miles de dólares.

Dictamen: De la comprobación de lo planteado en el objetivo, se constató que los servicios se contrataron y efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables y que se realizaron de acuerdo con las especificaciones generales y particulares señaladas en los contratos.

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada realizó sobre costos de conservación y extensión de garantía de equipos por 28,441.7 miles de dólares por no cumplir con el objeto de funcionalidad y operabilidad en la fecha en la que estaba destinado desde su recepción en el almacén, y de 67,284.0 miles de dólares debido a que su compra se considera una inversión ociosa, ya que no estaba operando a la fecha.

Impacto de las Observaciones

Pago de un sobrecosto por 28,441.6 miles de dólares por conservación de equipos en espera en el almacén para su instalación costa fuera y pago del concepto de extensión de garantía, y un monto de 67,284.0 miles de dólares por inversión ociosa.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La finalidad de toda política pública enfocada al desarrollo social debe de ser el promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los apoyos para la población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional. Sin embargo, el informe que entregó la ASF respecto de la Cuenta Pública 2002, presenta observaciones en la programación y ejecución del gasto público, la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales, entre otros.

Asimismo, se destaca que el presupuesto del gasto corriente del Sector Público pasó de 778 mil 193.6 millones de pesos en 2001 a 874 mil 308.0 millones de pesos en 2002, es decir, se presentó un incremento de 96 mil 114.4 millones de pesos, lo que representó una variación real de 6.3%. Dicho resultado se integra por aumentos de 9% en pensiones, 21.6% en subsidios y transferencias a las entidades federativas y municipios, así como por 3.5% por las erogaciones por servicios personales, materiales y suministros, así como los servicios generales.

El gasto corriente ejercido en 2002 del sector público presupuestario resultó 0.5% menor al aprobado de 879 mil 001.0 millones de pesos.

Se observó que en el 2002, el presupuesto destinado al gasto corriente del Sector Público Presupuestario representó el 85% del gasto programable y, en particular, la Administración Pública Centralizada presentó un incremento real del 4.1% con respecto a 2001 en los capítulos de servicios personales; materiales y suministros, así como en los servicios generales, siendo que el 61.6% de dicho incremento se vio reflejado en el capítulo de servicios personales.

En 2002, el presupuesto ejercido por la Administración Pública Centralizada en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales resultó 9.5% menor al aprobado.

El Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2002 establece que los programas a cargo de la SEDESOL y del INI, como lo son, el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Programa de Microrregiones y los Fondos Regionales para el Desarrollo Económico y Productivo de los Pueblos Indígenas, carecieron de indicadores estratégicos, metas y sistemas de medición de objetivos a mediano plazo.

Asimismo, en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2002 se observan dificultades, en términos de transparencia, en la transferencia de recursos a las delegaciones, entidades federativas y municipios, debido principalmente a la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos y a la falta de elementos técnicos para priorizar el gasto

público por parte de estos últimos. En ese sentido, se debe reforzar la transparencia y rendición de cuentas en aquellos estados y municipios en los que se ha identificado opacidad y riesgo de desvío de recursos. En 2002, esto se observó en el sector educativo, ya que los estados y municipios beneficiarios del FAEB no proporcionaron información financiera y operativa que permitiera evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos; en el Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica, dependiente del FONATUR, no se formalizaron los instrumentos jurídicos correspondientes para transferir las responsabilidades a los municipios sobre el mantenimiento de los centros turísticos; en el Programa de Microrregiones a cargo de SEDESOL debió promoverse una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado para el financiamiento de obras, acciones y proyectos productivos.

De acuerdo a la información provista por la ASF, sin considerar la liquidación de BANRURAL y la creación de Financiera Rural, el gasto neto del sector público presupuestario registró un subejercicio, el cual se debió a la inadecuada programación de los recursos por parte de la SHCP, puesto que no contaba con un mecanismo de control en la programación presupuestaria que permitiera detectar los recursos autorizados no ejercidos, y que éstos a su vez se pudieran reasignar a programas prioritarios.

Durante 2002, se observó que en los sectores de Hacienda y Crédito Público; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los Fondos y Fideicomisos tales como Aduanas 1, FOBAPROA, Fondo de Estabilización Cafetalero y FEESA carecieron de políticas, procedimientos y reglas de operación que transparentaran las operaciones de los mismos; además, en el sector de comunicaciones y transportes, se destacó la carencia de avales gubernamentales en los pasivos correspondientes al FARAC.

Los temas de seguimiento y evaluación, de acuerdo a los resultados de la Cuenta Pública 2002 y como se mencionó anteriormente, siguen figurando dentro de las observaciones más destacadas por la ASF. Dentro de la revisión de prácticamente todos los sectores, la ASF incluye varias recomendaciones relacionadas con la imposibilidad de evaluar y dar seguimiento oportuno a los programas que implementa el Gobierno Federal, lo cual impide medir la efectividad de los mismos respecto a los objetivos que para cada uno de estos programas se han planteado. Este es el problema que de manera más urgente se debe solventar para poder alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción XXVIII, y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 65, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2002 fue recibida por la H. Cámara de Diputados en tiempo y forma, el 10 de junio del

2003, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el 2002.

SEGUNDO.- En uso de las facultades previstas en el primer y cuarto párrafos de la fracción IV, del referido Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable en el año 2002, la Cámara de Diputados procedió a revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002.

TERCERO.- Del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y de acuerdo con lo que establece el artículo 31, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente en el año 2002, se detectaron algunas inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades fiscalizadas, siendo las más importantes las referentes a la Base de Registro, la Revelación Suficiente y el Cumplimiento de Disposiciones Legales. Los sectores y ramos que registraron en 2002 un mayor número de inobservancias a estos Principios fueron: Energía; Hacienda y Crédito Público; Educación; Comunicaciones y Transportes; las Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente; y el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por consiguiente, considerando que este tipo de inconsistencias generan distorsiones en el alcance y evaluación de las políticas públicas, se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a que informe a esta Soberanía si estas instancias han fortalecido sus procesos de Contabilidad Gubernamental.

CUARTO.- En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 se indica que los sectores: Energía, Ramo General 33, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, presentaron el mayor número de incumplimiento de los ordenamientos legales y normativos; por ello, se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a que revise si estas entidades fiscalizadas han mejorado sus mecanismos y/o procedimientos de ejecución del gasto y, en su caso, la captación del ingreso, con el fin de observar estrictamente el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas.

QUINTO.- Como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2002, la Auditoría Superior de la Federación practicó 336 auditorías, por virtud de las cuales se determinaron resultados que generaron 2,584 observaciones, de las que a su vez derivaron 3,410 acciones. Los ramos generales y sectores a los que les fueron formulados un mayor número de observaciones fueron: Ramo General 33, sectores de Energía, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente. Por ente auditado destacan con más observaciones: la Secretaría de Educación Pública, PEMEX Refinación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad. La Cámara de Diputados considera la importancia de estos ramos y sectores, por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos, se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a informar a esta Soberanía sobre el proceso de solventación de estas observaciones, participándole de las acciones que ha realizado el Ejecutivo Federal al respecto y del fincamiento de responsabilidades a que haya procedido.

SEXTO.- Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que informe sobre las acciones que se han realizado para garantizar un transparente ejercicio de los recursos públicos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios para estos últimos los apliquen vía Ramo 33, así como para eficientar la rendición de cuentas de dichos recursos.

SÉPTIMO.- Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que con base en las atribuciones que la Ley le concede, revise los objetivos, indicadores, metas y reglas de operación de aquellos programas sociales que continúan vigentes para verificar su efectividad y eficiencia actuales.

OCTAVO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que continúe implementando medidas que disminuyan el gasto corriente del Gobierno Federal, a fin de obtener recursos que puedan ser destinados a programas que beneficien a la sociedad.

NOVENO.- Se recomienda al Ejecutivo Federal que gire instrucciones a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para que ejerzan el presupuesto aprobado conforme a su programación.

DÉCIMO.- Se solicita al Ejecutivo Federal proporcione información sobre los recursos contenidos en los fondos y fideicomisos públicos vigentes, con anterioridad al ejercicio fiscal 2005.

DÉCIMO PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.

DÉCIMO SEGUNDO.- La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad exclusiva que le otorga el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el año de 2002, instruye a la Auditoría Superior de la Federación, que en términos del primer párrafo del artículo 79 de la propia Constitución goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso de las atribuciones legales que le otorga la mencionada disposición constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación vigente en el año 2002, de seguimiento a las disposiciones de este decreto y, en su caso, para que lleve a cabo los procedimientos que en derecho correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de abril de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en abstención), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub, Fernando Morales

Martínez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther Sherman Leño, Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Armando Ríos Piter, Claudia Anaya Mota (rúbrica en abstención), Emiliano Velázquez Esquivel, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1169, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 57, 60, 63, 88, 93, 94 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente

Metodología

En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

En el capítulo "Contenido de la minuta", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo "Consideraciones", la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados, expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución.

En el capítulo "Observaciones a la minuta", esta dictaminadora considera necesario hacer algunas observaciones con respecto a la Minuta, con el objeto de mejorar la redacción y dar mejor certeza de interpretación a los artículos observados.

Antecedentes

1. Con fecha 4 de abril del 2006, el entonces senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las

Comisiones de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 14 de mayo del 2008, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recibió de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Con fecha 6 de octubre del 2009, el honorable Congreso del Estado de Quintana Roo presentó el acuerdo parlamentario por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, ambos acuerdos fueron turnados por la Presidenta de la Mesa Directiva, a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

3. El 25 de septiembre del 2008, los senadores Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Manuel Velasco Coello y Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, presentaron al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La Presidenta de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

4. En sesión celebrada el 2 de febrero de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, con el que remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, misma que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 1169, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de objeto de la ley; atribuciones de los estados, Distrito Federal y de los municipios; del aprovechamiento y uso de los recursos forestales; del transporte almacenamiento y transformación de las materias primas forestales; sobre las medidas de conservación y restauración forestal; así como de las infracciones aplicables a las nuevas reformas y adiciones.

Como primer punto de la minuta es la modificación al artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece la aplicación supletoria con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La adición a este artículo con un párrafo segundo es la especificación de que los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentren en la categoría de riesgo están bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre, toda vez que este ordenamiento jurídico señala en su artículo

primero que el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables son reguladas por las Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, salvo que se traten de especies o poblaciones en riesgo, las cuales quedan bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre, por lo tanto, en esta norma se establecen los lineamientos de aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas. Para las especies endémicas y de los recursos forestales no maderables se otorgaran las autorizaciones de aprovechamiento con apego a las Normas Oficiales Mexicanas; por ello, esta comisión dictaminadora coincide con el contenido de la Minuta para establecer la excepción y regulación de estas especies en el texto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,¹ quedando en los siguientes términos:

Artículo 6. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quedan excluidas de la regulación de este ordenamiento, los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentran en la categoría de riesgo y que están bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre.

Con la reforma a las fracciones XIV y XV del artículo 13 y la adición de una fracción al artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se regula la supervisión del uso de fuego en terrenos agropecuarios colindantes a terrenos forestales de conformidad con las normas oficiales mexicanas y lo que establezcan los Convenios de Coordinación que señala la misma ley, en materia de coordinación para evitar los incendios forestales.

Por ello, se otorgan en estas reformas y adiciones, facultades a los Municipios para supervisar el uso del fuego en terrenos agropecuarios, actividad primordial del país. Ya que la agricultura, cuyo origen alimentario consiste en la producción de granos considerados estratégicos como el maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, cítricos, hortalizas y muchísimos más productos. Dentro de estas actividades agrícolas de nuestro país, uno de los principales problemas que enfrenta el campo es el *desmonte o desyerbe*, usualmente esta actividad es utilizada para limpiar de maleza las áreas de cultivo, en efecto, muchas zonas agrícolas colindan con terrenos forestales, lo preocupante no es el procedimiento de limpia, lo importante es la correcta aplicación de estos procedimientos que en muchas ocasiones utilizan el fuego para limpiar de maleza, ya que muchas veces el fuego resulta descontrolado y provoca la pérdida de flora y fauna silvestre.

Resulta importante que el ayuntamiento se obligue a velar por la correcta aplicación de métodos de limpia en terrenos no solo agropecuarios, sino también forestales,² de lo descrito, dichos artículos quedan bajo los siguientes términos:

Artículo 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XIII. ...

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, **de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana respectiva;**

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo **y de conformidad con lo que se establezca en los Convenios de Coordinación que para el efecto se firmen con la federación y los municipios;**

XVI. a XXXII. ...

Artículo 15. Corresponde a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XIX. ...

XX. Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos establecidos en esta ley;

XXI. Supervisar el uso de fuego en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales, de conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, y

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

De la reforma a la fracción III del artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se pretende que las comunidades que solicitan el permiso para el aprovechamiento de recursos forestales, presenten copia certificada de los documentos que acredite la propiedad social, así como del Estatuto Comunal debidamente certificados por el Registro Agrario, siendo este, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, encargada del control y registro sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, además de brindar la seguridad jurídica de los documentos que se inscriben en esta dependencia, tal y como se deriva de lo descrito en la Ley Agraria.³

Lo anterior, toda vez que dicha disposición sólo contempla actualmente, que los requisitos que deben cumplir los sujetos agrarios para aprovechar sus recursos forestales maderables de forma colectiva, son con el acta de la asamblea de conformidad con la Ley Agraria, así como de la copia certificada del Reglamento Interno, donde queden definidas las obligaciones, derechos y formas de participación de estos recursos.

Esta propuesta, de presentar la documentación debidamente certificada por el Registro Agrario Nacional, es para acreditar la propiedad social, que se encuentra inmersa en el artículo 10, 56 y demás relativos de la Ley Agraria; también se encuentra regulada la elaboración y aprobación del Reglamento Interno del ejido contemplado en el artículo 23

fracción I, del marco jurídico agrario.⁴ De lo anterior dicha modificación quedará en los siguientes términos.

Artículo 74. Las solicitudes para obtener la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de:

I. a II. ...

III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar **los documentos debidamente certificados por el Registro Agrario Nacional que acredite la propiedad social**, acta de asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento interno o **Estatuto Comunal** en el cual se definan las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos;

IV. a VI. ...

La modificación en el artículo 115 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, fue con el fin y para ser congruentes con el Título del el Capítulo IV, "Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales", y con el artículo 419 del Código Penal, referente a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

Toda vez que, el artículo 115 del ordenamiento jurídico ya citado, solo permitía que los transportistas acreditaran su legal procedencia con la documentación que expida la autoridad competente, dejando el vacío para los almacenistas de materias primas en bodegas. Ya que el artículo 116 solo requiere de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo ciertos requerimientos previstos en el Reglamento de dicho ordenamiento, a los Centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales. La modificación quedará de la siguiente forma:

Artículo 115. Quienes realicen el transporte y **almacenamiento** de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán acreditar su legal procedencia con la documentación que para tal efecto expidan las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto en el reglamento, normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables.

La minuta contempla agregar al artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que refiere que el Ejecutivo federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como

medida de excepción, vedas forestales. Por lo que, esta comisión dictaminadora consideró viable agregar los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales no maderables entre quienes deben ser consultados por el Ejecutivo federal, en ejercicio del derecho de audiencia, antes de que se declare una veda forestal. La modificación quedará de la siguiente forma:

Artículo 128. El Ejecutivo federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, **no maderables** y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I. ... a III.

...

...

...

...

...

Por último, en la minuta con proyecto de decreto se reforma al artículo 163, fracciones XXIV y XXV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Siendo para esta comisión dictaminadora procedente definir la infracción a quien opere un centro de transformación o almacenamiento sin contar con la autorización respectiva.⁵ La modificación quedará en los siguientes términos:

Artículo 163. Son infracciones a lo establecido en esta ley:

I. a XXII. ...

XXIII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello;

XXIV. Operar un centro de transformación o almacenamiento sin la autorización legalmente expedida, y

XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente ley.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora comparte los considerandos del dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, toda vez que son reformas que aportan elementos para tutelar a las especies en peligro, mejoran el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables de forma sustentable, así como la capacidad de atender incendios forestales. Por ello, esta comisión conviene en aprobar en sus términos la minuta.

El aprovechamiento de los Recursos Forestales⁶ se encuentran regulados por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentables⁷ (LGDFS) y se definen como: *La extracción de los recursos forestales maderables y no maderables del medio en que se encuentran*,⁸ a través de un Manejo Forestal, el cual es el proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma, con el propósito de que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales.⁹

Como se describe en el párrafo anterior, es la LGDFS la que tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias, bajo el principio de concurrencia, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Sin embargo, existen recursos forestales que se encuentran en diversas categorías de riesgo, tal y como lo advierte la Ley General de Vida Silvestre (LGVS),¹⁰ y que se encuentran listados en la NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.¹¹

Toda vez, que la LGDFS no hace la referencia explícita acerca de que las especies forestales que se encuentran en categorías de riesgo; y de que éstas se encuentran contempladas bajo la tutela de la LGVS, esta Comisión considera procedente dicha adición para otorgar certeza jurídica.

Un ejemplo de especie no maderable es la planta *chamaedorea*, de la familia palme, género *Chamaedorea*, especie *parvisecta*, nombre común tepejilote chaté, en la categoría A (especies amenazadas), tal y como la maneja la NOM-059-SEMARNAT-2001 (de estas especies encontramos 39 en dicha norma con diferentes nombres común).

Varias especies del género *chamaedorea* son fuente importante de productos no maderables de gran valor económico. Básicamente, de poblaciones naturales de estas palmas se extraen hojas y frutos a través de prácticas que no han sido planeadas para extraer de manera sustentable estos recursos. La economía de las poblaciones rurales del sureste de México y Centroamérica dependen en algún grado de la explotación de palmas *chamaedoreas* (o "chate"), sobre todo cuando el ingreso proveniente de cultivos básicos (por ejemplo, maíz,

frijol, chile) disminuye debido a problemas de mercado o por la falta de incentivos gubernamentales. En la región de la Chinantla, Oaxaca, la sobreexplotación del chate ha provocado que en algunas regiones ocurra una disminución drástica, en ocasiones hasta la extinción local, de poblaciones naturales de especies de chamaedorea. De persistir las actuales formas de manejo, es esperable que aumente el riesgo de extinción de las especies sujetas a explotación.¹²

Los incendios forestales también disminuyen los recursos forestales, contando entre estas pérdidas las especies maderables y no maderables, muchos de los incendios son ocasionados por el descuido de las actividades agrícolas, para controlar estas actividades es necesario que participen todas las entidades gubernamentales, y que se refuercen de técnicas oficiales y aplicables bajo cierta normatividad ambiental. Es así como se amplían las atribuciones de los municipios con la finalidad de supervisar el uso de fuego en terrenos agropecuarios colindantes en terrenos forestales.

Además de estas actividades agropecuarias, encontramos las de aprovechamiento de recursos forestales, que provienen de los bienes que proveen los bosques, selvas y matorrales, el más explotado es la madera de los bosques mixtos de coníferas y latifoliadas. Mientras que los productos forestales no maderables comprenden una importante variedad de productos medicinales, alimenticios, como de materiales para la construcción como son resinas, gomas, tintes, ceras, así como las esencias y los aceites entre otros productos.

Para realizar el aprovechamiento de estas especies, es necesario contar con una autorización, la cual es otorgada después de cumplir con ciertos requisitos. Es así como la legislación mexicana prevé con esta autorización que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se mitigue el impacto ambiental, se protejan las especies amenazadas y se tomen las medidas preventivas contra incendios y plagas forestales.

Para ampliar la seguridad jurídica de los recursos maderables y no maderables, ubicados en terrenos con vocación forestal y agropecuaria en tierras ejidales, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera procedente ampliar los requisitos para obtener la autorización de aprovechamiento de los recursos forestales, por lo que deberán acreditar la propiedad social con los documentos correspondientes y certificados por el Registro Agrario, y así seguimos conservando y/o preservando la masa forestal de México.

Muchos de los permisos son para talar y producir la madera en materias primas, y con esta reforma se pretende ampliar el permiso y/o autorización para el almacenamiento de esta en las bodegas, así se evitará la tala clandestina y se podrán detectar los lugares donde almacenan madera por cantidades no permitidas, por lo que será sancionado a quien no tenga y/o enseñe su permiso.

Lo anterior, es con el fin de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dirija su actividad de vigilancia en todas las actividades forestales, fortaleciéndolas con sus visitas de inspección y auditorías técnicas, por ello efectúa el Programa de Inspección y Vigilancia Forestal, el cual está orientado a la verificación de los aprovechamientos forestales, a los centros de almacenamiento, transformación de los productos y a su

transporte. Y ahora a las bodegas donde se almacenan grandes cantidades de madera conseguida por talas clandestinas.

Observaciones a la minuta

Esta comisión dictaminadora considera necesario hacer algunas observaciones con respecto a la minuta, con el objeto de mejorar la redacción y dar mejor certeza de interpretación a los artículos observados.

Con respecto a la adición de un segundo párrafo del artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la minuta se pretende adicionar un segundo párrafo que a la letra dice:

Quedan excluidas de la regulación de este ordenamiento, los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentran en la categoría de riesgo y que están bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre.

Esta comisión dictaminadora considera conveniente modificar el término "los recursos forestales" por el de "las especies". Esta modificación obedece a que el término correcto para referirse a los recursos en categorías de riesgo es precisamente el de especies y no el de recursos, por lo tanto se adecua al lenguaje utilizado por la Ley General de Vida Silvestre.

De la misma forma se establece en plural "categorías", ya que en la Ley General de Vida Silvestre y en la NOM-059-SEMARNAT-2001, se establecen 4 categorías. Se hace explícita esta posibilidad, de tal forma que se propone la siguiente redacción:

Quedan excluidas de la regulación de este ordenamiento, *las especies* forestales maderables y no maderables que se encuentran en categorías de riesgo, cuya tutela recae en la Ley General de Vida Silvestre.

De la adición de un segundo párrafo del artículo 6 propuesto en la Minuta, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estima que la reforma al artículo en comento se ubica en el contexto de los ordenamientos que aplicarán supletoriamente a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que considerando que los recursos forestales maderables y no maderables en riesgo, se regulan por la Ley General de Vida Silvestre, por excepción, la reforma se propone en el artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues lo que se busca es hacer explícito el ordenamiento legal aplicable para los recursos forestales que se encuentran en alguna categoría de riesgo.

Por otro lado, esta comisión dictaminadora, considera innecesaria la reforma a la fracción XXI al artículo 15, que pretende agregar a las atribuciones de los Municipios la supervisión del uso de fuego en terrenos forestales, toda vez que dichas disposiciones se encuentran contempladas en la fracción II del artículo 24 que a la letra dice:

Artículo 24. La federación, a través de la Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos

del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones:

(...)

II. Programar y operar las tareas de prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y enfermedades;

Respecto a la reforma de la fracción XXIV del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta comisión dictaminadora considera como no procedente, toda vez, que la Operación de Centros de Transformación no es competencia de la Federación, sino del Municipio, tal y como lo describe la fracción IX del artículo 15 de la Ley objeto, que a la letra dice:

Artículo 15. Corresponden a los gobiernos de los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

(...)

IX. Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de materias primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal establecidos en esta ley;

Por otra parte, con respecto a la sanción de la transformación y/o almacenamiento de las materias primas forestales, ya está contemplada en la fracción XIII del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable, que a la letra dice:

Artículo 163. Son infracciones a lo establecido en esta ley:

(...)

XIII. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia;

De lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que no es procedente reformar la fracción XXIV del artículo 163 de la Ley Objeto, toda vez, que queda subsanada la propuesta del legislador promovente en la fracción XIII de dicho artículo.

De los argumentos anteriores, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado observaciones con adecuaciones en la redacción del decreto de la minuta por técnica legislativa por lo que considera procedente aprobar la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con las observaciones expuestas. Esto con fundamento en lo dispuesto por la fracción E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo Único. Se reforman las fracciones: XIV y XV del artículo 13, III del artículo 74, y los artículos 115 y 128; y se adiciona un segundo párrafo en el artículo 1, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quedan excluidas de la regulación de este ordenamiento, las especies forestales maderables y no maderables que se encuentran en categorías de riesgo, cuya tutela recae en la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XIII. ...

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, **de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana respectiva;**

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo **y de conformidad con lo que se establezca en los Convenios de Coordinación que para el efecto se firmen con la Federación y los Municipios;**

XVI. a XXXII. ...

Artículo 74. Las solicitudes para obtener la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de:

I. a II. ...

III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar los **documentos debidamente certificados por el Registro Agrario Nacional que acredite la propiedad social**, acta de asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento Interno o **Estatuto Comunal** en el cual se definan las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos;

IV. a VI. ...

Artículo 115. Quienes realicen el transporte y **almacenamiento** de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán acreditar su legal procedencia con la documentación que para tal efecto expidan las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables.

Artículo 128. El Ejecutivo federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, **no maderables** y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I. III. ...

...

...

...

...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Gaceta Parlamentaria del Senado, número 71, Diciembre 15 2009, México D. F. disponible en : <http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=1739>

2. Ibídem.

3. En la Ley Agraria, se describe que los ejidos operan de acuerdo con su Reglamento Interno (según artículo 10), el cual es formulado por la asamblea (artículo 23 fracción I) y se inscribe en el Registro Agrario Nacional

(artículo 10), en este documento se señalan las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común.

4. *Op. Cit.*

5. *Ibídem.*

6. La LGDFS los define como: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales.

7. Diario Oficial de la Federación, Febrero 25 2003, México, DF.

8. Fracción I de la LGDFS.

9. Información disponible en:

<http://www.semarnat.gob.mx/estados/guerrero/temas/recursosforestales/Paginas/maderableyno.aspx>

10. Diario Oficial de la Federación, Julio 3 2003, México D. F.

11. Diario Oficial de la Federación, Marzo 6 2002, México D. F.

12. Martínez Ramos, Miguel, Informe final del Proyecto B024, "Investigación sobre recursos no maderables de México: biología y conservación d plantas del género *chamaedorea*, noviembre 30 1994, disponible en:

<http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfB024.pdf>

Dado en el Salón de Comisiones de la Cámara de Diputados el día 21 de abril de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaña (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnado, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1530, que contiene una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 67 y 68 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 57, 60, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permite someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En la sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 67 y 68 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio, presentada por el senador Jorge Legorreta Ordorica, a nombre propio y de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y

Segundo. En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

Tercero. Con fecha 4 marzo de 2009, fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores.

Cuarto. Con fecha 9 de marzo de 2009, fue turnada por le Presidencia de Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, con el expediente número 1530, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre.

Contenido de la Minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene como eje de la reforma adicionar una hipótesis al catálogo de supuestos por los que es procedente establecer áreas de refugio para proteger especies acuáticas catalogadas en riesgo, dentro de la NOM 059, y que consiste

reformular la fracción IV, así como el último párrafo del Artículo 67 de dicha Ley. El nuevo supuesto consiste en introducir la contaminación ya sea física, química o acústica, o también las colisiones con embarcaciones; que pueda producir impactos negativos en dichas especies en riesgo. La adición al último párrafo consiste en facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar opinión a las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia.

De tal forma que la redacción que se propone en la minuta queda como sigue:

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas en categorías de riesgo podrán ser establecidas para la protección de:

- I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;
- II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;
- III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento; o
- IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que **sean afectados en forma negativa** por el uso de determinados medios de aprovechamiento; **por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones.**

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; **para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.**

Para mayor claridad, se expone el siguiente cuadro comparativo:

Ley vigente Minuta **Artículo 67.** Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de:

- I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;
- II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;
- III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento; o

IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento;

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; **Artículo 67.** Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de:

I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;

II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;

III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento; o

IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean **afectados en forma negativa** por el uso de determinados medios de aprovechamiento; **por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones.**

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; **para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.**

Consideraciones

Debe hacerse la aclaración que los efectos de esta ley se circunscriben a las especies silvestres en riesgo baja su tutela, por lo que las especies pesqueras, que no se encuentran catalogadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM 059¹ de especies en riesgo, quedan excluidas de este ordenamiento y se regulan en la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) tiene por objeto la conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento.

El artículo 5o., en su fracción II, especifica que se deben aplicar medidas preventivas para el mantenimiento que propicien la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, los hábitats y las poblaciones en sus entornos naturales. Especifica también que la falta de

certeza científica no podrá argumentarse como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat.

Las especies en riesgo, las cuales son definidas por la LGVS, como aquellas especies que, debido a factores tales como la destrucción del hábitat natural, por cambio de uso de suelo, su fragmentación, el aprovechamiento no sustentable, tráfico ilegal de especies, cacería furtiva o enfermedades, han llegado a estar en diferentes grados de riesgo por disminución de sus poblaciones y que puede poner en peligro su viabilidad como especies. Así, de acuerdo a este ordenamiento, es preciso implementar acciones que tiendan a propiciar su recuperación y su conservación, y por tanto, su permanencia.

Respecto a la adición de una hipótesis para el establecimiento de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, se coincide plenamente con el espíritu de la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, pues, tal como se menciona en la misma, los niveles de ruido de fondo ambiental han aumentado rápidamente, de tal forma que los sonidos de muy baja frecuencia pueden viajar grandes distancias en los océanos.²

Una combinación de fuentes de ruido, incluyendo la navegación, exploración y producción de petróleo y gas natural, dragado, experimentos oceanográficos, construcción y actividades militares, han resultado en la duplicación de los niveles de ruido en los océanos en cada década (de las varias últimas décadas) en algunas áreas, como se ha demostrado científicamente³

Efectivamente, las evidencias científicas actuales han demostrado que "muchas especies de animales, básicamente los marinos, dependen del sonido para encontrar alimento y pareja, protegerse de predadores y comunicarse entre ellos".⁴

De la misma forma, actualmente se presenta una intensa actividad industrial en los océanos mexicanos, misma que se ha incrementado significativamente en los últimos 50 años, caracterizada por la generación de ruido subacuático derivado del tránsito de embarcaciones mercantiles, la investigación y algunas actividades basadas en tierra tales como la construcción de muelles y otras obras en zona costera.

En este sentido, cabe mencionar que el ruido constituye una fuente de contaminación altamente nociva para las especies de fauna silvestre desarrolladas en el mar, propiciando modificaciones en su conducta que perjudican la calidad de vida e incluso, poniendo en riesgo su subsistencia misma, además de ser una causa de ruptura del equilibrio natural de los ecosistemas marinos.⁵

La investigación ha demostrado que la contaminación por ruido por esta fuente puede producir una variedad de efectos dañinos en especies marinas, ya que el ruido que se produce se encuentra en el rango de audición de muchas especies, en especial de las ballenas misticetas, aunque no exclusivamente.

Asimismo, la exposición de motivos de esta minuta destaca que "el aumento de vehículos rápidos en el medio marino, ha provocado ya la seria preocupación del Comité Científico

de la Comisión Ballenera Internacional, como uno de los problemas básicos a legislar",⁶ toda vez que se han registrado cada vez más lesiones y muertes de ballenas, tiburón ballena, entre otras especies marinas de nado lento, por colisiones con embarcaciones.⁷

De esta forma, la adición que nos ocupa tiene como finalidad incorporar estos supuestos como una causa para el establecimiento de áreas de refugio con el objetivo de proteger especies acuáticas, expuestas a dichos riesgos, pues, tal como lo indica su nombre y el artículo 65 de la propia LGVS, esta figura jurídica se constituye como el mecanismo legal idóneo para "proteger especies de vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, con el objeto de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger sus hábitats, para lo cual elaborará los programas de protección correspondientes".

Finalmente, los diputados integrantes de esta Comisión consideran que, debido a la especial fragilidad y susceptibilidad comprobada científicamente a estos fenómenos, y a que las especies en riesgo deben ser protegidas por diversos ordenamientos nacionales como internacionales, la minuta que se dictamina cumple con lo previsto en el derecho internacional y los compromisos contraídos por nuestro país en la conservación de la biodiversidad, tales como la Convención sobre la Diversidad Biológica.⁸

Cabe señalar que, por técnica legislativa, se modifica el primer párrafo del artículo 67 para quedar: "Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de:...", tal y como lo señala el texto vigente. Lo anterior, no afecta la minuta con proyecto de decreto en dictamen, por no ser objeto de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación en sus términos de la minuta con proyecto de decreto por el se reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman la fracción IV y el último párrafo del artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de:

- I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;

II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;

III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento; o

IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean **afectados en forma negativa** por el uso de determinados medios de aprovechamiento; **por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones.**

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; **para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.**

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002.
2. Hildebrand, J.A. (2005). *Impacts of anthropogenic sound. In Marine mammal research: conservation beyond crisis*. Edited by J.E. Reynolds III, W.F. Perrin, R.R. Reeves, S. Montgomery and T.J. Ragen. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. pp. 101-124.
3. See Andrew, R. K., Howe, B. M. and Mercer, J. A. 2002. Ocean ambient sound: Comparing the 1960s with the 1990s for a receiver off the California coast. *Acoustic Research Letters Online* 3(2): 65-70; International Whaling Commission, 2004 Report of the Scientific Committee at Annex K, § 6.4.
4. For reviews of research on behavioral and auditory impacts of undersea noise on marine mammals and other species, see, e.g., W.J. Richardson et al., *Marine Mammals and Noise* (1995); National Research Council, *Ocean Noise and Marine Mammals* (2003); P. Tyack, "Behavioral Impacts of Sound on Marine Mammals," Presentation to the U.S. Marine Mammal Commission Advisory Committee on Acoustic Impacts on Marine Mammals (February 4, 2004); Whale and Dolphin Conservation Society, *Oceans of Noise* (2004); and M. Jasny, *Sounding the Depths II: The Rising Toll of Sonar, Shipping, and Industrial Ocean Noise on Marine Life* (2005).
5. IUCN/World Conservation Union 2004: Resolution 053, "Underwater Noise Pollution" (Nov. 2004).
6. International Whaling Commission 2004: Report of the Scientific Committee, at § 12.2.5 and Annex K – Report of the Standing Working Group on Environmental Concerns.
7. Weinrich, M.T. 2005. A review of collisions between whales and whale watch boats. Paper SC/57/WW8 presented to the IWC Scientific Committee, May 2005 (unpublished). 7 pp.
8. Este Convenio fue firmado por México el 13 de junio de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 13 de enero de 1993. Entró en vigor el 29 de diciembre 1993.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Diputados el día 21 de abril de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montañó (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1786, que contiene la iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Asimismo, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1883, que contiene la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

Metodología

En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

En el capítulo "Contenido de la iniciativa", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo "Consideraciones", la comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución.

En el capítulo "Modificaciones a la iniciativas", esta dictaminadora brinda, bajo el estudio técnico jurídico-legislativo, un orden consecutivo de los artículos.

Antecedentes

Primero. Con fecha 13 de abril del 2010, la diputada Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Segundo. El día 13 de abril del 2010, la diputada Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de las iniciativas

A) La Iniciativa presentada por la diputada Ninfa Salinas Sada, tiene como propósito introducir en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tanto a nivel federal como local las autoridades ambientales tomen sus decisiones contemplando los criterios de adaptación y mitigación del cambio climático, de tal forma que se tomen en cuenta, en lo posible, las medidas tendientes a minimizar los impactos, pero también a diseñar programas de adaptación para aquellos cambios que son inevitables, y así acortar el tiempo de acción en este tipo de actividades.

Por ello, la diputada promovente, primero propone la adición de una fracción XXI en el artículo 5 de la citada ley, recorriéndose la siguiente, con el fin de que la Federación elabore mapas de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático, los estudios de proyección climática, así como emitir las políticas y planes generales de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Quedando la redacción de la siguiente forma:

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

I. a XX....

XXI. La elaboración de mapas de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático, así como los estudios de proyección climática, y emitir las políticas y planes generales de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

XXII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Con respecto a las facultades de los estados, esta iniciativa pretende que podrán formular programas estatales en materia de cambio climático y que incluyan medidas de mitigación y adaptación. Por lo que la diputada promovente propone la siguiente redacción en el artículo 7 de la citada ley:

Artículo 7o. Corresponde a los Estados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XVII. ...

XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente **y del programa estatal de cambio climático que incluya medidas de mitigación y adaptación.**

XIX. a XXI...

B) La iniciativa presentada por la diputada Ninfa Salinas Sada, pretende adicionar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el Título Cuarto, "De Protección al Ambiente, un Capítulo II Bis, denominado "Del Cambio Climático", con los Artículos 116 Bis, 116 Bis 1 y 116 Bis 2.

De lo anterior, la adición del artículo 116 BIS, se refiere a la mitigación de los gases de efecto invernadero y a la adaptación del cambio climático, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), deberá diseñar un Programa Especial de Cambio Climático, para lo cual la diputada promovente propone lo siguiente:

Artículo 116 Bis. Para la atención y prevención de los efectos del cambio climático la Secretaría deberá diseñar un Programa Especial de Cambio Climático, que incluya:

I. Conducción de las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección a la capa de ozono;

II. Coordinar la instrumentación de estrategias nacionales de acción climática entre las distintas dependencias y entidades federales, e informar periódicamente sobre los tipo de energía sobre los ambientes, especies y ecosistemas, terrestres y marinos avances en la materia;

III. Proponer la formulación y adopción de las políticas, estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático;

IV. Diseñar e implementar un Programa de Modelación de Clima y el Sistema de Información Climática;

V. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo;

VI. Generar capacidades

VII. para contabilizar las emisiones de gases con efecto invernadero y plantear proyectos de reducción en las empresas mexicanas;

VIII. Identificar oportunidades, facilitar, promover, difundir, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendientes al mismo objetivo;

IX. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés nacional en relación con el cambio climático y difundir sus resultados;

X. Promover en los sectores privado y social, así como en las instancias competentes de los Gobiernos Federal, estatales y municipales, el desarrollo y registro de proyectos de reducción y de captura de emisiones de gases de efecto invernadero y su participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Asimismo, propone la adición del artículo 116 BIS 1, que pretende establecer que sea definitivamente la Semarnat, quien presida de manera permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de la misma. Es así como la diputada promovente propone la siguiente estructura en el artículo 116 Bis 1:

Artículo 116 Bis 1. La Secretaría presidirá de manera permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de la misma.

Finalmente, la iniciativa pretende adicionar un artículo 116 BIS 2, con el fin de que la Semarnat, establezca un sistema mediante el cual se evalúe el costo económico y ambiental de los efectos del cambio climático, por lo que deberá establecer una estrategia presupuestal que permita llevar a cabo la restitución del daño provocado por el mismo. A esto, la diputada promovente propone la siguiente adición:

Artículo 117 Bis 2. La Secretaría deberá establecer un sistema mediante el cual se evalúe el costo económico y ambiental de los efectos del cambio climático y deberá establecer una estrategia presupuestal que permita llevar a cabo la restitución del daño provocado por el mismo.

Consideraciones

A través de un conjunto de procesos naturales, organizativos y productivos que han implicado extensas modificaciones en la biosfera, los seres humanos evolucionaron como una especie biológica dominante y se han establecido en la casi totalidad del territorio planetario. Por la escala global de su intervención, la persistencia de su acción y el carácter acumulativo de los resultados, tal vez el experimento ambiental más trascendente (aunque

inconsciente) emprendido por la humanidad ha consistido en incidir en la transformación de la atmósfera planetaria.¹

La atmósfera terrestre constituye el más global de los bienes ambientales comunes. Es considerada como una masa gaseosa de composición prácticamente homogénea, en virtud de las propiedades de difusión de los gases, de los movimientos verticales convectivos y de los mecanismos que configuran su dinámica, permite que cualquier contaminante gaseoso que recibe se diluya y acabe distribuyéndose en toda su extensión. Cualquier transformación que sufra la atmósfera global en las concentraciones de los gases que forman parte de ella, afecta a la biosfera y a la humanidad en su conjunto.²

La actividad humana ha generado en un lapso de tan sólo unas décadas, grandes transformaciones con una magnitud superior a las que el sistema natural hubiera experimentado en el curso de cientos de miles de años. Es así que debido a la irracionalidad de la actividad humana, el cambio climático se ha convertido en el fenómeno ambiental más trascendente, cuyas implicaciones han consistido en incidir en la transformación de la atmósfera planetaria.

Durante los últimos 50 años, los países desarrollados emitieron a la atmósfera alrededor de 600 mil millones de toneladas de CO₂, el 99% de las cuales derivan de la quema de combustibles fósiles y producción de cemento. Durante el mismo periodo, los países en desarrollo emitieron casi 500 mil millones de toneladas de CO₂, de las cuales el 37% corresponde a quema de combustibles fósiles y cemento en tanto que el 63% corresponde a cambio de uso de suelo.

En 1988, se inició una nueva fase en Canadá, con la Conferencia de Toronto sobre Cambio en la Atmósfera. En ese mismo año con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial se decidió establecer el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, las Naciones Unidas decidieron adoptar una Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) que entró en vigor en 1994 y a la fecha ha sido ratificada por 189 países. Para reforzar los compromisos cuantitativos que limitan el volumen total de emisiones de los países desarrollados, inscritos en el Anexo I de la Convención, la 3ra Conferencia de las Partes (COP-3), en 1997, adoptó el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005 y permitió desarrollar el mercado de bonos de carbono.

México firmó la CMNUCC en 1992 y la ratificó en 1993 con fundamento en la aprobación del Senado de la República; asimismo firmó el Protocolo de Kioto en 1997 y lo ratificó en el 2000. Bajo la coordinación general del Instituto Nacional de Ecología, México ha presentado dos Comunicaciones Nacionales y ha realizado tres Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, conforme a los lineamientos y metodologías del IPCC. La Tercera Comunicación Nacional fue presentada en la COP-12, en noviembre 2006.

Asimismo, en México se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático³ (CICC) con el objeto de coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativas al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de Kioto.⁴

La CICC está integrada por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (quien preside); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Desarrollo Social; Energía; y Relaciones Exteriores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en sus reuniones de manera permanente.

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las concentraciones de CO₂ son responsables de más del 60% del incremento de gases de efecto invernadero, mientras que gases como el metano y el óxido de nitrógeno contribuyen con una menor proporción.

Los efectos del cambio climático se manifiestan en forma de aumento de la temperatura global, aunque de manera diferenciada:

Derretimiento de los glaciares y de los polos,

Aumento del nivel del mar de entre .09 y 0.88 metros del nivel medio del mar para el año 2100, por el aumento de la temperatura mayor en los polos que en el resto del planeta.

Estudios científicos también han determinado que habrá una modificación de la distribución de especies de animales y plantas y un aumento en la variabilidad de la precipitación, lo que llevará a cambios en la producción de alimentos y disponibilidad de agua potable, así como de incidencia de enfermedades. En otras partes del mundo, aumentarán las sequías por las tasas de evaporación más elevadas, mientras que en otras, habrá más lluvias torrenciales y aumento de la actividad ciclónica y pérdida de costas. En este panorama, los países más desfavorecidos son los países en desarrollo y, como siempre, los estratos más pobres de la población.

En este contexto, México ocupa el séptimo lugar en producción probada de petróleo crudo y el vigésimo primero en reservas probadas de gas natural. De esta manera México es responsable de alrededor del 1.5% de las emisiones mundiales de carbono provenientes de combustibles fósiles, lo que nos ubica en el número 15 del mundo.

De acuerdo a datos oficiales y públicos, habrá modificación especial y temporal de lluvias y sequías, con una drástica modificación de la disponibilidad de agua por habitante. Habrá

también una modificación de la cobertura vegetal, con las lógicas alteraciones de los procesos de evaporación y transpiración, con cambios en los regímenes de vientos.

También se predice una mayor pérdida de biodiversidad y reducción o la desaparición de la cobertura forestal, siendo los más sensibles los bosques de coníferas y los pastizales naturales de las montañas altas. Todos estos cambios favorecerán la extinción de especies silvestres, cuya migración se verá severamente afectada.

Asimismo, la modificación del nivel del mar provocará una alteración de los ecosistemas costeros y marinos, con gran afectación a su productividad natural. Esto mismo tendrá como efecto un aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas tropicales, especialmente en el Golfo de México y el Caribe; igualmente, habrá una afectación negativa de las plataformas petroleras como resultado del aumento del nivel del mar

Los costos asociados a los efectos del cambio climático son graves e impredecibles, por lo que es necesario actuar de manera conjunta y urgente para tomar medidas de prevención en aquellas áreas donde sea posible y también para tomar acciones que faculden al país para enfrentar eficazmente las eventualidades que ya hemos empezado a sufrir. Así, la mitigación de emisiones y la adaptación a los impactos inevitables son las dos vías principales de acción por los que se debe enfrentar el problema del cambio climático.

Los costos de una eficaz y eficiente acción para combatir el cambio climático no deseado, y mitigar sus efectos, son muy inferiores a los daños económicos que podemos evitar y a las potencialidades de crecimiento y desarrollo que podemos conseguir. Esto significa que actuar con decisión y oportunidad en esta materia es una excelente inversión pública. En ausencia de acciones, la economía mexicana sufrirá costos económicos significativos como consecuencia del cambio climático de acuerdo con el documento "La economía del cambio Climático en México".⁵

Los impactos actuales y/o esperados del cambio climático sobre la biodiversidad en las próximas décadas son significativos e incluyen cambios en el tamaño y distribución de las poblaciones, cambios de rango, cambios de la fenología, de evolución e incluso de extinción, por lo que la Secretaría requiere de una partida presupuestaria especial destinada a combatir los efectos negativos del cambio climático con acciones tales como la rehabilitación de ecosistemas y evitar pérdidas irreversibles en biodiversidad.

Derivado de todo lo anterior, el propósito de introducir en la Ley Ambiental marco, tanto a nivel federal como local, la obligación de las autoridades ambientales para que todas las decisiones se tomen en el marco de los efectos del cambio climático, de tal forma que se tomen en cuenta, en lo posible, las medidas tendientes a minimizar los impactos, pero también a diseñar programas de adaptación para aquellos cambios que son inevitables.

Sólo entendiendo que se deben tomar en cuenta estas dos medidas es que las autoridades ambientales podrán acortar el tiempo de acción en este tipo de actividades.

Finalmente, es importante cumplir con los compromisos internacionales y para ello es necesario contar con una partida especial destinada específicamente a la mitigación de los gases de efecto invernadero y a la adaptación del cambio climático en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo anterior, es importante la adición de un apartado especial sobre cambio climático en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de tal suerte que se establezca que, en primer término, para la atención y prevención de los efectos del cambio climático, la Semarnat deberá diseñar un Programa Especial de Cambio Climático; en segundo lugar, que la misma Secretaría presida de manera permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de la misma; y, finalmente, que la Secretaría establezca un sistema mediante el cual se evalúe el costo económico y ambiental de los efectos del cambio climático, por lo que deberá establecer una estrategia presupuestal que permita llevar a cabo la restitución del daño provocado por el mismo.

Para tales efectos, la Iniciativa propone que el Ejecutivo Federal deberá incluir, en forma anual, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial para la atención y prevención de los efectos del cambio climático y en particular para implementar los programas diseñados por la Comisión Intersecretarial para la Atención del Cambio Climático. De esta forma, el gobierno federal, a través de las secretarías que integran la CICC, deberá destinar un monto equivalente al 0.01 por ciento del PIB para la atención y prevención de este fenómeno.

Modificaciones a las iniciativas

Esta comisión dictaminadora considera necesario hacer algunas modificaciones a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que pretende adicionar en la Ley objeto, en el Título Cuarto, "De Protección al Ambiente, un Capítulo II Bis, denominado "Del Cambio Climático", en sus Artículos 116 Bis, 116 Bis 1 y 116 Bis 2.

Después del estudio y análisis del orden consecutivo de los artículos que plantea la iniciativa mencionada en el párrafo anterior, considera pertinente que los artículos propuestos en la iniciativa, quedarán como 116 Bis, 116 Bis 1 y 116 Bis 2. Toda vez que, en la versión vigente de dicho ordenamiento jurídico, el Capítulo II del Título Cuarto, "De Protección al Ambiente", inicia en el artículo 111 y concluye en el artículo 116; y el CAPÍTULO III inicia en el artículo 117 y concluye en el artículo 133⁶

Con respecto al artículo 116 BIS, esta comisión dictaminadora considera pertinente modificar la redacción del mismo, con el objeto de mejorarla, así como agregar una fracción V para que se incorporen en los instrumentos de la política ambiental como el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental, los criterios de mitigación y adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio climático, y finalmente se mejoro la redacción del artículo 116 Bis 2.

Por lo expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambio climático

Artículo Único. Se reforma la fracción XVIII del artículo 7o. y se adiciona una fracción XXI, recorriéndose la actual para pasar a ser XXII, al artículo 5o.; y un Capítulo II Bis al Título Cuarto, denominado "Del Cambio Climático", con los artículos 116 Bis, 116 Bis 1 y 116 Bis 2, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

I. a XIX. ...

XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;

XXI. La elaboración de mapas de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático, así como los estudios de proyección climática, y emitir las políticas y planes generales de mitigación y adaptación ante el cambio climático, y

XXII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 7o. Corresponde a los Estados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XVII....

XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente **y del programa estatal de cambio climático que incluya medidas de mitigación y adaptación.**

XIX. a XXI. ...

Título Cuarto
Protección al Ambiente

Capítulo II Bis

Del Cambio Climático

Artículo 116 Bis. Para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la Secretaría deberá diseñar un Programa Especial de Cambio Climático, que incluya:

- I. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección a la capa de ozono;
- II. Coordinar la instrumentación de estrategias nacionales de acción climática entre las distintas dependencias y entidades federales.
- III. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático;
- IV. Diseñar e implementar un Programa de Modelación de Clima y el Sistema de Información Climática;
- V. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental como el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental, los criterios de mitigación y adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio climático;
- VI. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo;
- VII. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y plantear planes de reducción de los mismos;
- VIII. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendientes al mismo objetivo;
- IX. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés nacional en relación con el cambio climático;
- X. Promover el desarrollo y registro de proyectos de reducción y de captura de emisiones de gases de efecto invernadero y su participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 116 Bis 1. La Secretaría presidirá de manera permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con el objeto de coordinar las acciones de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático.

Artículo 116 Bis 2. La Secretaría establecerá una estrategia presupuestal para combatir los efectos negativos del cambio climático, a partir de un sistema donde se identifiquen, estimen y evalúen los costos económicos que las consecuencias del cambio climático generen en el país, principalmente de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá incluir, en forma anual, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial para la atención y prevención de los efectos del cambio climático y en particular para implementar los programas diseñados por la Comisión Intersecretarial para la Atención del Cambio Climático. De esta forma, el Gobierno Federal, a través de las Secretarías que integran la Comisión Intersectorial para el Cambio Climático, deberá destinar un monto equivalente al 0.01 por ciento del PIB para la atención y prevención de este fenómeno.

Notas

1. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, *Hacia una estrategia nacional de acción climática*, "Respuesta de México ante el cambio climático Global", p.1. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Documents/enac/sintesis/070117%20HENAC.Intro.compl.pdf
2. Ibídem, p. 1.
3. Diario Oficial de la Federación, abril 25 2005, acuerdo por el que se crea con carácter permanente.
4. *Op. Cit.* p. iii.
5. SHCP y Semarnat. 2009. "La economía del cambio climático en México".
6. Información que se puede consultar en la página de la honorable Cámara de Diputados, disponible en: <http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm>

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Diputados, el día 21 de abril de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaña (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNO TERCERO AL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 4 de junio de 2008, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre propio y del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Segundo. Recibido el proyecto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno del mismo mediante oficios números CP2R2A.556 y CP2R2A.557, ambos de fecha 4 de junio de 2008, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen correspondiente, las cuales previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 17 de septiembre de 2008.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 18 de septiembre de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-1P3A.6311, de 17 de septiembre de 2008, mediante el cual la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1562, acordó turnar a la Comisión de Justicia dicha Minuta, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores se propone reformar el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de desahogar de manera más fluida y conveniente los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, aprovechando al máximo el potencial humano mejor calificado y preparado de quienes intervienen en los procesos de selección, para ocupar las vacantes que se requiera y sea imperativo cubrir.

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expresa que, la reforma pretende suprimir la limitación que impone la disposición orgánica vigente que nos ocupa, al Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que de ser procedente tendrá la posibilidad de cubrir con la debida prontitud y oportunidad del caso de que se trate, las plazas vacantes existentes.

Igualmente señala que el ingreso y promoción a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito debe propiciar credibilidad, certeza y garantizar que los mejores aspirantes, los más preparados, probos y capaces, accedan a la delicada función que el cargo representa, por lo que señala que, es atendible la reforma que se propone, para consignar en la especie el derecho de pasar a la siguiente etapa en los concursos de oposición libre e internos de oposición, de todas aquellas personas que hayan obtenido las más altas calificaciones, a partir del mínimo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal –y no solamente de las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones–, procurando, en su caso, que el número de los seleccionados sea mayor o cuando menos igual al de las plazas vacantes.

Tercero. Al respecto, esta Comisión de Justicia coincide plenamente con la minuta emitida por el Senado de la República, toda vez que, no hay que perder de vista que la función del juzgador es primordial en la vida democrática de las naciones, como la nuestra, en virtud de ser la persona designada por el Estado para administrar justicia, dotado de jurisdicción para decidir una determinada situación jurídica controvertida, esta facultad se prescribe en el artículo 17 constitucional, al señalarse que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En ese sentido y por disposición constitucional, los jueces y magistrados que diriman una controversia planteada, deben ser los mejores capacitados, porque la justicia que imparten debe ser pronta, completa e imparcial, ya que sus determinaciones afectan la esfera jurídica de los gobernados, por lo que cobra relevancia la reforma planteada al establecer que, de entre el número total de aspirantes tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, a partir del mínimo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal, asegurando que el número de los seleccionados sea mayor al de las plazas vacantes.

Es decir, la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera necesaria porque garantiza que en todos los concursos de oposición para la

designación de juzgadores federales, pasen a la segunda etapa los aspirantes que obtengan las más altas calificaciones.

Cuarto. En los concursos de oposición para la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito, se constriñe al Consejo de la Judicatura Federal a seleccionar a las cinco personas que obtengan las más altas calificaciones por cada una de las vacantes concursadas para que pasen a la segunda etapa (o de oposición), pero en ocasiones sucede que se inscribe un número reducido de participantes, lo que implica que se declare desierto el concurso por un número determinado de plazas, independientemente de las necesidades del servicio.

En otras ocasiones acontece que se inscriben en los concursos de oposición antes mencionados un gran número de aspirantes y, si bien el Consejo de la Judicatura Federal también debe seleccionar a las cinco personas que obtengan las mejores calificaciones por cada una de las vacantes, lo cierto es que, en este supuesto, lo relevante es que pasan a la segunda etapa las personas que se necesitan para cubrir el número de plazas que se concursan (5 personas x 1 plaza), y la calificación pasa a segundo término.

Quinto. De acuerdo con datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal en los concursos internos de oposición, el Poder Judicial Federal enfrenta serios problemas en la designación de jueces y magistrados debido a la redacción actual del artículo materia de análisis, tal a continuación se precisa:

- a) En el **decimosegundo concurso interno para la designación de jueces de distrito**, se convocó a secretarios para cubrir 10 plazas en esa categoría, se inscribieron 44 personas, pasaron a la segunda etapa 30, por ese motivo, únicamente estuvieron sujetas a concurso 6 plazas, declarándose desiertas las 4 restantes (30 personas/5 plazas = 6 plazas).
- b) En el **decimonoveno concurso interno para la designación de magistrados de circuito**, se convocó a jueces de distrito para cubrir 15 plazas, se inscribieron 32, pasaron a la segunda etapa 28, entonces, las plazas sujetas a concurso son 6, declarándose desiertas 9 de ellas.
- c) En el **decimocuarto concurso interno para la designación de jueces de distrito**, se convocó a secretarios para cubrir 15 plazas en esa categoría, se inscribieron 32 personas, ante esta circunstancia, en principio, aun cuando no se ha llevado a cabo el cuestionario para la selección a la segunda etapa, lo cierto es que, desde ese momento, se prevé la reducción de plazas, en el entendido de que sería indispensable contar con un mínimo de 75 inscritos para estar en posibilidad de mantener el número de plazas sujetas a concurso (5 personas por una plaza x 15 plazas = 75 personas).
- d) En el **vigésimo concurso interno para la designación de magistrados de circuito**, se convocó a jueces de distrito para cubrir 15 plazas en esa categoría, se inscribieron 16 personas, tal situación obliga a prever la reducción de plazas, en el

entendido de que para estar en posibilidad de mantener el número de plazas sujetas a concurso sería necesario contar con un mínimo de 75 inscritos (5 personas por una plaza x 15 plazas = 75 personas).

En consecuencia, es evidente que el Consejo de la Judicatura Federal no se encuentra en posibilidad de conocer el número de personas que se inscribirán a los concursos, ya que no depende de dicho Órgano esa circunstancia, sino que es una cuestión fuera de su alcance, pero que indudablemente repercute en su función, en atención a que para cubrir las plazas que requiere, en muchas ocasiones tiene que realizar multitud de concursos de oposición, lo que trasciende a su vez en aspectos financieros, tecnológicos y humanos, además de que ello representa un contratiempo para cubrir oportunamente a los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Por lo tanto, se considera necesario eliminar la limitación relativa a que sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa (la segunda –de oposición), las cinco personas que por cada una de las vacantes hayan obtenido las más altas calificaciones, en virtud de que el Consejo de la Judicatura Federal tendría libertad de acción para cubrir las plazas vacantes oportunamente con los participantes que obtengan los mejores promedios, toda vez que en cada caso, atendiendo a las necesidades del servicio el Consejo se encontraría en posibilidad de establecer la calificación mínima requerida para poder admitir a las personas que obtengan las más altas calificaciones, sin necesidad de encontrarse obligado a que forzosamente sean 5 personas por cada vacante, ya que podrían ser menos, pero tomando en cuenta, siempre y en todo momento, que sean las mejores, garantizando de esta manera la excelencia de las personas designadas para desempeñar la función de jueces de distrito y magistrados de circuito.

Es decir, se abre la posibilidad de que los aspirantes con mayor calificación pasen a las siguientes etapas del concurso y puedan, en su caso, obtener una plaza de juez o magistrado en el Poder Judicial de la Federación, y no como ahora se señala que sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia aprueba la Minuta analizada, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional, y somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II y se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II y se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. ...

II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.

De entre el número total de aspirantes tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa **quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, asegurando que el número de los seleccionados sea mayor al de las plazas vacantes.**

El Consejo de la Judicatura Federal, deberá establecer en la convocatoria respectiva, de manera clara y precisa, los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio para esta etapa dentro del concurso de oposición.

III. y IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 20 de abril de 2010.

La Comisión de Justicia

Diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, Víctor Hugo Círego Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huevo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la minuta, presentando a la consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen

La Comisión se abocó al examen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

- I. En sesión celebrada el 1 de octubre de 2009 en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
- II. Con esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, turnó la Iniciativa mencionada a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
- III. El 2 de marzo de 2010 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o.; 3o.; 4o., párrafo primero; 5o.; 9o.; 11; 12; 13; 14; 15, párrafo primero; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20, párrafo primero y fracciones III y IV; 21; 26; 30, fracción III; 32, fracción II y párrafo segundo; 33 fracción II y párrafo segundo; 34, párrafo primero, fracciones I y II; 35, fracciones IV, V y VI; 45; 46, fracción III; 47; 48; 49; 50, fracción III; 51, fracciones III y VIII; y 54, así como la denominación del Capítulo VI del Título Segundo y se Derogan las fracciones I y II, del artículo 4o.; artículo 7o.; párrafos segundo y tercero, del artículo 15; Apartados a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 34, todos de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

IV. El 4 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Marina la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

V. Con fecha 17 de marzo de 2010, el Pleno de esta comisión valoró y aprobó el dictamen presentado y como resultado de los consensos alcanzados se formuló el presente dictamen en sentido afirmativo.

Valoración de la minuta

La minuta materia del presente dictamen señala que las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos del Senado fundamentaron y motivaron esta reforma basados en las siguientes consideraciones:

Primera. Las Comisiones que suscriben, reconocen que las reformas que se pretenden realizar a la Ley de Ascensos de la Armada de México, tienen por objeto precisar el proceso de ascenso dentro del instituto armado, y con ello respetar los derechos de los aspirantes, asimismo se considera al ascenso como una recompensa al mérito y constancia en el servicio, cuya finalidad es la de fortalecer el espíritu militar, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que rigen la vida del personal naval.

Segunda. Reconocen que el proyecto de decreto que se dictamina, implica la reforma y derogación de diversos artículos, a fin de respetar los derechos de ascenso del personal naval.

Tercera. Asimismo, se toma en cuenta que el ascenso del personal naval significa un aspecto relevante en la superación y el progreso tanto del personal como del propio instituto armado.

Cuarta. Por otra parte, con la presente Iniciativa, entre otras cosas se destaca la necesidad de eliminar las funciones del Consejo del Almirantazgo en el proceso de evaluación; se precisan las atribuciones del Mando Supremo y del Alto Mando respecto al ascenso del personal naval; se mejora la redacción de algunos artículos y muy especialmente, se hace énfasis en la importancia que implica contemplar en el proceso de evaluación que se practique, corresponda únicamente al grado que ostenta al participante, dado que actualmente se evalúa desde su ingreso a las escuelas de formación o su alta en el servicio activo, las cuales ya fueron evaluadas para obtener los grados anteriores.

Quinta. Finalmente, las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, primera, arriban a la conclusión de que las reformas que se pretenden realizar a la Ley de Ascensos de la Armada de México, son de suma importancia pues con ello se le otorga seguridad jurídica al personal naval con derecho a ascenso al grado inmediato superior, permitiendo asimismo, una aplicación de los procesos de evaluación para el ascenso de una manera justa.

Modificaciones a la iniciativa

Estas comisiones dictaminadoras, como resultado de un exhaustivo y detallado análisis al proyecto de iniciativa de mérito, así como habiendo tomado en consideración las opiniones emitidas en las mesas de trabajo, se estimó conveniente realizar las siguientes modificaciones:

a. Se considera irrelevante modificar el concepto relativo al ascenso, contemplado en el artículo 1º de la Ley en análisis, ya que el concepto actual es correcto.

b. Respecto a la reforma de la fracción VI del artículo 51 de la Ley que nos ocupa, es improcedente, debido a que conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Disciplina de la Armada de México, los organismos disciplinarios son competentes para imponer las sanciones tales como: amonestación, arresto o cambio de adscripción en observación de su conducta, incluso para imponer la baja del servicio activo, de tal forma que sería lesivo de los derechos del interesado que no se le confiriera el ascenso al grado inmediato superior, por ejemplo, por el sólo hecho de ser amonestado o arrestado.

c. De igual manera, es improcedente derogar la fracción X del artículo 51, ya que es conveniente que quede establecido que estar suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario, por la propia naturaleza de esta figura, sí debe negarse el derecho a que se le confiera el ascenso.

d. Finalmente, es improcedente la reforma al artículo 53 de la Ley en estudio, debido a que con la redacción actual se considera que se tutelan los derechos del interesado respecto a la procedencia del recurso de inconformidad cuya substanciación se hará conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.

En este sentido, el contenido de la minuta que nos ocupa satisface el requisito de llevar al detalle las normas constitucionales en lo que se refiere a la Armada de México, sin contener disposición alguna que exceda o contravenga el texto de la Ley Suprema, lo que evidencia su carácter congruente con ésta.

Por las razones expuestas por la colegisladora y dado el carácter de urgencia y obvia resolución que reviste esta iniciativa para fortalecer la estructura de mando, el espíritu de cuerpo y los incentivos que requiere el personal de la Armada de México para seguir prestando sus invaluable servicios a la patria y

Para los efectos del apartado a del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta Comisión de Marina aprueban y ratifican en sus términos la minuta del Senado de la Republica y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

I. Artículo Único. Se **reforman** los artículos 2o.; 3o.; 4o., párrafo primero; 5o.; 9o.; 11; 12; 13; 14; 15, párrafo primero; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20, párrafo primero y fracciones III y IV; 21; 26; 30, fracción III; 32, fracción II y párrafo segundo; 33 fracción II y párrafo segundo; 34, párrafo primero, fracciones I y II; 35, fracciones IV, V y VI; 45; 46, fracción III; 47; 48; 49; 50, fracción III; 51, fracciones III y VIII; y 54, así como la denominación del Capítulo VI del Título Segundo; y se **derogan** las fracciones I y II, del artículo 4o.; artículo 7o.; párrafos segundo y tercero, del artículo 15; Apartados a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 34, todos de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 2. Es facultad del Mando Supremo ascender a los Vicealmirantes, Contralmirantes, Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley.

Artículo 3. Es facultad del Alto Mando ascender al personal de Capitanes de Corbeta y Oficiales, previo acuerdo del Mando Supremo, según lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Es facultad del Alto Mando ascender al personal de clases y marinería según lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

I. a II. Se derogan.

Artículo 5. Los ascensos a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la presente ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso.

Artículo 7. Se deroga.

Artículo 9. Cuando se obtenga un ascenso por méritos especiales o por las causas establecidas para tiempo de guerra, el ascendido deberá cumplir con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones para ese grado, a efecto de poder tomar parte en promociones posteriores.

Artículo 11. En igualdad de competencia profesional determinada por el promedio de las calificaciones obtenidas en el concurso de selección, será ascendido el de mayor antigüedad en el grado.

Artículo 12. El personal naval que sea ascendido por haber obtenido alguna de las vacantes existentes, ocupará su nuevo lugar escalafonario atendiendo a la prelación que ocupaba en el grado anterior.

Artículo 13. El Alto Mando ordenará al Estado Mayor General de la Armada y a la unidad administrativa correspondiente, la formulación anual del escalafón de Almirantes,

Capitanes y Oficiales de la milicia permanente, así como el del personal de la milicia auxiliar. Citados escalafones serán difundidos a todo el personal de la Institución.

Artículo 14. Los órganos asesores auxiliarán al Alto Mando en el proceso para calificar, seleccionar y proponer al personal naval para ascenso, de Marinero hasta Capitán de Corbeta. Para los ascensos de Capitán de Fragata hasta Vicealmirante, el Alto Mando se auxiliará de los órganos asesores designados para integrar el expediente y reunir los elementos de juicio relativos a los aspectos que determina el artículo 18 de esta Ley, los que serán sometidos a la consideración del Mando Supremo.

Los órganos asesores para el proceso de ascensos serán el Estado Mayor General de la Armada y la Comisión Coordinadora para Ascensos en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 15. Los ascensos en tiempo de paz tienen por objeto cubrir las vacantes de la Armada de México con personal apto e idóneo para desempeñar las labores del grado inmediato superior.

Artículo 16. Para determinar su derecho al ascenso, desde Marinero hasta Capitán de Corbeta, se convocará a concurso de selección al personal de un mismo escalafón y grado.

Artículo 17. Los requisitos indispensables para ser convocado al concurso de selección para ascenso, en lo conducente, serán los establecidos en los Capítulos II, III y IV de este Título, además de buena conducta militar y civil acreditada mediante las hojas de actuación o memoriales de servicio, así como no encontrarse comprendido en los supuestos que prevé el artículo 51 de esta Ley

...

Artículo 18. Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, serán conferidos por el Mando Supremo, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

Artículo 19. Cuando un miembro de la Armada sea excluido por estar imposibilitado para participar en el concurso de selección por enfermedad u otras causas de fuerza mayor comprobadas, será convocado para determinar su derecho al ascenso, al desaparecer las causas que motivaron la exclusión, siempre y cuando pueda concursar dentro del periodo que al efecto se establezca.

Artículo 20. Cuando un miembro de la Armada se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes, se considerará el grado que ostente como grado tope:

I. a II. ...

III. Haber sido convocado y participado en tres concursos de selección para ascenso sin obtener el promedio de calificación mínima aprobatoria, y

IV. Cualquier combinación de las fracciones I, II y III anteriores que sumen tres de los supuestos indicados, ostentando el militar un mismo grado.

Artículo 21. El grado tope se comunicará por escrito, por el Estado Mayor General de la Armada al personal núcleo de los Cuerpos y por la Unidad Administrativa correspondiente al personal núcleo de los servicios y las escalas de los Cuerpos y Servicios.

Artículo 26. El personal de los establecimientos de educación naval egresará con el grado que establece la Ley Orgánica de la Armada de México.

Al presentar y aprobar su examen profesional de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo para prácticas y examen profesional, ascenderá al grado que le corresponda.

Artículo 30. ...

I. a II. ...

III. Presentar un trabajo de investigación tipo tesis y obtener resultado aprobatorio, tratándose de personal núcleo de los Cuerpos y Servicios, y

IV. ...

Artículo 32. ...

I. ...

II. Personal de Capitanes de Fragata que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III...

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

Artículo 33. ...

I. ...

II. Personal de los grados de Capitán de Navío, Contralmirante y Vicealmirante que no se encuentren en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III. ...

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

Capítulo

VI

Del Concurso de Selección para Ascenso a Cabo hasta Capitán de Fragata

Artículo 34. El concurso de selección para ascenso tiene por objeto determinar el orden de prelación de los convocados, conforme a lo siguiente:

I. Para Clases y Marinería se determinará de acuerdo a los resultados de los exámenes que menciona el artículo 35 y conforme al Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente, y

II. Para Oficiales, incluyendo el ascenso de Capitán de Corbeta a Capitán de Fragata, se llevarán de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente. En el establecimiento del orden de prelación en cada grado, núcleo y escala, se atenderán los conceptos de mérito, aptitud, competencia profesional, conducta militar y civil, así como a los resultados de los exámenes que establece el artículo 35, correspondientes al grado que ostenta el convocado.

a) al e) Se derogan.

Artículo 35. ...

I. a III. ...

IV. Examen de conocimientos prácticos para el personal de Clases y Marinería, de acuerdo con la reglamentación correspondiente;

V. Examen de lengua extranjera, únicamente para Oficiales y Capitanes del núcleo de los Cuerpos y Servicios, y

VI. Trabajo de investigación tipo tesis, únicamente para Tenientes de Navío del núcleo de los Cuerpos y Servicios.

Artículo 45. El grado que ostente el personal de la milicia permanente será acreditado con la expedición del despacho correspondiente y a falta de éste, con el documento oficial por el que se haya comunicado el ascenso al grado respectivo.

Artículo 46. ...

I. a II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. a V. ...

Artículo 47. Los despachos de los Almirantes y Capitanes de Navío serán legalizados con las firmas del Mando Supremo y del Alto Mando y llevarán el gran sello de la Nación.

Artículo 48. Los despachos de los Capitanes de Corbeta y Fragata, así como de los Oficiales, serán legalizados con las firmas del Alto Mando y de los servidores públicos de las Unidades Administrativas correspondientes.

Artículo 49. El grado que ostente el personal de la milicia auxiliar, será acreditado por el nombramiento que se les expida, firmado por el Alto Mando.

Artículo 50. ...

I. a II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. a V. ...

Artículo 51. ...

I. a II. ...

III. Excedido de la edad límite en su grado;

IV. a VII. ...

VIII. Cuando no reúnan los requisitos establecidos por esta Ley para cada grado,

IX. y X....

Artículo 54. En caso de procedencia de la inconformidad por exclusión, el Alto Mando ordenará la evaluación del interesado colocándolo en el orden de prelación que le corresponda. Si ya fue efectuada la promoción y hubiere obtenido un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso, será considerada como postergación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a los veinte días del mes de abril del año de dos mil diez.

La Comisión de Marina

Diputados: Alejandro Gertz Manero (rúbrica), presidente; Luis Antonio Martínez Armengol, Carlos Martínez Martínez (PRI), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Antonio Benítez Lucho, Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Martha Elena García Gómez, Luis Alejandro Guevara Cobos, Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Humberto Lepe Lepe, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Mario Moreno Arcos, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Julio Saldaña Morán, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Álvaro Raymundo Vargas Sáenz, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 6o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 2 de marzo de 2010, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

3. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 7 de abril de 2010, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71,

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

4. De la misma forma y con la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

5. El veintiuno de abril del dos mil diez, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por unanimidad.

Contenido de las iniciativas

- Respecto de la iniciativa de los Diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero y del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia

1. Los proponentes manifiestan que el sistema penitenciario mexicano está construido bajo modelos enfocados a la población masculina, haciendo de lado las necesidades de espacios propios para las mujeres reclusas en un centro de readaptación social y los requerimientos específicos para albergar a sus hijos lo cual, señalan, vulnera los derechos de las mujeres así como los de las niñas y niños, los cuales se encuentran protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Expresan que alrededor de 33 mil 498 niñas y niños son hijos de mujeres reclusas, los cuales carecen de las condiciones y espacios necesarios para proveerles un desarrollo armónico e integral, que les permita poseer los elementos necesarios para alcanzar un mejor futuro, razón por la cual es necesario modificar los modelos bajo los cuales son construidos la mayoría de los penales mexicanos, pues de las 446 cárceles con las que se cuenta en México, sólo 12 son abocadas para albergar a mujeres, el resto únicamente cuenta con un anexo para población femenina, lo cual permitirá a las mujeres que están sentenciadas a poder convivir de forma más segura, adecuada y continua con sus hijas e hijos, lo cual, sin duda, ayudara a tener un mejor proceso de reinserción social que les permitirá una formación integral de oportunidades.

3. Señalan que el diseño de espacios que aseguren el desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, educación y salud, hará visibles los derechos de las y los hijos de madres que cumplen con una pena y permitirá dar un paso importante en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. De igual manera expresan la necesidad de contar con personal capacitado para atender a las hijas e hijos de las internas para implementar programas de desarrollo infantil al lado de sus madres, alejándolos de un ambiente de violencia y sobretodo evitando su crecimiento fuera de un entorno familiar, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño.

4. La prestación del servicio médico a los internos y en particular a las mujeres internas en los centros de reclusión de nuestro país, regularmente quebranta su derecho humano a la protección de la salud por no contar con servicios médicos necesarios o mínimos, de acuerdo con informes presentados por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la situación de los internos y las internas en la mayoría de los centros de reclusión del orden federal y de las entidades federativas predominan problemas de sobrepoblación y hacinamiento.

5. Los proponentes aluden al hecho de que en la legislación mexicana no existe la regulación que indique las condiciones y la temporalidad en las que se atenderá a las hijas e hijos de madres que purgan alguna sentencia, por lo que según lo manifestado, dicha iniciativa al proponer dotar de los servicios necesarios para garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos de madres que purgan alguna condena es consecuente con los que establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona que "los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, para que alcancen su desarrollo integral".

6. Finalmente manifiestan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general número 3, del 14 de febrero de 2002, estableció la necesidad de que se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres sus familias en los centros de reclusión del país, y para que las internas mantengan el contacto necesario con los hijos que viven en el exterior, razón por la cual se propone reformar la ley en comento.

• Respetto de la iniciativa de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero

1. La proponente expresa que la prestación del servicio médico a los internos y en particular a las mujeres internas en los centros de reclusión de nuestro país, regularmente quebranta su derecho humano a la protección de la salud por no contar con servicios médicos necesarios o mínimos, de acuerdo con informes presentados por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la situación de los internos y las internas en la mayoría de los centros de reclusión del orden federal y de las entidades federativas predominan problemas de sobrepoblación y hacinamiento, asimismo, informan que en la mayoría de los centros de reclusión del país se presentan graves deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos, esto puede derivar en un problema de salud pública.

2. Manifiesta que en México existe un total de 431 centros penitenciarios, desde los reclusorios preventivos de las grandes ciudades y los centros federales de alta seguridad, hasta las cárceles de menor estructura, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública en 2009, del total de la población reclusa que resulta de 218,832 de este total el 95% está conformada por hombres y 11,469, que en porcentaje resulta el 5%, son mujeres, 266 del total de los centros penitenciarios del país cuentan con mujeres reclusas de los cuales tan solo 9 son centros femeniles con una población de 3,076 internas. En el resto de los centros penitenciarios que cuentan con mujeres existe una pequeña sección que alberga a esta población, constituyendo esto, la primera fuente de desventaja para ellas.

3. Señala que debido a que el sistema se encuentra estructurado tomando como modelo al hombre, la mujer es, en todo caso, una especie de apéndice que se agrega a dicho modelo, basta mirar el diseño de las prisiones, la distribución de sus espacios, o bien sus normas, para corroborar que en ellos no se toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.

4. Insiste en que dadas las condiciones de desigualdad tanto social como de género para la mujer, los sistemas de procuración y administración de justicia reproducen una situación de desigualdad, por lo que el sistema penitenciario mexicano necesita definir una política de género que garantice un modelo adecuado de atención de las necesidades de las mujeres recluidas, tomando en cuenta su vulnerabilidad y situación de desventaja principalmente por el abandono de su familia que es más recurrente que en el caso de los hombres.

5. Expresa que esta iniciativa responde a la necesidad de ir adecuando nuestro marco jurídico a la realidad social para garantizar el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, en este caso, de las mujeres recluidas a fin de que cuenten con atención médica especializada y permanente, centrada en la prevención y no sólo en la atención de emergencia, que trae como consecuencia que las enfermedades de las internas y los internos, incluso las más comunes, no sean atendidas de manera oportuna, aunado ello, a que generalmente no se cuenta con medicamentos suficientes para tal efecto, por lo que dichas carencias provocan que las actividades de promoción para la salud que se realizan, se reduzcan a pláticas esporádicas sobre diversas enfermedades y que prácticamente no existan programas de prevención de padecimientos y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas.

6. Derivado de lo anterior, propone que se brinden servicios de atención médica que permita a los internos y las internas la atención y resolución de sus problemas de salud, así como precisar que en los centros de reclusión para mujeres, existan servicios ginecológicos necesarios para la atención especializada.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que con base en los antecedentes antes expuestos y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones antes señaladas, se avoca a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

2. En distintos estudios se ha demostrado que la distinción de la situación de las mujeres que por algún motivo se encuentran en prisión, en contraposición a la del hombre, resulta evidente. En febrero de 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer la recomendación general número 3, enmarcada en el Programa sobre el Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento. Después de visitar 311 centros penitenciarios en 24 entidades federativas, siendo una de las conclusiones que las condiciones de vida en reclusión de las

mujeres y los hombres, al ser injustificadamente distintas, ponen de manifiesto la mayor vulnerabilidad que, sólo por razón de género, tienen las internas, dicha vulnerabilidad se concreta porque están excluidas o, al menos, no cuentan con iguales oportunidades que los varones, para acceder a determinados derechos que tienen reconocidos. Ello, se extiende a sus hijos que permanecen con ellas en la prisión, pues sólo, excepcionalmente, cuentan con los satisfactores adecuados y necesarios para su sano desarrollo.

3. Al respecto, existen diversos instrumentos internacionales que claramente establecen los requerimientos mínimos que deben cubrir los centros penitenciarios, ejemplo de ello son las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Delincuente, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, las cuales se integran por 95 preceptos que representan, en su conjunto, las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas para una buena organización penitenciaria, estableciéndose en la regla octava *que los hombres y las mujeres deberán ser reclusos, hasta donde sea posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento donde se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá de estar completamente separado.*

Específicamente la regla 23.1 expresa que *en los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes.* Continúa expresando que, hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.

Asimismo, la regla 23.2 señala que *cuando se permita a las madres reclusas conservar a su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando se hallen atendidos por sus madres.*

4. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 18 lo siguiente:

"Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa."

Como se puede observar, dicho artículo señala de manera expresa que las mujeres deben de estar separadas en establecimientos independientes en donde se brinde atención especializada tanto hombres como a mujeres.

5. Por lo que hace a los Centros Penitenciarios, existen 439 centros de ellos 6 son del gobierno federal, 10 del gobierno del Distrito Federal, 329 de los gobiernos estatales y 94 de gobiernos municipales.

Aunado a lo anterior, el *Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México*, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México detalla señala que derivado de diversos estudios realizados, se constata que el Sistema Penitenciario se rige por un modelo excluyente del género femenino, *que va desde el diseño arquitectónico de las prisiones, hasta los reglamentos y manuales que explican su funcionamiento*, todo esto bajo el argumento de que las mujeres representan un porcentaje significativamente menor de la población penitenciaria.

6. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, en su Artículo segundo establece que:

- 1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.**
- 2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.**

De igual forma, en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, en su artículo 20 establece que:

- 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.**
- 2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.**

Ahora bien, el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que:

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

La convención compromete a los Estados parte a velar por el bien superior de la infancia y hacer lo conducente para asegurar la protección, cuidado y desarrollo de las niñas y niños, además el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

El texto es muy claro: los tratados internacionales a los cuales se ha adherido México, forman parte de la ley suprema de toda la Unión y, en consecuencia, tienen por imperativo expreso del artículo 133 constitucional, una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a la de las leyes secundarias federales y locales. Este rango jerárquico ha sido jurisdiccionalmente resuelto, al respecto, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial:

Registro número 172667

Localización: Novena época, instancia: pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXV, abril de 2007, p. 6, tesis: P. VIII/2007, tesis aislada, materia(s): constitucional.

Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión. Interpretación del artículo 133 constitucional

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución general de la República, las leyes generales del Congreso de la

Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "ley suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Amparo en revisión 120/2002. McCain México, SA de CV, 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.¹

En cuanto al requisito de fondo de que los tratados "estén de acuerdo con la misma", la Suprema Corte de Justicia rechaza la interpretación gramatical y argumenta que, en caso de que los *convenios internacionales amplíen las garantías individuales o sociales previstas en la Constitución, aquéllos deben considerarse acordes a dicha Constitución.*

Así las cosas, el poder público (poder constituido) no tiene competencia para restringir las garantías instauradas en la Constitución, y no la tiene porque tales garantías se fundamentan en que el pueblo soberano, a través de la Asamblea Constituyente de Querétaro de 1916-1917, impuso a los poderes constituidos. Estos últimos están constitucionalmente impedidos para eludir o restringir esa barrera; en cambio, *sí están facultados para ensancharlas, en otras palabras, las garantías pueden ser ampliadas mediante los tratados y también por medio de las leyes secundarias.*

7. Con base en las consideraciones antes expuestas, se concluye que el estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar a las niñas y niños su seguridad y bienestar, así como de formular políticas penitenciarias que observen en todo momento las condiciones específicas para asegurar los espacios correspondientes requeridos para posibilitar el desarrollo integral de las hijas e hijos que se encuentran con sus madres en un centro penitenciario, por lo que esta dictaminadora considera apropiado incluir en el ordenamiento objeto del presente dictamen parámetros generales y claros que permitan observar lo anterior.

8. En este sentido, el honorable Congreso de la Unión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la imperiosa necesidad de legislar al respecto a fin de dotar de mecanismos y parámetros adecuados a este sector tan vulnerable de la sociedad que se encuentran en los centros penitenciarios, ello teniendo como premisa fundamental salvaguardar sus derechos fundamentales.

Es por eso que con fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, en sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el dictamen

emitido por la Comisión de Seguridad Pública, a con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, estableciendo en el citado proyecto de decreto lo siguiente:

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 10; se adiciona un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto, el artículo 6: y un tercer párrafo al artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

...

En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y con posterioridad a éste.

...

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, **tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del reclusorio.** El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazara un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.

...

...

Artículo 11. ...

...

Los hijos de las mujeres reclusas, en caso de que permanezcan en la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de seis años.

9. El dictamen antes citado, fue remitido en fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho a la colegisladora para sus efectos Constitucionales, turnándose el mismo a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

La minuta en comento, contempla la obligación por parte de los centros penitenciarios de proporcionar a las mujeres internas la atención médica, servicios ginecológicos necesarios, así como la atención especializada que requieren durante el embarazo y con posterioridad a éste, además de considerar en la asignación de trabajo los deseos, vocación y aptitudes, y en su caso, el estado de gravidez, por lo que la propuesta de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero se considera incluida y atendida.

Esta comisión comparte la preocupación manifestada por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, respecto a que actualmente aún no se cuenta con disposiciones claras y expresas en la materia, aún y cuando ya exista la minuta antes citada, misma que se encuentre pendiente de dictaminación en el Senado de la República y la cual resulta en sus totalidad coincidente con el contenido de la iniciativa de la proponente, considerando por tanto oportuno exhortar a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República a fin de que se emita el dictamen respectivo.

10. En complemento de esta iniciativa, los proponentes han establecido de manera explícita la necesidad de tutelar el bien superior de la infancia, no sólo de las mujeres en reclusión y lo referente a su salud y atención médica, a fin de que la reforma a la ley no sea sólo en un sentido enunciativo sino que se establezcan los mecanismos legales, financieros y materiales a fin de que se asegure el cumplimiento de esta disposición tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

11. Esta comisión, coincide con la importancia aducida por los diputados proponentes de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los hijos de las internas en los centros penitenciarios del país, dando así pleno cumplimiento al mandato Constitucional, así como a los Tratados Internacionales y a las leyes federales en cuestión.

12. Es fundamental adoptar los mecanismos necesarios para garantizar la protección plena de los derechos de las niñas y niños, que permita a su vez brindar a las internas un trato digno, acorde a la situación de vulnerabilidad con la que cuentan, que en los centros penitenciarios existan instalaciones adecuadas para cubrir las necesidades básicas tales como son: servicio médico, estancias infantiles, educación con personal calificado que atiendan a los niños a los que se les permita vivir con sus madres en los centros penitenciarios.

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o. y 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 6o. y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 3o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

...

...

Se celebraran convenios con las entidades federativas a fin de establecer que las hijas e hijos de internas, que permanezcan con ellas, dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia.

...

...

Artículo 6o. ...

...

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán reclusas en lugares separados de los destinados a los hombres **y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas así como para el desarrollo pleno de sus actividades.** Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Nota

1. En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por McCain México, SA de CV, se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de abril de dos mil diez.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaña (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irizar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.

CONTENIDO

Dictámenes

De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales

Anexo VII

Miércoles 28 de abril

DICTAMEN COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública de la LX Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.

Estas Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 15 de abril del 2009, el Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

II. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.PL. 60-II-2-2447, acordó se turnara a la Comisiones de Justicia y Seguridad Pública.

III. Con fechas 06 y 21 de abril del 2010, las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública, correspondientemente, aprobaron en sesión Plenaria, este dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- El diputado que propone manifiesta, que existe actualmente un panorama desalentador para la industria ferroviaria, las empresas concesionadas han tenido que remar a contracorriente, ya que los robos, actos de sabotaje y ataques a las vías del ferrocarril se han multiplicado. En los últimos años se ha agudizado en algunos estados del territorio mexicano el robo a trenes, principalmente de productos como maíz, trigo, azúcar, oleaginosas, abarroses y autopartes principalmente.

2.- El que propone expresa, que los numerosos asaltos a trenes vuelven a revivir las imágenes de la lucha revolucionaria de 1910, en la que los trenes eran detenidos por grupos de entre 10 y 20 personas armadas con piedras, machetes y armas de fuego para vaciar los contenidos de los vagones de carga.

3.- El proponente señala que el robo de maíz en trenes de carga va en aumento. Mientras en 2008 el promedio mensual de robo de ese grano en trenes fue de 35 toneladas, apenas en enero del 2009 ya van 700 toneladas. Durante el año pasado se llevaron a cabo 2 mil robos y más de 50 trabajadores, incluyendo tres maquinistas, resultaron lesionados por los asaltantes, en ocasiones se efectuaron hasta 20 robos diarios a furgones de trenes.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

El incremento delictivo es tal que las compañías ferroviarias han informado a las empresas que contratan el servicio que estudian la posibilidad de eliminar su seguro de carga, por lo que, en caso de robo, indemnizarían sólo el 20 por ciento del valor de las mercancías robadas.

4.- Enfatiza, la creciente agresión y actos delictivos en contra de ferrocarriles se encuentra en constante aumento, provocando inseguridad para los operarios, para los clientes que contratan el servicio de transporte y para las empresas ferroviarias. Además, existe una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas, existen indicios del surgimiento de la delincuencia organizada, que empiezan a traficar con la mercancía robada de los trenes y que se escudan en la manipulación de niños y mujeres para dar la imagen de causas sociales, lo que paulatinamente se convierte en una nueva vertiente de la delincuencia, sobre la base de las lagunas jurídicas, de políticas ineficaces e impunidad.

5.-La iniciativa que se somete a consideración de esta honorable asamblea se busca dotar de medidas de protección al transporte ferroviario, a través de seguridad jurídica al transporte de mercancías por ferrocarril y al sector ferroviario, estimulando la actividad de diversas empresas e industrias, así como diferentes proyectos de inversión.

6.- Menciona que las propuestas de reformas que aquí se plantean en materia penal, pretenden impactar de manera positiva en esferas prioritarias para el país, como la economía y la competitividad. Toda vez que las acciones, ya sea preventivas, ejecutivas, judiciales o legislativas que impulsen el desarrollo de la actividad ferroviaria, estarán impulsando el desarrollo del país, toda vez que el transporte eficiente aporta grandes beneficios a la industria nacional, estimula la planta productiva, reduce costos, abre y mantiene empleos, acorta las distancias, cuida el medio ambiente, y nos inserta en un escenario moderno y global.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

7.- El que propone específicamente pretende con esta iniciativa, reformar el segundo párrafo del artículo 286 del Código Penal Federal, a efecto de incluir los carros del transporte ferroviario a los elementos del tipo penal en el delito de asalto en vías generales de jurisdicción federal.

De igual forma, se propone adicionar una nueva fracción XVII al artículo 381 del mismo código, para que sea considerado como robo calificado aquél que se cometa contra el transporte ferroviario, el personal que lo opera o el que labora en los trenes, los pasajeros o las mercancías que transporte y en cualquier localidad en donde se cometa. Asimismo, para este supuesto se considera la penalidad de dos a siete años de prisión, ya establecida en el artículo.

Se reforma el inciso 25 de la fracción I del artículo 194 del Código Penal de Procedimientos Penales, a fin de calificar como delito grave el previsto en la fracción XVII que se propone adicionar al artículo 381 del Código Penal Federal.

Se adiciona un nuevo inciso n), a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que los jueces penales federales conozcan de los delitos previstos en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, misma que es objeto de esta iniciativa.

Finalmente, se adiciona una conducta típica al artículo 2, fracción V, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a efecto fortalecer el andamiaje legal que permita dar una lucha frontal al crimen organizado que ahora lesiona un sector productivo más del país.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que con base en los antecedentes antes expuestos y con los elementos de información disponibles, las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública, con las atribuciones antes señaladas se avocaron a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEGUNDO. Debido al interés público y social, al estado mexicano le asiste como obligación evitar y en su caso, sancionar a quien haga uso de la violencia en contra en las vías generales de comunicación, específicamente en el transporte ferroviario, el cual de haber sido un sistema de transportación seguro, actualmente se ha transformado en objeto de la delincuencia.

TERCERO. En cuanto a la reforma planteada en el artículo 286 del Código Penal Federal, en la cual se propone adicionar las vías ferroviarias, así como a los carros y locomotoras de transporte ferroviario, dicha propuesta se considera innecesaria, toda vez que el párrafo segundo del citado numeral ya prevé dicha disposición al señalar que *"la pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia..."* esto es, los caminos o carreteras que constituyen vías de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías, entendiéndose por caminos o carreteras las que entronquen con algún camino de país extranjero, las que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, tal como lo señala el artículo 1º y 2º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 1º. *La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los **caminos** y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo siguiente, **los cuales constituyen vías generales de comunicación**; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito de dichas vías.*



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

"Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Caminos o carreteras:

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

- a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero;
- b) Los que se comuniquen a dos o más estados de la Federación; y
- c) **Los que en su totalidad o en su mayor parte sean contruidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.**

II a XIV. ...

XV, Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal y como se definen en el presente artículo".

CUARTO. Cabe señalar que, el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo, considerándolo dentro de las vías generales de comunicación, tal y como se desprende de los artículos 1º y 3º de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que a la letra señalan:

"Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y **tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación,** así como el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte”.

"Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando:

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas;

II. En todo o parte del trayecto estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas Urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.”

QUINTA. A fin de reforzar lo anteriormente expresado, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 165 del Código Penal Federal, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 165. Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinados al uso público sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.”

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

Como se muestra en el citado artículo, resulta innecesaria la inclusión del término "vías férreas" al artículo 186 del Código Penal Federal, toda vez que ya se encuentra contemplado en el término "camino" del texto legal vigente.

No obstante, derivado del análisis del contenido de la iniciativa, así como de las consideraciones vertidas en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, siendo el espíritu original de la misma el brindar mayor protección jurídica a los más de veintiocho mil quinientos kilómetros de vías férreas en el territorio nacional, procurando primordialmente la protección de los bienes propiedad de la Nación, así como de empresas dedicadas a actividades ferroviarias, si bien esta Comisión *no coincide con la propuesta vertida en el dictamen de la Comisión de Justicia, en cuanto a adicionar los términos "camino, puentes y vías férreas", a la luz de las consideraciones anteriormente expuestas,* a fin de dar viabilidad y atender la preocupación manifestada por el proponente así como por la Comisión de Justicia, por su parte la Comisión de Seguridad Pública *sugirió adicionar el término "vías generales de comunicación",* proponiéndose la siguiente redacción:

"Artículo 286. ...

*La pena será de diez a treinta años de prisión para el que **en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas,** haga uso de violencia en contra de los ocupantes de un **vehículo de transporte público o privado.**"*

Con la adición y redacción propuesta, se impide acotar el tipo penal únicamente a aquellas conductas que se configuren únicamente en las vías de comunicación propuestas, dejando abierta la posibilidad de sancionar aquellas conductas que se realicen en vías distintas a las establecidas en el artículo en comento, esto es, incluyendo cualquier tipo de transporte, independientemente del tipo de tecnología y modo de traslado del mismo.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEXTA. A su vez, se considera innecesaria la inclusión de los términos "*carros y locomotoras de transporte ferroviario*" toda vez que el ferrocarril consiste en un conjunto de instalaciones, vehículos y equipos que constituyen este medio de transporte, de lo cual se desprende que el término de carro es similar a vehículo y la locomotora es parte integrante del mismo.

SÉPTIMO. La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece en el artículo 2º, fracción II, que el equipo ferroviario son los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas, lo cual refuerza el argumento antes esgrimido respecto a la inviabilidad de adicionar el término "carros" al artículo en comento.

OCTAVO. Respecto a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal, a fin de establecer una agravante cuando se cometa el delito contra vehículos del transporte ferroviario, el personal que lo opera o el que labora en los trenes, los pasajeros, los equipos o las mercancías que transporte y en cualquier localidad en donde se cometa, dicha agravante se considera innecesaria pues el Código Penal Federal, prevé el Título Quinto, denominado "Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia" el cual señala lo siguiente:

"Artículo 166. Al que quite, corte o destruya las ataderas que detengan una embarcación u otro vehículo , o quite el obstáculo que impida o modere su movimiento, se le aplicará prisión de quince días a dos años si no resultare daño alguno; si se causare de aplicará además la sanción correspondiente por el delito que resulte."

"Artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización: uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que las sujeten, o un cambiavías de ferrocarril de uso público:

II. ...

III. Al que para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;

IV. Por el incendio de un vagón, o de cualquier otro vehículo destinado al transporte de carga y que no forme parte de un tren en que se halle alguna persona.

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. Al que con el objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad, y

IX. Al que difunda o transmita información falsa que en cualquier forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio público federal”.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

Derivado de los preceptos legales antes citados es que resulta innecesario el establecimiento de una agravante para el delito de robo, toda vez que ya existe un tipo penal específico que sanciona el acto de "quitar o modificar" elementos de un ferrocarril, acto que resulta presupuesto necesario para consumar el delito de robo.

NOVENO. Cabe destacar que no se observa dentro del Título invocado sanción alguna respecto al objeto sobre el cual recae el hecho ilícito, por lo que se considera necesario rescatar dicho planteamiento, coincidiendo así con la propuesta planteada por la Comisión de Justicia, por lo que se considera oportuna la adición de la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 381...

I a XVI. ...

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario".

De esta manera se atiende la preocupación planteada en el cuerpo de la iniciativa del proponente y se regulan de manera clara conductas que no están previstas en la legislación sustantiva en comento.

DÉCIMO. Respecto a la propuesta de adicionar el artículo 194 del Código Penal Federal a fin de establecer como delito grave el robo calificado, previsto en el artículo 381, fracción XVII, es de indicar que los tipos penales comprendidos dentro del artículo en comento, deben ser conductas consideradas graves por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. En este orden de ideas, el sólo aumento de las consecuencias jurídicas no genera necesariamente como resultado la disuasión de la realización de un ilícito, así, se observa que las conductas que se proponen no revisten la gravedad para incluirlas dentro del catálogo de delitos graves.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

DÉCIMO PRIMERO. Respecto a adicionar la fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se considera necesario advertir que los tipos penales comprendidos en el citado precepto legal, deben ser conductas consideradas graves por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Así, el sólo aumento de las consecuencias jurídicas ***no genera necesariamente como resultado la disuasión de la realización de un delito, aunado a que el artículo 286 del Código Penal Federal actualmente ya se contempla en dicho artículo como delito grave***, sin embargo, de insistirse en la citada adición, esta Comisión se adhiere a la propuesta planteada por la Comisión de Justicia, quedando de la siguiente manera:

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 24) ...

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI **y XVII;**

26) a 36) ...

II a XVII. ...

...



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

DÉCIMO SEGUNDO. El aumento de la pena de prisión que se propone debe guardar necesariamente correspondencia con el hecho ilícito realizado, esto es, no todos los delitos deben ser sancionados con la misma intensidad, por lo tanto el legislador debe observar en todo momento que la sanción y la afectación a los bienes jurídicos tengan proporción, es decir, tomar en consideración el *principio de*

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

proporcionalidad, según el cual "No sólo es preciso que pueda culparse al autor de aquello que motiva la pena, sino que la gravedad de esta resulte proporcionada a la del hecho cometido (...) la proporcionalidad es necesaria para graduar las penas, por lo que ha de erigirse en principio general de todo Derecho Penal¹.

DÉCIMO TERCERO. Por lo que hace a la propuesta de adicionar el inciso n) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el objeto de que los jueces federales penales conozcan de los delitos cometidos en contra de vehículos de transporte ferroviario, se considera que la propuesta es innecesaria, toda vez que lo anterior ya se encuentra establecido en el artículo 5 de la Ley General de Vías de Comunicación, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 5º. Corresponderá a los Tribunales Federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o la integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que estén bajo su responsabilidad."

¹ Mir Puig, Santiago. *Derecho Penal Parte General*, 5a Ed. Edit. Barcelona, España. 1998. pp. 99-100



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

Así mismo, se desprende del artículo 50 fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica en comento, que los delitos federales son aquellos **cometidos en contra de un servidor público o empleado federal.**

DÉCIMO CUARTO. Respecto a la adición propuesta al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de incorporar como delito cometido en esta modalidad **lo mandado por la fracción XVII del artículo 381, referente al transporte ferroviario** del Código Penal Federal, es de advertir que con fecha 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal.

En el decreto de referencia se reforma entre otros, el artículo 16, el cual establece en la materia que nos ocupa lo siguiente: ***"...Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley en la materia.***

Tal y como se desprende del citado precepto constitucional, la materia de delincuencia organizada es aplicable a una organización con determinadas características y tiene como finalidad la comisión de determinados delitos, atendiendo a su gravedad.

DÉCIMO QUINTO. Asimismo, debe observarse que la naturaleza de estos delitos, constituyen una problemática sumamente grave que no solo afecta intereses individuales o colectivos, sino que pone en riesgo la Seguridad de la Nación y, por lo tanto, la vigencia del estado de derecho, ya que por su naturaleza (de ser más organizada, más violenta, poseer un carácter internacional, etc.), se encuentra siempre en ventaja, frente a los tradicionales medios de control estatal.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

Por lo que se concluye que la propuesta de considerar el robo en materia de transporte ferroviario, previsto en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, resulta incorrecta, pues el tipo penal no cumple con la naturaleza de los delitos de delincuencia organizada.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 286, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA EL INCISO 25) A LA FRACCIÓN IDEL ARTÍCULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 286 y se adiciona la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 286. ...

La pena será de diez a treinta años de prisión para el que **en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas**, haga uso de violencia en contra de los ocupantes de un **vehículo de transporte público o privado**.

Artículo 381...

I a XVI. ...

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario.

...

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el inciso 25) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 24) ...

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y **XVII**;

26) a 36) ...

II a XVII. ...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procesos que se encuentren en conocimiento de los Jueces del Fuero Común de los Estados y del Distrito Federal, continuarán de la misma forma hasta su conclusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de abril de 2010.

Por la Comisión de Justicia:

Dip. Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente

PRI

Dip. José Tomás Carrillo Sánchez
Secretario

PRI

Dip. Sergio Lobato García
Secretario

PRI

Dip. Oscar Martín Arce Paniagua
Secretario

PAN

Dip. Camilo Ramírez Puente
Secretario

PAN

Dip. Ezequiel Retiz Gutiérrez
Secretario

PAN

Dip. Eduardo Ledesma Romo
Secretario

PVEM

Dip. Víctor Hugo Cirigo Vázquez
Secretario

CONV



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

Dip. Luis Carlos Campos Villegas
Integrante

PRI

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz
Integrante

PRD

Dip. Felipe Amadeo Flores Espinosa
Integrante

PRI

Dip. Nancy González Ulloa
Integrante

PAN

Dip. Leonardo Arturo Guillén Medina
Integrante

PAN

Dip. Mercedes del Carmen Guillén
Vicente
Integrante

PRI

Dip. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
Integrante

PRI

Dip. Gregorio Hurtado Leija
Integrante

PAN



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

Dip. Sonia Mendoza Díaz
Integrante

PAN

Dip. Jesús Alfonso Navarrete Prida
Integrante

PRI

Dip. Ángeles Nazares Jerónimo
Integrante

PRD

Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas
Integrante

PAN

Dip. Rodrigo Pérez-Alonso González
Integrante

PVEM

Dip. Norma Leticia Salazar Vázquez
Integrante

PAN

Dip. Cuauhtémoc Salgado Romero
Integrante

PRI



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS
CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

Dip. José Alfredo Torres Huitrón
Integrante

PRI

Dip. Enoé Margarita Uranga Muñoz
Integrante

PRD

Dip. Josué Cirino Valdés Huevo
Integrante

PRI

Dip. Ardelio Vargas Fosado
integrante

PRI

Dip. Alma Carolina Viggiano Austria
Integrante

PRI

Dip. Pedro Vázquez González
Integrante













PT

Dip. Arturo Zamora Jiménez
Integrante

PRI


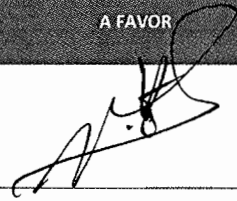

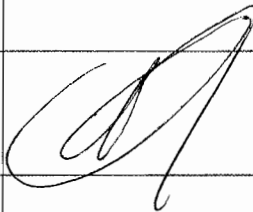


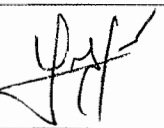

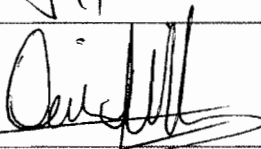



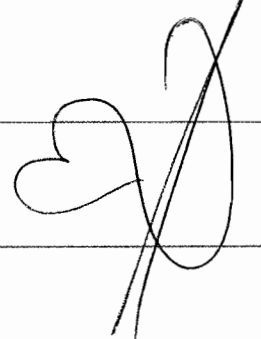

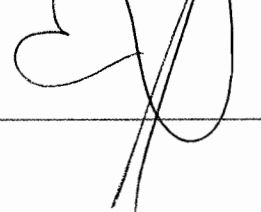


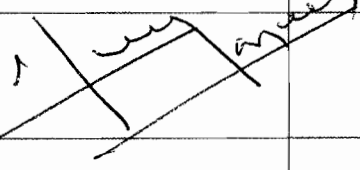


- I. QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SUSTENTAR EL DICTAMEN DEFINITIVO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Sentido del dictamen: POSITIVO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1 Dip. José Luis Ovando Patrón			
2 Dip. Sergio González Hernández			
3 Dip. Bonifacio Herrera Rivera			
4 Dip. Ma. De Jesús Aguirre Maldonado			
5 Dip. Manuel Esteban de Esarte P.			
6 Dip. Felipe Amadeo Flores Espinoza			
7 Dip. J. Eduardo Yáñez Montaño			
8 Dip. Adriana Sarur Torre			
9 Dip. Teresa del Carmen Incháustegui R			
10 Dip. Alejandro Gertz Manero			
11 Dip. Miguel Álvarez Santamaría			
12 Dip. Oscar Martín Arce Paniagua			



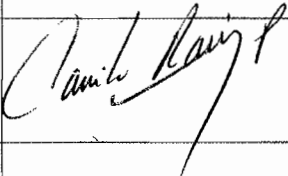



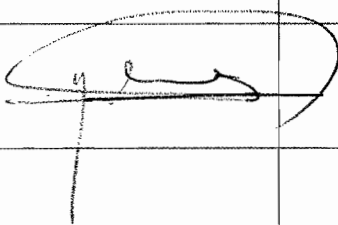

- I. QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SUSTENTAR EL DICTAMEN DEFINITIVO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Sentido del dictamen: POSITIVO

LEGISLADOR		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
13 Dip. Víctor Hugo Cingo				
14 Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia				
15 Dip. Salvador Caro Cabrera				
16 Dip. Ernesto de Lucas Hopkins				
17 Dip. Omar Fayad Meneses				
18 Dip. Jorge Ferando Franco Vargas				
19 Dip. Luis Alejandro Guevara Cobos				
20 Dip. Aarón Itz'ar López				
21 Dip. Feliciano Rosendo Marín Díaz				
22 Dip. Manuel Guillermo Márquez Lizalde				
23 Dip. Rosi Orozco				
24 Dip. Gustavo Antonio Miguel Ortega J				

- I. QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SUSTENTAR EL DICTAMEN DEFINITIVO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Sentido del dictamen: POSITIVO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
25 Dip. María Antonieta Pérez Reyes 			
26 Dip. Camilo Ramírez Puente 			
27 Dip. Francisco Lauro Rojas San Román 			
28 Dip. Arturo Santana Alfaro 			
29 Dip. Ricardo Sánchez Gálvez 			
30 Dip. Ardelio Vargas Fosado 			

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, PRI, presidente; Josefina Vázquez Mota, PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Juan José Guerra Abud, PVEM; Pedro Vázquez González, PT; Pedro Jiménez León, CONVERGENCIA; Reyes Tamez Guerra, NUEVA ALIANZA.

Mesa Directiva

Diputados: Presidente, Francisco Ramírez Acuña; vicepresidentes, Francisco Javier Salazar Sáenz, PAN; Felipe Solís Acero, PRI, José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD; secretarios, María Dolores del Río Sánchez, PAN; Georgina Trujillo Zentella, PRI; Balfre Vargas Cortés, PRD; Carlos Samuel Moreno Terán, PVEM; Gerardo Fernández Noroña, PT; Jaime Arturo Vázquez Aguilar, NUEVA ALIANZA; María Teresa Ochoa Mejía, CONVERGENCIA.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>

CONTENIDO

Dictámenes

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Anexo VIII

Miércoles 28 de abril

HONORABLE ASAMBLEA.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

I. ANTECEDENTES.

1. En la sesión ordinaria celebrada por esta Cámara de Diputados el día 22 de Abril de 2010, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, diputadas y diputados adherentes de la LXI legislatura, presentaron ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. En la misma sesión la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó turnar la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con base en lo anterior, la Comisión que suscribe, realizó un cuidadoso estudio a efecto de elaborar el siguiente dictamen:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa objeto del presente dictamen, tiene la finalidad de dar solución a tres grandes problemas inherentes al funcionamiento del Programa de Apoyo Social, que son motivo de preocupación de las organizaciones de ExTrabajadores Migratorios Mexicanos, los cuales se detallan a continuación:

a) La decisión del Ejecutivo Federal, tomada el pasado 29 de junio de 2009, en el sentido de que el importe de apoyo social que se entregará a cada beneficiario, será por la cantidad de 38 mil pesos pagados en exhibiciones parciales anuales;

b) El carácter limitado y marcadamente insuficiente de la asignación de partidas presupuestales para pago a Ex Braceros por parte de esta H. Cámara de Diputados; y

c) El carácter restrictivo y por lo tanto excluyente del texto actual de la Ley vigente.

Se señala en la exposición de motivos que la iniciativa es resultado del análisis de otras 7 iniciativas, suscritas por los Diputados Gerardo Leyva Hernández (PRI), Miguel García Granados (PRI), María Dina Herrera Soto (PRD), Samuel Herrera Chávez (PRD), Georgina Trujillo Zentella (PRI), y Diva Hadamira Gastelúm Bajo (PRI); así como 16 proposiciones a cargo de los Diputados María Dina Herrera Soto (PRD), José Manuel Hinojosa (PAN), José Antonio Arámbula López (PAN), Senadores: Carlos Jiménez Macías (PRI), Adolfo Toledo Infanzón (PRI), Diputados María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI), María Isabel Merlo Talavera (PRI), Samuel Herrera Chavéz (PRD), Senador Ricardo Mónreal Ávila (PT), Diputados Óscar García Barrón (PRI), Diva Hadamira Gastelúm Bajo (PRI), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (PAN) y Carlos Luis Meillón Johnston (PAN); presentadas con el objeto de impulsar una solución adecuada, a la referida problemática de los ex trabajadores braceros, para lo cual se cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputados.

III. CONSIDERACIONES.

1. De acuerdo a la exposición de motivos de la Iniciativa que se dictamina, ésta “surge ante la impostergable necesidad por actuar en beneficio de este grupo vulnerable e impulsar las gestiones, acuerdos y dictámenes necesarios, con el objetivo de obtener recursos de los estados y la federación, suficientes para poder finiquitar este compromiso con México y sus ciudadanos dándole punto final a la tarea que nos fue encomendada como legisladores.”

2. Esta Dictaminadora considera que del contenido de los artículos 1º, 2º y 6º de la vigente Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se desprende que sólo se contemplan como beneficiarios de la misma a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América

durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que les sobrevivan, omitiendo considerar una realidad que existe en nuestro País, que es la de que muchas parejas viven en el concubinato, así como que a falta de hijos o hijas, pudieran existir legítimos herederos que sobrevivan al ex trabajador, razón por la cual se considera conveniente introducir reformas a la fracción I del artículo 2º y al primer párrafo del artículo 6º que subsanen dicha omisión.

3. Por otro lado, esta Comisión estima, como se propone en la iniciativa, la pertinencia de que la Cámara de Diputados tenga presencia en el seguimiento del cumplimiento de los postulados de la Ley, por lo que considera procedente la propuesta de reforma al artículo 3º, para que dentro del Comité Técnico del Fideicomiso, intervenga como observador el Presidente o alguno de los secretarios de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros; sin embargo, esta Comisión considera conveniente que la reforma establezca que intervenga un representante del poder Legislativo como invitado permanente y que en un artículo transitorio se prevea que éste lo designe la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a sesenta días.

4.- Finalmente, esta Dictaminadora considera adecuado que la obligación de entregar la cantidad base que refiere la propuesta de reforma al artículo 5º, se consigne en un artículo transitorio y que además se establezca que la entrega del apoyo social estará sujeta al monto de los recursos que tenga asignados este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

5. Se establece un artículo transitorio en el cual dispone que la entrega del apoyo estará sujeto a la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 5º y 6º DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 2º fracción I; 3º, párrafo primero; 5º fracción II, y 6º párrafo primero; y se ADICIONAN el artículo 5º, fracción III, con un inciso que será el inciso a), recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; y 6º, fracción III, inciso e) y fracción IV, numerales 3 y

4 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2º.- ...

I. Beneficiarios: los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges **o concubinas que acrediten su calidad mediante resolución judicial,** o hijos o hijas, **o legítimos herederos** que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley;

II a X. ...

Artículo 3o.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública; y **como invitado permanente, a un representante del Poder Legislativo.** Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

...

Artículo 5o.-...

I. ... Se deroga.

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos, a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición;

III. ...

a) Los ex trabajadores que acrediten su estado de enfermedad terminal mediante un certificado médico emitido por una institución de salud pública.

b) Se deberá dar preferencia a los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad.

- c) Los Trabajadores Migratorios del periodo 1942-1946, y
- d) Los Trabajadores Migratorios hasta el periodo 1964.

IV-XIV...

Artículo 6º. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o **concubinas**, o hijos o hijas, **o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente**, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Se deroga.

II ...

III...

a). a d). ...

e) Mención honorífica, expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964, debidamente apostillado.

IV. ...

1...

a) a d)...

2 ...

a) a e)

3.- Para la concubina:

a) Los documentos mencionados en los incisos b) a e) del numeral 2 de esta fracción.

4.- Para los legítimos herederos:

a) Los documentos mencionados en la fracción III de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de Defunción del ex trabajador migratorio mexicano.

d) Resolución judicial en que conste la calidad de legítimo heredero.

XIV. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero.- Los beneficiarios que ya hayan recibido un pago parcial de \$4,000 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), se les deberá cubrir la cantidad restante de \$34,000 (Treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a la convocatoria que el Comité Técnico publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto.- El Poder Legislativo, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, designará mediante sus normas internas a su representante.

Artículo Quinto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las previsiones necesarias, a fin de que a los beneficiarios se les otorgue el apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Sexto.- La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el ejercicio fiscal de 2010, estará sujeta al monto de los recursos que tenga asignados este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010. En el caso de que dicho monto no sea suficiente para efectuar la entrega, se podrán utilizar los ingresos excedentes netos.

Artículo Séptimo.- La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el ejercicio fiscal de 2011, estará sujeta al monto de los recursos que la H. Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.


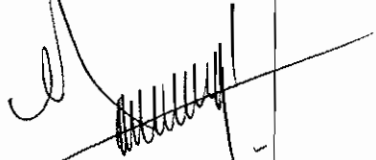
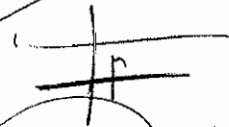
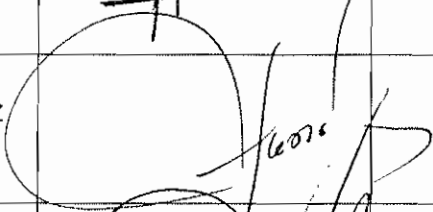
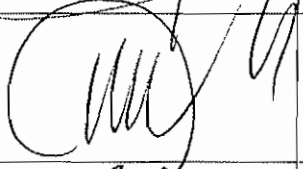

Artículo Octavo.- La H. Cámara de Diputados elaborará un informe de impacto presupuestario a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a fin de

que éste sea analizado y valorado para la asignación del apoyo social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011.

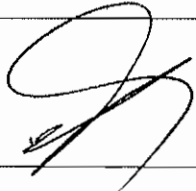
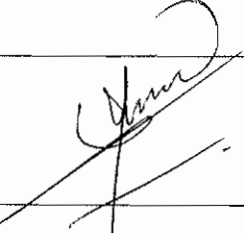
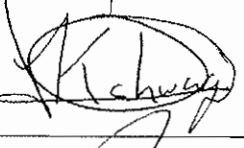
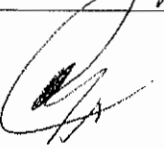

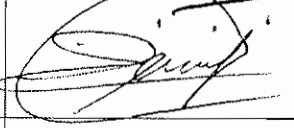

Artículo Noveno.- Con la finalidad de no vulnerar el derecho de los beneficiarios publicados en los listados del Diario Oficial de la Federación, para el caso de los supuestos establecidos en el artículo 5º , fracciones II y III, se llevará a cabo un procedimiento especial que determine el Comité Técnico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de abril de 2010.

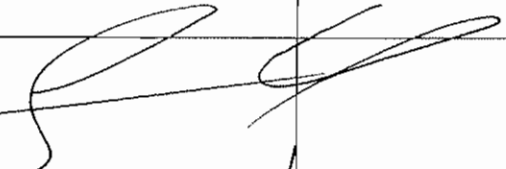
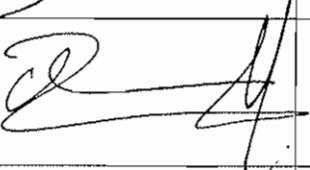

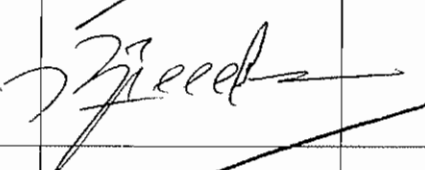



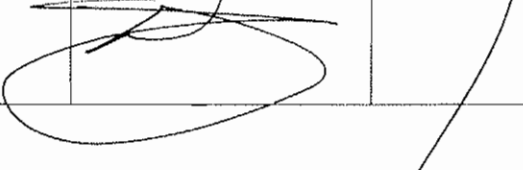
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Luis Videgaray Caso PRESIDENTE			
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa SECRETARIO			
Felipe Enríquez Hernández SECRETARIO			
Jesús Alberto Cano Vélez SECRETARIO			
Mario Moreno Arcos SECRETARIO			
Rolando Rodrigo Zapata Bello SECRETARIO			
Luis Enrique Mercado Sánchez SECRETARIO			
Alfredo Javier Rodríguez Dávila SECRETARIO			
Sergio Gutiérrez Villanueva SECRETARIO			

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Vidal LLerenas Morales SECRETARIO			
María del Rosario Brindis Álvarez SECRETARIO			
Pedro Vázquez González SECRETARIO			
Jorge Antonio Kahwagi Macari SECRETARIO			
Pedro Jiménez León SECRETARIO			
Cruz López Aguilar INTEGRANTE			
David Penchyna Grub INTEGRANTE			
Fernando Morales Martínez INTEGRANTE			
Héctor Ramírez Puga Leyva INTEGRANTE			


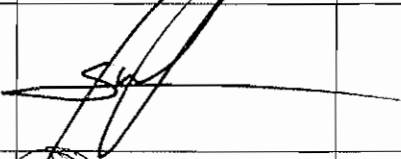


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Silvio Lagos Galindo INTEGRANTE			
Claudia Ruiz Massieu Salinas INTEGRANTE			
Manuel Márquez Lizalde INTEGRANTE			
Ma. Esther Scherman Leaño INTEGRANTE			
Miguel Riquelme Solís INTEGRANTE			
Óscar Levín Coppel INTEGRANTE			
Óscar Lara Aréchiga INTEGRANTE			
Roberto Albores Gleason INTEGRANTE			
Sebastián Lerdo de Tejada C. INTEGRANTE			

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Agustín Torres Ibarrola INTEGRANTE			
Gabriela Cuevas Barron INTEGRANTE			
Enrique Trejo Azuara INTEGRANTE			
Felipe Rangel Vargas INTEGRANTE			
Francisco Orduño Valdez INTEGRANTE			
Guadalupe Vera Hernández INTEGRANTE			
Marcos Pérez Esquer INTEGRANTE			
Mario Becerra Pocoroba INTEGRANTE			
Ovidio Cortazar Ramos INTEGRANTE			

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Rigoberto Salgado Vázquez INTEGRANTE			
Armando Ríos Piter INTEGRANTE			
Claudia Anaya Mota INTEGRANTE			
Emiliano Velázquez Esquivel INTEGRANTE			
Marcos Covarrubias Villaseñor INTEGRANTE			
Juan José Guerra Abud INTEGRANTE			

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, PRI, presidente; Josefina Vázquez Mota, PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Juan José Guerra Abud, PVEM; Pedro Vázquez González, PT; Pedro Jiménez León, CONVERGENCIA; Reyes Tamez Guerra, NUEVA ALIANZA.

Mesa Directiva

Diputados: Presidente, Francisco Ramírez Acuña; vicepresidentes, Francisco Javier Salazar Sáenz, PAN; Felipe Solís Acero, PRI; José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD; secretarios, María Dolores del Río Sánchez, PAN; Georgina Trujillo Zentella, PRI; Balfre Vargas Cortés, PRD; Carlos Samuel Moreno Terán, PVEM; Gerardo Fernández Noroña, PT; Jaime Arturo Vázquez Aguilar, NUEVA ALIANZA; María Teresa Ochoa Mejía, CONVERGENCIA.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Conchero Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldivar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia. Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45 numeral 6, inciso e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

A. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado "Instituto Nacional de Prevención del Delito"

1. Con fecha ocho de octubre de dos mil nueve, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado Instituto Nacional de Prevención del Delito, y suscrita por los diputados Miguel Ángel García Granados y Andrés Massieu Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Camilo Ramírez Puente y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con esa misma fecha, ocho de octubre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y análisis correspondiente.

B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia

1. Con fecha 10 de diciembre de dos mil nueve, la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 51, 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que contiene el texto de la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia.
2. En esa misma fecha, 10 de diciembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. Mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-3-254, de fecha 15 de diciembre de dos mil nueve, se modificó el turno de la iniciativa en comento, turnándose a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y Cuenta Pública.

De conformidad con el artículo 43 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las Normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, esta Comisión da cuenta que las opiniones mencionadas en las iniciativas de referencia no fueron remitidas en su oportunidad por las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública, por lo que se procedió al estudio, discusión y aprobación del dictamen correspondiente.

Con fecha veintiocho de abril de dos mil diez, los miembros de esta Comisión de Gobernación, discutieron y aprobaron el presente dictamen.

Contenido de las iniciativas

A. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado "Instituto Nacional de Prevención del Delito"

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, el diputado proponente sostiene lo siguiente:

Frente a la inseguridad e iniquidad que se aprecian en el día a día de la sociedad mexicana, que merman su dinamismo e impiden la consolidación de las condiciones necesarias para el desarrollo armónico e integral de sus habitantes, los temas de la justicia y la seguridad pública, se han convertido en los más grandes reclamos de la ciudadanía.

En contrasentido a la expectativa de una mejor atención al fenómeno delictivo por las autoridades, la delincuencia ha cobrado mayor fuerza al grado que su complejidad ha dado origen a redes y estructuras completas de crimen organizado, por lo que el esfuerzo desplegado por las instituciones y corporaciones dedicadas al

combate frontal a la delincuencia, no alcanza para aminorar los efectos de la criminalidad y menos aún para permear escenarios de prevención del delito.

Hoy en día, no hay institución penitenciaria que asegure la readaptación efectiva de quienes han infringido la ley penal y con ello su adecuada reinserción al grupo social; en ello, la imposición punitiva debe abrir paso a factores e instituciones dedicadas en forma profesional y científica a la investigación y el estudio de las condicionantes y causas del delito, para generar estrategias adecuadas en las tareas de su prevención.

Es necesario generar el espacio de interacción e interlocución adecuado, para que la decisión de las autoridades, la opinión de la ciudadanía, la experiencia y conocimiento de los intelectuales e investigadores, los planes y los recursos, converjan hacia una misma dirección, la prevención del delito como una condición de tracto sucesivo.

La iniciativa, tiene como finalidad la expedición de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado Instituto Nacional de Prevención del Delito, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, como un ámbito de cooperación entre instituciones de los sectores público y privado que permita la atención al delito desde su génesis, que genere un campo cognoscitivo sobre la delincuencia, sus causas y sus efectos en la cotidianeidad de la sociedad mexicana y permita así la generación y adecuación de los instrumentos jurídicos y las políticas públicas que con efectiva precisión incidan con efecto positivo en el ánimo y necesidad de la ciudadanía de vivir bajo mejores circunstancias de seguridad y justicia.

Dicha iniciativa de ley contiene nueve capítulos a saber los cuales establecen la naturaleza y objeto, atribuciones, integración, vigilancia, patrimonio, procesos administrativos, lo concerniente al personal y régimen de trabajo del Instituto Nacional de Prevención del Delito.

B. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia.

La iniciativa pretenden regular, básicamente, la prevención del delito; y para ese fin, señala que:

A partir de los años ochenta, el tema de la prevención del delito, la violencia y la delincuencia, adquirió relevancia institucional a escala internacional;

A partir de esos años, se han realizado diversos esfuerzos en diferentes países para crear organismos de cooperación internacional y promover el intercambio de información, tecnología y buenas prácticas para lograr ciudades más seguras;

En el 2005 la Organización de las Naciones Unidas emitió una declaración donde se reconoce que "*estrategias de prevención del delito amplias y eficaces pueden reducir significativamente la delincuencia y la victimización*";

El diagnóstico latinoamericano sobre los efectos de la delincuencia, la violencia y la inseguridad es alarmante;

La Organización de las Naciones Unidas sitúa a México en el lugar número 16 de entre 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia;

Además, México sufre de la mayor crisis en su historia en materia de seguridad pública en tiempos de paz;

A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha dado seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado el 21 de agosto de 2008, con un avance del 83 por ciento de los acuerdos en todas las entidades de la república;

El Poder Legislativo ha impulsado reformas a las leyes, entre ellas la iniciativa de modificaciones constitucionales para combatir con eficacia el secuestro o la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, la prevención sigue siendo un gran pendiente del Estado mexicano;

La gravedad de la situación hasta aquí descrita ha terminado por reflejarse inevitablemente en la opinión pública, en donde según muestran diversas encuestas nacionales, la inseguridad se encuentra entre los primeros lugares de preocupación, al igual que la pobreza y el desempleo;

De un análisis general realizado a la estructura programática presupuestal del PEF 2009, resulta que existen por lo menos 24 dependencias y 140 programas con recursos federales que tienen implicaciones directas o indirectas con la prevención del delito;

La iniciativa no busca crear más burocracia, lo que busca es orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que, con base en criterios de prevención social, apliquen esos recursos que institucionalmente les han sido asignados;

La amplitud e intensidad de la violencia, la delincuencia y las carencias o debilidades de las instituciones para combatirlos afectan drásticamente la calidad de vida de la población y generan un clima de temor generalizado, que amenaza directamente la solidez de la democracia y las posibilidades reales de desarrollo económico y social;

La iniciativa de ley propone contribuir a la rectoría del Estado en la reducción de la violencia, la victimización y la delincuencia a través de un cambio sustancial en la forma de prevención, a través de la consecución de por lo menos cinco puntos:

Abordar los factores de riesgo;

Disminuir los factores situacionales que favorecen la delincuencia;

Reorientar los esfuerzos institucionales a la solución de problemas con base en información y análisis;

El trabajo conjunto y coordinado de múltiples actores para abordar los factores de riesgo, y

El compromiso ciudadano como un factor fundamental;

Es preciso, además, generar diagnósticos técnicos que no sólo georreferencien las faltas y los delitos, sino también otras situaciones de riesgo igualmente importantes. El ciclo de una buena planeación inicia con saber qué es lo que se pretende transformar, quién debe hacerlo, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué;

La iniciativa de Ley considera en la forma y en el fondo, las directrices para la prevención del delito, la Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, así como experiencias nacionales e internacionales, y

Del contexto nacional se han tomado como puntos de referencia: La Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la iniciativa de Ley de Prevención del Delito del Estado de Hidalgo. En el contexto internacional, se ha nutrido de las recomendaciones vertidas por diversos textos publicados por la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de la Unión Europea y del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, así como de ejercicios legislativos de Argentina y Colombia.

Consideraciones

Este dictamen tiene como objetivo el análisis, en primer lugar, de la iniciativa presentada en fecha 10 de diciembre de dos mil nueve, por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que contiene el texto de la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia. Sin embargo, se rescatan distintos planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado "Instituto Nacional de Prevención del Delito" presentada el ocho de octubre de dos mil nueve, por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño; lo anterior, por estimar que constituyen una valiosa aportación al alcance y sentido general de la propuesta de ley.

I. En lo general

La relativamente reciente reforma al marco jurídico federal en materia de seguridad pública obliga, por lo menos, a una revisión integral del régimen de seguridad pública nacional; es decir, a partir de ese punto, es preciso, ahora, orientados por los mismos criterios revisionistas implementados por el Constituyente Permanente, emprender esta revisión del

marco normativo en general en materia de seguridad pública para adecuarlo a dicha reforma, por un lado; y por otro, garantizar la vigencia y la eficacia plena del estado de derecho.

La reforma al artículo 21 de la Carta Magna en este sentido, es determinante; lo anterior, porque establece las directrices que constituyen la referencia medular a la propuesta que nos ocupa; así, los ejes rectores de la propuesta contenida en este instrumento pretenden desarrollar el contenido de dicha reforma constitucional la cual prevé, entre otras cosas:

La formulación de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos, y

Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

De hecho, no es posible concebir a la política criminal, en los albores del siglo XXI, como un instrumento de lucha contra la delincuencia sin contemplar la prevención como la herramienta fundamental para afrontar este fenómeno. En efecto, el sistema de administración y procuración de justicia permanecerá incompleto si no se moderniza e instrumenta a la par, un sistema de prevención. Entendido no sólo como un mero enunciado sino como un conjunto de acciones y medidas cuya pretensión teleológica es:

Coadyuvar en la formación de ciudadanos con espíritu de solidaridad, respeto y justicia, preocupados por la preservación y mejoramiento de la armonía social y promotores del bien común y del desarrollo estatal y nacional;

Disminuir los niveles delictivos en los medios urbano y rural, y fomentar la conciencia, en todos los habitantes del País, sobre la composición justa de la Nación;

Promover la difusión de programas y la participación ciudadana en los mismos, y

Establecer la coordinación en materia de prevención del delito en los tres órdenes de gobierno.

En forma resumida, el dictamen gira sobre los siguientes tres ejes:

Políticas públicas consistentes en materia de seguridad pública;

Establecer la prevención de la violencia y la delincuencia como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad, y

La participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública.

Políticas públicas consistentes en la materia

Si se desea reformar este sistema de manera eficaz, es preciso atender, los siguientes aspectos:

Profesionalización de los entes públicos encargados de la seguridad;

Cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos policíacos y de prevención;

Un Sistema articulado y coherente que integre a todos los organismos (públicos -de los tres órdenes de gobierno-, privados y sociales);

Equipamiento, tecnología e infraestructura;

Espacios adecuados de coordinación;

Participación ciudadana, y

Marco legal.

La respuesta institucional al problema de la seguridad pública debe traducirse en fenómenos palpables susceptibles de ser evaluados en números absolutos: índices delictivos, acciones de prevención, personal, capacitación, vehículos, armamento, etc. Esto significa que los avances se muestren -y demuestren- a través de una operación matemática comparativa simple, pero objetiva, mensurable, verificable, incremento y decremento de valores en lapsos de tiempo específico, de tal forma que cuando haya más recursos, equipo o elementos destinados a la seguridad pública, la evaluación se realice por medio de mecanismos que demuestren incrementos, por un lado; y por otro, avances decisivos, amén de eficacia y eficiencia.

Los integrantes de la Comisión estiman que la iniciativa objeto de dictamen, pretende incidir precisamente en el primer aspecto: Esto es, la llamada "política de administración de riesgos" o política criminal preventiva. Entendida como una actividad del Estado (gobiernos federal, estatal y municipal), que se traduzca en una reducción de los índices delictivos, a través de un sistema verdaderamente eficaz, que permita su medición de manera objetiva, libre de subjetivismos o factores políticos.

No pasa desapercibido para los integrantes de esta Comisión, que una Ley de esta naturaleza, exige garantizar, por parte del Estado en sus tres órdenes de Gobierno, la implementación de políticas públicas cuyo objeto específico, sea el combate decidido a la pobreza en sus tres niveles: Alimentaria, patrimonial y de capacidades; la falta de oportunidades es y será, hasta en tanto no se eliminen las condiciones que la propician, uno de los factores de riesgo más importantes en el contexto social para alentar la violencia y delincuencia.

Establecimiento de la prevención como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad

Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas también como "directrices de Riad", adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, prevén, entre otras cosas, que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad; después de todo, si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas. Ahora bien, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es preciso que la sociedad en su conjunto procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad desde la primera infancia.

En este sentido, la propuesta de Ley contempla, en el artículo 16, relativo a las atribuciones del Consejo Nacional, en su fracción XXII, la de identificar y desarrollar los principales ámbitos de investigación de la prevención social de la delincuencia, para realizarla por sí o por un tercero; y de forma enunciativa se señala, en el inciso h), la prevención de la violencia infantil y juvenil.

Adicionalmente se propone la formulación de principios y criterios especializados para la prevención cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de delitos. El artículo 3 señala entre otros los siguientes: Respeto irrestricto a los derechos humanos, función rectora del Estado, integralidad, cooperación y corresponsabilidad, coordinación, sostenibilidad, transparencia, rendición de cuentas, etc.

El respeto irrestricto a los derechos humanos constituye otra pauta orientadora en el quehacer público enfocado a la prevención social de la delincuencia, según se desprende de la siguiente fracción.

La función rectora del Estado se reivindica a partir de la siguiente definición: *"El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil"*.

La integralidad se entiende a partir de la concepción siguiente: La *"complementariedad de los diferentes programas de los órdenes de Gobierno, incluidos los de justicia, seguridad pública, desarrollo social, económico, cultural y de derechos humanos; con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo"*.

La cooperación y corresponsabilidad se asume como la exigencia de que el Estado en sus distintos órdenes de gobierno, y la sociedad en general, deben involucrarse y desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la prevención. Las políticas de Estado en la serán más viables y certeras cuanto más apoyo reciban de las instituciones y organizaciones civiles e incluyan la participación ciudadana.

Como se ha señalado en el apartado de las políticas públicas, las decisiones de las autoridades y la actuación de las organizaciones sociales, requieren el respaldo social y una opinión pública favorable. En muchas organizaciones sociales se vive la necesidad de

"hacer algo por la seguridad", están dispuestas a participar en acciones, sólo requieren orientación para que sus actividades sean más fructíferas.

Un principio de extrema relevancia el denominado "de sostenibilidad", el cual debe entenderse como la base para implementar políticas públicas consistentes en el tiempo y en el espacio, pues deberá ponderarse el diseño de políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo dado que la prevención social de la delincuencia requiere recursos adecuados, incluyendo fondos para estructura y actividades. La participación espontánea contra la inseguridad o la impunidad, normalmente surge de hechos importantes e indignantes: tiende a ser angustiante, de confrontación con la autoridad y efímera. Con facilidad propone medidas radicales y aumento de penas. Por otro lado, la participación social dirigida desde el gobierno tiene el riesgo de no tener representatividad, convocatoria ni credibilidad y puede incluso ser manipulada. Así las cosas, es indispensable que la participación ciudadana sea independiente, representativa, propositiva y coadyuvante, y que tenga capacidad de interlocución con las autoridades.

La fracción VI establece, también como principio rector, el de la multidisciplinariedad. A este respecto, la citada fracción refiere: *"Las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán diseñarse tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales"*.

México es una nación pluricultural. La atención diferenciada y las acciones afirmativas apuntan en la dirección correcta al señalar que los planes y programas de prevención *"deberán considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por género, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención diferenciada y acciones afirmativas"*; en efecto, múltiples fenómenos vinculados a la génesis, pero también a los rasgos específicos de la delincuencia, hallan su origen en aspectos concretos como la edad, el sexo o la condición social.

Finalmente, tenemos que la transparencia es, de suyo, uno de los principios rectores más importantes pues guarda íntima relación con el tema de las políticas públicas; la evaluación, pero sobre todo el control social, se nutren de información; y ésta debe ser asequible, oportuna y veraz.

La participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública.

Es del conocimiento público que el Estado, en su mayoría, enfrenta únicamente con medidas policiacas y represivas el fenómeno de la delincuencia; vemos cada vez con mayor frecuencia ambiciosas reformas penales ya concluidas o por concluir, y sin embargo, no se aprecia que se esté atacando las causas; vemos que es un fenómeno propio de las sociedades modernas ignorar los factores causales que generan la delincuencia; sin embargo, vemos que cada vez se construyen más reclusorios o se establecen más o más duras penas y no se trabaja sobre los factores de riesgo fundamentales para el desarrollo de un Estado o país; en suma, es apreciable que sólo se reacciona ante los hechos delictivos y

con tristeza, se observa que de los recursos que se dedican a seguridad pública solamente un mínimo se dedica para la prevención del delito.

En países como Inglaterra, Francia o los Países Bajos, los índices de delincuencia muestran marcados decrementos dentro del mismo lapso que en Latinoamérica, por ejemplo, estos mismos indicadores se incrementan. Así, en estos y otros países, se aprecia la existencia de programas de prevención enfocados a niños entre 7 y 12 años de edad; esto es, apostarle principalmente a la prevención primaria: ayudar a esos niños en la escuela, en la comunidad, a resolver sus problemas, etc. De hacerlo, tendremos un efecto totalmente sano, cosa que difícilmente se puede dar en un país en donde la violencia familiar predomina de manera impresionante.

Desde principios de esta década, los indicadores en México demuestran que la edad más frecuente de los delincuentes fluctuaba entre los 12 y 25 años y que suma casi el 40 por ciento del total;¹ es decir, la delincuencia sigue aumentando y cada vez son más los niños los que incursionan a las bandas delictivas y por supuesto como no tiene una clara conciencia de lo que están haciendo, la violencia es parte de su actuar.

Como sea, es de tomarse en cuenta que algunos factores que inciden en el aumento de la delincuencia y la injusticia son, entre otros:

Problemas sociales: entendiéndose por tales la degradación de los valores, la ramificación de la corrupción, la disolución familiar y violencia doméstica, el alcoholismo, drogadicción y pandillerismo, así como el desempleo y la marginación;

Errores de gobierno: Tecnología atrasada en informática, burocratismo y falta de compromiso de los servidores públicos, reclusorios que parecen "escuelas del crimen", permitir la falsificación de todo tipo de documentos -situación que aprovecha el crimen-, tolerancia para que el sector informal sea canal de mercancías robadas y de contrabando, y

Complicidad-impunidad: impunidad a cambio de incondicionalidad en trabajos o negocios sucios; núcleos de corrupción en cuerpos policiales, ministerio público y tribunales, abogados del crimen organizado que aprovechan resquicios legales, órdenes de aprehensión incumplidas o sentencias injustas, en algunos casos por complicidad; etc.

Es cierto que no es viable el avance significativo en seguridad sin mejorar sustantivamente la procuración e impartición de justicia; empero, una reforma al sistema de justicia penal sin otro equivalente en materia de prevención de la delincuencia compromete los resultados de la primera y paulatinamente será la causa de la deficiencia total del sistema en su conjunto.

La participación social puede contribuir a responsabilizar públicamente a cada autoridad federal, estatal o municipal de sus obligaciones, y que sea la sociedad quien exija cambios reales, eficacia, rendición de cuentas y resultados.

En todo caso, no es posible soslayar que se requiere de perfeccionar las políticas de comunicación social para que los medios contribuyan mejor a la prevención del delito y al ejercicio del derecho a la información verdadera y oportuna sobre índices delictivos e indicadores de gestión de las autoridades de seguridad pública

La participación propicia un mayor compromiso en el respeto y garantía del derecho a la seguridad pública y a la justicia pronta, completa e imparcial y sirve como instrumento para rechazar activamente la injusticia, la corrupción y la impunidad.

II. En lo particular

1. Contenido general y capitular del proyecto de decreto

No obstante las bondades que han sido reseñadas en párrafos de antelación, es de tener en cuenta que en fecha 2 de enero de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.

De hecho, en su articulado, destacan multitud de disposiciones que guardan una íntima relación con los temas que se abordan en la iniciativa que nos ocupa; como se aprecia de la siguiente relación:

"Artículo 16. Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

I. De Información;

II. De Certificación y Acreditación,

III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana".²

A su vez, el artículo 17 establece: "El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, **de Prevención del Delito y Participación Ciudadana**, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo [...]"³

El artículo 20 determina: **"El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:**

- I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
- II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
 - a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
 - b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
 - c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y d) Garantizar la atención integral a las víctimas.
- IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
- V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
- IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente".⁴

E incluso, la citada ley cuenta con un Título Octavo denominado: "De la participación de la comunidad", el cual, entre otras cuestiones, prevé:

En su artículo 128, que: "El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada".⁵

En tanto que su artículo 131 determina: "Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública".⁶

En tanto que en su artículo 134, se sientan bases en materia de atención a las víctimas: "Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;

II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;

III. Medidas de protección a la víctima, y

IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".⁷

De este modo, resulta claro que sí existe una íntima vinculación entre este cuerpo normativo vigente y la iniciativa que se estudia a través de este instrumento. De hecho, desde sus primeros artículos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es clara y engloba los aspectos vinculados con la prevención desde la sociedad; de este modo, su artículo 2 establece: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas".⁸

No obstante, también es cierto que las prescripciones contenidas en la propuesta de Ley contenida en el proyecto de Decreto que se agrega al presente instrumento no riñen en lo medular con la Ley vigente citada en primer término y, por otro lado, la complementan y enriquecen en por lo menos dos aspectos específicos: La prevención y la participación ciudadana.

En este punto, es de recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 prevé en lo conducente en sus párrafos noveno y décimo, respectivamente, que: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".

Y en el siguiente: "Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

[...]

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública".

Es decir, la Constitución federal prevé de manera expresa que la seguridad pública también comprende la prevención de los delitos; por lo que la materia del proyecto de Ley contenido en este instrumento resulta acorde con ese principio, por un lado; y por otro, complementa a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el aspecto específico de la prevención social, desarrollando el mandato constitucional contenido en su ordinal 21.

En atención al razonamiento anterior, si bien la citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una Ley reglamentaria del precitado numeral 21, lo será también la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la materia que le es propia: La de la prevención.

Esta posibilidad de reglamentar un precepto constitucional a partir de dos o más ordenamientos, se aprecia de mejor manera si se atiende, por ejemplo, al caso del artículo 27 de la misma Constitución, el cual es reglamentado a partir de diversas leyes, como pudieran ser: La Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la Ley de Expropiación, entre otras. De las que cabe destacar, incluso, que existen dos ordenamientos reglamentarios de la misma fracción y del mismo artículo: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Energía para el Campo, reglamentarias ambas de la fracción XX del multirreferido artículo 27 constitucional.

A partir de ese punto, esta Comisión se dio a la tarea de armonizar ambos cuerpos normativos, como se aprecia de los párrafos siguientes.

2. Contenido

La Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia cuenta con 34 artículos, divididos en siete capítulos:

"Disposiciones Generales";

"De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia";

"De los Órganos Encargados de la Prevención Social de la Delincuencia";

"De la Coordinación de Programas Institucionales";

"Del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia"; mismo que se divide en dos secciones: "De la participación comunitaria y ciudadana" y "De la evaluación";

"Del Financiamiento", y

"De las Sanciones".

El primer capítulo, amén de establecer la naturaleza y objeto de la Ley (artículo 1); prevé en su ordinal segundo que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán la utilización y destino de los recursos para garantizar el cumplimiento de misma.

En este punto, resulta claro que la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, comparte en líneas generales un objetivo similar, como se desprende del artículo 2 de su proyecto, que establece que el Instituto tendría por objeto "llevar a cabo las tareas en materia de prevención de la delincuencia en los términos del capítulo respectivo de esta ley relativo a sus atribuciones, su reglamento interior, y de acuerdo con lo dispuesto en los ordenamientos aplicables".

Además, como ya vimos, se desarrollan los principios que regirán sobre el particular y se establece un glosario de términos. Por lo que se refiere al tema de la publicidad en la información, resulta evidente que éste constituye un motivo de especial interés para ambos iniciadores; verbigracia, la iniciativa presentada por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, prevé en su artículo 5 lo siguiente: "La función desempeñada por el Instituto Nacional de Prevención del Delito será de interés general y beneficio colectivo, por lo que, para el cumplimiento de su objeto, podrá requerir cualquier información a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, de los tres Poderes Constitucionales así como a instituciones de carácter privado, asegurando el respeto y la confidencialidad de la información cuando así sea requerido". A este respecto, la fracción IX del artículo 3 del proyecto, en lo relativo al llamado principio de "Transparencia", establece que: "La información relativa a la prevención social de la violencia y la delincuencia, incluida la información presupuestal, deberá ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes en la materia". Es decir, la exigencia de que la información vinculada a las materias propias de la ley esté al alcance de cualquier interesado, se surte en los términos apuntados tanto en ambas iniciativas como en la versión final del proyecto contenido en el actual instrumento.

El Capítulo Segundo, que se ocupa de establecer el marco general de la prevención social, señala en su artículo 6 que la prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos de intervención: Social, comunitario, situacional y con enfoque psicosocial. El artículo siguiente (el 7), refiere que la prevención social de la violencia y la delincuencia implica la reducción de los factores y condiciones sociales que fomentan el desarrollo de conductas violentas y delictivas y determina los mecanismos útiles para ese fin.

Asimismo, se define la prevención comunitaria (artículo 8), así como aquellos aspectos que la comprenden; y se determinan la llamada "prevención situacional" (artículo 9) y la prevención con enfoque psicosocial.

En el Capítulo Tercero se establece lo relativo a los órganos encargados de la prevención social de la delincuencia; los cuales son, básicamente, cuatro: El Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo.

En el Capítulo Cuarto, denominado "De la Coordinación de Programas", se establece en su artículo 17 que: "Los programas nacional, sectorial, especial e institucional que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario del delito". Sobre esa base se establece que:

Los programas institucionales tenderán a lograr un efecto multiplicador (artículo 17);

Los programas que se desarrollen deberán ser monitoreados (artículo 18), y

En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones, a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo para tal fin (artículo 18).

En este punto, no pueden soslayarse dos cosas: La primera, que a raíz de la reestructuración orgánica del proyecto, se suprimió la conformación originalmente prevista para el Consejo Nacional; la cual preveía, entre otras dependencias y entidades a la Secretaría de Desarrollo Social, la de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. En segundo lugar, que el propósito de la iniciativa es lograr que exista una auténtica y eficaz coordinación entre los diferentes entes públicos entre sí y con el sector social, para lo cual, se requiere de una instancia que los agrupe a efecto de transversalizar las políticas públicas de cada dependencia que directa o indirectamente incidan en proyectos de prevención de la violencia y la delincuencia. En esa virtud, es que se propone el artículo 19 del proyecto, mismo que establece que, para el cumplimiento de sus funciones, el Centro podrá convocar a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Empero además, determina que podrá convocar a:

- La Secretaría de Desarrollo Social;
- La Secretaría de Seguridad Pública;
- La Procuraduría General de la República;
- La Secretaría de Educación Pública;
- La Secretaría de Salud;

- La Secretaría del Trabajo;
- El Instituto Nacional de las Mujeres;
- El Instituto Mexicano de la Juventud;
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos;
- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y
- Los mecanismos equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Lo anterior, a fin de garantizar que las políticas públicas que se diseñen e implementen en las materias propias de la Ley, efectivamente cumplan con el propósito de la misma que es transversalizar la actividad que se desarrolle en los tres órdenes de Gobierno capaz de incidir en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Capítulo Quinto desarrolla el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; el cual "deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas con el nivel más alto de protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles".

Ahora bien, según el artículo 22 del proyecto, para la ejecución del Programa Nacional el Centro Nacional deberá preparar un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones específicas y de medidas complementarias. Luego, el Centro Nacional presentará al Secretariado Ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa.

El original Capítulo Séptimo, que se ocupaba de la evaluación, pasó a ser la Sección Primera del Capítulo Quinto propuesto y que, como ya se hizo referencia en la primera parte de este instrumento, constituye un aspecto fundamental de cualquier política pública. A este respecto, se prevé que el Centro Nacional evalúe anualmente las acciones realizadas para ejecutar el Programa Anual, así como los resultados correspondientes al año anterior. El resultado de dicha evaluación deberá remitirse al Consejo Nacional para su difusión.

Como aspectos específicos susceptibles de someterse a este procedimiento tenemos, según los numerales 24, segundo párrafo, 25 y 26, los siguientes:

Para la evaluación de las acciones referidas se convocará a los organismos públicos de derechos humanos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil;

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad y el financiamiento de los programas para el siguiente periodo fiscal efectivo;

No podrá refinanciarse un determinado programa que previamente no haya sido evaluado, y

El Centro Nacional deberá coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social u otras instancias gubernamentales o de la sociedad para el desarrollo de las evaluaciones respectivas.

Otro de los aspectos medulares de la propuesta está contenido en el otrora Capítulo Sexto, que se incorpora al proyecto de ley como Sección Segunda, relativa a la participación comunitaria y ciudadana. En el ámbito internacional, uno de los movimientos más importantes y exitosos ha demostrado serlo Vigilancia Vecinal.⁹ De ahí que la Ley contemple en su artículo 27: "La participación comunitaria y ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, siendo un deber constitucional del Estado Mexicano reconocerla, garantizarla, promoverla y fomentarla, conforme a la presente Ley". Y en ese tenor, el siguiente numeral, el 28, agrega que: "La participación comunitaria y ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los consejos de Participación Ciudadana o a través de cualquier otro mecanismo local, creado en virtud de sus necesidades".

Sin que se pueda soslayar la importancia de una disposición como la contenida en el original artículo 27 del proyecto que establecía que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos serán elevados al Consejo Nacional a través de las instancias estatales creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Centro Nacional para ese fin, para que allí sean tratadas y analizadas; y en paralelo, la exigencia categórica para que el Consejo Nacional dé "rápida respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria" (artículo 28). Estas exigencias se satisfacen añadiendo dos fracciones más, la XXXI y XXXII, al artículo 16 del proyecto, en los siguientes términos: Son funciones del Centro Nacional:

Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Reglamento, y

Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria.

Un aspecto total de todo el andamiaje jurídico de la propuesta lo constituye el rubro económico; el Capítulo Sexto se ocupa del Financiamiento. En este tenor, se prevé que los programas federales, de las entidades federativas o municipales, así como de la sociedad civil, que funcionen con recursos federales y cuya aplicación incide o coadyuve a la prevención social de la delincuencia "deberán sujetarse a los lineamientos que fije la presente Ley además de las directrices que para tales efectos establezca el Centro Nacional".

Sin embargo, es claro que además de los recursos federales, tanto las entidades federativas como los municipios deberán prever, en sus respectivos presupuestos de egresos, los recursos necesarios para implementar y evaluar los programas y acciones de prevención social de la delincuencia, por un lado; y por otro, es de tomar en cuenta que los programas que funcionen con recursos del Centro Nacional deberán aplicarse substancialmente a medidas y acciones enfocadas a la obtención de resultados, para la disminución de la victimización, violencia y delincuencia.

Como previsión adicional, se contempla en el artículo 31 de la propuesta que no podrá cofinanciarse un proyecto con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La inquietud que se advierte en la iniciativa presentada por el diputado Benítez Treviño, en relación con la vigilancia del funcionamiento del órgano encargado de las tareas de prevención, y que se pone de manifiesto tras la lectura del artículo 24 de su proyecto, que dice: "La Secretaría de la Función Pública designará a un auditor externo para vigilar oportunamente el funcionamiento del instituto", se surte de dos formas distintas; primero, atendiendo a este Capítulo Octavo; así como el contenido de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su ordinal 18, fracción XIX, establece que corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema: "Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley". Sin que pueda obviarse el numeral 142 del mismo ordenamiento, que preceptúa en su párrafo primero: "Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal".

Por último, el Capítulo Séptimo de la Ley se ocupa de las sanciones que deriven del incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se derivan de la misma. Los perfiles de esta medida son los siguientes:

Todo incumplimiento será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos que sea competente;

Para la imposición de la sanción que sea procedente, el Consejo Nacional dictará el acuerdo específico que así lo determine y lo hará saber al superior jerárquico del infractor, y

La dependencia o entidad que haya impuesto alguna sanción a sus subordinados con motivo de la aplicación de la Ley, deberá informarlo al Consejo Nacional, por conducto de su Secretariado Ejecutivo.

No puede soslayarse que la pretensión a que se alude en el artículo 11 de la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, relativa a que "Cualquiera de los vocales podrá ser removido por quien haya hecho su designación, por causa grave o justificada", queda satisfecha si se atiende a este régimen de responsabilidades que distingue de manera automática, atendiendo a la naturaleza y orden de Gobierno a cuya esfera pertenece supuesto infractor, la Ley aplicable al caso concreto.

3. Modificaciones a las iniciativas

a) Se modificó la denominación de la Ley. La incorporación de la violencia como materia de la prevención deriva de dos razones; la primera de ellas es que, efectivamente, la iniciadora en distintas partes del articulado de su iniciativa hace referencia expresa a la violencia como un factor que debe ser tomado en cuenta en las acciones que deriven de los planes y programas en materia de prevención; así, el artículo 4, fracción IV, del texto original, define la coordinación como: "Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la prevención social de la delincuencia, de la violencia o de la victimización, deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin lograr la reducción de sus índices de incidencia"; otro caso es el del original artículo 37 que refería: "Los programas que funcionen con recursos del centro nacional deberán aplicarse substancialmente a medidas y acciones enfocadas a la obtención de resultados, para la disminución de la victimización, violencia y delincuencia". E inclusive, el primer párrafo de la exposición de motivos dice así: "Los problemas de la inseguridad, la violencia y la delincuencia han ocupado espacios relevantes en el contexto internacional desde 1955. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas realiza cada cinco años congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, así como diversos foros de intercambio en todo el mundo". En esa virtud, es que se estima de capital importancia agregar a la denominación de la Ley la referencia expresa a la violencia como un factor específico en la incidencia delictiva, puesto que la violencia, en sus múltiples manifestaciones, constituye en un gran número de casos, un prerequisite para la existencia de la conducta delictiva.

En el *Informe mundial sobre la violencia y la salud 2002*, de la Organización Mundial de la Salud, se realiza un análisis de la violencia desde la perspectiva de la salud pública partiendo de la sólida convicción, basada en pruebas científicas, de que tanto la conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. Lo anterior complementa las actividades de la justicia penal y los derechos humanos a la violencia, ofrece instrumentos y fuentes de colaboración. De acuerdo con el citado Informe, la violencia es un fenómeno difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. Sin embargo en este mundo en evolución proteger la vida y la dignidad humanas exige esforzarse por lograr un consenso y establecer normas universales del comportamiento basadas en el desarrollo de los derechos humanos.

En este punto, es de destacar que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como "El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".

Así reconocida, la violencia se divide en tres grandes categorías según el autor del acto violento:

a) Violencia dirigida contra uno mismo: Comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones, como la automutilación.

b) Violencia interpersonal: Se divide en violencia intrafamiliar o de pareja la cual es entre la familia y suele acontecer en el hogar; y violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que generalmente pueden conocerse o no, acontece generalmente fuera del hogar, en este caso se incluyen la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, la violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y residencias de ancianos, y

c) Violencia colectiva: Es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos con el objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos armados dentro de los Estados y entre ellos; genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos, terrorismo; crimen organizado.

La legislación mexicana, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 y que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 establece que las medidas que deriven de la misma deben garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Y su ordinal 5, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como "Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público".

De lo anterior, los integrantes de esta Comisión concluyen que si bien resulta altamente complejo definir lo que se debe entender en cada caso por "violencia", lo cierto es que esta definición se puede intentar conceptualizarla como ha quedado reseñada en párrafos previos: "El uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" y agregarla en tales términos como última fracción del artículo 4 del proyecto.

Empero, resulta imprescindible advertir que el alcance de esta expresión de ninguna manera puede ser argüido por autoridad alguna intervenir en el ámbito de la vida privada de las persona al amparo de una exigencia para prevenir violencia o, para el caso, supuestos fenómenos de delincuencia. Resulta de especial importancia precisar que las disposiciones que se establecen para prevenir socialmente la violencia o la delincuencia, están dirigidas exclusivamente a tal fin y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas ni rebasar el ámbito específico de atribuciones propio de la autoridad de que se trate; en todo caso, esta acotación resulta imprescindible para impedir a la autoridad competente:

- El ejercicio abusivo de las facultades conferidas;
- La persecución o el acoso en contra de luchadores sociales, y
- En general, la persecución de aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.

A su vez, es de destacar que la voz "delincuencia" dentro de la denominación de esta ley, obedece a que dicho concepto es un término amplio que se refiere a un fenómeno social complejo que engloba diversos hechos y actos tanto de individuos como de grupos de personas no organizadas que cubre realidades distintas. En otras palabras, la delincuencia, es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive o el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados.

El enfoque social de la prevención de la delincuencia se asume, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, como el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a detener o reducir el riesgo de que se produzcan delitos o infracciones administrativas, los efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas.

En América Latina se ha denominado prevención del "delito" atendiendo a que no existe un equivalente lingüístico que traduzca de manera puntual el término en inglés "*crime*", el cual hace referencia a aspectos complejo dentro del fenómeno social denominado "delincuencia". Es de considerar, por otro lado, que a diferencia del término "delincuencia", "delito" es un concepto directamente vinculado a hechos tipificados por las leyes penales y sancionados en los términos de las mismas, sin abarcar problemas sociales que le anteceden o preceden, como es el caso de la violencia y la convivencia, las cuales impactan de manera directa o indirecta en la delincuencia

En otras palabras, la delincuencia es un término amplio que hace referencia a un fenómeno social presentado dentro de un contexto determinado, mientras que "delito" es la conducta típica, antijurídica y culpable sancionada por la ley penal.

Es decir, prevenir las causas que generan la delincuencia, implica enfocar las políticas públicas a disminuir factores como la violencia escolar o el alto consumo de alcohol, sin que ello implique que dichos factores son elementos del delito, o que necesariamente tales pautas conductuales deban forzosamente derivar en delitos, aún y cuando son factores que propician su comisión. A lo anterior se suma, que esta Ley no pretende eliminar el delito, pues para ello bastaría con eliminar las tipificaciones de acuerdo con el abolisionismo penal, por el contrario, el espíritu de la iniciativa se enfoca a reducir o contrarrestar las causas que generan conductas nocivas para la sociedad.

De lo anterior se desprende que una conducta nociva para la sociedad, no necesariamente debe constituir un delito, sino una serie de hechos y actos realizados voluntaria e involuntariamente, los cuales inciden directa o indirectamente en la delincuencia. En síntesis, prevenir la delincuencia, permite incidir en las causas de la misma desde aspectos tan fundamentales como el entorno donde se desarrollan las personas o el comportamiento observado por los integrantes de la sociedad.

b) Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo 3 para enfatizar que se considera prevención social de la violencia y la delincuencia al conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones; y dado que se trata de una definición, se reubica en el artículo 4, como fracción número VI.

Asimismo, se eliminó el último párrafo de este artículo 3, que originalmente decía: "Las actividades para hacer cumplir las leyes, las sentencias y las medidas correctivas, aunque también desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbito de esta ley, por estar expresamente reguladas en otros instrumentos jurídicos"; ello, por cuanto que la Ley no puede establecer normas tendentes a regular aspectos negativos; máxime, cuando éstos se hallan expresamente regulados por disposiciones diversas.

Además de lo anterior, el segundo párrafo de este ordinal se modifica para suprimir la expresión "incluido el Sistema Nacional de Seguridad Pública" y dejar el párrafo de la siguiente manera: "Las políticas e intervenciones incluirán a las instituciones que desempeñen funciones de coadyuvancia en la prevención social de la delincuencia, incluidos las autoridades de los gobiernos locales, servicios de salud, sociales, de vivienda, del deporte, sistema educativo, instituciones académicas, organizaciones empresariales, comerciales y de la sociedad civil, así como del público en general y medios de comunicación". Lo anterior, por cuanto que la referida expresión tenía sentido en el contexto de una Ley que pretendía regular la prevención social de la delincuencia en forma paralela a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en la especie, al determinar los integrantes de esta Comisión que los organismos e instituciones previstos en dicho ordenamiento están en posibilidad jurídica y material de hacerse cargo de las tareas que la Ley les asigna sobre el particular, dicha mención es innecesaria y se presta a confusión.

c) La fracción IX del artículo 3 del proyecto, en lo relativo al llamado principio de "Transparencia", se modifica al establecer: "La información relativa a la prevención social de la violencia y la delincuencia, incluida la información presupuestal, deberá ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes en la materia"

d) Por lo que hace a la definición de "prevención social de la delincuencia", contenida en el fracción VI del artículo 5, ésta se modifica, al efecto de eliminar la expresión "temor a la delincuencia"; lo anterior, por estimar que no abona en nada a la construcción del concepto.

e) Se insiste en agregar la expresión "*órdenes de Gobierno*" en sustitución o en complemento del vocablo "niveles de Gobierno", por estimar que éstos se presentan dentro de un mismo orden de autoridad; y dado que en un sistema legal como el de nuestro país, donde se distingue la actividad que llevan a cabo los órganos de la Federación, entidades federativas y municipios, atendiendo al contenido de las mismas y al régimen de competencias establecido en el marco jurídico, no existe una subordinación entre sí de los distintos órdenes de autoridad, como se aprecia de la primera parte de la fracción II, del artículo 3, que establece que las bases y lineamientos a que hace referencia el artículo primero de la Ley, deben cumplir con los ciertos principios, entre ellos, la "*Función rectora del Estado*", que consiste en que: "*El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil*".¹⁰

Cabe destacar que, en general, se eliminaron las denominaciones de los principios en cada una de las fracciones contenidas en el original artículo 4 y se dejó exclusivamente el contenido descriptivo del mismo.

f) El artículo 6 se modificó para establecer que si bien la prevención social de la delincuencia incluye distintos ámbitos de intervención: Social, comunitario y situacional; el llamado "enfoque policial" no debe incorporarse al texto del referido artículo como tal por estimar que éste es un medio para desarrollar todos los anteriores y afecta de manera transversal a esas cuatro nociones; en cambio, se considera pertinente la inclusión de un ámbito adicional que la doctrina recoge como "prevención psicosocial o para el desarrollo". Este enfoque hace referencia al desarrollo "de las motivaciones individuales hacia el delito en el curso de la vida y que se basa en la prevención de estas motivaciones o condiciones criminógenas, con referencia a los individuos, a las familias, a las escuelas y a la comunidad [...]. Se habla también de 'prevención precoz' o de 'prevención de los factores de riesgo', en referencia a distintos momentos de la vida de un individuo en los que la prevención puede desplegar sus efectos".¹¹ En esa virtud, también se modificó el contenido del artículo 11 para establecer que: "La prevención psicosocial o para el desarrollo tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad". Y dentro de las acciones que implica, entre otras, se tienen las

siguientes: Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; la inclusión de la prevención de la violencia, en los programas y planes de estudio, por parte de las autoridades educativas; y el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

g) En el artículo 8 se modificó no sólo para definir la prevención comunitaria como aquella que "pretende atender los factores que generan conductas antisociales mediante la participación ciudadana y comunitaria"; sino además, se agrega una fracción más, para establecer que también comprende: "El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil".

h) El artículo 9 se modificó para armonizar su contenido con el marco general que incluye la noción de prevención social no solamente de la delincuencia, sino también de la violencia como prerequisite de aquélla, por un lado; y por otro, para determinar que la prevención situacional consiste en modificar "el entorno ambiental"; esto es, el espacio urbano como causa indirecta del fenómeno de la delincuencia.

i) Al artículo 10 original que preveía el ámbito victimológico, se le reubica y se le adiciona una fracción IV; así, si el primer párrafo establece que el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas del delito debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización; y para ello, se prevén una serie de acciones; la iniciativa preveía sólo tres y en el proyecto se añade una IV que reza: "Brindar respuesta a todas las inquietudes, peticiones o solicitudes de intervención presentadas por la población, a través de los mecanismos creados para ese fin"; ello, para garantizar la adecuada interacción entre el sector público y los sectores social y privado. Además, como queda dicho, de que este ordinal se mueve de lugar y pasa a formar parte del proyecto como artículo 11. Lo que también ocasionó, como ya vimos, un cambio en la denominación del Capítulo para quedar: "De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Atención a las Víctimas".

j) La denominación del Capítulo Tercero se modifica; el cambio relativo se explica a partir de la reestructura que se realiza en la conformación de los órganos encargados de la aplicación de la Ley y de la vigilancia de su cumplimiento pues el citado Capítulo Tercero se ocupaba de regular al Consejo Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y además al Centro Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia; por ello, se propone la creación de dos secciones, cada uno de los cuales, se ocupa de regular de manera diferenciada a las tres entidades encargadas del sistema: Al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como a la Comisión Nacional y al Secretariado Ejecutivo, en la primera de ellas; y al el Centro Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia, en la segunda. Lo anterior, por estimar que el Centro, por sí mismo considerado, constituye un eje fundamental de imputación de atribuciones con una relevancia singular.

Específicamente, debe apuntarse que se elimina toda referencia a un Comité Técnico; ello, por cuanto que en el cuerpo del Decreto, así como en la iniciativa, se hacía referencia expresa a este órgano sin señalar con claridad los elementos que lo conforman y sus atribuciones. Así, la fracción V del artículo 3 refería: "El Comité de expertos e investigadores, nacionales e internacionales, encargado de emitir los lineamientos para el otorgamiento del financiamiento de proyectos de prevención social de la delincuencia"; en esa virtud, las atribuciones asignadas a este órgano en la iniciativa de la que deriva el presente dictamen se encomiendan al Consejo Nacional y al Secretariado Ejecutivo según se advierte de lo siguiente: En el caso de la fracción II del artículo 25 original -ahora 22- que decía: "Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios, de las entidades federativas o del Distrito Federal que tengas incidencia directa en temas prioritarios de prevención del delito, con base en los lineamientos que emita para tales efectos emita un Comité Técnico conformado por reconocidos investigadores y académicos expertos en prevención", al Consejo Nacional; por lo que dicha fracción II en el citado ordinal 22, queda así. "Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios o de las entidades federativas que tengas incidencia directa en temas prioritarios de prevención del delito, con base en los lineamientos que emita para tales efectos el Consejo Nacional".

Por lo que hace a la segunda mención, ésta estaba contenida en la fracción IV del original artículo 25 al tenor literal siguiente: "El Centro Nacional presentará al Comité Técnico mencionado en la fracción II los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente ley; el texto propuesto por esta Comisión en este rubro, es el siguiente: "El Centro Nacional presentará al Secretariado Ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos en el Reglamento respectivo. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente Ley". Con lo cual, las materias asignadas a el citado Comité deberán ser realizadas por los órganos citados. En este punto, cabe recordar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con elementos diversos para garantizar opiniones y criterios expertos en la rectoría de las materias propias este dictamen. Verbigracia, según su artículo 22, corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente del referido Secretariado, "verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública". Sin que pueda obviarse en este punto, el contenido del artículo

16 del mismo cuerpo normativo que además de establecer a las comisiones permanentes del Consejo Nacional e incluir dentro de éstas en su fracción III a la "De Prevención del Delito y Participación Ciudadana"; el segundo párrafo del mismo prescribe: "Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas".

Así pues, los órganos encargados de operar el sistema lo serán

- El Consejo Nacional, que no es otro que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- El Secretariado Ejecutivo, que no es otro que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere la misma Ley citada en el apartado inmediato anterior, y
- El Centro Nacional, que es, precisamente, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, el objetivo planteado en la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, en el sentido de que existan dos tipos de órganos, uno colegiado con carácter decisorio y otro unipersonal, con funciones ejecutivas, también se satisface con esta medida; en efecto, a la propuesta contenido en el artículo 8 de su iniciativa, para que la dirección y administración del instituto corresponden a un Consejo Directivo y a un Director General, se satisface con la propuesta contenida en el proyecto de Ley anterior.

Cabe señalar en este punto, que algunas de las atribuciones del Consejo Nacional, conferidas por el artículo 13 del proyecto de Ley, pueden ser ejercitadas por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, entidad dependiente del propio Consejo, según el artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho párrafo dice así. "Para alcanzar sus objetivos, el Consejo Nacional a través de la Comisión [...]".

Con esta fórmula, se evita la creación de nuevos organismos y, por ende, se elimina el impacto presupuestal de la propuesta, por un lado; y por otro, se omite incurrir en una duplicidad de funciones encomendándoles, prácticamente las mismas labores de coordinación, investigación, revisión, etc., a dos organismos federales distintos.

Es preciso tomar en cuenta que la multirreferida Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla en su artículo 17 la existencia de un Secretariado Ejecutivo como un órgano operativo del Sistema que además "gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal". Además de esta autonomía técnica y de gestión, al mismo se le asignan, para el cumplimiento de sus labores, tres centros nacionales:

- De Información,
- De Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y
- De Certificación y Acreditación.

La propuesta contenida en el presente dictamen respecto de los órganos encargados de aplicar la Ley se sustenta en tres consideraciones:

- La preservación de los criterios de autonomía que inspiran originalmente la iniciativa presentada el pasado mes de diciembre de 2009;
- La existencia de un entramado institucional que permite operar el sistema de prevención social de la delincuencia previsto en un cuerpo normativo vigente, y
- Que el dotar por Ley a estos órganos de nuevas atribuciones no contradice su naturaleza e, incluso, está previsto en la propia Ley de su creación, a saber, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior, como se aprecia a continuación:

En el primer punto, es preciso recordar que la iniciativa original que nos ocupa preveía en su artículo 13: "El Centro Nacional es un organismo público descentralizado de la Administración pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Gobernación". Estas exigencias, a saber, la autonomía técnica, de gestión y presupuestal para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, se satisface si se toma en cuenta que de acuerdo al citado artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: "El Secretariado Ejecutivo **es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.** Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros".¹²

En el segundo punto, en lo relativo a la afirmación de que existe un entramado institucional que permite operar el sistema de prevención social de la delincuencia previsto en un cuerpo normativo vigente, ésta se confirma si se atienden los argumentos contenidos en este mismo escrito en párrafos de antelación, de los que se extrae que, efectivamente, de acuerdo a dicha Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe plena coincidencia de objetivos entre ella y la Ley que nos ocupa en el presente dictamen, por un lado; y por otro, esta segunda ley vendría a ampliar y a reforzar aspectos enunciados o esbozados en la primera sin alterar su esencia.

Y por lo que atañe al hecho de que dotar por Ley a estos tres órganos -Consejo Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública y Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana- de nuevas atribuciones no contradice su naturaleza e, incluso, está previsto en la propia Ley de su creación, a saber, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basta con leer los siguientes artículos de dicho ordenamiento:

"Artículo 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: [...] XIX. **Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas** y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema".¹³

"Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema: [...] XXV. **Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables**, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente".¹⁴

"Artículo 20. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones: [...] X. **Las demás que establezcan otras disposiciones**, el Consejo Nacional y su Presidente".¹⁵

De la misma manera, la exigencia contenida en el artículo 10 de la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, en el sentido de que todas las designaciones "se harán considerando la experiencia, honradez y prestigio de cada uno de los integrantes del consejo" se encuentra atendida si se considera que los órganos previstos y regulados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son los mismos que en uso de sus atribuciones serán los encargados de ejecutar y velar por la observancia de la Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y en ese tenor, el artículo 17 del ordenamiento citado en primer término, establece, en relación con el Secretariado Ejecutivo y el titular del Centro Nacional, que serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir, entre otros, con el requisito de "Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función" (fracción IV del artículo).

Como consecuencia de todo lo anterior, se suprimen artículos y a raíz de ello, se modifica igualmente la numeración de la Ley a partir de este punto respecto de la iniciativa que le sirve de origen.

k) Las similitudes entre las dos iniciativas objeto del presente dictamen, se aprecian mejor si se atiende a que el organismo propuesto por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, tendría entre otras las siguientes atribuciones:

- Dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar en el ámbito nacional, la función de prevención del delito;

- Promover las tareas en materia de investigación, sondeos, encuestas y estudios sobre las causas de las distintas conductas delictivas en todo el territorio nacional, que sean necesarias para la generación de programas de combate de la criminalidad;
- Elaborar por sí o por medio de otra autoridad o institución estudios y proyectos para determinar las causas y efectos delictivos en cada región del país;
- Proponer líneas de acción respecto de la política criminal nacional y las medidas que deban adoptarse a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad;
- Realizar foros abiertos de consulta social, para conocer las expectativas y necesidades ciudadanas en materia de prevención del delito y combate de la delincuencia;
- Realizar estudios sobre las causas que producen las conductas antisociales, así como el impacto que generan en los ámbitos personal, familiar, escolar, laboral y económico en cada comunidad del país, para lo cual podrá coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigan propósitos afines; etcétera.

En tanto que la iniciativa de la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria pretendía en el artículo 16 de su iniciativa, que el Consejo Nacional se encargara de:

- Coordinar a las instituciones que formaran parte del propio Consejo;
- *Formular políticas públicas* para la prevención social del delito;
- Diseñar estrategias de colaboración interinstitucional;
- Recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución en el nivel Nacional, local y municipal, con objeto de contribuir a la toma de decisiones nacionales y locales;
- Identificar y desarrollar los principales ámbitos de investigación de la prevención social de la delincuencia, para realizarla por sí o por un tercero;
- Organizar conferencias, seminarios, reuniones y/u otras acciones destinadas a profundizar en los aspectos técnicos de experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención, así como en la difusión de sus resultados;
- Celebrar convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de recursos humanos cuyas funciones incidan en la prevención del delito; etcétera.

l) El artículo 22 original, actual numeral 18, segundo párrafo, se modificó en dos rubros: Se sustituyó la expresión "En caso de que los resultados de algún programa sean desfavorables, las metas y objetivos planteados,..", por esta otra: "En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones; a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo". Ello, por estimarse que la frase "sean desfavorables" resulta equívoca y en extremo subjetiva. Sustitución adecuada en atención a la finalidad última del precepto mismo que es garantizar la efectiva evaluación de las políticas públicas, la que sin duda, deberá realizarse sobre la base de medir las metas y objetivos planteados. De igual manera se modifica el citado numeral, para suprimir la expresión: "para determinar sus causas y el impacto de las respuestas vigentes, conocer las manifestaciones de la delincuencia y sus lugares privilegiados, e identificar los factores de riesgo y discernir las posibles orientaciones de intervención"; lo anterior, por cuanto que el diagnóstico de los planes y programas que deriven de la Ley deberá ser permanente y relativo a las materias específicas a que el respectivo programa se refiera. La propuesta de modificación al artículo 23, originalmente el 25 de la iniciativa, ha sido detallada en párrafos de antelación, en relación con la eliminación a cualquier referencia a un "Comité Técnico".

m) La denominación del Capítulo Sexto: "De la participación comunitaria y ciudadana" también se modifica respecto de la iniciativa, al añadirse la expresión "ciudadana"; ello, porque se estima que en la prevención comunitaria debe distinguirse la actuación individual de naturaleza no necesariamente gregaria; si bien en la participación comunitaria sus actores fundamentales son la comunidad y sus organizaciones, en el proyecto que nos ocupa, se pretende atender aquellos factores que generan conductas antisociales mediante dos elementos clave: La participación comunitaria, por un lado; y la participación ciudadana, por otro. Bajo esta prevención los programas se deben dirigir a fortalecer a las organizaciones sociales y civiles como sujetos sociales para que puedan intervenir en los asuntos públicos con el fin de proponer acciones que permitan el mejoramiento del bienestar social, mejorar su hábitat y realizar funciones de control social para reducir los niveles de violencia, por otro lado; y por otro, procurar que el individuo, desde el seno de la familia, desde su participación en la escuela, etc., desarrolle conceptos y valores que alienten en él el compromiso en las tareas de prevención. De ahí que se modifiquen las referencias en este rubro agregándose la expresión "ciudadana", como queda dicho. Sin que pueda omitirse lo ya mencionado en un apartado previo, en el sentido de que este Capítulo pasó a ser la Sección Segunda del Capítulo Quinto.

Asimismo, el artículo 27 de la iniciativa (actual 27 del proyecto) se modifica para quedar en los siguientes términos: "La participación comunitaria y ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, siendo un deber constitucional del Estado Mexicano reconocerla, garantizarla, promoverla y fomentarla, conforme a la presente Ley". Se estima que la expresión "Estado Mexicano", en los temas propios de la Ley, subsume la noción de Federación, entidades federativas y municipios.¹⁶ A su vez, el artículo 29 del

proyecto de Ley establecía que: "Las inquietudes, requerimientos y propuestas de los vecinos serán elevadas al Plenario del Consejo Nacional de Prevención Social de la Delincuencia, por los coordinadores comunitarios del Plan de Prevención del Delito, dependientes de la Dirección General de Política de Seguridad y Prevención del Delito para que allí sean tratadas y analizadas". Es decir, además de la referencia a "los vecinos", se establecían figuras como los "coordinadores comunitarios" dependientes de la citada Dirección; lo que burocratiza la Ley en una materia especialmente sensible. Además, como consecuencia de esa reforma, se añade una fracción XX al artículo 16 de la propuesta para establecer como atribución del Centro Nacional, la de "Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Nacional".

n) El original artículo 30 decía: "El Consejo Nacional se compromete a dar rápida respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria"; al respecto, esta Comisión dictaminadora estima que la redacción propuesta no resulta atendible pues no es dable "comprometer" a un órgano de Gobierno a través de una disposición de carácter general como es la Ley y además se estima imprescindible que la respuesta a la ciudadanía sea rápida, por lo que el texto del artículo correspondiente, fracción XXXII del artículo 16, establece como obligación del Centro la siguiente: "Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria".

o) El artículo 39 De la iniciativa rezaba así: "La cofinanciación de un proyecto por el programa será incompatible con cualquier otra financiación por otro programa financiado por el Presupuesto de Egresos de la Federación". La noción detrás de este dispositivo es impedir que la financiación de un proyecto en las materias propias de la Ley a cargo de distintos entes públicos, corriera en última instancia con fondos provenientes del Erario federal; si bien, la redacción propuesta se estima un tanto confusa, por lo que se propuso un artículo 31 en los siguientes términos: "Por ningún motivo la financiación de un proyecto por el Programa podrá ser cofinanciado con recursos que deriven del Presupuesto de Egresos de la Federación."

p) Por considerar que la expresión "Consejo Estatal", contenida en los artículos 42 y 43 de la iniciativa constituyen yerros involuntarios; ambas expresiones se sustituyen por la expresión "Consejo Nacional" en los artículos 40 y 41 del proyecto.

q) Finalmente, se tiene que el apartado de los artículos transitorios también se modifica; así, por razones de técnica legislativa se elimina la referencia a "la presente ley" para sustituirla por la de "el presente Decreto", por un lado; y por otro, se suprime el artículo segundo que decía: "En un término de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se instalará el Consejo Nacional y se nombrará al secretario técnico", por cuanto que ambos, tanto el Consejo Nacional como el Secretario Técnico, no constituyen ya, órganos de nueva creación.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

CAPÍTULO

PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para:

- I. La planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y
- II. La articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

Artículo 2. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán la utilización y destino de los recursos para garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 3. Las bases a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, deben cumplir con los siguientes principios:

- I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;
- II. El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil;
- III. La prevención social de la violencia y la delincuencia implica la articulación y complementariedad de los diferentes programas de los órdenes de Gobierno, incluidos los de justicia, seguridad pública, desarrollo social, económico, cultural y de derechos humanos; con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;

IV. Participación de personas, grupos sociales y órdenes de gobierno de manera solidaria, para el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V. Continuidad de las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI. Las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. Las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por género, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención diferenciada y acciones afirmativas, y

VIII. En las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberá prevalecer el enfoque de proximidad orientado a la resolución de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.

IX. La información relativa a la prevención social de la violencia y la delincuencia, incluida la información presupuestal, deberá ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes en la materia, y

X. Las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán señalar quienes son los sujetos responsables; cuales son los objetivos; el alcance y procedimientos de evaluación, cuantitativa y cualitativa, de los resultados, los procedimientos de auditoría, así como la estructura y periodicidad de los informes a presentar para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centro Nacional: El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

II. Comisión: La Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Ley: La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

V. Prevención social de la violencia y la delincuencia: El conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones;

VI. Programa Nacional: El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

VII. Programa anual: El programa de trabajo anual del Centro Nacional;

VIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

IX. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

X. Violencia: El uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Artículo 5. Los organismos a que alude el artículo anterior son los establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 6. La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos:

I. Social;

II. Comunitario;

III. Situacional, y

IV. Psicosocial.

Artículo 7. La prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los programas de salud, educación, vivienda y empleo;

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquellos enfocados en la juventud, las familias, niñas y niños, mujeres, adultos mayores y las comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y

V. Estrategias que involucren a mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, grupos en situación de vulnerabilidad, marginados, así como en situación de pobreza y pobreza extrema.

Artículo 8. La prevención comunitaria pretende atender los factores que generan conductas antisociales mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende:

I. La participación de la comunidad en acciones tendentes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias;

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

III. Fomentar el empoderamiento comunitario, social y la cohesión entre las comunidades frente a problemas locales;

IV. La participación de la comunidad, a través de mecanismos que garanticen la efectiva participación ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y

V. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 9. La prevención situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo y oportunidades que faciliten conductas antisociales, fenómenos de violencia y la incidencia delictiva, mediante:

I. El mejoramiento del desarrollo urbano, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público, sistemas de vigilancia a través de circuito cerrado, y el uso de sistemas computacionales, entre otros;

II. La utilización de métodos apropiados de vigilancia que respeten los derechos a la intimidad y a la privacidad;

III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y

IV. La aplicación de estrategias para prevenir la repetición de casos de victimización.

Artículo 10. La prevención psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que entre otros incluye:

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad;

II. La inclusión de la prevención de la violencia, del delito y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

Artículo 11. El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización, a través de:

I. La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria;

II. La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas;

III. La atención específica al impacto en grupos especialmente vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos violentos, particularmente los delitos sexuales cometidos a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, y

IV. Brindar respuesta oportuna a todas las inquietudes, peticiones o solicitudes de intervención presentadas por la población, a través de los mecanismos creados para ese fin.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO NACIONAL

Artículo 12. El Consejo Nacional será la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Se convocará con voz y voto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsables o vinculadas, cuya función incida en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 13. Las atribuciones del Consejo Nacional son:

- I. Coordinar a las instituciones que lo integran para la elaboración de los programas nacional, sectorial, especiales e institucionales de las dependencias cuyo ejercicio presupuestario de sus programas incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;
- II. Formular políticas públicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia;
- III. Coordinar a diferentes instituciones y agencias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil;
- IV. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención;
- V. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre los tres órdenes de Gobierno, con objeto de contribuir a la toma de decisiones;
- VI. Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su programa de trabajo para el año siguiente, y
- VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las materias propias de esta Ley.

Artículo 14. Para alcanzar sus objetivos, el Consejo Nacional a través de la Comisión:

- I. Definirá, vigilará y dará seguimiento a los programas generales, especiales e institucionales de las dependencias cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;
- II. Dará prioridad a un enfoque multidisciplinario e interinstitucional;
- III. Promoverá la colaboración para la prevención social de la violencia y la delincuencia entre las secretarías de Estado participantes y en todos los órdenes de gobierno, y
- IV. Establecerá los estándares y las metodologías de evaluación para medir el impacto de los programas en las materias propias de esta Ley.

Artículo 15. El Consejo Nacional, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

- I. Ejecutará y dará seguimiento a los acuerdos y resoluciones del propio Consejo Nacional y de su Presidente;
- II. Coordinará la realización de estudios especializados sobre las materias propias de esta Ley;
- III. Compilará los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedirá constancia de los mismos;
- IV. Celebrará convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines de la Ley;
- V. Verificará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables;
- VI. Verificará que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las diversas instituciones federales y locales se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- VII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones que deriven de esta Ley;
- VIII. Elaborará y publicará informes de actividades del Consejo Nacional;
- IX. Gestionará ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley, y
- X. Supervisará, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios.

SECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL

SEGUNDA

Artículo 16. El Centro Nacional tendrá las siguientes funciones:

- I. Proponer los aspectos técnicos para integrar el Programa Nacional de Prevención social de la violencia y la delincuencia;
- II. Elaborar su programa anual de trabajo;
- III. Recabar información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados;

IV. Realizar diagnósticos participativos;

V. Generar mecanismos de participación de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos públicos de derechos humanos y de las instituciones de educación superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención

VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de evaluación;

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas;

VIII. Elaborar mapas delictivos en colaboración con otras autoridades sobre la base de la información recabada, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades;

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización en hogares, con la periodicidad que se estime conveniente;

X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana;

XI. Formular recomendaciones a ser consideradas por los organismos encargados de la prevención y de asistencia a la víctima, sobre la implementación de medidas de prevención de la victimización;

XII. Monitorear y evaluar las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad;

XIV. Incorporar a la comunidad a las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia, impulsando la participación en la formulación de propuestas que contribuyan a este fin y dialogando en forma permanente con la sociedad a través de foros y asambleas vecinales, organizaciones no gubernamentales, consejos profesionales, asociaciones civiles y con la sociedad en general;

XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XVI. Elaborar por sí o por los medios determinados en el Programa Nacional, información para la comunidad sobre prevención de la victimización, proporcionando herramientas tendentes a evitar ser víctima de hechos delictivos;

XVII. Informar a la población sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno complejo de la criminalidad;

XVIII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Nacional;

XIX. Asistir a las secretarías de la administración pública federal, las entidades federativas y municipios en el desarrollo de estándares para la generación de información para la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XX. Generar y recabar información sobre:

- a) Las causas estructurales del delito;
- b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;
- c) Diagnósticos sociodemográficos;
- d) Prevención de la violencia infantil y juvenil;

e) Erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores,

f) Modelos de atención integral a las víctimas;

XXI. Organizar conferencias, seminarios, reuniones y demás acciones destinadas a profundizar en los aspectos técnicos de experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención, así como en la difusión de sus resultados;

XXII. Organizar actividades que sirvan de estímulo para mejorar el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas;

XXIII. Poner a disposición de las entidades federativas, municipios y miembros de la sociedad en general, cuando sea necesario y a petición de éstos, su competencia para asistirles en todas las cuestiones relacionadas con la prevención;

XXIV. Celebrar convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de servidores públicos cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXV. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias internacionales;

XXVI. Remitir un informe anual a la Cámara de Diputados;

XXVII. Difundir la recopilación de las mejores prácticas nacionales e internacionales;

XXVIII. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las instituciones y organismos de la Administración Pública federal que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXIX. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Reglamento;

XXX. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria, y

XXXI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

CAPÍTULO DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

CUARTO

Artículo 17. Los programas nacional, sectorial, especial e institucional que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario del delito.

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académicas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 18. Las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia podrán ser monitoreadas, con la participación de instituciones académicas, profesionales y especialistas en la materia.

En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones, a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo para tal fin.

Artículo 19. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro podrá convocar a:

- I. La Secretaría de Desarrollo Social;
- II. La Secretaría de Seguridad Pública;
- III. La Procuraduría General de la República;
- IV. La Secretaría de Educación Pública;
- V. La Secretaría de Salud;
- VI. La Secretaría del Trabajo;

VII. El Instituto Nacional de las Mujeres;

VIII. El Instituto Mexicano de la Juventud;

IX. La Comisión Nacional de Derechos Humanos;

X. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Los mecanismos equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal, y

XIII. Investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la delincuencia, para lo cual se establecerán los mecanismos de participación en el Reglamento correspondiente.

Artículo 20. Para implementar las acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia e impulsar la participación de la sociedad civil, los tres órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, deberán:

I. Proporcionar la información que necesitan las comunidades para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia;

II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos basados en evidencias;

III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el combate a los delitos;

IV. Compartir conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad en general;

V. Aplicar esos conocimientos para repetir intervenciones satisfactorias, concebir nuevas iniciativas y prever nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención;

VI. Establecer sistemas de datos para ayudar a administrar la prevención social de la violencia y la delincuencia de manera más económica, incluso realizando estudios periódicos sobre la victimización y la delincuencia, y

VII. Promover la aplicación de esos datos a fin de reducir la victimización y la persistencia de delitos en zonas con altos niveles de delincuencia.

CAPÍTULO QUINTO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Artículo 21. El Programa Nacional para la Prevención social de la violencia y la delincuencia deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas con el nivel más alto de protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:

- I. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de las personas;
- II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;
- III. Los diagnósticos participativos;
- IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos sobre la base del diagnóstico de seguridad;
- V. Las principales acciones específicas de ejecución que deben llevarse a cabo, incluidos los seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que las intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;
- VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil;
- VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia;
- VIII. El desarrollo e implementación de un plan de acciones concretas;
- IX. El redireccionamiento e institucionalización del enfoque, y
- X. El monitoreo y evaluación continuos.

Los gobiernos de las entidades federativas y municipales deberán incluir a la prevención como una característica de sus programas gubernamentales para reducir la violencia y la delincuencia de tal manera que existan acciones concretas planificadas que cuenten con el financiamiento requerido. En todo caso, se deberá asegurar que exista claridad en las responsabilidades al interior de los gobiernos para la organización de la prevención social de la violencia y la delincuencia y su desarrollo.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberán involucrar en la evaluación de los programas a la comunidad, la sociedad civil, los organismos públicos de derechos humanos y las instituciones de educación superior.

Artículo 22. Para la ejecución del Programa Nacional, el Centro Nacional:

I. Preparará un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones específicas y de medidas complementarias;

II. Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios o de las entidades federativas que tengan incidencia directa en temas prioritarios de prevención social de la violencia y la delincuencia, con base en los lineamientos que emita para tales efectos el Consejo Nacional;

III. Evaluará y seleccionará los proyectos a que se refiere la fracción anterior;

IV. El Centro Nacional presentará al Secretariado Ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos en el Reglamento respectivo. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente Ley;

V. La Comisión evaluará y seleccionará, siempre que sean compatibles con las políticas apropiadas, los proyectos presentados por las organizaciones civiles, municipales o de las entidades federativas; para ello se guiará por los criterios siguientes:

a) Conformidad con los objetivos del programa;

b) Dimensión nacional, estatal o municipal;

c) Compatibilidad con los trabajos emprendidos o previstos en el marco de las prioridades políticas Nacional, Estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

d) Complementariedad con otros proyectos de prevención, anteriores, en curso o futuros;

e) Capacidad de la organización para ejecutar el proyecto;

f) Calidad del propio proyecto por lo que se refiere a su concepción, organización, presentación y resultados esperados;

g) Importe de la subvención solicitada al programa y su adecuación a los resultados esperados, y

h) Incidencia de los resultados esperados en los objetivos del programa.

En el programa anual de trabajo se dará prioridad a dichos criterios.

Artículo 23. El programa anual que derive del programa nacional contendrá los lineamientos para el financiamiento de proyectos enfocados a:

I. Capacitación y profesionalización;

II. Estudios e investigación;

III. Encuentros y seminarios;

IV. Evaluaciones e indicadores, y

V. Difusión de los resultados obtenidos en el marco del programa.

SECCIÓN DE LA EVALUACIÓN

PRIMERA

Artículo 24. El Centro Nacional evaluará las acciones realizadas para ejecutar el programa anual y los resultados del año anterior. El resultado de la evaluación se remitirá al Consejo Nacional quien lo hará público en los términos que establezca el Reglamento.

Para la evaluación de las acciones referidas se convocará a los organismos públicos de derechos humanos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 25. Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad y el financiamiento de los programas para el siguiente periodo fiscal efectivo. No podrá refinanciarse un determinado programa que previamente no haya sido evaluado.

Artículo 26. El Centro Nacional deberá coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social u otras instancias gubernamentales o de la sociedad para el desarrollo de las evaluaciones respectivas.

SECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

SEGUNDA

Artículo 27. La participación comunitaria y ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, siendo un deber constitucional del Estado Mexicano reconocerla, garantizarla, promoverla y fomentarla, conforme a la presente Ley.

Artículo 28. La participación comunitaria y ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los consejos de Participación Ciudadana o a través de cualquier otro mecanismo local, creado en virtud de sus necesidades.

CAPÍTULO DEL FINANCIAMIENTO

SEXTO

Artículo 29. Los programas federales, de los estados, el Distrito Federal o municipales, así como de la sociedad civil, que funcionen con recursos públicos federales y cuya aplicación incide o coadyuve a la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán sujetarse a las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, así como a las bases que fije la presente Ley.

Artículo 30. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios preverán en sus respectivos presupuestos, conforme a su disponibilidad, los recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia derivados de la presente Ley.

Artículo 31. Por ningún motivo la financiación de un proyecto por el Programa podrá ser cofinanciado con recursos que deriven del Presupuesto de Egresos de la Federación.

CAPÍTULO DE LAS SANCIONES

SÉPTIMO

Artículo 32. El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se derivan de la presente Ley será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Artículo 33. Para la imposición de la sanción que sea procedente, el Consejo Nacional dictará el acuerdo específico que así lo determine y lo hará saber al superior jerárquico del infractor, por conducto del Secretariado Ejecutivo, para que imponga la consecuencia jurídica que resulte.

Artículo 34. La dependencia o entidad que haya impuesto alguna sanción a sus subordinados con motivo de la aplicación de la presente Ley, deberá informarlo al Consejo Nacional, por conducto de su Secretariado Ejecutivo, en la siguiente sesión de este organismo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento respectivo en un término de hasta ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. Se concede un plazo de hasta un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidan las normas legales y tomen las medida presupuestales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Notas

1. Segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades federativas. Visible en el siguiente sitio: http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ensi2_resultados_nacionales.pdf
2. a 8 Énfasis añadido.
9. Waller, Irvin. (2008): *Menos represión más seguridad. Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia*. Primera reimpresión. Editorial Ubijos, Inacipe e Ilanud. México. Pág. 86.
10. Énfasis añadido.
11. Rosella Selmini, "La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo", en Urvio, *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, núm. 6, Quito, enero 2009, p. 50-51.
12. a 15 Énfasis añadido.
16. "Es oportuno recordar, desde luego, que el Estado es una abstracción jurídica que se materializa en los tres órdenes de Gobierno". Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús. (2009): "La cultura de la legalidad como elemento indispensable para la seguridad Pública" en *El fomento de la cultura de la legalidad como política pública*. Secretaría de Gobernación. México. Pág. 39.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaña, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Vidal Llerenas Morales, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Gaceta Parlamentaria

Año XIII

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 29 de abril de 2010

Número 2999-IX

CONTENIDO

Dictámenes

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

Anexo IX

Jueves 29 de abril

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA
PARA LOS TRABAJADORES**

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la “Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores”, proveniente del Senado de la República. Dicha Minuta fue igualmente turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía para su opinión.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracciones XIII y XVIII, artículo 45 párrafo 6 inciso f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 55, 56, 60, 64, 87, 88, 93, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso General.

Adicionalmente, con fundamento en lo establecido en los artículos 41 y 43 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2009, estas Comisiones Unidas dictaminan al tenor de la siguiente:

I. ANTECEDENTES

- I. En sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2007 los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Roviroa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
- II. Durante la sesión a la que se refiere el antecedente I solicitaron sumarse como patrocinadores de la iniciativa los senadores Antonio Mejía Haro, Mario López Valdez, Claudia Corichi, Lázaro Mazón Alonso, Melquiades Morales, José Luis

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

García Zalvidea, Dante Delgado, Minerva Hernández, María Rojo, Yeidckol Polensky, Salomón Jara, Gabino Cué y Cleomino Zoreda.

- III. El 30 de abril de 2009 se aprobó en el pleno del Senado de la República el Dictamen con proyecto de Decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
- IV. El 3 de septiembre de 2009 se recibió del Senado de la República, para su trámite constitucional, la Minuta correspondiente al Dictamen al que se alude en el antecedente previo.
- V. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó dar a la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para su estudio y dictamen correspondiente, el turno a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en este último caso para su opinión.
- VI. Las Comisiones unidas celebraron diversas sesiones para discutir y analizar la Minuta de referencia.
- VII. Con fecha de 14 de abril de 2010, el Pleno de las Comisiones celebraron una sesión para discutir, analizar y aprobar el dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que el derecho humano a la alimentación se establece en numerosos instrumentos internacionales de los que México es parte, por lo cual existe la obligación legal de garantizar que en la legislación nacional se respete, proteja y haga efectivo ese derecho.

Asimismo, se hace referencia a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, la enfermedad y los accidentes laborales, además de que puede reducir hasta en un 20% la productividad. Para combatir esto, la OIT recomienda que se establezcan mecanismos de alimentación para los trabajadores encaminados a mejorar sus condiciones nutricionales.

Diversos países han incorporado ya en sus legislaciones mecanismos de ayuda alimentaria en el ámbito laboral, obteniendo buenos resultados sociales, económicos e,

62

Med

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

inclusive, fiscales. Un ejemplo emblemático de éxito en América Latina es el Programa de Alimentación a los Trabajadores de Brasil, creado hace ya tres décadas.

Por su parte, en México han venido operando desde hace años esquemas de apoyo a la alimentación de los trabajadores, mediante el otorgamiento de comidas o despensas; sin embargo, no existe en la legislación alguna disposición que les otorgue permanencia y continuidad. Esto, a pesar de que en nuestro país alrededor del 30% del gasto total de los hogares se dedica a la compra de alimentos, proporción que se incrementa hasta alcanzar casi el 40% en los sectores más pobres de la población. Es en hechos como estos que la iniciativa fundamenta la necesidad de dotar de sustento legal a la ayuda alimentaria para los trabajadores, reconociendo que ésta puede contribuir a liberar recursos que podrán ser utilizados para otros bienes de primera necesidad.

Con la Ley de Ayuda Alimentaria se busca incentivar el establecimiento, la permanencia y la continuidad de esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores. El objeto específico de la Ley es promover y regular la instrumentación de dichos esquemas, con el propósito de contribuir a mejorar el estado nutricional de la fuerza laboral, así como a prevenir las enfermedades vinculadas con la alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional.

Según se señala en la minuta, la Ley deriva del derecho constitucional a la protección de la salud. Además, beneficiaría a todos los trabajadores del país, sin importar su régimen laboral, es decir, si trabajan para el sector público o el privado, por lo que, en caso de aprobarse, la Ley se convertirá en un instrumento de equidad social sin precedentes.

En la minuta se establece que los patrones podrán dar ayuda alimentaria de manera voluntaria o cuando así lo convengan con sus trabajadores en los contratos colectivos de trabajo. Como mecanismo para incentivar a los patrones a brindar ayuda alimentaria a sus empleados, la minuta refiere diversos beneficios de índole fiscal ya existentes que consisten básicamente en deducciones. Asimismo, la minuta incluye la obligación de los patrones de mantener un control documental para demostrar que el beneficio ha sido efectivamente entregado a sus trabajadores, además de los comprobantes fiscales correspondientes; esto permitirá evitar que los patrones incurran en simulaciones buscando obtener los incentivos fiscales.

La ayuda alimentaria podrá darse en varias modalidades. Estas son, primero, las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos que podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos. Segundo, mediante la entrega de despensas, ya sea en canastillas de alimentos o por medio de vales; según se expresa en la iniciativa esta última modalidad tiene la ventaja de

62

[Handwritten signature]

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

que permite también incidir favorablemente en la nutrición de las familias de los trabajadores.

Mediante la inclusión de diversas modalidades de ayuda alimentaria, la minuta reconoce que, por razones de equidad, no debe darse trato diferenciado a los trabajadores en función del tamaño o la capacidad económica de la empresa en que laboran, pues mientras las empresas grandes pueden decidir instalar un comedor, las pequeñas y medianas empresas pueden optar por otra de las modalidades previstas.

La ayuda alimentaria que se otorgue a través de comidas no se considerará ingreso del trabajador, por lo que no estará sujeta a gravamen alguno. En el caso de las despensas, éstas serán un ingreso exento para el trabajador hasta por el equivalente de un salario mínimo general elevado al año.

La minuta prevé la creación de una comisión integrada por igual número de representantes del Gobierno Federal, los trabajadores y los patrones, misma que tendrá a su cargo la evaluación y seguimiento de la Ley y a la que corresponderá también hacer recomendaciones para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria.

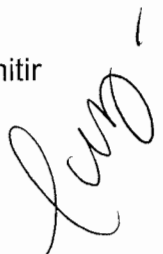
Expuesto el contenido de la minuta, las dictaminadoras y la comisión facultada para emitir opinión sobre el contenido de la misma hacen las siguientes consideraciones.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, así como la opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público coincidimos con la legisladora en la afirmación de que la alimentación es un elemento primordial para la vida de todo ser humano y que sin una nutrición adecuada éste no está en capacidad de ejercer los derechos que le son inherentes.

La alimentación adecuada es esencial para el trabajador, con una importancia similar a la de la remuneración digna, la salud, la educación y la vivienda.

Es importante destacar que la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores no sólo beneficia al trabajador, si no que el beneficio se extiende a su familia, ya que en el hogar del trabajador habrá una boca menos que alimentar. Adicionalmente, mediante la provisión de despensas los patrones están contribuyendo a mejorar la nutrición de las familias de los trabajadores y con ello a prevenir deficiencias nutricionales en las nuevas generaciones.



**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

SEGUNDO. Las comisiones dictaminadoras coinciden con la minuta en establecer el carácter voluntario de la incorporación de las empresas y sus trabajadores a los beneficios de esta Ley, con la única excepción, de aquellos convenios que se convierten en contratos colectivos de trabajo en los que tendrá carácter de obligatorio. Todas las demás formas de contratación previstas en la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con esta Ley, tienen su origen en la opción voluntaria de las partes de acogerse a los beneficios de la Ley.

Sin embargo es necesario realizar una modificación al presente decreto, para que la Ley este acorde con los ordenamientos aplicables vigentes. De tal forma que respecto de la fracción IV del citado artículo, donde se establece la definición de "trabajadores" se tiene que eliminar el apartado "B", ya que no sería procedente incorporar a los trabajadores del citado apartado, en virtud de que conforme al esquema de evaluación, seguimiento y vigilancia planteado en el articulado, no sería posible que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizara tales actividades a los entes gubernamentales. Además los estímulos fiscales están dirigidos a los patrones, concepto que no es utilizado en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional, por lo que esa parte de la propuesta no podría ser aplicable.

TERCERO. Asimismo, estas comisiones debemos expresar, tal y como lo hizo el Senado en su oportunidad, que en el ámbito laboral la alimentación se convierte en un presupuesto esencial, en virtud de que sin alimento es imposible contar con la fuerza y concentración necesarias para trabajar y ser productivos.

CUARTO. La Comisión de Salud, en su carácter de dictaminadora, ha sido enfática al señalar que, ante el grave problema de Salud Pública que enfrenta nuestro país y que se materializa en padecimientos tales como la obesidad, el sobrepeso o la desnutrición, el ámbito laboral se erige como el escenario ideal para promover una buena nutrición y la adopción de estilos de vida saludables.

QUINTO. Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, tal y como lo hizo la colegisladora en su oportunidad, nos abocamos a un análisis profundo y cuidadoso sobre la pertinencia de que fuera una nueva Ley, un cuerpo independiente de normas jurídicas, el que regulara los términos y las condiciones bajo los cuales habría de operar la ayuda alimentaria en nuestro país. Sobre ese particular, estimamos que el fin último de la ley que se plantea expedir excede, a la vez que complementa, lo ya legislado en nuestro país en materia laboral y de salud, razón por la cual reúne todos los méritos para que se emita una ley específica en lugar de adicionar, por ejemplo, las leyes General de Salud o Federal del Trabajo.

62

Med

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

SEXTO. Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, al igual que la Comisión de Hacienda y Crédito Público al emitir la opinión correspondiente, hemos coincidido en que el artículo 13 de la Ley contemplada en la Minuta que se dictamina, es en si mismo y de acuerdo con el texto mismo contenido en la referida Minuta, un reenvío al régimen de las deducciones e ingresos que, para los patrones y los trabajadores, respectivamente, se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. En ese tenor, la ayuda alimentaria continuará siendo deducible para los patrones en los mismos términos que ya están establecidos en nuestro marco jurídico a la fecha, al tiempo que se garantiza el que para los trabajadores las despensas permanezcan con el carácter de prestaciones de previsión social exentas de dicho impuesto. Adicionalmente y por lo que respecta a los ingresos de los trabajadores, el referido artículo 13 reconoce que los esquemas de ayuda alimentaria consistentes en comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos, no son de ninguna manera objeto del Impuesto sobre la Renta según lo establece el último párrafo del artículo 110 de la Ley de dicho tributo, en virtud de que éstos no tienen el carácter de un ingreso en bienes.

SÉPTIMO. En este mismo sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, en sus artículos 109 y 110 y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente, en su artículo 5, a los que reenvía el artículo 13 de la minuta, establecen que la ayuda alimentaria que se otorgue a través de comidas o servicio de comedor se consideran ingresos en servicios, por lo que no está sujeta a gravamen alguno al trabajador y es deducible al patrón en el ISR y en el IETU. En el caso de las despensas, éstas se consideran ingreso exentos salvo para aquellos trabajadores que obtengan ingresos anuales superiores a siete salarios mínimos, en cuyo caso estará exenta hasta por el equivalente de un salario mínimo general elevado al año.

Es importante señalar que en relación a la seguridad social estas prestaciones se ajustaran a lo dispuesto en los artículos 27 fracciones V y VI de la ley del Seguro Social en cuanto a la integración del salario base de cotización.

OCTAVO. En virtud de la connotación fiscal de la Ley a la que se refiere la Minuta que se dictamina, estas Comisiones Unidas deliberamos sobre si la Iniciativa debió o no ser conocida primero por la Cámara de Diputados, con arreglo a lo que dispone el inciso h) del artículo 72 Constitucional y los artículos 57 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, se recordó que las modificaciones a los aspectos formales, materiales y accesorios de una contribución o a la naturaleza de un gravamen constituyen una barrera material infranqueable para el Senado de la República y que cualquier actuación de la misma en ese sentido no es admisible en términos constitucionales.



**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

No obstante, en el caso de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, de acuerdo con el texto contemplado en la Minuta recibida del Senado de la República y contenida en la misma que se dictamina, no se está en presencia de un defecto en su proceso legislativo, ni mucho menos adolece de inconstitucionalidad, ya que ninguna de sus disposiciones alteran los aspectos formales, materiales o accesorios, ni la naturaleza de los impuestos, aportaciones o prestaciones que se abordan.

Por todo lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras Unidas, junto con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, concluyen que el proceso legislativo de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores no vulnera en absoluto lo previsto en el artículo 72, inciso H, de nuestra Ley Fundamental y es, en consecuencia, acorde a la Constitución.

IV. RESOLUCIÓN

1. Se aprueba en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores aprobada por el Senado de la República el 30 de abril de 2009.
2. Se dictamina y se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su aprobación el siguiente:

DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales

Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
Esta Ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de interés social.

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

Artículo 2º. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

- I. Dieta correcta. Aquella que es completa, equilibrada, saludable, suficiente, variada y adecuada, en términos de las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Salud;
- II. Normas. A las normas oficiales mexicanas;
- III. Secretaría. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
- IV. Trabajadores. A los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, independientemente de que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3º. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o mediante combinaciones de éstas.

Se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo.

Artículo 4º. Únicamente los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria en las modalidades y bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento podrán recibir los beneficios fiscales contemplados en esta Ley.

**TÍTULO SEGUNDO
AYUDA ALIMENTARIA**

**Capítulo I
Objetivo de la Ayuda Alimentaria**

Artículo 5º. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en las normas.

Artículo 6º. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, definirá e instrumentará campañas nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

tz

Med

1
Luis

✓

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

**Capítulo II
Modalidades de Ayuda Alimentaria**

Artículo. 7°. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades siguientes:

- I. Comidas proporcionadas a los trabajadores en:
 - a. Comedores;
 - b. Restaurantes, u
 - c. Otros establecimientos de consumo de alimentos.

Los establecimientos contemplados en los incisos a, b y c de esta fracción podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, y

II. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales de despensa en formato impreso o electrónico.

En el marco de la presente Ley, la ayuda alimentaria no podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el presente artículo.

Artículo 8°. En aquellos casos en que la ayuda alimentaria se otorgue de manera concertada, las modalidades seleccionadas deberán quedar incluidas expresamente en el contrato colectivo de trabajo.

Artículo 9°. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, expedirá las normas a las que deberán sujetarse los comedores a que se refiere el inciso a de la fracción I del artículo 7° de esta Ley. Asimismo, ambas dependencias ejercerán, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de los requisitos que éstos deban reunir.

Los gobiernos de las entidades federativas ejercerán el control sanitario de los restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos a los que se refieren los incisos b y c de la fracción I del artículo 7° de esta ley en los términos que señala la Ley General de Salud.

tz

Med

Desp

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a sus trabajadores.

Artículo 11. Los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria en términos de la presente Ley deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Para los vales impresos:

- a) Contener la leyenda "Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero en efectivo";
- b) Señalar la fecha de vencimiento;
- c) Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale;
- d) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso;
- e) Indicar de manera clara y visible el importe que ampara el vale con número y letra, y
- f) Estar impresos en papel seguridad.

II. Para los vales electrónicos:

- a) Consistir en un dispositivo en forma de tarjeta plástica que cuente con una banda magnética o algún otro mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de los establecimientos afiliados a la red del emisor de la tarjeta;
- b) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso;
- c) Indicar de manera visible el nombre o la razón social de la empresa emisora de la tarjeta, y
- d) Utilizarse únicamente para la adquisición de comidas o despensas.

Artículo 12. Para el caso de los vales impresos y electrónicos previstos en esta Ley quedará prohibido:

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

- I. Canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito;
- II. Canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco;
- III. Usarlos para fines distintos a los de esta Ley o para servicios distintos a los definidos en el inciso b o c de la fracción I del artículo 7º o en la fracción II de ese mismo artículo, y
- IV. Utilizar la tarjeta de los vales electrónicos para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros.

Capítulo III
Incentivos y promoción

Artículo 13. Con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades a que se refiere el artículo 7º de esta Ley y alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5º de la misma, los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.

Artículo 14. La Secretaría elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud.

**TÍTULO TERCERO
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA**


Capítulo I
Comisión Tripartita

**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

Artículo 15. La evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley estará a cargo de una comisión tripartita que se integrará en los términos del presente artículo. Corresponderá también a dicha comisión hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria previstas en esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de vigilancia que correspondan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los gobiernos de las entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables.

La comisión tripartita a la que se refiere el párrafo anterior se integrará por:

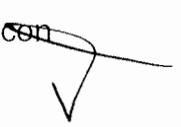
- I. Un representante de la Secretaría, quien la presidirá;
 - II. Un representante de la Secretaría de Salud;
 - III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
 - IV. Tres representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y
 - V. Tres representantes de organizaciones nacionales de los empresarios.
- 

La Secretaría determinará la forma en la cual se asignará la representación a la que se refieren las fracciones IV y V de este artículo.

Los representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal ante la comisión deberán tener nivel de Subsecretario o su equivalente.

La Secretaría podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión tripartita, con el carácter de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales o sociales relacionados con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta Ley.

El funcionamiento y la operación de la Comisión Tripartita se establecerán de acuerdo con sus Reglas Internas de Operación.



Capítulo II
Vigilancia

Artículo 16. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 9º de esta Ley, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá a la Secretaría, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

tz



**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.

**TÍTULO CUARTO
SANCIONES**

Capítulo Único



Artículo 17. Las violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales, federales o locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 18. Para la aplicación de las sanciones derivadas de violaciones a esta Ley, se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 19. La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 10 de esta Ley se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 20. La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados en el artículo 11 de esta Ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 21. Los propietarios de los establecimientos en los que se fomenta, permita o participe en alguna de las conductas descritas en el artículo 12 de esta Ley serán sancionados con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 22. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de esta Ley se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley dos o más veces dentro del período de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.



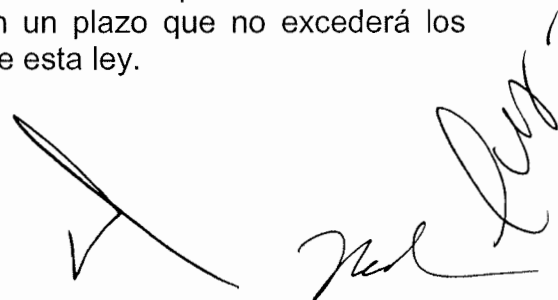
**COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES**

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a la primera sesión de la Comisión Tripartita a la que se refiere el artículo 15 en un plazo que no excederá los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more legible, appearing to be 'M. L. Quesada'.





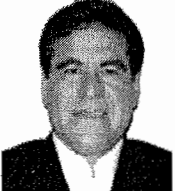
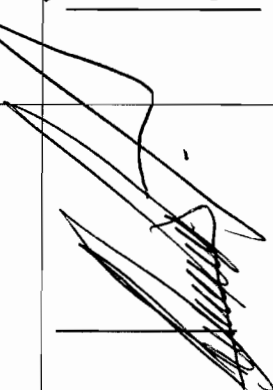



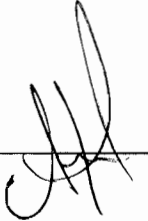
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 14 de abril de 2010.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:



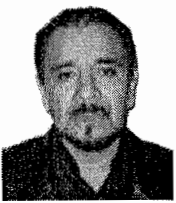





		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. TERESO MEDINA RAMÍREZ Presidente PRI		_____	_____
	DIP. ISRAEL REYES LEDESMA MAGAÑA Secretario PRI		_____	_____
	DIP. AMADOR MONROY ESTRADA Secretario PRI		_____	_____
	DIP. NANCY GONZÁLEZ ULLOA Secretaria PAN	_____	_____	



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES


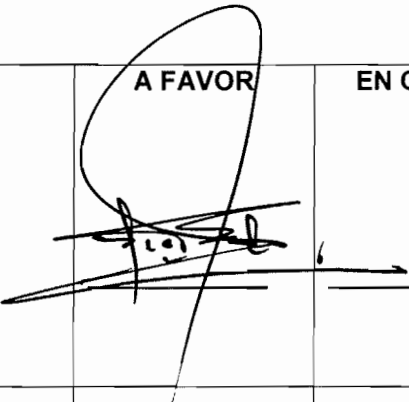


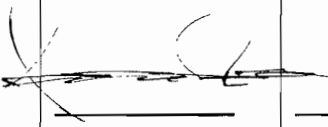

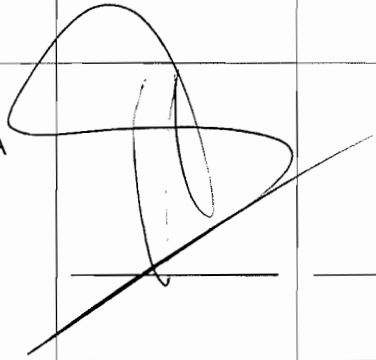


		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. JOSÉ GERARDO DE LOS COBOS SILVA Secretario PAN	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. ARTURO RAMÍREZ BUCIO Secretario PAN	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. FRANCISCO HERNANDEZ JUÁREZ Secretario PRD	 <hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. DIEGO GUERRERO RUBIO Secretario PVEM	 <hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. JUAN NICOLAS CALLEJAS ARROYO Integrante PRI	 <hr/>	<hr/>	<hr/>



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES


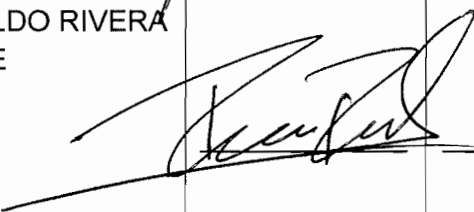



		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. VÍCTOR FELIX FLORES MORALES Integrante PRI			
	DIP. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANADO Integrante PRI			
	DIP. ISAIAS GONZÁLEZ CUEVAS Integrante PRI			
	DIP. ARMANDO NEYRA CHÁVEZ Integrante PRI			
	DIP. CARLOS OZNEROL PACHECO CASTRO Integrante PRI			



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES


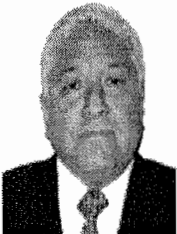
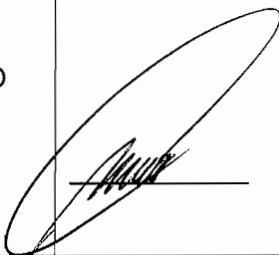

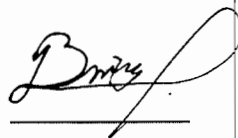


		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ Integrante PRI			
	DIP. REGINALDO RIVERA DE LA TORRE Integrante PRI			
	DIP. LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ Integrante PRI			
	DIP. DAVID HERNANDEZ PÉREZ Integrante PRI			
	DIP. RAFAEL YERENA ZAMBRANO Integrante PRI			



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES



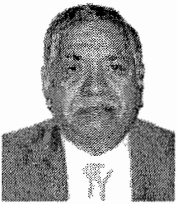
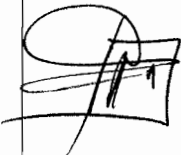

		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. CÉSAR OCTAVIO MADRIGAL DÍAZ Integrante PAN	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. VALDEMAR GUTIÉRREZ FRAGOSO Integrante PAN	 <hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. MARIA FELICITAS PARRA BECERRA Integrante PAN	<hr/>	<hr/>	 <hr/>
	DIP. MATILDE DIAZ DE LEÓN MACÍAS Integrante PAN	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	DIP. NORMA SÁNCHEZ ROMERO Integrante PAN	<hr/>	<hr/>	<hr/>



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE EXPIDE LA LEY DE
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	DIP. LAURA PIÑA OLMEDO Integrante CONVERGENCIA		_____	_____
	DIP. RODOLFO LARA LAGUNAS Integrante PRD		_____	_____
	DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO Integrante PT	_____	_____	_____

Comisión de Salud

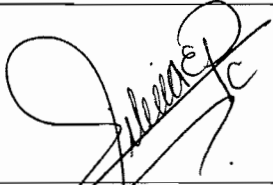

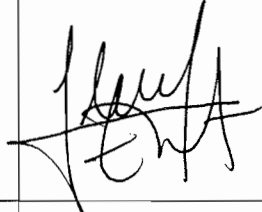


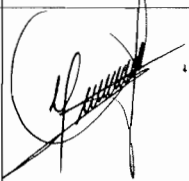



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENSIÓN
DIP. MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLAN PRESIDENTE	Miguel A. Osuna M.		
Dip. MARCO ANTONIO GARCIA AYALA SECRETARIO	3		
DIP. MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR SECRETARIA			
DIP. GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ SECRETARIA			
DIP. ANTONIO BENITEZ LUCHO SECRETARIO			
DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN SECRETARIA			
DIP. RODRIGO REINA LICEAGA SECRETARIO			
DIP. JOSE ANTONIO YGLESIAS ARREOLA SECRETARIO			


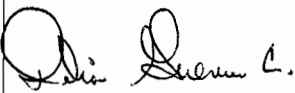

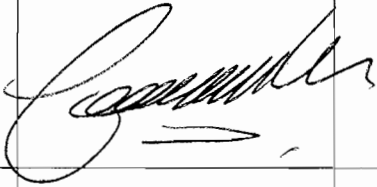
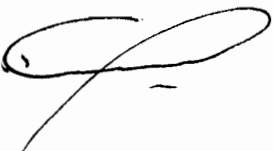
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA
 LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS
 TRABAJADORES.

DIP. SILVIA ESTHER PEREZ CEBALLOS SECRETARIA			
DIP. HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ SECRETARIO			
DIP. CARLOS ALBERTO EZETA SALCEDO SECRETARIO			
DIP. MARIA DEL PILAR TORRE CANALES SECRETARIA			
DIP. FELIPE BORJA TEXOCOTITLA INTEGRANTE			
DIP. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ INTEGRANTE			
DIP. OLGA LUZ ESPINOZA MORALES INTEGRANTE			
DIP. LEANDRO RAFAEL GARCIA BRINGAS INTEGRANTE			

Comisión de Salud



MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES.


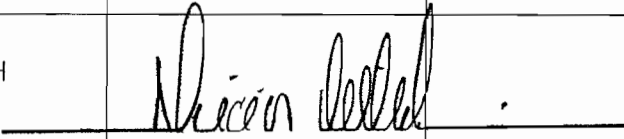

DIP. CLARA GÓMEZ CARO INTEGRANTE			
DIP. DELIA GUERRERO CORONADO INTEGRANTE			
DIP. JOSÉ MANUEL HINOJOSA PÉREZ INTEGRANTE			
DIP. JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA INTEGRANTE			
DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ INTEGRANTE			
DIP. ALFONSO PRIMITIVO RÍOS VÁZQUEZ INTEGRANTE			
DIP. ANA ELIA PAREDES ARCIGA INTEGRANTE			
DIP. GUADALUPE EDUARDO ROBLES MEDINA INTEGRANTE			

Comisión de Salud

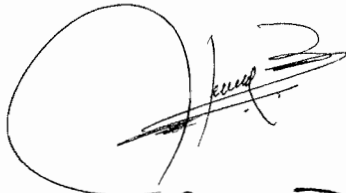


LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

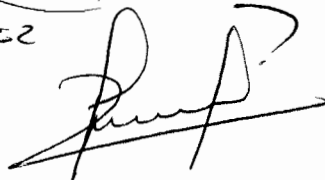
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES.

DIP. SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ INTEGRANTE			
DIP. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA INTEGRANTE			
DIP. LAURA PIÑA OLMEDO INTEGRANTE			
DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS INTEGRANTE			

DIP. ORALIA LOPEZ
HERNANDEZ
INTEGRANTE



DIP. MALCO RAMIREZ
MARTÍNEZ
INTEGRANTE



Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, PRI, presidente; Josefina Vázquez Mota, PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Juan José Guerra Abud, PVEM; Pedro Vázquez González, PT; Pedro Jiménez León, CONVERGENCIA; Reyes Tamez Guerra, NUEVA ALIANZA.

Mesa Directiva

Diputados: Presidente, Francisco Ramírez Acuña; vicepresidentes, Francisco Javier Salazar Sáenz, PAN; Felipe Solís Acero, PRI, José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD; secretarios, María Dolores del Río Sánchez, PAN; Georgina Trujillo Zentella, PRI; Balfre Vargas Cortés, PRD; Carlos Samuel Moreno Terán, PVEM; Gerardo Fernández Noroña, PT; Jaime Arturo Vázquez Aguilar, NUEVA ALIANZA; María Teresa Ochoa Mejía, CONVERGENCIA.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>

Gaceta Parlamentaria

Año XIII

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 29 de abril de 2010

Número 2999-V

CONTENIDO

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Anexo V

Jueves 29 de abril

Comisión de Puntos Constitucionales

**DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 66 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. El 20 de octubre de 2009, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la LXI Legislatura, diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometieron a consideración del Pleno, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de incorporar la denominación del estado de Coahuila, como
“Coahuila de Zaragoza”

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ésta H. Cámara de Diputados
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa con proyecto de
decreto para su estudio, análisis y dictaminación.

II. MATERIA DE LA INICIATIVA

La iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Pleno de esta H. Cámara a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y análisis, propone reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que sea elevada a rango constitucional la correcta denominación del estado de Coahuila ya que, en el ámbito local y desde el año de 1868, tanto jurídica como socialmente, dicha entidad es reconocida como “Coahuila de Zaragoza”, dado que en Bahía de Espíritu Santo, en el territorio que anteriormente la conformaba (y que actualmente pertenece al estado de Texas, Estados Unidos de América), nació el general Ignacio Zaragoza Seguín, razón por la que resulta imperativo que en nuestra Carta Magna se incorpore esa denominación que implica la verdadera identidad del estado de mérito.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa con proyecto de decreto que envió el 20 de octubre de 2009 la Mesa Directiva de ésta H. Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictaminación, plantea reformar el artículo 43 de la Constitución en el sentido de que le sea reconocida su identidad y correcta denominación al estado de Coahuila para que quede establecido en dicho precepto como “Coahuila de Zaragoza”, basándose para ello en argumentos de tipo histórico, político y socio-jurídico, que refieren cuestiones inmersas en el decreto de 1864 expedido por el entonces presidente de la República, Benito Juárez García, y ratificado mediante ley del Congreso General de 18 de noviembre de 1868, en que se determinó por primera ocasión, la denominación de “Coahuila de Zaragoza”, elementos que serán valorados para arribar la resolución correspondiente.

IV. ARGUMENTOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTÓ LA INICIATIVA

La iniciativa que presentó el diputado Rubén Moreira Valdez en sesión de 20 de octubre de 2009 a nombre de diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, que dio origen a la Minuta que se dictamina por esta Comisión de Puntos Constitucionales, se sustenta en los siguientes argumentos:



Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Desde la manifestación expresa del presidente Benito Juárez en 1868 mediante decreto expedido en el cual determina plenamente el establecimiento de nuestro estado bajo la denominación de Coahuila de Zaragoza, el nacimiento jurídico de nuestra entidad con esa denominación se declaró con las Constituciones locales de 1869, 1882 y 1918.

La importancia que tiene la denominación de nuestro estado y, precisamente, la justificación principal de la presente iniciativa de decreto, descansa en que nuestra denominación actual obedece a la que le dio el poder federal desde que la entidad nace a la vida constitucional. Antes no podía considerarse como tal por tres razones específicas: la unificación de los estados de Coahuila y Texas; el gobierno centralista mexicano y la anexión transitoria de Coahuila con Nuevo León.

El nombre del estado de Coahuila de Zaragoza representa un acertado homenaje de admiración y respeto por parte del presidente Benito Juárez al general Ignacio Zaragoza Seguín, quien nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía de Espíritu Santo, Texas, territorio que en ese entonces pertenecía al estado anteriormente denominado Coahuila y Texas. Zaragoza es uno de los personajes de la historia mexicana que contribuyó con la nación en el combate contra fuerzas extranjeras para lograr el estado de derecho del que hoy disfrutamos.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

El joven Ignacio Zaragoza demostró su valor como soldado, ya que con su entereza, preparación intelectual y frente a las armas, carácter político y capacidad de organización de los grupos de guerra de la nación y supo hacer frente a uno de los mayores logros como mexicanos, como lo fue el vencer en batalla a la milicia francesa, 3 considerada como entre las más fuertes y experimentadas a nivel mundial.

No es únicamente la libertad, independencia y soberanía que disfruta nuestro estado, al igual que cualquier otra entidad federativa de la República Mexicana, la que nos facultó en la elección de la denominación de Coahuila de Zaragoza. Es la observancia y cumplimiento al decreto presidencial emitido por Juárez quien, tomando en consideración las circunstancias y peculiaridad política por la que atravesaba nuestro estado durante los años en que emitió el decreto presidencial al cual hemos hecho referencia, optó por agregar a la denominación de la entidad el nombre de Ignacio Zaragoza.

Y es esta misma razón, aunada a la congruencia que pretendemos entre el texto de nuestra Constitución General con la local, 4 las que impulsan la intención de la presente iniciativa, a fin de que esta honorable asamblea reconozca dentro del artículo 43 de la



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos el nombre completo de nuestra entidad federativa.

A estas consideraciones, sumamos la del derecho que tiene nuestro estado a que sea ratificada su correcta denominación. Esto tal como se presenta en el derecho a la identidad de las personas, que cuentan con diversos mecanismos que implanta el estado a fin de que sean reconocidos dentro del ámbito jurídico y social y puedan ser sujetos de derechos y obligaciones, y con la posibilidad de que se oficialice su existencia legal.

Uno de estos mecanismos es la inscripción o registro del nombre de la persona. Y si por cualquier causa, la inscripción de éste tuviera algún error, necesitara alguna adecuación o corrección, la persona tiene el derecho y facultad de solicitar ante la autoridad que se realice la modificación correspondiente. El sentido de la presente iniciativa estriba en el sentido de adecuar la denominación completa y correcta de nuestra entidad federativa.”



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

V. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Como introducción y para contextualizar el estudio que nos ocupa, es necesario conocer otros elementos que tienen que ver con la identidad del estado de Coahuila, por lo que partiremos por desentrañar el significado etimológico de la palabra Coahuila y al respecto se puede establecer que deriva de los vocablos en náhuatl *coatl*, que quiere decir *culebra*, y *huilana*, que significa *arrastrarse*, lo que podría interpretarse como *“lugar donde se arrastran las culebras”*; asimismo, durante la gestión del Maestro José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, se aceptó la versión de que Coahuila deriva del vocablo náhuatl *coátl* y *huila* (de *huilota*, nombre de una paloma), lo que se traduciría como *“víbora que vuela.”*¹

En la iniciativa presentada ante el Pleno de ésta H. Cámara, por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Legislatura LXI, se considera que es relevante para la sociedad coahuilense y, por ende, para nuestra Nación, se aborde el tema relacionado con el reconocimiento de la correcta y completa denominación de un estado de la Federación, como “Coahuila de Zaragoza”, lo que debe obrar expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de que este nombre obedece a razones históricas relacionadas con el lugar de nacimiento del general Ignacio Zaragoza y con el decreto expedido por el entonces presidente Benito Juárez García en 1864, dicha entidad

¹ ÁLVAREZ José Rogelio, *Enciclopedia de México*, Tomo III, Sabeca International Investment Corporation, México, 1993, página 1576



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

federativa, desde la segunda mitad del siglo XIX ha asumido esa identidad, conforme a continuación se plantea.

La denominación de “Coahuila de Zaragoza” fue empleada y reconocida por primera ocasión por el presidente Benito Juárez García, lo que fue ratificado por el Congreso General mediante el decreto de 20 de noviembre de 1868 que a la letra dice:

“... Noviembre 20 de 1868 .— Ministerio de Gobernación .-- Decreto del Congreso erigiendo el Estado de Coahuila.

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.—El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que sigue:

El Congreso de la Unión, habiendo observado los requisitos prescritos en la fracción 3ª del artículo 72 de la Constitución, decreta:

Queda definitivamente erigido el Estado de Coahuila, con el nombre de “Coahuila de Zaragoza.”



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

*Salón de sesiones del Congreso de la Unión, México, noviembre 18 de
1868.-- Guillermo Valle, Diputado Presidente.— Joaquín Baranda,
Diputado Secretario.—Juan Sánchez Ancona, Diputado Secretario.*

*Por tanto, mando se imprima, publique y circule. Dado en el Palacio
Nacional en México, a 20 de noviembre de 1868.—Benito Juárez.—Al
C. José María Iglesias, Ministro de Gobernación.*

Y lo comunicó a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

*Independencia y libertad, México, Noviembre 20 de 1868.—
Iglesias.— Ciudadano Gobernador del Estado de ...”²*

El decreto presidencial de 20 de noviembre de 1868, fue el cimiento para la expedición de la Constitución de Coahuila de 1869, en la que por primera ocasión se denominó a dicho estado como “Coahuila de Zaragoza” y se dio seguimiento a lo que el decreto en mención señaló en cuanto al nombre y límites territoriales de la referida entidad,³ además con la finalidad de rendir un homenaje póstumo al general Ignacio Zaragoza Seguín, por su destacada labor de carácter militar en las diversas batallas en las que participó, defendiendo a nuestra Patria en las intervenciones norteamericanas y francesas ocurridas en territorio nacional en el siglo XIX, homenaje que, con la reforma propuesta, se refrendaría a nivel federal, lo que corresponde a la investidura

² DUBLAN Manuel y LOZANO José María, *Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República*, edición especial, Tomo X, Imprenta del Comercio de Dublan y Chávez, México 1878, página 459

³ Ob.Cit, página 1591



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

de tan destacado personaje de nuestra historia, que precisamente nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía de Espíritu Santo, territorio que en ese entonces pertenecía al estado de la República mexicana anteriormente denominado Coahuila y Texas, quien además de ser un brillante estratega militar, es un coahuilense destacado.

Las constituciones del estado de Coahuila, de 1882 y la vigente de 1918, han seguido denominando a dicha entidad como “Coahuila de Zaragoza”, sin que la Constitución Federal sea acorde a esa circunstancia, lo que implica no considerar lo que se estableció en el decreto del presidente Benito Juárez García, razón por la que el texto actual del artículo 43 de la Constitución debe ser reformado y ajustado a esa realidad política, social y jurídica del estado de Coahuila, denominando a tal entidad como “Coahuila de Zaragoza”.

En un Estado de derecho democrático, el orden normativo, en el que destaca la propia Constitución Política, debe ser acorde a la realidad social imperante, lo que no sólo implica a los individuos, sino también a las instituciones y entidades que lo conforman e interactúan en ese contexto social; con ello, se logra dotar de una verdadera eficacia al derecho positivo, lo que se torna de notable trascendencia cuando esta adecuación normativa tiene lugar en lo referente a las entidades federativas ya que, lo que a éstas atañe, necesariamente tiene una especial incidencia en la esencia del federalismo, que constantemente debe reforzarse para dar cohesión a esta forma de ser que conlleva una decisión soberana de nuestra Nación, que data de la época en que México obtuvo su independencia.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

No se puede negar que es necesario que cada uno de los ordenamientos legales así como los demás actos de gobierno que se verifiquen en los estados de la República, sean acordes a la Constitución General, pero ello sin perder de vista que esta última debe propiciar las condiciones para que estos actos acaezcan dentro de las pautas que necesariamente estén vinculadas con el debido reconocimiento de su soberanía; entendida la soberanía, no sólo en el sentido tradicional de esta acepción como el respeto de la libertad de los estados para autodeterminarse o autogobernarse, sino en el del reconocimiento de la valía de éstos como partes insignes de la Federación, lo que confiere especial relevancia a los aspectos históricos que tienen raigambre en sus orígenes y su cultura, que configuran la identidad y forma de vida de cada estado.

Así tenemos que, resulta imperativo, en el caso del estado de Coahuila, se avive esa significación de lo que es un “estado soberano”, conforme quedó anotado en el párrafo que precede, lo que sólo puede lograrse si el texto vigente de la Carta Magna, específicamente el artículo 43, es reformado en el sentido de que, en la enunciación de las entidades federativas que integran la República Mexicana, se inserte la denominación que, conforme a su historia y cultura, corresponde a su verdadera identidad: la de “Coahuila de Zaragoza”.

Con el reconocimiento constitucional de la denominación correcta del estado de Coahuila como “Coahuila de Zaragoza”, se cumple con el cometido de incorporar a la Carta Magna la verdadera identidad de dicha entidad federativa, lo que tiene profundas raíces en su historia, su cultura y hasta su tradición jurídica, conforme se advierte de sus constituciones locales, además de cobrar relevancia el sentido de



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

pertenencia de la sociedad coahuilense, por el orgullo de que es oriundo su estado un personaje de especial relevancia en la historia de México, como lo es el general Ignacio Zaragoza Seguín.

VI. CONCLUYE

I. Esta Comisión dictaminadora comparte las consideraciones expuestas por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de ésta Legislatura LXI en la iniciativa en estudio, por lo que se **dictamina en sentido positivo** el proyecto de decreto que reforma al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos, con la idea de que se le reconozca constitucionalmente al Estado de Coahuila su denominación correcta, que es la de “Coahuila de Zaragoza”.

II. En este tenor, la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que la realización de esta reforma dotará de la homogeneidad requerida al orden jurídico nacional, a fin de que el texto de la Carta Magna sea acorde a lo que ha dictado la tradición jurídica en el estado de Coahuila, dado que en diversas constituciones locales de la entidad de 1869, 1882 y 1918, se ha establecido su identidad como “Coahuila de Zaragoza”, con que además se da seguimiento a lo que en su momento se estableció en el decreto de 20 de noviembre de 1868, emitido por el entonces presidente de la República, Benito Juárez García.

III. Dado lo anterior, la presente reforma al artículo 43 Constitucional constituye un reconocimiento a la historia, cultura e identidad del estado de Coahuila, dados los



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

aspectos que fueron fundamentales en la creación de una forma de vida e identidad de la sociedad coahuilense y están relacionados con el al desarrollo y estabilidad política de nuestro país.

IV. Aunado a lo anterior, con la reforma constitucional que se dictamina, se realiza un merecido reconocimiento a la labor militar que en defensa de nuestra Patria desplegó el general Ignacio Zaragoza Seguín, en las diferentes batallas que libró contra del invasor extranjero, dado que el estado del que es oriundo asume su identidad incluyendo en su denominación el nombre de este héroe de la Nación, lo que obedece al espíritu mismo del decreto en que por primera ocasión recibió el estado la denominación de “Coahuila de Zaragoza”, conforme quedó anotado.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora somete a su consideración el siguiente:



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

***Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.*

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro a veinte de abril
de dos mil diez

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS
Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

28/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. JUVENTINO CASTRO Y CASTRO. PRD PRESIDENTE			
 DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. PRD SECRETARIO			
 DIP. FELICIANO ROSENDO MARÍN DÍAZ. PRD SECRETARIO			
 DIP. REGINALDO RIVERA DE LA TORRE. PRI SECRETARIO			
 DIP. HERIBERTO AMBROCIO CIPRIANO. PRI SECRETARIO			
 FRANCISCO SARACHO NAVARRO. PRI SECRETARIO			
 DIP. GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. PAN SECRETARIO			



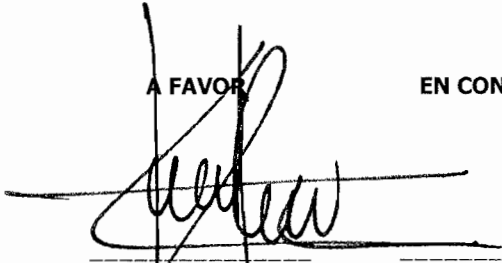

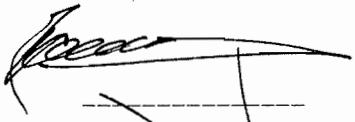
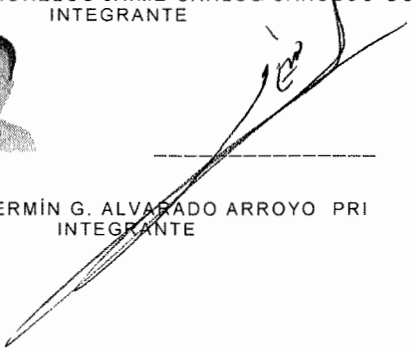
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Mexicanos

Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos

28/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS. PAN SECRETARIO			
 DIP. GUILLERMO CUEVA SADA. PVEM. SECRETARIO			
 DIP. JAIME F. CÁRDENAS GRACIA. PT SECRETARIO			
 DIP. JOSÉ LUIS JAIME CORREA. PRD. INTEGRANTE			
 DIP. DINA HERRERA SOTO. PRD. INTEGRANTE			
 DIP. MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GÓMEZ. PRI INTEGRANTE			
 DIP. FERMÍN G. ALVARADO ARROYO. PRI INTEGRANTE			



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Mexicanos

Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

28/04/10

NOMBRE

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN



DIP. VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO. PRI.
INTEGRANTE



DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR. PRI.
INTEGRANTE



DIP. FERNANDO FERREYRA OLIVARES. PRI.
INTEGRANTE



DIP. DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO. PRI.
INTEGRANTE



DIP. RAFAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. PRI.
INTEGRANTE.



DIP. JOSÉ R. LÓPEZ PESCADOR. PRI.
INTEGRANTE



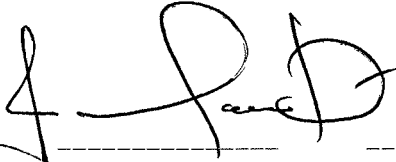


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Mexicanos

Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos

28/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. MIGUEL E. POMPA CORELLA. PRI. INTEGRANTE			
 DIP. GUADALUPE PÉREZ DOMÍGUEZ. PRI. INTEGRANTE			
 DIP. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO. PRI. INTEGRANTE			
 DIP. JUSTINO E. ARRIAGA ROJAS. PAN INTEGRANTE			
 DIP. VICTOR A. BALDERAS VAQUERA. PAN. INTEGRANTE			
 DIP. MARIO A. BECERRA POCOROBA. PAN. INTEGRANTE			


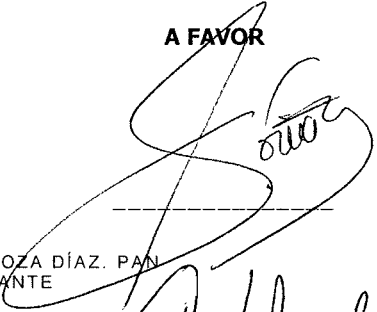



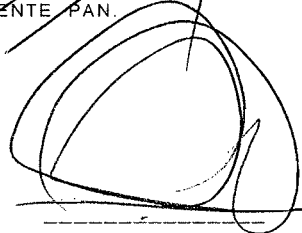


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

28/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. SONIA MENDOZA DÍAZ. PAN. INTEGRANTE			
 DIP. CAMILO RAMÍREZ PUENTE. PAN. INTEGRANTE			
 DIP. AGUSTIN TORRES IBARROLA. PAN. INTEGRANTE			

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, PRI, presidente; Josefina Vázquez Mota, PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Juan José Guerra Abud, PVEM; Pedro Vázquez González, PT; Pedro Jiménez León, CONVERGENCIA; Reyes Tamez Guerra, NUEVA ALIANZA.

Mesa Directiva

Diputados: Presidente, Francisco Ramírez Acuña; vicepresidentes, Francisco Javier Salazar Sáenz, PAN; Felipe Solís Acero, PRI, José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD; secretarios, María Dolores del Río Sánchez, PAN; Georgina Trujillo Zentella, PRI; Balfre Vargas Cortez, PRD; Carlos Samuel Moreno Terán, PVEM; Gerardo Fernández Noroña, PT; Jaime Arturo Vázquez Aguilar, NUEVA ALIANZA; María Teresa Ochoa Mejía, CONVERGENCIA.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LX y LXI Legislatura, con fundamento a los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes Iniciativas.

Que adiciona un párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por la diputada Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura, en fecha 30 abril 2009.

Que reforma y que adiciona la fracción VI del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en fecha 19 de agosto 2009.

Que reforma los artículos 23, 24, 26, 28 y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, presentada por los diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, en fecha 22 de febrero 2007.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, en fecha 20 de febrero 2007.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en fecha 12 de diciembre 2007.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Dávila Fernández, Beatriz Eugenia García Reyes, Jorge Alejandro Salum del Palacio y Carlos Armando Reyes López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en fecha 15 de abril 2009.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en fecha 12 de abril 2007.

Que reforma la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en fecha 13 de abril 2010.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, en fecha 6 de abril 2010.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Jorge Humberto López Portillo, Indira Vizcaíno Silva y Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza, respectivamente, de la LXI Legislatura, en fecha 23 de marzo 2010.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores y Hugo Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en fecha 2 de marzo 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y al análisis de las iniciativas mencionadas al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. La Comisión de Economía, desde su instalación en el mes de octubre del año 2009, estableció como uno de sus objetivos para su primer año de trabajo legislativo "Garantizar una competencia sana en todos los mercados que proteja al consumidor y fortalezca la competitividad de nuestros sectores productivos" mediante una reforma integral a la Ley Federal de Competencia Económica.

Segundo. Para lo anterior se organizaron foros y audiencias públicas con la participación de todos los actores interesados —Comisionados de la Comisión Federal de Competencia, agentes económicos, organismos no gubernamentales y expertos en la materia— a fin de discutir y elaborar propuestas que contribuyeran a reformar el marco regulatorio y avanzar en este campo en beneficio de todos los mexicanos.

Tercero. En las sesiones celebradas en ésta Cámara de Diputados en las fechas 27 de enero del 2010, 30 de abril del 2009, 22 de febrero del 2007, 20 febrero del 2007, 12 de diciembre del 2007, 15 de abril del 2009, 12 de abril del 2007, 13 de abril del 2010, 06 de abril del 2010, 23 de marzo del 2010 y 2 de marzo del 2010, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de las Iniciativas de Ley mencionadas en el exordio del presente escrito.

Cuarto. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Térnese a la Comisión de Economía"; y en el caso específico de la iniciativa venida del Titular del Ejecutivo Federal se acordó: "Térnese a la Comisión de Economía con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de la Comisión de Justicia"

Quinto. Los legisladores en sus iniciativas proponen lo siguiente:

La diputada Mónica T. Arriola Gordillo plantea:

Adicionar a la Ley Federal de Competencia el establecimiento de acciones colectivas como medios para la tutela jurisdiccional de los sujetos a los que es aplicable la ley, pues si bien pueden ser sujetos de sanción, no están legitimados para actuar contra quienes figuren como causantes de su detrimento.

El diputado Jorge Alejandro Salum plantea:

Atribuir a la Comisión Federal de Competencia la facultad de emitir opinión vinculatoria, para promover la innovación tecnológica y científica y su aplicación mediante la capacitación en beneficio del campo, tomando en consideración los modelos de investigación y asistencia técnica más apropiados a los distintos tipos de agricultores y zonas rurales.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo plantea:

Dotar de autonomía administrativa, financiera, técnica y operativa a la Comisión Federal de Competencia, para lo que se propone modificar la naturaleza jurídica de la Comisión, de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado y ampliar sus facultades, de manera que no esté sectorizada.

Asimismo, ampliar las facultades de la Comisión para recaudar información y documentos, establecer lineamientos para determinar si una concentración económica limita o no la competencia, definir el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas entregan a la Comisión para su investigación, crear registros, establecer

criterios de fijación de control de mercado y crear un Instituto de Investigación de las Prácticas Monopólicas y un Consejo Consultivo Ciudadano como órganos auxiliares de la Comisión.

También propone que el Presidente de la Comisión Federal de Competencia y los demás comisionados sean designados por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta que haga la Comisión y que el periodo de encargo de la Presidencia sea de 5 años ratificables para otro periodo igual de número de años.

El diputado Eduardo Sánchez Fernández plantea:

Dar atribuciones a la Secretaría de Economía y a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que coordinen y establezcan todas las medidas necesarias para evitar las conductas económicas que tengan por objeto el incremento de precios. Asimismo, establece la obligación a la Comisión Federal de Competencia de llevar a cabo investigaciones al respecto y publicar anualmente los resultados, a fin de establecer medidas compensatorias temporales a los consumidores o usuarios cuando no existan condiciones de competencia adecuadas.

Además establece que todas las resoluciones dictadas por la Comisión puedan ser impugnadas mediante recurso administrativo ante autoridad competente o en su caso, juicio de nulidad.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa plantea:

Integrar el Pleno de la Comisión Federal de Competencia por siete comisionados y no por cinco como se estipula en la ley vigente, y que los comisionados en lugar de 10 años duren en su cargo 6 años, sin que este periodo pueda ser renovado, y que la designación sea escalonada y anual.

Igualmente que el cargo del Presidente de la Comisión Federal de Competencia dure 2 años con la posibilidad de renovarse una sola vez, en lugar de los 6 años establecidos en la ley vigente.

Finalmente y con el propósito de coadyuvar a la transparencia, que los agentes económicos involucrados en cualquier investigación de la Comisión Federal de Competencia sean notificados de manera directa.

Los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Dávila Fernández, Beatriz Eugenia García Reyes, Jorge Alejandro Salum del Palacio y Carlos Armando Reyes López, plantean:

Incluir como práctica monopólica relativa el que un agente económico haga uso persistente de las ganancias que obtenga de la venta de un bien o servicio para financiar pérdidas en otro bien o servicio, así como establecer que para los productos perecederos

industrializados o transformados no se consideren ganancias en eficiencia el aprovechamiento de bienes derivados de saldos, productos dañados o defectuosos.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho plantea:

Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia mediante el incremento de multas como medida persuasiva, y que estén determinadas en base a un porcentaje de las ventas anuales obtenidas por el infractor en el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción.

Los diputados Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, plantean:

Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia mediante el aumento de las sanciones, estableciendo las multas en un porcentaje de ingresos acumulables para los efectos del Impuesto Sobre la Renta en el último ejercicio fiscal en que se incurrió la infracción, así como ampliar las obligaciones del órgano regulador en materia de transparencia y rendición de cuentas, obligándolo a que presente informes sobre el cumplimiento de los lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia a que deberá sujetarse la administración pública en el otorgamiento de concesiones y en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Asimismo, propone cambiar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía a uno desconcentrado de la Administración Pública Federal, dotándolo de autonomía presupuestaria, así como la creación de un consejo consultivo compuesto por académicos, Presidentes de las Comisiones de Economía y de Comercio de las Cámaras del Congreso de la Unión, representantes del Banco de México, del Poder Judicial y de organismos privados y de consumidores.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos propone:

Reformar diversos ordenamientos legales a fin de simplificar las notificaciones de concentraciones; instaurar la terminación anticipada de los procesos que revisan prácticas monopólicas; introducir la figura de la audiencia oral, una vez integrado el expediente; establecer que el Secretario Ejecutivo sea designado por el Pleno de la Comisión a propuesta de su presidente; introducir la figura del Comisionado Ponente, quien tendrá a su cargo realizar el proyecto de sentencia y presentarlo al Pleno para su discusión; establecer la obligación para los agentes económicos proporcionen la información necesaria para emitir opiniones; cambiar el sistema de sanciones por uno basado en ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta; criminalizar las prácticas monopólicas absolutas, así como la posibilidad de determinar poder sustancial conjunto cuando uno o varios agentes económicos sean capaces de imponer condiciones de precio y abasto sin que existan competidores que puedan contrarrestar la acción.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal propone la posibilidad de que la Comisión pueda aplicar medidas cautelares para suspender acciones que pudieran ser prácticas

monopólicas ilegales y facilitar el proceso de visitas de verificación de manera que sean más expeditas, eficientes y equitativas.

Los diputados Jorge Humberto López Portillo, Indira Vizcaíno Silva y Jorge A. Kahwagi Macari, plantean:

Actualizar las referencias de la Ley Federal de Competencia Económica con respecto a la "Secretaría de Comercio y Fomento Industrial", para que concuerde con la denominación de la actual cabeza de sector, que es la Secretaría de Economía.

Los CC. Diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez De La Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores y Hugo Martínez González, plantean:

Excepcionar de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica a los Notarios Públicos.

Exposición de Motivos

En su carácter de entidad normativa que sustenta las bases de la convivencia social y del régimen económico del país y busca el constante mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, el Estado es responsable de establecer y afianzar las condiciones que garanticen el funcionamiento de la economía bajo un modelo de libre y justa competencia.

En este sentido, la responsabilidad del Estado debe ser integral, de manera que contemple al conjunto de la población y del territorio y a las distintas ramas y sectores económicos.

Al mismo tiempo, en el ejercicio de su rectoría el Estado debe evitar que se otorguen privilegios y ventajas indebidos a grupos específicos de la Nación, propósito que guarda estrecho vínculo con el fortalecimiento y la consolidación de nuestra democracia en su más amplio sentido. Ello bajo criterios de igualdad y de equidad, lo mismo entre regiones y entre grupos sociales, que entre actividades económicas y de otra naturaleza.

México debe aspirar a impulsar las capacidades manifiestas y las potencialidades de sus ciudadanos, como condición de creatividad, generación de riqueza y bienestar colectivo. México debe aspirar de nuevo a ocupar por derecho propio un lugar señero en el mundo.

El Estado mexicano debe garantizar la eficaz inserción del país en los mercados internacionales en el marco de la globalización de la economía y de la intensificación de los intercambios económicos, financieros y productivos con el resto del mundo, en el contexto de una creciente relación y competencia entre países, regiones y conjuntos de países.

Por ello, en última instancia la responsabilidad del Estado —y por tanto la de los poderes Ejecutivo y Legislativo— es garantizar el funcionamiento eficaz de las estrategias, las

políticas y las instituciones que permitan a los mexicanos acceder a niveles dignos de vida por medio de la generación de riqueza como factor fundamental de bienestar social.

En ese contexto y en el marco de los retos y las oportunidades que representa la globalización, es fundamental que el Estado mexicano garantice al conjunto de los actores económicos una competencia leal y justa en los mercados nacionales.

De manera complementaria y en ese mismo sentido, sólo si se garantizan las condiciones de justa competencia en la economía del país, será posible que México pueda competir con éxito en el ámbito global.

A este propósito, fortalecer la competencia en México es clave para incrementar la competitividad, la productividad y el crecimiento económico, de acuerdo a organismos nacionales e internacionales, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

De ahí la enorme trascendencia que supone para el país reformar la Ley Federal de Competencia Económica, en la medida en que sólo de esta manera será posible que las empresas del país incrementen sus niveles de productividad y competitividad.

Al respecto, es preciso señalar que la Ley vigente fue promulgada hace dieciocho años, con reformas en 1998 y 2006, mientras que las condiciones del entorno económico internacional y nacional fueron transformándose de manera señaladamente acelerada.

Resulta por demás evidente que México presenta rezagos en materia de competencia económica y que en tal sentido el combate a los monopolios y a las prácticas anticompetitivas debe incrementar sus alcances, en condiciones de la mayor eficacia y transparencia.

Es un hecho que hoy en día la Ley Federal de Competencia Económica como marco jurídico de referencia en la materia no satisface a los actores económicos, a los ciudadanos consumidores y tampoco al propio ente regulador.

Así, mientras México se encuentra visiblemente rezagado en materia de competencia y de regulación económicas en términos de las mejores prácticas internacionales, otros países han mejorado e impulsado sustantivamente el diseño organizacional de sus respectivas entidades reguladoras y del andamiaje jurídico que sustenta su actuación y el comportamiento de sus agentes económicos.

Cabe señalar que en dichas naciones ello se ha traducido en un mayor rendimiento económico, en una mayor capacidad de competir exitosamente con otros países, en la reducción de costos de transacción e información y en un mayor poder adquisitivo de sus ciudadanos.

En consecuencia, el propósito de la reforma de la Ley no puede ser otro que situarnos en un pie de igualdad con esas naciones, asegurar una mejor inserción de nuestro país en los mercados globales, una mayor capacidad de los empresarios para competir dentro y fuera del país; y, asimismo y desde luego, una mayor capacidad para generar más y mejores empleos mejor remunerados que se traduzcan en el acceso a mayores niveles de bienestar para los mexicanos y sus familias.

Así pues, el propósito en el que se inscribe la presente reforma a la Ley responde al hecho de que la creación de instituciones eficaces y el mejoramiento de las instituciones existentes pueden reducir en forma sustantiva los riesgos y la incertidumbre económica y social.

En suma: en términos de justa competencia es impostergable contar con una Ley que regule las actividades económicas y productivas del país en forma eficaz, mediante los estímulos adecuados y ello se traduzca en la innovación y el desarrollo de iniciativas empresariales; la generación de más empleos, una mayor productividad y competitividad de nuestras empresas y mayores beneficios para los empresarios, así como una mayor capacidad para invertir en la planta productiva nacional y en una reducción de los precios de bienes y servicios.

Cabe destacar que siendo la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica parte sustantiva de la Reforma del Estado y, en tal sentido, indispensable para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país, al mismo tiempo resulta necesario que para garantizar sus mayores alcances y propósitos, deba ser acompañada por otras reformas e iniciativas de gran importancia, como el diseño de una política de desarrollo industrial y las reformas fiscal, laboral y educativa, entre otras medidas y políticas de Estado.

Tres son los grandes rubros que agrupan la mayoría de los cambios introducidos a la Ley en la presente reforma: fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de cuentas y, asimismo, sanciones y medidas cautelares.

En materia de fortalecimiento institucional, la presente Ley impulsa un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior del órgano regulador, en el marco de la relación entre el Secretario Ejecutivo, los Comisionados y el Comisionado Presidente, bajo un esquema de pesos y contrapesos. Dicho equilibrio se sustenta en la dotación de mayores facultades al Pleno de la Comisión, en investir de una mayor capacidad investigadora al Secretario Ejecutivo y en la creación de la figura del Comisionado Ponente que tendrá la responsabilidad de presentar una ponencia respecto del sentido en que proponga resolver el asunto en cuestión, la cual deberá ser votada por todos los Comisionados en sesión plenaria.

Por otra parte, en materia de transparencia, rendición de cuentas y simplificación, la presente reforma establece una serie de rubros mínimos a los cuales deberá referirse el informe anual de la Comisión, así como la fecha límite para su presentación, lo que permitirá tener un conocimiento más preciso respecto del funcionamiento, resultados y eficacia del órgano encargado del combate a los monopolios.

También de conformidad con las prácticas internacionales y a fin de dar la mayor certeza jurídica a los agentes económicos, se obliga a que la Comisión Federal de Competencia expida criterios técnicos sobre temas relevantes para la aplicación de la ley reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, con el objetivo de asegurar que quienes estén sujetos a dicho cuerpo normativo, tengan el mayor conocimiento posible sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el marco jurídico correspondiente.

En este mismo sentido se hace necesaria la simplificación del procedimiento para notificar concentraciones, así como la excepción de dicha obligación para aquellas operaciones corporativas que no importan ninguna amenaza a la competencia y libre concurrencia para elevar la competitividad del país.

En materia de sanciones económicas, ante lo irrisorio de las vigentes en comparación con las que imponen nuestros socios comerciales, se hace necesario cambiar la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, a fin de que en el marco regulatorio existan elementos fuertemente disuasivos con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas.

Asimismo, y tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, se introduce la figura de la medida cautelar en la Ley Federal de Competencia Económica, con el propósito de que durante el procedimiento de competencia se suspendan aquellas posibles prácticas que pudieran dañar, disminuir o impedir el proceso de competencia y libre concurrencia.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre las iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversos dispositivos de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del Código Penal Federal, mismas que fueron enunciadas en la introducción del presente dictamen.

Segunda. Que la competencia económica y libre concurrencia implican que cualquier persona pueda participar en alguna actividad económica como vendedor o comprador con plena libertad de escoger el momento de entrada y salida del mercado, sin que nadie pueda imponer condiciones en las relaciones de intercambio, siendo de tal relevancia que el Constituyente de 1917 prohibió de manera taxativa, en el artículo 28 Constitucional, los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos.

Tercera. Que la ley reglamentaria del artículo referido, en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es la Ley Federal de Competencia Económica, cuyo objeto es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia

mediante la prevención y eliminación de monopolios de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Cuarta. Que la referida ley reglamentaria actualmente establece la existencia de un órgano formalmente administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, denominado Comisión Federal de Competencia, al cual se le ha encargado la investigación y combate de monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones; y que sin embargo, debido a que el marco legal es insuficiente para garantizar el debido cumplimiento de su objetivo, no ha logrado que los beneficios de una sana competencia permeen hacia los consumidores.

Quinta. Que dado lo anterior, es necesario establecer equilibrios institucionales claros que permitan garantizar la actuación imparcial del órgano regulador de manera que den certeza a los agentes económicos respecto a la independencia y legalidad de sus decisiones, así como balances y contrapesos adecuados entre los Comisionados, el Secretario Ejecutivo y el Comisionado Presidente.

Sexta. Que en el órgano de competencia los procesos de investigación e instrucción del procedimiento contra un agente económico presuntamente responsable de una práctica monopólica ilegal o concentración prohibida, deben estar debidamente diferenciados a fin de garantizar la imparcialidad y legitimidad de las decisiones, por lo que se hace necesario dotar de mayores facultades al Secretario Ejecutivo a fin de que dirija las investigaciones de posibles prácticas ilegales y crear la figura del Comisionado Ponente, quien una vez agotado el procedimiento de competencia presentará una ponencia al Pleno de la Comisión para que éste decida la resolución definitiva, lo que permitirá que la toma de decisiones no se monopolice y que tanto la Secretaría Ejecutiva, el Comisionado Ponente y el Pleno de la Comisión participen equilibradamente en la actuación del órgano regulador, generando un sano juego de pesos y contrapesos institucionales.

Séptima. Que a fin de que el órgano de competencia se beneficie de una mayor legitimación en sus decisiones, es necesario que el Pleno de la Comisión cuente con facultades más amplias y se involucre de manera más directa en las decisiones más trascendentes de los procedimientos que lleve a cabo, por lo que debe establecerse el voto taxativo de todos los Comisionados en los asuntos presentados al Pleno para su resolución; y, además, debe dotarse de competencia a ese órgano colegiado para que decida asuntos como la autorización de medidas cautelares y de visitas de verificación; la presentación de denuncias penales; la publicación de lineamientos y criterios técnicos y la publicación de evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los beneficios que la actuación de la Comisión haya generado al consumidor, entre otros.

Octava. Que el tema de transparencia y rendición de cuentas es de tal importancia que la sociedad ha demandado durante los últimos 15 años dar claridad a la actividad gubernamental, por lo que la Comisión Federal de Competencia no puede ser ajena a dicho esfuerzo; ello hace necesario, en consecuencia, que informe a la sociedad los resultados obtenidos en el combate a los monopolios, prácticas monopólicas, estancos y concentraciones; sobre el otorgamiento de beneficios de la reducción de sanciones y la ejecución de las sanciones dictadas en el ámbito de sus atribuciones; sobre resoluciones

respecto a la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como respecto de los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Novena. Que la certeza jurídica es una de las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, por lo que es necesario que los agentes económicos cuenten con la información que les permita tener claridad respecto de las consideraciones que la Comisión Federal de Competencia tomará en cuenta para decidir sus actuaciones; que en la práctica internacional ello se logra a través de la emisión de criterios técnicos de previa consulta pública respecto de temas como imposición de sanciones, existencia de prácticas monopólicas, concentraciones, inicio de investigaciones, determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos, determinación de mercado relevante, programas de indulgencia y reducción de sanciones, medidas cautelares, peticiones de sobreseimiento en las causas criminales, entre otros.

Décima. Que de conformidad con la tendencia de oralidad que se ha venido introduciendo en el sistema jurídico mexicano, es necesario regular una etapa del procedimiento de competencia en el que los agentes económicos acusados puedan presentar al Pleno de la Comisión sus argumentaciones de forma oral, que permita una deliberación transparente e institucional entre el acusado y el órgano encargado de resolver el caso.

Décima Primera. Que en virtud de que las actuales sanciones establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica no son lo suficientemente altas, a manera de servir como un verdadero disuasivo para los agentes económicos a realizar prácticas monopólicas ilegales, se hace necesario modificar la base de la misma de salarios mínimos a ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, con lo que se incrementa sustancialmente la misma homologándola con los sistemas de competencia internacionales más estrictos.

Esto contribuirá a reducir de manera más efectiva los incentivos para los agentes económicos a impedir la competencia y libre concurrencia.

Décima Segunda. Se aclaran los programas de inmunidad y reducción de sanciones a fin de que, en el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, los agentes económicos puedan acercarse a la Comisión con el compromiso de restaurar el proceso de competencia y libre concurrencia, recibiendo una sanción menor o, en el caso de prácticas monopólicas absolutas, cualquier persona que haya participado, coadyuvado, inducido o propiciado una, pueda reconocerla ante la Comisión con el beneficio de no ser sancionado.

Así, en este contexto, la inclusión de sanciones corporales para quienes cometen una práctica monopólica absoluta y la posibilidad de hacerlo del conocimiento de la autoridad de competencia a fin de coadyuvar en la investigación correspondiente y no recibir sanción penal, generará desincentivos para actuar ilegalmente y dispondrá condiciones que permitan la colaboración de los implicados en la investigación correspondiente.

Décima Tercera. Que el ente encargado de investigar las conductas sospechosas de ser violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica, debe contar con los instrumentos necesarios para recabar evidencia de cualquier persona u órgano del Estado que le permita sustentar debidamente sus resoluciones, por lo que es imperativo que cuente con facultades expresas para requerir informes y documentos que se estimen relevantes y pertinentes para integrar sus investigaciones, así como para citar a testigos y ordenar visitas de verificación en los domicilios de los agentes económicos objeto de indagación.

En este sentido, puesto que la visita de verificación es un acto de molestia que en términos constitucionales debe ser debidamente fundado y motivada la causa legal del procedimiento en el que se emite, se hace necesario clarificar las reglas bajo las cuales dichas visitas deberán verificarse.

Décima Cuarta. Que a fin de que las posibles prácticas monopólicas no generen daños sustanciales a los consumidores, es preciso incluir medidas cautelares a través de las cuales la Comisión Federal de Competencia pueda ordenar la suspensión temporal de la misma, cuando se encuentren indicios graves de que la práctica señalada como ilegal está generando efectos nocivos en los procesos de competencia o libre concurrencia.

Décima Quinta. Que en el contexto internacional existe la figura jurídica de poder sustancial conjunto para referir a la situación en que dos o más agentes económicos ejercen dominancia conjunta de un mercado por medio de prácticas anticompetitivas sin que los competidores puedan contrarrestar esa acción, figura que constituye una herramienta más para asegurar la sana competencia en los mercados.

Décima Sexta. Que el dinamismo de la economía global implica la necesidad de que los mecanismos de regulación de concentraciones sean más simples a fin de dar mayor agilidad a las transacciones corporativas y con ello aumentar la competitividad del país.

Décima Séptima. En este mismo sentido, toda vez que existen operaciones corporativas que de acuerdo con la ley actual deben de notificarse como concentraciones, independientemente de que las mismas no impliquen ninguna amenaza para la competencia y libre concurrencia, se hace necesario identificar dichos supuestos a fin de exceptuarlos del trámite de notificación y con ello, contribuir al dinamismo que demanda la actual economía globalizada.

Décima Octava. Que la Ley Federal de Competencia Económica fue concebida para ser aplicada en toda la actividad económica, ya que se reconoce que cualquier persona física o moral que pueda tener injerencia en el mercado, con o sin fines de lucro, que realice funciones de orden e interés público o realice actividades entre particulares, incluyendo a las dependencias y organismos que tienen a su cargo las funciones que el Estado ejerce en las áreas estratégicas enunciadas en el artículo 28 Constitucional —monopolios constitucionales— en lo que respecta a los actos que no están expresamente contemplados en los supuestos del referido precepto, debe ser considerado agente económico. Pues de otra forma se dejaría de perseguir el mandato constitucional y se abriría la posibilidad a que entes que tienen participación en el mercado y en la economía, realicen prácticas

monopólicas que lo distorsionen en perjuicio de su funcionamiento eficiente con un alto costo para el consumidor, lo que debe de evitarse a toda costa.

Décima Novena. Que a fin de garantizar el legítimo derecho de defensa y la certidumbre jurídica de los entes sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, es necesario que existan vías expeditas e imparciales y que se reduzcan los costos de resolución de disputas, generando mayor predictibilidad de las interacciones económicas; por lo cual, se establece de forma expresa, superando recientes resoluciones de la Corte en sentido contrario, la procedencia del juicio contencioso administrativo ante una sala especializada en materia de competencia, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Vigésima. Que las Iniciativas de Ley mencionadas en el exordio del presente escrito, contienen propuestas de reforma en materia de competencia que fueron debidamente examinadas y que, aquellos casos que se estimaron implicaban un avance al marco regulatorio en los temas de transparencia, diseño institucional, sanciones y medidas preventivas, se reflejó su contenido en este dictamen; por lo que deben entenderse dictaminadas en los términos que se desprenden de este proyecto de decreto de reformas, adiciones y derogaciones, a la Ley Federal de Competencia Económica.

Vigésima Primera. Que el artículo 43 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados —que regula el trámite para opinión en el caso del turno para dictaminación a Comisiones—, establece que "...En caso de que la opinión no fuera remitida en su oportunidad, las Comisiones Dictaminadoras harán mención de tal circunstancia en el dictamen y procederán a discutirlo y votarlo...".

Que toda vez que al momento de la dictaminación del presente proyecto, no habían sido remitidas las opiniones de las Comisiones de Justicia y Hacienda y Crédito Público, se hace constar dicho hecho para los efectos del referido dispositivo legal.

Vigésima Segunda. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Economía se manifiesta por aprobar el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO PRIMERO. Se **REFORMAN** los artículos 11; 13, primer párrafo, fracciones I, IV, V y VI; 21 bis; 24, fracciones I, II, IV y X; 25; 28, párrafo primero; 29; 30, párrafos primero, sexto y séptimo; 31; 32, párrafo cuarto; 33, fracción VI; 33 bis 2, 33 bis 3, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto; 33 bis 3, fracción I; 35 y 39; se **ADICIONAN** los artículos 13 bis; 21 bis 1; 24, fracciones IV bis, XIII bis, XVIII bis,

XVIII bis 1, XVIII bis 2, XVIII bis 3, y un último párrafo;; 28, párrafos segundo, tercero y cuarto; 28 fracción III; 31 bis último párrafo: 33 bis 3, párrafo último; 34 bis 4; 35 bis, y 38 bis, y se **DEROGAN** las fracciones III y IV del artículo 31 todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 11. Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse que:

- I. Quien realice dicha práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante; y
- II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.

Artículo 13. Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos:

- I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
- II. ...
- III. ...
- IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos;
- V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y
- VI. Los criterios que se establezcan en el Reglamento de esta Ley así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.

Artículo 13 bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:

- I. Que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 13 de la Ley para los agentes económicos involucrados considerados en conjunto;
- II. Que exista un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito, entre los agentes económicos de que se trate;

III. Que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como barreras de entrada al mercado relevante;

IV. Que exista una disminución, daño o impedimento, actual o potencial, al proceso de competencia y libre concurrencia, y

V. Las que establezca el Reglamento de esta Ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.

Artículo 21 bis. Al hacerse la notificación a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, los agentes económicos podrán solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento sea desahogado conforme a lo previsto en el presente artículo, para lo cual los agentes económicos solicitantes deberán presentar a la Comisión la información y elementos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que la concentración no tendrá como objeto y efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, conforme a lo previsto en este artículo.

Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, cuando el adquirente no participe en mercados relacionados con el mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o potencial del adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante. Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá involucrar la sustitución del agente económico adquirido por el adquirente;

II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del agente económico adquirido y, con la transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder para influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la designación de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio adquirido;

III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o

IV. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de la concentración, el Secretario Ejecutivo emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este artículo, ordenará su improcedencia y que el asunto se tramite conforme al artículo 21 de esta ley.

El Pleno deberá resolver si la concentración tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha del acuerdo de admisión. Concluido el plazo sin que la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no hay objeción alguna para que se realice la concentración.

Cuando, a juicio del Secretario Ejecutivo, la concentración no se ubique en los supuestos previstos en las fracciones I a IV de este artículo o, a juicio del Pleno, la información aportada por el agente económico es insuficiente, el Secretario Ejecutivo emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme a lo previsto en el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 21 bis 1. No se requerirá la notificación de concentraciones a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en los casos siguientes:

I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los agentes económicos pertenezcan a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participe en la concentración;

II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de dicho control y posteriormente incremente su participación relativa en el capital social de la referida sociedad;

III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra clase en la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbrales referidos en el artículo 20 de esta Ley;

IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, o partes sociales, unidades de participación o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, posean antes de la transacción;

V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad

de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones del agente económico concentrado;

VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no tenga facultades para:

a) designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la sociedad emisora;

b) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes;

c) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona moral; o

d) dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no tengan inversiones en sociedades o activos que participen o son empleados en el mismo mercado relevante que el agente económico concentrado.

VIII. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 24. ...

I. Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias a esta Ley, incluyendo aquéllos que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional, para lo cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes;

II. Practicar dentro de las investigaciones que lleve a cabo, visitas de verificación en los términos del artículo 31 de esta Ley, y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta ley, así como

solicitar el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades federales, estatales o municipales para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta fracción;

III. ...

IV. Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente la violación de esta Ley, así como formular denuncias y, en su caso, querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia de que tenga conocimiento;

IV bis. Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable concentración prohibida;

V. a IX. ...

X. Emitir, cuando lo considere pertinente, opinión en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general, así como, opiniones sobre competencia y libre concurrencia en prácticas comerciales. Las opiniones citadas deberán publicarse.

XI. a XIII. ...

XIII bis. Publicar lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia, escuchando la opinión de la dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las materias de su competencia, que las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas;

XIV. a XVIII. ...

XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma y términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de:

- a) Imposición de sanciones;
- b) Existencia de prácticas monopólicas;
- c) Concentraciones;
- d) Inicio de investigaciones;

e) Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los artículos 13 y 13 bis de esta Ley;

f) Determinación de mercado relevante;

- g) Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley;
- h) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones prohibidas, así como daño irreversible al proceso de competencia y libre concurrencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 bis 4 de esta Ley;
- i) Petición de sobreseimiento del procedimiento penal en los casos a que se refiere el artículo 254 bis del Código Penal Federal, y
- j) Los que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la Ley.

En la elaboración de los criterios técnicos a que se refiere esta fracción, la Comisión considerará, sin que sean vinculantes, los resultados de la consulta pública en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

XVIII bis 1. Publicar cada cinco años una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión en el periodo respectivo.

XVIII bis 2. Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de competencia y libre concurrencia o cuando **identifique niveles de precios que puedan indicar un problema de competencia o acciones que resulten en un aumento significativo de precios o cuando** así se lo notifiquen otras autoridades.

XVIII bis 3. Actuar como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. Podrá ser consultada por colegios profesionales, organismos empresariales, asociaciones de consumidores y agentes económicos. Las resoluciones sobre las consultas a las que hace referencia este artículo, no tendrán carácter vinculante.

XIX. ...

Para la elaboración de las opiniones, lineamientos y criterios técnicos a que se refieren las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII bis, XVIII bis 1 y XVIII bis 2 de este artículo, la Comisión podrá solicitar la información que estime relevante y pertinente a las dependencias y entidades, a los agentes económicos y, en general, a las personas relacionadas con la materia de dichas disposiciones.

Artículo 25. El Pleno estará integrado por cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la Comisión. Deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, salvo las decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley.

Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los comisionados no podrán abstenerse de votar. Los comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión.

En casos graves en los que los comisionados no puedan ejercer su voto o estén impedidos para ello, el Presidente de la Comisión contará con voto de calidad para decidir los casos que se presenten al Pleno.

Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, IV bis, V, VI, VIII, X, XII, XIII bis, XVI, XVIII bis, XVIII bis I, XVIII bis 2 y XVIII bis 3 del artículo 24 de esta Ley, y las demás atribuciones concedidas expresamente al Pleno en esta Ley.

Artículo 28. El Presidente de la Comisión será designado por el Titular del Ejecutivo Federal por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser nombrado una sola vez por otro periodo igual, y al término del cual cumplirá, en su caso, su período restante como comisionado.

En la designación correspondiente, el Titular del Ejecutivo Federal podrá considerar inclusive, a cualquiera de los comisionados en funciones, aún cuando finalice su periodo antes de un término de cuatro años. En este último caso, la duración de su encargo como Presidente se reducirá por el tiempo que le reste como comisionado.

El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. a II. ...

III. ... Presentar al Titular del Ejecutivo Federal un informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado.

El informe a que hace referencia esta fracción anterior se presentará a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a la conclusión del período que se informa, y deberá comprender, cuando menos, los siguientes elementos:

a. Los resultados obtenidos en las investigaciones efectuadas durante el periodo correspondiente, sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas tanto de compras como de ventas, incluyendo aquellas que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional;

b. Concentraciones;

c. Otorgamiento de beneficios de reducción de sanciones en términos del artículo 33 bis 3 de esta Ley;

d. Ejecución de las sanciones referidas en esta Ley;

e. Resoluciones sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y

f. Querellas presentadas ante el Ministerio Público en el ámbito de sus atribuciones.

En los casos en que la información a la que hace referencia esta fracción tenga carácter confidencial o reservada en los términos de las disposiciones legales aplicables, dicha información será presentada de forma estadística.

IV. ...

V. Representar legalmente a la Comisión, nombrar y remover al personal, excepto al mencionado en el artículo 29 de esta Ley, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y delegar facultades en términos del Reglamento de esta Ley.

VI. ...

VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales se reunirán cuando menos una vez al año. Dichas reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o lineamientos en materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y aportaciones netas al bienestar de los consumidores.

Artículo 29. La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno a propuesta de cualquiera de sus integrantes, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa y dará fe de los actos en que intervenga. Además, podrá nombrar y remover al personal de las unidades administrativas directamente a su cargo.

Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos cuatro comisionados.

En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos tres comisionados. En caso de que no sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, el Presidente de la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los candidatos propuestos.

El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración, contaduría o materias afines al objeto de esta Ley, y

III. Haberse desempeñado durante al menos cinco años en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con el objeto de esta Ley.

El Secretario Ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido para conocer de asuntos en que tenga interés directo o indirecto en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien podrá turnarla a trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.

...

...

...

...

Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto procesal alguno por más de sesenta días, el Pleno decretará el cierre del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha inactividad de los servidores públicos.

La unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de conclusión del periodo de investigación, al día siguiente en el que concluya o al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 31. La Comisión podrá requerir los informes y documentos que estime relevantes y pertinentes para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación en el domicilio del investigado, en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación.

Las dependencias y entidades tendrán un plazo de veinte días para remitir los informes y documentos que les requiera la Comisión. A petición de aquéllas, dicho plazo podrá ampliarse, por una sola ocasión hasta por un plazo igual, si así lo amerita la complejidad o volumen de la información requerida.

La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes:

I. El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia;

el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practican conjunta o separadamente y, en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos.

Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 bis de esta Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración de confidencialidad, independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la Comisión para tal efecto.

La práctica de las visitas no podrá exceder un período de dos meses, que podrá prorrogarse hasta por otro periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación.

II. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación.

La Comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo caso, tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva. De igual forma, se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de bienes del visitado;

III. (Se deroga)

IV. (Se deroga)

V. El visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos en que normalmente se encuentren los visitados o en los que se administren o se lleve la dirección de éstos, estarán obligados a:

- a) Permitir el acceso al personal autorizado;
- b) Permitir la práctica de dicha diligencia, y
- c) Proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con la materia de la orden de visita, para lo cual deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, archiveros y otros bienes muebles o cualquier otro medio que pueda contener evidencia de la realización de los actos o hechos sancionados conforme a esta Ley.

Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, cualquier servidor público autorizado podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública.

En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los especialistas autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, copias, o reproducir por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la investigación.

Los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán asegurar la información y documentos, oficinas y demás medios que puedan contener evidencia de la realización de los hechos sancionados conforme a esta Ley, para lo cual podrán sellarlos y marcarlos, así como ordenar que se mantengan en depósito a cargo del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se realice.

Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable para el desarrollo de las actividades del agente económico, se permitirá el uso o extracción del mismo, previa reproducción de la información que contenga por parte de los servidores públicos autorizados.

Las visitas de verificación no podrán limitar la capacidad de producción, **distribución y comercialización** de bienes o servicios del agente económico investigado.

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no proporcionaran la información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 34 fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del Código Penal Federal;

VI. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado;

VII. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los servidores públicos autorizados. El acta se levantará por los servidores públicos autorizados en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos autorizados que la practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia.

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberá levantar un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior.

En las actas se hará constar:

- a) Nombre, denominación o razón social del visitado;
- b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
- c) Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y código postal en donde se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita;
- d) Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación;
- e) Objeto de la visita;
- f) Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados, así como de los especialistas designados como auxiliares de aquéllos;
- g) Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- h) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
- i) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer observaciones a los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, inserción de las declaraciones que en su caso efectúe y de las pruebas que ofrezca;
- j) Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia;
- k) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de confirmar por escrito las observaciones hechas en el momento de la visita, así como del que le asiste para formular aclaraciones u observaciones al acta levantada dentro del término de diez días, y
- l) Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

VIII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del Secretario Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos o especialistas, incluyendo los de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, auxilien en cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la visita.

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez.

El visitado podrá confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita, para lo cual contará con un plazo de cinco días posteriores a la realización de la misma.

Artículo 31 bis. ...

...

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

...

El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del artículo 31 bis de esta Ley.

Artículo 32. ...

...

...

El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes. El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del Reglamento de esta Ley, quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento.

Artículo 33. ...

I. a V. ...

VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el Secretario Ejecutivo, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o modificación. La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días.

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable responsable o el denunciante podrán solicitar a la Comisión una audiencia oral con el objeto de realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes únicamente respecto de los argumentos expuestos en la contestación al oficio de probable responsabilidad, las pruebas ofrecidas por el probable responsable y el desahogo de las mismas, los alegatos, así como de los documentos que obren en el expediente de mérito.

El Pleno citará a una única audiencia oral a los agentes económicos con interés jurídico en el expediente, sin que su inasistencia pueda afectar la validez de la misma, y en la que deberán estar los servidores públicos directamente involucrados en el caso. Bastará la presencia de tres comisionados para que la audiencia pueda realizarse válidamente.

...

...

Artículo 33 bis 2. Antes de que se dicte resolución definitiva en los procedimientos seguidos ante la Comisión por prácticas monopólicas relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración correspondiente.

Para tal efecto, el agente económico deberá acreditar que:

I. El compromiso presentado tenga como consecuencia la restauración o protección del proceso de competencia y libre concurrencia, y

II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o, en su caso, dejar sin efectos la práctica monopólica relativa o concentración prohibida investigada o la práctica monopólica relativa o concentración prohibida por la que se le considere como probable responsable, señalando los plazos y términos para su comprobación.

Recibido el escrito a que se refiere este artículo, el procedimiento quedará suspendido hasta por quince días prorrogables, en tanto la Comisión emite su resolución, con la que podrá concluir anticipadamente dicho procedimiento. En este supuesto, la Comisión podrá cerrar el expediente sin imputar responsabilidad alguna; o bien, podrá imputar responsabilidad e

imponer una multa de hasta por la mitad de la que correspondería en términos del artículo 35 sin perjuicio de que se le reclamen los daños y perjuicios.

Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez cada cinco años. Este período se computará a partir de la notificación de la resolución de la Comisión.

Artículo 33 bis 3. Cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica absoluta; haya participado directamente en prácticas monopólicas absolutas en representación o por cuenta y orden de personas morales; y el agente económico o individuo que haya coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, podrá reconocerla ante la Comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las sanciones establecidas en esta Ley, siempre y cuando:

I. Sea el primero, entre los agentes económicos o individuos involucrados en la conducta, en aportar elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio de la Comisión permitan comprobar la existencia de la práctica;

II. ...

III. ...

Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá una multa mínima.

Los agentes económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en la fracción I anterior, podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 ó 20 por ciento del máximo permitido, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Comisión y cumplan con los demás requisitos previstos en este artículo. Para determinar el monto de la reducción la Comisión tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en representación o por cuenta y orden de los agentes económicos que reciban los beneficios de la reducción de sanciones, podrán verse beneficiados con la misma reducción en la sanción que a éstos correspondiere siempre y cuando aporten los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación que se lleve a cabo y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley.

La Comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico y los individuos que pretendan acogerse a los beneficios de este artículo.

El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento conforme al cual deberá solicitarse y resolverse la aplicación del beneficio previsto en este artículo, así como para la reducción en el monto de la multa.

Artículo 34-bis 4. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y hasta antes de que se dicte resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al proceso de competencia y libre concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o probable concentración prohibida, con el propósito de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y libre concurrencia durante la tramitación del procedimiento.

En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la sustanciación del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito.

La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya ordenado, prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa debidamente justificada. Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá ser aprobada por al menos cuatro comisionados.

Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se levantará la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por el agente económico señalado como probable responsable.

La suspensión a la que hace referencia este artículo, no podrá tener como objeto limitar la capacidad de producción de bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento del inicio de la investigación. Tampoco podrá **dañar de manera irreversible los procesos de producción, distribución y comercialización** de dicho agente económico.

La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas.

Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

- I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate;
- II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda;
- III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o

entregado información falsa a la Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa;

VI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley;

VII. Multa hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos del agente económico, por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;

VIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin perjuicio de ordenar la desconcentración;

IX. Multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;

X. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley;

XI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19, 33 bis 2 o 35, fracciones I y II de esta Ley. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público;

XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución favorable en términos del artículo 20 de esta Ley, y

XIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 34-bis 4 de esta Ley.

Los ingresos señalados en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII y XIII serán los acumulables, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los efectos del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

La Comisión podrá solicitar a los agentes económicos la información fiscal necesaria para determinar el monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo utilizar para tal efecto los medios de apremio que esta Ley establece.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se hubiera determinado por la Comisión.

Se considerará reincidente, al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el servidor público.

Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se destinarán a los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa.

En ningún caso la Comisión administrará ni dispondrá de los fondos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 35 bis. En el caso de aquellos agentes económicos que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se les aplicarán las multas siguientes:

I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones IV, XI, XII y XIII del artículo 35 de la Ley;

II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones V, VI y VIII del artículo 35 de la Ley;

III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción VII del artículo 35 de la Ley, y

IV. Las correspondientes conforme a las fracciones III, IX y X del artículo 35 de la Ley.

Artículo 38 bis. El cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la Comisión, incluyendo las que impongan condiciones conforme a la fracción I del artículo 19 y las que admitan compromisos conforme al artículo 33 bis 2, se tramitarán por la vía incidental.

La Comisión tendrá veinte días para emitir resolución, contados a partir del día siguiente a aquél en que concluyó la sustanciación del incidente.

Artículo 39. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión con fundamento en esta Ley, se podrá interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones, o bien, promover el juicio contencioso administrativo ante la Sala Especializada en Materia de Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Contra la resolución que recaiga al recurso de reconsideración también será procedente el juicio contencioso administrativo.

El recurso de reconsideración tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.

La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 y se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, el recurso se concederá si el promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.

La Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de sesenta días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso. El silencio de la Comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se **ADICIONA** un artículo 254 bis, y se **DEROGA** el artículo 253 fracción I, inciso d), todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 253....

I. ...

a) a c) ...

d) (Se deroga)

e) a j) ...

II. a V. ...

...

...

...

Artículo 254 bis.. Se sancionará con prisión de tres a diez años y con mil a tres mil días multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables, o

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

El delito previsto en este artículo se perseguirá por querrela de la Comisión Federal de Competencia, la cual sólo podrá formularse cuando la Comisión Federal de Competencia haya resuelto previamente en el ámbito de su competencia sobre los hechos materia de la querrela.

No existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el artículo 33 bis 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la Comisión que determine que cumple con los términos establecidos en dicha disposición y las demás aplicables.

Los procesos seguidos por este delito se sobreseerán a petición del Pleno de la Comisión, cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y, además se cumplan los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público de la

Federación formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Se **REFORMA** el artículo 69 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia para efecto de calcular el monto de las sanciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dicha Comisión, o bien, ésta considere que se presentó en forma incompleta o inexacta.

...

...

...

...

...

ARTÍCULO CUARTO. Se **ADICIONA** una fracción X al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 63. ...

I. a IX. ...

X. Sea una resolución dictada en materia de competencia económica.

...

...

...

...

ARTÍCULO QUINTO. Se **REFORMA** la fracción XIV y se **ADICIONA** una fracción XIV Bis al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I a XIII...

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XIV Bis. Las dictadas en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, y

XV. ...

...

...

...

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Pleno publicará los criterios técnicos a que hace referencia el

artículo 24, fracción XVIII bis, incisos a) a j), de la Ley Federal de Competencia Económica.

ARTÍCULO TERCERO. El artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica entrará en vigor una vez que concluya el periodo del actual Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO CUARTO. La reforma al artículo 31, 33, 34 bis 4, 35, 35 bis y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, entrarán en vigor en la fecha en que la sala especializada en materia de competencia económica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa inicie su funcionamiento.

ARTÍCULO QUINTO. Las investigaciones, visitas de verificación, procedimientos y cualquier otro asunto que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la Ley vigente al momento de su realización.

ARTÍCULO SEXTO. Los recursos necesarios para la implementación del presente Decreto, serán con cargo al presupuesto autorizado de la Comisión Federal de Competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto."

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril de 2010

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), secretarios; Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López, Sergio Gama Dufour, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en abstención), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo, David Penchyna Grub (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Honorable Asamblea:

De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Cuarto Transitorio, fracciones II y IV del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio, análisis y dictaminación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007, presentada por el Ejecutivo Federal.

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII y 45, numerales 5 y 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 65, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a discusión y, en su caso, aprobación de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- De conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Segunda.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos de lo que disponen los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII, 45, numerales 5 y 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis y dictaminación la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Tercera.- Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asumieron la responsabilidad de integrar y emitir el presente Dictamen con el propósito de cumplir con el marco normativo y, sobre todo, satisfacer la permanente exigencia de la sociedad de transparentar el destino de los recursos públicos federales.

Cuarta.- Las fuentes de información para la integración del presente Dictamen son las siguientes: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, presentada por el Ejecutivo Federal el 15 de mayo de 2008; el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, rendido el 12 de marzo de 2009 por la Auditoría Superior de la Federación; las Conclusiones del Análisis del Resultado de la Revisión y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007; los Comentarios Generales al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y los Análisis (sectoriales) al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, estos tres últimos elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitidos por ésta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 4 de junio de 2009.

INTRODUCCIÓN

Tiempos de presentación de la Cuenta Pública

El 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modifica los tiempos de presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Derivado de ello, a partir del ejercicio fiscal 2008, el Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo la Cuenta Pública el 30 de abril, en lugar del 10 de junio. Ahora bien, conforme a la fracción IV del artículo Cuarto del Decreto de Reforma Constitucional citada, para el ejercicio fiscal 2007, se acordó un régimen de transición, por el cual la Cuenta de la Hacienda Pública se presentó el 15 de mayo de 2008.

Cambios en la presentación de la Cuenta Pública

En congruencia con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se implementó el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), incorporándose a la documentación de la Cuenta Pública el *Anexo sobre Avances en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño*.

Integración de la Cuenta Pública 2007

La Cuenta Pública 2007 se integra por el Tomo de Resultados Generales, el Banco de Información, y los siguientes anexos: Avances en la Implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño; Dictámenes de Auditores Externos a los Estados Financieros de las Entidades de Control Presupuestario Directo e Indirecto; Memoria Circunstanciada enero-diciembre de 2007 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos Otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil Correspondiente a 2007; e Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2007.

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2007

El paquete presupuestal remitido al Congreso de la Unión en septiembre de 2006, proyectó para 2007 un desempeño dinámico de la economía mexicana, con un crecimiento económico de 3.6 por ciento real e inflación del 3.0 por ciento. Cuando aprobó el paquete

presupuestario, el Congreso de la Unión modificó el precio de referencia para la mezcla mexicana de crudo de exportación de 42.5 a 42.8 dólares por barril, y amplió las plataformas de producción y exportación de petróleo en 20 mil barriles diarios.

El año 2007 resultó marcado por los inicios del deterioro del mercado hipotecario en Estados Unidos, lo que generó una desaceleración económica en el principal socio comercial de México; la economía mexicana presentó un crecimiento del 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), inferior a la meta proyectada, la inflación creció 3.76 por ciento, en lugar del 3.0 proyectado para ese año, y la cuenta corriente sufrió un deterioro importante, pues de una proyección de -2.3 por ciento del PIB, se observó un decremento al -7.3 por ciento del PIB. El precio del barril de petróleo se ubicó más allá de las estimaciones, compensando la caída en la producción de hidrocarburos.

POLÍTICA DE GASTO PROPUESTA PARA 2007

El Ejecutivo Federal, al plantear la política de gasto para el ejercicio fiscal 2007, propuso atender los objetivos prioritarios: la superación de la pobreza, la creación de empleos y la seguridad pública, acompañados de una política pública que promoviera el desarrollo sustentable.

Los objetivos particulares planteados fueron: mejorar la eficiencia en la asignación de recursos de los programas para la superación de la pobreza; incrementar el gasto y la calidad de los servicios de salud, mejorar la cobertura universal, la prevención de enfermedades, la protección de riesgos sanitarios, el abasto de medicamentos y la ampliación de la infraestructura; fortalecer el gasto y la calidad de los servicios de educación, contar con escuelas seguras, fomentar el desarrollo de la infraestructura, y privilegiar la educación secundaria, media superior y superior; favorecer el desarrollo de la vivienda, especialmente para familias de menores ingresos; apoyar a los grupos vulnerables; impulsar programas y acciones para apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; incorporar la perspectiva de género en el gasto público; mantener la estabilidad económica, con un gasto público equilibrado, que privilegiara la inversión y el gasto social; fomentar con programas y acciones mayor generación de empleos, innovación tecnológica y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; priorizar los programas que fomentan la actividad turística, multiplicando su impacto sobre el resto de la economía; impulsar el desarrollo de infraestructura de transporte, comunicaciones e hidráulica; impulsar proyectos de inversión y otras acciones para aumentar la producción de energéticos a precios competitivos; propiciar un desarrollo regional más equilibrado, y aprovechar mejor los mares y las costas; promover el desarrollo agropecuario con programas y acciones para fortalecer la competitividad, el financiamiento, el desarrollo de los mercados y la certidumbre jurídica; fortalecer el gasto destinado a seguridad pública; contribuir a un desarrollo sustentable mediante el ahorro de energía, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, cuidado y uso racional de los bosques, tratamiento de aguas residuales y reducción de emisión de contaminantes; y, reducir el gasto burocrático, eliminando redundancias y duplicidades y aplicando la austeridad y modernización administrativa.

En el proyecto presentado por el Ejecutivo para el ejercicio fiscal de 2007, se propuso un gasto neto total de 2 billones 234 mil 374.7 millones de pesos (mdp), equivalente al 22.8 por ciento del PIB, y 9.4 por ciento superior, en términos reales, al aprobado en 2006.

En el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto, los Diputados realizaron modificaciones por 26 mil 37.8 mdp, resultantes de ampliaciones por 82 mil 861.1 mdp y reducciones por 56 mil 823.3 mdp, con lo que el presupuesto aprobado ascendió a 2 billones 260 mil 412.5 mdp, 10.6 por ciento mayor, en términos reales, respecto al aprobado para 2006. Las ampliaciones se aplicaron a educación, comunicaciones y transportes, agricultura, desarrollo social, medio ambiente y gasto federalizado, principalmente.

RESULTADOS DE FINANZAS PÚBLICAS 2007

I. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

A. Proyecto de PEF 2007 enviado por el Ejecutivo

El Proyecto de PEF presentado por el Poder Ejecutivo, consideró un gasto neto de 2 billones 234 mil 374.7 mdp. De este total, 75.3 por ciento se destinaría al gasto programable y 24.7 por ciento al no programable.

El Gasto Programable ascendía a 1 billón 840 mil 937.2 mdp, y se distribuía de la siguiente manera: 2.5 por ciento a los Ramos Autónomos, 26.8 a los Ramos Administrativos, 34.1 a los Ramos Generales y 36.6 por ciento a las Entidades de Control Presupuestario Directo.

El monto propuesto para los Ramos Autónomos ascendía a 46 mil 923.6 mdp; de los cuales 62.7 por ciento se canalizaría al Poder Judicial; 17.8 al Poder Legislativo; 17.4 al Instituto Federal Electoral (IFE), y 2.1 por ciento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los Ramos Administrativos sumaban un presupuesto de 493 mil 082.6 mdp. Dentro de estos Ramos las dependencias más favorecidas fueron: Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en conjunto representaban el 80.2 por ciento del presupuesto total propuesto de los Ramos Administrativos.

A los Ramos Generales se canalizarían 626 mil 635.3 mdp, de los cuales, 52.5 por ciento correspondía al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 30.6 por ciento al Ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social; 11.0 por ciento al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas; y el restante 5.8 por ciento al Ramo 25, Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Las Entidades de Control Presupuestario Directo erogarán 674 mil 295.8 mdp; de los cuales, 35.3 por ciento se ejercería a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 27.2 por ciento por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 21.4 por ciento por Petróleos Mexicanos (PEMEX); 12.0 por ciento por el Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 4.1 por ciento por Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Se asignaban al Gasto No Programable 602 mil 539.7 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 53.0 por ciento; Deuda Pública, 31.4 por ciento; Costo Financiero de los Organismos y Empresas, 8.4 por ciento; Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 4.5 por ciento y para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 2.7 por ciento.

B. Modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados

La H. Cámara de Diputados efectuó diversas modificaciones al Gasto Programable como al No Programable durante el proceso de revisión y aprobación del proyecto de PEF 2007 presentado por el Ejecutivo Federal, las cuales se detallan a continuación:

En total, se realizaron reducciones por 56 mil 823.3 mdp y ampliaciones por 82 mil 861.1 mdp, lo que implicó un aumento neto de 26 mil 037.8 mdp con relación a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

En los Ramos Autónomos se efectuaron reasignaciones netas negativas por 6 mil mdp con respecto al proyecto inicial, integradas en su totalidad por reducciones al Poder Judicial por un monto de 4 mil 191.4 mdp; al Poder Legislativo por 898.7 mdp; al IFE, con 720.2 mdp, y a la CNDH con 189.7 mdp.

Para los Ramos Administrativos se aprobaron aumentos netos respecto al proyecto por 51 mil 468.2 mdp, como resultado de reducciones por 10 mil 123.7 mdp y ampliaciones por 61 mil 591.9 mdp. Las principales ampliaciones netas se destinaron a SCT, SAGARPA, SEP, SEDESOL y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En los Ramos Generales se realizaron reasignaciones netas negativas por 10 mil 807.8 mdp, derivadas de ampliaciones por 16 mil 417.8 mdp y reducciones de 27 mil 225.6 mdp. Se destaca la reducción de 26 mil 581.7 mdp al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, mientras que los que mantienen reasignaciones netas positivas son el Ramo 33 Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual, a partir del ejercicio fiscal 2007, incorpora al Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Al monto propuesto para las Entidades de Control Presupuestario Directo en el proyecto de PEF se redujeron recursos por 5 mil 474.0 mdp: 3 mil 524 mdp en PEMEX, un mil 750 a CFE y 200 mdp a LFC.

En el Gasto No Programable se efectuó una reasignación neta negativa por 3 mil 148.6 mdp, compuesta por reducciones de 8 mil mdp y ampliaciones por 4 mil 851.4 mdp. Las reducciones se realizaron en los Ramos 24 Deuda Pública y 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en tanto que, las ampliaciones correspondieron en su totalidad al Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

C. PEF 2007 Aprobado

La H. Cámara de Diputados, derivado del proceso de análisis, discusión y modificación, aprobó un presupuesto neto acorde con la disponibilidad de recursos públicos prevista en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2007, mismo que ascendió a 2 billones 260 mil 412.5 mdp. Éste se orientó prioritariamente a la superación de la pobreza, la creación de empleos y la seguridad pública.

Del total de recursos aprobados, 75.7 por ciento se canalizó al gasto programable y el restante 24.3 por ciento al no programable.

A los Ramos Autónomos se les asignó un presupuesto de 40 mil 923.6 mdp, y su distribución fue la siguiente: 61.7 por ciento al Poder Judicial; 18.2 al IFE; 18.2 al Poder Legislativo y 2.0 a la CNDH.

Para los Ramos Administrativos se autorizaron erogaciones por 544 mil 550.8 mdp. Entre los más favorecidos sobresalen: SEP con 27.9 por ciento del total; SAGARPA, 10.7; SSA, 10.2; SCT, 7.2; SEDESOL, 6.4; SHCP, 6.3; SENER, 6.0 y SEDENA con 5.9 por ciento. En conjunto estos ramos concentraron 80.7 por ciento del total de los recursos.

A los Ramos Generales se asignaron 615 mil 827.4 mdp, de los cuales, 54.0 por ciento se destinó al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 31.2 por ciento al Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social; 8.4 por ciento al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, y 6.5 por ciento al Ramo 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Para las Entidades de Control Presupuestario Directo se aprobaron 668 mil 821.8 mdp, de éstos, el 35.6 por ciento se orientaron al IMSS; 27.2 por ciento a CFE; 21.1 por ciento a PEMEX, 12.1 por ciento al ISSSTE y 4.1 por ciento a LFC.

Los recursos autorizados para el rubro de Gasto No Programable ascendieron a 599 mil 391.1 mdp; de los cuales, 54.1 por ciento se canalizó al Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; 30.9 por ciento al Ramo 24 Deuda Pública; 8.5 por ciento al Costo Financiero de los Organismos y Empresas; 4.5 por ciento al Ramo 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca y 2.0 por ciento al Ramo 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS Y DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

A. Análisis Macroeconómico 2007

De acuerdo con la información revisada y analizada por esta Comisión Dictaminadora, en la Cuenta Pública de 2007 y en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se observó que durante el ejercicio fiscal en estudio, las condiciones de la economía mexicana resultaban no favorables, debido principalmente a la desaceleración económica en los Estados Unidos de América; por ello, las medidas se orientaron a reactivar el crecimiento económico. Sin embargo, el PIB creció 3.3 por ciento real, nivel inferior al previsto en el programa económico y al observado un año antes en 0.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.

La demanda agregada presentó un comportamiento favorable tanto en sus componentes internos como externos, destacando el avance en la inversión. El consumo alcanzó una tasa anual del 3.8 por ciento real, impulsado básicamente por el componente privado. La formación bruta de capital fijo rebasó en 6.7 por ciento real a la de 2006, gracias al gasto en maquinaria y equipo. Las exportaciones crecieron en 5.5 por ciento real, debido a que la demanda externa resintió la desaceleración económica de los Estados Unidos de América.

La evolución de los precios se vio alterada por presiones a la alza, derivadas de choques de oferta en el componente de los alimentos. A pesar de esta situación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se situó en 3.76 por ciento, nivel inferior en 0.29 puntos porcentuales al índice mostrado en diciembre de 2006.

La política monetaria a cargo del Banco de México (Banxico) consistió en obtener y alcanzar una inflación anual del 3.0 por ciento, considerando un margen de variabilidad de un punto porcentual por arriba o debajo de la meta. Así, durante la primera parte del ejercicio fue necesario ajustar las condiciones monetarias para alcanzar la meta, incrementando en una ocasión la tasa de fondeo para no alterar el monto del "corto". Durante el segundo semestre, se restringió en 25 puntos base la tasa de fondeo para situarla en 7.5 por ciento, manteniendo el "corto" en 79.0 mdp diarios, lo anterior a razón de que las tasas de interés de corto plazo se encontraban a la alza y de esta manera, se moderaron las expectativas inflacionarias.

La tasa de CETES a 28 días cerró en 7.44 por ciento, lo cual representó un promedio anual de 7.19 por ciento, mismo nivel promedio observado en el año anterior. Las tasas de CPP y TIIIE mostraron una evolución similar.

La base monetaria -suma de billetes y monedas en circulación más los depósitos de las instituciones bancarias en Banxico- registró un saldo anual de 494.7 miles de mdp, nivel superior en 6.0 por ciento real con respecto al año anterior. Los activos internacionales netos se ubicaron en 952.2 miles de mdp, lo cual fue superior en 127.3 mdp al de 2006. La diferencia entre el saldo de la base monetaria y los activos internacionales netos, es decir, el crédito interno neto, registró un saldo negativo de 457.5 miles de mdp, mismo que

representó un flujo negativo de 82.3 miles de mdp con relación al mes de diciembre del año anterior. La reserva internacional neta, diferencia entre la reserva internacional bruta y los pasivos a menos de seis meses, incrementó en 10 mil 311.1 millones de dólares (mdd), situándose en 77 mil 990.8 mdd.

Durante el año, el tipo de cambio nominal presentó diversos comportamientos; a principios de 2007 existieron ligeras presiones hacia la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, las cuales fueron contrarrestadas por la permanencia de los altos precios del petróleo y la percepción positiva sobre las reformas estructurales. A finales del mes de junio, el tipo de cambio alcanzó su nivel máximo del año al situarse en 11.2390 pesos por dólar, resultado de la volatilidad que resintieron los mercados cambiarios internacionales ante la escasez de liquidez y el aumento en la aversión al riesgo. Al término de 2007, el peso se depreció 1.02 por ciento con relación al cierre de 2006.

En relación al ahorro financiero, sus componentes presentaron un crecimiento real, con excepción de los Bonos de Regulación Monetaria colocados por Banxico y los depósitos en cuentas de cheques en moneda extranjera. El financiamiento de la banca comercial al sector privado no bancario creció en 22.0 por ciento real con respecto al mismo mes del año anterior. El crédito directo a empresas y personas físicas con actividad empresarial fue el rubro más dinámico, al avanzar a una tasa anual de 26.7 por ciento real; mientras que el crédito al consumo y vivienda se incrementó en 19.1 y 12.5 por ciento real, respectivamente.

Un elemento determinante para fortalecer el ahorro interno fue la revisión del Sistema Nacional de Pensiones, por lo que se buscó incrementar la cobertura y mejorar la equidad del Sistema. Con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE, se avanzó en la consolidación de dicho Sistema, sentando las bases para resolver la problemática financiera del Instituto.

El ahorro interno durante 2007 fue de 20.4 por ciento del PIB, mientras que en 2006 fue de 21.7 por ciento. El ahorro externo, expresado por el Déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, representó el 0.8 por ciento del PIB. De esta manera, el ahorro total equivalió a 21.2 por ciento del PIB, 0.7 puntos porcentuales menos que en 2006.

Por otra parte, el déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos se elevó significativamente (228.0 por ciento) con respecto a 2006, derivado de las condiciones adversas en el entorno económico internacional. Dicho déficit fue financiado en su totalidad por la inversión extranjera directa; las exportaciones de mercancías alcanzaron el máximo histórico de 271 mil 875.3 mdd, superior en 8.8 por ciento al nivel de 2006. El valor nominal de las ventas de origen petrolero aumentó en 10.2 por ciento debido al incremento en el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación, el cual fue de 61.6 dólares en promedio por barril, 8.6 dólares arriba del precio promedio de 2006. Las exportaciones no petroleras crecieron en 8.5 por ciento anual, representando el 84.2 por ciento del valor total de este componente. Se presentó un déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones totales se situaron en 282 mil 975.1 mdd; las balanzas de servicios factoriales y no factoriales fueron deficitarias por 13 mil 893.9 y 6 mil 639.3 mdd respectivamente; mientras que la balanza de transferencias netas del exterior presentó un

superávit de 24 mil 351.9 mdd, superior en 0.9 por ciento al año anterior. El flujo de remesas dirigidas a México sufrió una desaceleración debido a la situación no favorable del sector de la construcción en Estados Unidos de América, por lo que creció solo un punto porcentual en comparación al 17.1 por ciento de 2006.

La cuenta de capital fue superavitaria en 19 mil 632.8 mdd en comparación con 2006, la cual fue deficitaria en 2 mil 045.6 mdd; lo anterior, resultado del flujo de inversión extranjera, el cual fue mayor en 23.7 por ciento al del año anterior.

En relación al comportamiento productivo nacional, éste propició la generación de plazas en el mercado formal de trabajo, principalmente en el sector servicios.

A diciembre de 2007, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementó en 756,352 personas. Del total, 381,837 plazas correspondieron a las de carácter eventual, y 374,515 a empleos permanentes.

El análisis por sector económico indica que la creación de puestos de trabajo se concentró en los servicios y la industria, con 550,076 y 209,308 empleos, en cada caso. En contraste, en el sector agropecuario, el total de personal asegurado descendió en 1,409 trabajadores. Los restantes 1,623 puestos de trabajo no fueron clasificados por el IMSS en ninguno de los tres sectores.

La favorable evolución del mercado laboral formal no se reflejó de manera preponderante sobre los niveles de desocupación, principalmente en la segunda parte del año, dado el crecimiento de la población que buscó un empleo.

El promedio anual de la Tasa de Desocupación Nacional se ubicó en 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra ligeramente superior a la registrada a lo largo de 2006, que fue de 3.6 por ciento. La trayectoria de este indicador se explica por la alta tasa de participación económica, la cual ascendió a 58.8 por ciento.

Únicamente como marco de referencia, se incorpora un cuadro comparativo de las Principales Variables Económicas del 2001 al 2007, como se muestra a continuación:

B. Finanzas Públicas

B.1 Política de Ingresos

De acuerdo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal los objetivos de la Política de Ingresos para 2007 fueron los siguientes:

Coadyuvar al fortalecimiento de la postura fiscal y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

Contribuir a generar un entorno de mayor certidumbre para la promoción de las inversiones.

Apoyar el aumento de la competitividad.

Fomentar la creación de más y mejores empleos.

– Ingresos Presupuestarios

La información de la Cuenta Pública y del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública analizada por esta Comisión Dictaminadora muestra que, durante 2007 los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario rebasaron en 11.1 por ciento lo previsto en la LIF y en 6.4 por ciento real lo registrado el año anterior al recaudarse 2 billones 485 mil 785.1 mdp. De la captación total, 64.6 por ciento provino de fuentes no petroleras y 35.4 por ciento de las de origen petrolero. Con respecto al PIB, tal cantidad significó una proporción de 25.5 por ciento, frente a 22.8 por ciento del proyecto de salida.

Tales resultados se explican, sobre todo, por la favorable evolución de la recaudación no petrolera, que aumentó 12.9 por ciento con relación a lo pronosticado y en 10.9 por ciento real anual, dinamismo que se originó principalmente en las fuentes no tributarias, particularmente en las de índole no recurrente por la venta del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, el pago del Rendimiento Mínimo Garantizado a cargo de PEMEX y la concesión de las autopistas Maravatió-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León. También influyó la obtención de mayores ingresos tributarios provenientes básicamente del Impuesto Sobre la Renta.

Los ingresos generados por las fuentes petroleras excedieron en 7.8 por ciento lo previsto, debido al incremento del Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el aumento de 15.5 dólares por barril del nivel estimado en la LIF para el precio de exportación del petróleo crudo mexicano; sin embargo, comparados con lo captado un año antes resultaron inferiores en 0.9 por ciento real, en razón de la disminución de los volúmenes de extracción y exportación de petróleo crudo, el menor precio de venta interno del gas natural y el aumento de las importaciones de petrolíferos.

– Ingresos del Gobierno Federal

Para el ejercicio de 2007, en la LIF aprobada por el H. Congreso de la Unión se estimó que el Gobierno Federal obtendría recursos equivalentes a un billón 511 mil 815.7 mdp, 3.0 puntos porcentuales por debajo al cierre esperado para 2006. Sin embargo, se ejercieron un billón 711 mil 220.6 mdp, 6.4 por ciento, en términos reales, por encima de 2006, y que rebasó lo previsto en 13.2 por ciento en la LIF.

Estos resultados se asocian principalmente con el aumento de la recaudación no tributaria no petrolera, que fue mayor en 225.1 por ciento a la esperada y en 81.3 por ciento real a la obtenida en 2006.

Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron en términos reales en 9.0 por ciento como producto de la recaudación del ISR, sin embargo, a pesar de que existió un aumento en la recaudación de IVA y IEPS, ésta se ubicó por debajo del monto estimado.

El incremento deriva de la captación de origen petrolero 5.7 por ciento mayor a la estimada, que tuvo como resultado un mayor monto de Derechos y Aprovechamientos sobre hidrocarburos que permitieron compensar la reducción en la recaudación del IEPS Gasolinas y Diesel.

A pesar del incremento de los ingresos petroleros respecto a lo estimado, se observa una disminución de los mismos de 9.8 por ciento en términos reales con respecto a 2006, atribuible a la reducción de la producción de petróleo, el precio del gas natural y el pago del Derecho ordinario sobre hidrocarburos.

En la Cuenta Pública 2007, el Ejecutivo Federal menciona que la política tributaria se dirigió entre otros aspectos, a fortalecer la recaudación de recursos fiscales, elevar la competitividad del sistema impositivo, apoyar el aparato productivo e impulsar la inversión y el empleo:

La recaudación del ISR se incrementó en 14.0 puntos porcentuales en términos reales con respecto a 2006, derivado del incentivo positivo dada la reducción de la tasa general de 28 por ciento, así como un mayor pago del impuesto en las declaraciones definitivas y provisionales de las empresas, así como de las modificaciones aprobadas a la Ley del IMPAC vigentes a partir del ejercicio fiscal de 2007.

El mejoramiento de la actividad económica, en particular en las ventas, permitió un incremento en la recaudación del IVA de 4.1 por ciento en términos reales.

El IEPS a bebidas alcohólicas y tabacos propició un incremento en términos reales de 8.8 por ciento en la recaudación del IEPS no petrolero.

La favorable evolución de los impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Sobre Automóviles Nuevos, junto con los Accesorios, generó un crecimiento conjunto de 8.6 por ciento en términos reales.

Los ingresos por la desincorporación del Grupo Aeroportuario Centro-Norte y la concesión de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, junto con el pago del Rendimiento Mínimo Garantizado de PEMEX y la recaudación por concepto de Derechos, permitieron un crecimiento en el total de los ingresos no tributarios de 81.3 por ciento en términos reales.

– Ingresos de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo

En este marco, la información de los ingresos del Sector Paraestatal analizada por esta Comisión Dictaminadora refleja que, en 2007, los recursos propios de las entidades de control presupuestario directo ascendieron a 793 mil 638.9 mdp, lo que significó superar lo

programado en 6.4 por ciento y lo obtenido en el ejercicio precedente en 6.2 por ciento real. Ambos resultados se explican, principalmente, por los recursos adicionales generados por PEMEX, como resultado del aumento que observó la cotización de la mezcla mexicana del petróleo de exportación.

En cuanto a los ingresos de las entidades distintas a PEMEX, éstos rebasaron en 2.8 por ciento lo programado en la Ley de Ingresos, sin embargo presentan una disminución de 0.1 por ciento real a lo reportado en 2006. Los mayores recursos captados por la CFE y el IMSS explican, en gran medida, dicho comportamiento. En contraste, aunque los ingresos del ISSSTE fueron mayores en 2.1 por ciento a lo estimado, derivado del cobro de intereses y la recuperación de seguros, en términos reales, resultaron 18.2 por ciento menores en comparación con 2006.

La política de precios y tarifas públicas implementada por el Ejecutivo se orientó al fortalecimiento financiero del sector paraestatal, así como a promover el uso racional de los bienes y servicios que ofrece, reducir las expectativas inflacionarias y garantizar el abasto suficiente y oportuno de insumos estratégicos.

En la determinación de los precios y tarifas públicas, el gobierno consideró los siguientes factores: la relación precio-costos; los precios de referencia nacional e internacional; la tasa de inflación esperada para el año, y la racionalización de los subsidios. Asimismo siguió aplicando la estrategia de ajustes periódicos y graduales con el objetivo de reducir el impacto en el nivel de inflación.

Entre los aumentos observados en el año de estudio sobresalen:

La gasolina Pemex Magna y Diesel registraron un aumento de 4.0 por ciento anual. En tanto que la Pemex Premium registró incrementos acumulados anuales de 5.3 por ciento. De octubre a diciembre, se mantuvo un precio de 7.1 y 5.93 pesos por litro para la gasolina Pemex Magna y Diesel, respectivamente.

Las tarifas eléctricas domésticas presentaron, hasta septiembre de 2007, un desliz mensual acumulativo de 0.327 por ciento; mientras que para el servicio de alumbrado público (tarifas 5 y 5A) y para el servicio de bombeo de aguas negras y potables (tarifa 6) el ajuste mensual acumulativo fue de 0.483 por ciento.

Se continuó con la aplicación de las tarifas de estímulo para los productores agrícolas que hayan acreditado que la energía eléctrica es utilizada para el bombeo de agua para riego agrícola, mediante la aplicación de la tarifa 9-CU, tarifa de estímulo para servicio de bombeo para riego agrícola con cargo único, y 9-N, tarifa de estímulo nocturna para servicio de bombeo para riego agrícola.

Asimismo, se observó un ajuste mensual acumulativo de 2.0 por ciento a los usuarios del servicio de bombeo de agua para riego agrícola en baja y media tensión en diciembre de 2007, los cuales no han cumplido con el programa de certificación de usuarios agrícolas.

Continuó la aplicación de las tarifas de estímulo para la energía eléctrica consumida en instalaciones acuícolas, mismas que consideran un descuento de 50 por ciento sobre las tarifas vigentes que les resulten correlativas.

Para las tarifas comerciales e industriales de media y alta tensión continuó utilizándose el mecanismo de ajuste automático, basado en las variaciones de los precios de los combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica y las de los precios de los principales insumos requeridos en este proceso. En junio de 2007, se modificó el ajuste automático para considerar un promedio móvil de cuatro meses inmediatos anteriores para suavizar el impacto en el índice de precios al productor. En diciembre del mismo año, se reestructuró el mecanismo para incorporar variables como el incremento en eficiencia térmica de las centrales generadoras y el aumento del uso del gas natural en la generación de energía eléctrica, además se añadieron otros índices de precios en las variaciones por inflación y cambió su ponderación. De esa forma, a las tarifas del sector comercial se les aplicó un incremento acumulado anual de 6.3 por ciento, en tanto que las industriales se ajustaron en 7.3 y 8.6 por ciento, para media y alta tensión, en cada caso.

B.2 Política de Gasto

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2007 se señalan como objetivos de la Política de Gasto los siguientes:

- Mantener la estabilidad económica.
- Dar prioridad a los programas para la superación de la pobreza.

- Mejorar la cobertura, la prevención eficaz de enfermedades, la protección de riesgos sanitarios, el abasto suficiente de medicamentos y la ampliación de la infraestructura.

- Combatir la desigualdad educativa, fomentar el desarrollo de infraestructura, contar con escuelas seguras y brindar atención especial al mejoramiento de la educación secundaria, media superior y superior.

- Favorecer el desarrollo de vivienda digna para las familias de menores ingresos.
- Apoyar a grupos vulnerables.
- Fortalecer los programas y acciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
- Impulsar el desarrollo de infraestructura, especialmente de transporte, comunicaciones e hidráulica.
- Respaldar el desarrollo agropecuario.
- Incorporar la perspectiva de género en el gasto público.

- Establecer programas y acciones que fomenten una mayor generación de empleos, la innovación tecnológica y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

- Vigorizar los programas que fomenten la actividad turística.
- Propiciar un desarrollo regional más equilibrado.
- Aplicar una política preventiva y de cara a la sociedad, y una política activa en el combate y sanción de los delitos.
- Contribuir a un desarrollo sustentable.
- Reducir el gasto burocrático.

Los ingresos presupuestarios del sector público en 2007 superaron lo estimado en la LIF 2007, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los ingresos excedentes se distribuyeron de la siguiente manera:

21 mil 424.3 mdp a la atención de desastres naturales (Fondo de Desastres Naturales).

11 mil 663.4 mdp al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

11 mil 663.4 mdp al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIPEMEX).

18,661.4 mdp al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).

5 mil 275.3 mdp destinados a compensar las ADEFAS.

4 mil 855.0 mdp a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Durante el ejercicio 2007, los recursos disponibles para el FEIP rebasaban el límite máximo determinado en la reserva de los fondos de estabilización, por lo que los recursos adicionales por 9 mil 98.0 mdp se asignaron conforme a lo establecido en el mismo Artículo 19 de la LFPRH (cuatro partes iguales de 2 mil 274.5 mdp) de la siguiente manera:

- Programas y proyectos de inversión en infraestructura del PEF.
- Programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las Entidades Federativas.
- Programas y proyectos de inversión en infraestructura de PEMEX.
- Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones -FARP-.

Adicionalmente, se destinaron 17 mil 272.0 millones de pesos al FARP provenientes del derecho sobre hidrocarburos.

– Gasto del Sector Público Presupuestario

Para la elaboración de este apartado, la Comisión Dictaminadora tomó como fuente las diferentes clasificaciones del gasto que se presentan en la Cuenta Pública de 2007.

De la información analizada, se observa que, al cierre del ejercicio fiscal 2007, el gasto neto total del sector público presupuestario¹ ascendió a 2 billones 498 mil 977.8 mdp, cifra 10.6 por ciento superior a lo estimado y 6.6 por ciento real al de 2006. Con relación al PIB, su nivel se situó en 25.6 por ciento, esto es 2.6 por ciento mayor al programado y 0.8 por ciento por encima de lo observado el año anterior.

El aumento del gasto neto total respecto al presupuesto autorizado se derivó de ampliaciones netas por 238 mil 565.3 mdp, las cuales se cubrieron con ingresos excedentes, de acuerdo con lo establecido en la LFPRH, con lo que se destinaron, mayores recursos a la inversión en el sector energético, al desarrollo de infraestructura en las entidades federativas, cubrir el incremento en el gasto no programable y en los precios de los materiales y combustibles necesarios para la producción de bienes y servicios estratégicos, así como atender las emergencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos en las poblaciones afectadas.

Por otro lado, el gasto primario² ascendió a 2 billones 260 mil 21.8 mdp, 13.2 por ciento mayor a lo estimado y 8.4 por ciento real mayor al ejercicio precedente. Con respecto al PIB, representó el 23.1 por ciento, en comparación con el 20.4 del nivel aprobado y con el 22.1 por ciento observado en 2006.

– Gasto Programable en Clasificación Económica

El Gasto Programable ascendió a 1 billón 911 mil 320.8 mdp, cantidad por arriba de la prevista inicialmente en 15.1 por ciento y 10.8 por ciento superior en términos reales a la observada en 2006. En 2007 dichas erogaciones representaron el 19.6 por ciento del PIB.

En la Cuenta Pública, se menciona que este aumento se debe a lo siguiente:

- Las erogaciones extraordinarias para apoyar a la población afectada por desastres naturales.
- Los recursos excedentes orientados a fortalecer la inversión en PEMEX.
- Las aportaciones efectuadas al FEIP, FEIEF y FARP.
- Los recursos entregados a las entidades federativas a fin de impulsar sus programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento.
- El creciente pago de pensiones y jubilaciones.
- Los mayores subsidios y transferencias destinados a vigorizar la operación de las instituciones de educación, salud y seguridad pública.

- Las transferencias asignadas al Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) para el desarrollo de la infraestructura carretera y al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) a efecto de cubrir gastos asociados a las nuevas concesiones de autopistas.
- El incremento en el precio y volumen de los combustibles necesarios para la generación de energía eléctrica.

– Gasto Corriente

En 2007, se tuvo un gasto corriente de un billón 503 mil 489.6 mdp, 9.3 por ciento por arriba de lo estimado y 8.2 por ciento en términos reales con respecto al ejercicio fiscal precedente.

De los 250 mil 299.4 mdp adicionales a los recursos previstos en el presupuesto original, el 51.4 por ciento se destinaron a gasto corriente y 48.6 a capital.

Los servicios personales aumentaron en 0.5 por ciento respecto a lo previsto, 3.9 por ciento en términos reales con respecto a 2006, debido a los incrementos salariales otorgados al personal médico, docente, administrativo y de seguridad pública, así como la creación de plazas principalmente en las instituciones educativas y de salud.

El pago de pensiones fue mayor a lo estimado en 9.1 por ciento y 11.5 por ciento real respecto al ejercicio fiscal 2006. Ello se atribuye al incremento en el salario base de cotización y en el número de pensionados y jubilados, así como a los recursos adicionales destinados al Fondo Laboral de PEMEX.

Los gastos en materiales y suministros se situaron por arriba de lo previsto en 49.5 por ciento. Lo anterior, fue resultado de las modificaciones en los precios de los combustibles para la generación de fluido eléctrico por parte de CFE y LFC; las compras adicionales de medicamentos e instrumental quirúrgico para los programas preventivos de salud; y de productos químicos y materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones de producción, almacenamiento y distribución de petrolíferos en PEMEX.

Los servicios generales registraron un aumento de 67.7 por ciento respecto a lo programado y 33.0 por ciento real por encima de lo ejercido en el año 2006, debido al alza en las tarifas de energía eléctrica, agua y telefonía. Asimismo, impactó la contratación de servicios de transporte terrestre, el mantenimiento de plantas criogénicas, la protección anticorrosiva en terminales y ductos y la reconfiguración de refinerías por parte de PEMEX; el mantenimiento de helicópteros, buques y unidades terrestres asociadas a los programas de seguridad pública y de ayuda a la población en SEDENA y SEMAR; el pago por asesoría, diseño e instrumentación del esquema financiero para la construcción de la autopista Durango-Mazatlán; la indemnización por la terminación anticipada de varias autopistas concesionadas del FARAC, y la mayor adquisición de material educativo para apoyar el Programa Enciclomedia de la SEP.

Los subsidios y transferencias se elevaron en 1.6 por ciento con relación a lo aprobado, pero 15.8 por ciento más de lo ejercido en el año inmediato anterior, lo que se explica por los crecientes apoyos canalizados a los programas en Educación Básica, Media Superior, Universidades Públicas Estatales, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), DICONSA, LICONSA, Fondo Metropolitano, Policía Federal Preventiva, Consejo de Promoción Turística de México, y al Programa para el Registro Público de la Propiedad Único.

El gasto de capital ascendió a 407 mil 831.2 mdp, cantidad superior a la presupuestada en 42.6 por ciento y 21.5 por ciento mayor a la ejercida en 2006, debido al aumento tanto de la inversión física como de la de carácter financiero.

La inversión física mostró un gasto adicional al presupuestado en 36.1 por ciento que se explica, principalmente, por los siguientes factores:

- Mayores recursos destinados a la reparación de infraestructura carretera, educativa, urbana, hidráulica y de salud, así como de vivienda dañada por las lluvias extremas y el paso de huracanes.
- Recursos fiscales excedentes destinados al FEIEF, FEIPEMEX y los programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas y PEMEX.
- Asignaciones al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).
- Aportaciones al FINFRA para fortalecer la infraestructura carretera.
- Construcción de unidades de medicina familiar, la renovación de la Unidad Médica de Atención Especial del Centro Médico Siglo XXI y el fortalecimiento del Programa de Equipamiento Médico del IMSS.
- Transferencias adicionales asignadas a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de apoyar la operación y conservación de los subsistemas hidrológicos del Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, aunado a la realización de obras de reconstrucción de infraestructura en Chiapas y Tabasco.
- Incremento en los subsidios destinados a los programas regionales, a efecto de impulsar el desarrollo de infraestructura.

El concepto de otros gastos de capital registró un monto mayor en 87.1 por ciento con respecto al aprobado, derivado de los recursos excedentes para el FEIP y FARP, así como las aportaciones destinadas a la capitalización de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

– Gasto No Programable

El gasto no programable del sector público presupuestario ascendió a 587 mil 657.0 mdp, cantidad menor en 2.0 por ciento a la aprobada. Su proporción en el PIB se ubicó en 6.0 por ciento, nivel inferior al programado.

La diferencia con respecto al presupuesto original se atribuye a la reducción de los recursos necesarios para cubrir intereses, comisiones y gastos de la deuda. Por otro lado, las participaciones a entidades federativas y municipios, el pago de ADEFAS y el costo de los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca superaron el monto estimado.

Los intereses, comisiones y gastos de la deuda fueron inferiores en 10.6 por ciento respecto a lo autorizado en 2007, debido a un nivel de tasas de interés menor a lo proyectado, un desendeudamiento externo neto superior al aprobado en la LIF 2007 y un tipo de cambio inferior a lo pronosticado en los Criterios Generales de Política Económica.

En los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca se ejercieron recursos por arriba de lo presupuestado en 3.1 por ciento derivado de los mayores apoyos otorgados al Programa de Vivienda.

El pago por concepto de ADEFAS superó en 32.9 por ciento lo estimado, lo cual obedece a que en el proceso de aprobación del presupuesto, esta Soberanía redujo el monto propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto del PEF, como se puede observar en el apartado I.A. del presente Dictamen.

Las participaciones a entidades federativas y municipios se incrementaron en 2.6 por ciento con relación a lo autorizado, como resultado de una Recaudación Federal Participable 4.0 por ciento mayor a la establecida en la LIF 2007.

– Gasto Programable en Clasificación Administrativa

Del análisis del gasto programable del sector público presupuestario por nivel institucional y orden de gobierno se concluye que las entidades de control presupuestario directo ejercen el 39.2 por ciento del total; la Administración Pública Centralizada 34.9; las entidades federativas y municipios 23.8, y los Poderes y Órganos Autónomos el 2.1 por ciento restante.

En 2007, los Poderes y Órganos Autónomos ejercieron 41 mil 6.3 mdp. Del total, 61.2 por ciento estuvo a cargo del Poder Judicial; 18.8 del Poder Legislativo; 18.0 del IFE, y 2.0 por ciento de la CNDH.

Para el ejercicio fiscal 2007, se establecieron diferentes medidas de carácter legal con el objetivo de dotar de mayor transparencia en la rendición de cuentas, tales como:

- Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para constituir el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF).

- Establecimiento de la normatividad del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
- Publicación de los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal".

A las entidades federativas y municipios se canalizaron recursos federales por 802 mil 998.1 mdp, monto mayor en 7.5 por ciento al estimado originalmente. Del total, 58.6 por ciento se asignó al gasto programable federalizado y 41.4 a participaciones federales.

En el Ramo 33, se otorgaron 24 mil 463.2 mdp adicionales a lo aprobado, de los cuales el 99.2 por ciento se asignó al Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para cubrir los incrementos salariales y en prestaciones al personal médico, docente y administrativo, así como crear plazas para los servicios de educación básica y salud en los estados.

Los convenios de descentralización alcanzaron un monto de 52 mil 971.2 mdp, lo que representó un aumento de 6.3 por ciento real respecto a lo presupuestado, con la siguiente distribución: 80.6 por ciento otorgado por la SEP; 16.5 por ciento por SAGARPA, y 2.9 por ciento por SEMARNAT. A través de los convenios de reasignación, las entidades recibieron 3 mil 399.4 mdp, cifra superior en 2 mil 849.4 mdp a lo aprobado, derivado de la inclusión de los convenios de SCT.

Al FIES y al FEIEF se asignaron 34 mil 966.2 mdp con el objetivo de fortalecer las finanzas de las entidades federativas en el impulso del desarrollo de infraestructura y equipamiento.

La Administración Pública Centralizada ejerció 989 mil 144.1 mdp, superior en 201 mil 51.6 mdp a los aprobados por esta Soberanía, derivado de las ampliaciones en 20 dependencias por un monto de 205 mil 231.2 mdp y la reducción de 4 mil 179.7 mdp de otras seis dependencias, según se muestra en el cuadro siguiente:

El gasto destinado a las entidades de control presupuestario directo se ubicó en 748 mil 837.5 mdp, cifra por arriba de la programada en 80 mil 15.7 mdp. Del total de las ampliaciones, 40.9 por ciento correspondió a PEMEX; 25.8 a CFE; 17.9 al IMSS; 13.7 al ISSSTE, y 1.7 a LFC.

– Conclusión de la Relación Laboral

El costo de la Conclusión de la Relación Laboral (CRL) considera la compensación económica por 5,236.0 mdp otorgada a servidores públicos que optaron por retirarse de la Administración Pública Federal (APF), integrada de la siguiente manera:

3 mil 321.6 mdp para la aplicación de programas específicos que consideran la restitución de recursos, correspondientes a SAGARPA, SCT, Secretaría de Economía, y SSP, entre otras.

Un mil 789.8 mdp para la cancelación de 3,838 plazas.

97.3 mdp al pago de liquidaciones derivadas de juicios laborales promovidos y de laudos condenatorios que no implicaron cancelación de plazas y consideran la restitución de recursos de Ferrocarriles Nacionales de México, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

23.9 mdp con objeto de cubrir las cuotas y aportaciones al ISSSTE de los trabajadores que concluyeron su relación laboral en 2006 y que no implicaron la cancelación de plazas.

3.3 mdp orientados a solventar el pago de la compensación equivalente al Seguro Colectivo de Retiro correspondiente a 2003 del Instituto Mexicano del Petróleo, Servicio Postal Mexicano y Colegio de Bachilleres, y 0.2 mdp para cubrir el Seguro Colectivo de Retiro de 2005 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

B. 3 Política de Deuda

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2007, se señalan como objetivos de la Política de Deuda los siguientes:

- Disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las tasas de interés.
- Captar los recursos para hacer frente a las obligaciones de deuda vigente y a las necesidades de financiamiento neto al menor costo posible.
- Mantener un nivel de riesgo prudente y compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y del mercado financiero nacional.
- Mejorar los términos y condiciones de la deuda externa.
- Aprovechar el desarrollo del mercado nacional de títulos gubernamentales.

– Deuda Pública

Con base en el análisis de la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 y el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización formulado por la ASF, esta Comisión Dictaminadora constató que la política de deuda pública se orientó a satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo,

manteniendo un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros locales.

El Ejecutivo Federal propuso una estrategia dirigida en dos vertientes: financiar el déficit del Gobierno Federal en el mercado nacional de deuda, privilegiando la captación de recursos mediante emisiones de BONOS³ y lograr la meta de desendeudamiento externo neto para el sector público, mejorando, la estructura de costo y plazo de los pasivos denominados en moneda extranjera.

– Deuda Interna

En materia de deuda interna, la política instrumentada por el Ejecutivo Federal se dirigió a captar recursos para financiar el déficit y los vencimientos de deuda externa, apoyada en la instrumentación de una política de colocación de valores gubernamentales que se distinguió por:

- Fortalecer las referencias a todo lo largo de la curva de rendimiento de los BONOS.
- Continuar con el desarrollo de la curva de tasas de interés reales mediante la emisión de UDIBONOS,⁴ como una herramienta de diversificación del portafolio de la deuda interna.
- Proseguir con la reapertura de emisiones y el programa de permutas de BONOS, cuyo objetivo consiste en impulsar el desarrollo del mercado local de deuda, fortalecer su estructura y mejorar sus condiciones de eficiencia.

Además, con el propósito de facilitar la operatividad de los títulos gubernamentales, mejorar su liquidez y contribuir a una mejor formación de precios, se aplicó una política de reapertura de emisiones, la cual promueve un perfil de vencimientos más uniforme y emisiones con mayor liquidez; sin embargo, también genera vencimientos por montos más elevados. Por lo que el Gobierno Federal ha recurrido al programa de permutas, el cual permite suavizar el perfil de vencimientos de los BONOS.

Por otro lado, el Gobierno Federal mantuvo su posición acreedora con el Banxico, manteniendo un saldo neto de 107 mil 921.8 mdp en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

En resumen, el manejo de la política de deuda interna del Gobierno Federal arrojó resultados positivos y en línea con las directrices establecidas al respecto en el Plan Anual de Financiamiento y la Ley de Ingresos de la Federación para 2007, al registrar un endeudamiento interno neto por 212 mil 220.2 mdp, mismo que permitió cumplir con el propósito de financiar la totalidad del déficit público en el mercado doméstico.

– Deuda Externa

La política de deuda externa se orientó a mejorar los términos y condiciones de los pasivos, enfatizando en el desarrollo y fortalecimiento de las referencias, buscando ampliar la base de inversionistas que participan en la colocación de bonos en el exterior, a través de la implementación de las siguientes estrategias:

- Emisiones de Opciones de Intercambio de Deuda:

- En marzo de 2007 se emitieron por un monto de 500.0 millones de euros y 2 mil mdd, vía subasta competitiva, opciones de intercambio (*Warrants*), que otorgaron a su tenedor el derecho, más no la obligación, de intercambiar, al término de su vigencia, ciertos bonos denominados en dólares o euros, emitidos por el Gobierno Federal en los mercados internacionales -Bonos UMS-, por Bonos de Desarrollo a Tasa Nominal Fija en moneda nacional emitidos en México. Esta operación permitió continuar mejorando la mezcla entre la deuda interna y externa, así como mantener la deuda total del Gobierno Federal sin cambios.

- Fortalecimiento de Referencias del Mercado de Deuda en Dólares:

- En enero de 2007 se realizó una operación de manejo de deuda en los mercados internacionales por 2 mil 796.4 mdd, en dos partes: 1) intercambio de bonos globales con diversos vencimientos por 2 mil 391.2 mdd, por un bono con vencimiento en el año 2034 con un valor nominal de 2 mil 266.6 mdd y 2) recompra en efectivo de bonos por 405.1 mdd.

- Durante septiembre de 2007, el Gobierno Federal realizó dos emisiones en los mercados internacionales de capital por un mil mdd, mediante la reapertura de los bonos globales con vencimiento en 2017 y 2034.

Se subraya en la Cuenta Pública, el aumento en la calificación de la deuda soberana de México por parte de las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's en septiembre y octubre, respectivamente, derivado de la aprobación de la Reforma Hacendaria, la estabilidad de la economía mexicana en un contexto externo desfavorable y la política de administración prudente de la deuda.

– Saldo de la Deuda del Sector Público Presupuestario

Al cierre de 2007, el saldo de la deuda bruta del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 461 mil 929.7 mdp (25.2 por ciento como proporción del PIB), monto superior en 235 mil 201.0 mdp al cierre de 2006, a consecuencia de:

- Un endeudamiento neto por 180 mil 380.5 mdp.
- Ajustes al alza por 54 mil 820.5 mdp, por la variación del dólar respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda y del registro de los pasivos vinculados con los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS).

El componente interno incrementó su participación relativa en el total de la deuda bruta, de 76.2 a 78.0 por ciento, entre los cierres de 2006 y 2007; la parte externa la redujo en la misma proporción.

La emisión de BONOS y operaciones de administración de pasivos, para consolidar el proceso de sustitución de deuda externa por interna, explican, dicho comportamiento.

– Saldo de la Deuda del Gobierno Federal

El saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal se ubicó en 24.1 por ciento como proporción del PIB, superior en 0.9 puntos porcentuales al observado en 2006, alcanzando un monto de 2 billones 355 mil 373.0 mdp, mayor en 226 mil 281.5 mdp al reportado el ejercicio precedente.

El saldo interno se incrementó en 223 mil 478.4 mdp como consecuencia de un endeudamiento neto por 212 mil 220.2 mdp y ajustes contables al alza por 11 mil 258.2 mdp, en gran medida por el efecto de la indización de la deuda interna a la inflación; el saldo externo aumentó en 2 mil 803.1 mdp por el desendeudamiento neto por 21 mil 453.4 mdp, derivado de las operaciones de intercambio de deuda externa por interna y los ajustes contables positivos por 24 mil 256.5 mdp, producto de la variación del dólar con respecto a diversas monedas en que se encuentra contratada la deuda y al cambio en el registro de los pasivos a valor de mercado.

– Saldo de la Deuda de las Entidades de Control Presupuestario Directo

La deuda bruta de las entidades de control presupuestario directo ascendió a 106 mil 556.7 mdp, monto que rebasó en 8 mil 919.5 mdp el registrado el año previo, como resultado de la combinación de un desendeudamiento neto por 10 mil 386.3 mdp y ajustes contables al alza por 19 mil 305.8 mdp.

El saldo interno se incrementó en un mil 14.6 mdp por el desendeudamiento neto por un mil 105.1 mdp, producto de amortizaciones de CFE y PEMEX a la banca de desarrollo y los ajustes contables positivos por revaluación y otros conceptos del orden de 2 mil 119.7 mdp, ligados en gran medida a los pasivos relacionados con los PIDIREGAS. El saldo externo aumentó en 7 mil 904.9 mdp, derivado del desendeudamiento neto por 9 mil 281.2 mdp, en razón del pago de emisión de bonos con Citibank, N.A. London y Goldman Sachs, así como vencimientos con General Electric Capital Corporation, atribuible principalmente a PEMEX; asimismo, la CFE llevó a cabo la amortización de créditos sindicados con J.P. Morgan e Ing. Calyon; por otro lado, se observaron ajustes contables al alza por 17 mil 186.1 mdp por el registro de los pasivos asociados con los PIDIREGAS.

– Costo Financiero de la Deuda

En 2007, los recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda del sector público presupuestario y las obligaciones de los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de

la Banca ascendieron a 238 mil 956.0 mdp, monto inferior en 9.2 por ciento al estimado y en 7.4 por ciento real al reportado el ejercicio previo.

Como proporción del PIB, dicha cifra representó 2.4 por ciento, menor al 0.3 por ciento previsto y observado en 2006.

Al pago de intereses, comisiones y gastos correspondieron 210 mil 943.0 mdp, monto inferior en 10.6 por ciento al programado.

La reducción entre lo ejercido y lo programado se atribuye a su componente interno por el nivel de tasas de interés por debajo de lo proyectado y la mayor compensación de los intereses, sumado al desfase en la entrega de las obras vinculadas a los PIDIREGAS, las líneas de crédito no ejercidas, el menor costo externo asociado con el desendeudamiento neto superior y la aplicación de un tipo de cambio inferior al pronóstico.

Para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se asignaron 28 mil 13.0 mdp; de los cuales, 80.7 por ciento se adjudicaron al IPAB y 19.3 por ciento para cubrir el pago que absorbe el Gobierno Federal por los descuentos concedidos a deudores de los programas de Vivienda, de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME) y de Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE).

La cantidad canalizada al IPAB correspondió a la autorizada originalmente, en tanto que a los programas de apoyo a deudores se destinó un monto por arriba del presupuesto de salida en 838.7, debido a los mayores recursos otorgados al de Vivienda.

B.4 Principales Modificaciones al PEF

A continuación se presenta el comparativo del gasto (aprobado, modificado y ejercido) analizado por esta Comisión Dictaminadora para el ejercicio fiscal 2007.

Entre los ramos y entidades que ejercieron recursos superiores a los programados y las variaciones establecidas en la Cuenta Pública, tenemos los siguientes:

- **Provisiones Salariales y Económicas:** Las mayores transferencias destinadas al IMSS a fin de sufragar el incremento en las pensiones en curso de pago, así como las aportaciones estatutarias para los seguros de enfermedades y maternidad y al Fondo de Reservas para el Retiro. También influyeron los recursos asignados al ISSSTE con el propósito de cubrir el déficit de operación del Fondo de Pensiones y responder a la dinámica de la demanda en los servicios.
- **Comunicaciones y Transportes:** Asignaciones canalizadas al FINFRA con objeto de fortalecer la infraestructura carretera; al FARAC para la terminación anticipada de concesiones de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo, Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno y León-Lagos de Moreno-

Aguascalientes, y la construcción de la autopista Durango-Mazatlán; a los Centros SCT para cubrir gastos de operación, y a Ferrocarriles Nacionales de México a efecto de solventar el pago de los trabajadores jubilados antes de 1982.

• **PEMEX:** Las aportaciones realizadas al FEIP y las ampliaciones autorizadas a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Pemex Exploración y Producción, derivadas de los ingresos excedentes obtenidos en 2007, por los conceptos señalados en el artículo 19, fracción IV, inciso b) y fracción V, inciso c) de la LFPRH. Incremento de las aportaciones al Fondo Laboral de PEMEX.

Pemex Corporativo: adquisición de un volumen superior de medicinas, material de curación, quirúrgico y de laboratorio; incrementos de precios y tarifas de servicios básicos, y donativos realizados a la población afectada en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz con objeto de apoyar, principalmente, obras de infraestructura de vivienda, escuelas y hospitales.

Pemex Refinación: gastos adicionales para el reemplazamiento parcial de autotanques; el mantenimiento y rehabilitación de ductos, terminales de almacenamiento y distribución; la puesta en operación del Sistema Integral de Medición, Control y Operación de Terminales, y los mayores pagos realizados a terceros por trabajos de reconfiguración de las refinerías.

Pemex Exploración y Producción: ampliaciones destinadas a la construcción y rehabilitación de estructuras marinas y ductos dañados por el Huracán Dean y las tormentas tropicales.

Pemex, Gas y Petroquímica Básica: requerimientos superiores de refacciones y sustancias químicas utilizados en los complejos procesadores de gas, estaciones de bombeo y de compresión, y el mantenimiento de plantas criogénicas. También influyó la instalación del sistema de control de distribución en Ciudad PEMEX.

• **Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:** Para cubrir los incrementos salariales y en prestaciones al personal médico, docente y administrativo, así como crear plazas para los servicios de educación básica y salud en los estados.

• **CFE:** Mayores pagos a PEMEX relacionados con los aumentos en los precios del combustóleo, gas y diesel para la generación de fluido eléctrico. A lo anterior se agrega el pago no programado de ADEFAS, un nivel de sueldos y prestaciones superior a lo estimado y un creciente número de pensionados y jubilados.

• **Educación Pública:** Los apoyos extraordinarios otorgados a las Instituciones de Educación Básica en los Estados, Universidades Públicas Estatales, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Colegio de Bachilleres, UNAM, IPN, UAM, CONAFE, INAH, INBAL, CONALEP y CAPFCE. Asimismo, se autorizaron ampliaciones para sufragar salarios del personal docente y administrativo superiores a los previstos y cubrir el aumento en el número de plazas de la Secretaría.

• **Energía:** Los recursos transferidos a PEMEX provenientes de ingresos excedentes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19, fracción IV, inciso b) y fracción V, inciso c) de la LFPRH, dirigidos al FEIP, así como a los programas y proyectos de inversión en infraestructura en materia de exploración, refinación, gas y petroquímica de PEMEX y organismos subsidiarios. A lo anterior, se agregan los mayores recursos otorgados a LFC, provenientes del derecho de postería y a la CFE a efecto de realizar obras en el cauce del Río Grijalva, en Chiapas.

• **IMSS:** Aumento en el pago de pensiones y jubilaciones a que dieron lugar las revisiones en el salario base de cotización y el alza en el número de pensionados. También incidieron las ampliaciones orientadas a cubrir revisiones salariales superiores a las previstas; la creación de plazas asociadas al inicio de operaciones de nuevas unidades; el mayor volumen de compra de medicamentos, material de curación y la sustitución de equipo médico ante el dinamismo en la demanda de los servicios. De igual forma, repercutieron los recursos destinados a la construcción de unidades de medicina familiar y atención ambulatoria, aunado a la remodelación de la Unidad Médica de Atención Especial del Centro Médico Siglo XXI.

• **Medio Ambiente y Recursos Naturales:** Las transferencias adicionales asignadas a la CONAGUA con el propósito de apoyar la operación, conservación y mantenimiento de los subsistemas hidrológicos del Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala; la reconstrucción de infraestructura de protección en Tabasco; diversas obras hidráulicas en Sonora; la construcción de la presa Picachos en Sinaloa y las plantas de tratamiento de aguas residuales en Chihuahua. A ello se suman los mayores recursos a la Comisión Nacional Forestal con objeto de reforzar el proyecto ProÁrbol-Programa de Pago por Servicios Ambientales.

• **ISSSTE:** Ampliaciones dirigidas a cubrir el pago de pensiones y jubilaciones derivado del incremento en el salario base de cotización y en el número de pensionados. A ello se suman los recursos adicionales ejercidos en el marco del Programa de Fortalecimiento Integral del Instituto para la compra de medicinas, equipo e instrumental médico y de laboratorio; y la construcción, ampliación y remodelación de hospitales y unidades médicas.

• **Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.** Consecuencia del aumento de 4.0 por ciento en la Recaudación Federal Participable.

• **Desarrollo Social:** LICONSA aumentó los subsidios para solventar el incremento en el costo de la leche y mantener el precio a los beneficiarios del Programa Social de Leche. DICONSA aumentó los subsidios a fin de contribuir a la estabilización del precio de la tortilla, cubrir los compromisos de pago a proveedores y asegurar el suministro de productos en las tiendas del Programa Social de Abasto. Las erogaciones extraordinarias asociadas al incremento en el número de plazas para llevar a cabo la supervisión de los programas de asistencia social y a la implementación del Programa Emergente en apoyo a las zonas afectadas por las contingencias meteorológicas en Tabasco. Las ampliaciones dirigidas a la remodelación del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, la fabricación y

montaje de escaleras de emergencia en la Torre Sedesol y la Torre Contigo, así como la compra de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos.

- **Seguridad Pública:** Las aportaciones destinadas a la constitución de los fideicomisos para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, y para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República Mexicana. También impactaron las erogaciones efectuadas por la Policía Federal Preventiva (PFP) para la adquisición de aeronaves y radiopatrullas; la construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapalapa; la realización de diversos operativos en el territorio nacional y el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria en el estado de Michoacán.

- **Hacienda y Crédito Público:** El incremento de las transferencias para la capitalización de BANOBRAS Y BANCOMEXT.

- **Relaciones Exteriores:** Las ampliaciones asociadas a las necesidades de las nuevas representaciones de México en el exterior, las aportaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los gastos relacionados con la celebración de la Séptima Semana Binacional de Salud en el Exterior. Asimismo, influyeron los mayores recursos orientados a la remodelación del consulado en McAllen y a la compra de inmuebles para la embajada en China y los consulados en Dallas y Atlanta, así como de equipo informático y de transporte para las oficinas centrales de la cancillería.

- **Economía:** Los recursos adicionales al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dirigidos a apoyar a los empresarios de Tabasco afectados por desastres naturales; al Programa para la Competitividad de la Industria de la Tortilla, a fin de proporcionar capacitación y financiamiento a 20 mil microempresas del sector, y a las empresas de las industrias aeronáutica y aeroespacial, con objeto de integrar cadenas productivas. Las asignaciones no previstas para la creación de ProMéxico, a efecto de impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera directa y las ampliaciones al Servicio Geológico Mexicano para solventar el pago de derechos de cuatro asignaciones mineras.

- **Defensa Nacional:** Las aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres; diferencias tarifarias en servicios básicos; compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco; y la remodelación de 12 centros regionales de mando.

- **LFC:** Mayor consumo de gas para la generación del fluido eléctrico, como resultado de la entrada en operación de nueve plantas de generación distribuida; adquisiciones adicionales de equipo pesado, de transporte y de cómputo; y el pago no previsto de mano de obra y materiales a cuenta de terceros. Asimismo, influyeron la liquidación de ADEFAS; un nivel de sueldos y prestaciones

económicas superior a lo estimado en beneficio del personal operativo y jubilados, así como la expansión en la plantilla de pensionados.

- **Turismo:** El aumento de las asignaciones al Consejo de Promoción Turística de México con objeto de apoyar las campañas publicitarias y promocionales turísticas; la elaboración de estudios de mercado, estadísticas y encuestas para medir el impacto de la publicidad en los mercados internacionales, y financiar la mayor participación en ferias, congresos y convenciones. A ello se suman las ampliaciones destinadas a la creación de la Unidad Estratégica de Negocios en Washington; la rehabilitación del malecón turístico Mahahual en Quintana Roo y las obras de restauración de la infraestructura turística dañada por las lluvias; y el desbordamiento del Río Grijalva en Tabasco.

- **Marina:** Los mayores requerimientos para la construcción de dos buques de vigilancia oceánica; el equipamiento del Centro de Mantenimiento Nivel III de Helicópteros MI-17 en Las Bajadas, Veracruz, así como los centros hospitalarios de la Armada de México y los Batallones de Infantería de Marina; el mantenimiento de unidades de superficie, aéreas, terrestres y establecimientos navales, así como la compra de un sistema de transmisión satelital GOES dirigido a las estaciones meteorológicas de superficie. A lo anterior, se agrega un volumen superior de combustible y refacciones empleado por las unidades operativas que participaron en las zonas afectadas por desastres naturales a nivel nacional e internacional.

- **Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de las Banca:** Mayores apoyos autorizados para sufragar los descuentos otorgados a los deudores del Programa de Vivienda.

- **Gobernación:** Las ampliaciones provenientes del Fondo de Desastres Naturales para atender a la población afectada por contingencias meteorológicas; mayores recursos transferidos al Instituto Nacional de Migración para la renovación del parque vehicular y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a efecto de adquirir equipo informático y vehicular.

- **Función Pública:** Apoyos no previstos destinados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) con objeto de restaurar el Palacio Federal de Morelia, Michoacán, y a la construcción de aduanas en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Asimismo, influyó la aportación al Fideicomiso Bicentenario a fin de apoyar las actividades de la Comisión para la conmemoración de los aniversarios de la Independencia Nacional y de la Revolución Mexicana, así como las ampliaciones orientadas a la realización de auditorías en obras públicas.

- **Poder Legislativo.** Auditoría Superior de la Federación: recursos adicionales para llevar a cabo obras de remodelación y construcción en el edificio sede y el Centro de Esparcimiento Ajusco; adquirir equipo informático, y aumentar el número de plazas a fin de reforzar las áreas sustantivas. Cámara de Diputados: ampliaciones destinadas a regularizar 417 plazas de honorarios en apoyo a las actividades de los

grupos parlamentarios y solventar el pago no previsto de liquidaciones de servidores públicos que optaron por el retiro. Cámara de Senadores: mayores requerimientos de mobiliario y equipo de administración e informático; renovación del parque vehicular; e incrementos en pasajes, viáticos y servicios de asesoría y consultoría, asociados al dinamismo de las actividades legislativas y parlamentarias realizadas a nivel nacional e internacional.

- **Procuraduría General de la República:** Asignaciones no programadas para el mantenimiento, remodelación y equipamiento de las agencias del ministerio público; la adquisición de un inmueble para la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; la compra de vehículos blindados; y la construcción de tres salas de juicios orales y un laboratorio de criminología y criminalística. A ello se suman las ampliaciones destinadas a los programas de procuración de justicia y a cubrir el incremento en el costo de los servicios básicos.

- **Presidencia de la República:** Mayores recursos destinados a fortalecer las actividades de seguridad y logística derivadas del aumento en el número de giras presidenciales; apoyar las obras de restauración y conservación del Palacio Nacional; adquirir equipo informático, productos farmacéuticos y vestuario indispensables en la operación del centro hospitalario del Estado Mayor Presidencial y proporcionar mantenimiento a las unidades militares.

- **Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:** Erogaciones no contempladas para iniciar la construcción de un inmueble que albergará las salas regionales de oriente en Puebla y la adquisición de bienes informáticos y de vehículos.

- **CNDH:** Erogaciones no programadas para la compra de un inmueble en la Ciudad de México, con objeto de ampliar el Centro Nacional de Derechos Humanos y cubrir necesidades imprevistas de mantenimiento en el edificio sede; actualización de equipo informático y de comunicaciones en diversas oficinas locales y foráneas; y los apoyos en despensas destinados a la población afectada por los fenómenos meteorológicos en el estado de Tabasco.

- **Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal:** Los requerimientos adicionales de equipo informático, de comunicación y administración, así como el aumento en los precios de los servicios de radio-localización e Internet.

Entre los ramos que registraron un gasto menor al programado, y las causas que lo explican, sobresalen los que a continuación se indican:

- **Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos:** Traspaso de recursos del capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" al concepto 8400 "Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios".

- **Deuda Pública:** Mayor monto de intereses compensados y un nivel de tasas de interés por debajo de lo proyectado.
- **Salud:** Los recursos transferidos al Ramo 23 a efecto de restituir el costo de la incorporación de plazas a la CRL; al Ramo 33 a fin de apoyar los sistemas estatales de salud, y al Programa Desarrollo Humano Oportunidades con el propósito de fortalecer los servicios de atención médica en los estados.
- **Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:** Las transferencias efectuadas al Ramo 23 dirigidas a cubrir el costo de las plazas incorporadas a la CRL, y los menores subsidios canalizados al Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas, al Plan Emergente para la Producción de Maíz, Frijol y Leche, al Programa Ganadero y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Asimismo, impactaron los ahorros generados en servicios básicos asociados a la implementación de las medidas de austeridad.
- **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología:** Los traspasos al Ramo 23 con objeto de solventar el costo de la incorporación de plazas a la CRL, así como un número de becas otorgadas inferior a las previstas.
- **Poder Judicial.** Suprema Corte de Justicia de la Nación: transferencia de recursos al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de sufragar gastos de inversión y remuneraciones del personal asignado a comisiones especiales. Asimismo, influyó la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: retrasos en los procesos de licitación de diversas obras de construcción para el archivo jurisdiccional y casetas de acceso peatonal en el edificio sede del Tribunal, así como una plantilla ocupacional inferior a la programada.
- **Tribunales Agrarios:** Transferencia de recursos al Ramo 23 en virtud de que no se concretó la compra de un inmueble para realizar el cambio de ubicación del Tribunal Superior Agrario.
- **Trabajo y Previsión Social:** Menores erogaciones en el Programa de Apoyo al Empleo, como resultado de las bajas y deserciones de los becarios y la terminación anticipada de cursos; cancelación de la actualización del Catálogo Nacional de Ocupaciones en Actividades Turísticas; y la aplicación de medidas de austeridad en funciones administrativas.
- **Reforma Agraria:** Ahorros generados por las plazas que se incorporaron a la CRL, y las menores transferencias otorgadas a los programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, derivado de una demanda de solicitudes de ingreso inferior a la programada.
- **IFE:** Menor financiamiento asignado a los partidos y agrupaciones políticas; cancelación de obras en las juntas locales de Colima, Guanajuato, Hidalgo y

Michoacán; reducción de plazas, y ahorros generados por la aplicación de medidas de austeridad presupuestaria.

III. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO

El análisis funcional del Gasto Programable muestra la distribución de los recursos públicos con base en las actividades que realiza el Sector Público Presupuestario. Este gasto se divide en 2 grupos; Poderes y Entes Autónomos y el Gasto del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo se divide en tres grupos funcionales: Funciones de Desarrollo Social, Funciones de Desarrollo Económico y Funciones de Gobierno.

Del análisis de la Clasificación Funcional del Gasto Programable, esta Comisión Dictaminadora observa que el 59.4 por ciento del total de los recursos se canalizó a las Funciones de Desarrollo Social, 29.8 por ciento a las Funciones de Desarrollo Económico, 8.6 por ciento a las Funciones de Gobierno y 2.1 por ciento a los Ramos Autónomos.

A. Función de Desarrollo Social

Las erogaciones orientadas a las funciones de Desarrollo Social sumaron un billón 135 mil 898.6 mdp, cifra que superó en 13.3 por ciento a la prevista y en 11.4 por ciento real a la de 2006.

A su interior, la distribución de dichos recursos fue: Educación 34.4 por ciento; Salud 24.3; Seguridad Social 21.7; Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 14.2; Asistencia Social 3.3, y Agua Potable y Alcantarillado el restante 2.0 por ciento.

De conformidad con lo mencionado en la Cuenta Pública, el presupuesto destinado a este grupo funcional permitió obtener, entre otros avances, los siguientes:

- Se incrementó la matrícula de educación pública en los distintos niveles de enseñanza: preescolar, 4.4 por ciento; secundaria, 1.5 por ciento; media superior, 2.9 por ciento, y superior y posgrado 3.8 por ciento. En contraste, la matrícula de primaria descendió en 0.2 por ciento, como consecuencia de la reducción del grupo poblacional correspondiente a este nivel.
- Se incorporaron al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 174.0 miles de nuevas familias y se reactivó la vigencia de otras 20.6 miles de familias, lo que permitió compensar las bajas y mantener el universo de atención en 5.0 millones de familias en todo el país. Asimismo, se agregó al Programa el componente energético, a fin de proporcionar a los beneficiarios un apoyo monetario mensual de 50.0 pesos para cubrir los gastos en que incurren por el consumo de energéticos.
- Con el Programa de Desayunos Escolares se apoyó a 5.1 millones de menores en promedio diario, cantidad superior en 4.1 por ciento a la del año previo.

- Mediante el Programa de Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, no Escolarizados, se distribuyeron 99,400.5 raciones alimentarias en beneficio de 404,561 menores en un mil 520 municipios, con lo que se rebasaron las metas en 8.4 y 4.8 por ciento, respectivamente.
- La cobertura del Seguro Popular de Salud se elevó en 2.2 millones de familias, alcanzando un total de 7.3 millones de derechohabientes, de los cuales 7.0 millones correspondieron al régimen no contributivo, en virtud de que se sitúan en los dos primeros deciles de ingreso.
- La Secretaría de Salud amplió su cobertura en 3.0 millones de beneficiarios, con la puesta en operación de 23 unidades de atención médica en 13 entidades federativas, así como 13 unidades de atención especializada en nueve estados. También se equiparon 138 unidades de consulta externa y 92 unidades hospitalarias en 27 entidades.
- El IMSS expandió y mejoró su infraestructura con la ejecución de 76 proyectos de remodelación y equipamiento en hospitales y clínicas de medicina familiar.
- En el marco del programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" se otorgaron 158 mil 887 subsidios, esto es, 279.9 por ciento más de lo estimado.
- Se apoyaron 3 mil 323 acciones para reparar o reponer viviendas dañadas por los desastres naturales.

B. Función de Desarrollo Económico

Para contribuir al fortalecimiento de las fuentes internas de crecimiento y acelerar el ritmo de expansión de la producción y la productividad, la función de Desarrollo Económico continuó con las acciones tendientes a: asegurar la soberanía energética; ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes; asegurar el abastecimiento del mercado interno de alimentos; fomentar el desarrollo social y económico en armonía con la conservación de los recursos naturales; coadyuvar a generar el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo, e impulsar la creación y fortalecimiento de empresas productivas y competitivas.

Para ello, se ejercieron 570 mil 375.5 mdp, monto superior al previsto en 11.5 por ciento y al del período previo en 9.2 por ciento real.

Por su importancia relativa en el total, destacan: Energía con 66.2 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 13.2 por ciento, y Desarrollo Agropecuario y Forestal, 11.2 por ciento. El restante 9.4 por ciento correspondió a las funciones de Ciencia y Tecnología, Temas Empresariales, Agrarios y Laborales, Desarrollo Sustentable, Servicios Financieros, y Turismo.

A la función de Energía se asignaron recursos que superaron la meta en 16.0 por ciento y lo ejercido en 2006 en 1.0 por ciento real. De esta manera fue posible alcanzar, entre otros, los resultados que a continuación se indican:

- Se descubrieron 16 campos: 12 de gas y cuatro de crudo; se terminaron 49 pozos exploratorios, y se concluyeron 610 pozos de desarrollo, estos últimos significaron 3.9 por ciento más que los realizados el año anterior, mediante trabajos de exploración petrolera.
- La producción de gas natural fue superior en 13.1 por ciento a la registrada en 2006.
- La capacidad de generación del sistema eléctrico nacional rebasó en 4.4 por ciento a la del período previo.
- La generación bruta de energía se incrementó en 3.5 por ciento anual.
- Se adicionaron un mil 87 kms de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Se incorporó el servicio eléctrico en un mil 670 poblados rurales y 632 colonias populares, en beneficio de 348.0 miles de habitantes.

Las erogaciones asociadas al desarrollo de las Comunicaciones y Transportes superaron en 90.0 por ciento las previstas y 74.7 por ciento real a lo registrado en 2006, lo que en gran parte se explica, por las aportaciones destinadas al FINFRA para el desarrollo de la infraestructura carretera y al FARAC para cubrir los costos asociados al proceso de concesión de las carreteras Maravatío-Zapotlanejo; Guadalajara-Zapotlanejo; Zapotlanejo-Lagos de Moreno y León-Lagos de Moreno Aguascalientes, y a la construcción de la carretera Durango-Mazatlán.

En la función de Desarrollo Agropecuario y Forestal se ejerció un gasto prácticamente igual al programado. No obstante, con relación al ejercicio previo se incrementó en 20.6 por ciento real, lo que se atribuye fundamentalmente, a las mayores transferencias asignadas a la Comisión Nacional Forestal con objeto de fortalecer el Proyecto ProÁrbol, y a la CONAGUA a fin de mejorar la infraestructura hidroagrícola. También influyeron los subsidios otorgados a través de los programas de la Alianza para el Campo, particularmente los dirigidos a impulsar el desarrollo rural, así como al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) a efecto de favorecer la producción de maíz y frijol.

C. Función de Gobierno

A las Funciones de Gobierno se canalizaron 164 mil 40.4 mdp, cifra mayor en 54.8 por ciento a la programada y en 19.6 por ciento real a la reportada un año antes.

La distribución de los recursos muestra que, la función Hacienda absorbió 38.5 por ciento; Soberanía, 25.7; Orden, Seguridad y Justicia, 21.0, y Administración Pública, Relaciones

Exteriores, Gobernación, y Otros Bienes y Servicios Públicos, el restante 14.8 por ciento.

Destaca el incremento del presupuesto destinado a la función Hacienda que concentró 83.9 por ciento de las ampliaciones netas de este grupo funcional. El dinamismo se atribuye principalmente, a las aportaciones realizadas al FEIP y al Fondo de Desastres Naturales como resultado de la captación de ingresos excedentes, así como a los recursos no presupuestados asignados al Fideicomiso para la Conclusión de la Relación Laboral.

IV. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2007

La información relativa al cumplimiento de metas de los indicadores del Sector Público Presupuestario se muestra en los apartados de Cumplimiento de Indicadores en General y de Cumplimiento de Indicadores Vinculados a los Recursos Asignados por Nivel Funcional, de conformidad a los resultados emitidos por la ASF, a saber:

A. Cumplimiento de Indicadores en General

En este primer apartado se pretende identificar en forma genérica el cumplimiento de indicadores por ramo o entidades, tomando como parámetros aquellos entes que no alcanzaron la meta, los que la alcanzaron y los que la superaron, como se muestra en la siguiente tabla:

El cuadro anterior permite afirmar que de un universo de 1,001 indicadores evaluados, sólo el 16.6 por ciento (166) no alcanzó la meta, en tanto que el 42.9 por ciento (429) sí alcanzó la meta y el 40.6 por ciento (406) la superó.

B. Cumplimiento de Indicadores Vinculados a los Recursos Asignados

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, se establece que:

Se presentaron 1,050 indicadores, de los cuales 1,029 se consideraron sujetos de evaluación; de ellos, el 40.4% superó la meta, el 43.0% la alcanzó y el 16.6% no la cumplió. El grupo funcional 3 "Desarrollo Económico" fue el que registró mayor número de indicadores (53.8%), seguido del 2 "Desarrollo Social" (27.3%) y el restante (18.9%) correspondió al grupo 1 "Gobierno". El grupo funcional 4 "Otros" no reportó indicadores, por tratarse de gasto no programable.

En el grupo funcional de Desarrollo Económico se presentó el nivel más alto de indicadores que alcanzaron la meta (453), seguido por Desarrollo Social con 235 y Gobierno con 170.

La exigencia de optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, así como de generar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia los

ciudadanos, son fundamentos básicos para impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño en el sector público.

La dimensión, complejidad y magnitud de los procesos que se operan, hace imperativo la construcción de sistemas de evaluación del desempeño que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.

La LFPRH establece la obligación para todos los ejecutores de gasto de instrumentar y operar un sistema de evaluación del desempeño que debió haber concluido en 2008.

Entre las principales dificultades estructurales que deben ser superadas para una evaluación eficiente del desempeño se pueden enumerar las siguientes:

- Objetivos de programas públicos que en muchas ocasiones son de carácter múltiple y contradictorio.
- Inadecuada correlación de los objetivos globales con los específicos y las metas correspondientes, lo cual dificulta la evaluación.
- Ausencia de objetivos y metas pertinentes y medibles en términos de resultados alcanzados, así como de eficacia, eficiencia y economía.
- Inexperiencia de los servidores públicos, tanto en el diseño como en la utilización de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios.
- Indicadores irrelevantes.
- Complejidad para integrar, homologar y explotar rápida y eficazmente las numerosas fuentes de datos.
- Sistemas de información inadecuados para una administración con base en resultados.

Debe tomarse en cuenta que la administración pública basada en resultados, la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos para la gobernabilidad en los estados democráticos y ello requiere de indicadores veraces, relevantes y comprobables por parte de los actores políticos y de la ciudadanía.

Los indicadores deben ser herramientas para la toma de decisiones y tener un papel destacado en la tarea de elaboración, análisis, discusión y de aprobación del presupuesto.

En este sentido, se realizó un análisis de los indicadores para los ramos de Educación, Salud y Desarrollo Social, el cual consideró la siguiente metodología:

1. Se realizó el conteo de programas presupuestarios y de indicadores.

2. Se identificó el gasto asociado a programas.
3. Se verificaron los principales argumentos de la ASF realizados con el análisis del conteo de los programas presupuestarios y de los indicadores.
4. Se corrieron procesos de análisis de asociación programa-gasto-indicador, mediante la explotación de la base de datos disponible.
5. Se identificaron las unidades responsables de la ejecución de los programas y de las metas de los indicadores, y se determinó el número total de indicadores por ramo y entidad.
6. Por último, se eligieron los tres principales ramos por impacto social y económico, de acuerdo con su asignación presupuestaria.

Para llegar al análisis de los indicadores, es necesario hacer referencia a la metodología para el establecimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores (OMI's), establecida en los lineamientos específicos para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, que señala lo siguiente:

- Las dependencias y entidades debían verificar que al llevar a cabo la construcción de cada uno de los componentes de los OMI's, se reunieran las características que reflejaran de manera adecuada la vinculación que debe existir entre los indicadores y las metas presupuestarias, y entre estas últimas y los objetivos de la institución.

- Que los indicadores que se construyeran con el fin de hacer factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas debía estar vinculado con dichos objetivos y metas.

- Debía evitarse la formulación de indicadores que se refirieran a la comparación entre las acciones realizadas contra las acciones programadas.

- Si se trataba de objetivos y metas cuya medición sólo podía realizarse en forma cualitativa, era indispensable que éstos se construyeran expresando las características con las que se efectuara la valoración cualitativa.

- Se debe entender como componentes de los OMI's lo siguiente:

- Objetivo: Propósito general de mediano o largo plazo.
- Meta: Expresión específica de corto plazo del objetivo.
- Indicador: Expresión que mide el cumplimiento de la meta.
- Unidad de Medida: Expresión unitaria que permite medir la meta específica. Debe estar contenida o derivarse de la descripción del indicador, y debe reflejarse en el universo de cobertura y en la fórmula.

- **Universo de Cobertura:** Alcance máximo posible de la unidad de medida expresada en el indicador. En el caso de fórmulas definidas como cocientes debía invariablemente ser igual al denominador. Si la fórmula era expresión absoluta, el Universo de Cobertura se utilizaría como base de referencia.
- **Fórmula:** Expresión matemática que relaciona la(s) variable(s) que intervienen en la determinación del indicador.
- **Meta Específica Absoluta:** Cuantificación del resultado del indicador en términos absolutos. En caso de que no pueda determinarse para algún indicador, debía capturarse 0 como valor.
- **Meta Específica %:** Cuantificación del resultado del indicador en términos porcentuales. Por lo general, resulta de dividir la meta específica absoluta entre el universo de cobertura y multiplicarlo por 100.
- **Tipo de Indicador:** Calificación del indicador con base en sus atributos y el impacto que intenta medir.

B. 1. ANÁLISIS DE LOS RAMOS SELECCIONADOS

Educación Pública

La misión del sector educación es la de coordinar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas: la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal; promover y atender los tipos y modalidades educativas -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación; apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y el deporte.

Para cumplir con su misión, para 2007 los objetivos fueron impulsar la formación integral de los niños y jóvenes; dar prioridad a garantizar el acceso al sistema educativo en todos sus niveles y mejorar la calidad; tener un programa amplio de becas que permitiera que los niños y jóvenes con independencia del nivel socioeconómico, alcanzaran los mayores niveles de estudios; buscar que se aprovechara el potencial existente en los jóvenes, poniendo énfasis en la educación secundaria y media superior y superior, ampliando la cobertura.

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Educación Pública y las entidades paraestatales de este sector, llevaron a cabo actividades institucionales que para este ejercicio fiscal, comprendieron un conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizaron, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en sus programas institucionales, de conformidad con sus atribuciones.

En la revisión de los componentes de los OMI's, se observó que la meta establecida como universo de cobertura es menor con relación a la meta anual alcanzada, lo que muestra que para la construcción o definición de los indicadores no se consideró la metodología antes

señalada, ya que como universo de cobertura se debió establecer el alcance máximo posible a lograr como meta.

En los ejemplos que se muestran a continuación se observa dicha situación, así como el que se utilizó como universo de cobertura la meta anual alcanzada un año antes, y no lo ya señalado.

Ejemplo número 1

Actividad Institucional: 009 Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura.

Objetivo: Fomentar el acceso a la cultura.

Meta: Mejorar el acceso a los productos culturales.

Ejemplo número 2

Actividad Institucional: 003 Diseñar y aplicar la política educativa.

Objetivo: Instrumentar las relaciones interinstitucionales del Sistema Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo que consiste en el establecimiento formal de los acuerdos, acciones y programas entre dos o más instituciones.

Meta: Plaza comunitaria de nueva creación en el 2007.

No obstante que los indicadores están asociados a los objetivos definidos para sus correspondientes actividades institucionales, en algunos casos se compara entre las acciones realizadas en 2007 contra las acciones realizadas el año anterior.

Salud

De acuerdo con la estrategia programática sectorial, el sector salud enfocaría su prioridad en lograr la cobertura universal en salud, asegurando el acceso equitativo a un paquete viable de servicios de salud, fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, garantizando el abasto de medicamentos y el fortalecimiento de la oferta de servicios.

Asimismo, se buscó fortalecer la aplicación del Seguro Popular, ampliando el paquete de servicios de salud y fomentando la afiliación a este esquema y operando el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que otorga recursos a las entidades federativas de acuerdo con el número de niños atendidos por cáncer, pacientes con VIH/SIDA, cataratas, cáncer cérvicouterino y tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Salud y las entidades paraestatales de este sector, llevaron a cabo actividades institucionales que para este ejercicio fiscal, comprendieron un conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizaron, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en sus programas institucionales, de conformidad con sus atribuciones.

En la revisión de los componentes de los OMI's, se observó que la meta establecida como universo de cobertura es menor con relación a la meta anual alcanzada, lo que muestra que para la construcción o definición de los indicadores no se consideró la metodología antes señalada, ya que como universo de cobertura se debió establecer el alcance máximo posible a lograr como meta.

En los ejemplos que se muestran a continuación se observa dicha situación.

Ejemplo número 1

Actividad Institucional: 006 Operar el Sistema Federal Sanitario.

Objetivo: Establecer las prioridades y proyectos para la atención de necesidades de la población, en materia de protección contra riesgos sanitarios.

Meta: Proteger a la población contra riesgos sanitarios.

Ejemplo número 2

Actividad Institucional: 011 Proporcionar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública).

Objetivo: Atender la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad por una condición de tipo físico, social o familiar.

Meta: Atender a la población con vulnerabilidad social a través de la atención y prevención de los riesgos sociales y de canalizar apoyos filantrópicos a personas de escasos recursos sin seguridad social.

En el establecimiento de algunos indicadores no se delimitó adecuadamente el universo de cobertura, es decir, no se establecieron alcances a lograr más apegados a la realidad, si se considera lo que fue definido como denominador en su fórmula y lo que se logró alcanzar como meta.

Con base el análisis realizado a los componentes de los objetivos, metas e indicadores presentados en la cuenta de la Hacienda Pública 2007, se observa que no se realizó de manera correcta su construcción o definición impidiendo evaluar el desempeño de las instituciones de salud en la población.

Desarrollo Social

La misión del Ramo Desarrollo Social, es la de formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad y lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos..

Para 2007, sus acciones y políticas de desarrollo social se orientaron a la disminución de los índices de pobreza y marginación; a la atención de necesidades básicas de nutrición, salud y educación; al crecimiento ordenado de los centros de población urbanos y rurales, así como a su equipamiento e infraestructura; a la generación y ampliación de oportunidades de ingreso para la población en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad; y a brindar acceso a la vivienda.

Para cumplir con su misión, la Secretaría de Desarrollo Social y las entidades paraestatales de este sector, llevaron a cabo actividades institucionales que para este ejercicio fiscal, comprendieron un conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizaron, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en sus programas institucionales, de conformidad con sus atribuciones.

Al igual que en los casos anteriores, la meta programada o a alcanzar siempre se determina señalando el universo de cobertura, como se muestra a continuación:

Ejemplo número 1

Actividad Institucional: 010 Apoyar a proyectos sociales y productivos de combate a la pobreza en co-inversión con gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones.

Objetivo: Ofrecer a la población en pobreza y a organizaciones sociales apoyo para proyectos productivos.

Meta: Apoyar proyectos presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Municipales e Instituciones Académicas de Educación Superior o de Investigación.

Ejemplo número 2

Actividad Institucional: 010 Apoyar a proyectos sociales y productivos de combate a la pobreza en co-inversión con gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones.

Objetivo: Ofrecer a la población en pobreza y a organizaciones sociales apoyo para proyectos productivos.

Meta: Realizar acciones de fomento a favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC.

Conclusión

Con base en el análisis realizado a los componentes de los objetivos, metas e indicadores presentados en la Cuenta Pública 2007, se observa que no se realizó de manera correcta la construcción o definición de algunos indicadores, lo que para esos casos, no permite ilustrar adecuadamente el desempeño que tuvieron las instituciones que atienden a la población en materia de desarrollo social, en las funciones que les corresponden, así como su impacto en la población.

Respecto al porcentaje de recursos asignados a los programas con objetivos, metas e indicadores, con base en la información disponible del presupuesto aprobado y en el análisis de los indicadores, se concluye que no es factible determinar si tales recursos son suficientes o insuficientes para el logro de un desempeño eficiente y eficaz de las actividades institucionales de este sector, y por consiguiente, el logro de los objetivos y metas de sus programas presupuestarios.

REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2007

I. TIPOS DE AUDITORÍAS PRACTICADAS

La Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo auditorías que, de acuerdo con su objetivo, se clasifican en 3 grandes grupos: de Desempeño, Regularidad y Especiales, dentro de las cuales las de Regularidad pueden ser del tipo Financieras y de Cumplimiento, de Inversiones Físicas, en las que se incluyen las obras públicas y las adquisiciones, y de Sistemas. Asimismo, realiza auditorías de Seguimiento, cuyo objetivo es constatar y evaluar las gestiones de las entidades fiscalizadas para atender las observaciones, recomendaciones y demás acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en ejercicios anteriores.

En la revisión de la Cuenta Pública 2007, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación realizó las siguientes revisiones:

- La fiscalización superior del ejercicio 2007 totalizó 962 revisiones, lo que significa un incremento de 208 auditorías (27.6%) en comparación con las 754 practicadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2006;
- Por cuanto hace al tipo de auditorías, 190 (19.8%) fueron de desempeño, 716 (74.4%) de regularidad, 54 (5.6%) especiales, y 2 (0.2%) de seguimiento;
- Cabe destacar, que las 716 auditorías de Regularidad practicadas, incluyen 415 revisiones efectuadas a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

- 54 Auditorías Especiales, y;
- 2 de Seguimiento.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EVALUADAS

Mediante la realización de las 190 auditorías de desempeño, así como de algunas especiales y financieras y de cumplimiento, se evaluaron los elementos y componentes más relevantes de los siguientes 51 programas, subprogramas y actividades institucionales:

III. Resumen de resultados de la observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental

Como lo establecía la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tiene entre sus obligaciones el informar sobre el cumplimiento de los principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, mismos que verifica durante la revisión de la Cuenta Pública.

Es pertinente resaltar la importancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que son elementos generales y fundamentales para informar los métodos procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma homogénea, clara y concisa. Dichos Principios constituyen el sustento técnico de la Contabilidad Gubernamental.

El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, resalta que se observaron un total de 952 incumplimientos a diversos Principios de Contabilidad Gubernamental derivados de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2007.

Los principios que se reportan con mayor índice de incumplimiento son los siguientes: Revelación Suficiente, en 237 ocasiones; Cumplimiento de Disposiciones Legales en 224 ocasiones; Control Presupuestario en 121 ocasiones; el de Base Devengado con 112 y el de Consistencias con 69 faltas.

En lo referente a los Sectores, Ramos y Poderes, los que destacan por dejar de observar los Principios de Contabilidad Gubernamental son: Ramos Generales 23 y 33 con un total de 667 incumplimientos, el sector Energía con 56 inobservancias, el sector Gobernación con 46, el sector Hacienda y Crédito Público 40 y el sector Medio Ambiente con 30 incumplimientos respectivamente.

A continuación se muestra un cuadro resumen con el total de las inobservancias a los principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, presentados en el Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior:

IV. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

La Auditoría Superior de la Federación tiene el mandato de reportar en su Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública, lo relativo al nivel de cumplimiento de los Ordenamientos Legales aplicables, con la finalidad de verificar si las operaciones realizadas y registradas en la contabilidad se ajustaron a los mismos.

La Auditoría Superior de la Federación reporta que en lo general se observaron satisfactoriamente los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación reporta que se incumplieron 14,498 ordenamientos diversos, mismos que a continuación se muestran:

En el cuadro anterior se detallan las normas que presentaron mayor número de incumplimientos, destacando: Otras Disposiciones de Carácter Local Específico con un total de 6,627, le sigue la Ley de Coordinación Fiscal con 2,048 inobservancias, Otras Disposiciones de Carácter General con 1,644, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento con 959 y 752 inobservancias, respectivamente.

En lo relativo a los Poderes, Sectores y Ramos, destacan por su incumplimiento los Ramos Generales 23 y 33 con 8,578, el sector energía con 1,034, el sector Hacienda y Crédito Público con 679, y el sector Comunicaciones y Transportes con 675 faltas, respectivamente.

V. RECURRENCIA DE LAS IRREGULARIDADES

La Auditoría Superior de la Federación definió un catálogo de las irregularidades y estableció una base de datos para registrarlas y clasificarlas por tipo, sector y entidad fiscalizada para facilitar el análisis de las mismas.

A continuación, se presenta un cuadro resumen donde se describen el total de las irregularidades presentadas.

En el cuadro anterior se observa que la mayor recurrencia de irregularidades se registró en los rubros: Obra Pública 2,648; Desempeño 2,316; Recursos Federales Transferidos a Estados y Municipios 1,817; Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1,061; Sistemas de Información y Registro 936; y Servicios Personales 706 irregularidades.

De lo anterior se advierte que, en lo que se refiere a recurrencia de irregularidades, el rubro de Obra Pública es el que presenta mayor índice de recurrencia de irregularidades, cuyos Sectores y Ramos más representativos son el de Comunicaciones y Transportes (327);

Energía (171); Entidades No Coordinadas Sectorialmente (98); y Ramos Generales 23 y 33 (1,892).

Del análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se identifican obras y proyectos que al ser fiscalizados, arrojan observaciones relevantes; por lo que es necesario que los ejecutores de obra pública por contrato o administración directa, además de dar cumplimiento a la normatividad inherente a la materia y servicios relacionados con la misma, deberán tener la certeza de contar con los recursos necesarios para su ejecución, el proyecto ejecutivo o términos de referencia, en su caso, la disponibilidad del inmueble, la opción de modalidad de adjudicación debidamente fundada y motivada, el presupuesto base con costos de mercado vigentes, realizar una adecuada evaluación para seleccionar la propuesta más solvente, las respectivas fianzas para garantizar los recursos autorizados y aplicados en los trabajos, el personal técnico necesario para supervisar los trabajos motivo de la obra y la calidad de éstos y de los materiales utilizados, así como de su cuantificación y correspondiente pago, entrega, operación y adecuado funcionamiento (Anexo 1).

VI. RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS

Cumpliendo con las obligaciones encomendadas, la Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2007, cubriendo una muestra de revisiones a 143 entes fiscalizados, entre los que se incluyeron, 1 órgano del Poder Legislativo, 3 del Poder Judicial y 18 dependencias del Poder Ejecutivo Federal; 52 entidades paraestatales coordinadas y 7 no coordinadas sectorialmente; 19 órganos desconcentrados y 4 órganos constitucionalmente autónomos; 7 instituciones públicas de educación superior; y aportaciones federales transferidas a las 32 Entidades Federativas.

En conjunto, la Auditoría Superior de la Federación practicó un total de 962 auditorías de las cuales, 190 fueron de Desempeño, 716 de Regularidad y Cumplimiento Financiero, 54 Especiales y 2 de Seguimiento.

Como resultado de las 962 auditorías efectuadas a la Cuenta Pública 2007, se determinaron 9,557 observaciones, que dieron lugar a 10,873 acciones promovidas, correspondiendo 7,620 a acciones preventivas (recomendaciones) y 3,253 a acciones de carácter correctivo, como se presentan en el siguiente cuadro:

A. Efectos de la Fiscalización

El cuadro que a continuación se muestra, resume los efectos de la fiscalización entendidos como las repercusiones y beneficios esperados de las recomendaciones y acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación puntualiza que las observaciones fueron hechas del conocimiento de los entes sujetos a fiscalización en diferentes reuniones de Preconfronta y

Confronta que se llevaron a cabo, las que, al no ser aclaradas y solventadas por los mismos, pasaron a formar parte del Informe del Resultado presentado.

B. Cuantificaciones Monetarias

Del Programa de Auditorías aplicadas a la Cuenta Pública 2007, las cuantificaciones monetarias que se obtuvieron de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación que fueron incluidas en el Informe del Resultado presentado a esta Soberanía, ascendió a 60,723,555.3 miles de pesos. Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación aclara que el monto obtenido, no necesariamente constituye resarcimientos, daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

A continuación se muestra de manera esquemática la conformación por sector del monto total observado:

La situación definitiva de las cuantificaciones, dependerá de las evidencias y documentación soporte que los entes fiscalizados hubieren entregado a la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con la normatividad aplicable.

C. Ramos Generales 23 y 33

Durante 2007, el monto total transferido a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ascendió a 802.9 mil mdp, monto que representó el 32.1% del Gasto Neto total del Sector Público Presupuestario, el cual se ubicó en 2,498.9 mil mdp. Del total de transferencias, el 58.6% correspondió a aquellas condicionadas, mientras que el 41.4%, es decir, 332.7 mil mdp fueron no condicionadas (Participaciones Federales).

La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la fiscalización de los fondos federales de los Ramos Generales 23 "Provisiones Salariales y Económicas", 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", de los recursos federales ejercidos a través del "Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) y de los recursos reasignados a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para ello, se coordinó con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL) y dentro del marco de la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de coordinación suscritos con los congresos de las Entidades Federativas.

Las transferencias condicionadas se entregaron a las Entidades Federativas y Municipios a través de:

- Ramo General 33, cuyos recursos ascendieron a 356,761.3 mdp (75.9% del total)
- Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 6,939.9 mdp (1.5% del total)

- Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 28,026.3 mdp, (6.0% del total)
- Convenios de Descentralización, 52,971.2 mdp (11.2% del total)
- Convenios de Reasignación, 3,399.4 mdp (0.7% del total)
- Ramo General 25 (Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal), 21,850.2 mdp (4.6% del total)
- Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), 292.1 mdp (0.1% del total)

D. Principales Resultados de las Auditorías Practicadas a los recursos transferidos a Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Los recursos asignados a las Entidades Federativas y Municipios, en los fondos y programas auditados (Universo Seleccionado), ascendieron a 309,298,713.7 miles de pesos; este importe significa el 65.8% del total de las transferencias federales que se entregaron a esos órdenes de gobierno, valor que manifiesta el alcance destacado que tuvieron las acciones de fiscalización realizadas.

El Ramo General 33 concentró el 97.1% del Universo Seleccionado; y el Ramo General 23 (FIES, FEIEF, PROFIS y el Fondo Metropolitano) el 2.9%.

De estas auditorías se formularon 6,572 Observaciones, que dieron lugar a 6,902 Acciones Emitidas, las cuales tuvieron la siguiente composición: 3,983 Recomendaciones; 798 Recomendaciones al Desempeño; 971 Pliegos de Observaciones; 1,045 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 49 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 55 Solicitudes de Aclaración; y 1 Denuncia de Hechos.

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, que no necesariamente implica un posible daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, ascendió a 18,867,363.4 miles de pesos, que significa el 6.1% de los recursos asignados a las Entidades Federativas y Municipios, en los fondos y programas auditados y el 7.3% de la muestra que se revisó.

Como resultado de las auditorías, se obtuvieron recuperaciones por un monto de 1,922,095.6 miles de pesos; de este total, corresponden a las auditorías llevadas a cabo directamente por la Auditoría Superior de la Federación el 99.1% y el 0.9% restante a las auditorías solicitadas. Además, se determinaron recuperaciones probables por 15,297,078.2 miles de pesos, para un total de 17,369,613.8 miles de pesos para este concepto (incluidos los 150,440.0 miles de pesos de importes aclarados de las auditorías del FAEB concluidas en junio de 2008), que representó el 5.6% del Universo Seleccionado y el 6.7% de la muestra revisada.

D.1 Resultados Generales de las Auditorías Practicadas al Ramo General 33

Debido al número de Municipios en el país, y que el FORTAMUN-DF y el FISM son fondos del Ramo 33 cuyos recursos ejercen directamente los Municipios y, en su caso, las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el mayor número de auditorías se concentró en dichos fondos, abarcando el 33.1% y 31.0% respectivamente, del total de revisiones a dicho ramo.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación realizó revisiones al FAEB en todas las Entidades Federativas, destacando que dicho fondo representó el 59% del gasto ejercido en el Ramo 33, razón por la cual, aunada a lo establecido por el PEF 2008, en el sentido de llevar a cabo una revisión de dicho Fondo, las auditorías realizadas a este concepto cobraron mayor relevancia.

En las 465 auditorías practicadas al Ramo General 33, los recursos asignados a las Entidades Federativas y Municipios, en los fondos y programas auditados, ascendieron a 300,349.8 mdp, que representan el 84.2% del total ejercido en el ramo, cifra que destaca el alcance de las acciones de fiscalización realizadas.

El FAEB concentró el 77.4% del universo seleccionado; el FASSA representó el 6.5%; el FORTAMUN-DF el 5.1%; el FISM le corresponde el 2.1%; el FISE el 0.9%; el FAM el 2.1%; el FAETA el 0.7%; el FASP el 1.7% y el FAFEF el 3.5%.

D.2 Resultados Generales de las Auditorías Practicadas al Ramo General 23

Se llevaron a cabo 75 revisiones al Ramo General 23, destacando 40 que se aplicaron a los recursos del FEIEF y 24 al FIES, lo que representa el 53.3% y 32.0%, del total de las auditorías realizadas a este ramo, respectivamente.

Los recursos asignados mediante el Ramo General 23 a las Entidades Federativas en los programas auditados ascendieron a 8,948.9 mdp. Como se muestra en el cuadro de los resultados de las auditorías practicadas a los recursos federales de las Entidades Federativas, se determinaron 857 observaciones en el Ramo General 23, a las que les correspondieron 970 Acciones Emitidas, 686 Recomendaciones, 12 Recomendaciones al Desempeño, 87 Pliegos de Observaciones; 148 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 36 Solicitudes de Aclaración.

Se determinaron recuperaciones probables por 3,123.5 mdp, que junto con las recuperaciones por 10.7 mdp, se alcanzó un total de 3,134.2 mdp.

VII. AUDITORÍAS REALIZADAS – RESULTADOS

A. Sector Gobernación (Anexo 2 - 2 auditorías)

Secretaría de Gobernación

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Auditoría: 07-1-04EZQ-07-0589

Auditoría de Desempeño a las Acciones de Prevención y Eliminación de la Discriminación, y Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de la Población Indígena.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de la población indígena.

Muestra Auditada: 1,404,586.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, no se avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas, a cargo del CONAPRED, la CDI y la CNDH, no se cumplió de manera razonable, como se precisa a continuación:

En materia de prevención y eliminación de la discriminación, el CONAPRED careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos.

Para promover la igualdad de oportunidades y de trato, con los programas y proyectos que coordinó la CDI, en el área de desarrollo económico se benefició a 76,674 indígenas, 0.7% de la población indígena del país (10,220,862), conforme al mandato constitucional de fortalecer las economías locales y mejorar sus condiciones de vida, a fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas; y en materia de desarrollo social, logró incorporar a 80,290 indígenas a los servicios de salud, 1.0% de la población indígena sin este servicio (8,146,091).

En las acciones de protección de los derechos humanos, la CNDH canalizó a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos el 63.0% de los 721 asuntos de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos, desconociendo la resolución del asunto y si se protegieron los derechos humanos de la población indígena afectada, por carecer de facultades para dar seguimiento a las quejas.

Instituto Nacional de Migración

Auditoría: 07-0-04K00-07-0581

Auditoría de Desempeño a las Acciones en Materia de Inmigración

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de inmigración.

Muestra Auditada: 124,555.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el INM, la SRE, la PFP y la CNDH no conjuntaron estrategias y esfuerzos para cumplir de manera razonable el objetivo de la política pública de favorecer el desarrollo económico, social y cultural del país; preservar la seguridad y soberanía nacionales, y respetar los derechos de los migrantes, ya que la SRE no dispuso del registro completo y oportuno de las visas expedidas por los consulados a extranjeros que solicitaron su ingreso al país; el INM no estableció sistemas de control para identificar por punto de internación (puertos, aeropuertos y puntos fronterizos) la salida del país de 19,087,978 extranjeros en forma documentada, y para el 55.4% (32,381) de los 58,482 inmigrantes asegurados no determinó la autoridad que realizó su aseguramiento; el INM y la PFP no establecieron programas y acciones coordinadas para vigilar la entrada de 21,617,436 de extranjeros en puntos de internación nacionales, a fin de preservar su seguridad y soberanía; y la CNDH no estableció metas específicas para atender a los extranjeros que en 2007 se internaron al país en forma documentada, a fin de proteger los derechos humanos en caso de presuntas violaciones.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 293.0 miles de pesos

B. Sector Relaciones Exteriores (Anexo 3 - 1 auditoría)

**Secretaría de Relaciones Exteriores
Auditoría: 07-0-05100-06-1126**

Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de la normativa para el otorgamiento de donativos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores; corroborar el monto y destino de los recursos; verificar los acuerdos y convenios asociados con dichos donativos, y constatar su cumplimiento.

Muestra Auditada: 600.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Relaciones Exteriores no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 7505 "Donativos a instituciones sin fines de lucro" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes aspectos: la falta de instrumento jurídico (convenio) para el otorgamiento del donativo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el proyecto que justifique y fundamente la utilidad social del donativo.

Sector Hacienda y Crédito Público
(Anexo 4 - 32 auditorías)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Auditoría: 07-0-06100-07-1127

Auditoría a los Ingresos, Manejo y Destino de los Recursos Provenientes del Proceso de Retiros Derivados del Sistema de Pensiones Correspondiente a la Subcuenta de Vivienda 97

Objetivo: Fiscalizar la legalidad, gestión y destino de los ingresos provenientes de las transferencias de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación correspondientes a la Subcuenta de Vivienda 97, de conformidad con las Circulares CONSAR 31-5, CONSAR 31-6, CONSAR 31-7 y el Manual de Procedimientos Transaccionales de Retiro.

Muestra Auditada: 1,962,848.0 miles de pesos

Dictamen: La TESOFE recibió y aplicó los recursos como parte del global percibido por el Gobierno Federal correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales fueron clasificados como aprovechamientos; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los recursos son patrimonio de los trabajadores.

Sólo existen normas generales para ingresar los recursos a la TESOFE y clasificarlos como aprovechamientos, pero no existen normas específicas para su manejo, control y destino, y no contó con instrumentos que le permitan identificar y acumular los recursos en una cuenta específica para que, en su caso, se utilicen para el cumplimiento de las reclamaciones, demandas y consecuentes sentencias firmes que obtengan los trabajadores.

Falta coordinación entre la TESOFE, el INFONAVIT y el SAT para dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas para devolver los recursos provenientes de la subcuenta de vivienda 97, propiedad de los trabajadores conforme a la jurisprudencia 33/98 provocándoles dificultades para obtener la devolución de sus aportaciones.

Consecuencias sociales: Los trabajadores enfrentan dificultades para obtener la devolución de sus aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda, ya que el INFONAVIT argumenta haber transferido los recursos a la TESOFE; ésta alega que no puede identificar los importes individuales correspondientes a las subcuentas de vivienda de trabajadores

específicos de los que se componen los recursos enterados por el INFONAVIT y que además requiere que el SAT emita la orden de pago correspondiente; y el SAT manifiesta que es el INFONAVIT quien debe emitir la orden de pago a la TESOFE, situación que alarga el otorgamiento del derecho del trabajador a recibir los recursos que acumuló durante su vida laboral en la subcuenta de vivienda.

La falta de coordinación entre la TESOFE, el SAT y el INFONAVIT ha provocado dilación en la entrega de los recursos aportados en la subcuenta de vivienda 97 a que tienen derecho los trabajadores.

Auditoría: 07-0-06100-07-0578

Auditoría de Desempeño a las Acciones de Capitalización del Sector Rural

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la capitalización del sector rural, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas.

Muestra Auditada: 476,261.2 miles de pesos

Dictamen: El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) no estableció en sus programas de mediano y corto plazo, la cuantificación de las metas programadas; la definición de estrategias y prioridades; la organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación de tareas, ni las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras.

El FOCIR no estableció metas programadas en los cuatro indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y para el Servicio de Cobertura, por lo que no fue posible medir su cumplimiento. Además no integró correctamente los resultados de dos de los cinco indicadores reportados en la Cuenta Pública de 2007, ni explicó las variaciones de dichos resultados.

El FOCIR no sustentó con evidencia suficiente su población objetivo, y los parámetros utilizados para establecer el límite máximo de su costo de operación.

En 2007 el FOCIR no registró en su contabilidad los 212,250.0 miles de pesos de recursos fiscales identificados como presupuesto comprometido para inversión financiera en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2007, y que fueron reportados como devengados en la Cuenta Pública. Asimismo, los 5,346.8 miles de pesos de gasto corriente con recursos fiscales, se identificaron como disponibilidades, sin localizarse en el estado de cuenta bancario.

El FOCIR realizó en 2008 el registro contable de los 53,250.0 miles de pesos que reportó en la Cuenta Pública de 2007 para el servicio de cobertura, sin contar con el contrato que formalizara la operación. El FOCIR no integró el monto de las recuperaciones de su cartera, por tipo de cartera y vía de recuperación.

Asimismo, la cartera de capital de riesgo registró una minusvalía del 47.2% (197,905.0 miles de pesos) respecto de los 418,991.0 miles de pesos que otorgó originalmente, y la cartera de crédito reportó un índice de morosidad de 92.3%.

El FOCIR no estableció procedimientos para operar como entidad de segundo piso, en el marco de su participación en la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (CMIC), y en el Fondo de Inversiones de Capital en Agronegocios (FICA); además, no modificó el Contrato de Fideicomiso para la Constitución del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. En 2007 el FOCIR dejó de operar como entidad de primer piso, por lo que no apoyó proyectos y empresas; no generó empleos; no benefició a productores; no promovió la capitalización del sector rural, y no incentivó la inversión de largo plazo en el sector agroindustrial.

La participación del FOCIR como entidad de segundo piso en el FICA se limitó en 2007 a ser fideicomitente adherente y empresa administradora; y en la CMIC, a ser accionista y administrador de la cartera que le traspasó en 2006-2007.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 390,299.7 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-06-1079

Auditoría a la Contratación del Préstamo para la Consolidación del Sistema Financiero, Contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que las acciones realizadas en el proceso de contratación, ejercicio y aplicación del Préstamo para la Consolidación del Sistema Financiero, contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo, se ajustaron a la legislación y normativa.

Universo Seleccionado: 6,500,460.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 6,500,460.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera, en términos generales y respecto de la operación antes señalada, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la contratación y destino de los recursos del préstamo contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo por 600,000.0 miles de dólares como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: los términos pactados objeto del Contrato de Préstamo núm. 1658/OC-ME fueron sobre acciones ejecutadas con anterioridad; el Comité de Crédito Externo no analizó la programación, el presupuesto ni el ejercicio del préstamo; no se ha creado la Comisión Asesora de Financiamiento de Créditos Externos del Sector Público y los recursos del préstamo no se destinaron a proyectos de inversión o a actividades productivas acordes con

las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo Federal, en cumplimiento del artículo 4, fracción V, de la Ley General de Deuda Pública.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 6,500,460.0 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-02-0385

Costo Financiero de la Deuda Interna del Gobierno Federal

Objetivo: Fiscalizar los recursos públicos aplicados en el pago de intereses, comisiones y gastos efectuados; su integración y autorización; comprobar que éstos se calcularon de acuerdo con lo estipulado en los contratos e instrumentos de deuda emitidos y verificar el cumplimiento del registro contable y su presentación en la Cuenta Pública conforme a la normativa.

Muestra Auditada: 36,609,667.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables al pago de los intereses, comisiones y demás gastos e impuestos, inherentes a la colocación de Valores Gubernamentales; créditos convenidos con la Banca de Fomento y Desarrollo, del Sistema para el Ahorro y el Retiro (SAR) y de Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que no proporcionó el registro contable, así como estados de cuenta bancarios, mayores auxiliares y balanza de comprobación, de los intereses compensados por 17,633,556.4 miles de pesos, por otra parte la entidad fiscalizada carece de un procedimiento autorizado y registrado por la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP, que sustente la actividad que realiza la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, para la selección e integración de dichos intereses compensados, asimismo el procedimiento núm. 210-01-12 "Elaboración de los documentos que derivan de la Emisión de Valores Gubernamentales" del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, no se encuentra actualizado.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 17,633,556.4 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-02-0261

Cuentas de Balance-Activo "Bancos"

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los fondos federales, comprobar que las operaciones se concentraron y registraron en las cuentas de Bancos, se validaron y conciliaron, así como verificar el cumplimiento del registro contable y su presentación en la Cuenta Pública conforme a la normativa.

Muestra Auditada: 837,807,566.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro de las operaciones efectuadas en la cuenta de "Bancos" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: las cuentas que utiliza la TESOFE para el registro de los recursos financieros, al 31 de diciembre tienen saldos pendientes de conciliar por 148,715,790.2 miles de pesos, se integran de las "Operaciones de egresos pendientes de aplicación definitiva" por 28,009,913.5 miles de pesos, "Movilización de fondos" por 91,418,060.8 miles de pesos, "Operaciones de ingresos pendientes de aplicación definitiva" por 29,287,815.9 miles de pesos; asimismo, en los meses de junio y julio por operaciones de devoluciones de impuestos a los contribuyentes afectó indebidamente por 32,737,315.6 miles de pesos la cuenta de "Movilización de fondos" (cuenta complementaria de bancos); en la cuenta de "Bancos" registró ajustes en diciembre de 2007 que dejaron sin efecto 93,230,514.8 miles de pesos de ingresos que fueron captados por la entidad en ese mes y operaciones por 275,372.8 miles de pesos sin presentar documentación soporte que disminuyeron el saldo de bancos; por instrucciones de la Unidad de Política y Control Presupuestario, en diciembre de 2007 se constituyeron depósitos a favor de terceros por 114,539,686.0 miles de pesos, de los cuales 107,127,280.5 miles de pesos fueron el 21 de diciembre de 2007, de estos últimos 23,149,534.0 miles de pesos se destinaron para el cumplimiento de los programas presupuestarios autorizados para el ejercicio fiscal 2007 y 83,977,746.5 miles de pesos para varios fondos y fideicomisos, con objeto de asignar los ingresos excedentes del ejercicio de 2007 y ejercerlos en ejercicios fiscales posteriores, sin que se sometieran para autorización de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 242,252,690.9 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-02-0517

FONDEN-Procedimientos Generales para la Autorización, Radicación y Ejercicio de los Recursos Federales-Tabasco y Chiapas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los mecanismos de control interno y procedimientos para la autorización, radicación, ejercicio y rendición de cuentas del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales, y su aplicación en los estados de Tabasco y Chiapas.

Muestra Auditada: 784,981.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito público y los gobiernos de los estados de Tabasco y Chiapas cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a los procedimientos para la autorización, radicación, ejercicio y rendición de cuentas del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales, y su aplicación en los estados de Tabasco y Chiapas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y que se refieren principalmente a que no se cumplió con el calendario de aportaciones por parte del Gobierno del Estado de Tabasco; los recursos por concepto de anticipos no fueron ejercidos de manera inmediata y las obras no fueron iniciadas a la brevedad para la atención de reconstrucción de la infraestructura dañada; se adjudicaron de manera directa contratos de obra que no aseguran los criterios de economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado; el Fideicomiso Fonden estatal de Tabasco no se ajustó al calendario de ejecución y pagos de obras; no se proporcionaron las actas de entrega-recepción de algunas obras; y se determinaron retrasos en la ejecución de los trabajos, sin que se hayan aplicado las penas convencionales.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,519.2 miles de pesos

Consecuencias Sociales

El gobierno del estado de Tabasco no inició de manera inmediata las obras programadas de los sectores hidráulico, educativo y salud, en la atención de la población afectada por las lluvias e inundaciones atípicas que se presentaron del 23 al 27 de octubre de 2007.

Auditoría: 07-0-06100-02-0314

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos recibidos; verificar que en la determinación de su monto, aplicación, contabilización y registro en la Cuenta Pública se cumplió con la normativa aplicable.

Universo Seleccionado: 19,546,900.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 19,546,900.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que: se presume un probable impacto negativo en el patrimonio del FARP, estimado en 13,104.3 miles de pesos por

concepto de los rendimientos financieros sobre los recursos del FARP que permanecieron depositados en la cuenta general de la TESOFE en el Banco de México, la entidad fiscalizada señaló que la constitución del FARP se hizo mediante un "Acto Jurídico de Mandato Análogo", figura no prevista en la Administración Pública Federal.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 13,104.3 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-02-0424

Operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del citado fondo, para verificar que se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Universo Seleccionado: 8,710,933.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 5,504,129.1 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con donde destacan los siguientes: se determinó que las facultades que le son conferidas a la Unidad de Política y Control Presupuestario para la operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, consideran un margen de discrecionalidad muy amplio, lo que genera opacidad en el ejercicio de los recursos de la Federación que se operan al amparo de los esquemas específicos, además de que se desvían del objetivo del programa; se transfirió parte del remanente de recursos presupuestales del ejercicio de 2007, por 1,462,543.3 miles de pesos, al Fideicomiso Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, con la finalidad de evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación al final del ejercicio de 2007; se autorizaron indebidamente erogaciones por un importe total de 3,460,802.9 miles de pesos, para liquidar al personal de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con objeto de renovar sus plantillas de personal, lo cual no implicó la cancelación de plazas; se efectuaron erogaciones por 34,587.6 miles de pesos por concepto de pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de servidores públicos que concluyeron su relación laboral en los ejercicios de 2004 y 2005, por lo que no correspondía haber efectuado esos pagos con cargo al citado fideicomiso; al cierre de la auditoría (4 de noviembre de 2008), cuatro dependencias y entidades mantenían recursos por un total de 16,377.6 miles de pesos, los cuales no habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación; se realizaron erogaciones por un monto total de 3,494.0 miles de pesos, por concepto de Compensación Equivalente al Seguro Colectivo de Retiro a los servidores públicos que concluyeron la prestación de servicios en los ejercicios de 2003 y

2005, sin que se justificara que con cargo al Fideicomiso Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral se hubieran efectuado dichos pagos; seis dependencias y entidades efectuaron pagos en exceso por un importe total de 3,271.1 miles de pesos, al presentar errores en el cálculo de la compensación; el SAE con cargo a los recursos del Fideicomiso Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral erogó un importe total de 32,759.9 miles de pesos por concepto de pago de liquidaciones, sin contar con la obligatoriedad de pago; ya que en todos los casos la conclusión de la relación laboral se debió al mutuo consentimiento de las partes, aunado a que dentro de dichas liquidaciones se incluyen las correspondientes a 7 servidores públicos que causaron baja en el ejercicio de 2006 con motivo del cambio de administración del Ejecutivo Federal; las dependencias y entidades no restituyen los recursos conforme a lo establecido en las Disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal aplicables.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,553,033.5 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Auditoría: 07-0-06100-02-0313

Proyectos de Inversión Desarrollados por Particulares

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera y el proceso de autorización, formalización, asignación de recursos y control de la ejecución de los "Proyectos de Prestación de Servicios" ; verificar que los compromisos asumidos y los recursos públicos destinados a los mismos, se ejercieron, contabilizaron y registraron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable.

Universo Seleccionado: 159,182,756.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 54,713,968.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables al proceso de aprobación y autorización de los proyectos de prestación de servicios y, los gastos, ejercidos por la prestación de servicios fueron pagados, de conformidad con los contratos de los PPS seleccionados para su revisión, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que: la autorización y los compromisos a largo plazo de los proyectos PPS se asumen fuera del ámbito de autorización de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, únicamente se requiere la autorización de la

SHCP y cumplir con los requisitos establecidos por ésta junto con la SFP, lo que, de no controlarse adecuadamente, a futuro limitará la posibilidad de atender otras prioridades de gasto en un determinado sector; ya que al cierre de 2007 existían 10 PPS autorizados, en 7 proyectos, según contratos se habían suscrito compromisos de pago de largo plazo por 11,135,057.0 miles de pesos y en los 3 restantes, según sus análisis costo y beneficio, se habían considerado compromisos de pago a largo plazo factibles de asumir por 43,578,911.0 miles de pesos; además, en los lineamientos para la elaboración de los Proyectos de Referencia no se incluyeron algunos elementos justificativos importantes para evaluar su formulación y su costo, como pudiera ser un mayor detalle de los diversos elementos que inciden en el largo plazo en su costo, lo que dificulta el realizar un análisis comparativo entre éstos y los PPS correspondientes, a fin de tener mayores elementos de certeza que contribuyan a constatar que se tomó la decisión más conveniente y con ello, las mejores condiciones para el Estado, a partir de las estimaciones realizadas.

Auditoría: 07-0-06100-02-0401

Recursos Fiscales Excedentes

Objetivo: Fiscalizar la determinación y distribución de los recursos establecidos en el artículo 19, fracciones I, IV y V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

Universo Seleccionado: 46,653,644.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 46,653,644.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la determinación, distribución, registro y presentación en la Cuenta Pública de los excedentes de ingresos, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que no proporcionó la documentación para comprobar las solicitudes presentadas por dependencias y entidades afectadas por desastres naturales por 660,000.0 miles de pesos que informó como comprometido no pagado, en incumplimiento de los artículos 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, dedujo 5,275,308.2 miles de pesos con fundamento en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, e informó que fue para compensar el deterioro en el balance presupuestario con motivo de los pagos de adeudos fiscales realizados por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, respecto de los cuales la Auditoría Superior de la Federación comprobó que no son compensaciones y no encuadran en el mencionado artículo 11, al no presentarse la condición de créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, y de esa cantidad, 4,487,300.0 miles de pesos, el 85.1%, ya estaban previstos en el gasto de las entidades y sólo 788,008.2 miles de pesos se erogaron con cargo a las disponibilidades de las mismas; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no comprobó el manejo, destino y aplicación de los recursos, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo,

y 19, fracciones I, IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así como asignó 2,274,500.0 miles de pesos a la partida 7400 "Provisiones para Erogaciones Especiales" en vez de aplicarlos para los programas y proyectos de inversión en infraestructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, en incumplimiento del artículo 19, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,152,759.8 miles de pesos

Auditoría: 07-0-06100-02-0421

Gestión Financiera del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas"

Muestra Auditada: 75,392,154.9 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado Ramo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que: al cierre del ejercicio presupuestal de 2007, la UPCP autorizó afectaciones presupuestarias con objeto de distribuir remanentes presupuestales e ingresos excedentes por un importe total de 203,658,706.6 miles de pesos, de los cuales se observó que 102,435,321.3 miles de pesos, fueron transferidos a diversas Dependencias, Entidades, Fondos, Fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la TESOFE, para cubrir presiones de gasto, no obstante por lo avanzado del ejercicio no era posible que devengaran antes del 31 de diciembre de 2007, esta situación evidencia que se autorizó la reasignación del gasto, a efecto de que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor, el cual considerando lo observado representaría un 5.3% del total del gasto público neto del ejercicio de 2007.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 27,000.0 miles de pesos

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 4,846,146.4 miles de pesos

Banco Nacional de Comercio Exterior

Auditoría: 07-2-06G0N-07-0110

Auditoría a las Acciones de Financiamiento y Promoción de las Empresas Mexicanas de Comercio Exterior

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el otorgamiento de créditos y el acceso a otros servicios financieros y de promoción para las empresas mexicanas de comercio exterior, así como verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar su participación en los mercados globales y fortalecer su competitividad.

Universo Seleccionado: 1,444,170.7 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,444,170.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco Nacional de Comercio Exterior avanzó en el cumplimiento de su misión de incrementar la participación de las empresas mexicanas de comercio exterior en los mercados globales, por medio de financiamiento y otros servicios financieros y promocionales, ya que en 2007 cumplió en 92.9% la meta de generar exportaciones como resultado de sus servicios de promoción otorgados a las empresas mexicanas de comercio exterior; las exportaciones generadas por esas empresas crecieron 7.1% en promedio anual en el periodo de 2003 a 2007. Asimismo, otorgó crédito y otros servicios financieros a 3,344 empresas, cantidad superior en 2,545 empresas en comparación con el promedio anual del periodo 2003 a 2006; y registró un índice de capitalización de 17.5%, resultado superior en 9.5 puntos porcentuales respecto del 8.0% establecido por la SHCP como el estándar mínimo requerido.

De los resultados con observación destacan los siguientes: en 2007 BANCOMEXT no realizó estudios para cuantificar el universo de las empresas mexicanas de comercio exterior a beneficiar con apoyos financieros; no elaboró indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo estratégico de impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas de comercio exterior, y fortalecer su competitividad; no estableció metas sobre el número y tamaño de las empresas mexicanas de comercio exterior a beneficiar con apoyos financieros por Entidades Federativas y actividad económica, el monto de los apoyos financieros por tipo, los servicios de promoción, la captación de recursos, y las acciones de financiamiento y asistencia a empresas u organizaciones de pueblos o comunidades indígenas; tampoco realizó las gestiones para eliminar de su Ley Orgánica las acciones de promoción, que desde el 13 de junio de 2007 son responsabilidad del Fideicomiso ProMéxico; no actualizó los Perfiles de los Puestos de sus servidores públicos de mando; no estableció parámetros para valorar la calidad de los servicios de financiamiento; y no evaluó la satisfacción de sus clientes.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

La entidad fiscalizada no elaboró los estudios de corto, mediano o largo plazos para cuantificar el universo de las empresas mexicanas de comercio exterior que requieren de financiamiento, clasificadas por tamaño y sectores de la actividad económica; ni realizó los

estudios relacionados con el impacto de los apoyos financieros otorgados sobre la competitividad de las empresas mexicanas de comercio exterior; en su Plan Estratégico tampoco estableció indicadores ni metas sobre el financiamiento, el número de empresas mexicanas de comercio exterior a beneficiar con apoyos financieros, y la recuperación de los créditos, tampoco estableció metas para los indicadores financieros de morosidad, rentabilidad económica, margen de interés neto, eficiencia operativa y liquidez.

Auditoría: 07-2-06G0N-02-0202

Aplicación a la Estimación de Riesgos Crediticios

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el saldo registrado en "Riesgos Crediticios", correspondió a la reserva requerida por el tipo de riesgo; que la metodología aplicada para su determinación y aplicación esté debidamente autorizada y justificada, y que el registro contable se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 3,634,436.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a la falta de garantías que respalden el adeudo o recuperación de un acreditado por 12,851.6 miles de pesos; incumplimientos contractuales de 6 acreditados por un importe 38,858.8 miles de pesos; retraso en el inicio de acciones legales de 5 acreditados por 24,899.5 miles de pesos; falta de seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales por reestructura de un acreditado por 24,450.0 miles de pesos; de un acreditado por 1,310,230.7 miles de pesos no se evidenció con documentación justificativa y comprobatoria, las acciones de recuperación; de 6 acreditados, por 25,664.7 miles de pesos, con sentencias favorables a los intereses de la entidad, no se evidenciaron las acciones legales de cobro; falta de definición del tratamiento que se daría a los pagos pendientes de la SHCP al Bancomext por 82,850.2 miles de pesos y falta de aclaración de la diferencia entre la información de la entidad por 54,706.2 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,574,511.7 miles de pesos

Auditoría: 07-2-06G0N-02-0195

Cartera de Crédito Vencida

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que en la recuperación de los adeudos, se llevaron a cabo las acciones administrativas y legales correspondientes; que las

garantías respalden el adeudo y estén constituidas a favor de la entidad; que las aplicaciones a la reserva se encuentren justificadas y aprobadas por las instancias facultadas y que su registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 3,296,679.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración, registro y control de la cartera de crédito vencida, respecto de las operaciones examinadas, excepto por la falta de documentación justificativa y comprobatoria por concepto de las reestructuras por 514,000.0 miles de pesos, autorizadas a acreditados de cartera vencida; falta de supervisión de acciones judiciales realizadas por los abogados externos contratados para la atención de los asuntos de dos acreditados por 136,081.4 miles de pesos; carencia de seguimiento de las gestiones legales efectuadas por un abogado externo de un acreditado por 12,107.0 miles de pesos a efecto de continuar con la ejecución de sentencia; falta de entrega de documentación para entablar los juicios de 4 ex empleados por 3,826.2 miles de pesos, y falta de continuidad de un juicio hipotecario iniciado en 2004 de un acreditado por 2,146.4 miles de pesos.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 154,161.0 miles de pesos

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Auditoría: 07-2-06G1C-02-1092

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso para comprobar que los recursos y rendimientos se obtuvieron, distribuyeron, aplicaron, registraron en la contabilidad y presentaron en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Muestra Auditada: 23,298,842.1 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la obtención, distribución, aplicación y registro de los ingresos del Fideicomiso para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emitió las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en incumplimiento del artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y del contrato de fideicomiso de inversión y administración número 2113, y entregó directamente a las Entidades Federativas 5,034,536.0 miles de pesos, bajo un esquema que denominó Apoyo Financiero Transitorio Recuperable, previo a que Pemex Exploración y Producción presentara los pagos provisionales del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo, en incumplimiento del artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 24.2 miles de pesos

Auditoría: 07-2-06G1C-02-0284

Fondo de Inversión en Infraestructura

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos presupuestales transferidos al fondo; su propiedad, integración y autorización; comprobar la aplicación a los fines previstos, y verificar el cumplimiento del registro contable y su presentación en la Cuenta Pública conforme a la normativa.

Muestra Auditada: 31,507,844.1 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos presupuestales transferidos al fondo; su propiedad, integración y autorización; así como a la comprobación de la aplicación de los recursos a los fines previstos y su registro contable y presentación en la Cuenta Pública respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: contó con disponibilidades de 27,541,323.9 miles de pesos para apoyar los proyectos y estudios de infraestructura, no obstante sólo aplicó 4,428,840.0 miles de pesos a los proyectos y estudios autorizados, cifra que representó el 16.1% de las disponibilidades del FINFRA; no concilia los recursos transferidos a los promotores de los proyectos y estudios, para acreditar que fueron correctamente correspondidos; proporcionó incompletos los estados de cuenta del contrato de reporto, 507 en "dólares" debido a que no presentan el concentrado global de la inversión lo que imposibilitó la identificación de 53,590.0 miles de pesos provenientes del Fideicomiso del Ferrocarril Suburbano; aportó 19,787.2 miles de pesos al fondo de capital de riesgo FONDELEC Latin American Clean Energy Services Found (Ontario), sin que exista justificación de los apoyos otorgados, no se precisan los beneficios, no se define el mecanismo de rendición de cuentas y no tiene congruencia con el Programa Nacional de Infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y no se contrataron los servicios de la firma de abogados, para la recuperación de 238,000.0 miles de pesos del sobrante del proyecto "Libramiento de Matehuala".

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 53,590.0 miles de pesos

Auditoría: 07-2-06G1C-02-0391

Gastos para la Operación de Tramos Carreteros

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del rubro de Gastos para la Operación de los Tramos Carreteros México-Querétaro, México-Puebla y Chamapa-Lechería y verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en el ejercicio y comprobación del gasto, en la contratación de los bienes, su recepción, pago y registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas.

Muestra Auditada: 546,140.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a los Gastos para la Operación de Tramos Carreteros respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que el presupuesto de operación no se autorizó oportunamente por el Comité Técnico del FARAC; en los gastos de aseguramiento de bienes patrimoniales se incluyó un inmueble con una suma asegurada de 500,000.0 miles de pesos, correspondiente a BANOBRAS con cargo al presupuesto del FARAC; en una adjudicación directa no se formalizó conforme a la normativa el dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de excepción a la licitación pública y se realizaron contrataciones en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 443.1 miles de pesos

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Auditoría: 07-1-06G3A-07-0574

Auditoría de Desempeño a las Acciones para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas en la promoción, asesoramiento, protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, así como en el arbitraje de sus diferencias frente a las instituciones financieras.

Muestra Auditada: 213,000.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación donde destacan los siguientes:

La Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no elaboró su programa de mediano plazo; reportó en la Cuenta Pública las asistencias técnicas y jurídicas "recibidas" en lugar de "atendidas", y con base en cifras preliminares; no realizó acciones para establecer, ejecutar y evaluar el Servicio Profesional de Carrera, y no contó con un sistema programático y presupuestal que permitiera identificar los costos de operación, por empleado y por resultados, para establecer un estándar en los servicios de promoción, asesoramiento, protección, defensa y arbitraje, que ofrece a los usuarios de servicios financieros.

De las 399,399 asistencias técnicas y jurídicas recibidas en 2007, en el 7.7% (30,593) el usuario presentó una reclamación formal por escrito. De acuerdo con los resultados de la Octava Encuesta Nacional aplicada por la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el 79.0% de los usuarios encuestados que acudió en 2007 a la comisión por algún servicio, no creía que su caso se solucionara.

De las 30,593 reclamaciones, el 93.7% (28,671) transitaron al proceso conciliatorio: 30.7% (8,811) fueron conciliadas con la intermediación de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 20.1% (5,760) concluyeron por arreglo entre las partes, y 49.2% (14,100) no fueron conciliadas. Asimismo, la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no acreditó los juicios arbitrales recibidos en 2007, ni los laudos emitidos en el año.

Del 100.0% de las defensorías concluidas a 2007 (637), el 92.5% (596) fueron con sentencia favorable al usuario, y en el 7.5% (41) el usuario deberá pagar las costas por la pérdida del juicio. Las modificaciones y sugerencias propuestas por la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a los 140 contratos de adhesión revisados en 2007, y que utilizaron las instituciones financieras para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios con los usuarios, carecieron de la obligatoriedad en su atención por parte de las instituciones, ya que la comisión no cuenta con las atribuciones de realizar peritajes y consultas respecto de la calidad con que se ofrecen los productos o servicios financieros, así como de verificar, vigilar e inspeccionar el debido cumplimiento de la ley por parte de las instituciones.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Auditoría: 07-0-06A00-02-0428

Censos Agropecuarios

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para el levantamiento del citado censo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 790,902.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación, considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el extinto Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática cumplió con las disposiciones normativas aplicables para los Censos Agropecuarios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y que se refieren principalmente a que se pagaron remuneraciones por 18,961.5 miles de pesos a 1,708 personas contratados como entrevistadores, no obstante, no se encontró evidencia del trabajo desarrollado; se determinó que se efectuó una compra innecesaria de 1,875 equipos de cómputo PDA's por 13,007.2 miles de pesos de los cuales no se comprobó la necesidad de su adquisición; se adquirieron 14,878 equipos de cómputo con características técnicas que no eran necesarias para el levantamiento de entrevistas del Censo Agropecuario, lo que implicó un gasto mayor por 25,780.3 miles de pesos, en relación con equipos de similares características; se realizó la compra de 1,500 equipos de cómputo PDA's por 10,506.4 miles de pesos, sin que se justificara la necesidad de su adquisición, así como el pago de remuneraciones a 26 personas por 573.5 miles de pesos, las cuales fueron contratadas como auditores para realizar trabajos de acompañamiento en el censo agropecuario, sin que estuviera comprendida la citada actividad.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 68,829.1 miles de pesos

Nacional Financiera, S.N.C.

Auditoría: 07-2-06HIU-06-0686

Auditoría del Programa de Cadenas Productivas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se incorporaron al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. de conformidad con lo señalado en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y demás normativa.

Muestra Auditada: 7,172,509.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Secretaría de la Función Pública no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación y que se refieren, principalmente, al registro de la totalidad de las cuentas por pagar de las dependencias y entidades en el Programa de Cadenas

productivas, a los plazos de registro de las cuentas por pagar, y en la verificación por parte de los Órganos Internos de Control del cumplimiento de las dependencias y entidades de las Disposiciones Generales.

Auditoría: 07-2-06HIU-02-0247

Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA)

Objetivo: Fiscalizar que los ingresos del fideicomiso derivados de las contraprestaciones y la aplicación de los recursos se canalizaron conforme a su programa anual, y se registraron en la contabilidad, de acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, verificar el cumplimiento de objetivos y metas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, NAFIN, S.N.C. en su carácter de fiduciaria del FACLA, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los recursos del fideicomiso respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no determinó el IVA de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera, por 545,535.9 miles de pesos, en consecuencia, la TESOFE traspasó indebidamente el IVA al FACLA. Asimismo, NAFIN no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de las retenciones y entero del Impuesto sobre la Renta por los intereses ganados de los recursos invertidos del fideicomiso.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 141,454.4 miles de pesos

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 548,589.0 miles de pesos

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Auditoría: 07-1-06HKA-06-0739

Auditoría del Proceso de Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.

Muestra Auditada: 578,920.6 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el avance del proceso para concluir la disolución y liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., así como verificar que se ajustó a la legislación y normativa.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cumplió, razonablemente, con las disposiciones normativas aplicables en la conclusión del proceso de liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, excepto por las salvedades que se señalan en los resultados con observación, de las cuales destacan: el SAE no entregó inmuebles vendidos dentro del plazo señalado en la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; en 5 inmuebles el participante ganador no liquidó la totalidad del precio pactado; se protocolizó con 168 días de retraso el contrato de cesión de derechos para la enajenación onerosa de derechos dudosos de cobro; el Padrón General de Bienes Inmuebles no se encontraba actualizado al 31 de diciembre de 2007; y los importes reportados en el libro de gobierno de los juicios laborales y mercantiles no coinciden con las prestaciones de las demandas. El cierre contable del BNCI se realizó con cifras valor al 31 de agosto de 2008, dentro del plazo establecido en el último acuerdo de la CID del 15 de abril de 2008, el cual fijó el 31 de diciembre de 2008 como fecha límite para concluir la liquidación del BNCI.

Auditoría: 07-1-06HKA-02-0210

Administración del Fideicomiso de Recuperación de Cartera (FIDERCA)

Muestra Auditada: 6,987,718.6 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Mandato del Fideicomiso de Recuperación de Cartera, respecto a la administración encargada al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; verificar la enajenación de cartera; que el registro contable y sus operaciones derivadas se apegaron a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro, resguardo, venta y administración de la cartera del FIDERCA, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a la falta de supervisión de tres acreditados por 233,530.9 miles de pesos en la realización de los actos procesales necesarios para la protección y defensa de los intereses de FIDERCA, toda vez que la entidad fiscalizada no evidenció gestiones legales durante 2007, por parte de los abogados externos, además, que dichos asuntos se encontraban asignados a abogados sin contrato vigente en 2007; falta de actualización del Sistema Integral Jurídico (SIJSAE) respecto de 12 acreditados por 345,887.6 miles de pesos, de los cuales se contaba con oficios de autorización de reconocimiento de quebrantos y dictámenes de irrecuperabilidad; falta de actualización de las cifras reportadas en la subcuenta "Valores y Bienes en Administración" por 16,411,845.7 miles de pesos; falta de actualización del Sistema Integral Jurídico (SIJSAE) por los abogados externos conforme los contratos.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 579,418.5 miles de pesos

Auditoría: 07-1-06HKA-02-0319

Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL

Muestra Auditada: 1,358,719.7 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL y verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en la comprobación de la incorporación de los beneficiarios al sistema de pensiones, en la determinación del monto de las pensiones y prestaciones, así como en su autorización, pago y registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Banco Nacional de Crédito Rural, en liquidación, y Nacional Financiera, S.N.C., cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al pago de pensiones y jubilaciones, de los beneficios al fallecimiento y de la atención médica, quirúrgica y farmacéutica con cargo en el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL, respecto de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones, entre las que destacan las siguientes: tres expedientes administrativos revisados no cuentan con documentos justificativos y comprobatorios para recibir una pensión vitalicia de retiro; en 106 contratos de adquisiciones de medicamentos y materiales de curación y servicios hospitalarios se convinieron ampliaciones que rebasaron el 20.0% del monto del contrato original, ya que se concedieron ampliaciones de entre 21.2% y 613.2%; no se solicitaron las fianzas de cumplimiento a 1,549 empresas complementarias que prestaron servicios médicos técnicos; además, en un contrato abierto la fianza se estableció por el monto mínimo del contrato y no por el máximo.

Servicio de Administración Tributaria

Auditoría: 07-0-06E00-07-1131

Auditoría a los Ingresos, Manejo y Destino de los Recursos Provenientes del Proceso de Retiros Derivados del Sistema de Pensiones Correspondiente a la Subcuenta de Vivienda 97.

Muestra Auditada: 1,962,848.0 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la legalidad y gestión de los ingresos provenientes de las transferencias de recursos correspondientes a la Subcuenta de Vivienda 97, que recibe el Servicio de Administración Tributaria de la Tesorería de la Federación a través de la Metropolitana Sur, como cuentadante, mediante transferencias que se registran como remesas de cuentadantes para su registro y aplicación definitiva a la Ley de Ingresos de la Federación.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra de 1,962,848.0 miles de pesos y de las operaciones examinadas, el Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los Ingresos, Manejo y Destino de los Recursos Provenientes del Proceso de Retiros Derivados del Sistema de Pensiones correspondiente a

la Subcuenta de Vivienda 97, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la legalidad y gestión de los ingresos provenientes de las transferencia de recursos correspondientes a la Subcuenta de Vivienda 97, que recibe el Servicio de Administración Tributaria de la Tesorería de la Federación a través de la Metropolitana Sur, como cuentadante, mediante transferencias que se registran como remesas de cuentadantes para su registro y aplicación definitiva a la Ley de Ingresos de la Federación, no cumplió con prever condiciones adecuadas para el registro de los recursos derivados del Sistema de Pensiones correspondiente a la Subcuenta de Vivienda 97, que permitieran efectuar de manera expedita las devoluciones procedentes a los trabajadores, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes:

Los recursos provenientes del proceso de retiro derivados del sistema de pensiones correspondientes a la subcuenta de vivienda 97, fueron registrados por el SAT en la Ley de Ingresos de la Federación como aprovechamientos; no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los recursos son patrimonio de los trabajadores. No se han emitido normas específicas para el registro, manejo y control de los recursos provenientes del sistema de pensiones correspondiente a la subcuenta de vivienda 97. Falta coordinación entre la TESOFE, el INFONAVIT y el SAT para dar cumplimiento a las reclamaciones y ejecutorias emitidas para devolver los recursos provenientes de la subcuenta de vivienda 97, propiedad de los trabajadores conforme a la jurisprudencia 33/98, provocándoles dificultades para obtener la devolución de sus aportaciones, ya que el SAT sólo emite la orden de pago para devolver los recursos hasta que se promueve el incidente de inejecución en los juicios de amparo promovidos por los trabajadores, lo que alarga el otorgamiento del derecho del trabajador a recibir los recursos que acumuló durante su vida laboral en la subcuenta de vivienda.

Consecuencias Sociales

Los trabajadores enfrentan dificultades para obtener la devolución de las aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda, debido a que el SAT sólo emite la orden de pago hasta que se promueve el incidente de inejecución en el juicio de amparo. La falta de coordinación entre la TESOFE, el SAT y el INFONAVIT ha provocado dilación en la entrega de los recursos aportados en la subcuenta de vivienda 97 a que tienen derecho los trabajadores.

Auditoría: 07-0-06E00-07-0593

Auditoría de Desempeño a las Administraciones de Grandes Contribuyentes

Muestra Auditada: 494,528.6 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por las administraciones de Grandes Contribuyentes, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió razonablemente con las disposiciones

normativas aplicables, excepto por los resultados con observación donde destacan los siguientes:

El SAT no estableció la meta de recaudación de Grandes Contribuyentes, lo que no permitió evaluar su contribución en la consecución de la meta de recaudación total registrada por el SAT, y no construyó indicadores para medir la recaudación de Grandes Contribuyentes por sector económico, ni para generar reportes que permitan definir acciones de fiscalización a Grandes Contribuyentes.

El SAT no cumplió el 100.0% de la meta de realizar 9,544 actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes; sólo realizó 5,968 actos, menores en 37.5% (3,576 actos) que los previstos. El 87.7% (5,232 actos) no tuvo un impacto económico.

El SAT no estableció una meta de cobranza del monto determinado por actos de fiscalización, que en 2007 fue de 64,414.3 mdp, de los que el 68.1% (43,864.2 mdp) no se cobró durante ese ejercicio, lo que no permitió evaluar la eficiencia y eficacia en este proceso.

El SAT no incrementó la recaudación secundaria de Grandes Contribuyentes; en 2007 fue menor en 9.0% (3,297.3 mdp), respecto de los 36,452.6 mdp recaudados en 2006.

El SAT careció de criterios para determinar el tipo de acto de fiscalización que se aplicaría, así como de modelos de riesgo para prevenir actos que causen pérdidas al fisco en materia de Grandes Contribuyentes.

El SAT resolvió, fuera del plazo establecido por su normativa, 16,188 avisos de compensación a Grandes Contribuyentes; el 52.0% del total de 31,153 avisos.

El SAT utilizó una herramienta informática para controlar los juicios de nulidad de Grandes Contribuyentes, la cual no emitió reportes de las causas por las que en 2007 perdió el 38.6% (340) de los juicios fiscales, por lo que no contó con información sistematizada para promover modificaciones fiscales y cambios en la normativa.

El SAT no cumplió con la meta establecida para el indicador "Nivel de percepción de la tasa de elusión en Grandes Contribuyentes", de 30.0%, ya que el resultado de 36.7% mostró una mayor percepción de que los Grandes Contribuyentes eluden el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con lo que no aumentó la percepción de riesgo.

Auditoría: 07-0-06E00-07-0265

Sistema Plataforma para el Mejoramiento Tributario

Muestra Auditada: 71,318.2 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los Recursos Públicos Aplicados por el Servicio de Administración Tributaria en los diferentes programas que conforman el Proyecto Plataforma Informática y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y ejecución del Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observaciones donde destacan las diversas inconsistencias atribuibles al órgano desconcentrado, tales como: que de los 12 servicios que le entregaría People Soft a diciembre de 2007, sólo recibió 6, de los cuales 4 están liberados, 2 se recibieron pero no operan por los cambios en la legislación fiscal y los 6 restantes se concluirán por el órgano desconcentrado con recursos presupuestarios; el impacto por no haberse implementado todos los servicios es de aproximadamente 226,428.1 miles de pesos; asimismo, por la recepción parcial de los productos, la entidad fiscalizada contrató servicios de otro proveedor con un costo aproximado de 25,557.9 miles de pesos, no proporcionó la documentación comprobatoria relacionada con los pagos que realizó en 2007 sobre el soporte de los certificados de aceptación operacional que amparan cada uno de los conceptos señalados en las facturas que le presentó el proveedor, respecto a tiempo y materiales, por 61,715.4 miles de pesos, y otorgó un finiquito a la empresa Ultimus Inc. por la cantidad de 1,101.1 miles de pesos, que se consideran improcedentes y no cobro el total de la fianza a dicha empresa por la rescisión del contrato, por lo que se ocasionó un probable daño de 196.5 miles de pesos.

Auditoría: 07-0-06E00-06-1100

Auditoría a la Recaudación del Impuesto al Valor Agregado por el Servicio de Roaming Internacional

Muestra Auditada: 7,135,732.3 miles de pesos.

Objetivo: Fiscalizar la recaudación del Impuesto al Valor Agregado por el servicio de roaming internacional realizada por el Servicio de Administración Tributaria.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que los criterios contenidos en los lineamientos emitidos en los ejercicios fiscales de 2001 y 2005 sobre la aplicación de la tasa 0% en el pago del IVA por el servicio de telecomunicaciones de roaming internacional son contrarios al criterio de la actual administración del SAT que consideró que se han detectado que algunos operadores de telefonía celular han aplicado equivocadamente el artículo 29, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y calculado el gravamen a la tasa 0%, cuando deberían ser a la tasa 15%; por lo que ha demandado por considerarlas ilegales ante el TFJFA la nulidad de las resoluciones que confirmaron el criterio en el sentido de que los servicios internacionales de telecomunicaciones prestados a residentes en el extranjero de roaming internacional, relativos al tráfico de entrada y salida, están sujetos al pago del IVA a la tasa 0%. Dada esta circunstancia, y dado que los procesos están sub judice, es necesario esperar la resolución del citado tribunal para conocer los impactos de las resoluciones sobre la ilegalidad de algunos de los criterios contradictorios.

No obstante lo anterior, el SAT deberá realizar las gestiones necesarias para evaluar el momento oportuno en que habrá de allegarse la información precisa para identificar la

aplicación de las tasas previstas para el pago del IVA que utilizaron las 21 empresas de telecomunicaciones por los servicios de roaming internacional, y determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus facultades y principios de actuación a los que está sujeta, sólo puede actuar en relación con los acontecimientos correspondientes al ejercicio fiscal 2007, de conformidad con los principios de anualidad y posterioridad que la rigen, señalados en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en relación con la fracción IV del artículo 74 Constitucional, vigente durante el ejercicio fiscal revisado, en relación con el artículo Cuarto Transitorio, fracción II, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 7 de mayo de 2008, por lo que, de existir responsabilidades de los servidores públicos de los actos ocurridos en los ejercicios de 2001, 2005 y 2006, que se encuentran señalados en el presente informe, éstos deberán ser investigados y sancionados por la Secretaría de la Función Pública, quien tiene la responsabilidad de interpretar y hacer cumplir la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente hasta al 13 de marzo de 2002, y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente actualmente.

Auditoría: 07-0-06E00-02-0430

**Aportaciones para Modernización de Aduanas y Operación del Fideicomiso
Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las
Autoridades Aduaneras**

Muestra Auditada: 1,070,916.5 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera con el propósito de verificar que el presupuesto asignado en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Asimismo, verificar que los recursos aportados al citado fideicomiso se utilizan para el mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria y el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a las Aportaciones para Modernización de Aduanas y Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a la falta de Reglas de Operación claras y precisas para la operación y ejecución de los recursos asignados al citado fideicomiso, toda vez que se efectuaron erogaciones con cargo en éste para la ejecución de diversos proyectos como asesorías, fletes y mudanzas, renta de bodegas, y suministro de vales de gasolina, cuya vinculación no es factible precisar con los objetivos y fines del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, toda vez, que se determinó que corresponden a bienes y servicios utilizados para cubrir la

operación normal de las Aduanas, así como el pago de compensación anual para prestadores de servicios personales (honorarios).

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,965.9 miles de pesos.

Auditoría: 07-0-06E00-02-0237

Derecho de Trámite Aduanero

Muestra Auditada: 4,914,734.1 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, entero a la Tesorería de la Federación y presentación en la Cuenta Pública.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los ingresos del Derecho de Trámite Aduanero respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación y que se refieren principalmente a que el Servicio de Administración Tributaria reincidió en registrar indebidamente devoluciones de otras contribuciones en el rubro del Derecho de Trámite Aduanero por 158,167.1 miles de pesos; no desglosó el Impuesto al Valor Agregado en los pedimentos aduaneros por las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera.

Auditoría: 07-0-06E00-02-0273

Recuperación de Créditos Fiscales

Muestra Auditada: 4,497,224.7 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, entero a la Tesorería de la Federación y presentación en la Cuenta Pública. Y verificar el cumplimiento del acuerdo JG-SAT-IE-3-2007 emitido por el SAT.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los ingresos de los créditos fiscales recuperados y condonados durante 2007, excepto por los resultados que se refieren principalmente a que el Servicio de Administración Tributaria, en algunos casos, no supervisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo JG-SAT-IE-3-2007 emitido por el SAT, y autorizó indebidamente la condonación de créditos de 59,492.6 miles de pesos a un contribuyente estando en proceso penal y 12,833.6 miles de pesos por la actualización incorrecta en los importes de los créditos autorizados, entre otros; además,

se determinaron diferencias entre las cifras reportadas por las Administraciones Centrales de Cobro Persuasivo y Garantías y las seis Administraciones Locales de Recaudación revisadas.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 12,833.6 miles de pesos

Gobierno del Distrito Federal

Auditoría: 07-A-09000-02-1132

Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México

Muestra Auditada: 94,525.0 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso para comprobar que los recursos se obtuvieron, aplicaron, registraron en la contabilidad y presentaron en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al manejo y aplicación de recursos, y presentación de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: las secretarías de Finanzas y de Gobierno, como miembros del Comité Técnico autorizaron disponer de 41,000.0 miles de pesos del patrimonio del fideicomiso para la solución de un conflicto social incorporado al Proyecto de Infraestructura Social en la Zona Sur-Poniente del Valle de México, no obstante que correspondía al Gobierno del Distrito Federal aportar esa cantidad, por lo que el origen de la aportación fue federal y no estatal, en incumplimiento de la cláusula novena, inciso g, del Contrato de Fideicomiso; se comprobó la existencia de recursos no invertidos por la Secretaría de Finanzas, en tanto no los utilizó al cumplimiento de los fines del fideicomiso, en incumplimiento de las cláusulas tercera, inciso f, y cuarta, inciso d, del Contrato de Fideicomiso y del artículo 360 del Código Financiero del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el fiduciario dejó de obtener 11,313.9 miles de pesos de intereses al no contar con los recursos para su inversión, y la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente, no reportó ingresos por 151.3 miles de pesos y egresos por 167.2 miles de pesos de ese fideicomiso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su inclusión en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2007, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 52,313.9 miles de pesos

Gobierno del Estado de México
Auditoría: 07-A-15000-02-1133

Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México

Muestra Auditada: 328,194.3 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso para comprobar que los recursos se obtuvieron, aplicaron, registraron en la contabilidad y presentaron en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del Estado de México no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al manejo y aplicación de recursos, y presentación de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Metropolitano, como miembros del Comité Técnico, autorizaron disponer de 41,000.0 miles pesos del patrimonio del fideicomiso para la solución de un conflicto social incorporado al Proyecto de Infraestructura Social en la Zona Sur-Poniente del Valle de México, no obstante que correspondía al Gobierno del Estado de México aportar esa cantidad, por lo que el origen de la aportación fue federal y no estatal, en incumplimiento de la cláusula novena, inciso g, del Contrato de Fideicomiso; la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente, reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los 280,890.0 miles de pesos del proyecto Sistema de Transportes Articulados fueron ejercidos en 2007, sin embargo, no se aplicaron en ese año ya que se transfirieron a otro fideicomiso constituido para realizar dicho proyecto, en consecuencia se presentó como ejercido en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2007, en incumplimiento de los artículos 1º, párrafo segundo, y 10, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se comprobó la existencia de recursos no invertidos por la Secretaría de Finanzas, en tanto no los utilizó al cumplimiento de los fines del fideicomiso, en incumplimiento de las cláusulas tercera, inciso f, y cuarta, inciso d, del Contrato de Fideicomiso y del artículo 337 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el fiduciario dejó de obtener 1,624.2 miles de pesos de intereses al no contar con los recursos para su inversión; la Secretaría de Finanzas no reintegró un ahorro por 553.6 miles de pesos al fiduciario y, en su carácter de fideicomitente, no reportó ingresos por 151.3 miles de pesos y egresos por 167.2 miles de pesos de ese fideicomiso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su inclusión en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

D. Sector Defensa Nacional
(Anexo 5 - 1 auditoría)

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Auditoría: 07-1-07HXA-07-0620

Auditoría de Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Muestra Auditada: 1,136,914.3 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la prestación de los servicios de salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, en 2007 el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) no contó con los indicadores de desempeño que permitieran valorar el cumplimiento del objetivo relativo a conservar y preservar la salud de los derechohabientes, por este concepto se entiende no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad conforme lo establece la propia ley del instituto. Respecto de las disposiciones normativas aplicables, se determinó que en relación con las metas anuales, el ISSFAM, mediante los convenios subrogados con la SEDENA y la SEMAR, otorgó 6,218,137 servicios médicos, 2.8% más que los programados; y la asistencia médica correspondió con lo que dispone la Ley del ISSFAM y se proporcionó de acuerdo con las cláusulas de los convenios suscritos.

En la operación, los resultados de los indicadores de consulta mostraron que la SEDENA otorgó el 93.0% y la SEMAR el 79.0% de las consultas programadas, con lo cual la SEDENA atendió el valor estándar recomendado por la Secretaría de Salud (SS) de 80.0-100.0%; y los egresos por mejoría superaron al estándar nacional de 91.3%, ya que la SEDENA logró el 98.1% y la SEMAR el 91.9%. En materia del ejercicio de los recursos públicos, el ISSFAM ejerció en la actividad institucional revisada 1,136,914.3 miles de pesos que fueron reportados en la Cuenta Pública.

Se determinaron resultados con y que se refieren principalmente a que el ISSFAM estimó el número de 666,063 derechohabientes atendidos, con los cuales determinó en su Informe de Autoevaluación 2007 una cobertura de 77.9% respecto de los 854,600 personas que constituyeron su población objetivo, la estimación de los derechohabientes atendidos obedeció a que no cuenta con un sistema de información estadística sobre la atención de los derechohabientes; los indicadores de estancia hospitalaria revelaron que la ocupación fue menor que el estándar nacional de 70.0%, ya que en la SEDENA fue de 50% y en la SEMAR de 20%; el indicador de surtimiento completo de medicamentos fue de 52.0% en la SEDENA y de 86.0% en la SEMAR, menores que el valor óptimo de 95.0% establecido por la SS. Se detectó la carencia de un sistema de contabilidad que les permita al ISSFAM, la SEDENA y la SEMAR determinar los costos específicos del servicio médico integral y contar con elementos para la evaluación de los presupuestos con base en los objetivos, metas y unidades responsables; y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar que la totalidad del personal de las áreas de sanidad de la SEDENA y la SEMAR cumplan con los requisitos establecidos en el catálogo de puestos, ya que en 2007 se observó que 4.6% de 236 expedientes revisados de la SEDENA y 21.7% de 170 de la SEMAR no cumplieron con los requisitos de especialidad.

Consecuencias Sociales

El ISSFAM careció de los indicadores de desempeño para medir el cumplimiento del objetivo de la prestación de los servicios de salud mandado en su Ley, relativo a tratar de conservar y preservar la salud de las personas. Asimismo, no contó con los sistemas de información que permitieran determinar la cobertura poblacional y geográfica de los servicios proporcionados en la población con derecho a recibirlos.

E. SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN **(Anexo 6 - 4 auditorías)**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Auditoría 07-0-08100-02-0420

Plan Emergente de Frijol

Objetivo: El objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" del citado plan, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 272,410.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió en las operaciones examinadas, con las disposiciones normativas aplicables a la asignación, distribución y pago de los apoyos que fueron otorgados a través del Plan Emergente de Frijol, ya que se detectaron diversas irregularidades entre las que destacan los apoyos otorgados a los beneficiarios del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) 2007, que rebasaron los montos máximos establecidos en las Reglas de Operación por 1,483.2 miles de pesos; un proyecto no ejecutado en el Estado de Durango al que se asignaron recursos por 4,997.0 miles de pesos; la entrega de apoyos a una organización en el mismo estado que no demostró la dispersión de recursos a los beneficiarios por 4,465.1 miles de pesos; los apoyos entregados a una organización por 837.6 miles de pesos que utilizó para la adquisición de una máquina cosechadora usada, lo cual no está permitido en el PROMAF; lo relacionado con las diversas irregularidades en la solicitud, comprobación y falta de dispersión de los recursos de dos organizaciones del Estado de Zacatecas a las que se otorgaron apoyos por 5,138.5 miles de pesos; la falta de elementos que permitieran acreditar la objetividad, equidad y transparencia de los recursos otorgados a través del proyecto "Conversión de Cultivo de Frijol a Forrajes 2007, en los Estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas"; así como las irregularidades en la comprobación de los gastos de operación por 4,355.1 miles de pesos del citado proyecto ejecutado por la Fundación Produce Zacatecas A.C.

Impacto de las Observaciones:

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 491,539.7 miles de pesos

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 104,119.7 miles de pesos

Auditoría: 07-0-08100-02-0465

Plan Emergente de Maíz

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 4101 "Subsidios a la Producción" del citado plan, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 746,668.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió, en las operaciones examinadas, con las disposiciones normativas aplicables a la asignación, distribución y pago de los apoyos que son otorgados a través del Plan Emergente de Maíz, excepto por los resultados con observación, entre los que destacan lo relativo al importe de 66,794.4 miles de pesos, de presuntos pagos en exceso a los montos autorizados en las Reglas de Operación del Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de los Agronegocios (FOMAGRO), como resultado del análisis realizado en la base de datos de los beneficiarios; a los 6,935.2 miles de pesos de apoyos otorgados a 451 productores que aparecen repetidos en la base de datos de los beneficiarios; al importe de 1,824.0 miles de pesos, cuya documentación comprobatoria tiene asentada una fecha posterior a la establecida en el convenio modificadorio para la ejecución de las acciones; al monto de 2,000.0 de pesos destinados para la construcción de un silo, que a la fecha de la inspección física no había sido concluido; a los 2,000.0 miles de pesos destinados a la construcción de una bodega en las que la documentación comprobatoria tiene asentada una fecha posterior a la ejecución de las acciones y que además fue expedida por una empresa creada con posterioridad a la fecha en que se suscribió el Acta de Verificación de Ejecución de Acciones; al monto de 2,744.6 miles de pesos otorgados en el componente de Avío, en el que las garantías líquidas se otorgaron por un importe mayor a las requeridas por el dispersor del crédito; al monto de 1,152.2 miles de pesos que a la fecha de la revisión las organizaciones beneficiarias no habían comprobado; a los 1,477.2 miles de pesos que se destinaron a cubrir parte del Impuesto al Valor Agregado de las adquisiciones realizadas con recursos del PROMAF; así como al importe de 1,992.4 miles de pesos amparados con documentación comprobatoria diferente a la presentada por la organización en la fecha de la inspección física.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 89,799.2 miles de pesos

Subprograma de Apoyo a Coberturas

Auditoría: 07-0-08F00-02-0445

Apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en la partida 4101 "Subsidios a la Producción", del citado subprograma, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 1,001,790.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Subprograma C38 Coberturas, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: se determinó que ASERCA colocó posiciones propias para la cobertura de algodón, sin contar con los estudios e investigaciones que las sustentaran, lo que propició que se tuviera una pérdida en la liquidación de las mismas por 158,273.0 miles de pesos; se aplicaron recursos por 1,977,739.8 miles de pesos con un margen de discrecionalidad a través de la aplicación de esquemas emergentes específicos; y se otorgaron apoyos indebidamente por un total 42,975.9 miles de pesos a seis personas morales que no cumplían con los requisitos de elegibilidad, ya que no son productores.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 88,864.2 miles de pesos

Auditoría: 07-0-08100-07-0696

Auditoría de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio de Teopantlán, en el Estado de Puebla.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a la política pública de desarrollo rural sustentable, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Gobierno del estado de Puebla y el municipio de Teopantlán, Puebla.

Muestra Auditada: 1,661.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la SAGARPA; la Delegación Estatal de la SAGARPA en Puebla, y ASERCA, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables para coordinar, vincular y operar los programas del sector desarrollo rural en el municipio de Teopantlán, Puebla, en el ejercicio fiscal de 2007.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,332.4 miles de pesos

Auditoría: 07-0-08100-04-0358

Dragado de Canales Interiores, Rehabilitación de Escolleras y Supervisión de Obras en Boca de Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 71,169.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales, la SAGARPA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas. No obstante, determinó que existieron deficiencias en la integración de un precio unitario básico que derivó en un pago en exceso de 354.4 miles de pesos y eliminación del acero en varios conceptos sin que se hayan modificado los precios unitarios respectivos con un impacto de 2,077.3 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2413.7 miles de pesos

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Auditoría: 07-0-08100-07-0109

Programa de Acuacultura y Pesca

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos aplicados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en el Programa de Acuacultura y Pesca, así como verificar el cumplimiento de los objetivos de promover y fomentar el desarrollo integral del sector acuícola y pesquero, y del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, a efecto de elevar el nivel de vida de los productores, sus familias y las comunidades pesqueras y acuícolas del país.

Muestra Auditada: 526,992.0 miles de pesos

Dictamen: Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que ni la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA) ni la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) proporcionaron información suficiente sobre los finiquitos que los Gobiernos Estatales deberán entregar, lo que limitó la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Acuacultura y Pesca, lo cual se sustenta en los oficios núms. 113.-1229 de la SAGARPA, del 24 de septiembre de 2008; y 02903, 03875 y 09576 de la CONAPESCA, del 9 y 14 de abril, y 9 de septiembre de 2008.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no han logrado incrementar la producción pesquera y acuícola, ya que en el periodo 2003-2007 ha disminuido a una tasa promedio anual de 1.4%, ni establecieron la temporalidad del programa

F. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES **(Anexo 7 - 4 auditorías)**

Secretaría de Comunicaciones y Transportes **Auditoría: 07-0-09100-06-0695**

Vigilancia y Supervisión de las Obligaciones de los Concesionarios de Carreteras

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el proceso de vigilancia y supervisión de las concesiones de carreteras, que éstas se ajustaron a la legislación y normativa, para verificar que los concesionarios cumplieron con las obligaciones contenidas en los títulos de concesión para prestar el servicio público.

Muestra Auditada: 38,676,935.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al no realizar visitas de inspección a los concesionarios de caminos y puentes federales, y al no requerir a los concesionarios el cumplimiento de las obligaciones de pago de contraprestaciones, fondos de reserva y seguros.

Auditoría: 07-0-09100-02-0431

Aportaciones a Fideicomisos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el concepto 7800 "Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 18,983,163.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al concepto 7800 "Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con, donde destacan los siguientes: recursos aportados al FINFRA sin que se formalizara en el contrato la obligación de la SCT para realizar la citada aportación por 18,983,163.2 miles de pesos; la SCT no tiene definidos las obras o proyectos en los cuales se utilizarán los recursos que aportó al FINFRA, y permanecerán en su patrimonio para ser aplicados en los conceptos que el Comité Técnico defina; la SCT ha implementado un mecanismo para obtener ingresos excedentes con el fin de enviarlos a fideicomisos, y así crea un presupuesto alterno con el cual realiza obras y proyectos que no se someten a la H. Cámara de Diputados ni a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y donde no se tienen metas, objetivos, ni están sujetos a la anualidad del presupuesto. Además, la SCT no ha actualizado los registros contables de la cuenta 12101 Fideicomisos, ya que las aportaciones a éstos se transforman en obras, estudios y proyectos.

Auditoría: 07-1-09J0U-04-1129

Programa de Mantenimiento Mayor, "Proyecto Rehabilitación del Pavimento de Autopistas"

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que el pago del cemento Pórtland utilizado en la rehabilitación del pavimento de las autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustó a las especificaciones y normativa aplicables.

Muestra Auditada: 289,256.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos incumplió las disposiciones normativas aplicables en la determinación, cálculo y pago de las cantidades de cemento Pórtland colocado en las bases hidráulicas estabilizadas de los tramos de las autopistas revisadas y que se refieren principalmente al incumplimiento de las especificaciones particulares, a la falta de un control adecuado en la ejecución de los trabajos por parte de las supervisoras contratadas y las residencias de obra y a la inobservancia de la normativa institucional en la elaboración de las especificaciones de los contratos de obras públicas.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 192,127.3 miles de pesos

Auditoría: 07-0-09100-04-0106

Proyecto Carretero Durango-Fresnillo, Tramo Durango-Tramo Derecho Independencia y Libertad, en el Estado de Durango.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad aplicable, que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto.

Muestra Auditada: 67,267.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la SCT efectuó pagos en exceso por un importe total de 8,972.2 miles de pesos, por volúmenes mayores a lo del proyecto y obra de mala calidad.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 8,972.2 miles de pesos

Auditoría: 07-0-09100-04-0003

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, Carretera Límite de Estados Coahuila/Nuevo León-Piedras Negras, en el Estado de Coahuila

Objetivo: Verificar que la obra se licitó, contrató y ejecutó de conformidad con la legislación aplicable; asimismo, que su entrega y puesta en operación se realizó conforme a lo previsto en el contrato concluido en el periodo.

Muestra Auditada: 10,493.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la SCT efectuó un pago en exceso de 1,972.9 miles de pesos por diferencia de volúmenes de obra entre lo ejecutado y lo considerado por la contratista en el precio unitario de la actividad "Carpeta de concreto asfáltico compactada al 95.0%".

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones:

Importe: 1,972.9 miles de pesos

Auditoría: 07-0-09100-04-0026

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, Carretera Coatzacoalcos-Veracruz, en el Estado de Veracruz

Objetivo: Verificar que la obra se licitó, contrató y ejecutó de conformidad con la legislación aplicable; asimismo, que su entrega y puesta en operación se realizó conforme a lo previsto en el contrato concluido en el periodo.

Muestra Auditada: 5,868.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la SCT efectuó un pago en exceso de 3,657.0 miles de pesos por obra pagada y no ejecutada.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones:

Importe: 3,600.1 miles de pesos

Comisión Federal de Telecomunicaciones

Auditoría: 07-0-09D00-07-0171

Auditoría a las Acciones de Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en los Títulos de Concesión y Permisos Otorgados para la Prestación de los Servicios de Comunicación Vía Satélite

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en las acciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos otorgados para la prestación de los servicios de comunicación vía satélite.

Muestra Auditada: 320,396.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión Federal de Telecomunicaciones de la SCT no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de supervisar el cumplimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos otorgados para la prestación de los servicios de comunicación vía satélite, entre los que destacan los siguientes:

Respecto de las acciones de supervisión de expedientes, la entidad fiscalizada no contó con registros que le permitan llevar el seguimiento y control del cumplimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos de los servicios de comunicación vía satélite.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación revisó los 29 títulos de concesión y una muestra de 88 de los 396 permisos vigentes en esta materia, y se constató que en el caso de las concesiones no se localizó la evidencia documental del cumplimiento de 89 de los 183 compromisos que se debieron de atender en 2007. En cuanto a los 88 permisos revisados, no se encontraron en los expedientes los documentos que acreditaran el cumplimiento de 176 obligaciones de las 187 por atender para ese año, sin que la entidad

fiscalizada acreditara las acciones que realizó para formular las propuestas de sanción y revocación que en su caso debieron plantearse a la SCT.

En cuanto a las acciones de inspección, se determinó que en 2007 no se realizó ninguna visita a los concesionarios de los servicios de comunicación vía satélite. Por lo que respecta a los permisionarios, se realizaron dos visitas que en relación con los 396 permisionarios, representó el 0.5% de cobertura. Respecto de la situación presupuestaria, la COFETEL reportó un subejercicio de recursos por 130,481.6 miles de pesos que representó el 28.9% del total autorizado para ese año, que fue de 450,878.1 miles de pesos, de los cuales en el capítulo de servicios personales se dejaron de ejercer 30,069.1 miles de pesos, el 11.7% y en el de servicios generales por 88,041.0 miles de pesos, el 50.4%. Dichos recursos no se ejercieron aun cuando este órgano desconcentrado requería fortalecer su plantilla de personal supervisor e inspector, así como para realizar las acciones de mantenimiento de la Red Nacional de Radiomonitorio.

Impacto de las Observaciones:

Consecuencias Sociales

La entidad fiscalizada no cumplió cabalmente con su propósito de supervisar el desarrollo eficiente de los servicios de comunicación vía satélite, debido a que no cuenta con registros que le permitan llevar el seguimiento y control del cumplimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos de estos servicios, lo cual impidió identificar en qué medida los concesionarios y permisionarios de estos servicios cumplieron con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que les resultan aplicables.

G. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA **(Anexo 8 - 7 auditorías)**

Secretaría de Educación Pública
Auditoría: 07-0-11100-07-0484

Programa de Carrera Magisterial

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Programa de Carrera Magisterial para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Muestra Auditada: 33,256,588.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, en 2007 la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con el objetivo definido para el Programa de Carrera Magisterial de "Coadyuvar a elevar la calidad de la educación", ya que como resultado del estudio comparativo que la Auditoría Superior de la Federación realizó entre los maestros incorporados al Programa de Carrera Magisterial y los no incorporados, con base en los resultados de los alumnos en la prueba ENLACE 2007, se verificó una diferencia en

promedio mayor en 3.1% en español y 3.7% en matemáticas en el aprovechamiento escolar de los alumnos de los docentes beneficiarios respecto de los no beneficiarios. En ambos casos los resultados del aprovechamiento escolar de los alumnos de docentes con y sin Carrera Magisterial se ubicaron en el rango "Elemental" de conocimientos.

Asimismo, se constató que en 2007 la Secretaría de Educación Pública no diseñó en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Programa de Carrera Magisterial como un programa presupuestario; para la Actividad Institucional 003 "Diseñar y aplicar la política educativa", a cargo de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, no se definieron árboles completos de objetivos, metas e indicadores de desempeño para su evaluación, lo que ocasionó una falta de transparencia en la administración y en el ejercicio de los recursos y, por consiguiente, en la rendición de cuentas, e impidió precisar el monto de los recursos presupuestarios que serán requeridos en los siguientes ejercicios fiscales.

Adicionalmente, cada año el presupuesto regularizable por este concepto se incrementa, sin tener en perspectiva la duración del programa y su costo. Por tal motivo, la Secretaría de Educación Pública no se ajustó a lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Programación y Presupuesto del ejercicio fiscal 2007.

Además, se determinó que después de 16 años de operación del Programa de Carrera Magisterial, 600,782 (57.1%) de las 1,052,797 plazas federales de docentes de educación básica fueron beneficiarias del programa, de las cuales el 79.8% correspondieron a docentes frente a grupo y el 57.8% estaban incorporadas en el nivel "A".

También, la auditoría reveló deficiencias en el control interno: la SEP no cuenta con la información sobre la desagregación de la Cédula de Inscripción y Reinscripción que permita identificar si los docentes pertenecen al ámbito federal o estatal, y carece de una base de datos de la totalidad de las plazas docentes federales beneficiarias del programa vinculada con la calificación que obtienen los alumnos de los grupos a su cargo en la prueba ENLACE, que le permita verificar el cumplimiento del objetivo relativo a "Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional". Asimismo, se constató que de 34 procesos establecidos en el Cronograma de Actividades para la Operación de Carrera Magisterial para la Décima Sexta Etapa, 13 (38.2%) no se cumplieron en tiempo; de seis metas de gestión previstas en el Programa Operativo Anual y el Anuncio Programático Presupuestario autorizado en 2007, la CNCM cumplió tres al 100.0%, dos en 30.0% y 33.3%, y una fue cancelada.

Respecto del Servicio Profesional de Carrera, se comprobó que de las 27 plazas de la Coordinación sujetas a éste, ninguna estaba incorporada, y que 11 plazas de servidores públicos (40.7%) no contaban con el perfil de puesto definido.

Auditoría: 07-0-11100-02-0447

Programa Enciclomedia Aulas Propias (ASA)

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado para el control y monitoreo de las 21,434 Aulas del Sistema Administrado (ASA) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar las acciones realizadas por la Secretaría para dar atención a la acción promovida núm. 06-0-11100-07- 562-01-011, en la Auditoría 562, correspondiente a la Cuenta Pública 2006.

Muestra Auditada: 3,516.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros", Programa Enciclomedia ASA, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: falta de mantenimiento; de recuperación ante la compañía aseguradora de equipos siniestrados y robados, por 3,261.9 miles de pesos, por lo que se efectuaron pagos improcedentes a la Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia, por 2.4 miles de pesos, ya que se consideró el servicio por la totalidad de las aulas; mal funcionamiento; la no actualización de las versiones de enciclomedia; desconocimiento de los números telefónicos y proveedores de servicio en los casos de falla en aquellos; capacitación de los maestros que operan el Programa. Además, la no utilización de las garantías de los equipos tanto para su reparación como su reposición. Asimismo la adquisición en propiedad de las Aulas ASA provoca, con el transcurso del tiempo, la obsolescencia de las mismas; tan es así que los equipos tienen instalada la versión 1.0, y no la 2.0 que es la actual, por lo que la inversión efectuada, de 975,591.6 miles de pesos, por la adquisición de las Aulas ASA, no ha dado los beneficios proyectados en la educación, ya que no se ha cumplido con el objetivo de dar educación de mayor calidad a los educandos de 5° y 6° año de primaria. El Manual de Procedimientos no está actualizado; no se celebraron los contratos con las Entidades Federativas y el Distrito Federal para formalizar la posesión de las aulas ASA, por lo que no está asegurada la protección y uso de los equipos en comento.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 3,264.3 miles de pesos

Auditoría: 07-0-11100-02-0461

Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procedimientos establecidos para la contratación, control e instalación de la prestación de servicios en el programa citado, se hicieron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 2,424,102.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a que la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74408 por 1,462,472.7 miles de pesos, con cargo a la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" fue rectificada por 199,999.9 miles de pesos para cubrir pagos correspondientes a diversas unidades responsables y organismos descentralizados, la SHCP implementó un mecanismo presupuestario como devengado que no está considerado en la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; por lo que 2,324,544.5 miles de pesos, no están devengados y se deben considerar como economías; la rectificación de 1,124,102.6 miles de pesos del Consejo Nacional de Fomento Educativo a la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" se realizó mediante oficios de rectificación que sólo deben contemplar errores detectados en las claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas registradas, contabilizadas y pagadas, 99,558.1 miles de pesos, no cuenta con la base del cálculo que se realizó para determinar que dicho importe corresponde a la indexación de los pagos del Programa Enciclomedia, además, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 9,104.0 miles de pesos, no fue entregada.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,333,648.5 miles de pesos

Auditoría: 07-0-11100-02-0438

Programa Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 4,702,186.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, ejecución, control, ministración, aplicación y registro, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a la cantidad de aulas almacenadas que obligaron a realizar pagos por 2,920.1 miles de pesos sin contar con los servicios devengados; por disponibilidad de aulas que no tienen la certeza si se encontraban disponibles y operando por un monto de 262.5 miles de pesos en el Estado de Chiapas y 455.5 miles de pesos en el estado de Tabasco; por las diferencias que existen entre la Base de Datos de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia y las fechas consignadas en las Actas Circunstanciadas de Inicio de Operación, por las diferencias entre la información otorgada por la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia al cierre del mes de julio y la

aplicación de las penalizaciones a los proveedores en la facturación del mes siguiente, sin hacer la conciliación y depuración de la información de forma adecuada, además por las aulas instaladas de manera adicional en grados diferentes a los establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia.

Auditoría: 07-0-11100-02-0440

Programa Nacional de Becas Nivel Medio Superior

Muestra Auditada: 766,027.0 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a la falta de delimitación de atribuciones y responsabilidades del personal y de las áreas que intervienen en el proceso de selección, validación, autorización y pago de las becas; las Reglas de Operación no se emitieron en los tiempos establecidos; los Lineamientos para el otorgamiento de las becas no los emitió la autoridad competente ni se publicaron; ni se precisaron los formatos y plazos para el trámite de solicitud de beca, modelo de la convocatoria y el diagrama de flujo del proceso de selección; se registraron y reportaron incorrectamente 358,831.2 miles de pesos en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas"; se otorgaron recursos por 8,918.0 miles de pesos a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de ser menor de 20 años y se entregaron recursos adicionales de los que les correspondía a los estudiantes, por 2,671.0 miles de pesos; y la falta de un Padrón Único de Beneficiarios de becas.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Auditoría: 07-0-11D00-04-0355

Obras Públicas en Inmuebles, Zonas Arqueológicas y Museos Localizados en las Regiones Centro, Norte y Sur de la República Mexicana, así como en el Distrito Federal

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dichos proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 108,621.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se refieren principalmente a la determinación de un subejercicio de 17,903.6 miles de pesos no reintegrados a la Tesorería de la Federación; convenios por 10,300.00 miles de pesos que no se ajustaron a la normativa, no se reportó la aplicación y ejercicio de los recursos, ni los avances físicos y financieros de las obras, los registros de avances trimestrales y su difusión en la página de Internet de la entidad; y pagos indebidos por 15,500.0 miles de pesos realizados en el 2008 con cargo al ejercicio 2007.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Auditoría: 07-0-11E00-07-0466

Control de Obras Pictóricas, Históricas y Artísticas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados, para los procesos de registro, control y clasificación de las obras Pictóricas, históricas y artísticas bajo su responsabilidad, así como verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación, considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura cumplieron con las disposiciones normativas aplicables para el Control de Obras Pictóricas, Históricas y Artísticas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a que en ambos institutos se carece de Reglamento Interior; existencia de obras propiedad de terceros que no se encuentran registradas en las bases de datos de sus inventarios; no existe un programa de conservación que permita identificar la calendarización o cronograma con que se llevarán a cabo los tratamientos respectivos ni un procedimiento que determine el plazo para llevar a cabo el tratamiento, personal que intervendrá, costos de los trabajos e insumos; no cuentan con procedimientos y programas para llevar a cabo el control y costo de los trabajos de restauración; existen irregularidades en trabajos de restauración de las obras prestadas para exposiciones como el no determinar el tipo de restauración que se debe aplicar, el orden de importancia, el plazo para efectuar el trabajo encomendado sin considerar los imponderables, asimismo no cuentan con indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia, economía y transparencia con que llevan a cabo estas funciones; no existe coordinación entre las áreas involucradas para la recuperación de obras; no se cuenta con el equipo suficiente para la guarda y custodia de las piezas bajo su resguardo; existen errores en el registro del inventario (INBAL), como piezas inexistentes, duplicidades, errores en las medidas de tamaño, en las técnicas, en los títulos, y en la fotografía de la obra; Obras desaparecidas y dañadas en más del 70% de su estructura en cada una; no está formalizado y autorizado el procedimiento para determinar la cotización y presupuesto para la restauración de obras, así como no se aplica para las obras resguardadas por el CENCROPAM, obras que viajaron a la embajada de Filipinas para su exhibición desde el año de 1964, que indican no llegaron a su destino; y no se cuenta con una base de datos general que coadyuve al combate al robo, al saqueo de pinturas, esculturas y hasta en

ocasiones de fragmentos de retablos y por ende del comercio ilegal principalmente del arte sacro.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

Auditoría: 07-0-11100-07-0560

Auditoría de Desempeño a la Educación Media Superior en las Modalidades de Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Muestra Auditada: 3,363,422.3 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el nivel medio superior en la modalidad de Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera, en términos generales, que en 2007 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cumplió parcialmente el objetivo de "Contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de recursos humanos calificados a nivel post secundaria", ya que de los 113.7 miles de alumnos que ingresaron en la generación 2004-2007 egresaron 48.6 miles de educandos, lo que representó el 42.7%. Asimismo, con el análisis de los resultados derivados de la encuesta aplicada por FLACSO a los alumnos egresados, se identificó que de los 16.5 miles de egresados encuestados, el 68.0% (11.2 miles) no tenían ninguna actividad, el 20.0% (3.3 miles) se incorporó al mercado laboral y el 12.0% (2.0 miles) continuaron estudios superiores.

En materia educativa, se verificó que los alumnos del CONALEP registraron un índice de reprobación de 36.0% que respecto a las otras modalidades educativas, se ubicó por arriba de los Subsistemas General, de la DGETA y de los particulares; el índice de deserción fue de 21.0% y comparado con los otros subsistemas representó la mayor proporción de deserción escolar; la eficiencia terminal de los alumnos del colegio fue de 43.0%, y en comparación con los demás subsistemas registró el último lugar.

En cuanto a la eficiencia operativa, se observó que 6 carreras (Informática, Contaduría, Electromecánica, Automotriz, Enfermería y Asistente Directivo), de las 42 impartidas por el colegio, absorbieron a 149.1 miles de alumnos, el 60.9% de la matrícula escolar; en las otras 36 carreras se atendieron a 95.7 miles de alumnos, el 39.1% de la matrícula total.

Por lo que corresponde a los planes y programas de estudio, se constató que el CONALEP omitió incluir las materias de métodos de investigación y química del tronco común, por lo que incumplió lo dispuesto en el Acuerdo 71 por el que se determinan objetivos y contenidos del Ciclo de Bachillerato y en la Resolución DGB. EQ1/97, por la cual la SEP declaró la equivalencia con el Bachillerato de los planes y programas de estudio del colegio, para fines de ingreso a la educación superior.

Respecto a la entrega de becas, se detectaron deficiencias en su sistema de control para acreditar las acciones realizadas y el cumplimiento de la normativa aplicable: se verificó que se entregaron apoyos económicos a 43.6 miles de alumnos, cantidad superior en 23.2%

a la reportada en la Cuenta Pública (35.4 miles de alumnos), sin que se proporcionara la evidencia para cotejar que la entrega de becas se hubiese efectuado conforme a los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas Institucionales; y no fue posible comprobar la meta de titulación y la capacitación de Prestadores de Servicios Profesionales por la falta de documentación soporte.

Respecto a los costos, se verificó que los alumnos del Sistema CONALEP tuvieron un costo de 14.0 miles de pesos, inferior a los demás subsistemas: 32.1% respecto al costo de los alumnos de la DGETI (18.5 miles de pesos); 128.6% en relación con el de la DGE CyT (32.0 miles de pesos); y 141.4% en comparación con el de la DGETA (33.8 miles de pesos).

Consecuencias Sociales

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en 2007 cumplió parcialmente el objetivo de "Contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de recursos humanos calificados a nivel post secundaria", ya que de los 113.7 miles de alumnos que ingresaron en la generación 2004-2007 egresaron 48.6 miles de educandos, lo que representó el 42.7% de esa generación. Asimismo, con el análisis de los resultados derivados de la encuesta aplicada a los alumnos egresados, se identificó que de los 16.5 miles de egresados encuestados, el 67.9% (11.2 miles) no tenían ninguna actividad, el 20.0 % (3.3 miles) se incorporó al mercado laboral y el 12.1% (2.0 miles) continuaron estudios superiores.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Auditoría: 07-1-11L6W-07-0492

Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo

Muestra Auditada: 2,074,694.1 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los programas de educación comunitaria y fomento educativo para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, el Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas aplicables al objetivo de proporcionar servicios de educación básica a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, y en campamentos de población agrícola migrante, ya que los 299.2 miles de alumnos atendidos con educación comunitaria representaron el 91.9% de los 325.4 miles de personas que constituyeron su población objetivo. Respecto de los 1,036.4 miles de personas que en ese año no tenían acceso a los servicios educativos de la SEP, la atención del CONAFE representó el 28.9%.

Asimismo, se verificó que los indicadores educativos y de aprovechamiento escolar de los alumnos mostraron rezago con respecto de los del sistema formal: el 17.8% de los escolares

abandonó sus estudios sin concluir la primaria, cifra superior en 16.6 puntos porcentuales a la presentada por el sistema formal de la SEP (1.2%); la reprobación de los alumnos de educación comunitaria (14.2%) fue superior en 10.1% a la registrada en el sistema escolarizado (4.1%); y el 89.1% de los estudiantes concluyó la primaria, porcentaje inferior en 3.0 puntos porcentuales al 92.1% registrado en la SEP.

Con los resultados de la prueba ENLACE se observó que en español el 49.3% de los alumnos de primaria comunitaria contaba con conocimientos insuficientes; el 45.5% presentó un conocimiento elemental; el 5.0% registró un buen nivel de aprovechamiento; y el 0.2% restante tenía un excelente nivel en la materia. En matemáticas: el 54.0% de los alumnos de primaria evaluados contaba con conocimientos insuficientes en la materia; el 39.9% elementales; el 5.4% buenos; y el 0.7% tenía un excelente nivel de conocimientos en esa asignatura. Por lo que respecta a la secundaria, se verificó que el puntaje obtenido por los estudiantes los ubica en el rango de insuficiente.

También se concluyó que los sistemas de control interno del CONAFE son deficientes, ya que no permiten verificar la correcta focalización de la población objetivo de la educación comunitaria; ni la entrega de los apoyos económicos a los instructores comunitarios, a los alumnos y al personal que concluyó su servicio social. Tampoco permiten constatar el otorgamiento de los paquetes de material escolar, didáctico y de equipamiento a los instructores comunitarios y la dotación de lotes de mobiliario escolar y de bibliotecas a los centros de trabajo; ni el cumplimiento del calendario escolar y de los días y horas clase.

En materia presupuestal, se verificó que se erogaron 2,074,694.1 miles de pesos, el 99.1% de los 2,092,969.6 miles de pesos aprobados. Asimismo, se constató que el sistema de control presupuestal mostró deficiencias, ya que no se presentaron las explicaciones del subejercicio de recursos; la asignación presupuestal a las entidades federativas se efectuó con base en el nivel de marginación estatal y no de localidad; y se careció de la documentación que sustentara la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios de la educación comunitaria, el SED y el FIDUCAR.

El gasto por alumno de educación básica comunitaria fue de 5.9 miles de pesos en promedio, inferior en 46.5% respecto de los 12.7 miles de pesos erogados por cada alumno en el sistema formal.

Consecuencias Sociales

De los 1,036.4 miles de niños y jóvenes en edad escolar que habitaban en localidades marginadas y aisladas y en campamentos de población migrante que no contaban con el servicio educativo de la SEP, el CONAFE atendió al 28.9% considerando los recursos humanos, infraestructura educativa y presupuesto asignado, lo que implicó que aproximadamente 737.2 miles de personas no tuvieron acceso a la educación básica.

De los 299.2 miles de alumnos atendidos con educación comunitaria, el 94.0% no adquirió las habilidades suficientes de comprensión lectora y matemáticas establecidas en el plan y los programas de estudio.

El CONAFE no tuvo la certeza de que las delegaciones estatales hubieran otorgado los servicios y apoyos conforme a la normativa establecida, ya que los sistemas de información y control interno del consejo no permiten verificar el cumplimiento del calendario escolar y de las horas clase establecidas en las reglas de operación; la entrega de los apoyos económicos y paquetes de material didáctico a los instructores comunitarios; la entrega de lotes de mobiliario escolar y bibliotecas comunitarias a los centros de trabajo; el nivel de escolaridad de las figuras docentes conforme a lo establecido en las reglas de operación; la asistencia de las figuras docentes al curso de formación y capacitación; el número de beneficiarios que recibieron apoyos del FIDUCAR y del SED; la fecha en la que fueron otorgados a los beneficiarios y el mecanismo de pago de estos apoyos.

H. SECTOR SALUD

(Anexo 9 - 1 auditoría)

Instituto Nacional de Medicina Genómica
Auditoría: 07-1-12NCH-04-0186

Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Distrito Federal

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 80,499.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto Nacional de Medicina Genómica no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución, respecto de las operaciones examinadas, que se refieren principalmente a que no se tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes por recursos provenientes de un fideicomiso; sobreejercicio de 78,178.4 miles de pesos; deficiencias en una bitácora de obra; falta de amortización de anticipos por 21,191.6 miles de pesos; falta de documentación soporte de conceptos extraordinarios por 13,676.4 miles de pesos; mala calidad en diversos trabajos; deficiencias en la ejecución de elementos estructurales; y convenios modificatorios superiores al 25% de los contratos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 34,868.0 miles de pesos

I. SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Anexo 10 - 4 auditorías)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Auditoría: 07-0-16100-07-0618

Acciones para el Manejo de los Recursos Forestales

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de formular, regular, desarrollar, favorecer e impulsar el manejo de los recursos forestales, así como vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental en esta materia.

Muestra Auditada: 1,003,614.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no cumplieron de manera razonable con el objetivo de formular, regular, desarrollar, favorecer e impulsar el manejo de los recursos forestales, así como vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental en esta materia, como se precisa en los resultados, de los que destacan:

En la formulación de la política forestal, en 2007 la SEMARNAT y la CONAFOR no concluyeron el diseño de la política nacional en materia forestal, ya que de los instrumentos "Sistema Nacional de Información Forestal", "Inventario Nacional Forestal y de Suelos", "Zonificación Forestal", "Registro Forestal Nacional", "Sistema Nacional de Gestión Forestal" y "Estudio Satelital Anual del Índice de Cobertura Forestal", tan solo tres (50.0%) se integraron sin estar actualizados y los otros tres (50.0%) no se establecieron, lo que impidió contar con los elementos y parámetros necesarios para la planeación y evaluación; e incidió en la falta de información suficiente y oportuna para evaluar los criterios e indicadores del Proceso de Montreal, orientados a medir el desarrollo forestal sustentable.

En materia de regulación, la CONAFOR no promovió un sistema de capacitación y acreditación de los 1,219 prestadores de servicios técnicos forestales, que permitiera identificar los que cumplieron los compromisos establecidos en los programas de manejo y en las auditorías técnicas preventivas.

En cuanto al desarrollo del manejo forestal, de las 139,893 miles de plantas producidas en 2007, el 23.9% (33,489) se produjo en los viveros a cargo de la CONAFOR, inferior en 6.5 puntos porcentuales al registrado en 2005. Además, el índice de supervivencia de las 322,320 miles de plantas sembradas fue de 54.3%, inferior en 5.7 puntos porcentuales respecto del estándar establecido (60.0%), con lo que se logró reforestar 341.4 miles de hectáreas, 62.3% de la superficie deforestada de forma irreversible (547.5 miles de hectáreas), lo que significó que por cada hectárea que se perdió y no es recuperable, se reforestó como medida compensatoria en terrenos forestales 0.6 hectáreas.

En relación con las acciones para favorecer el manejo forestal, con base en las cifras estimadas por la Auditoría Superior de la Federación, la superficie forestal decreció en 0.4%, en promedio anual, al pasar de 137,425.2 miles de hectáreas en 2005 a 136,328.0 miles de hectáreas en 2007. La mayor pérdida de superficie forestal se presentó en bosques y selvas que disminuyó 0.6%, en promedio anual, al pasar de 64,802.4 miles de hectáreas en 2003 a 63,771.8 en 2007, por lo que no se cumplió con los Objetivos del Milenio de intensificar esfuerzos en pro de la conservación de los bosques. Asimismo, no se establecieron metas de reducción de pérdida de superficie forestal, con lo cual se incumplió la Ley de Planeación.

Respecto de las acciones para impulsar el manejo forestal, con los recursos asignados en ProÁrbol para apoyar a los propietarios de los predios forestales, de los 4,247 apoyos solicitados para protección, la CONAFOR atendió el 30.4% (1,289); de los 17,958 requeridos para el aprovechamiento, el 48.6% (8,722); de los 18,874 solicitados para conservación, el 33.3% (6,291), y de los 23,676 requeridos para restauración, el 58.6% (13,863). La desatención de 41,847 solicitudes de apoyo a través de ProÁrbol en los programas PROCOREF, PRODEFOR, Servicios Ambientales, PRODEPLAN, así como Prevención y Combate de Incendios, ocasionó que tan solo se ejerciera 40.5% de los 4,324,096.7 miles de pesos con que contaba el Fondo Forestal Mexicano en 2007.

En las acciones de vigilancia, de las 100 zonas críticas forestales del país, la PROFEPA realizó operativos de vigilancia en el 59.0% y recorridos de vigilancia en el 69.0%; y de 2,055 medidas dictadas a infractores a la normativa en materia forestal, verificó el 19.4% (399), de las que en el 64.4% (257) detectó que no fueron cumplidas.

Por su parte, se constató que la SEMARNAT tenía sin solventar 27.8% de las acciones-observaciones, al 31 de diciembre de 2008, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2002 y 2006, destacando entre ellas 5 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias sin resolución.

Impacto de las Observaciones:

Consecuencias Sociales

La Comisión Nacional Forestal no cumplió con el objetivo de favorecer el manejo de los recursos forestales, ya que la superficie forestal del país decreció en 0.4%, en promedio anual, al pasar de 137,425.2 miles de hectáreas en 2005 a 136,328.0 miles de hectáreas en 2007, lo que se reflejó en la disminución de la superficie forestal de bosques y selvas en 0.4%, en promedio anual, al pasar de 64,802.4 miles de hectáreas en 2003 a 63,771.8 en 2007, por lo que incumplió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, a través de los cuales México se comprometió a intensificar esfuerzos en pro de la conservación de los bosques.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,362.3 miles de pesos

Comisión Nacional del Agua
Auditoría: 07-0-16B00-07-0191

Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en las acciones del manejo integral y sustentable del agua, así como verificar el cumplimiento del objetivo de preservar el recurso en cantidad y calidad.

Muestra Auditada: 427,715.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la CONAGUA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en relación con el propósito de preservar las aguas nacionales en cantidad y calidad, como se precisa en los resultados con observación, entre los que destacan los siguientes:

En cuanto al objetivo de preservar el agua en cantidad, al 2007 la entidad fiscalizada no había publicado los estudios de disponibilidad del recurso en 371 de los 653 acuíferos del país, lo que representó el 56.8% del total; y no realizó la actualización de 188 estudios de 202 acuíferos en los que se debió atender esta obligación. En 2007, la CONAGUA otorgó 5,029 títulos de concesión de aguas subterráneas sin asegurarse de contar con la disponibilidad efectiva del recurso.

Se registró sobreexplotación en 125 acuíferos de los 653 existentes, en los que se reportó un déficit de agua de 5,515.5 millones de metros cúbicos (mm³); y en el caso de las aguas superficiales, en 53 de las 722 cuencas, con un déficit de 5,385.8 mm³.

En relación con el objetivo de preservar el agua con calidad, se determinó que con base en la medición del indicador de Sólidos Suspendidos Totales, se reportaron niveles de contaminación fuera del rango aceptable en el 7.3% de las aguas superficiales del país, equivalente a 27,583 mm³; en el indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno, el 8.2%, esto es, 31,055 mm³; y en el indicador de Demanda Química de Oxígeno, se registró un volumen de agua contaminada de 22.1%, equivalente a 76,000 mm³.

Se constató que la CONAGUA carece de instrumentos para la medición de los niveles de agua en 401 acuíferos, el 61.4% de los 653 existentes en el país; y en 82 cuencas, el 11.4% de las 722. Asimismo, se determinó que la Comisión no tiene instalados sitios de monitoreo para evaluar la calidad del agua en 562 acuíferos, el 86.1% del total; y en 596 cuencas, el 82.6%.

Auditoría: 07-0-16B00-07-0415

Acciones de Administración del Uso del Agua

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la administración del uso del agua, para verificar el cumplimiento del objetivo de que sea sustentable y cobrable el recurso hídrico.

Muestra Auditada: 118,315.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en el ejercicio fiscal 2007, la Comisión Nacional del Agua cumplió parcialmente con el objetivo de administrar racionalmente el uso del agua para que el recurso hídrico fuera sustentable y cobrable, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), en razón de que: otorgó títulos sin asegurarse de que las concesiones y asignaciones de agua estuvieran fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en los acuíferos y cuencas hidrológicas del país; no verificó los volúmenes usados, explotados o aprovechados de las aguas nacionales; y cobró el 55.3% del volumen concesionado o asignado y los ingresos representaron el 22.5% del gasto de la CONAGUA.

Hasta 2007, la CONAGUA había concesionado o asignado 238,591.74 millones de metros cúbicos anuales de agua, 66.9% más que lo estimado por el usuario en sus solicitudes de títulos (78,907 millones de metros cúbicos anuales). En el análisis de los volúmenes anuales de aguas nacionales y de los concesionados, se observó que existe una disponibilidad de 46,821.28 millones de metros cúbicos de aguas superficiales, en contraste con el déficit de 7,444.88 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas, lo cual reveló que se han otorgado títulos sin tomar en cuenta la disponibilidad de los acuíferos, como se establece en la LAN.

La Comisión no registra, ni verifica los volúmenes de las aguas nacionales concesionadas o asignadas en los títulos correspondientes en incumplimiento de las disposiciones de ley, ni ha establecido los dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta para llevar a cabo su medición; tampoco verifica la instalación de los medidores de agua con que deben contar los usuarios dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título respectivo.

En 2007, la CONAGUA recaudó 7,114.3 mdp por la autodeclaración de 132,004.09 millones de metros cúbicos anuales por el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales, 55.3% del volumen concesionado; los ingresos captados representaron el 22.5%, respecto de los 31,617.4 mdp erogados por la Comisión en ese año, lo cual refleja que los ingresos son insuficientes para proveer los medios que demanda la gestión sustentable del agua, en incumplimiento de lo señalado en la LAN.

La auditoría evidenció que, de los 442,888 títulos otorgados en el periodo 1920-2007, en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDa) se inscribieron 334,810 (75.6%) concesiones a particulares, 97,159 (21.9%) asignaciones a Municipios y 10,919 (2.5%) títulos que no registraron el tipo de usuario, lo que impide, a estos últimos, contar con la certeza jurídica del derecho del uso de las aguas nacionales.

Se detectó que en el REPDa se registra el volumen de agua concesionado o asignado por el uso de las aguas de las cuencas y de los acuíferos; mientras que en el "Módulo de

Recaudación" se asienta el volumen que declara consumir el contribuyente por el pago del derecho del agua; esto limita verificar en qué medida el usuario paga el volumen autorizado y evaluar el cumplimiento de los parámetros estimados en su solicitud.

De una muestra de 1,033 expedientes, 785 (76.0%) estuvieron completos y 248 (24.0%) carecieron por lo menos de un documento. De las 338 modificaciones registrales que afectaron al REPDA, 239 (70.7%) contaron con la documentación que establece la normativa y en 99 (29.3%) casos no se encontró completa.

Respecto de la aplicación de los recursos en 2007, se observó que de los 173,100.0 miles de pesos aprobados en la Actividad Prioritaria R012 "Administración Sustentable del Agua, se ejercieron 118,315.2 miles de pesos que representaron el 68.3% del presupuesto original debido a las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 5,653.1 miles de pesos

Auditoría: 07-0-16B00-02-0280

Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, entero a la Tesorería de la Federación y presentación en la Cuenta Pública, y al Programa de Regularización de Contribuyentes Morosos.

Muestra Auditada: 1,211,665.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los ingresos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observaciones, donde destacan los siguientes: la Comisión Nacional del Agua no verificó que el Servicio de Administración Tributaria contabilizara los 656,290.1 miles de pesos del pago por el concepto auditado que PEMEX realizó en 2007; que 16 usuarios, con características de grandes contribuyentes, no cuentan con título de concesión; el importe de ingresos recaudados que reporta el Organismo de Cuenca del Agua del Valle de México es menor en 255,275.7 miles de pesos al reportado por la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal por la falta de mecanismos de control y validación, se encontraron 195,621.2 miles de pesos correspondientes a otros ingresos que representan el 37% de la muestra revisada; además se encontró que a 30 contribuyentes no se les impuso la multa respectiva por la no contestación al requerimiento de información.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 450,896.8 miles de pesos

J. SECTOR ENERGÍA (Anexo 11 - 18 auditorías)

Comisión Federal de Electricidad

Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0090

Central Eoloeléctrica La Venta II, en el Estado de Oaxaca

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 1,210,564.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación indicó que existieron penas convencionales no aplicadas por el incumplimiento del programa 4,325.1 miles de pesos y 186.9 miles de pesos por el retraso en la entrega de partes de repuesto y herramientas especiales.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 4,512.0 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0093

Central Hidroeléctrica La Yesca, Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje y Complemento del Diseño de la Carretera Hostotipaquillo-Mesa de Flores, en el Estado de Jalisco

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 79,932.6 miles de pesos

Dictamen: La Comisión Federal de Electricidad no aplicó una pena convencional por el incumplimiento del programa por 8,627.2 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 8,627.2 miles de pesos
Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0095

LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V, en los Estados de San Luis Potosí y Tamaulipas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 561,860.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Federal de Electricidad no aplicó una pena convencional por el incumplimiento del programa de obra por 6,056.2 miles de pesos, porque la entidad fiscalizada omitió requerir la reducción y ajuste del precio del acero por 9,460.4 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 15,516.6 miles de pesos
Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0098

Subestaciones Eléctricas 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste, en los Estados de Baja California, Sinaloa y Sonora

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 189,691.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Federal de Electricidad no aplicó una pena convencional por 327.6 miles de pesos corresponde a una pena convencional por incumplimiento del programa de obra.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 327.6 miles de pesos
Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0097

Subestaciones y Líneas de Transmisión 801 Altiplano (Segunda Fase), en el Estado de México

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 237,976.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Federal de Electricidad no aplicó una pena convencional por el incumplimiento del programa de obra de 1,900.1 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,900.1 miles de pesos.

Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0091

Subestaciones y Líneas de Transmisión 803 NOINE (1ra. Fase), en los Estados de Chihuahua y Nuevo León

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 733,672.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Comisión Federal de Electricidad omitió calcular el ajuste del acero, precio que estuvo a la baja, y 16,271.0 miles de pesos porque se consideraron periodos en los que no les correspondía ajuste al precio de los insumos.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 17,533.7 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18TOQ-04-0096

Subestaciones y Líneas de Transmisión 903 Cabo-Norte, en los Estados de Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango y Tamaulipas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 429,742.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Comisión Federal de Electricidad omitió calcular el ajuste del acero cuando este precio estuvo a la baja, y 7,888.5 miles de pesos porque se consideraron periodos en los que no les correspondía ajuste al precio de los insumos, los cuales corresponden a recuperaciones probables.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 9,332.8 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18TOQ-02-0303

Adquisiciones y Contratación de Servicios-Gerencia de Abastecimientos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables, a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro presupuestal y contable.

Muestra Auditada: 1,696,490.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Comisión Federal de Electricidad realizó entregas extemporáneas por 1,427.2 miles de pesos, de los trabajos del contrato núm. 700251597, celebrado por la CFE con Senstar Stellar Latín América, S.A. de C.V., en los que no se acreditó que se haya otorgado una prórroga.

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,427.2 miles de pesos

Luz y Fuerza del Centro

Auditoría: 07-1-18T1O-07-0121

Auditoría a los Procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por Luz y Fuerza del Centro (LFC) en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como verificar el cumplimiento del objetivo de satisfacer la demanda de electricidad en la zona centro del país en condiciones óptimas.

Muestra Auditada: 72,980.9 miles de pesos.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contribuyeron al cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer la demanda de electricidad en la zona centro del país, ya que en 2007 se registró una oferta de energía eléctrica superior en 32.7% a la demanda y el 99.2% de la población ubicada en su área de influencia contó con el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, Luz y Fuerza del Centro no lo hizo en las condiciones que señala la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 porque el diferencial de 32.7% entre oferta y demanda corresponde a las pérdidas de energía, las cuales de 1998 a 2007 se incrementaron en 14.4 puntos porcentuales. Se comprobó que en 2007 LFC no programó oportunamente el crecimiento de la infraestructura eléctrica en materia de transmisión, transformación y distribución; el tiempo de interrupción por usuario en transmisión fue superior en 66.1% a la meta límite; LFC no determinó el resultado real de las acciones ejecutadas derivadas de la aplicación del Programa de Reducción de Pérdidas de Energía, por lo que la SHCP no le autorizó disponer de los montos recuperados para sus requerimientos de inversión; y la SHCP no presentó evidencia de la forma y términos en que debió invertirse el subsidio otorgado a LFC, ni de que éste se haya sujetado a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

Además, se determinó que durante el periodo 1998-2007 el margen de comercialización de LFC disminuyó en 163.1% debido al incremento de 108.9% en las pérdidas de energía eléctrica; el costo de explotación se incrementó en 64.7%, principalmente por el incremento de las erogaciones en previsión social, costos generales, prestaciones y combustibles; en 2007 el resultado neto antes de subsidio es una pérdida de 32,390,446.0 miles de pesos, que representó un incremento de 47.6% con respecto a 1998, y se estima que para 2016 el subsidio del Gobierno Federal será superior en 49.8% de los recursos que requiere para operar LFC; el pasivo laboral se incrementó en 171.6% y se estima que para 2013 igualará al activo; en 2007 el costo operativo de las centrales termoeléctricas de LFC fue superior en 105.5% al de la CFE y el de las centrales hidroeléctricas en 232.7%; el costo del CCT se incrementó en 14.9% en promedio anual, y en 2007 representó el 45.5% del costo de explotación de la entidad, lo cual se debió principalmente a las cláusulas que son aplicables para los trabajadores jubilados. Por lo anterior se determinó que el funcionamiento de LFC no es conveniente desde el punto de vista de la economía nacional. Estos resultados revelan la existencia de un severo riesgo, que amerita que se evalúe la pertinencia de realizar cambios estructurales en el organismo o, en su caso, disolverlo o fusionarlo a la Comisión Federal de Electricidad conforme lo establece el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que señala que, cuando el funcionamiento de algún organismo creado por el Ejecutivo Federal ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora de Sector que corresponda, deberá presentar al Ejecutivo Federal una propuesta para la disolución o fusión de dicho organismo.

Luz y Fuerza del Centro

Auditoría: 07-1-18T1O-04-0367

Desarrollar y Construir Instalaciones Eléctricas en Subestaciones que Proporcionan Alimentadores en la Red de Distribución en el Estado de México

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Luz y Fuerza del Centro no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisan en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: un sobreejercicio de 12,537.1 miles de pesos; adquisición de una subestación eléctrica encapsulada en gas Hexafluoruro de Azufre (SF6) por un monto de 11,348.1 miles de pesos que no forma parte de los trabajos en ejecución reportados en la Cuenta Pública 2007 en la subestación Tenango; y pagos por un monto de 12,045.7 miles de pesos por concepto de Asistencia Técnica para las subestaciones eléctricas de San Bernabé, Vértiz, Azcapotzalco y Ceylán, todas ellas en el Distrito Federal que no corresponden a la Entidades Federativas del proyecto (Estado de México).

Impacto de las Observaciones:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 11,348.1 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T1O-04-0369

Generación Distribuida en el Distrito Federal

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 470,433.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Luz y Fuerza del Centro no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: sobre ejercicio por un monto de 4,433.0 miles de pesos; diferencia de 45,767.6 miles de pesos entre el monto reportado en Cuenta Pública y los pagos efectuados; falta de operación del equipo de detección de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) en la subestación Vallejo; daño al erario público por 91,891.8 miles de pesos por la inversión inactiva de cinco plantas de generación de energía que no han entrado en operación, falta de producción de energía eléctrica por 643.6 GWh que representa 888,188.3 miles de pesos, y carencia de dictamen técnico para un convenio modificatorio.

Impacto de las Observaciones:

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 45,767.6 miles de pesos

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 91,891.8 miles de pesos

Petróleos Mexicanos

Auditoría: 07-1-18T4I-02-1120

Gestión Corporativa y Financiera (PEMEX)

Muestra Auditada: 96,278.0 miles de pesos

Objetivo: Fiscalizar la gestión corporativa y financiera de sus operaciones, así como el sistema de control y rendición de cuentas. Asimismo, verificar que los registros contables se realizaron conforme a la normativa aplicable.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Petróleos Mexicanos no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión corporativa y financiera de sus operaciones en la empresa Integrated Trade Systems, Inc., como se precisa en los resultados con observación donde destacan los siguientes: Integrated Trade Systems, Inc., tiene en bancos un exceso de liquidez de 8,344.4 miles de dólares, que al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 90,989.8 miles de pesos, representan en promedio 8 años de sus necesidades de liquidez, la cual proviene de utilidades de varios años que no se han integrado a Pemex, a través de decretar dividendos; no se sujeta a un esquema de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; y la cuenta bancaria de Citibank con saldo al 31 de diciembre de 2007 por 58.2 miles de dólares, equivalentes a 634.6 miles de pesos no se reportó en su contabilidad.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 43,715.3

Auditoría: 07-1-18T4I-02-0244

Empresas Filiales de PEMEX

Objetivo: Fiscalizar la gestión de la inversión accionaria nacional y en el extranjero, así como verificar que la paraestatalidad de las empresas filiales de PEMEX, se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 19,482,567.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las Empresas Filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren al régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Petróleos Mexicanos tiene participación accionaria, directa y/o indirecta, denominadas como "No paraestatales", entre las que destacan PMI Holdings, B.V., Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., entre otras, y que no se sujetan a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados; Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, S.A., por 1,459,982.9 miles de euros que al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 23,179,564.5 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 23,179,564.5 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T4I-02-0316

Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos recibidos; verificar que en la determinación de su monto, aplicación, contabilización y registro en la Cuenta Pública se cumplió con la normativa aplicable.

Muestra Auditada: 11,663,400.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, se cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura (FEIIPEMEX), excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a que, en la participación de la SHCP sobre el manejo de esos recursos, se determinaron situaciones que afectaron al FEIIPEMEX, ya que a través de la TESOFE no reconoció intereses estimados por 78,603.9 miles de pesos, de los recursos destinados a dicho fondo por 9,429,600.0 miles de pesos, lo que ocasionó un perjuicio a su patrimonio.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 78,603.9 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T4I-02-1118

Gestión de las Inversiones en las Empresas del Denominado Grupo P.M.I.

Objetivo: Fiscalizar la gestión corporativa y financiera, la rentabilidad de estas inversiones, así como el sistema de control y de rendición de cuentas que ejercen las empresas con inversión accionaria de PEMEX, o de sus organismos subsidiarios, así como las constituidas a través de inversiones de sus filiales, en las cuales participan mayoritariamente en su capital; la normativa y las autorizaciones a las cuales se sujetaron, así como su registro contable.

Muestra Auditada: 39,951,956.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión corporativa y financiera de las inversiones, rentabilidad, sistemas de control y rendición de cuentas, en las empresas del denominado Grupo PMI, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a que las empresas del denominado Grupo PMI, en las que PEMEX es propietaria directa o indirectamente de las mismas, no rinden cuentas, independientemente de la rentabilidad de sus inversiones; al 2007 PEMEX, por no tener una política corporativa para el decreto y cobro de dividendos de sus empresas filiales que participan en la operación de sus empresas filiales, ha mantenido utilidades acumuladas por 25,601,239.9 miles de pesos, las cuales estuvieron integradas como sigue: PMI-NASA por 8,228,829.0 miles de pesos, PMI-HBV por 9,852,821.9 miles de pesos, PMI-TRD por 7,463,082.0 miles de pesos y PMI-Marine por 56,507.0 miles de pesos.

Auditoría: 07-1-18T4I-02-0307

Importación de Gasolina

Objetivo: Fiscalizar que los recursos destinados para su adquisición se pactaron y erogaron conforme a los programas y los montos aprobados por la Cámara de Diputados; verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la contratación, ejercicio, contabilización y registro en los estados financieros y en la Cuenta Pública.

Muestra Auditada: 29,400,923.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los gastos por las importaciones de gasolina efectuadas por Pemex Refinación y reportadas en la Cuenta Pública 2007, así como el cumplimiento del contrato vigente y los mecanismos para dar seguimiento a la importación de gasolina, respecto de las operaciones examinadas, excepto por el resultado con observación que se refiere principalmente a que la empresa P.M.I. Trading Limited, filial de PEMEX que se encarga de comprar gasolina en el extranjero para después vender una parte de este producto a

Pemex Refinación, no se apegó al régimen de rendición de la Cuenta Pública Federal y se maneja bajo un régimen de derecho privado.

Auditoría: 07-1-18T4I-02-0519

Operaciones Realizadas a través de los Fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F/163

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera y las operaciones llevadas a cabo por medio de los Fideicomisos, así como verificar su autorización, contabilización, revelación y registro en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable.

Muestra Auditada: 61,038,541.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la gestión financiera y las operaciones realizadas a través de los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F/163 cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, excepto porque PEMEX y sus organismos subsidiarios han utilizado los recursos generados por ambos fideicomisos como si fueran partidas adicionales a su presupuesto; por lo tanto, carecen de información que identifique la aplicación individual por proyecto, en contravención a lo dispuesto en el artículo 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. No fue necesario generar recomendación alguna ya que el legislativo reformó en diciembre de 2008 el artículo 32, párrafo penúltimo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que PEMEX no utilice a futuro PIDIREGAS y estableció que a más tardar el 31 de enero de 2009, PEMEX tendría que reconocer como deuda pública directa todos los financiamientos asumidos por ambos fideicomisos (artículo cuarto transitorio, párrafo sexto).

Auditoría: 07-1-18T4I-02-0290

Programa Multianual de Racionalización de Costos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa Multianual de Racionalización de Costos en materia de servicios personales y operativos, para verificar que en la instrumentación del programa y en las estrategias y acciones implementadas para alcanzar las metas programadas por los organismos subsidiarios y el corporativo, cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 1,017,325.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Petróleos Mexicanos no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la consolidación, elaboración, aprobación y seguimiento del Programa Multianual de Racionalización de Costos; así como a la emisión del informe consolidado correspondiente a la SHCP, respecto de las operaciones

examinadas, donde destacan los siguientes: no se establecieron manuales para el manejo y control del Programa Multianual de Racionalización de Costos en Servicios Personales y Operativos y sus lineamientos o políticas generales no fueron cumplidos por los organismos subsidiarios y el propio corporativo, no se establecieron lineamientos y metodología para la determinación de metas anuales, ni contaron con indicadores cuantificables, objetivos y verificables. Por otra parte, la implementación del programa se realizó en forma extemporánea.

Pemex Exploración y Producción

Auditoría: 07-1-18T4L-07-0108

Auditoría a las Actividades de Producción de Petróleo Crudo y Gas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por Pemex Exploración y Producción en las actividades de producción de petróleo crudo y gas, así como verificar el cumplimiento del objetivo de satisfacer la demanda de estos hidrocarburos.

Muestra Auditada: 49,157,555.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió razonablemente su objetivo de garantizar la seguridad energética en materia de hidrocarburos establecido en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, al satisfacer la demanda interna de petróleo crudo y gas y generar excedentes de petróleo crudo para exportación. De los resultados con observación destacan los siguientes: Pemex Exploración y Producción cumplió en 82.9% la meta anual de producción de gas natural y en 18.9% la meta de largo plazo de producir 1,000 MMpcd de gas a partir de 2007 bajo el esquema de Contratos de Servicios Múltiples; el volumen de gas que envió a la atmósfera fue superior a 401 MMpcd al programado; alcanzó en 76.3 y 67.5% las metas de perforación y en 85.6 y 67.9% las metas de terminación de pozos de desarrollo porque no realizó los estudios de sísmica 3D requeridos, ni contó con los permisos de paso para realizar los trabajos correspondientes; no contó con información sobre los costos y gastos de exploración y explotación por campo, el organismo realizó pagos en uno de los bloques de los Contratos de Servicios Múltiples sin que se hubieran generado los ingresos requeridos para ello; y no se cumplieron cabalmente los parámetros de calidad de contenido de nitrógeno, de agua y sedimentos, y de sal del petróleo crudo que envió a Pemex Refinación y PMI Comercio Internacional, ni del contenido de licuables del gas que entregó a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

En 2007 Pemex Exploración y Producción satisfizo la demanda interna de petróleo crudo y gas. El margen de utilidad de los Contratos de Servicios Múltiples después de impuestos representó pérdidas por 6.9 millones de dólares.

Auditoría: 07-1-18T4L-07-0133

Programa de Inversiones para la Restitución de Reservas de Hidrocarburos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos aplicados para la restitución de las reservas probadas de hidrocarburos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, las acciones realizadas por Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos públicos aplicados para la restitución de las reservas probadas de hidrocarburos, excepto que para el año de 2007 no se ha cumplido con las metas de restituir las reservas de hidrocarburos con el fin de equilibrar estas con la cuota de extracción, en parte debido a que no se han invertido los recursos suficientes para ese fin, además que no se cuenta con los estudios de costo beneficio de los proyectos destinados a la restitución de reservas que demuestren su rentabilidad, ya que generalmente estos se asocian con proyectos de producción.

Auditoría: 07-1-18T4L-02-0232

Derechos sobre los Hidrocarburos

Objetivo: Fiscalizar que el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y los Derechos que intervienen para su determinación, se hayan calculado, enterado y registrado, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 481,842,849.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cálculo, entero y registro del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y los Derechos que intervienen para su determinación, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a que dejó de pagar 5,298,942.1 miles de pesos del Derecho Adicional; otorgó un descuento injustificado en el precio del crudo a Pemex Refinación y Petroquímica, que provocó un pago menor en los derechos por 9,785,090.3 miles de pesos y también otorgó un descuento injustificado en el precio de gas natural y sus líquidos a Pemex Gas y Petroquímica Básica de 1,499,239.5 miles de pesos, que tuvo un efecto de un pago menor en los derechos de 1,180,969.8 miles de pesos; además, omitió el pago de recargos en las declaraciones complementarias del Derecho Adicional de los ejercicios fiscales 2006 y 2007 por 259,344.8 y 293,870.1 miles de pesos, respectivamente.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 16,818,408.2 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T4L-02-0298

Programa Multianual de Racionalización de Costos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Programa Multianual de Racionalización de Costos en materia de servicios personales y operativos; verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el programa y que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en la instrumentación del programa y en las estrategias y acciones implementadas para alcanzar las metas programadas.

Muestra Auditada: 902,085.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la elaboración, aprobación y seguimiento del Programa Multianual de Racionalización de Costos en servicios personales y operativos; así como en la emisión del informe correspondiente a la SHCP, respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: no se definieron las acciones para racionalizar los costos en materia operativa ni las de servicios personales; tampoco se especificó la metodología para determinar las metas establecidas; no se llevó a cabo el Programa Multianual de Racionalización de Costos durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2006; no se elaboraron indicadores cuantificables, objetivos y verificables relacionados con el programa; no se proporcionó documentación suficiente y confiable para evaluar las acciones y los resultados obtenidos; se reportó erróneamente en el programa, la iniciativa "Ingreso por desincorporación de activos improductivos", ya que no corresponde a un ahorro, ni se encuentra relacionada con la racionalización de los costos operativos; asimismo, se reportó indebidamente en los resultados del programa del ejercicio de 2007, plazas canceladas de los ejercicios de 2005 y 2006; así como 10 plazas que aún no se habían cancelado.

Auditoría: 07-1-18T4L-04-0173

Proyecto PEP Burgos, Construcción de Infraestructura Orientada a la Producción de Gas No Asociado, en la Región Norte

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 2,886,392.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones normativas aplicables a que la entidad fiscalizada autorizó 11 convenios para incrementar volúmenes adicionales que representaron montos de 1,052,077.8 miles de

pesos y 190,275.4 miles de dólares, obra que por su magnitud debió adjudicarse mediante un proceso de licitación pública.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,208.7 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T4L-04-0337

Proyecto PEP Cantarell, Planta de Eliminación de Nitrógeno de Gas Natural y su Integración en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, en el Estado de Tabasco

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 897,700.6 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los procesos de planeación, presupuestación, licitación, adjudicación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: no se cuenta con la evidencia del pago del Impuesto al Valor Agregado por un importe de 229,790.4 miles de pesos, ni se aplicaron las penas convencionales por atraso en la entrega de la obra por 76,000.5 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 305,790.9 miles de pesos

Pemex Refinación

Auditoría: 07-1-18T4M-07-0336

Auditoría al Indicador "Cumplimiento en la Producción de Petrolíferos" en Gasolinas Magna y Premium

Objetivo: Fiscalizar y verificar tanto la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados, así como el cumplimiento de los objetivos de dicho indicador en términos de eficacia, eficiencia y economía.

Muestra Auditada: 15,563,903.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Pemex Refinación y Pemex no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a los procesos de planeación, programación y presupuestación del indicador respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: En un contexto macroeconómico, del análisis de variables tales como: PIB Total, PIB de la industria petrolera, capital, productividad, mano de obra y rendimiento, se observó que la administración de los recursos tanto los aplicados como los generados por Petróleos Mexicanos no ha sido eficiente y eficaz, dado que no se ha cumplido para el caso de Pemex Refinación con uno de los objetivos para lo que fue constituida esta subsidiaria, en donde se orientan sus actividades a "satisfacer la demanda de productos petrolíferos de manera confiable, oportuna y a un mínimo costo, maximizando el valor de sus activo...", compromiso asumido por este organismo que rebasa sus atribuciones, ya que no cuenta con la capacidad para cumplirlo, y sus actividades se enfocan principalmente a la producción, por lo que para abastecer el mercado interno de gasolinas, ha tenido que recurrir en forma creciente a las importaciones, mermando de esta manera la balanza comercial petrolera.

En una visión micro, a nivel presupuestal vinculado al indicador, se demuestra la ineficiencia en la asignación de los recursos, ya que al considerar el gasto corriente y gasto de capital del periodo 2003- 2007, se verificó que las metas alcanzadas del indicador tuvieron una tasa media de decrecimiento del 1.5%, donde el capítulo de inversión física creció anualmente el 9.1%, destacando que la inversión con recursos programables decreció anualmente en 23.6% y la deuda contraída a través de Pidiregas ascendió a 9.0% anual. Asimismo, al analizar el comportamiento del gasto corriente, se corrobora que su participación en el Gasto Programable ha sido significativo (más del 65.0% promedio en el periodo 2003-2007) y que la parte sustancial se ha rezagado; en cuanto al análisis del subsidio, no existe una política de subsidios por parte de la autoridad, y que dado el carácter general de su otorgamiento en beneficio de los consumidores de gasolina, este no es transparente en su aplicación y registro, además que es inequitativo ya que favorece al que más consume. Al revisar los estados financieros de Pemex, se dedujo que efectivamente la entidad "subsidia" el costo de la gasolina asumiendo los costos de importación y de producción, y que como impuesto indirecto tiene una contraparte registrada en la Ley de Ingresos como estímulo fiscal a través del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) y se traslada al consumidor final vía incremento de los precios, situación que no se presentó en 2007, dando origen al denominado efecto de la tasa negativa del IEPS. Se verificó su programación en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2007 emitido por la SHCP, y se corroboró que registró una pérdida por un importe en precios de gasolina de 42,693.5 mdp. Pemex Refinación no recibe un solo peso de los ingresos provenientes del IEPS, y es el Gobierno Federal quien traslada el impuesto al público consumidor recibiendo el beneficio impositivo, por tanto estos recursos no forman parte del presupuesto de la entidad. Además, cuando la tasa es negativa, Pemex Refinación asume este efecto, originándole un costo financiero, que en el ejercicio de 2007 se ubicó en 957,438.1 miles de pesos.

Derivado del análisis anterior, se deduce que éste subsidio es proporcionado a través de Pemex Refinación, originándole un costo financiero y administrativo dado que financia en términos impositivos a la SHCP, además, los consumidores no reciben beneficio alguno, no

se tiene definido el objetivo, ni identificado con precisión la población, asimismo, carece de transparencia, no es equitativo y progresivo, e ignora a qué tipo de gasolinas está dirigido.

Adicionalmente, en lo que se refiere a los precios de gasolinas Magna, Premium y Diesel se compone principalmente por el precio de referencia, los ajustes de calidad, costos de manejo, logística y reparto, estas variables son en esencia el ingreso de Pemex Refinación; sin embargo, existen otras variables que también se encuentran en la estructura, tales como las comisiones de las estaciones de servicio, el propio IEPS y el IVA, en donde el impuesto especial es preponderante para determinar el precio al público. Es importante señalar que en esta estructura, no se consideran los costos de mantenimiento, operación y administración de Pemex Refinación, por lo que con los ingresos de la entidad, ni siquiera se llega a cubrir los costos básicos para el mantenimiento mínimo de las refinerías.

En lo que se refiere al registro del IEPS, se desconoce los beneficiarios de los importes registrados en el PGF 2007, específicamente para el rubro de las gasolinas para otros consumidores por 15,370.9 mdp, y lo que efectivamente dejó de recaudar. Por tanto, en resumen, el IEPS es pagado por los consumidores, beneficiando con la exención del impuesto a una población no definida. En lo que se refiere a la eficacia, la meta del indicador estratégico proyectada en el ejercicio 2007, se ubicó en 494,691.0 mba, del cual se alcanzaron 483,217.0 mba, esto es, el 97.7% de la meta planeada. En específico, la meta planeada del proceso de crudo registrada fue de 1,310 miles de barriles por día (mbd), a pesar de que el sistema cuenta con una capacidad nominal de 1,540 mbd. La meta alcanzada fue de 1,270 mbd de crudo refinado, sin considerar el volumen de elaboración. Los resultados obtenidos no superaron la meta proyectada del SNR, alcanzándose entonces un nivel de cumplimiento del 96.9%; sin embargo, en función de la capacidad de diseño, el margen de utilización se ubicó en el 85.2%, rango aceptable de acuerdo a los parámetros internacionales. En la producción de los productos petrolíferos objeto de esta revisión (gasolina Magna y Premium), el SNR ha cumplido en un 97.7% con respecto al volumen total de gasolinas a producir, porcentaje que se puede desagregar de la forma siguiente: para gasolina Magna un cumplimiento del 98.3%, gasolina Premium un 91.4% y para gasolina base un 92.1%; sin embargo en forma individual los volúmenes obtenidos de gasolinas varían en mayor proporción a las metas específicas planeadas. Derivado de lo anterior, se verifica que la planeación de la producción del sistema es aceptable dadas sus limitantes (almacenamiento, distribución y mantenimiento); sin embargo, debido a que esas limitantes no han sido resueltas en años, esta planeación se ha mantenido en un escenario conservador ya que se encuentra por debajo de las necesidades reales del mercado y del nivel de procesamiento del mismo sistema, esto excluyendo la calidad de las gasolinas que se producen. Por lo que se concluye ineficacia en la administración del sistema debido a que los escenarios (conservadores) proyectados se encuentran fuera del contexto real y de las necesidades reales de la demanda; y a la fecha no han sido atendidos los problemas críticos del sistema a nivel refinerías. En reflejo de la planeación expuesta, ha conllevado al uso inadecuado de los recursos por la salida de divisas al incrementar el nivel de las importaciones para satisfacer la demanda nacional.

En el concepto de eficiencia-economía, se tomaron en cuenta variables tales como: el índice de conversión de crudo, inversión, mano de obra, barriles procesados y producidos. En lo que se refiere a la conversión de crudo a gasolinas se encontró que a nivel internacional con

la costa norte del Golfo de México en las refinerías de Estados Unidos, el rango oscila entre el 41.0% y el 45.0% para 2007, mientras que el sistema sólo alcanzó el 34.7% cuando la meta proyectada fue del 35.6%, situación que no se cumplió en ambas expectativas. Asimismo, a nivel nacional, la refinería que obtuvo el nivel de conversión más elevado fue la ubicada en Cd. Madero; mientras que la refinería localizada en Minatitlán, Ver., se tuvo el porcentaje más bajo, esto debido a la obsolescencia de sus procesos e instalaciones.

En lo que se refiere a la inversión versus mano de obra, se encontró que la refinería más eficiente fue la ubicada en Salina Cruz, Oax., ya que esta procesa 93 Barriles Día-Persona (BDP) de crudo y la refinería menos eficiente fue la Salamanca con un nivel de refinación de 40.12 BDP.

Un ejemplo de lo anterior, se observa en el margen total de operación por refinería y por sistema, que comparativamente con la refinería en los Estados Unidos (Deer Park), se ubicó en el ejercicio de 2007 en -3.7 dólares por barril para el SNR, esto es, 12.9 dólares por debajo de la refinería Deer Park. Cabe destacar que la refinería con menor margen de operación fue la de Francisco I. Madero con -6.8 dólares por barril. En conclusión, a nivel internacional el sistema se encuentra por debajo de los estándares establecidos, y al ser una referencia, el cumplimiento en cuanto a eficiencia-economía del indicador ha sido negativo, ya que se observa que la partida de gasto corriente tiene una participación de 3.32 veces mayor que el gasto de capital en el 2007, aspecto que se reitera para años anteriores.

En el Programa de Mantenimiento, se detectó que la planeación de Paros Programados de Plantas y/o Trenes de Refinación en las refinerías difieren significativamente de sus programas; esto, debido a la falta de presupuesto, lo cual no permite que se optimicen los recursos para la producción de petrolíferos. Esta situación refleja deficiencias en la programación y presupuestación de los recursos. Por otro lado la empresa Solomon Associates (consultor de Pemex Refinación) ha sintetizado para 2007 en una proporción de más de 4 a 1, el fenómeno de paros fuera de programa, respecto a la media internacional por incumplimientos en los Programas de Mantenimiento planeados y no ejecutados. Cabe señalar que el costo de mantenimiento expresado porcentualmente es equiparable a los costos registrados en Europa, situación que resulta anormal, debido a que los costos en el país de mano de obra y refacciones (aún siendo de importación) son muy inferiores a los del continente mencionado; ineficiencia en la planeación y aplicación de los recursos, así como falta de optimización de los mismos, teniéndose como resultado un impacto negativo por el rezago en la entrada en operación de la reconfiguración de la refinería "Lázaro Cárdenas" en Minatitlán, Ver., lo cual ha implicado para el SNR dejar de producir del último trimestre de 2007 al arranque estimado de este proyecto (1er. Trimestre de 2010) 59 mbd de gasolinas, que en términos monetarios se ubica en 53,492 mdp. Insuficiente indicador estratégico ya que sólo mide la eficacia por lo que no refleja el desempeño real de la entidad, dado que no se encuentran desglosados los productos que obtiene Pemex Refinación, no se desagregan las actividades, ni las áreas vinculadas a la producción comprendidas las administrativas, además de que incluye el mantenimiento de las instalaciones, cuando este rubro se encuentra rezagado del presupuesto. Situación que no permite detectar con claridad las áreas de oportunidad y mejora.

Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa" Cadereyta, N.L.

En la eficiencia-economía de la refinería, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; sin embargo, el costo de producción se elevó en un 1.07% con respecto al original. Cabe señalar que la participación del gasto de capital con respecto al total ejercido fue únicamente 23.1%, aspecto que resulta incongruente con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción y más, cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones.

En el concepto de mantenimiento, se verificó que la refinería destina sólo el 29.88% del gasto total ejercido a este concepto, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo, dado que en el 2007 el gasto de mantenimiento (cuenta 204) con el gasto de capital se ubicó en 10.8 pesos por barril procesado, esto es, una proporción de 3.2 a 1 el importe total del gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se pierde el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener productos petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna; insuficiencia en los volúmenes de almacenamiento de crudo y gasolinas en la Refinería de Cadereyta, situación que puede traducirse en una menor producción de productos petrolíferos, derivada de paros no programados en las plantas primarias de destilación por falta de crudos, situación ya ocurrida en el 2007, debido a los siniestros en la red de ductos distribución de crudo del sistema.

Refinería "Ing. Antonio M. Amor", Salamanca, Gto.

En la eficiencia-economía de la refinería, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; sin embargo, el costo de producción aumentó en un 2.5% con respecto al modificado. Cabe señalar que la participación del gasto de capital con respecto al presupuesto total ejercido fue únicamente 17.4%, aspecto que resulta incongruente con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción y más, cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones; en el concepto de mantenimiento, se verificó que la refinería destino sólo el 24.89% del gasto total ejercido, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo, dado que en el 2007 la contribución al gasto de mantenimiento aunado al gasto de capital se ubicó en 9.72 pesos por barril procesado; estableciéndose una proporción de 3.02 a 1 el importe total del gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se pierde el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener productos petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna.

Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", Salina Cruz, Oax.

Para el ejercicio fiscal 2007, la capacidad instalada fue de 330 mbd para refinación de crudo, la meta programada fue de 288.50 mbd; sin embargo, la meta alcanzada fue de 271.5 mbd, esto es, 5.9% menor a la programada. En cuanto a las gasolinas, la eficacia refleja que para el mismo ejercicio, la meta programada por la refinería fue de 91.6 mbd, alcanzándose

94.20 mbd lo que representó el 102.8% de eficacia en este rubro; en la eficiencia-economía, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; sin embargo, el costo de producción se elevó en un 63.90 % con respecto al costo original. Cabe señalar que la participación de gasto de capital con respecto al total ejercido fue únicamente 30.2 %, aspecto que resulta incongruente con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción y más aún cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones. En el cumplimiento de mantenimiento, se verificó que la refinería destinó sólo el 36.9% del gasto total ejercido a este concepto, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo, dado que en el 2007 la contribución en el gasto de mantenimiento fue de \$1.74 por barril procesado, con el gasto de capital se ubicó en 10.06 pesos por barril procesado; finalmente se generó una proporción de 2.31 a 1 el importe total del gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se pierde el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener productos petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna.

Refinería "Francisco I. Madero", Cd. Madero, Tamps.

La refinería ubicada en Ciudad Madero Tamaulipas, ocupa el quinto lugar a nivel nacional en producción de petrolíferos, con una capacidad nominal operativa de procesamiento de crudo de 190 mbd; para el ejercicio de 2007, la refinería programó una producción promedio de 160.90 mbd, 18.0% por abajo de la capacidad instalada. En cuanto a la eficacia en la producción de gasolinas se observó que la refinería solo cumplió con un 95.96% con la meta planeada de acuerdo al Sistema Nacional de Refinación (SNR). En la eficiencia-economía, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; sin embargo, el costo de producción se elevó en un 60.7% con respecto al original. El costo unitario por barril en gasto corriente fue de 26.44 pesos incluyendo los pasivos laborales, para posteriormente alcanzar un costo de 48.68 pesos; en lo que se refiere a gasto de capital, el costo unitario de barril, se ubicó en 15.20 pesos, esto es, en total con ambos gastos, el barril de crudo procesado costó 63.88 pesos. Cabe señalar que la participación del gasto de capital con respecto al total ejercido en gasto modificado fue únicamente 23.8%, aspecto que resulta incongruente con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción y más, cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones. En el concepto de mantenimiento, se verificó que la refinería destinó sólo el 26.9% del gasto total ejercido a este concepto, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo, dado que en el 2007 la contribución en el gasto de mantenimiento de la cuenta 204 con el gasto de capital se ubicó en 16.95 pesos por barril procesado; esto es, una proporción de 2.7 a 1 el importe total del gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se pierde el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener productos petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna. En los avances del plan de acción ambiental para el hallazgo Núm. 4 del factor suelo y subsuelo, en donde se marca que la actividad fue concluida, se observó en los recorridos en campo que dicha acción no

se había concretado o se repitió la afectación. Lo anterior se observó en los equipos de bombeo de casa de bombas No. 8, derrames de hidrocarburos; para el hallazgo Núm. 21 del factor riesgo ambiental, ubicación casa de bombas MFA con derrames de hidrocarburos originados por fugas de los equipos, se reporta que la actividad fue concluida. En el recorrido de visita de campo se observó que dicha afectación reincide.

Refinería "Miguel Hidalgo" Tula de Allende, Hgo.

En la eficiencia-economía, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; incrementando su costo de producción en un 47.7% con respecto al original. Cabe señalar que la participación del gasto de capital con respecto al total ejercido en gasto modificado fue únicamente 17.2%, aspecto que resulta incongruente con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción y más aún cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones. En el concepto de mantenimiento, se verificó que la refinería destina sólo el 25.0% del gasto al concepto de la inversión, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo, dado que en el 2007 la contribución en el gasto de mantenimiento con el gasto de capital se ubicó en 2.04 pesos por barril procesado y con el gasto de capital se ubicó en 6.47 pesos por barril procesado, esto es, una proporción de 4.8 a 1 el importe total del gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se pierde el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener productos petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna.

Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", Minatitlán, Ver.

En la eficacia en la producción de gasolinas se observó que la refinería cumplió en 77.4% con la meta planeada de acuerdo al SNR. Ya que por paros no programados su producción se redujo significativamente en los meses de mayo a noviembre de 2007, dejando de producir un promedio diario de 6,212.1 bd de gasolina magna, con un valor comercial interno aproximado de 2,157 mdp. Además se observó ineficiencia en la planeación y aplicación de los recursos, así como falta de optimización de los mismos, teniéndose como resultado un impacto negativo por el rezago en la entrada en operación de la reconfiguración, lo cual ha implicado para el SNR dejar de producir del último trimestre de 2007 al arranque estimado de este proyecto (1er. Trimestre de 2010) 59 mbd de gasolinas. En la Eficiencia-Economía, se verificó que se alcanzó la meta propuesta en lo que respecta a la capacidad de proceso de crudo; sin embargo, el costo de producción se elevó en 38.4% con respecto al original. Cabe señalar que la participación de gasto de capital con respecto al total ejercido fue apenas del 2.7%, aspecto que resulta en total incongruencia, con las necesidades reales de la refinería, en donde el mantenimiento (inversión física) es prioritario para poder sostener el nivel de producción, mejorar el nivel de calidad de las gasolinas (es decir aumentar el octanaje) y más cuando el indicador estratégico que se revisa incluye el mantenimiento de las instalaciones. En el concepto de mantenimiento, se verificó que la refinería destina solo el 7.9% del gasto total del ejercicio, lo cual representa un porcentaje incongruente con respecto al nivel de procesamiento de crudo y nivel de obsolescencia de las instalaciones de procesos, dado que en el 2007 el gasto de

mantenimiento con el gasto de capital se ubico en 2.37 pesos por barril procesado, esto es, una proporción de 36.04 a 1 el importe total de gasto corriente respecto al gasto de capital. Esta situación refleja ineficiencia en la aplicación de los recursos, además de una falta de optimización de los mismos, debido a que se perdió el objetivo real de la refinería, que es la de procesar el crudo y obtener producto petrolíferos necesarios para cubrir la demanda interna. En materia de agua y respecto al Plan de Acción para la Planta Primaria No. 5, se encontró que existen arrastres de hidrocarburos en drenajes pluviales y la falta de drenajes aceitosos en la casa de bomba central, así como drenaje químico en plantas de proceso para corrientes de sosa, purgas de aguas amargas y escurrimientos en planta desmineralizadora y neutralizadora. Así mismo no se cuenta con programas de mantenimiento para los drenajes rehabilitados y finalmente, en el sistema de drenaje pluvial y aceitoso con arrastre de hidrocarburos, no se desasolvan los registros de drenaje pluvial.

Auditoría: 07-1-18T4M-02-0267

Contratación de Servicios Generales

Objetivo: Fiscalizar que la gestión financiera de los recursos públicos aplicados se adjudicaron, recibieron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, así como verificar la economía, eficiencia y eficacia de los contratos celebrados.

Muestra Auditada: 2,231,081.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, PEMEX Refinación no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la contratación de los servicios registrados en el capítulo 3000 "Servicios Generales" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: PEMEX Refinación no procedió a la terminación anticipada a favor de PEMEX Refinación del contrato núm. PR-SPD-024/94, con la empresa Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V., con vigencia de noviembre de 1994 a noviembre de 2009, para la prestación de servicios para la construcción, puesta en marcha y operación de una planta para el tratamiento de uso integral de agua, por la quiebra de ésta declarada por el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil el 22 de junio de 2004, situación prevista en la cláusula 38.6 del contrato, ni realizó una licitación pública para contratar una empresa para operar la Planta, y continuó su operación a través de la empresa Aquasistema Salina Cruz, S.A. de C.V. (empresa constituida por BICONSA y sus empresas filiales Degremont, S.A. de C.V., y Marubeni Corporation); durante el ejercicio de 2007 el organismo pagó a BICONSA 247,782.5 miles de pesos por la prestación de servicios. Se observó que el expediente del contrato de BICONSA carece de la documentación correspondiente al proceso de contratación y de la autorización de suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 73,475.5 miles de pesos

Auditoría: 07-1-18T4M-04-0132

Reconfiguración de la Refinería "General Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, en el Estado de Veracruz

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 84,866.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, Pemex Refinación no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en el resultado con observación, donde destaca lo siguiente: se adjudicó el contrato a precios unitarios para subsanar omisiones en los estudios y proyectos proporcionados por la entidad para la adjudicación del contrato a precio alzado núm. PR-OP-L-025/04P; por consiguiente, el contrato a precios unitarios careció de especificaciones de construcción y normas de calidad completos y autorizó su pago sin que éste contara con la integración y la documentación correspondiente al cálculo de los costos directos por mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, el factor de salario real, los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales para cada trabajo determinado, además de que las estimaciones no contaban con los números generadores, las notas de bitácora, los croquis, los controles de calidad, las pruebas de laboratorio y fotografías, ni con el análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes, por lo que se presume un presunto daño o perjuicio de 84,866.7 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 84,866.7 miles de pesos

K. SECTOR DESARROLLO SOCIAL
(Anexo 12 - 3 auditorías)

Secretaría de Desarrollo Social

Auditoría: 07-0-20100-07-0407

Auditoría de Desempeño al Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones), para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Muestra Auditada: 1,017,026.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance referido, en 2007 la SEDESOL, en el Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones), cumplió parcialmente con los objetivos de: impulsar a los Centros Estratégicos Comunitarios (CEC) mediante la dotación de servicios, infraestructura social y acciones de tipo productivo en 1,199 (40.4%) de los 2,966 CEC; fomentar la concurrencia de esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno en dichos centros, con la aportación federal de 617,426.8 (69.3%) miles de pesos, la estatal de 97,304.0 (10.9%) miles de pesos, y la municipal de 175,689.6 (19.8%) miles de pesos; contribuir al establecimiento de banderas blancas con 364 (77.1%) de las 472 levantadas por la estrategia de microrregiones; y promover la participación económica de los beneficiarios en 174 (5.5%) de los 3,161 proyectos apoyados por el programa; asimismo, la dependencia no dispuso de los elementos para promover la no duplicidad de acciones, ni registró la aportación de los beneficiarios en mano de obra y especie. Respecto de las metas, reportó eficacias de cumplimiento superiores al 100.0%, porque subestimó las metas, ya que para su programación no se basó en los avances físicos y financieros de los ejercicios anteriores.

En materia de operación, los resultados mostraron que la SEDESOL no contó con el registro de los tipos de apoyo que establecen las reglas de operación del programa; de una muestra analizada de 191 expedientes, tuvo eficiencias de: 97.9% en la integración de los acuerdos, anexos o convenios de ejecución, coordinación o concertación de los proyectos ejecutados; de 100.0% en los oficios de autorización, así como en los oficios y anexos de aprobación; de 33.0% en los avances físicofinancieros; y del 92.1% en las actas de entrega-recepción.

Respecto de la aplicación de los recursos, en el programa se erogaron 1,017,026.5 miles de pesos, de los cuales 884,586.0 (87.0%) miles de pesos se destinaron al otorgamiento de apoyos; 42,733.9 (4.2%) miles de pesos a la operación, supervisión, seguimiento y evaluación externa; 88,901.2 (8.7%) miles de pesos para el pago del personal de honorarios; y 805.3 (0.1%) miles de pesos a la adquisición de vehículos y equipo. Asimismo, las unidades responsables del programa en las Entidades Federativas enteraron a la TESOFE 6,070.2 (29.5%) miles de pesos, de forma extemporánea; y Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tamaulipas no acreditaron los productos financieros generados por 14.9 miles de pesos de reintegros extemporáneos.

La dependencia no dispuso de indicadores para evaluar la calidad de los proyectos apoyados mediante el programa, careció de mecanismos de control y seguimiento que garantizaran la conclusión y funcionamiento de los proyectos y no instrumentó medidas para conocer la opinión de la población beneficiaria.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 61,574.9 miles de pesos

Auditoría: 07-0-20100-02-0507

Programa de Empleo Temporal (Tabasco)

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar el flujo de los recursos autorizados, ministrados y liberados, y comprobar que su ejercicio se efectuó conforme a las Reglas de Operación y a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 109,617.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas aplicables al manejo, control y registro del presupuesto en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" Programa S071 "Programa de Empleo Temporal" respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones que se refieren principalmente a recursos de diversos programas manejados en una misma cuenta bancaria, lo que ocasionó mezcla de recursos; algunos pagos de jornales sin documentación comprobatoria; devolución de recursos en 2008 que no se reintegraron a la TESOFE; entrega de herramientas y materiales sin evidencia documental y recursos del PET utilizados en otros programas.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 13,950.1 miles de pesos

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Auditoría: 07-3-20VYF-02-0325

Subsidios para Vivienda

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los Subsidios otorgados a través de los programas de vivienda y verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en el ejercicio y comprobación del gasto de los subsidios, en su autorización, justificación y registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas.

Muestra Auditada: 521,326.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas y el extinto Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas (actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno del Estado de Chiapas) cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al otorgamiento de subsidios para la vivienda, transferencia de recursos para los Estados para la ejecución de los programas, aplicación de recursos transferidos por las instancias ejecutoras, el registro y control de las transferencias respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a que el proceso de adjudicación de materiales se realizó por el

proceso de licitación pública Estatal en lugar de aplicar la normativa federal; además, tres contratistas no reintegraron el importe pendiente de amortizar, por 11,524.1 miles de pesos, sin que se hayan hecho acciones para su recuperación; no se verificó el avance físico financiero de los programas de vivienda reportados por el 89.6%, debido a que durante 2008 no se había efectuado el registro de las operaciones de los programas de vivienda; la ejecución de 676 acciones de vivienda la realizó la fundación PRO-VIVAH sin la intervención del extinto INVI; se otorgaron subsidios mediante pagos con cheques, por 15,392.3 miles de pesos a 160 beneficiarios y no con acciones de vivienda; no se cuenta con controles para dar seguimiento de manera detallada a los recursos pendientes de comprobar por las delegaciones.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 11,524.1 miles de pesos

Consecuencias Sociales

Se detectaron viviendas que no están habitadas y las vialidades se encuentran en malas condiciones, existen deficiencias en la construcción, como filtraciones de agua, accesorios de baño en mal estado, deslinde del fraccionamiento no identificado, muros de contención inconclusos, así como vicios ocultos en la construcción; existen viviendas que encuentran abandonadas y en malas condiciones; además se observó la existencia de viviendas sin construir e inconclusas.

L. SECTOR TURISMO **(Anexo 13 - 1 auditoría)**

Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Auditoría: 07-3-21W3N-07-0189

Auditoría a las Acciones de Desarrollo de la Infraestructura Turística

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y FONATUR Constructora, S.A. de C.V. (antes FONATUR-BMO S.A. de C.V.) en el desarrollo de la infraestructura turística para fomentar el turismo, así como verificar el cumplimiento de los objetivos de crear y consolidar centros turísticos.

Muestra Auditada: 1,714,398.1 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cumplimiento de los objetivos de crear y consolidar centros turísticos, así como promover la inversión turística con el otorgamiento de créditos, como se precisa en los resultados con observación, donde

destacan los siguientes: desde el año 2004 el FONATUR no ha creado ningún centro turístico y, al cierre del ejercicio fiscal 2007, no había logrado concluir el proceso de consolidación de los centros turísticos en operación siguientes: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco; desde el año 2000 el fondo no ha otorgado créditos directos a los empresarios turísticos para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas, que contribuyan al fomento del turismo; no dispuso de los planes maestros de desarrollo de cada centro turístico en operación, y no adquirió la reserva territorial prevista para el impulso de nuevos proyectos turísticos.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, FONATUR Constructora, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cumplimiento del objetivo de realizar el mantenimiento de los centros turísticos en términos de las actividades de poda, riego, barrido y tratamiento de las aguas residuales, respecto de las operaciones examinadas.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

En 2007, el FONATUR no estableció metas para evaluar el impacto de los CIP en el desempeño turístico y el desarrollo económico regional en función de los planes maestros, en términos de los indicadores: cuartos disponibles, índice de ocupación de cuartos y llegada de turistas, así como captación de divisas y generación de empleos. Se verificó que el FONATUR no dispuso de metas para evaluar el impacto del Programa de Calificación de Proyectos Turísticos, en términos de los créditos otorgados, la inversión canalizada en infraestructura y la generación de cuartos nuevos.

M. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA **(Anexo 14 - 3 auditorías)**

Secretaría de la Función Pública
Auditoría: 07-0-27100-07-0570

Auditoría de Desempeño al Sistema de Administración Inmobiliario Federal en la Administración Pública Federal Centralizada

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Muestra Auditada: 1,418,078.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Marina; así como la Procuraduría General de la República y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales no cumplieron con las

disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes:

El INDAABIN no estableció indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Administración Inmobiliaria, de lograr la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario de la APF Centralizada.

De los 11,507 inmuebles que integran el inventario del patrimonio inmobiliario de la APF Centralizada, el 30.0% (3,448 inmuebles) carece de algún dato o documento que acredite la propiedad del Gobierno Federal, y el 60.9% (7,000 inmuebles) no cuenta con el documento que acredite su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal.

El INDAABIN careció de mecanismos para verificar el avance en el cumplimiento de los programas de regularización administrativa y jurídica presentados por las dependencias de la APF Centralizada, de un universo de 6,679 inmuebles irregulares, de los que el 58.0% (3,871 inmuebles) carecen del documento que acredite su incorporación en el patrimonio inmobiliario federal, y el 42.0% (2,808 inmuebles) no contó con la asignación por parte del INDAABIN.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó 34 observaciones sobre el registro contable en materia de inmuebles, a los informes de la Cuenta Pública de 2007, de 14 dependencias, en las que predominaron como causas del incumplimiento, el registro incorrecto de los saldos de obras en proceso de años anteriores y la diferencia en el traspaso de los saldos.

La Secretaría de la Función Pública no realizó auditorías o acciones específicas para la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Federal (APF) Centralizada, ni de adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, aseguramiento e inventario de inmuebles. Además, no definió acciones para vigilar que la contabilidad, el registro de las operaciones y los estados financieros se sustenten en los postulados técnicos establecidos por la SHCP.

De las 21 dependencias de la APF Centralizada, 2 (9.5%), las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, no remitieron el Libro de Inventarios y Balances, y una, la Secretaría de Desarrollo Social, no remitió ninguno de los tres libros; sólo a 4 secretarías (19.0%), las de Energía, de Relaciones Exteriores, de la Función Pública, y de la Defensa Nacional, les fueron autorizados los 3 libros principales de contabilidad, a 12 (57.1%), la SHCP no les autorizó el Libro de Inventarios y Balances, y a 2 (9.5%) no les fue autorizado ninguno, por lo que no se dispone de información que dé certeza sobre el cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental relativos a la Revelación Suficiente y la Importancia Relativa en el registro contable del Activo Fijo.

Para atender el área de opacidad y riesgo determinada por la Auditoría Superior de la Federación, sobre las deficiencias del sistema contable gubernamental en materia de contabilidad patrimonial, la H. Cámara de Diputados aprobó el 4 de noviembre de 2008 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual asume como premisa básica el

registro, control y valuación del patrimonio del Estado; establece que los entes públicos de los diferentes órdenes de gobierno dispongan de una contabilidad armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos, y precisa el contenido de la Cuenta Pública, para que el Poder Legislativo de cada orden de gobierno cuente con mejores elementos para fiscalizar el gasto público.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 1,166.8 miles de pesos

Auditoría: 07-0-27100-07-0501

Auditoría de Desempeño al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la actividad prioritaria "Impulsar la innovación y eficiencia administrativa en la APF" donde se ubica el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Muestra Auditada: 15,851.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que en el ejercicio fiscal 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no cumplió: a) con el objetivo general del SIIPP-G de integrar en forma estructurada y sistematizada la información de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF; b) con los 10 objetivos específicos establecidos en su decreto de creación y en el manual de operación del SIIPP-G. Incluyó la información de 45 padrones de beneficiarios de los 117 programas de la APF que otorgaron subsidios sujetos a reglas de operación, la información que integró no cumplió todos los requisitos establecidos en el manual de operación; la SFP no realizó 9 de las 12 funciones que estableció el decreto de creación para operar y administrar el SIIPP-G. El manual de operación del SIIPP-G no estableció todos los procedimientos necesarios para regular el ejercicio de las 12 funciones a cargo de la SFP. El SIIPP-G se incluyó en la Actividad Prioritaria "Impulsar la innovación y eficiencia administrativa", sin que se identificaran objetivos programáticos, metas, indicadores y presupuesto para su administración y operación. La SFP ejerció el 61.0% del presupuesto aprobado en la Actividad Prioritaria donde se ubica presupuestalmente el SIIPP-G, debido principalmente a que se mantuvieron vacantes 9 de las 25 plazas de la estructura orgánica de la Dirección General de Simplificación Regulatoria; las actividades del SIIPP-G fueron realizadas por 2 mandos superiores y 1 mando medio.

Auditoría: 07-0-27100-07-0590

Auditoría de Desempeño sobre el Cumplimiento de los Convenios de Desempeño de los Centros Públicos de Investigación

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los Convenios de Desempeño celebrados con los Centros Públicos de Investigación, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Muestra Auditada: 3,255,306.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes:

Los criterios aplicados por diversas instancias para evaluar a los 24 centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT revelaron inconsistencias en los resultados sobre su desempeño, por lo que no fue posible medir los resultados, el impacto y los beneficios de los recursos asignados a la investigación científica y tecnológica.

El CONACYT no gestionó ante la SHCP el otorgamiento de facilidades administrativas y excepciones de autorización presupuestarias, a los 24 centros públicos de investigación que suscribieron Convenios de Desempeño, previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología y en dichos convenios, para impulsar la administración y operación de las actividades inherentes al cumplimiento del objeto de los convenios.

El CONACYT no estableció mecanismos para verificar la confiabilidad de la información proporcionada por los centros públicos de investigación que coordina, sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los Convenios de Desempeño, ni dispuso de información sobre el cumplimiento de las metas incluidas en el Programa Multianual de Metas Sustantivas por parte de los centros públicos de investigación.

El CONACYT no estableció parámetros para evaluar el cumplimiento del objeto de los Convenios de Desempeño suscritos por los 24 centros públicos de investigación que coordina, en términos de alcanzar mayores metas y resultados, y de promover un ejercicio eficiente y eficaz de los recursos públicos, ni para evaluar la economía con que los centros llevaron a cabo sus actividades relacionadas con los Convenios de Desempeño.

El CONACYT no dispuso de información sobre el presupuesto de 2007 asociado a los indicadores establecidos en los Convenios de Desempeño, lo que no permitió verificar el ejercicio de los recursos vinculados con los resultados obtenidos. El CONACYT y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública no realizaron las evaluaciones trimestrales y anuales, correspondientes al ejercicio 2007 sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Convenios de Desempeño por los 24 centros públicos de investigación que coordina el CONACYT.

En 2007, el CONACYT y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública no suscribieron, con los 24 centros públicos de investigación, coordinados por ese consejo, los Convenios de Administración por Resultados que, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, debían suscribirse a más tardar el 22 de agosto de ese año.

N. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA **(Anexo 15 - 3 auditorías)**

Prevención y Readaptación Social **Auditoría: 07-0-36E00-02-0471**

Socorro de Ley

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de la Partida 2202 "Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 309,084.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 2202 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras" respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: fundamentalmente la carencia de un marco normativo específico que regule la transferencia de recursos a las Entidades Federativas; los convenios suscritos con las Entidades Federativas no aseguran la forma, términos, cuotas y demás elementos para transferir y ejercer los recursos por concepto de Socorro de Ley; además, no se han establecido normas o políticas para la determinación de la cuota de Socorro de Ley; y se identificaron erogaciones por 11,765.9 miles de pesos, que corresponden a pagos duplicados, pagos en demasía y oficios de compurgamientos y listados de beneficios otorgados, que no fueron considerados para la determinación del importe de Socorro de Ley.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 11,765.8 miles de pesos

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Auditoría: 07-0-36D00-07-0227

Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en los Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema referido, para la realización de acciones en materia de seguridad pública.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no cumplió los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ni instrumentó acciones ni mecanismos que propiciaran un mejor uso de los mismos, con objeto de impulsar el cumplimiento pleno de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte de los Convenios de Coordinación celebrados entre la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos de las Entidades Federativas para la realización de acciones en materia de Seguridad Pública en 2007, y tampoco consolidó un Sistema Nacional de Información homogéneo, confiable e integrado, respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: el incumplimiento de metas anuales, los importantes subejercicios presupuestarios registrados y la falta de equipamiento mínimo necesario para que el cuerpo policial preventivo haga frente a la delincuencia organizada.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

Con base en el análisis realizado, se puede afirmar que los recursos presupuestarios federales, estatales y municipales destinados a la seguridad pública no han sido suficientes para enfrentar el crecimiento acelerado de la delincuencia y, por otra parte, las asignaciones presupuestarias no se ejercieron a plenitud ni se utilizaron de manera eficiente al menos en los cuatro ejes seleccionados en esta auditoría. Por ello, los resultados en la materia al 2007 son pobres y dispersos, tanto a nivel de las metas de mediano como las de corto plazo, situación que refleja la deficiente planeación, programación y ejecución que prevaleció en el uso de los recursos públicos en la materia.

El bajo cumplimiento de las metas de largo plazo obliga a reiterar que se cumpla de manera estricta la imperiosa necesidad de mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación. Además, dado que no se han celebrado la totalidad de los convenios y/o acuerdos a nivel nacional que permitan la interconexión entre todas las dependencias y entidades estatales encargadas de la seguridad pública preventiva, el Sistema Nacional de Información presenta problemas de cobertura territorial, de bases de información relativa al equipamiento y confiabilidad en la información suministrada. Por lo anterior, no se establecen de manera coordinada las estrategias y líneas de acción encaminadas a combatir eficientemente los índices delictivos entre las diferentes instancias del gobierno federal y estatal.

Auditoría: 07-0-36D00-02-0475

Apoyos de Seguridad para Michoacán y para Contratación de Servicios

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de las Partidas 4216 "Michoacán" y 4303 "Transferencias para Contratación de Servicios", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 279,421.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las partidas 4216 "Michoacán" y 4303 "Transferencias para contratación de servicios relativas a la planeación, administración, ejecución, control y registro respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren a que no supervisó las acciones ejecutadas por la Entidades Federativas conforme a lo pactado en el convenio para el otorgamiento de un subsidio, ni solicitó información sobre la ejecución de los trabajos o adquisiciones de bienes o servicios, objeto del convenio y no efectuó la evaluación trimestral en coordinación con la Entidades Federativas sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos; así como el impacto de las acciones realizadas; no fue posible revisar cinco procedimientos de adjudicación y los contratos correspondientes por un total de 1,975.6 miles de pesos; y las pólizas cheque correspondientes al ejercicio de la partida 3418 "Impuesto sobre Nóminas", por un importe de 3,948.7 miles de pesos, que no fueron proporcionados por el SESNSP en el transcurso de la revisión, y diferencias en la información reportada en la Cuenta Pública 2007 por 19,791.6 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 19,791.6 miles de pesos

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 10,312.0 miles de pesos

O. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA **(Anexo 16 - 2 auditorías)**

CONACYT

Auditoría: 07-1-3890X-06-1066

Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los apoyos del Gobierno Federal a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que invirtieron en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología para la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, se ajustaron a la legislación y normativa.

Muestra Auditada: 709,070.4 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que el CONACYT no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de sus operaciones

relacionadas con el Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología, donde destacan los siguientes:

El diseño del sistema de control interno que tiene establecido el CONACYT para el Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología, no brinda una seguridad razonable, en virtud de que el procedimiento de estímulos fiscales no es transparente por las diversas fallas y omisiones que presenta en la información que los contribuyentes capturan y remiten en línea a la Dirección de Estímulos Fiscales, y no se elabora un informe de impactos y beneficios global, que genere información útil para el sector público de los resultados obtenidos con los proyectos beneficiados, y su impacto en el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país, en incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal; el Comité Interinstitucional publicó en el Diario Oficial de la Federación el informe sobre los contribuyentes a los que se les autorizó el estímulo fiscal y el acuerdo para modificar las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité Interinstitucional, fuera de los plazos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley de Ciencia y Tecnología, respectivamente; asimismo, el citado comité autorizó estímulos fiscales: a los proyectos que ya habían recibido otro tipo de apoyos, y a los contribuyentes que no se encontraban registrados previamente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que no cumplieron con el correcto llenado de la carta bajo protesta de decir verdad.

No se pudo comprobar que los contribuyentes que enviaron su solicitud en línea de estímulos fiscales lo hicieron en el tiempo establecido en las Reglas Generales, toda vez que el formato para la solicitud del estímulo fiscal carece de un apartado que muestre la fecha de captura y envío.

El CONACYT realiza la evaluación técnica de los proyectos que solicitan estímulos fiscales; sin embargo, no se identificó el área administrativa encargada de la revisión física de los comprobantes de gastos que el contribuyente declara en la solicitud correspondiente.

Los contribuyentes beneficiados con los estímulos fiscales no presentan el reporte de impactos y beneficios por el año inmediato posterior al que recibieron el estímulo correspondiente, sino que lo hacen un año después, y el CONACYT no elabora un informe consolidado de impactos y beneficios en el que se exponga el impacto que representó para la economía nacional el otorgamiento de dichos estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, por lo que el Sector Público desconoce si al haberse otorgado los estímulos fiscales el país logró avances en materia de ciencia y tecnología.

El Secretario Técnico del Comité Interinstitucional no cumplió con notificar a los contribuyentes a los que debió cancelarse el estímulo fiscal por incumplimientos en la entrega del reporte de impactos y beneficios, y por la falta de inscripción en el RENIECYT, para que se efectúe el reintegro correspondiente.

El sistema informático integral denominado "People Soft" carece de un apartado en el que se vigile la aplicación que el contribuyente realiza del estímulo fiscal otorgado, en sus declaraciones anuales hasta extinguirlo en su totalidad.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 3,942.4 miles de pesos

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Auditoría: 07-1-3891U-04-0335

Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario del Gran Telescopio Milimétrico de Acuerdo a la Fase F1.1, en el Estado de Puebla

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 14,714.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: 2,218.1 miles de pesos, por adjudicaciones fuera de norma, 3,023.4 miles de pesos, por obra de mala calidad, los segmentos de los paneles no cumplieron con la calibración especificada, ni con las características de alineación objeto de los contratos para los paneles de la antena del Gran Telescopio Milimétrico, que permitieran alcanzar los objetivos de alineación y poder brindar los beneficios que se consideraron para el desarrollo de este proyecto.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 5,241.5 miles de pesos

P. PODER LEGISLATIVO (Anexo 17 - 1 auditoría)

Cámara de Diputados

Auditoría: 07-0-01100-02-0435

Gestión Financiera

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 2,019,400.5 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la H. Cámara de Diputados cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la programación, presupuestación, ejecución, control, comprobación y registro del presupuesto asignado en el 2007, excepto por las observaciones, entre las que destacan las siguientes: al cierre del ejercicio se transfirieron recursos a la subpartida 3827-3 "Subvención Ordinaria Variable" por 78,886.2 miles de pesos, no obstante que la normativa interna lo prohíbe; se observó la transferencia de recursos al cierre del ejercicio de 2007 por 87,326.0 miles de pesos, a dos partidas de gasto, los cuales se destinaron para la compra vales de despensa sin que se utilizaran dentro del citado ejercicio, por lo que se presume que mediante este mecanismo se evita la concentración de recursos en la TESOFE; se observó la falta de normatividad y deficiencias que impiden opinar sobre la justificación y razonabilidad del gasto relacionado con viáticos y pasajes.

En lo que respecta al capítulo 6000 "Obras Públicas", destaca lo siguiente; se determinó fiscalizar un monto de 84,384.9 miles de pesos, que representan el 100% de la obra ejecutada en la gestión financiera 2007.

No existió un control y seguimiento de las garantías al no hacer efectiva la de cumplimiento y aceptar garantías fuera de tiempo sin aplicar sanciones. Se realizó una planeación deficiente para la ejecución de los trabajos; iluminación insuficiente en las áreas de trabajo; pago improcedente de 9,683.7 miles de pesos por la incorrecta ejecución de la estructura; 720.6 miles de pesos por no garantizar la calidad de la barrera contrafuego; pagó de 3,001.2 miles de pesos de dos elevadores hidráulicos sin que estén funcionando; 1,533.2 miles de pesos por el pago indebido del panel de aluminio que no cumple con las especificaciones; trabajos mal ejecutados: 19.2 del sistema Impermeabilizante y 49.4 miles de pesos del concreto premezclado utilizado para dar pendientes en las azoteas; pago de 3,386.3 miles de pesos del sistema de aire acondicionado que no cumple con las condiciones de operación necesarias; pago de 1,167.7 y 812.3 miles de pesos en el suministro e instalación del circuito cerrado de televisión y detección de humos, sin que éstos se encuentren concluidos y operando; pago duplicado de 190.0 miles de pesos en la limpieza de estructura metálica; financiamiento improcedente por 275.6 miles de pesos; sanción no aplicada a la empresa supervisora por 365.1 miles de pesos al no cumplir con el objeto establecido en su contrato, por no revisar antes del inicio de los trabajos el proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos; pago indebido de 6,336.3 miles de pesos, por la incorrecta ejecución de la estructura, debido a que el proyecto estructural y de cimentación del edificio del Centro de Desarrollo Infantil que presenta errores en el análisis y diseño de los elementos estructurales, además no se presentaron los certificados de calidad de los materiales suministrados para la fabricación de la estructura, ni los reportes de laboratorio que

garanticen la calidad de las soldaduras y la barrera contrafuego; 115.5 miles de pesos por una incorrecta cuantificación de conceptos; omisión en la aplicación de sanciones por trabajos inconclusos por 375.4 miles de pesos y pago de financiamiento improcedente por 147.9 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 119,653.1 miles de pesos

Q. PODER JUDICIAL **(Anexo 18 - 1 auditoría)**

Consejo de la Judicatura Federal

Auditoría: 07-0-03110-02-0450

Adquisiciones de Bienes y Servicios

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en los Capítulos "Materiales y Suministros", "Servicios Generales" y "Bienes Muebles e Inmuebles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 750,160.3 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las "Adquisiciones de Bienes y Servicios" respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a los siguientes: el Consejo de la Judicatura Federal no tiene aprobado el Manual de Organización por parte del Pleno; adquirió 16,100 cartuchos de tóner para impresora láser Samsung, a un precio distinto del establecido en el mercado, lo que originó que se cubriera una diferencia de precios por 10,683.1 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2007 tenía almacenadas 20,017 piezas de cartuchos de tóner; y no aclaró el pago duplicado por el consumo de los servicios de energía eléctrica por 464.7 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 11,147.8 miles de pesos

R. ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE **(Anexo 19 - 9 auditorías)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Auditoría: 07-1-00AYB-07-0473

Auditoría de Desempeño al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Muestra Auditada: 2,881,095.9 miles de pesos

Dictamen: La falta de metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del PIBAI, y las deficiencias en su operación, no permitieron a la Auditoría Superior de la Federación determinar la contribución del programa respecto de mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las localidades indígenas: En 2007, ejecutó obras de infraestructura básica en beneficio 1,430 (10.1%) de las 14,184 localidades indígenas de alta y muy alta marginación que determinó como susceptibles de atender con el programa.

La Auditoría Superior de la Federación consideró para su evaluación, los objetivos contenidos en las reglas de operación del programa, en razón de que la CDI no incluyó en la clasificación funcional y programática del PEF y de la Cuenta Pública 2007, los objetivos y metas del PIBAI, así como los recursos federales destinados para su cumplimiento, por lo cual no se ajustó a disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la operación del programa se observó que se realizó el 81.6% de las 935 obras previstas en los convenios de coordinación y el 85.4% de los 322 estudios acordados en esos instrumentos.

En relación con el ejercicio del presupuesto, de los 4,489,387.0 miles de pesos autorizados al PIBAI, 3,937,922.2 (87.7%) fueron destinados al cumplimiento de los objetivos del programa: 2,881,095.2 miles de pesos (73.2%) fueron ejercidos por la CDI de manera directa mediante los acuerdos de colaboración suscritos con las Entidades Federativas y Municipios, y 1,056,827.0 miles de pesos (26.8%) mediante convenios suscritos con la CNA y SCT.

De los 551,464.8 miles de pesos restantes, 496,240.6 (90.0%) fueron utilizados en proyectos educativos de la SEP y a apoyar el programa Pro-árbol, acciones que resultaron diferentes de las obras de infraestructura básica que lleva a cabo el PIBAI (agua potable, alcantarillado y drenaje, electrificación, carreteras alimentadoras, y caminos rurales), lo cual motivo el incumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social; y 55,224.2 (10.0%) se transfirieron al Ramo 23 "Provisiones Salariales Económicas".

Respecto de los 2,881,095.2 miles de pesos ejercidos por la CDI de manera directa, no se contó con la documentación del ejercicio de 228,606.1 miles de pesos (7.9%) otorgados a

cinco gobiernos estatales; y de los 1,553,067.0 miles de pesos transferidos a las dependencias federales, la Auditoría Superior de la Federación contó con la evidencia de la aplicación del 9.1% de los recursos.

Los resultados con observación se refieren principalmente a la falta de un manual de organización que establezca las atribuciones y responsabilidades de las Unidad Administrativas de la CDI, en los términos que establece la primera Norma General de Control Interno emitida por la SFP.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,687,345.3 miles de pesos

Instituto Mexicano del Seguro Social

Auditoría: 07-100GYR-02-0201

Adquisición y Abasto de Medicamentos

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y abasto de medicamentos y materiales de curación en la Delegación Jalisco, verificar que se aplicaron las disposiciones legales y normativas en la contratación, recepción, distribución, pago y registro contable.

Muestra Auditada: 1,772,314.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Delegación Jalisco y las UMAE hospitales de Especialidades, Pediatría y Gineco- Obstetricia del CMNO del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a administración, ejecución, registro y control, de las adquisiciones de medicamentos y materiales de curación respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a penas convencionales que no han sido descontadas a los proveedores derivadas de incumplimientos parciales o totales y retrasos en la entrega de bienes por 316.4 miles de pesos y compras por 705.5 miles de pesos, sin soporte documental de la justificación y entrega del medicamento al derechohabiente o utilización en el servicio, así como deficiencias de control tales como diferencias en precio por 25,186.8 miles de pesos en licitaciones coordinadas a nivel central; falta de lineamientos a nivel central para la consolidación de necesidades que originaron diferencias en precio por las compras individuales que realizaron la Delegación Jalisco y las UMAE del CMNO por 626.6 miles de pesos; diferencias en precio por 2,491.6 miles de pesos por compras emergentes entre distribuidores; y desabastos y sobreexistencia de medicamentos por arriba del nivel de inversión autorizado por 126,540.2 y 25,665.3 miles de pesos, respectivamente, que repercuten en el caso de las primeras en compras emergentes y respecto de las segundas en posibles caducidades.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,569.4 miles de pesos

Auditoría: 07-1-00GYR-04-1130

Revisión de la Actividad Prioritaria K000 Proyectos de Inversión

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales, a fin de comprobar que se contó con el proyecto ejecutivo, se ejercieron los recursos en forma correcta en las estructuras metálicas y de concreto, se pagó adecuadamente el ajuste de costos y de indirectos, se cumplió con las normas de calidad y que se verificó el cumplimiento del programa de ejecución de los contratos, conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 440,295.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación y ejecución, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes: 1,754.9 miles de pesos, por gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada del contrato; 9,684.0 miles de pesos por sanción no aplicada; 1,359.2 miles de pesos por mala calidad; 40,970.3 miles de pesos y 22,964.4 miles de pesos, por gastos que no cumplieron con el objetivo del proyecto, debido a la incorrecta ejecución y revisión del estudio de mecánica de suelos; 27,319.3 miles de pesos, por el ajuste al costo indirecto derivados de la elaboración incorrecta e inoportuna de los estudios previos necesarios y, por ende, de proyectos y catálogos incompletos y deficientes, 1,019.0 miles de pesos por obra pagada y no ejecutada, y 4,958.0 miles de pesos por actualización incorrecta de precios unitarios de concurso.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 110,029.1 miles de pesos

Auditoría: 07-1-00GYR-04-0286

Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.

Muestra Auditada: 77,771.2 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, licitación y ejecución de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se refieren principalmente a que la entidad fiscalizada no ha puesto en operación la obra, realizó pagos por montos de 9,408.5 miles de pesos, por el ajuste del costo indirecto de concurso, derivado de un proyecto ejecutivo incompleto y deficiente y por 51,809.9 miles de pesos, por trabajos derivados de la inobservancia de las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, lo que ocasionó fisuras en diferentes muros y diversas áreas y los 638.7 correspondiente a conceptos de suministro y plantación de diversas especies que no sobrevivieron y por trabajos de mala calidad e improcedencia de indirectos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 61,857.1 miles de pesos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Auditoría: 07-1-00GYN-07-0567

Auditoría a los Juicios Laborales y de Pensiones en los que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sea parte

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para atender los juicios laborales relacionados con sus trabajadores y los promovidos por las pensiones que otorga en base a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ante los tribunales federales de Conciliación y Arbitraje y de Justicia Fiscal y Administrativa y otras autoridades, así como el ejercicio de las acciones, excepciones y defensas correspondientes; la interposición de los recursos y su comparecencia en los juicios de amparo, y verificar la congruencia de las acciones realizadas con los programas respectivos.

Muestra Auditada: 219,881.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la eficacia en la cobertura y cumplimiento de metas y objetivos, eficiencia en la operación, competencia de los actores y economía en la aplicación de los recursos, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a la omisión de dar contestación de tres demandas laborales y presentar de manera extemporánea la contestación de una demanda pensionaria y de un recurso de

revisión en la misma materia que en conjunto representan un presunto daño por 8,577.5 miles de pesos en contra del patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 8,577.5 miles de pesos

Auditoría: 07-1-00GYN-06-1125

Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de la normativa para el otorgamiento de donativos al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; corroborar el monto y destino de los recursos; verificar los acuerdos y convenios asociados con dichos donativos, y constatar su cumplimiento.

Muestra Auditada: 10,000.0 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 7505 "Donativos a Instituciones sin fines de lucro" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación, donde destacan los siguientes aspectos: la falta de la presentación del informe detallado de los gastos realizados correspondientes al donativo otorgado al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la Subdirección de Programación y Presupuesto a más tardar el 30 de noviembre del año correspondiente.

Auditoría: 07-1-00GYN-02-0317

Préstamos a Derechohabientes

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la cuenta "Préstamos a Derechohabientes" para verificar su asignación; que se hayan llevado a cabo las acciones administrativas y legales para la recuperación de los adeudos; que las aplicaciones a la reserva se encuentren justificadas y aprobadas por las instancias facultadas y que su registro contable se haya realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Muestra Auditada: 3,742,159.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el proceso

de otorgamiento y recuperación de préstamos respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con las observaciones que se refieren principalmente que se detectaron deficiencias importantes en el control interno en la salvaguarda y custodia de los expedientes, ya que se observó que las subdelegaciones de Prestaciones de las delegaciones regionales Zonas Norte y Oriente no cuentan con instalaciones adecuadas para el resguardo y custodia de los expedientes que contienen el pagaré que suscribe el beneficiario del préstamo, ni con un control de los mismos, ya que el saldo presentado por las delegaciones regionales Norte y Oriente del Distrito Federal, en la cuenta de "Préstamos a Derechohabientes" al 31 de diciembre de 2007, por un monto total de 3,742,159.9 miles de pesos, no está sustentado documentalmente en su totalidad, toda vez que en estas subdelegaciones no se han localizado en sus archivos 1,254 expedientes por 58,684.6 miles de pesos; en 12,649 créditos otorgados de 1980 a 1996, por un monto de 248,442.9 miles de pesos existe el riesgo de que prescriba el derecho de cobro; además, están en proceso de depuración y cobranza de sus carteras y se determinó que en un total de 11,134 préstamos que fueron otorgados en 2006 y 2007 por 169,189.0 miles de pesos, no se calcularon los intereses moratorios correspondientes, los cuales no se reflejan en la cuenta revisada, por lo que el saldo que presenta esta cuenta no es confiable; asimismo, estas subdelegaciones no han realizado acciones administrativas y legales para el cobro de 19,534 préstamos por un monto total de 287,444.5 miles de pesos.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 535,887.4 miles de pesos

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Auditoría: 07-4-00002-06-1124

Donativos Otorgados al Comité Ejecutivo de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de la normativa para el otorgamiento de los donativos al Comité Ejecutivo de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; corroborar el monto y destino de los recursos; verificar los acuerdos y convenios asociados con dicho donativo, y constatar su cumplimiento.

Muestra Auditada: 996.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 7505 "Donativos otorgados a Instituciones sin fines de

lucro", respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a que es pertinente que el FOVISSSTE revalore el otorgamiento de esta clase de donativos al Comité Ejecutivo de la Sección XLII del Sindicato Nacional Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que no se justifica y fundamenta la utilidad social del donativo, en tal caso dichos recursos se deben de otorgar en el marco de sus Condiciones Generales de Trabajo. En caso de seguir otorgando estos apoyos, se recomienda crear un mecanismo de control específico dentro del FOVISSSTE, para dar control y seguimiento a los recursos otorgados por esta vía.

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Auditoría: 07-4-00003-02-0321

Adquisición de Mercancías en Tiendas y Farmacias

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la Adquisición de Mercancías en Tiendas y Farmacias, registrada en la cuenta "Compras" y verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en el ejercicio y comprobación del gasto, su recepción, pago y registro contable de las operaciones realizadas.

Muestra Auditada: 1,022,113.9 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la adquisición de mercancía en tiendas y farmacias, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se refieren principalmente a la generación de pedidos con base principalmente en las sugerencias de los proveedores, sin consultar el pedido sugerido que genera el Sistema de Mercaderías Venezia; mercancías sin cargo obsequiada por proveedores no registradas por 871.4 miles de pesos; carencia de licencias para la operación de las unidades de venta; falta de control de la mercancía recibida para emplaye; devolución de mercancías no recuperadas, mediante el descuento al pago de los proveedores por un importe de 232.9 miles de pesos; falta de depuración de la cuenta de proveedores e inconsistencias en la información que genera el Sistema Venezia.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 871.4 miles de pesos

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 232.9 miles de pesos

S. INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR **(Anexo 20 - 1 auditoría)**

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Auditoría: 07-4-99021-07-0693

Auditoría de los Recursos Federales Reasignados

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación superior mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Muestra Auditada: 129,011.7 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cumplió razonablemente con las metas establecidas para los indicadores institucionales relativos a la capacidad y competitividad académica, los cuales muestran evolución y crecimientos durante el periodo 2001-2007, y con las metas para los proyectos autorizados en el marco del PIFI, de donde se desprende que contribuye al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de educación superior. Respecto de la gestión financiera, se considera que la universidad cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio, registro y control de los recursos federales reasignados, excepto por los resultados con observaciones que se refieren principalmente al atraso en la entrega de los informes programáticos y financieros y de los estados financieros, por parte de la universidad, y de los recursos federales, por parte del Gobierno del Estado; a la retención de improcedente de recursos del FAM, por parte del Gobierno del Estado; incumplimientos en materia de adquisiciones; la plantilla y tabuladores estipuladas en el Convenio de Apoyo Financiero no corresponde con las que opera la universidad, y en los estados financieros no se encuentra reflejado el pasivo contingente derivado del Sistema de Pensiones y Jubilaciones.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,422.9 miles de pesos

T. ÓRGANOS AUTÓNOMOS

(Anexo 21 - 1 auditoría)

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Auditoría: 07-0-32100-07-0599

Auditoría de Desempeño a las Acciones para Administrar los Recursos Humanos y Fijar las Bases de la Carrera Jurisdiccional

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados al cumplimiento de los objetivos y metas para administrar los recursos humanos y fijar las bases de la Carrera Jurisdiccional.

Muestra Auditada: 81,752.8 miles de pesos

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, ejecución y control de las operaciones en materia de recursos humanos al no haber emitido las bases de la Carrera Jurisdiccional, así como las políticas, las normas y los procedimientos para llevar a cabo los procesos de ingreso (reclutamiento, selección y contratación), evaluación del desempeño, promoción, ubicación y reubicación de los servidores públicos jurisdiccionales, con base en los principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos; ni definió un programa de trabajo para cumplir con la línea de acción establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 de "Mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad".

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 9,598.6 miles de pesos

Asimismo, se advierten otros resultados de las acciones de revisión y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

(Anexo 22 - 36 auditorías)

U. RAMOS GENERALES 23 Y 33

Análisis general de las auditorías realizadas a las Entidades Federativas y Municipios

La Auditoría Superior de la Federación realizó 540 auditorías a los Ramos Generales 23 y 33, de las cuales 24 se realizaron al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES); 40 al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); 32 al Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB); 17 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 161 al Fondo Aportaciones para Infraestructura Social: de las cuales 17 se realizaron al Fondo de Infraestructura Social Estatal y 144 al Fondo de Infraestructura Social Municipal; 154 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF); 17 al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 17 al Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 48 al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); 19 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y 10 al Programa para la Fiscalización del gasto Federalizado (PROFIS) y 1 al Fondo Metropolitano.⁵

Diagnóstico de Auditorías⁶

Para efectos de la integración y presentación de las estadísticas relacionadas con las auditorías, se determinó un criterio de importancia relativa. Este criterio consistió en revisar los mayores montos de recuperaciones determinadas, debido a que son recursos que los entes observados tendrán que reintegrar, en los casos en que los recursos no se haya ejercido en tiempo, traduciéndose en una merma en sus ingresos disponibles. En los casos en que se hayan detectado irregularidades en la ejecución, como desviación de recursos a fines no especificados en la norma vigente para 2007, donde de ser comprobada la afectación a la Hacienda Pública, podía significar, además, sanciones para los servidores públicos responsables. No destinar los recursos de los fines específicos en la normatividad, deriva en una merma en el impacto social para el cual los recursos están determinados.

Para hacer un criterio homogéneo para abordar las auditorías se detectaron las dos con montos recuperables más significativas por entidad federativa y que a continuación se observan. Sin embargo, es importante mencionar que no se deben dejar de atender las otras auditorías en sus observaciones y acciones, ya que el conjunto permite observar el comportamiento de los gobiernos estatales y municipales (Anexo 23).

Aguascalientes

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 13 auditorías con 118 observaciones; 125 acciones; 73 recomendaciones; 15 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 19 recomendaciones al desempeño; 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 117,894.8, de los que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal un monto de 82,314.1 y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 9,448.7.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, por un monto de 2,594,885.7, que representa el 90.2 % de los 2,876,828.8 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que existen 772.4 de productos financieros de los cuales no se comprobó su aplicación y destino a los fines del fondo; 30,308.7 por la incorporación de categorías o puestos no financiables con los recursos del fondo; 158.9 por el pago de remuneraciones a personal adscrito en centros de trabajo cuyo servicio no corresponde a la educación básica; 769.9 por el pago de remuneraciones a personal adscrito en el programa de escuelas de calidad que no es financiable con el FAEB; 31,085.1 por el pago de remuneraciones a personal comisionado indebidamente con goce de sueldo a las agrupaciones sindicales; 18,193.6 por el pago de personal comisionado a dependencias ajenas a la ejecutora del gasto cuyas funciones no están directamente vinculadas con la educación básica; 466.6, por el pago de remuneraciones a personal de la dependencia ejecutora del gasto que ocupó de manera simultánea algún cargo de elección popular; 10.4 por el pago a un empleado contratado por honorarios cuyas funciones no corresponde a la educación básica; 97.6 por el pago de remuneraciones superiores a lo establecido en el tabulador de sueldos autorizados del Estado de Aguascalientes y 461.3 de remuneraciones pagadas a empleados no localizados durante las visitas físicas a centro de trabajo.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normatividad aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 172,087.3, que representa el 100.0 % de los, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: En términos generales, la Auditoría Superior de la Federación determinó que no cumplió en lo que se refieren a gastos indirectos aplicados en exceso de lo que establece la normativa por 9,448.9 y errores y omisiones de la información financiera por 23,022.7 que corresponde a operaciones no registradas en la contabilidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Baja California

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 16 auditorías con 247 observaciones; 249 acciones; 137 recomendaciones; 41 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; 1 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 35 recomendaciones al desempeño; 35 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 556,597.4 por las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con un monto de 330,169.0 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, con 95,454.0.

Auditoría: A los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 6,366,849.3, que representa el 96.5 % de los 6,596,676.4 , reportados en Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados con observación que se refieren principalmente a 1,612.6 por rendimientos generados en la cuenta receptora, no transferidos a la instancia ejecutora del gasto; 26,145.2 por pagos con cargo al capítulo 4000 "ayudas, subsidios y transferencias" a acciones no financiables con el fondo; 160,203.1 por pago a personal jubilado que no tiene relación laboral con la dependencia ejecutora; 19,308.0 por incorporación en las nóminas de centros de trabajo clausurados o dados de baja en el catálogo general; 14,281.0 por pago de remuneraciones a trabajadores que no realizan actividades afines a los objetivos del FAEB (trabajadores dados de baja); 30,900.9 por utilización inadecuada de centros de trabajo por reubicar en las nóminas; 50,831.6 por incorporación en las nóminas de centros de trabajo no incluidos en el catálogo correspondiente; 91,508.2 por pagos realizados al personal comisionado al SNTE indebidamente con goce de sueldo; 1,176.0 por personal comisionado en otras dependencias; 2,944.6 por pagos a personas por honorarios que cuentan en el mismo periodo con plaza presupuestal sin que se presentara la autorización de compatibilidad de empleos; 5,326.4 por pagos a personal por honorarios que no contaron con el contrato correspondiente; 842.1 por pagos a personal por honorarios que no estuvieron amparados en los contratos; 29,130.0 a empleados con categoría administrativa que al mismo tiempo ocuparon plaza docente; y 2,327.1 por pago de remuneraciones por concepto de compensaciones a empleados con plaza docente que no cuentan con categorías de mando medios o supervisores.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 707,669.7, que representa el 73.3% de los 965,178.3, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Los principales problemas detectados por la Auditoría Superior de la Federación se refieren principalmente a intereses generados y no pagados por extemporaneidad en la entrega de recursos por 188.5; intereses generados en las cuentas pagadoras del FASSA, de los cuales no se identificó su aplicación por 139.7; aplicación de recursos en fines distintos a los autorizados por 638.1; comisiones a centros de trabajo internos del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, sin contar con oficio de autorización por lo que no se tiene evidencia donde se encuentran laborando por 1,978.0; pagos de autorizaciones extemporáneas por comisión sindical por 1,174.9; pagos al personal posteriores a la fecha de su baja por 139.8; pago de compensaciones a personal de base y de confianza sin sustento normativo que lo autorice

por 19,553.3 ; pagos del estímulo medidas de fin de año a mandos medios cuando no les correspondía por 359.5; pagos a personal eventual sin contar con contrato de prestación de servicios que justifique los pagos por 3,694.1; pagos de más a personal contratado por tiempo determinado que los importes estipulados en los contratos por 5,400.0; pagos a personal sin que se haya obtenido evidencia de que se encuentran laborando en los centros de trabajo en los cuales están adscritos por 63,281.4; por 47.5 por diferencias en el inventario y medicamentos caducos por 81.6.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Baja California Sur

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 13 auditorías con 202 observaciones; 204 acciones; 127 recomendaciones; 30 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 25 recomendaciones al desempeño; 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 410,296.3, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 330,732.1 y la realizada a recursos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 35,192.4.

Auditoría: Al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 1,890,717.2, que representa el 96.1% de los 1,968,271.0 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Los resultados que la Auditoría Superior de la Federación detectó observación, que se refieren principalmente a 1,627.5 por irregularidades en la ministración de recursos correspondientes a intereses generados, que no fue posible identificar su destino; 329,104.6 por pagos improcedentes o en exceso correspondientes por 32,947.3 por prestaciones pagadas consideradas como no financiables con los recursos del FAEB; 4,851.1 a pagos de categorías o puestos no financiables; 87,399.5 por pagos realizados a centros de trabajo clausurados; 5,853.6 a centros de trabajo cuyas actividades no corresponden con las actividades del fondo; 19,496.8 por pagos realizados a personal comisionado en la Sección III del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación; 3,115.2 por pagos realizados a personal con licencias de comisión sindical con trabajos en otros centros de trabajo sin contar con la compatibilidad de empleos correspondiente; 2,157.2 por pagos realizados a personal comisionado a otras dependencias cuyo objetivo difiere de los objetivos del FAEB; 780.9 que ocuparon simultáneamente cargos de elección popular, sin contar con la compatibilidad de empleos necesaria; 2,413.5 por haber destinado recursos a personal eventual cuya actividades no corresponden al FAEB; 9,558.7 por pagos realizados por concepto de compensaciones a personal que laboró en puestos diferentes a los relativos

a mandos medios y superiores; 159,898.8 por pagos realizados por compensaciones, bonos y estímulos no autorizados; y 632.0 por pagos realizados a personal no localizado en las visitas físicas de diversos centros de trabajo.

Auditoría: Al Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 105,240.6, que representa el 91.5 % de los 115,032.5 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Estado de Baja California Sur no cumplió, conforme a los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, con las disposiciones normativas aplicables a la adjudicación, ejecución, control y registro de las operaciones examinadas donde destacan los siguientes: recursos federales aplicados a rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) por 33,905.5, pagos en exceso por 1,125.1, obra de mala calidad por 50.2 y falta o inadecuada inversión de recursos por 111.6.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Campeche

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 15 auditorías con 104 observaciones; 109 acciones; 48 recomendaciones; 30 pliegos de observaciones; una solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 17 recomendaciones al desempeño; 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 105,899.9, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 45,969.4 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 23,971.0.

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normatividad aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 2,424,198.3, que representa el 87.7 % de los 2,765,129.4, reportados en Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Los resultados que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades con observación, que se refieren principalmente a el pago por 3,487.8 a 53 trabajadores que estuvieron adscritos en 17 centros de trabajo de educación para adultos; 4,962.0 que corresponden a pagos de 1,549 empleados jubilados y pensionados del sistema estatal de educación básica; 19,109.2 por pagos improcedentes a 92 empleados

comisionados en la sección 04 del SNTE; 3,043.9 por pagos improcedentes a 19 empleados comisionados en otras dependencias; 209.3 por pagos a personal de la dependencia que de manera simultánea ocuparon un cargo de elección popular; 1,376.2 por pago a 21 empleados contratados cuyas actividades correspondieron a supervisión de obra de planteles escolares; 2,721.7 por pago de compensaciones de personal de mando a 51 trabajadores, sin que realizaran las funciones propias del nivel; 2,857.0 que corresponden a pagos de compensaciones de 16 empleados que no cuentan con plaza federal y a 3 trabajadores bajo el régimen de honorarios; 8,202.3 por pago a 14 empleados no localizados en las visitas a centros de trabajo y los responsables de los centros manifestaron que dichas personas no han laborado en éstos, así como pago de remuneraciones a 51 trabajadores identificados en un centro de educación para adultos.

Auditoría: Al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 32,308.3, que representan el 86.6 % de los 37,310.6 reportado en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: Conforme a lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación se determinó que la entidad no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, respecto de las operaciones examinadas, donde destacan las siguientes: 1,186.5 de pagos improcedentes o en exceso, 1,144.9 por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos y 21,724.0 por obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Chiapas

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 19 auditorías con 146 observaciones; 155 acciones; 83 recomendaciones; 26 pliegos de observaciones; una solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 22 recomendaciones al desempeño; 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 370,108.3, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas con un monto de 268,666.0 y la realizada a recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados por un monto de 44,848.0.

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 9,443,071.5, que representa el 87.0 % de los 10,857,569.0 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Los resultados que la Auditoría Superior de la Federación detectó con observación, se refieren principalmente a 57,014.0 que corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del FAEB pendientes de ejercer y sin que se compruebe el destino de los mismos; 38,204.1 por transferencia de recursos pendiente de realizar de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; 9,435.2 por 2,391 pagos a 3 categorías o puestos que corresponden a educación para adultos; 116,719.9 por 386 Centros de Trabajo clausurados o dados de baja con 868 empleados a los que se les realizaron 19,979 pagos; 55,538.1 que corresponden a 51 centros de trabajo que proporcionaron los servicios de capacitación para el trabajo, servicio bibliotecario y asesoría a círculos de estudio, apoyar y asesorar a responsables de las misiones culturales, primaria para adultos y secundaria para trabajadores y a los cuales se les realizaron 14,793 pagos a 468 empleados; 57,868.8 por 14,812 pagos improcedentes a 307 empleados comisionados a la sección 7 del SNTE; 4,614.6 por 1,160 pagos a personal de la dependencia que de manera simultánea ocuparon un cargo de elección popular; 62.4 por pagos de compensaciones a 4 trabajadores superiores a los importes autorizados; 1,866.8 por 767 pagos a 23 empleados no localizados en las visitas a centros de trabajo y que los responsables de los centros manifestaron que dichas personas no han laborado en el mismo; 41,675.6 por 143 comisionados a otras dependencias (127 docentes y 16 administrativos) a los que se les realizaron 7,967 pagos; 1,186.0 por 6 comisionados a centros de trabajo AGD a los que se les realizaron 267 pagos, así como 1,200.4 por 31 empleados contratados temporalmente, ocupando simultáneamente plazas presupuestales sin contar con la compatibilidad de empleo correspondiente.

Auditoría: Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 128,895.9, que representa el 41.9% de los 307,837.3 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Gobierno del Estado de Chiapas, conforme a los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los plazos de ejecución de los recursos asignados; realizó el pago de conceptos de obra ejecutados en ejercicios anteriores o fuera de la apertura programática autorizada, donde destacan los siguientes: 26,458.4 de pagos improcedentes; 13,658.0 de recursos no erogados en las fechas previstas y no enterados a la Tesorería de la Federación, 1,760.2 de falta de documentación comprobatoria; 1,617.1 pagos en exceso de lo contratado; 1,350.2 de falta de aplicación de penas convencionales, y por la diferencia entre los rendimientos generados por la cuenta bancaria y los registrados en la contabilidad 4.1, los cuales ya fueron enterados a la Tesorería de la Federación como consecuencia de la auditoría practicada.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Chihuahua

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 19 auditorías con 200 observaciones; 207 acciones; 93 recomendaciones; 40 pliegos de observaciones; dos solicitudes de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 33 recomendaciones al desempeño; 38 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 557,545.2, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Municipio de Juárez, con un monto de 144,313.7 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Municipio de Chihuahua con un monto de 118,301.3.

Auditoría: Al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Juárez.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio a través del fondo se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción IV, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación así como el cumplimiento de metas y objetivos y demás normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 359,704.5, que representó el 86.4% de los 416,247.9 reportados en la Cuenta de Pública Federal 2007.

Dictamen: El Municipio de Juárez del Estado de Chihuahua, de acuerdo con lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, no cumplió con el marco normativo aplicable a la administración, control, adjudicación, ejecución y destino de las operaciones examinadas, así como a las obras y acciones sociales. Se observó un monto por 144,313.7, que representa un 40.1% del total de recursos revisados del fondo por el ejercicio fiscal 2007, a causa de las observaciones destacan las siguientes: 53,823.8 corresponden a que no fue posible identificar las plazas, tabuladores autorizados, montos estipulados y las prestaciones referentes al capítulo 1000 "Servicios Personales" de la Dirección General de Seguridad Pública y Transito, que se pagaron con los recursos del fondo, asignados para el ejercicio fiscal 2007; 10,378.2 corresponden a la adquisición de bienes inmuebles adquiridos para la regeneración del centro histórico de la ciudad, los cuales no están formalizados ni cuentan con la documentación comprobatoria del gasto; 79,923.4 corresponden a pólizas de cheques expedido sin la debida documentación justificativa y comprobatoria del gasto; y 188.3 corresponden a intereses por retraso en la transferencia bancaria del fondo del mes de diciembre de 2007 por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua al Municipio de Juárez.

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Chihuahua.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó revisar un monto de 134,818.8, que representó el 56.1% de los 240,490.4, reportado en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a transferencia de recursos y a el registro e información contable y presupuestaria respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: diferencias entre los registros administrativos, contables y presupuestales por 9,756.5 , falta de documentación comprobatoria de las erogaciones para la ejecución de obra pública por 98,933.3, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por la adquisición de vehículos para seguridad pública por 9,186.1, e intereses generados por el atraso en la ministración de los recursos del fondo por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua por 425.4.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Coahuila

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 17 auditorías con 283 observaciones; 291 acciones; 175 recomendaciones; 28 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 35 recomendaciones al desempeño; 52 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 204,499.2, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal con un monto de 46,973.7 y la realizada a recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con un monto de 39,166.3.

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 105,537.9, que representan el 74.1% de los 142,494.7, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Conforme a la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro, adjudicación, ejercicio y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan: pagos improcedentes o en

exceso 126.7 , pagos distintos a los establecidos en la mecánica operativa 411.2, falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos 2.3 , falta en la cuenta bancaria 1,045.2, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 34,750.0, recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 7,753.8, y falta de documentación original del gasto por 2,884.5.

Auditoría: Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007 y demás normativa aplicable, por un monto de 156,600.1, que representa el 100.0 % de los recursos asignados, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de la obra pública y a los criterios de asignación de recursos, donde destacan los siguientes: recursos utilizados para fines distintos de lo autorizado por 39,166.3.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Colima

Alcance de la Fiscalización Superior: Se ejecutaron 12 auditorías con 124 observaciones; 139 acciones; 81 recomendaciones; 15 pliegos de observaciones; dos solicitudes de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 21 recomendaciones al desempeño; 16 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 113,706.9, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas por un monto de y 58,222.4, y la realizada a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 35,854.2.

Auditoría: Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar un monto de 36,352.5, que representa el 100.0% de los 36,352.5, reportados en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación concluye que el Estado de Colima no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las obras que efectuó el gobierno

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, determinando revisar un monto de 1,650,463.4, que representa el 85.8 % de los 1,923,819.4, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: De los resultados con observación destacan las siguientes: Recursos por 2,522.4 por productos financieros los cuales no han sido programados para su ejercicio a los fines del fondo; 25,292.1 de recursos correspondientes al pago de remuneraciones para el personal comisionado a la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), indebidamente con goce de sueldo; 5,035.2 para personal comisionado a otras dependencias; 1,037.9 por el pago de Bono de fin de administración federal al personal contratado por honorarios; y 1,966.6 por el pago de remuneraciones a empleados no localizados durante la verificación física en los centros de trabajo, donde los responsables de los mismos no los identificaron.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Distrito Federal

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 21 auditorías con 375 observaciones; 389 acciones; 326 recomendaciones; 29 pliegos de observaciones; 4 solicitudes de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 7 recomendaciones al desempeño; 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 748,477.7, siendo las auditorías a los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con un monto de 74,015.3 y la realizada a recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados con un monto de 60,804.2.

Auditoría: A recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal a través del FEIEF canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable por lo que se determinó fiscalizar un monto de 99,064.9, que representa el 81.3% de los 121,909.5, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación hizo 15 observaciones, de las cuales se derivaron 16 acciones, 15 recomendaciones y un pliego de observaciones, en este último se presume un daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 74,015,245.7, concluyendo que en lo general cumple.

Auditoría: Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del FIES, de conformidad con lo establecido en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y demás normativa aplicable, auditando un monto de 663,204.5, que representa el 75.1% de los 883,461.1 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó la aplicación de recursos fuera de apertura programática por 25,996.9, inadecuada aplicación de penas convencionales por 8,311.2, falta de recuperación de anticipos por 21,406.2, y pago de gastos indirectos en exceso por 5,089.9.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Durango

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 14 auditorías con 230 observaciones; 247 acciones; 137 recomendaciones; 40 pliegos de observaciones; 2 solicitudes de aclaración; 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 23 recomendaciones al desempeño; 41 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 527,078.4, siendo las auditorías del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 303,748.4 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal al Municipio de Durango con un monto de 84,586.6.

Auditoría: Al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar dichos recursos se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, determinó revisar un monto de 4,374,605.0, que representan el 93.1 % de los 4,699,975.7, reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó que para 221,635.1 que corresponden al pago del subsistema estatal no existe un sistema de nómina, sólo existen registros globales; pago de remuneraciones a 224 trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango comisionados a la sección 12 y 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por 46,304.3; pago de remuneraciones a 130 trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango comisionados a otras dependencias por 14,723.4; 149 pagos a 18 personas por 1,221.9 por concepto de compensaciones a mandos medios y superiores sin estar considerados en la relación de mandos medios y superiores; pago de 6,277.4 por concepto "CJ" bono de jubilados y pago de remuneraciones a 44 trabajadores no localizados en las visitas efectuadas a los centros

de trabajo por 5,654.0 y, pagos improcedentes a personal contratado por honorarios por 17.2 .

Auditoría: Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) al Municipio de Durango.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos por un monto de 166,879.4 que representa el 100.0% de los 166,879.4, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Municipio de Durango, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia de recursos, el registro de la información contable y presupuestaria, la comprobación de las erogaciones y la difusión de las acciones del fondo, donde destacan las siguientes: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 84,460.8; 31,205.3 de aportaciones del FORTAMUN-DF que la Secretaría de Finanzas y de Administración estatal no ministró al Municipio y los utilizó para el pago de deuda pública por cuenta de éste; 95.8 por pagos improcedentes o en exceso, y una recuperación operada por 30.0 de otros incumplimientos de la normativa para los fondos de los Ramos 23 y 33.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Estado de México

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 22 auditorías con 160 observaciones; 173 acciones; 119 recomendaciones; 14 pliegos de observaciones; cinco solicitudes de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 21 recomendaciones al desempeño; 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 3,348,289.3, siendo las auditorías de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 1,693,866.2 y la realizada a recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados con un monto de 599,673.3.

Auditoría: Al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales asignados al Gobierno de Estado de México se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 15,100,280.0, que representan el 75.2% de los 20,087,310.5, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó que existen 1,438,977.0 por recursos no entregados al SEIEM, ya que fueron retenciones de ISR por sueldos y salarios así como recursos que se encuentran en las cuentas de bancos e inversiones estatal; 76,155.0 por pagos a personal adscrito en planteles de los niveles medio superior y superior, por emisión de pagos de tres centros de trabajo dados de baja, pago a 29 personas que no desarrollaron actividades susceptibles de financiarse por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, así como no se acreditó que el personal adscrito en las procuradurías de asuntos indígenas haya devengado las remuneraciones pagadas por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, compensaciones al personal de mandos medios no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 386 personas que no prestan sus servicios en el centro de trabajo en donde se erogan sus pagos; 10 personas que no están frente a grupo, están comisionadas al sindicato, por pagos a 2 personas que están jubiladas y pagos a una persona fallecida; por 19,226.6 en pagos a 73 centros de trabajo clausurados; sin contratos individuales por la prestación de servicios y 162,772.1 por pago de remuneraciones a 530 personas comisionadas en el sindicato con goce de sueldo.

Auditoría: Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable, revisando un monto de 75,151.7, que representa el 70.4%, de los 106,760.4, con cargo al Fideicomiso para las Infraestructura de los Estados para el ejercicio fiscal 2007.

Dictamen: Con base en el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Junta de Caminos del Estado de México, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las obras públicas a su cargo.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Guanajuato

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 185 observaciones; 192 acciones; 87 recomendaciones; 22 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 28 recomendaciones al desempeño; 55 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 248,097.5, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado por un monto de 57,873.9 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 63,004.9.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos por medio del FAEB, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 7,652,556.5, que representa el 92.8 % de los 8,245,425.0 reportados en el Ejercicio 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación dictaminó que la Secretaría de Educación de Guanajuato realizó 1,248 pagos a 56 empleados adscritos a las direcciones de educación media y superior y de programas compensatorios áreas cuyas funciones primordiales no relacionadas con la educación básica y formación de docentes por 7,227.3; se realizaron 2,592 pagos a 146 trabajadores adscritos a centros de educación básica para adultos, cuando esta modalidad educativa cuenta con un financiamiento federal distinto al FAEB por 7,834.7; se comisionaron con goce de sueldo a la sección 13 del SNTE a 118 trabajadores, generándose 7,843 pagos por 34,897.9; pagos a personal no localizado en las visitas a los centros de trabajo por 1,300.5; y, erogaciones realizadas en tres programas que no son financiados con recursos del Fondo (PEC, construcción de edificio y mantenimiento y rehabilitación de escuelas) por 6,613.5.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos por un monto de 113,180.4, que representan el 58.1% de los 194,855.8, reportado en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: El Gobierno del Estado, con base en lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos: 60,167.1 , de recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 121.7, de omisión o reintegro extemporáneo de fondos o intereses a la TESOFE o a las tesorerías estatales y 2,832.4 de otros incumplimientos de la normativa en materia de disponibilidades correspondientes a recursos no aplicados en el ejercicio fiscal 2007 como lo dispone la norma local.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Guerrero

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 17 auditorías con 278 observaciones; 285 acciones; 165 recomendaciones; 44 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; 9 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 24 recomendaciones al desempeño; 43 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 1,013,096.3, siendo las auditorías de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 810,683.1 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez con un monto de 62,757.6.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se revisó un monto de 7,652,556.5, que representa el 92.8 % de los 8,245,425.0 reportados en el Ejercicio 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia de recursos; plazas autorizadas; comisiones otorgadas; contratación de personal por honorarios, pago de sueldos y compensaciones conforme a tabuladores autorizados y aplicación de recursos a conceptos autorizados de las operaciones examinadas, excepto por los siguientes resultados con observación: 224,236.2 miles de pesos por la falta de comprobación de los recursos destinados al pago de la nómina del personal estatal subsidiado; 11,976.1 miles de pesos por pagos a categorías que corresponden a la educación para adultos y bibliotecas públicas; 124,846.9 miles de pesos por espacios en blanco que no permitieron identificar si las categorías corresponden a puestos financiados con el FAEB correspondiente al Subsistema de Telesecundaria; 209,970.8 miles de pesos por efectuar pagos con cargo a centros de trabajo clausurados, Municipal, escuela particular, de Dirección de Educación Media y Superior, Educación de Adultos, Procuradurías Indígenas, Bibliotecas Municipales, y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 47,433.4 de pagos en las nóminas estatales subsidiadas con cargo a centros de trabajo no identificado en el Catalogo General de Centros de Trabajo correspondiente; 137,373.5 miles de pesos por el pago improcedente de remuneraciones al personal comisionado al sindicato o adscritos al centro de trabajo ex profeso para ello, sin ser considerados en la relación de personal comisionado; 13,995.8 miles de pesos por realizar pagos a personal adscrito al centros de trabajo "Personal comisionado a otras dependencias en Guerrero"; 23,762.6 miles de pesos por realizar pagos a personal contratado por honorarios que no realizaron funciones vinculadas con la educación básica o la formación de docentes; 968.1 miles de pesos a personal por honorarios que no contaron con el contrato respectivo; 100.5 miles de pesos por pagos de compensaciones a personal de honorarios; y 16,019.2 miles de pesos destinados a personal no localizado en las visitas a centros de trabajo y no fueron identificados por los responsables de los mismos; así como la falta de retenciones y enteros del ISR por concepto de pago de compensaciones a personal de mando y operativo, que conformaron el sueldo total de los empleados.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Acapulco de Juárez.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, fiscalizando un monto de 117,103.8, que representa el 39.6% de los 295,608.3 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Municipio de Acapulco de Juárez, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la orientación de los recursos, gastos indirectos y desarrollo institucional, según lo observados por la Auditoría Superior de la Federación.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Hidalgo

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 166 observaciones; 181 acciones; 101 recomendaciones; 22 pliegos de observaciones; tres solicitudes de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 31 recomendaciones al desempeño; 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 184,998.2, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 34,049.0 y la realizada a recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados con un monto de 76,559.0.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, fiscalizando un monto de 1,006,940.0, que representa el 69.5% de los 1,448,117.0, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La AFS detectó que existen intereses generados y no pagados por extemporaneidad en la entrega de recursos por 728.0; recursos destinados al programa del Seguro Popular por 121.0, al programa Oportunidades por 19.0, al Programa Populares de Salud y Asistencia por 797.0 y al Programa Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por 1,312.8; incompatibilidad de horarios de 23 servidores públicos por 6,987.6; pagos por autorizaciones de comisiones sindicales extemporáneas por 1,159.1; pagos por concepto de medidas de fin de año sin sustento normativo por 22.9; pagos a servidores públicos de base y de confianza de compensaciones discrecionales (bonos) por 16,239.1; 13 pagos a personal eventual sin que exista contrato que los ampare por 102.5; pagos a personal eventual superiores a lo contratado por 171.4; pagos a trabajadores sin que se haya obtenido evidencia de que se encuentren laborando en los centros de adscripción por 7,315.4; penas convencionales no aplicadas por 153.7 y penas convencionales depositadas en cuenta bancaria que no corresponde al fondo por 101.5.

Auditoría: A recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través del FIES para la Infraestructura en los Estados canalizados al programa, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 8,322.4, que representa el 100.0% del universo seleccionado.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó que al 28 de junio de 2008, no se había demostrado la erogación o reintegro a la TESOFE los 76,559.0 de los recursos del FIES que corresponden al tercer y cuarto trimestre del 2007. Además que el proyecto revisado no contó con los estudios de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos ni con la evaluación de costo-beneficio e impacto ambiental.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Jalisco

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 24 auditorías con 328 observaciones; 357 acciones; 225 recomendaciones; 59 pliegos de observaciones; nueve solicitudes de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 31 recomendaciones al desempeño; 33 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 1,197,750.2, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por un monto de 207,483.9 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con un monto de 222,458.7.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, fiscalizando un monto de 9,053,460.4 , que representa el 82.7 % de los 10,948,269.9 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó observaciones, que se refieren principalmente a: 41,659.8 para la construcción de planteles de educación media superior y superior; otorgamiento de subsidios a instituciones educativas de educación media superior y donativos para asociaciones civiles para eventos culturales; 275.9 que corresponden a rendimientos financieros no generados por el traspaso de recursos del FAEB a cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Jalisco; 2,153.0 por pagos a personal en categorías no autorizadas por el H. Congreso Estatal; 38,880.3 por 625 pagos realizados a 68 personas adscritas en 47 centros de trabajo clausurados y no autorizados; 111,794.1

por 29,523 pagos a 563 personas comisionados indebidamente con goce de sueldo a las secciones 16 y 47 del SNTE; 7,836.9 por 1,990 pagos a 49 personas que ocuparon una plaza de la Secretaría de Educación y, de manera simultánea, ocuparon un cargo de elección popular, y 4,883.9 por 817 pagos a 37 empleados que no fueron localizados en las visitas a los centros de trabajo y de los cuales no se contó con evidencia documental de su asistencia a los planteles y oficinas inspeccionadas.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se revisó un monto de 1,123,022.5, que representa el 89.4 % de los 1,255,599.4 reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación dictaminó que el Gobierno del Estado de Jalisco no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los plazos de ejecución de los recursos asignados, realizó el pago de conceptos de obra ejecutados en ejercicios anteriores, inexistentes o fuera de la apertura programática autorizada y no realizó el cobro de estimaciones, donde destacan: 29,562.5 de proyectos ejecutados sin autorización o justificación, 11,475.8 de faltantes de documentación comprobatoria, 30,962.2 de pagos improcedentes, 10,560.6 de anticipos no recuperados, y 139,897.6 de recursos aplicados a rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Michoacán

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 15 auditorías con 233 observaciones; 246 acciones; 134 recomendaciones; 37 pliegos de observaciones; una solicitud de aclaración; tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 24 recomendaciones al desempeño; 47 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 1,642,868.9, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 1,351,337.5 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con un monto de 153,032.1.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos por medio del FAEB, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, revisando un monto de 8,230,826.1, que representa el 82.8 % de los 9,940,116.8 reportados en el ejercicio fiscal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó que se destinaron 976,718.3 para el pago de prestaciones no reconocidas por la federación, y pagos a conceptos no financiados por el fondo como la adquisición de inmueble para escuela primaria, subsidio a asociación civil, fianzas para tractores agrícolas, entre otros; 9,487.3 de pago de adeudos de energía eléctrica que no se constató que se destinaron a la educación básica; 41,115.4 por la incorporación en las nóminas de categorías no financiados con el fondo o no localizados en el catálogo de la dependencia; 129,313.6 por la incorporación en las nóminas de centros de trabajo clausurados, de educación para adultos, no financiados con el fondo o no localizados en el catálogo de la dependencia; 16,313.6 por la incorporación en las nóminas estatales subsidiadas de centros de trabajo clausurados, de educación para adultos no financiados con el fondo o no localizados en el catálogo de la dependencia; 30,658.4 por la utilización de categorías del subsistema de telesecundarias para la atención de otros niveles educativos; 141,044.0 por el pago de remuneraciones a personal comisionado a las secciones sindicales indebidamente con goce de sueldo, aunado que no contaron con el oficio de autorización correspondiente; 3,508.8 por el pago de remuneraciones a personal comisionado a otras dependencias; 12,399.6 por pago a personal identificado en centros de trabajo clasificados como de comisionados a otras dependencias, sin que se presentaran los oficios de comisión correspondientes; 7,236.0 por el pago de remuneraciones a personal de la dependencia ejecutora que de manera simultánea ocuparon un cargo de elección popular en los Ayuntamientos; 637.3 por el pago de compensaciones a personal de mando que no se identificó como empleado de la dependencia ejecutora del gasto; y 13,340.6 a empleados no localizados en las visitas a los centros de trabajo y los responsables de los mismos no los identificaron; la dependencia auditada no realizó las retenciones del ISR en el pago de remuneraciones por concepto de compensaciones a personal de mando medio y superior que se otorgan como complemento al salario de los empleados.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, fiscalizando un monto de 255,957.0, que representa el 60.2% de los 425,137.9 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Michoacán no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al marco normativo aplicable al registro, administración y destino de las operaciones examinadas, donde destacan la falta de ministración de 9,190.5, más los intereses generados por 532.9 para concluir las obras en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; disposición de 123,224.8 así como los intereses generados por 7,144.7 para destinarlos a inversión en cuentas propias del Gobierno del Estado, de los cuales fueron reintegrados 111,485.3 a la cuenta bancaria del fondo en el mes de enero de 2009 según documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración, quedando pendientes 18,884.2 más los intereses generados a la fecha de su reintegro, con lo que se impidió el cumplimiento oportuno de metas y objetivos de los entes ejecutores de los recursos del mismo; de igual forma se determinó el pago de gastos no financiados con recursos del FAM por 10,436.6 ; aplicaciones indebidas para gastos de operación por 2,662.4; y trabajos de obra mal ejecutados por 373.1.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Morelos

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 13 auditorías con 167 observaciones; 177 acciones; 77 recomendaciones; 33 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 35 recomendaciones al desempeño; 32 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 366,868.8, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 276,282.4 y la realizada a recursos del Fondo Aportaciones para Servicios de Salud con un monto de 49,847.9.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, revisando un monto de 1,921,092.0, que representan el 50.0% de los 3,845,282.5 reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación dictaminó 276,282.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso en los rubros de cobros efectuados en la nomina habiendo interpuesto licencia sin goce de sueldos por cobros efectuados posteriores a la jubilación del trabajador, por cobros posteriores a la defunción del trabajador, por cobros posteriores a la renuncia del trabajador, por cobros de nómina de los trabajadores teniendo comisiones sindicales, sueldos compactados, por horas utilizadas en exceso y por cobros de nómina efectuado en centros de trabajo dados de baja.

Auditoría: A recursos del Fondo Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, fiscalizando un monto de 597,980.9, que representa el 75.1% de los 795,921.8 reportados en la Cuenta Publica 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó intereses generados en las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y aplicados en fines distintos de los establecidos por 1,684.3; falta de aplicación de recursos por 1,897.5 ; diferencias entre lo reportado en cierre de ejercicio y los saldos en cuentas bancarias por 36,394.1; intereses generados en las cuentas de los Servicios de Salud de los que se desconoce su aplicación por 176.8; recursos aplicados en fines distintos de lo establecido por 201.8; extemporaneidad en las comisiones sindicales por 428.1; personal comisionado al sindicato,

con goce de sueldo, sin contar con la autorización correspondiente por 2,696.9; personal comisionado a otras dependencias con y sin goce de sueldo por 318.8 ; pago de compensaciones a personal de mandos medios y superiores sin que exista sustento normativo por 228.5 ; pagos del estímulo medidas de fin de año a mandos medios cuando no les correspondía por 459.0; pagos del estímulo medidas de fin de año a personal estatal cuando no les correspondía por 4,222.8; pagos a personal eventual sin contar con contrato por 192.4; penas convencionales no aplicadas por 108.4 ; falta de recuperación de un vehículo robado o su costo por 126.3; diferencias entre lo reportado en el sistema de control y las existencias físicas de medicamentos por 106.5; existencia de medicamento caduco por 887.3 y donaciones de medicamentos por 146.5

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Nayarit

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 14 auditorías con 239 observaciones; 241 acciones; 162 recomendaciones; 34 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 19 recomendaciones al desempeño; 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 493,088.0, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 423,010.6 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal por un monto de 25,208.2.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 3,087,933.9, que representa el 97.4 % de los 3,171,738.9 reportados en Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó 309,226.2 de recursos ejercidos con cargo al capítulo 1000, sin que la dependencia presentara la comprobación de estos recursos; 58,665.7 por la incorporación en las nóminas de categorías o puestos no financiados con los recursos del FAEB; 2,793.0 por la incorporación en las nóminas de centros de trabajo cuyo servicio no está directamente vinculado con la educación básica o la formación de docentes; 12,179.0 por el pago de remuneraciones a personal adscrito en centros de trabajo clausurados o no localizados en el catálogo respectivo; 18,042.5 de pago de remuneraciones a empleados comisionados a las agrupaciones sindicales indebidamente con goce de sueldo; 8,805.0 por el pago al personal adscrito en centros de trabajo dedicados a la agrupación de comisionados al sindicato y que no fueron considerados en la relación de comisionados presentada por la entidad fiscalizada; 1,517.7 por el pago a empleados comisionados indebidamente con goce de sueldo a dependencias ajenas a las ejecutores del

gasto; 6,789.0 por el pago a personal adscrito a centros de trabajo dedicados a la agrupación de comisionados a otras dependencias y que no fueron considerados en la relación de comisionados presentada por la entidad fiscalizada; 507.6 de pagos a personal contratado por honorarios que está en demasía respecto a lo estipulado en los contratos; 505.3 por el pago a personal contratado por honorarios cuyas funciones no corresponden a la educación básica o a la formación de docentes; 13,412.3 por la entrega de compensaciones a personal operativo de la dependencia ejecutora del gasto sin que se cuente con la justificación de su entrega; y 3,979.6 por el pago de remuneraciones a personal no localizado en los centros de trabajo visitados y que los responsables de dichos centros manifestaron que no han laborado en ellos.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, fiscalizó un monto 32,726.5, que representa el 99.7% de los 32,839.2 reportados en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: Con base en lo dictaminado por la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, ya que se observaron recursos federales aplicados en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema por 25,208.2.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Nuevo León

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 24 auditorías con 213 observaciones; 233 acciones; 165 recomendaciones; 6 pliegos de observaciones; 10 solicitudes de aclaración; dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 25 recomendaciones al desempeño; 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 484,890.2, siendo dos auditorías a recursos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con montos de 92,357.6 y 76,805.6 respectivamente, las que tienen mayores montos.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado por canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable, se fiscalizó un monto de 92,357.6 que representó el 100.0% de los 92,357.6 reportados en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la presupuestación, licitación, contratación y pago de las obras públicas a su cargo ya que no contó con los estudios de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos ni con la evaluación del costo-beneficio del proyecto que justificara el ejercicio de los recursos transferidos por medio del FEIEF por un monto de 92,357.6.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a ese Estado a través de ese fondo y canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 76,805.6 que representó el 100.0% de los 76,805.6 reportados en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, no cumplió las disposiciones normativas aplicables a la presupuestación, licitación, contratación y pago de las obras públicas a su cargo, ya que no contó con los estudios de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos ni con la evaluación del costo-beneficio del proyecto que justificara el ejercicio de los recursos transferidos por medio del FEIEF por un monto de 76,805.6.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Oaxaca

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 17 auditorías con 184 observaciones; 191 acciones; 111 recomendaciones; 34 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 24 recomendaciones al desempeño; 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 215,088.1, siendo las auditorías recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 68,448.8 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez con un monto de 45,737.9.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos al Estado de Oaxaca se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las

disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 10,584,446.8, que representa el 92.2 % de los 11,478,675.7 reportado en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó que 20,233.9 que corresponden al pago realizado a 294 trabajadores adscritos a 45 centros de trabajo cuyas funciones están destinadas a proporcionar educación para adultos y como salas populares de lectura; 37,907.8 para el pago realizado a 242 trabajadores comisionados a la sección 22 del SNTE con goce de sueldo; 4,591.0 por pagos a trabajadores adscritos a áreas relacionadas con la educación media y superior; pagos efectuados a 15 trabajadores adscritos al Programa Escuelas de Calidad, por 1,331.0; pago a 25 trabajadores adscritos centros de trabajo cuyas funciones están destinadas a proporcionar educación para adultos por 562.6; pagos a 14 trabajadores contratados por honorarios por 418.9, que estuvieron desempeñando sus actividades en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); 85 pagos a 3 trabajadores con categoría de mando, que estuvieron adscritos a áreas que no corresponden a educación básica y formación de docentes por un importe de 959.3 y pago de remuneraciones a personal no identificado en su centro de trabajo por 2,444.3.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 52,024.5, que representan el 71% de los 73,239.2 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con base en el dictamen que presentó la Auditoría Superior de la Federación, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración, control, adjudicación, ya que la aplicación de recursos en obras de zonas que no beneficiaron directamente a la población de mayor rezago social y de pobreza extrema del Municipio por 23,579.4, obras que están fuera de la apertura programática de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) por 20,007.4 y recursos aplicados como gastos indirectos que no acreditan su aplicación en las obras por 2,151.1.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Puebla

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 22 auditorías con 201 observaciones; 204 acciones; 88 recomendaciones; 39 pliegos de observaciones; dos solicitudes de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 32 recomendaciones al desempeño; 42 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 270,802.0, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 95,483.7 y la realizada a

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Municipio de Puebla con un monto de 32,643.4.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales asignados al Estado se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, revisando 8,989,431.5, que representa el 95.2 % de los 9,446,460.6.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó, 100.4 de pagos a empleados adscritos a centros de trabajo clausurados; 1,018.1 de pago a empleados durante el periodo de licencias sin goce de sueldos; 10,631.2 por pago improcedente de remuneraciones a personal comisionado a las secciones sindicales estatales; 72,121.6 por pago improcedente de remuneraciones a personal comisionado a las secciones sindicales del SNTE; 10,931.4 por contratación de empleados por honorarios cuyas funciones no corresponden a los objetivos del FAEB y 681.0 de pago de remuneraciones por concepto de compensaciones por arriba de lo estipulado en los tabulares estatales.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Puebla.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio por medio del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 52,522.1, que representa el 40.5% de los 129,718.6 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó que el Municipio de Puebla, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración, control, adjudicación, ejecución y destino de los recursos, donde destacan: 304.9 sin transferir al Municipio por concepto de obra de electrificación contratada por el Gobierno del Estado; 11,474.7 destinados a obras en zonas que no beneficiaron directamente a la población de mayor rezago social y de pobreza extrema; 16,959.9 destinados a obras que están fuera de la apertura programática de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 1,745.2 de productos financieros que no se entregó evidencia de su aplicación y 2,158.7 de gastos indirectos que no acreditan su aplicación en supervisión de obras.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Querétaro

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 16 auditorías con 207 observaciones; 213 acciones; 120 recomendaciones; 16 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 29

recomendaciones al desempeño; 45 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 252,499.8, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 171,635.8 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 49,619.0.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 3,439,610.0, que representan el 97.4% de los 3,532,135.8 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a conceptos de gasto en partidas diferentes a capítulo 1000 que no corresponden a los fines y objetivos del fondo por 4,285.1; pagos a personal estatal de educación básica por 32,338.8; pagos a 38 trabajadores posteriores a la clausura del centro de trabajo al que estuvieron adscritos en 2007 por 4,561.6; pagos a 88 trabajadores adscritos a 12 centros de trabajo destinados a proporcionar educación para adultos por 4,048.6; pagos a 127 trabajadores comisionados indebidamente al sindicato con goce de sueldo por 29,699.7; pagos a 44 trabajadores adscritos a centros de comisionados al sindicato sin contar con su respectivo oficio de comisión sindical por 3,570.4; pagos a 7 trabajadores adscritos a centros cuya clave identifica a los comisionados a otras dependencias, sin contar con su respectivo oficio de comisión por 707.0; pagos a 7 trabajadores que desempeñaron un cargo de elección popular como regidores en los Ayuntamientos del Estado por 565.1; y pagos a 469 trabajadores que no fueron localizados en las visitas a centros de trabajo, y de los cuales los responsables de los centros visitados señalaron que no habían trabajado en el plantel a su cargo por 35,574.4, así como a las recuperaciones operadas que corresponden a pago a conceptos de gasto en partidas diferentes a capítulo 1000 que no corresponden a los fines y objetivos del fondo por 49,812.9; pagos a 19 trabajadores adscritos a departamentos no financiados con el FAEB por 3,187.5; pagos a 23 trabajadores contratados por honorarios adscritos a áreas no financiados con FAEB por 2,606.8; y pagos a un trabajador que desarrolló funciones de mando en el departamento del programa de escuelas de calidad por 677.9.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 52,102.6, que representan el 100.0% de los 52,102.6 reportado en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: Con base en la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Querétaro no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan los siguientes: recursos federales aplicados en rubros o programas que no cumplen con el objetivo por 46,437.7 y falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 3,181.3.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Quintana Roo

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 14 auditorías con 185 observaciones; 186 acciones; 98 recomendaciones; 28 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 20 recomendaciones al desempeño; 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 169,923.9, siendo las auditorías a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo con un monto de 140,120.4 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Municipio de Solidaridad con un monto de 13,755.9.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, revisando un monto de 2,695,126.6, que representan el 91.5% de los 2,944,214.4 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Con base en lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, se advierte que no se cumplió con el pago a conceptos de gasto en partidas diferentes al capítulo 1000 que no corresponden a los fines y objetivos del fondo por 7,734.9; pagos a 159 personas jubiladas por 5,101.8; pagos a 38 trabajadores con posterioridad a la clausura del centro de trabajo por 4,177.3; pagos a 46 trabajadores adscritos a centros de educación para adulto por 3,526.4 ; pagos a 40 trabajadores adscritos a centros de educación media-superior y superior por 6,178.8; pagos a 26 trabajadores adscritos a centros de trabajo encargados de programas federales con financiamiento diferente al del fondo por 4,267.7; pagos a 143 trabajadores comisionados con goce de sueldo de manera indebida por 38,965.5; pagos a 49 trabajadores comisionados con goce de sueldo a dependencias que no corresponden a los fines y objetivos del fondo por 9,650.1 ; pagos a 14 personas que desempeñaron un cargo de elección popular por 2,913.9; pagos a 15 trabajadores contratados por honorarios adscritos a áreas que no corresponden a los fines y objetivos del fondo por 851.9; pagos a 5 trabajadores contratados por honorarios que estuvieron adscritos a un centro de comisionados en otras dependencias por 360.5; pagos a 12,402 trabajadores por concepto de estímulos y bonos estatales para los cuales no se presentó la autorización

correspondiente y que no comparten fines y objetivos del fondo por 43,015.7; subejercicio del ente ejecutor y cuyos recursos se encuentran en una cuenta de la Secretaría de Hacienda estatal por 8,260.4; y rendimientos financieros generados y no transferidos al ente ejecutor por 5,115.5.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Municipio de Solidaridad.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio por medio del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 21,843.6, que representa el 98.8% de los 22,117.0 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: El Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración, control, adjudicación, ejecución y destino de los recursos, donde destacan los siguientes: 3,148.0 destinados a obras en zonas que no beneficiaron directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 9,187.7 destinados a obras que están fuera de la apertura programática de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 214.2 de productos financieros que no se entregó evidencia de su aplicación; 289.0 de obra pagada no ejecutada y 663.5 de gastos indirectos que no acreditan su aplicación en supervisión de obras.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

San Luis Potosí

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 321 observaciones; 361 acciones; 200 recomendaciones; 43 pliegos de observaciones; cinco solicitudes de aclaración; tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 35 recomendaciones al desempeño; 75 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 382,158.0, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 203,863.6 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 49,484.7.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa mediante el FAEB se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 5,823,392.7, que representa el 85.4 % de los 6,815,886.2, reportado al Cierre del Ejercicio Fiscal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó la omisión de transferencia de los recursos del FAEB de la Secretaría de Finanzas al ente ejecutor por 82,762.8 ; rendimientos financieros generados con recursos del FAEB no transferidos al ente ejecutor por 3,661.8 ; 2,849 pagos a 201 empleados adscritos 118 centros de trabajo clausurados por 11,627.6; 1,172 pagos a 60 trabajadores en 23 centros de trabajo destinados a educación primaria para adultos por 3,629.9; 2,989 pagos por 18,502.3 a 159 empleados adscritos en 8 centros de trabajo cuyo sostenimiento es "Artículo 123"; 250 pagos a 12 empleados adscritos a 4 centros de trabajo de los cuales tres prestan servicios de "Asesoría Jurídica" y uno de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por 1,113.7; 149 pagos a 7 empleados adscritos a 5 centros de trabajo para personal estatal subsidiado clausurados por 668.3; 63 empleados que no se identificaron en ninguno de los dos programas estatales 2,426.4; 693 pagos a 24 empleados adscritos a 3 centros de trabajo identificados como agrupación de personal comisionado a las secciones sindicales 26 y 52 por 1,517.4; 14,640 pagos a 282 trabajadores comisionados con goce de sueldo a las secciones sindicales por 66,720.6; 2,012 pagos por 8,913.4 a 60 trabajadores que ocuparon cargos de elección popular (12 presidentes municipales, 7 Síndicos y 41 Regidores); 92 pagos a 34 trabajadores contratados por honorarios que no se les formalizó el contrato respectivo por 1,030.3; 511 pagos quincenales superiores a lo establecido en los contratos por 1,001.0; exceso de pagos en el rubro de compensaciones por 269.5; pagos por 18.4 a trabajadores no encontrados en las visitas a sus centros de trabajo, ni identificados por los responsables de los centros de trabajo correspondientes.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 66,968.9, que representa el 49.4% de los 135,442.2 reportado en la Cuenta Pública de 2007.

Dictamen: El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, determinó que no se cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan los siguientes: 902.2 por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, 478.3 por la falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos, 43,022.0 de obras ejecutadas y/o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema y 4,142.3 de obras ejecutadas y/o acciones que no cumplen con los alcances o ámbitos de beneficio regional o intermunicipal.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Sinaloa

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 246 observaciones; 252 acciones; 133 recomendaciones; 52 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 30

recomendaciones al desempeño; 36 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 330,300.2, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 139,266.2 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 63,282.6.

Auditoría: Al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa mediante el FAEB se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Se determinó revisar un monto de 4,574,056.2, que representa el 83.2 % de los 5,497,538.8 reportado en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación detectó recursos por 7,502.5 que corresponden al pago de categorías destinadas a educación para adultos; 17,341.2 utilizados para el pago de centros de trabajo destinados a educación para adultos, educación superior, bibliotecas o salas populares de lecturas y a la Unidad Coordinadora del PIARE; 16,608.1 para el pago de centros de trabajo no localizados en el Catálogo de Centros de Trabajo; 48,127.9 para el pago a centros de trabajo durante periodos no autorizados; pago de sueldo a trabajadores comisionados a la sección 27, 53 y al Comité Ejecutivo de la sección 27 del SNTE por 36,335.0; pago de honorarios a trabajadores que no corresponden a educación básica por 10,823.2 y pago de remuneraciones a personal no identificado en su centro de trabajo por 2,488.0.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 63,136.0, que representa el 100.0% de los recursos reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Sinaloa no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, adjudicación, destino, difusión y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan las siguientes: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 15,129.5 recursos empleados en obras ejecutadas que no atienden las necesidades de provisión de infraestructura básica de alcance o ámbito regional o intermunicipal por 46,540.7 y erogaciones no justificadas en el rubro de gastos indirectos por 1,499.1.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Sonora

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 200 observaciones; 208 acciones; 118 recomendaciones; 24 pliegos de observaciones; 3 solicitudes de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 31 recomendaciones al desempeño; 32 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 330,225.7, siendo las auditorías recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 159,638.1 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud con un monto de 68,315.9.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Sonora, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable; se determinó revisar un monto de 5,121,655.5, que representa el 90.4% de los 5,664,804.2 correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2007.

Dictamen: De la revisión a los cheques emitidos a centros de trabajo no autorizados, se identificaron un total de 1,216 cheques en las nóminas ordinarias con un importe acumulado de 7,407.1 miles de pesos, con cargo en 13 centros de trabajo no autorizados o no existentes, resultado de un universo de 924,662 cheques con un importe acumulado de percepciones de 2,598,324.5 miles de pesos. Así mismo con la finalidad de verificar que el otorgamiento de comisiones al sindicato se realizara de conformidad con la norma aplicable, se procedió a lo siguiente: de un total de 135 comisionados a los diferentes sindicatos se revisó la totalidad de la documentación justificativa correspondiente y se determinó que los oficios de otorgamiento de licencias con goce de sueldo, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, que ascendieron a 44,102.1 miles de pesos, fueron cubiertas con los recursos provenientes del FAEB, lo que incumplió el artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 1,075,552.0, que representa el 89.7% de los 1,199,218.8, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: Se identificó su aplicación por 3,243.4; aplicación de recursos en fines distintos a los establecidos por 16,651.4; pagos a personal de autorizaciones extemporáneas por comisión sindical por 1,707.9; pagos a personal sin contar con la autorización por comisión sindical por 4,665.5; pagos superiores a lo establecido en el tabulador autorizado para el

concepto "sueldo base" por 630.4 ; pagos a personal que no cuenta con nombramiento por 8,446.7; pagos al personal posteriores a la fecha de su baja por 3,037.3 miles pesos; pago de compensaciones a mandos medios y superiores por 9,683.9; pagos del estímulo medidas de fin de año a mandos medios cuando no les correspondía por 436.0; faltante de documentación comprobatoria de los pagos realizados a personal contratado por tiempo determinado por 13,158.1; pagos a personal sin que se haya obtenido evidencia de que se encuentran laborando en los centros de trabajo en los cuales están adscritos por 5,171.5; pago de más a un proveedor al precio unitario contratado en un medicamento por 206.1; no se aplicaron penas convencionales a ningún proveedor por incumplimiento en el plazo de entrega pactado en los contratos por 1,190.3; diferencia entre inventario físico y lo reportado por reportes de inventarios por 283.6; y medicamento caducó por 1,511.7.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Tabasco

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 19 auditorías con 153 observaciones; 158 acciones; 77 recomendaciones; 31 pliegos de observaciones; una solicitud de aclaración; ninguna promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 18 recomendaciones al desempeño; 31 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resultado de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 385,143.8, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado con un monto de 126,372.8 y la realizada a recursos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de los Estados con un monto de 145,891.7.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa por medio del FAEB, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 4,169,855.0, que representa el 87.7 % de los 4,754,696.0 reportados en el Ejercicio 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco realizó pagos como apoyos administrativos para las acciones de coordinación y desarrollo en la educación media y superior por 1,160.1; pagos realizados como gastos de operación para otorgar y promover la educación para adultos por 3,361.0; apoyos al Fideicomiso del Programa Escuelas de Calidad por 7,924.1; apoyos económicos para la sección 29 del SNTE por 9,000.0; 774 pagos a 36 empleados adscritos a centros de educación para adultos, cuando esta modalidad educativa cuenta con un financiamiento federal distinto al FAEB por 18,496.0; 2,598 pagos a 131 trabajadores adscritos a 13 centros que no fueron localizados en el catálogo general de centros de trabajo de la Secretaría por 18,500.5; 3,736 pagos a 186 trabajadores adscritos a centros de trabajo clausurados por 24,437.6; se comisionaron con goce de sueldo a la sección 29 del SNTE y

al SITET a 126 trabajadores, generándose 5,297 pagos por 27,730.6; 138 pagos a 4 empleados comisionados al sindicato sin contar con su respectivo oficio de comisión sindical por 1,064.7; se realizaron 756 pagos a 48 trabajadores contratados por honorarios adscritos a áreas de educación media y superior, cuyas funciones primordiales no están relacionadas con la educación básica y formación de docentes por 4,471.0; a 24 trabajadores por honorarios se les realizaron 506 pagos, pero estuvieron adscrito a áreas responsables de la infraestructura educativa por 2,498.0; 1,527 pagos a 62 trabajadores contratados por honorarios que estuvieron adscritos a áreas responsables de la educación para adultos por 1,449.7; pago de compensaciones y bonos a personal de mando adscrito a áreas no financiadas con el FAEB por 853.0; pagos a personal no localizado en las visitas a los centros de trabajo por 5,426.6; y subejercicio por 950.8 que no ha sido reprogramando para ser ejercido.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de los Estados (FEIEF).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 61,296.5, que representa el 74.7% de los 82,056.7 ejercidos en el proyecto.

Dictamen: Al examinar el origen y destino de los recursos del proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2007 no se habían aplicado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas correspondientes a los anticipos de los cuatro trimestres por 145,891.7.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Tamaulipas

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 172 observaciones; 176 acciones; 101 recomendaciones; 11 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 23 recomendaciones al desempeño; 39 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 125,689.90, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por 78,599.00 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 28,364.80, las que tienen mayores montos.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos al Estado, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normatividad aplicable, se determinó revisar un monto de 5,295,231.8, que representa el 67.8% de 7,810,825.2 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a acciones determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de las operaciones examinadas; además, se considera que las operaciones observadas corresponden a solicitud de información y aclaración, las cuales se encuentran en proceso de cuantificación en términos monetarios y no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 1,063,759.3, que representa el 70.5% de los 1,509,681.4, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que existen intereses generados y no pagados por extemporaneidad en la entrega de recursos por 276.4; intereses generados sin identificar su aplicación por 120.2; intereses generados por préstamos al programa del seguro popular por 1,029.5; donativo a una Asociación Civil por 102.0; recursos destinados al Programa del Seguro Popular por 12,610.3; pagos a una persona comisionada a otra dependencia por 61.9 ; pagos de más a los autorizados en el concepto de pago de sueldos compactados por 96.1; pagos a personal posteriores a la fecha de su baja por 78.3; pagos en efectivo de vales de despensa del concepto medidas de fin de año al personal, cuando debieron ser en especie, lo que originó haber subsidiado el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los trabajadores por 6,804.0; pagos del estímulo medidas de fin de año a mandos medios cuando no les correspondía por 593.2 ; pagos de más a lo estipulado en los contratos de prestación de servicios por tiempo determinado por 2,851.4; pago de intereses moratorios al ISSSTE por 32.5; pagos de actualización y recargos del Impuesto sobre Productos del Trabajo por 3,366.9; y medicamento caduco por 342.1.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Tlaxcala

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 13 auditorías con 166 observaciones; 177 acciones; 89 recomendaciones; 37 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 17

recomendaciones al desempeño; 32 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 381,681.7, siendo las auditorías a Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por 311,785.3 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Municipio de Huamantla por 18,379.5.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 2,631,593.0, que representa el 95.5% de los 2,756,159.4 reportados en Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó 5,740.5 por pagos no vinculados con los fines y objetivos del fondo; 5,139.3 por no presentar documentación que acredite el destino y aplicación de los productos financieros generados; 3,872.6 pagados a 58 trabajadores que estuvieron adscritos en 10 centros de trabajo de educación para adultos; 205,698.6 pagados a 3,252 trabajadores que estuvieron adscritos en 251 centros de trabajo de sostenimiento estatal; 17,898.3 por pagos improcedentes a 77 empleados comisionados a las sección sindicales; 7,059.7 pagados a 37 trabajadores de centro de trabajo "AGS" comisionados a las secciones sindicales; 10,206.6 por pagos a 33 personas que no justifican su asignación temporal al centro de trabajo de comisionados a otras dependencias y 37 trabajadores que están laborando en dependencias que no son afines a los objetivos del fondo; 4,496.7 por pagos a 32 empleados que de forma simultánea ocuparon un cargo de elección popular; 23,010.0 por pagos a 461 personal por honorarios que no cuentan con contrato y 319 prestadores de servicio que cobraron adicionalmente compensación garantizada; 2,170.7 por pago de compensaciones para personal de mando a 14 trabajadores, sin que realizaran las funciones propias del nivel; 26,492.3 por pago a 243 empleados no localizados en las visitas a centros de trabajo y los responsables de los centros manifestaron que dichas personas no han laborado en el mismo.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Huamantla.

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 19,835.7, que representa el 98.9% de los 20,048.4, reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la orientación de los recursos del FISM, donde destacan los siguientes: se destinaron

17,646.1, que representan el 84.2% de los recursos ejercidos del fondo a conceptos que no se relacionan con el financiamiento de obras o acciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema; se otorgaron anticipos por 591.1 para obras que no se localizaron, se destinaron recursos en el rubro de gastos indirectos por 72.8 para la compra de bienes muebles que no fueron localizados en las oficinas del H. Ayuntamiento y bienes de consumo respecto de los cuales no se acreditó su uso en las actividades relacionadas con la ejecución y administración de las obras públicas, así como por rendimientos financieros no reintegrados por el Estado al Municipio por 69.5 por retrasos en la ministración de los recursos del fondo.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Veracruz

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 18 auditorías con 139 observaciones; 149 acciones; 86 recomendaciones; 27 pliegos de observaciones; una solicitud de aclaración; tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 12 recomendaciones al desempeño; 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 86,638.1, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz con un monto de 31,802.7 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con un monto de 17,327.8.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa mediante el FAEB se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 14,826,110.1, que representa el 94.0 % de los 15,774,323.9 reportados al término del ejercicio presupuestario 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó 3,995.4 de rendimientos financieros que no reportó la SEFIPLAN; 8,170.1 de pagos a personal en centros de trabajo clausurados y dados de baja; 178.5 por pagos a personal comisionado con goce de sueldo al sindicato sin la autorización respectiva; 2,220.8 de pagos a personal en centros de trabajo que no fueron localizados durante las visitas realizadas; y 17,237.9 de personal que no se encontró evidencia de registro de asistencia en los planteles y oficinas visitadas.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal

(LCF) y demás normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 207,877.5, que representan el 84.6% de los 245,852.7 reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a registros, adjudicaciones, destino, transferencia y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan los siguientes: el monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 17,330.4, se integra por recuperaciones probables de 14,692.0, 486.7, de pagos improcedentes o en exceso en la ejecución de las obras, 12,817.5, de recursos federales aplicados a fines distintos del fondo, y 1,387.8, de faltante en la cuenta bancaria y recuperaciones operadas por 2,638.4, de intereses generados por el retraso en la entrega de recursos y 9,657.0 correspondiente a errores y omisiones de la información financiera.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Yucatán

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 14 auditorías con 129 observaciones; 134 acciones; 89 recomendaciones; 9 pliegos de observaciones; ninguna solicitud de aclaración; una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 31 recomendaciones al desempeño; 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables: Se detectaron recuperaciones determinadas por 129,087.6, siendo las auditorías de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 49,708.8 y la realizada a recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con un monto de 44,406.1.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones a Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa por medio del FAEB, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 3,358,776.1, que representa el 86.1 % de los 3,899,069.3 reportados en el Ejercicio 2007.

Dictamen: La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, con base en lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, determinó que se realizaron 248 pagos a 12 trabajadores eventuales que realizaron funciones de supervisión de obras por 899.3; 1,618 pagos a 171 empleados adscritos a centros de trabajo de educación para adultos, cuando esta modalidad educativa cuenta con un financiamiento federal distinto al FAEB por 5,884.0; 2,585 pagos a 198 trabajadores adscritos a las direcciones de educación media-superior y a la de profesiones, áreas cuyas funciones primordiales no están relacionadas con la educación básica y formación de docentes por 15,139.9; 48 pagos a 3 empleados adscrito a salas populares de lectura, que dan un servicio que no es exclusivo para población en educación básica o formación de docentes por 397.3; 38 pagos a dos trabajadores de mando adscritos al Programa Escuelas de Calidad y al departamento de programación, supervisión y control de obras por 764.0; pagos a personal no localizado en las visitas a los centros de

trabajo por 2,996.1; subejercicio por 14,901.1 que no ha sido reprogramando para ser ejercido; pago a firmas independientes por concepto de asesorías por 1,872.2; pagos por concepto de gastos de operación del IBECEY y para financiar proyectos de infraestructura educativa por 856.2 ; pago como aportación al Fideicomiso del Programa Escuelas de Calidad por 6,696.1; 604 pagos a 368 trabajadores adscritos a centros de trabajo de bachillerato general por 1,347.2; se comisionaron con goce de sueldo a la secciones 33 y 57 del SNTE a 50 trabajadores, generándose 3,100 pagos por 11,644.2; 235 pagos a 17 trabajadores comisionados a dependencias o áreas que no corresponden a los fines y objetivos del Fondo; y 12 pagos a 4 trabajadores contratados por honorarios que desarrollaron trabajos de supervisión de obras por 109.5 .

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 150,973.6, que representa el 55.5 % de los 271,784.9 reportado en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro, administración y destino de los recursos del fondo donde se destacan los siguientes: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán (DIF) destinó recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para el pago de sueldos y prestaciones laborales de su personal por 35,923.5; otorgó donativos en efectivo y especie por 5,752.6; efectuó pagos en exceso al proveedor de insumos, para el Programa de Desayunos Escolares por la cantidad de 1,009.1 y no entregó evidencia documental de la diferencia entre lo pagado y entregado por el proveedor de despensas por 1,720.9.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Zacatecas

Alcance de la Fiscalización Superior: Se realizaron 14 auditorías con 245 observaciones; 266 acciones; 151 recomendaciones; 38 pliegos de observaciones; tres solicitudes de aclaración; tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 27 recomendaciones al desempeño; 44 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ninguna denuncia de hechos.

Resumen de las auditorías más relevantes por montos recuperables Se detectaron recuperaciones determinadas por 393,401.90, siendo las auditorías de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con un monto de 202,390.1 y la realizada a recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal con un monto de 80,994.0.

Auditoría: A recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Objetivo: Verificar que los recursos federales transferidos a la citada entidad federativa por medio del FAEB, se distribuyeron, registraron, administraron, ejercieron, y destinaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 3,795,597.5, que representa el 84.5 % de los 4,492,991.9 reportados en el Ejercicio Fiscal 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación observó 510.7 por el pago de intereses moratorios, altas y bajas extemporáneas al ISSSTE; 9,665.4 por la falta de comprobación del destino de los productos financieros generados en la cuenta administrada por la Secretaría de Finanzas del Estado; 4,627.7 por la incorporación en las nóminas del FAEB de categorías pertenecientes a otros subsistemas de educación o que no fueron localizadas en el catálogo de puestos de la dependencia; 94,666.7 por el pago de remuneraciones a personal adscrito en centros de trabajo clausurados, de servicio a educación para adultos o no financiados con el fondo; 1,365.3 por la incorporación en las nóminas estatales subsidiadas de centros de trabajo clausurados o no localizados en el catálogo correspondiente; 64,688.7 por pagos en las nóminas estatales subsidiadas de centros de trabajo que no corresponden al subsistema de telesecundarias o cuyo sostenimiento es el federal transferido; 38,999.9 por el pago de personal comisionado en las secciones sindicales indebidamente con goce de sueldo; 49,247.6 por el pago de remuneraciones a personal comisionado en otras dependencias con funciones diferentes del objetivo del FAEB con goce de sueldo, de las cuales la Secretaría de Finanzas del Estado obtuvo las recuperaciones, pero no se identificó la aplicación de los fines del Fondo y se consideraron como ampliaciones estatales, aunado de que las cuotas obrero patronales no se consideraron en las recuperaciones; 721.9 por el pago de compensaciones a personal adscrito al departamento de Preparatoria Abierta o que estuvieron por encima del tabulador salarial del Estado; y 2,584.9 por el pago de remuneraciones a personal no localizado en los centros de trabajo visitados y no identificado por los responsables de los mismos; por otro lado, en la entidad opera un Programa de Prevención Social cuya fuente de financiamiento proviene de la administración de los recursos del FAEB al reducir la carga fiscal y aplicar una base gravable menor y por consecuencia se pagó menos ISR, en tanto que los recursos recabados se utilizaron para el otorgamiento de prestaciones adicionales de las otorgadas por la federación o el Estado.

Auditoría: A recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 74,331.1, que representa el 100.0% de los recursos reportados en la Cuenta Pública 2007.

Dictamen: La Auditoría Superior de la Federación determinó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, destino, difusión, participación social y cumplimiento de metas y objetivos, donde destacan las siguientes: obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema por 73,712.2; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 7,281.8; falta de difusión de las obras y acciones por

realizar o de los resultados alcanzados; falta de elaboración de un programa operativo anual que incluya las obras por realizar específicamente con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

Para ver el número de observaciones y acciones derivadas de las mismas véase anexo 23.

Relación de observaciones por Entidades Federativas para los Ramos 33 y 23 derivadas de las auditorías practicadas directamente por la Auditoría Superior de la Federación.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Para el caso de este Fondo a continuación se muestran las Entidades Federativas y los Municipios auditados de cada una de ellas, así como las observaciones más importantes.

Municipios revisados:

1. AGUASCALIENTES: Aguascalientes, Calvillo y Jesús María;
2. BAJA CALIFORNIA: Ensenada, Mexicali y Tijuana
3. BAJA CALIFORNIA SUR: Comondú, La Paz y Los Cabos
4. CAMPECHE: Campeche, Carmen y Champotón
5. CHIAPAS: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo

6. CHIHUAHUA: Chihuahua, Guachochi y Juárez
7. COAHUILA: Monclova, Saltillo y Torreón
8. COLIMA: Colima, Manzanillo y Tecomán
9. DURANGO: Durango, Gómez Palacio y Lerdo
10. GUANAJUATO: Irapuato, León y Pénjamo

11. GUERRERO: Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo y Xochistlahuaca
12. HIDALGO: Huejutla de Reyes, Tulancingo de Bravo e Ixmiquilpan
13. JALISCO: Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá
14. MÉXICO: Naucalpan de Juárez, Toluca, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán
15. MICHOACÁN: Morelia, Uruapan y Zitácuaro

16. MORELOS: Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla
17. NAYARIT: El Nayar, Santiago Ixcuintla y Tepic
18. NUEVO LEÓN: Apodaca, Guadalupe y Monterrey
19. OAXACA: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza y San Pedro Pochutla
20. PUEBLA: Atlixco, Puebla y Tehuacán

21. QUERÉTARO: Amealco de Bonfil, San Juan del Río y El Marqués
22. QUINTANA ROO: Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad
23. SAN LUIS POTOSÍ: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale

24. SINALOA: Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y El Fuerte
25. SONORA: Hermosillo, Cajeme y Navojoa
26. TABASCO: Cárdenas, Centro y Huimanguillo
27. TAMAULIPAS: Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira
28. TLAXCALA: Huamantla, Tlaxcala y San Pablo del Monte
29. VERACRUZ: Papantla, Xalapa y Veracruz
30. YUCATÁN: Mérida, Valladolid y Tizimín
31. ZACATECAS: Guadalupe, Fresnillo y Pinos.

Observaciones

1. Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema
2. Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal
3. Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la LCF y que además no benefician a población en rezago social y pobreza extrema
4. Recursos no entregados o atrasos en las ministraciones de los Municipios
5. Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para los gastos indirectos o de desarrollo social
6. Falta de documentación comprobatoria del gasto
7. Bajo el rubro de Otras Irregularidades

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal:

Para el caso de este Fondo, a continuación se muestran las Entidades Federativas y los Municipios auditados de cada una de ellas, así como las observaciones más importantes.

Municipios y Demarcaciones Territoriales revisadas:

1. AGUASCALIENTES: Calvillo, Jesús María y Aguascalientes;
2. BAJA CALIFORNIA: Ensenada, Mexicali y Tijuana;
3. BAJA CALIFORNIA SUR: Comondú, La Paz y Los Cabos;
4. CAMPECHE: Campeche, Carmen y Champotón;
5. CHIAPAS: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo;
6. CHIHUAHUA: Chihuahua, Guachochi y Juárez;
7. COAHUILA: Monclova, Saltillo y Torreón;
8. COLIMA: Colima, Manzanillo y Tecomán;
9. DISTRITO FEDERAL: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A.

Madero, Iztapalapa y Tlalpan,

10. DURANGO: Durango, Gómez Palacio y Lerdo;

11. GUANAJUATO: Irapuato, León y Pénjamo;

12. GUERRERO: Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo y Xochistlahuaca;

13. HIDALGO: Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tulancingo de Bravo;

14. JALISCO: Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá;

15. MÉXICO: Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Tultitlán;

16. MICHOACÁN: Morelia, Uruapan y Zitácuaro;

17. MORELOS, Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec;

18. NAYARIT: El Nayar, Santiago Ixcuintla y Tepic;

19. NUEVO LEÓN: Apodaca, Guadalupe y Monterrey;

20. OAXACA: Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y San Pedro Pochutla;

21. PUEBLA: Atlixco, Puebla y Tehuacan;

22. QUERÉTARO: Amealco de Bonfil, El Marques y San Juan del Río;

23. QUINTANA ROO: Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad;

24. SAN LUIS POTOSÍ: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale;

25. SINALOA: Ahome, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Navolato;

26. SONORA: Cajeme, Hermosillo y Navojoa;

27. TABASCO: Cárdenas, Centro y Huimanguillo;

28. TAMAULIPAS: Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo;

29. TLAXCALA: Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxcala;

30. VERACRUZ: Papantla, Veracruz y Xalapa;

31. YUCATÁN: Mérida, Tizimín y Valladolid; y

32. ZACATECAS: Fresnillo, Guadalupe y Pinos.

Observaciones:

1. Falta de documentación comprobatoria del gasto
2. Recursos no entregados o atrasos en las ministraciones a los Municipios
3. Recursos aplicados en rubros que no cumplen los fines del fondo
4. Pagos indebidos al personal con cargo en el rubro de seguridad pública
5. Bajo el rubro de Otras Irregularidades se determinaron recuperaciones determinadas

Fondo Metropolitano⁷

1. Penalización por no concluir los trabajos en la fecha contractual por 4,052.0 miles de pesos, que significaron el 52.3% de las recuperaciones determinadas.
2. No existe evidencia de la aplicación del primario anticorrosivo y esmalte alquídico en estructura metálica por un monto de 212.8 miles de pesos, que representa el 2.8% del total de recuperaciones.
3. Cargos financieros por no amortizar el anticipo otorgado por la cantidad de 2,463.4 miles de pesos, que significa el 31.8% de las recuperaciones.
4. No aplicó gastos financieros al reintegrarse cantidades pagadas en exceso por 1,014.1 miles de pesos, lo que representó el 13.1% de las recuperaciones determinadas.

Conclusiones generales

De lo presentado anteriormente se concluye que el fondo con mayores montos recuperables es el FAEB, en la muestra de las dos probables recuperaciones con montos mayores por Entidades Federativas, 27 estados presentan esta condición para el fondo, por lo que debe de dársele seguimiento al fondo y a la atención de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Debido a la importancia que el mismo tiene para reducir la brecha educativa que existe comparando al país con otros.

A continuación mencionamos los principales puntos que la Auditoría Superior de la Federación señala en el Tomo Ejecutivo de su informe:

- Omisión de transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas al ente executor.
- Pagos indebidos a comisionados y a personal de honorarios sin relación con los objetivos del fondo.
- Pagos a personal no localizado o con empleos o plazas incompatibles.
- Pagos a personal dado de baja o con licencia sin goce de sueldo.
- Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes.
- Erogaciones con fines distintos a los determinados por la LCF.
- Apoyos económicos indebidos a la sección sindical.
- Falta de documentación comprobatoria del gasto (nóminas).
- Pagos a terceros institucionales por concepto de multas y recargos.
- Aplicación incorrecta de la base gravable del cálculo del ISPT.

- Productos financieros del FAEB cuya aplicación no pudo comprobarse.

La educación debe ser un tema central en la agenda de éste gobierno, es por ello que el trabajo de fiscalización cobra un relevancia central, ya que permite apreciar los logros reales en esta materia, así como identificar sus fortalezas y deficiencias, para emprender una agenda que de los elementos para mejorar en este ámbito.

Acciones inmediatas ineludibles:

1. Atender, en el marco de las disposiciones aplicables, las acciones derivadas de las observaciones.
2. Evitar, con base en la aplicación de la norma, la recurrencia susceptible de observaciones particularmente aquellas que implican probable daño patrimonial o acciones sancionatorias para servidores públicos.
3. Es importante señalar que la totalidad de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación, tiene su importancia relativa con independencia de los montos recuperables. Esto es, en conjunto, las observaciones representan una *radiografía* del comportamiento de los gobiernos en la administración de los recursos y del patrimonio público, y es justamente eso lo que hay que resaltar, porque dichas observaciones pueden derivar en acciones administrativas, sancionatorias e incluso penales.

CONSIDERACIONES FINALES

La Cámara de Diputados tiene la facultad Constitucional exclusiva de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, así como verificar que dicha gestión se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Esta responsabilidad se cumple a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. En ese sentido, las acciones de fiscalización y revisión realizadas fueron ejecutadas en dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en órganos constitucionalmente autónomos, en las 32 entidades federativas, en instituciones públicas de educación superior, en municipios y demarcaciones territoriales, así como en entidades de fiscalización de las legislaturas locales.

Los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación se materializaron en 962 dictámenes, integrados por 330 con opinión limpia, 370 de opinión con salvedad, 248 con opinión negativa, 10 con abstención de opinión y 4 sin opinión.

Es importante señalar que las auditorías practicadas son determinadas por la Auditoría Superior de la Federación como resultado del análisis de variables en función de los objetivos y metas presentados en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los programas de los Poderes de la Unión y de los órganos constitucionalmente autónomos.

Conforme esta metodología, se seleccionaron 18 programas de los 70 programas considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, involucrando 17 ramos, 5 entidades, 4 grupos funcionales, 15 funciones, 39 sub funciones, 63 actividades institucionales, 466 unidades responsables y 1,120 actividades prioritarias.

La revisión de la Cuenta Pública 2007 refleja que los sectores más auditados fueron los de Energía, Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes.

Los sectores con mayor número de observaciones fueron Energía, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y las paraestatales no coordinadas.

Asimismo, el mayor número de observaciones lo tuvieron la Secretaría de Educación Pública, Pemex Exploración y Producción, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional de Agua y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La finalidad de toda política pública enfocada al desarrollo social debe de ser el promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los apoyos para la población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional.

El informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación presenta observaciones respecto a la ejecución del gasto público en programas asistenciales, debido a la falta de claridad en los padrones de beneficiarios, la duplicidad de acciones dentro de diferentes programas o en distintos niveles de gobierno, la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales, entre otros.

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal diseñó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales como una herramienta de información y análisis de los programas a cargo de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipios, que celebren convenios con aquella.

Como parte de la revisión practicada a este Sistema, se desprende que no se cumplió con el propósito de integrar en forma estructurada y sistematizada la información de los padrones, ni con los objetivos específicos establecidos en el decreto de creación del Sistema.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación establece que algunos de estos programas no tienen una incidencia significativa en la mejora de la calidad de vida de la población "beneficiada".

Otro problema en términos de transparencia, es la transferencia de recursos a las delegaciones, entidades federativas y municipios, debido principalmente a la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos y a la falta de elementos técnicos para priorizar el gasto público. En ese sentido, se debe reforzar la transparencia y rendición de cuentas en aquellas

entidades federativas y municipios en los que se ha identificado opacidad y riesgo de desvío de recursos.

En esta materia, la Auditoría Superior de la Federación ha determinado numerosas revisiones y determinado cuantiosas y recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno en los ejecutores de gasto. De igual manera, el gasto de infraestructura estatal y municipal se ejecuta sin contar con una cartera de proyectos de inversión jerarquizados con base en las necesidades de la población y su rentabilidad social.

De la revisión a los Ramos Generales 23 y 33, las observaciones más recurrentes consisten en que los recursos se orientan a rubros que no contempla la normatividad aplicable.

La Auditoría Superior de la Federación destaca la existencia de subejercicios recurrentes en diversos sectores de la administración pública federal. De acuerdo a la información provista por la propia Auditoría, los subejercicios son producto del exceso de trámites para el oportuno ejercicio del gasto; la falta de proyectos en los distintos niveles de gobierno que cuenten con estudios que los sustenten; la canalización de los subejercicios a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos "con el propósito de utilizarlos posteriormente con fines distintos a los aprobados, sin control, transparencia ni rendición de cuentas".

Asimismo, los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos continúan sin rendir cuentas al no incluirse dentro de la Cuenta Pública. Esta situación neutraliza, en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos. Es por ello que se debe promover el que todos aquellos recursos no ejercidos por las distintas entidades y dependencias del gobierno federal sean direccionados de manera irrevocable a proyectos estratégicos con un alto impacto social.

Al cierre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó 341 fideicomisos sin estructura, 27 mandatos y 9 contratos análogos, cuya disponibilidad fue de 327,074.5 millones de pesos. En 2007, el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), ahora denominado Fondo de Infraestructura (FONADIN), contó con 27,541.3 millones de pesos para apoyar proyectos y estudios de infraestructura y sólo utilizó 4,428.8 millones de pesos.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación destaca irregularidades en las labores de supervisión del gobierno en el cumplimiento de contratos y concesiones de particulares. Menciona que esta deficiencia ha permitido que este tipo de contratos/licencias se otorguen a personas o empresas que no tienen la capacidad para proveer los servicios por los que reciben una contraprestación.

A este respecto, las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de Fiscalización determinaron debilidades e irregularidades, destacando el incumplimiento de la Ley en el otorgamiento de las autorizaciones, así como el desconocimiento por parte de los servidores públicos respecto de la legislación que regula procesos en el otorgamiento de autorizaciones, aunado a una escasa supervisión para verificar las obligaciones a cargo de los particulares, además de carecer de la infraestructura y controles que aseguren que las funciones de supervisión puedan ser adecuadas y eficientes, esto último ocasiona que se

carezca de un adecuado seguimiento a las sanciones administrativas y fiscales y que las impuestas no sean ejecutadas debido a las violaciones al procedimiento, negligencia y, en su caso, corrupción.

Asimismo, menciona que, en prácticamente todos los órdenes de gobierno, faltan mecanismos para supervisar y exigir que los particulares cumplan con sus obligaciones contractuales. En diversas auditorías a las que se hace referencia en el presente Dictamen, se comprueba que muchas dependencias y entidades autónomas no observan la normatividad en materia de licitaciones, todo ello en detrimento de la transparencia y la obtención de las mejores condiciones para el Estado. Uno de los principales objetivos de esta Soberanía, que además coincide con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, es revisar la normatividad actual para garantizar que los entes públicos responsables de la regulación y supervisión de las actividades y procesos que han sido delegados a particulares, ejerzan con oportunidad, autonomía y firmeza sus atribuciones.

Dentro de la revisión de prácticamente todos los sectores, la Auditoría Superior de la Federación incluye varias recomendaciones relacionadas con la imposibilidad de evaluar y dar seguimiento oportuno a los programas que implementa el gobierno federal, lo cual impide medir la efectividad de los mismos respecto a los objetivos que para cada uno de estos programas se han planteado. Este es uno de los problemas que de manera más urgente se debe solventar para poder alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior, esta Cámara hace propias las conclusiones y resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo, en primer término, de ser corresponsables de la construcción de políticas públicas eficaces y, en segundo lugar, la obligación moral y legal de asumir la responsabilidad constitucional que nos corresponde a cada uno de los diputados que integramos este cuerpo colegiado.

Por esta razón, la información y documentación rendida en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior, nos permite un mejor entendimiento de los fenómenos, problemas y áreas de oportunidad para proponer soluciones que vigoricen leyes, procesos e instancias en los Poderes de Unión y en los órdenes estatales y municipales en beneficio de la sociedad, a través de instituciones públicas que le garanticen legalidad y transparencia en los servicios públicos, en programas de gobierno, así como en la ejecución de los recursos.

Con base en información aportada en el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, esta Cámara de Diputados considera fundamental atender asuntos como la discrecionalidad en el manejo de los recursos que advierte en sectores de la administración pública y que genera un alto grado de opacidad. Tal es el caso del otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, enajenación de bienes patrimonio del Estado, remuneraciones de los servidores públicos, exenciones de pago de adeudos fiscales, transferencias a sindicatos, entre otros.

De igual manera, esta discrecionalidad se reflejó en el incumplimiento de las normas aplicables a la contratación y destino de los recursos de un financiamiento otorgado por el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la implantación de medidas para continuar las reformas al marco jurídico del sector financiero mexicano.

Atención especial merece la falta de una contabilidad patrimonial y de registros e inventarios, así como de mecanismos necesarios para su control y preservación. En ese sentido y por tratarse de un asunto fundamental para las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, esta Cámara hará el seguimiento correspondiente a la aplicación y resultados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En este apartado, la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias en la Administración Pública Federal, ocasionadas por la falta de coordinación en las áreas responsables de las dependencias. Al respecto, no se acreditó la propiedad del Gobierno Federal para el 30% de sus 11,507 inmuebles; el 27.7% no estuvo inscrito en el Registro Público de la Propiedad; el 33.1% no tuvo certeza de su inscripción y el 60.8% no estuvo protegido jurídicamente, lo que repercute en los registros contables.

Para 2008 debió haberse concluido la instrumentación y operación de un sistema de evaluación del desempeño que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del gasto público. Este sistema incorpora indicadores para evaluar la calidad de los bienes y servicios públicos y la satisfacción del ciudadano en las dependencias y entidades incluyendo los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos. Estos indicadores forman parte del Presupuesto de Egresos y sus resultados deben incorporarse en la Cuenta Pública, debiendo incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En relación a la evaluación al desempeño, la Auditoría Superior de la Federación advierte dificultades estructurales en todos los niveles de la administración pública que dificultan crear condiciones necesarias para una evaluación del desempeño con calidad; entre estas limitaciones, sobresale la multiplicidad y contradicción en los objetivos de algunos programas.

En este sentido, no existe una correlación entre los objetivos globales, los específicos y las metas; se observa ausencia de objetivos, metas pertinentes y medibles en cuanto a resultados alcanzados y eficacia, eficiencia y economía; también se advierte inexperiencia en el diseño y explotación de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios.

La Auditoría Superior de la Federación observa que los sistemas de información son inadecuados para una administración a base de resultados.

El análisis complementario de indicadores nos permite observar las deficiencias y problemas que tiene las dependencias para poder determinar sus objetivos y metas en materia de indicadores de resultados, lo cual hace que la información que presentan sea insuficiente y poco clara para la toma de decisiones.

Se destaca el posicionamiento de la Auditoría Superior de la Federación respecto a lo siguiente:

- "Mientras no se reduzca de manera sustancial la burocracia, la tramitología, y sobre todo, la discrecionalidad en la actuación de los servidores públicos, será muy difícil abatir los niveles de corrupción que existen en el país. Esta es una tarea que compete fundamentalmente a la Administración Pública Federal, la cual debe tomar medidas para atacar en su raíz la problemática."
- "En todo Estado democrático la universalidad de las leyes es norma que regula la actuación de los servidores públicos, pues no puede permitir excepción alguna en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo contrario haría nugatorio cualquier esfuerzo por construir un mejor gobierno".

La LXI Legislatura asume la responsabilidad de dar seguimiento puntual a las observaciones, recomendaciones y opiniones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a la revisión de la Cuenta Pública 2007, así como realizar, a través de las comisiones ordinarias que integran esta Cámara, los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ámbito de competencia y de colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008; el artículo 8 de la Ley de la Fiscalización Superior de la Federación y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió, el 15 de mayo de 2008, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007 para su revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Se exhorta a las entidades fiscalizadas para que en sus operaciones observen los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, particularmente en lo relativo a los

principios contables de "Consistencia"; "Revelación Suficiente"; "Base en Devengado"; "Integración de la Información", entre otros, a efecto de evitar enfoques que dificulten el alcance y evaluación de las políticas públicas. Lo anterior, servirá para que las operaciones contables cuenten con el sustento técnico que fortalezca el control del gasto público.

CUARTO.- Se exhorta a las entidades fiscalizadas, en particular a las entidades federativas, y; aquellas de los Sectores Energía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Entidades No Coordinadas Sectorialmente, Gobernación, Hacienda y Crédito Público y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que fortalezcan tanto los mecanismos y/o procedimientos de ejecución del gasto, como el autocontrol y la capacitación y desempeño de los servidores públicos responsables de estas funciones y, en su caso, la captación del ingreso, con el fin de observar estrictamente el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Igualmente, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que aplique las sanciones que correspondan y, junto con la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo con mayor intensidad sus tareas de revisión y control, fortaleciendo los mecanismos de prevención y de los procesos de revisión que ejecutan, a efecto de lograr una efectiva y oportuna aplicación de la normativa.

QUINTO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá revisar las estrategias de prevención, revisión y fiscalización que acuerde con instancias de control de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno, a través de los Convenios de Coordinación y Colaboración que celebra con dichas instancias, con el objeto de lograr que las entidades fiscalizadas cumplan con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con la normatividad aplicable, y por consiguiente disminuir los incumplimientos a los mismos.

SEXTO.- Se exhorta a las entidades fiscalizadas a que realicen todas las acciones conducentes que les permitan cumplir con las disposiciones en materia de fiscalización y así evitar, en el futuro, observación alguna por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

SÉPTIMO.- En ejercicio de sus funciones, la Auditoría Superior de la Federación deberá atender y dar seguimiento a las observaciones, recomendaciones y acciones que emitió como resultado de las auditorías que practicó, determinando los daños y perjuicios que se hayan causado a la Hacienda Pública Federal.

OCTAVO.- Se exhorta a los sujetos fiscalizados y, en su caso, a los órganos de internos de control, a realizar lo necesario para el total desahogo de las acciones en proceso y se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, que dé estricto seguimiento a la solventación de las observaciones y acciones emitidas, así como que promueva y finque las responsabilidades procedentes.

NOVENO.- En virtud de que el ejercicio del gasto debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, así como canalizarse de manera exclusiva al objeto para el cual se asigna dentro de un sistema de rendición de cuentas, se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las acciones conducentes para vigilar y fiscalizar lo anterior en el ejercicio de los recursos públicos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios vía los Ramos 23 y 33.

DÉCIMO.- Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a que, con base en las atribuciones que le otorga la Ley, revise las áreas de la gestión pública que se mencionan en el Dictamen que acompaña al presente Decreto, que representan áreas de opacidad y riesgo de la gestión gubernamental, por la falta de indicadores e incumplimiento de metas y objetivos.

DÉCIMO PRIMERO.- Es necesario que el Ejecutivo Federal, para mejorar el uso y destino de los recursos públicos y la transparencia de su administración, instrumente programas que permitan superar la problemática que reflejan las áreas de la gestión pública que se han identificado en el dictamen adjunto al presente Decreto.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se recomienda al Ejecutivo Federal que gire instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que ejerzan el presupuesto aprobado y se abstengan de constituir fideicomisos para canalizarles recursos derivados de subejercicios y economías, así como de utilizar esquemas financieros que tiendan a eludir el reconocimiento contable de los pasivos contingentes.

DÉCIMO TERCERO.- Se recomienda al Ejecutivo Federal que proceda al diseño e instrumentación de una estrategia de liquidación parcial del capital y no solamente de los intereses del saldo total de los pasivos generados por el rescate bancario.

DÉCIMO CUARTO.- Se recomienda al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mejore la eficiencia recaudatoria del Estado, combatiendo con firmeza la evasión y elusión fiscal; otorgando mayores facultades recaudatorias a las entidades federativas y municipios; ampliando el padrón de contribuyentes; eliminando el sector informal de la economía; acabando con el contrabando; simplificando el marco regulatorio impositivo y mejorando la recuperación de los créditos fiscales.

DÉCIMO QUINTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de manera conjunta con las dependencias y entes públicos relacionados con la materia migratoria, dicte, coordine y promueva las acciones y procedimientos que contribuyan a consolidar políticas públicas que preserven la seguridad y soberanía nacional relacionadas con los flujos migratorios, de conformidad con las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación al respecto.

DÉCIMO SEXTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, observe los resultados que se mencionan en el Dictamen que acompaña al presente Decreto, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación respecto del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), en particular, a establecer mecanismos que permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo sobre los servicios ofrecidos; establecer metas programadas en los cuatro indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y para el Servicio de Cobertura; sustentar con evidencia suficiente su población objetivo y los parámetros utilizados para establecer el límite máximo de su costo de operación, y; en su caso, se analice la pertinencia de su extinción, ya que en 2007 no cumplió con los fines para los que fue creado

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y respecto de las operaciones del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, vigile el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Fondo, delimitando las facultades a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), a efecto de que las acciones realizadas por este Fondo correspondan con los objetivos y normas aplicables a los programas, asegurando la cancelación de plazas, la correspondiente disminución del Gasto Corriente, evitando la ocupación de plazas liquidadas a través del programa y la nueva generación de obligaciones laborales y presupuestales irreductibles, de conformidad con las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.

DÉCIMO OCTAVO.- Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a las disposiciones normativas aplicables en materia de adquisiciones de bienes y servicios, para que las políticas de gasto estén debidamente vinculadas y justificadas a las funciones y programas sustantivos a su cargo.

DÉCIMO NOVENO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se abstenga que constituir depósitos en la Tesorería de la Federación (TESOFE) con los remanentes de los recursos presupuestales del ejercicio, con el objeto de considerarlas como erogaciones devengadas y por ende, evitar la concentración de recursos; asimismo, se exhorta a que reglamente los recursos que se ejercen a través del Ramo General 23 a efecto de destinarlos a los fines autorizados; todo lo anterior, conforme a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

VIGÉSIMO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atienda las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que la TESOFE determine los mecanismos internos de control con normas específicas para el manejo, control y destino de los recursos que le transfiere el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) provenientes de las aportaciones correspondientes a la subcuenta de vivienda 97 y se coordine con el INFONAVIT, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con las demás autoridades involucradas en el proceso de retiro de los recursos provenientes de las aportaciones correspondientes a la subcuenta de vivienda 97, a efecto de dar cumplimiento a las ejecutorias relacionadas con la solicitud de devolución de los recursos provenientes del proceso de retiro derivados del sistema de pensiones correspondiente a la subcuenta.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se exhorta al SAT a que cumpla las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de establecer metas de recaudación y la construcción de indicadores que permitan evaluar la contribución de la recaudación de grandes contribuyentes; así como ejecutar acciones orientadas a incrementar la eficacia de los actos de fiscalización y de la vigilancia de las obligaciones fiscales de estos contribuyentes.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 78,603.9 miles de pesos, originados por concepto de rendimientos financieros de la utilización de los recursos por 9,429,600.0 miles de pesos, pertenecientes al patrimonio del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIPEMEX), y destinados para la constitución de la reserva de ese fondo que se mantuvieron depositados en la TESOFE y fueron utilizados por ésta como parte de su flujo de fondos, sin reconocer interés o rendimiento por ello, lo que impactó negativamente al patrimonio de Petróleos Mexicanos, que debió haber reconocido los intereses en el monto de la reserva del FEIPEMEX.

VIGÉSIMO TERCERO.- Se exhorta al SAT a que dé cumplimiento a las leyes y normatividad aplicable a las adquisiciones de bienes y servicios y establezca los procesos y acciones necesarias de supervisión y control interno con el fin de fortalecer la calidad de la gestión del gasto público en esa entidad; lo anterior, derivado de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión a los programas que conforman el Proyecto Plataforma Informática.

VIGÉSIMO CUARTO.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos a aclarar y proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria por concepto del pago del Derecho Adicional por el ejercicio fiscal de 2007, que no se calculó sobre el volumen en barriles que se determinó en la Ley Federal de Derechos; así como aclarar y justificar las causas por las cuales no canceló los descuentos injustificados del precio del crudo a Pemex Refinación y a Petroquímica que se determinaron en un estudio de precios de transferencia; además de justificar las causas por las cuales canceló recursos por los descuentos injustificados del precio de las ventas de gas natural y sus líquidos, así como de condensados a Pemex Gas y Petroquímica Básica y no el importe que se determinó en el estudio de precios de transferencia.

VIGÉSIMO QUINTO.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones y las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se sujeten a las disposiciones aplicables y que los recursos destinados a ese fin, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

VIGÉSIMO SEXTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, atienda las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) establezca las acciones necesarias que permitan contar con instrumentos legales que brinden los elementos necesarios para una eficiente administración y un óptimo aprovechamiento de los bienes que integran el patrimonio nacional para beneficio de la sociedad, así como garantizar su adecuada protección jurídica.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de conformidad con el contenido de las recomendaciones y observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,

fortalezca los procesos e instrumentos jurídicos, administrativos y de control interno para evitar la concentración de recursos presupuestales en fondos, fideicomisos y contratos análogos.

VIGÉSIMO NOVENO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fortalezca los mecanismos de planeación en la asignación y administración de los recursos presupuestales, para que se cumplan las metas y objetivos en la eficiente supervisión del sector de las telecomunicaciones; adoptar medidas de supervisión para el cumplimiento de obligaciones de los títulos de concesión y permisos de comunicación vía satélite; e instrumentar un parámetro que permita medir la calidad de servicios; lo anterior, tomando en consideración las observaciones emitidas por el ente fiscalizador.

TRIGÉSIMO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, cumpla con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, construyendo indicadores estratégicos que hagan factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) y desglose en los registros de dicho Programa la totalidad de los proyectos ejecutados para cada uno de los tipos de apoyo que establezcan sus reglas de operación a efecto de que permitan la toma de decisiones y el control de la ejecución de las acciones.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que, de acuerdo a la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación, atienda las observaciones y recomendaciones relacionadas con el desempeño del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en particular aquella que se refiere a la falta de metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo de dicho Programa.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, atienda las recomendaciones y observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con la operación de las Aulas de Sistema Administrado que son parte del Programa Enciclomedia.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Se exhorta al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a que, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, establezcan las acciones y procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento de los objetivos aplicables al nivel medio superior en la modalidad de Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Se exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, a que establezca las acciones y procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento de los objetivos de proporcionar servicios de educación básica a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas y en campamentos de población agrícola migrante.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en lo referente a la contratación del préstamo para la Consolidación del Sistema Financiero contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo, aclare el destino y aplicación específica de los recursos por 600 millones de dólares estadounidenses provenientes del préstamo número 1658/OC-ME; asegurándose que en la contratación de nuevos préstamos, se cumpla con la Ley General de Deuda Pública y se apliquen los recursos a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que generen los recursos suficientes para su pago y se sometan a la consideración de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en lo referente a la determinación y distribución de los Recursos Fiscales Excedentes, a que informe a la Cámara de Diputados, sobre los recursos destinados para la atención de desastres naturales por 492,759.8 miles de pesos, destinados a las Secretarías de Energía, Turismo y Desarrollo Social, así como los 660,000.0 miles de pesos que registró como presupuesto comprometido no pagado, reforzando las medidas de control establecidas para que en lo sucesivo se disponga de la documentación, suficiente y competente, que acredite satisfactoriamente el manejo, destino y aplicación de los recursos fiscales excedentes; estableciendo además las medidas de control necesarias que garanticen que los recursos se apliquen en programas y proyectos de inversión en infraestructura, conforme lo establezca el marco jurídico aplicable.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que implemente medidas y acciones que le permitan cumplir con las disposiciones normativas y propósitos referentes a preservar las aguas nacionales en cantidad y calidad; así como de administrar racionalmente el uso del agua, para que el recurso hídrico sea sustentable y renovable; asimismo, se le exhorta a implementar mecanismos de control que permitan asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, evitándose la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos y aguas superficiales; asegurándose de recuperar oportunamente las indemnizaciones que tenga a su favor con motivo de siniestros ocurridos.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional Forestal y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dicte, coordine y promueva las acciones y procedimientos necesarios para formular, regular, desarrollar, favorecer e impulsar el manejo de los recursos forestales, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo aplicable.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Se exhorta al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a que aclare los anticipos no amortizados por empresas contratistas por 11,524.1 miles de pesos, implementando las medidas que aseguren que las entidades federativas realicen sus procedimientos adquisitivos y de contratación de obra pública, con sustento en la normatividad federal y no en la estatal, y que aseguren el registro oportuno de sus operaciones.

CUADRAGÉSIMO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en lo referente al Plan Emergente de Frijol y al Plan Emergente del Maíz, implemente medidas y acciones, que le permitan cumplir con las disposiciones normativas aplicables a la asignación, distribución y pago de los apoyos otorgados a través de estos planes.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de manera conjunta con las dependencias y entes públicos relacionados con la política pública de desarrollo rural sustentable, dicte, coordine y promueva las acciones y procedimientos necesarios para cumplir con las disposiciones normativas aplicables para coordinar, vincular y operar los programas del sector desarrollo rural, en relación a los Programas de Desarrollo Rural Sustentable.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Se exhorta a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Petróleos Mexicanos; de la Comisión Federal de Electricidad; del Instituto Mexicano del Seguro Social; del Instituto Nacional de Medicina Genómica; y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que instruyan a los responsables de la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y supervisión de obra pública, para que observen de modo irrestricto el marco legal en la materia, para garantizar que los recursos federales sean oportunamente ejercidos y administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; en virtud de los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación.

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que cumplan con los objetivos y metas de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de la población indígena.

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad exclusiva que le otorga el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruye a la Auditoría Superior de la Federación, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso de sus atribuciones legales dé seguimiento a las disposiciones de este Decreto y, de ser procedente, presente las denuncias de hechos a que haya lugar.

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se exhorta a las entidades federativas y municipios a que, en el ejercicio de los recursos federales que reciben a través a los Ramos Generales 23 y 33, refuercen los sistemas de registro, asignación y control de dichos recursos, a efecto de verificar que éstos se administran y ejercen de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. Asimismo, se les exhorta a que observen

las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las obras públicas que se financian con los recursos de dichos Ramos Generales.

Notas

1. Gasto total menos amortización de la deuda.
2. Excluye el costo financiero del gasto neto total.
3. Bonos de Desarrollo a Tasa Nominal Fija a Largo Plazo
4. Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión
5. Cabe señalar que la ASF programó 544 auditorías pero no se recibieron 4 informes de igual número de auditorías solicitadas por la ASF a la entidad de fiscalización superior del estado de Guanajuato, ya que no habían sido aprobados por el Congreso de esa entidad federativa.
6. Todas las cantidades que se exhiben en cada apartado, se presenta en miles de pesos.
7. Incluye montos porque sólo aplica para el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica en contra), Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica en abstención), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en contra), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Pedro Jiménez León, secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), María Esther Sherman Leño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica en contra), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica en contra), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica en contra), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica en contra), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica en contra), Marcos Pérez Esquer (rúbrica en contra), Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica en contra), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica en contra), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter (rúbrica en abstención), Claudia Anaya Mota (rúbrica en contra), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica en contra), Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).

CONTENIDO

Dictámenes

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Anexo VIII

Jueves 29 de abril

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

1. En sesión de 29 de abril de 2010, los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de diversas Fracciones Parlamentarias, presentaron ante la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y recorriéndose el orden de los subsecuente y un segundo párrafo a la

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIENDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

fracción XX ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Así también, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa referida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su respectivo dictamen.

II. MATERIA DE LA INICIATIVA.

La iniciativa en estudio consiste en elevar el Derecho Alimentario a rango Constitucional, es por ello que los autores de la iniciativa consideraron adicionar al artículo 4º Constitucional, dicha garantía, que al quedar plasmado se da un elemento esencial para que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Con esta reforma se estaría responsabilizando al Estado para proteger este derecho que van a tener todos los mexicanos, asimismo lo obliga a fin de que lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos considerados como básicos, mediante dos vertientes, la primera consiste en crear el marco normativo que va regular a cumplir con lo anterior, y en segundo término es diseñar por parte de la administración pública federal las políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario se cumpla.

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCION XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Por último, esta iniciativa recoge en esencia en la mayoría de los instrumentos internacionales que en materia alimentaria se han suscrito por el Estado mexicano, con ello se cumple la obligación de nuestro país en observar dicha normatividad.

De conformidad con lo anterior, esta Comisión dictaminadora hace las siguientes:

III. CONSIDERACIONES.

En la sesión de 28 de abril de 2010, los diputados integrantes de esta Comisión, en un trabajo plenario y derivado de un estudio y un análisis exhaustivo sobre el proyecto de minuta enviada por la cámara de senadores en la cual tenía como objetivo principal el incorporar a la Carta Magna el derecho alimentario, esta Comisión en su conjunto coincide plenamente con ese proyecto, sin embargo y después de analizar a profundidad esa minuta, estimaron que el proyecto de decreto adolecía de una redacción clara y precisa, lo que sin duda alguna llevaría a una interpretación vaga tanto en el conocimiento en la propia comprensión y más aun en la interpretación de las modificaciones constitucionales que se están proponiendo.

Es preciso comentar el sentir de los Diputados integrantes de esta Comisión es que esta reforma con un espíritu tan trascendental para todos los

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

mexicanos sea precisa, clara y concisa a fin de consolidar el derecho a la alimentación como la garantía Constitucional.

Es por ello y con la responsabilidad inherente de los legisladores que pertenecemos a esta comisión de puntos constitucionales y que en nuestra función es básicamente de proteger que el texto Constitucional tenga precisión y que al llevar a cabo una reforma a nuestro documento fundamental se realice con claridad y certeza en su contenido.

Como hicimos constatar en la exposición de motivos de la iniciativa que:

El poder alimentarse es, sin duda, una necesidad elemental de los seres vivos, pero también es el derecho fundamental de garantizar los derechos del hombre. Sin embargo, en las últimas décadas la producción de la alimentación, se ha convertido en una crisis a nivel internacional, que no sólo abarca la producción, sino que se extiende al abasto y a la calidad de los alimentos, esto tiene como consecuencia que exista una gran preocupación en todas las naciones.

En ese contexto esta Comisión de Puntos Constitucionales, hace un reconocimiento que el derecho alimentario es un derecho fundamental del ser, asimismo, los diputados integrantes de esta Comisión han establecido que el Estado tiene la imperante obligación de establecer los mecanismos

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

necesarios para proveer un sistema alimentario, que permita a la sociedad mexicana su sano desarrollo.

En este tema, nuestro Estado ha suscrito y participado en foros relacionados con la materia alimentaria como se expreso en la exposición de motivo que en ese sentido se manifestó:

La comunidad internacional, con el fin de contrarrestar los efectos nocivos de la falta de alimentos, creó organismos especializados para hacer frente a la problemática alimenticia que cada año va en aumento, y eso derivó a que dentro del marco de las Naciones Unidas, en 1945 se fundará la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuyo objetivo es la implementación de programas y la aplicación de acciones para erradicar el hambre y dar la seguridad alimenticia que nuestro mundo requiere. Asimismo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo cuyo propósito es lograr el desarrollo agrícola de las comunidades rurales, en función a la producción alimenticia, estos organismos, han declarado que es necesario que los países tomen acciones, concretas con la finalidad de superar la crisis que en este rubro enfrenta el mundo.

La crisis alimentaria ha generado en diversos foros y convenciones, el que los países participantes se comprometan a través de instrumentos jurídicos

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

internacionales a realizar acciones necesarias para abatir las deficiencias alimenticias.

Es de precisarse que, en dichos foros y convenciones, México ha tenido una participación activa, suscribiendo conjuntamente con otros países instrumentos jurídicos internacionales de la siguiente magnitud:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, segunda parte de su artículo 25.
2. La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país.
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, punto 2º, precisa que los Estados adoptarán las medidas o los métodos necesarios para mejorar la producción, conservación, distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos.
4. En La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, se pidió que se estableciera diese en el derecho a la alimentación un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas de los asistentes.

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

5. En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en la Observación General No. 12 misma que establece lo siguiente:

“El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente:

La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada;

La accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos...”

6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció, -por resolución 2000/10-, el mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación.
7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año de 2002, solicitó crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación.

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO, adoptaron un "Conjunto de Directrices Voluntarias con el fin de Respalidar la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional", estas directrices son recomendaciones que los Estados han aprobado para contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, ofreciendo a los Estados orientaciones sobre el mejor modo de cumplir la obligación contraída en razón de respetar el derecho a una alimentación, asimismo asegurar que las personas no padezcan hambre.

Los citados instrumentos, ilustran la problemática alimenticia, en el contenido de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, que a la letra dice:

"La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los países en desarrollo, en los que vive la mayoría de las personas hambrientas y malnutridas del mundo y donde más de dos tercios de la población mundial producen alrededor de un tercio de los alimentos del mundo _desequilibrio que amenaza aumentar en los diez próximos años_ no sólo tiene graves repercusiones económicas y sociales, sino que compromete gravemente la realización

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

de los principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”¹...

En este sentido la comunidad internacional, ha asumido compromisos ineludibles para adoptar medidas que logren abatir la crisis, ésto es a través de mecanismos que redunden en la producción de una autosuficiencia alimentaria y de calidad, cuyo objeto no tenga mayor propósito que satisfacer las necesidades de su población.

El Estado Mexicano preocupado por la problemática de la crisis alimentaria, suscribió además la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que quedó puntualmente establecido el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.

Derivado de los compromisos internacionales, México llevó a cabo una serie de modificaciones a sus instrumentos jurídicos, y entre ellos destaca la ley de desarrollo sustentable.

Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes, las acciones legislativas han quedado cortas, pues la problemática alimentaria en nuestro país se ha

¹ Sitio consultado www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/60/pr/pr30.pdf el 5 de abril de 2010.

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

agudizado. Esto es, por la importación de productos alimenticios que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una total e indebida dependencia, aunada a una equivocada política de Estado en cuanto a la que debe entenderse por autosuficiencia alimentaria.

Por ello, es prudente que el Estado mexicano implemente políticas que aseguren la producción, el abasto y la calidad de los alimentos de manera oportuna, a fin de superar la crisis alimentaria en nuestro país.

En base a lo anterior, nuestro Estado esta comprometido no solamente a impulsar políticas públicas, sino, a realizar una reforma trascendental que implique la responsabilidad esencial que tiene con cada unos de sus gobernados en materia alimentaria, en el entendido de que es un derecho fundamental de carácter universal, que tiene toda persona independientemente de su condición económica, lugar de origen y características étnicas. Por lo tanto, es necesario que en nuestra Carta Magna se reconozca a la alimentación como un derecho fundamental, pues no se debe olvidar que los derechos fundamentales son:

“Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º
RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y
UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL
ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

(de prestaciones) o negativa de no sufrir lesiones en referencia a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídico positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos en ejercicio de estas."²

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados:

III. CONCLUYE.

PRIMERO. En la reunión plenaria permanente iniciada el 27 de abril de 2010, y que se continuo el 28 del mismo mes y año, en donde los integrantes de esta Comisión acordaron presentar una iniciativa para modificar el artículo 4º y 27 Constitucional con la finalidad de elevar a rango Constitucional el derecho alimentario, la razón fundamental de esta iniciativa radica en proponer un proyecto de decreto que sea claro y acorde a las necesidades que nuestra nación requiere en ese rubro.

²

FERRAJOLLI Luigi, "Derechos y Garantías", Trotta España 2001, pág. 37.

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO. Los Diputados integrantes de esta Comisión están conscientes que el derecho a alimentarse adecuadamente es un derecho fundamental, a esta conclusión se llegó en virtud de la participación de los C.C Diputados Reginaldo Rivera de la Torre y Feliciano Rosendo Marín Díaz, en el foro denominado "Primer Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre América Latina y el Caribe" en el mes de marzo de 2010, realizado en Sao Paulo Brasil, en el que nos dieron cuenta de la importancia y pertinencia de incorporar este derecho como una Garantía Constitucional.

TERCERO. En ese sentido, también se estimó muy necesario la modificación a la fracción XX del artículo 27 Constitucional, en virtud de que es muy necesario para efectos de materializar este derecho como garantía, que el Estado se responsabilice en elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral.

CUARTO. Por lo anterior, diputados integrantes de esta Comisión están plenamente convencidos que al elevar a rango constitucional el derecho alimentario, se cumplen aspectos cuya única finalidad

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

es la de satisfacer las necesidades que nuestra nación requiere en esa materia.

QUINTO. Por último con este proyecto se está dando cumplimiento a los instrumentos internacionales que el Estado mexicano a suscrito en ese rubro. Como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11vo., establece lo siguiente:

- “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

- a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
- b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”³.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

³ Sitio consultado <http://www.cinu.org.mx/onu/mexico.htm> el 5 de abril de 2010.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º.-...

...

El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 27.-...

...

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4º RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

...

...

...

...

...

...

...

I. a XIX...

XX. ...

El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de abril de dos mil diez.
Comisión de Puntos Constitucionales.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Materia Alimentaria.

29/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP JUVENTINO CASTRO Y CASTRO. PRD PRESIDENTE		-----	-----
 DIP NAZARIO NORBERTO SANCHEZ. PRD SECRETARIO		-----	-----
 DIP FELICIANO ROSENDO MARIN DÍAZ. PRD SECRETARIO		-----	-----
 DIP REGINALDO RIVERA DE LA TORRE. PRI SECRETARIO		-----	-----
 DIP HERIBERTO AMBROCIO CIPRIANO. PRI SECRETARIO		-----	-----
 FRANCISCO SARACHO NAVARRO. PRI SECRETARIO		-----	-----
 DIP GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. PAN SECRETARIO		-----	-----



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Materia Alimentaria.

29/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS. PAN SECRETARIO			
 DIP. GUILLERMO CUEVA SADA. PVEM SECRETARIO			
 DIP. JAIME F. CÁRDENAS GRACIA. PT SECRETARIO			
 DIP. JOSÉ LUIS JAIME CORREA. PRD. INTEGRANTE			
 DIP. DINA HERRERA SOTO. PRD. INTEGRANTE			
 DIP. MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GÓMEZ. PRI INTEGRANTE			
 DIP. FERMÍN G. ALVARADO ARROYO. PRI INTEGRANTE			



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Materia Alimentaria.

29/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. VICTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO. PRI. INTEGRANTE		-----	-----
 DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR. PRI. INTEGRANTE		-----	-----
 DIP. FERNANDO FERREYRA OLIVARES. PRI. INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. DIVA HADAMIRA GASTELUM BAZO. PRI. INTEGRANTE		-----	-----
 DIP. RAFAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. PRI. INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. JOSÉ R. LÓPEZ PESCADOR. PRI. INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. MIGUEL E. POMPA CORELLA. PRI. INTEGRANTE		-----	-----





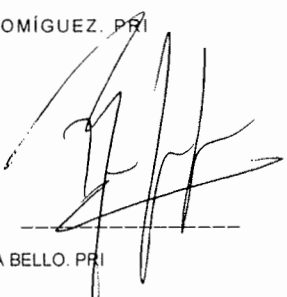





COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Materia Alimentaria.

29/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. GUADALUPE PÉREZ DOMÍGUEZ. PRI INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO. PRI INTEGRANTE	 -----	-----	-----
 DIP. JUSTINO E. ARRIAGA ROJAS. PAN INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. VÍCTOR A. BALDERAS VAQUERA. PAN INTEGRANTE	 -----	-----	-----
 DIP. MARIO A. BECERRA POCOROBA. PAN INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. ÓSCAR MARTÍN ARCE PANIAGUA INTEGRANTE	-----	-----	-----






COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Materia Alimentaria.

29/04/10

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 DIP. SONIA MENDOZA DÍAZ. PAN INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. CAMILO RAMÍREZ PUENTE PAN. INTEGRANTE	-----	-----	-----
 DIP. AGUSTIN TORRES IBARROLA. PAN INTEGRANTE	-----	-----	-----

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, PRI, presidente; Josefina Vázquez Mota, PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Juan José Guerra Abud, PVEM; Pedro Vázquez González, PT; Pedro Jiménez León, CONVERGENCIA; Reyes Tamez Guerra, NUEVA ALIANZA.

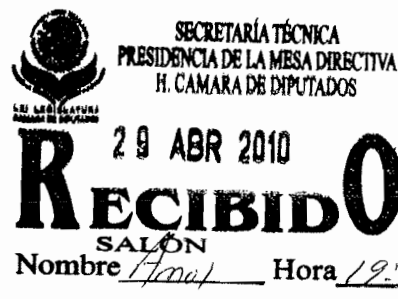
Mesa Directiva

Diputados: Presidente, Francisco Ramírez Acuña; vicepresidentes, Francisco Javier Salazar Sáenz, PAN; Felipe Solís Acero, PRI, José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD; secretarios, María Dolores del Río Sánchez, PAN; Georgina Trujillo Zentella, PRI; Balfre Vargas Cortés, PRD; Carlos Samuel Moreno Terán, PVEM; Gerardo Fernández Noroña, PT; Jaime Arturo Vázquez Aguilar, NUEVA ALIANZA; María Teresa Ochoa Mejía, CONVERGENCIA.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>



HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6 inciso e), f) de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 22 de julio de 2009 los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trenti, Pedro Joaquín Coldwell, María Elena Orantes López y María del Socorro García Quiroz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 81 y 271 de la Ley General de Salud.
- 2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó para su estudio y posterior Dictamen dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.
- 3.- Con fecha 1° de octubre de 2009, la Senadora María Elena Orantes López, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 81 y 271 y se adicionan los artículos 81 Bis y 469 Bis de la Ley General de Salud.

4.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

5.- Con fecha 5 de noviembre del 2009 los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Humberto Aguilar Coronado, presentaron Iniciativa con Proyecto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Especialidades Médicas y Cirugías Plásticas o Reconstructivas.

6.- Con la misma fecha la Mesa Directiva turno a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

7.- Dicho dictamen fue aprobado el 08 de diciembre de 2009 y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8.- Con fecha 10 de diciembre de 2010 la Minuta se presento en la sesión de la Cámara de Diputados.

9.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La minuta tiene como espíritu establecer que las personas que realicen actividades profesionales, técnicas, auxiliares y de especialidades para la salud, deberán incorporar el número de su cédula profesional, y en su caso, si su especialidad requiere de una



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

colegiación obligatoria y el nombre del colegio, consejo, asociación o federación al cual pertenezcan dentro de los documentos y papelería que utilicen para el ejercicio de tales actividades, así como en el anuncio que pongan a la vista del público dentro de los establecimientos destinados para la realización de dicha actividad.

Asimismo, Incluir un capítulo denominado "Cirugías Plásticas y Reconstructivas", a fin de regular la forma en que habrá de realizarse la práctica de esta actividad, las características que deberán satisfacer los establecimientos, así como el personal que los opere. Asimismo, decretar que los colegios, consejos, asociaciones o federaciones de profesionistas deberán poner a disposición de la Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres y datos de los profesionistas de la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, además de proporcionar el nombre y datos de la institución o instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

"TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.... Y ESTABLECERÁ LA CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, CONFORME A LO QUE DISPONE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE ESTA CONSTITUCIÓN".

Del artículo anterior se desprende que el estado tiene la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos, y más aun en materia de salud, por lo que los integrantes de esta

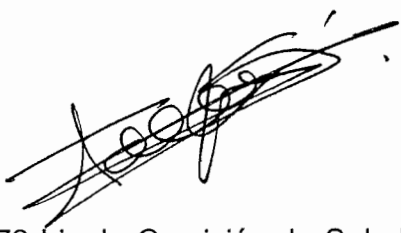
Comisión coincidimos con la intención de los proponentes, sin embargo es necesario realizar algunas modificaciones por considerar que la minuta presenta imprecisiones técnicas.

SEGUNDA.- Respecto del artículo 81 es necesario modificar el segundo párrafo, para que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, sea el responsable de emitir la "declaratoria de idoneidad" para que los Consejos de Especialidades extiendan los certificados de especialización a los médicos que se dediquen a realizar intervenciones quirúrgicas.


Ya que el Consejo de Especialidades Médicas es el encargado de vigilar que dichos consejos cumplan con la responsabilidad de determinar quienes pueden ostentarse realmente como especialistas, dado que formalmente se prepararon en las instituciones de salud y educación, por lo tanto se propone que el artículo 81 de la Ley General de Salud.

TERCERA.- Los integrantes de esta Comisión consideramos que por lo que corresponde al artículo 83 que reforma la minuta, es necesario adecuar los términos establecidos en dicho documento para que este acorde a las modificaciones realizadas en el presente dictamen, por lo que únicamente proponemos que se cambie la redacción para estar en armonía con los demás artículos de la Ley General de Salud, quedando de la siguiente manera:



Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen a su respecto.



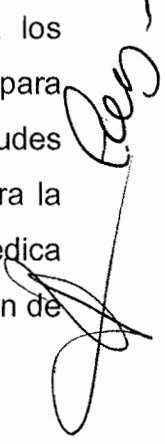
CUARTA.- Por lo que corresponde al artículo 272 bis, la Comisión de Salud, después de un largo análisis, coincidimos en que es necesario realizar modificaciones a dicho artículo. Por lo que se propone que en la fracción primera se considere únicamente la *cedula de especialista*, legalmente expedida por la autoridad educativa, ya que es la única cedula avalada por un título, expedido por una autoridad educativa y en el sistema legal es la que jurídicamente avala el ejercicio de dicha especialidad. Además de que es un documento que otorga la Dirección General de Profesiones, reconocida por la Ley General de Educación como aquel organismo gubernamental que tiene la facultad de emitir dicho documento.



QUINTA.- Por otro lado, se propone modificar el segundo párrafo para integrar el *Certificado vigente de especialista* que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes a la materia, para estar acorde con lo dispuesto en el artículo 81 de la presente reforma.



Lo anterior por considerar que el acto de certificación de las aptitudes de los especialistas, tiene como único propósito constatar la calidad de preparación de los profesionales para el ejercicio competente de un campo específico de la medicina. Así mismo, es la manera en que los Consejos pueden intervenir para proteger los intereses de quienes son el objeto y el sujeto de su atención: los pacientes y el público en general, ayudándoles a distinguir a los especialistas mejor preparados. Como consecuencia los médicos se ven estimulados para mantener al día sus conocimientos, perfeccionar sus destrezas y desarrollar sus actitudes fortaleciendo sus valores profesionales y personales. Un efecto de gran importancia para la población, es que la Certificación promueve la mejora de la calidad de la práctica médica especializada y se estimula, además, el estudio y permanente capacitación y actualización de



quienes profesan una especialidad y de manera agregada, se cuida el nivel de calidad de la práctica de los verdaderos especialistas.

Todas las profesiones requieren de constante estudio y capacitación para que puedan ser desempeñadas correctamente sin vulnerar o transgredir los derechos de las personas y con mayor razón la actividad profesional de la salud y en este caso, dirigida específicamente a la cirugía estética o reconstructiva.

SEXTA.- Se propone también que la fracción segunda de la minuta se convierta en un segundo párrafo, ya que no es un requisito fundamental el estar colegiado o no a alguna asociación civil (Federación, Colegio, Asociación, entre otras), sino que con el hecho de estarse certificando constantemente se subsana esta necesidad por parte de los legisladores de la Cámara de Senadores.

Además de que la Colegiación Obligatoria, como lo establece la Minuta atenta a Nuestro artículo 5° Constitucional, el cual concede la libertad para ejercer la profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando esta sea lícita. Así como el principio de libre asociación contenido en el artículo 9° de la Constitución, el cual es un derecho de toda persona para asociarse libremente con otras para la consecución de ciertos fines, la realización de determinadas actividades o la protección de sus intereses comunes.

SEPTIMA.- Asimismo de que existen diversos instrumentos internacionales, celebrados y aprobados por México, a través de los cuales se tutela la libertad de asociación, como lo son:

- El pacto internacional de Derechos Civiles y políticos en su artículo 22:

"Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses."

- **El pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 8º:**

“...No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos”

- **Convención América sobre Derechos Humanos en su artículo 16:**

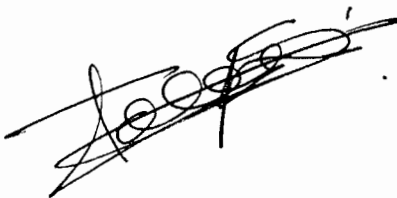
“Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”

Por lo que se considera necesario que en vez de establecer el término “deben” se modifique por “podrán pertenecer a”, dejando al libre albedrío del médico el estar o no asociado con alguna Academia, Federación, Asociación, respetando lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 272 bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:



- I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes.
- II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda. De conformidad con el artículo 81 de la presente Ley.

Miguel A. Osuna


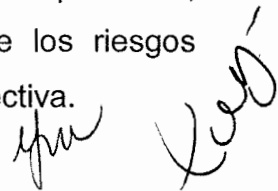


Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud.



OCTAVA.- En virtud a la influencia que la publicidad hoy por hoy tiene efectos en la toma de decisiones de la sociedad; es necesario que, la misma se maneje con una mayor responsabilidad por lo que es menester que la misma se sujete a los lineamientos que sobre la publicidad contiene la Ley General de Salud; y toda vez que, también es necesario que se regule sobre la oferta de servicios que se haga a través de los medios informativos (periódicos, revistas, cine, radio, televisión, Internet, etc.) por profesionistas de la especialidad en cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva y por los establecimientos o unidades médicas en las que se practiquen; ante ello, es prudente que se adicione el artículo 271 BIS a la Ley General de Salud; de tal forma que, quede debidamente reglamentado sobre dicho particular; ya que la misma, también deberá de mencionar un responsable que sobre los riesgos presentan y/o presenten los productos y servicios ofertados en la publicidad respectiva.



Por todo lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartados e) y f) de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Mexicanos, 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único.- Se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo.81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de

Miguel A. Osuna



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

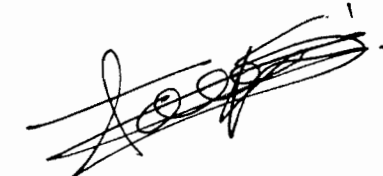
Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Igualess menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

Artículo 271.- Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo; así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 de esta Ley; que contengan hormonas, vitaminas y, en general, sustancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV de este Título.

M. Guadalupe



CAPÍTULO IX BIS


Ejercicio especializado de la Cirugía.


Artículo 272 bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:

- I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes.
- II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda. De conformidad con el artículo 81 de la presente Ley.

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación medica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud.


Artículo 272 Bis 1.- La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo 272 Bis.


Artículo 272 Bis 2.- La oferta de los servicios que se haga a través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en los artículos 83, 272 Bis, 272 Bis 1 y en lo previsto en el Capítulo Único del Título XIII de esta ley.

Artículo 272 BIS 3.- Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres, datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de especialización vigente, además de proporcionar el nombre y datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

Segundo.- La Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor a 120 días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para emitir las disposiciones a que se refiere el artículo 272 Bis de la presente Ley.

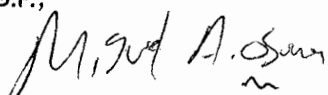


LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 81, 83, 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 272 BIS,
272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLAN PRESIDENTE			
DIP. MARCO ANTONIO GARCIA AYALA SECRETARIO			
DIP. MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR SECRETARIA			
DIP. ANTONIO BENITEZ LUCHO SECRETARIO			
DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN SECRETARIA			
DIP. RODRIGO REINA LICEAGA SECRETARIO			





LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 81, 83, 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 272 BIS,
272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.


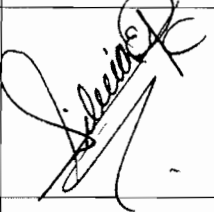

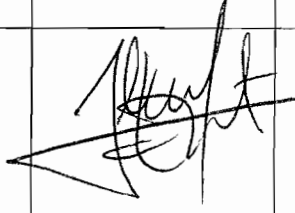
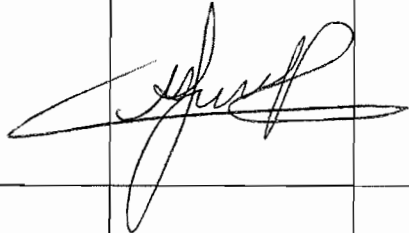
DIP. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ INTEGRANTE			
DIP. OLGA LUZ ESPINOZA MORALES INTEGRANTE			
DIP. LEANDRO RAFAEL GARCIA BRINGAS INTEGRANTE			
DIP. CLARA GÓMEZ CARO INTEGRANTE			
DIP. DELIA GUERRERO CORONADO INTEGRANTE			
DIP. JOSÉ MANUEL HINOJOSA PÉREZ INTEGRANTE			
DIP. JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA INTEGRANTE			

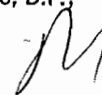


LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Salud

**DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 81, 83, 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 272 BIS,
272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.**

DIP. JOSE ANTONIO YGLESIAS ARREOLA SECRETARIO			
DIP. SILVIA ESTHER PEREZ CEBALLOS SECRETARIA			
DIP. HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ SECRETARIO			
DIP. CARLOS ALBERTO EZETA SALCEDO SECRETARIO			
DIP. MARIA DEL PILAR TORRE CANALES SECRETARIA			
DIP. GLORIA TRINIDAD LUNA RUÍZ SECRETARIA			
DIP. FELIPE BORJA TEXOCOTITLA INTEGRANTE			





LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 81, 83, 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 272 BIS,
272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ INTEGRANTE			
DIP. ALFONSO PRIMITIVO RÍOS VÁZQUEZ INTEGRANTE			
DIP. ANA ELIA PAREDES ARCIGA INTEGRANTE			
DIP. GUADALUPE EDUARDO ROBLES MEDINA INTEGRANTE			
DIP. SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ INTEGRANTE			
DIP. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA INTEGRANTE			
DIP. LAURA PIÑA OLMEDO INTEGRANTE			

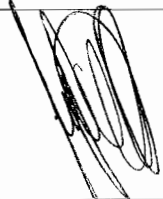

C2

Comisión de Salud

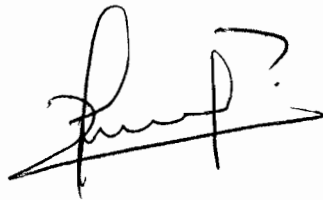


LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 81, 83, 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 272 BIS,
272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS INTEGRANTE			
DIP. ORALIA LÓPEZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE			

DIP. MALCO RAMIREZ
MARTINEZ
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la **minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.**

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 87, 135 y 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido del documento de referencia, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

A. Con fecha de 23 de abril de 2009, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República presentaron dictamen de 24 iniciativas que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.

B. En la misma fecha el dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores con 82 votos a favor y 2 abstenciones.

C. La minuta con proyecto decreto se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el jueves 23 de abril de 2009, y en esa fecha se dio turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta del Senado hace referencia al derecho constitucional de los mexicanos a recibir una educación que desarrolle armónicamente las facultades del ser humano y fomenta el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia.

Se menciona que de acuerdo con el texto constitucional, el Congreso de la Unión está facultado para emitir las leyes que contribuyan a unificar y coordinar la educación en toda la República Mexicana. Se refiere también a la atribución de fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio y a la de establecer, organizar y sostener en

toda la República escuelas de nivel elemental, secundarias, superiores y profesionales, técnicas, de bellas artes y centros de investigación.

Los senadores hacen una breve semblanza respecto de la Ley General de Educación al mencionar que su promulgación el 13 de julio de 1993 fue resultado de un amplio proceso de discusión entre los distintos actores involucrados en el sistema educativo nacional en el marco de los postulados del artículo tercero constitucional y los logros y deficiencias que en materia de cobertura, equidad, calidad y pertinencia había alcanzado la educación pública impartida por el Estado hasta ese momento. Mencionan que las disposiciones de la Ley General de Educación definen qué elementos integran el sistema educativo nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

Señalan también que con la promulgación de la Ley General de Educación se integraron en un solo cuerpo normativo disposiciones relacionadas con el servicio que anteriormente se encontraban dispersas en otros instrumentos de ley, abrogando así la Ley Federal de Educación, la Ley del Ahorro Escolar, la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo y la Ley Nacional de Educación para Adultos. Asimismo, mencionan que la transición normativa se inscribió en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica cuyo principio fundamental fue la federalización de la educación.

Respecto de la federalización de la educación, los senadores mencionan que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito el 18 de mayo de 1992, tuvo por objeto extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación a través de una estrategia que implicara la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos, así como la revaloración de la función magisterial; sentando así un precedente definitivo para que el Congreso de la Unión aprobara el tránsito del marco legal en materia educativa de un contexto federal a un esquema concurrente de facultades entre órdenes de gobierno.

Los senadores observan que no obstante que el sistema educativo nacional brinda servicios educativos a más de 33 millones de educandos, se requiere reorientar el servicio hacia la calidad y al desarrollo de mecanismos que garanticen la permanencia de los alumnos en el sistema, pues reconocen que existen factores sociales, culturales y económicos que limitan, muchas veces, la continuidad educativa de los niños y jóvenes.

El dictamen de la Cámara de Senadores señala que si bien la reforma de mayor significado dentro del sistema educativo nacional no es necesariamente de orden legal, existen elementos de gran valía que pueden apoyar la construcción de nuevas bases institucionales que le brinden a los educandos mejores oportunidades para el desarrollo de sus aptitudes, habilidades y destrezas. Por esta razón, los legisladores consideran pertinente actualizar diversos preceptos normativos, a fin de que la ley responda de manera cabal a los desafíos

que se han generado en el sistema educativo nacional; observando que las propuestas legislativas materia de su análisis, coinciden en que la educación pública en México se constituya en un elemento clave del dinamismo social y que responda a los retos que plantea la formación de las futuras generaciones.

Los senadores observan que algunas de las referidas propuestas legislativas resultan improcedentes por estar ya incluidas en la propia ley, por estar orientadas más a políticas públicas que a reformas legales o por representar un impacto presupuestal muy elevado cuya instrumentación tendría necesariamente que dejar de lado la aplicación de recursos en otras prioridades que atiende el sistema educativo nacional, de esta manera, no obstante los nobles propósitos que las inspiran, mencionan que han sido desechadas por que su instrumentación no resulta viable por no disponer de recursos económicos suficientes.

En este sentido, la colegisladora manifiesta que el análisis de las iniciativas tomadas como base para el dictamen tuvo el objetivo primordial de preservar la integridad de la ley, la uniformidad en el uso de conceptos y la congruencia en su contenido. Así, explican que algunos enunciados son reubicados en otros artículos y que en algunos casos sintetizan el texto original de algunas propuestas para lograr mayor precisión en su consecuencia jurídica y destacan que, en otros casos, no todo el texto que se propone en cada iniciativa es tomado en cuenta de manera literal, sino únicamente aquellos elementos que constituyen una aportación jurídica que clarifica el contenido de la ley, actualiza el marco conceptual de la misma o da lugar a consecuencias jurídicas nuevas que es preciso incorporar para el mejor funcionamiento del sistema educativo en su conjunto.

Finalmente, los senadores agrupan las propuestas materia de su análisis en razón de los artículos que reforman; la síntesis de dicho análisis se presenta a continuación:

Propuestas de reforma al artículo 2: se modifica el tercer párrafo para que en el proceso educativo se asegure la participación activa de la comunidad educativa en su conjunto, con la finalidad de incluir a los distintos actores que participan en el proceso educativo, ya que observan que hasta ahora la ley sólo incluye la participación activa del educando.

Propuesta de reforma al artículo 4: en respuesta al criterio general de la equidad de género, el Senado propone hacer la distinción entre las niñas y los niños al anteponer la palabra "hijas" a la frase "hijos o pupilos menores de edad".

Propuesta de reforma al artículo 7: los legisladores observan que el contenido de este artículo está muy relacionado con el artículo 48, por lo que consideran que el texto de los enunciados debe corresponder en contenido y sintaxis; por lo que proponen incorporar a la fracción I el ejercicio pleno y responsable de las capacidades humanas; proponen también incluir en la fracción II los sustantivos valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas, así como el dominio de un segundo idioma, con la finalidad de reflejar un enfoque educativo más amplio que permitan al individuo incidir en su entorno y participar y cooperar con los demás individuos; en la fracción V proponen la inclusión de la valoración de la diversidad

y pluralidad; adicionan también la prevención del delito en la fracción VI con la finalidad de fortalecer el valor de la legalidad; la propuesta de modificación a la fracción X considera el tema de la educación sexual y reproductiva, como ya se hace en los Libros de Texto; finalmente, proponen modificar la fracción XI a fin de sustituir la frase sobre el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad en relación con el medio ambiente, por desenvolvimiento armónico e integral de los seres humanos y el entorno natural y consideran adecuado integrar al final del párrafo la protección civil ante las eventualidades del cambio climático, adaptación y mitigación como uno de los fines de la educación. Respecto a la fracción XIII, se propone agregar la necesidad de fomentar el trabajo en equipo.

Propuesta de reforma al artículo 9: en relación con el desarrollo económico nacional, el Senado considera que dicho propósito corresponde con el contenido del artículo 9, sobre la base de establecer un vínculo entre los tipos educativos y asignaturas, en especial, de los planes de estudio de la educación media superior y superior a cargo del Estado.

Propuesta de reforma al artículo 10: dada la relevancia que ha adquirido la evaluación educativa, los Legisladores consideran importante incorporar dentro de los elementos que constituyen el sistema educativo nacional, en una nueva fracción IV Bis, a las instancias responsables de la evaluación educativa, independientemente del orden de gobierno al que estén adscritas o su personalidad jurídica.

Propuesta de reforma al artículo 12: los Legisladores proponen una reforma a la fracción IX a fin de establecer las bases para crear un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un registro nacional para la emisión, validación e inscripción de documentos académicos correspondiente con los de las entidades federativas y un Sistema Nacional de Información Educativa que permita dar seguimiento al desempeño o situación en la que se encuentran alumnos, docentes, instituciones educativas y centros escolares. Por otra parte, consideran que es indispensable que la autoridad educativa formule los mecanismos que le confieran seguridad jurídica y transparencia a los procesos de ingreso y promoción de la labor docente, a efecto de que se reconozca la trayectoria y desempeño profesional de los profesores de educación básica con base en criterios uniformes y objetivos, exentos de discrecionalidad o susceptibles de prácticas ilícitas, por lo que lo plasman en una nueva fracción XIV.

Propuesta de reforma al artículo 13: en correspondencia con las propuestas de adición al artículo 12, el Senado considera que en las entidades federativas también deben operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un registro estatal de emisión, validación y certificación de documentos académicos correspondiente con el Federal y, del mismo modo, un sistema estatal de información educativa que contribuya a la labor del Sistema Nacional de Información Educativa.

Propuesta de reforma al artículo 14: reconociendo una preocupación expuesta en distintos foros educativos relacionada con los altos índices de obesidad infantil que presenta la niñez mexicana, la colegisladora considera que de manera concurrente las autoridades educativas pueden establecer programas que fomenten en los educandos el consumo de alimentos de alto valor nutricional y emitir lineamientos al respecto, por lo que propone el fomentar el consumo de alimentos saludables en las escuelas incorporado en una nueva una fracción XIII.

Propuesta de reforma al artículo 20: la Cámara de Senadores considera pertinente referirse a la formación continua en la fracción II de artículo, en virtud de que, desde su perspectiva, esto contribuirá a concretar, con base en mecanismos de coordinación y colaboración, las finalidades de las acciones de formación, actualización y superación profesional de los maestros en servicio.

Propuesta de reforma al artículo 21: los senadores consideran que la propuesta de reforma a dicho artículo contribuye a mejorar los enunciados jurídicos sobre la calidad del educador, que definen como elemento insustituible en el proceso enseñanza-aprendizaje, que aporta el contenido humano y al cual se deben enfocar gran parte los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país. De esta manera ven conveniente establecer vínculos entre los niveles de ingreso de los profesores, como de hecho ya sucede a través del Programa de Carrera Magisterial, con el logro académico de los alumnos y del desarrollo profesional magisterial.

Propuesta de reforma al artículo 22: respecto de este artículo, los Legisladores proponen adicionar la palabra "calidad" como una de las características que el servicio educativo habrá de tener, de igual forma proponen el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia, ya que consideran que dichas reformas contribuyen a precisar los objetivos de la calidad y eficiencia del servicio educativo.

Propuesta de reforma al artículo 27: el Senado ve pertinente dotar a los centros escolares de capacidad de gestión para obtener recursos que apoyen la labor educativa en cada escuela, esto siempre que se realice en el marco de la normatividad aplicable y en el contexto de la gratuidad de la educación. Por lo que proponen enfatizar en este artículo la cooperación y aplicación de recursos de parte de las asociaciones de padres de familia.

Propuesta de reforma al artículo 33: los senadores consideran que sus propuestas a dicho artículo precisan y enriquecen su contenido; por lo que en la fracción II sustituyen la frase maestros que realicen su servicio por la de maestros que presten sus servicios para distinguir que, quienes reciban los apoyos, sean profesores adscritos a comunidades de difícil acceso, circunstancia que eventualmente podría contribuir al cumplimiento del calendario escolar; en la fracción IV incorporan el término de rezago educativo para identificar claramente a las personas que no han concluido la educación básica, circunstancia que actualmente afecta a un tercio de la población nacional; En relación con la fracción VIII, relativa al desarrollo de

programas para otorgar becas y otros apoyos, consideran necesario que éstos se enfoquen, preferentemente, en los educandos que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social con independencia de que en otros programas se cubra la excelencia académica; en la fracción X proponen precisar el termino de asociaciones civiles por el de organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de atender, con base en las disposiciones aplicables, las distintas figuras bajo las que voluntarios trabajan en favor de la educación sin fines de lucro. Por último, se propone agregar en la fracción XIII los términos "mejorar" (la calidad) y "ampliar" (la cobertura) en el terreno educativo.

Propuesta de reforma al artículo 40: la colegisladora valora pertinente especificar que, quienes impartan educación inicial, deberán atender los requisitos pedagógicos que establezca la autoridad educativa federal, tal como lo dispone el artículo 12 de la ley.

Propuesta de reforma al artículo 41: la Cámara de Senadores propone incorporar el concepto de personas con discapacidad en lugar de individuos, con la finalidad de atender los términos utilizados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006.

Propuestas de reforma a los artículos 42, 43, 44, 45 y 47: los legisladores argumentan que las propuestas contenidas en dichos artículos contribuyen a mejorar su sintaxis y a actualizar el uso de conceptos.

Propuesta de reforma al artículo 48: los senadores consideran viable la incorporación de un enunciado que garantice la revisión de los programas para la formación de maestros de educación básica cada cuatro años, con la finalidad de que respondan a las necesidades educativas de los alumnos.

Propuesta de reforma al artículo 49: la colegisladora señala que si bien el uso de las tecnologías de la información y comunicación es muy limitado en las escuelas de educación indígena, la propuesta de dotarlas de equipos de cómputo es una política pública que requiere de la asignación de recursos más que de un tratamiento legislativo específico, por lo que ven pertinente referirse únicamente al fomento del uso de recursos tecnológicos y didácticos en el proceso educativo.

Propuesta de reforma al artículo 50: en referencia a la obligación de las instituciones de informar a los educandos y padres de familia sobre los avances en el proceso educativo, los legisladores proponen cambiar el término "calificaciones de los exámenes" por "las evaluaciones".

Propuestas de reforma a los artículos 61, 62 y 64: en los artículos 61 y 62 se integra el concepto créditos académicos a los parámetros para establecer la equivalencia de estudios, ya que el Senado opina que dicha reforma facilitará, cuando sea procedente, el reconocimiento dentro y fuera del sistema educativo

nacional. Respecto del artículo 64, hacen referencia a procesos de aprendizaje adquiridos fuera de las aulas, que describen como conocimientos adquiridos de manera autodidacta o con base en la experiencia laboral, consideran que dichos estudios pueden constituir conocimientos parciales, que implican el desarrollo de una competencia o una habilidad equivalente a niveles educativos y técnicos, por lo que consideran pertinente reconocer la forma en que se adquirió este conocimiento que, eventualmente, sería objeto de evaluación de parte de la autoridad.

Propuesta de reforma al artículo 65: dicho artículo se refiere a la posibilidad de que los padres de familia o tutores sean quienes propongan soluciones a los problemas relacionados con la educación de sus hijos o pupilos con la participación de la comunidad educativa; en el marco de este derecho, la colegisladora propone que los padres de familia puedan conocer la relación de los trabajadores adscritos a cada centro escolar.

Propuestas de reforma a los artículos 70, 71 y 72: la Cámara de Senadores considera oportuna la inclusión de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, en correspondencia con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Finalmente, el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores señala que las reformas propuestas para incorporar a la Ley General de Educación representan la oportunidad de actualizar diferentes conceptos y criterios ausentes en la legislación vigente y responden a las nuevas circunstancias bajo las que se presta el servicio educativo nacional.

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, coincide con las preocupaciones expresadas en la minuta acerca de la calidad de la educación que actualmente el Estado mexicano brinda a su población.

De igual manera, los miembros de esta comisión coinciden en el señalamiento de que la reforma más importante en el sector no es legislativa, aunque es indispensable que la ley establezca con precisión las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en el terreno educativo, definiendo de manera clara las competencias de cada ámbito del gobierno y las finalidades de la educación que el Estado mexicano está obligado a prestar, entre otros elementos.

También existe coincidencia respecto a la preocupación por mantener cierto nivel de congruencia interna en los preceptos de la Ley General de Educación, de manera que no se produzcan confusiones o lo establecido en ella se preste a interpretaciones múltiples.

Con base en estas consideraciones generales, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo, en lo general, con la reforma a la Ley General de Educación impulsada por el Senado. Sin embargo, de manera particular se presentan

observaciones importantes respecto a algunas de las propuestas de reforma. Las observaciones se enlistan a continuación:

Artículo 2o., tercer párrafo

Propuesta del Senado: En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando **y, con el apoyo de la comunidad educativa en su conjunto, estimular** su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7.

En el artículo 2o. se establecen principios filosóficos (generales) acerca de la educación, como derecho de todo individuo (el educando, en el proceso educativo), sin precisar los actores responsables de conducir tal proceso. La propuesta de reforma, por su parte, se refiere al apoyo de "la comunidad educativa" en el proceso educativo, pero para su aplicación en el contexto del artículo sería necesario precisar los actores responsables, es decir, ¿a quién o a quiénes apoya la comunidad educativa?

En opinión de esta comisión, el espíritu de la reforma propuesta se encuentra contenido en los artículos 65 al 74 de la ley, ya que en ellos se regula de manera específica la participación social en la educación: derechos y obligaciones de los padres o tutores, las asociaciones de padres de familia y los consejos de participación social, en sus diferentes niveles. De manera más específica, el artículo 49 señala lo siguiente:

"Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas."

De esta manera, la propuesta se considera no procedente.

Artículo 4o., segundo párrafo

Propuesta del Senado: Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Desde la perspectiva de la equidad de género, los miembros de esta Comisión compartimos el sentido de esta propuesta y la consideramos pertinente. Adicionalmente, se considera que la reforma coincide con la impulsada por la LX Legislatura al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –actualmente en análisis por la Cámara de Senadores- y que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos, **hijas** o pupilos concurren a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ..."

Adicionalmente, los miembros de esta comisión consideran necesario aplicar este criterio a otros artículos de la Ley General de Educación con texto similar al que se reforma. Es el caso de los artículos 33, fracción IX, 40, 65, fracciones I y II, y 66, fracciones I, II y III.

Artículo 7o.

Fracción I

Propuesta del Senado: I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza **plena y responsablemente** sus capacidades humanas;

Los miembros de la comisión consideran pertinente incorporar en esta fracción la idea de responsabilidad en el ejercicio individual de las capacidades humanas, toda vez que se fortalece la idea de la formación de individuos autónomos, capaces de responder por sí mismos.

Fracción II

Propuesta del Senado: II. Favorecer **la adquisición de** conocimientos, la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos, **así como la formación de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas, incluyendo el dominio de un segundo idioma, que permitan al individuo incidir en su entorno y participar y cooperar con los demás;**

En opinión de los miembros de esta comisión, la propuesta de sustituir la frase "el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos" por "la adquisición de conocimientos" cambia el sentido original de la fracción, al eliminar la idea de la potencialidad de las aptitudes o capacidades individuales. Si bien es cierto que el complemento de la frase que se propone, ofrece elementos para una idea más amplia de la formación (de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas...), se considera que la primera frase crea una idea errónea acerca de la principal finalidad de la educación impartida por el Estado.

Respecto a la propuesta de incluir la enseñanza de un segundo idioma como uno de los fines de la educación, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considera fundamental que los alumnos de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria desarrollen adecuadamente sus competencias comunicativas en lengua materna y, en el caso de la población indígena, que además desarrollen las habilidades necesarias para comunicarse en español, como lengua nacional. Esta consideración tiene como principio el reconocimiento de nuestro país como una nación multicultural, y un profundo sentido de

respeto por el español, así como por las lenguas indígenas que se hablan en él. Este principio está presente en diversos instrumentos legales y, particularmente, en la propia Ley General de Educación.

Sin embargo, la afirmación anterior no impide a los miembros de esta Comisión coincidir con los promoventes al reconocer el papel del aprendizaje de otras lenguas como un elemento clave para el desarrollo individual y social en el mundo moderno, ya que por motivos educativos, laborales, comerciales, profesionales, culturales y turísticos, cada vez se incrementa más la apertura económica y cultural entre los países.

En este sentido, es fundamental señalar que –de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 48 de la Ley General de Educación– la determinación de los contenidos de planes y programas de estudio para la educación básica y normal es facultad de las autoridades educativas en sus distintos niveles y no del Poder Legislativo:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

II. a XIII. ...

Artículo 48. La secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Para tales efectos la secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados.

Los planes y programas que la secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa.

Así, las autoridades educativas se encuentran en posibilidad de introducir la enseñanza de un segundo idioma en los niveles y modalidades educativas en los que se considere pertinente y viable, con base en la experimentación de modelos pedagógicos que respondan a la diversidad de las características socioculturales de la población mexicana actual. De hecho, es importante destacar que en varias entidades federativas se ha incorporado ya la enseñanza del idioma inglés, y que esto se ha realizado en los plazos y términos definidos por el Ejecutivo. A nivel federal también se impulsa actualmente la incorporación del inglés como asignatura en educación preescolar y en primaria, en el marco de la reforma curricular que forma parte de la Alianza por la Calidad de la Educación.

Sin embargo, en atención al principio democrático de la educación impartida por el Estado establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la inclusión de tal medida en la Ley General de Educación significaría una nueva obligación que el Estado debería cumplir para todos los individuos, por lo menos en lo que a educación preescolar y primaria se refiere.¹ Dadas las características actuales del sistema educativo mexicano, tal objetivo parece poco viable en el corto y mediano plazos, tomando en cuenta las siguientes condiciones:

a) Si bien la investigación educativa muestra que el aprendizaje de un idioma adicional al materno se logra mejor en la primera infancia, también se ha mostrado que para que ese aprendizaje se dé es necesario que la intervención educativa asegure cierto nivel de calidad, con modelos pedagógicos que atiendan la diversidad social y cultural de la población; con maestros calificados tanto en el manejo del contenido como en la atención de alumnos pequeños; con materiales disponibles, pertinentes y adecuados, etcétera.

Al respecto, es necesario reconocer que las condiciones institucionales en gran parte de las escuelas públicas de nivel preescolar y primaria son poco propicias para desarrollar una intervención pedagógica con las características necesarias para lograr el aprendizaje de un idioma adicional: grupos numerosos, poco tiempo disponible para la enseñanza, etcétera. Parece más conveniente concentrar los esfuerzos que el Estado mexicano realiza en materia educativa –personal docente, recursos didácticos para las escuelas, infraestructura escolar, etcétera- en el fortalecimiento de la calidad de los servicios que se ofrecen tanto en español como en lengua indígena, antes que dispersar aún más la atención con la introducción de un idioma adicional.

Es indispensable tomar en cuenta que los niños y jóvenes mexicanos aún se encuentran en niveles no satisfactorios de aprendizaje, como lo muestran los resultados de distintas evaluaciones realizadas durante los últimos años.² En la medida en que se avance en el mejoramiento de los aprendizajes en lengua materna, seguramente se encontrarán mejores condiciones para la introducción de otro idioma a nivel general.

b) Los servicios de educación preescolar y primaria se prestan mediante las modalidades general, indígena y comunitaria. La distribución de la matrícula por modalidad se presenta en la siguiente tabla:

Como puede apreciarse, la población a la que el Estado estaría obligado a atender con un segundo idioma asciende a poco más de 17.5 millones de niños.

Los actuales profesores e instructores comunitarios de educación preescolar y primaria, por su preparación, no se encuentran en condiciones de asumir en lo inmediato la atención educativa de sus alumnos en una lengua extranjera, de manera que sería necesaria la contratación de maestros especialistas para la atención de los alumnos inscritos actualmente en estos niveles educativos.

Si bien es cierto que no sería necesario un maestro por cada plantel –y, menos aún, un maestro por cada grupo existente- para calcular el número de nuevas plazas deben considerarse las diferencias en el número de alumnos y la dispersión en la ubicación geográfica de las escuelas, sobre todo en las modalidades indígena y comunitaria. Con estas consideraciones –y a reserva de precisar el número de horas que se destinarían al estudio de una lengua extranjera- a continuación se presentan dos escenarios posibles para el cálculo de las nuevas plazas que sería necesario crear para cumplir con la reforma que se propone:

Escenario 1. Tomando como base un maestro especialista para cada dos planteles:

En este escenario, cada maestro de lengua extranjera se encargaría de atender, en promedio, un total de 212 alumnos (alrededor de 7 grupos en una semana).

Escenario 2. Tomando como base un maestro especialista para cada tres planteles:

En este segundo escenario, cada maestro especialista se encargaría de atender, en promedio, un total de 318 alumnos (alrededor de 11 grupos en una semana).

c) La reforma propuesta implica un reto pedagógico particular en el caso de la modalidad indígena ya que, de hecho, se estaría introduciendo la enseñanza de un tercer idioma; la situación resulta más complicada en los casos de las escuelas

indígenas de organización escolar multigrado, ya que los maestros atienden simultáneamente más de un grado escolar.

La modalidad de cursos comunitarios debe ser también motivo de atención especial, considerando el perfil de los instructores comunitarios, las características de las localidades en que se ubican tales servicios y el hecho de que prácticamente el 100 por ciento de las escuelas de nivel preescolar y primaria de esta modalidad son de organización multigrado.

También es importante mencionar que en la modalidad general, el 19 por ciento de los planteles de preescolar y el 37 por ciento de los de primaria son de organización multigrado. Estos datos se presentan en la tabla siguiente:

En opinión de esta comisión dictaminadora, antes de generalizar la introducción de un idioma adicional en la educación básica, es indispensable que se prueben modelos de atención educativa que resuelvan los retos pedagógicos que implica la atención de toda la matrícula, de manera que en todos los casos se asegure un servicio de calidad.

La omisión de planteamientos pedagógicos específicos para las diferentes modalidades redundaría en el agravamiento de la inequidad educativa, puesto que se estarían ofreciendo servicios con diferencias significativas en su calidad.

a) Una implicación más de la reforma propuesta –de menor dimensión pero no por ello menos importante– tiene que ver con los servicios educativos que prestan los particulares. Para el ciclo escolar 2008-2009⁷ se reportaron 14 mil 756 planteles de educación preescolar y 7 mil 842 escuelas primarias particulares; en estos casos, la reforma añadiría un requisito para su incorporación y el reconocimiento de los estudios que ofrecen, con las consiguientes implicaciones administrativas y de control para los niveles operativos del sistema educativo.

Fracción V

Propuesta del senado: V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad, **así como valorar la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana;**

La adición propuesta hace referencia a un aspecto importante para la sociedad mexicana (su diversidad y pluralidad), pero se considera que el espíritu de la propuesta ya está contenido en las fracciones III y IV del mismo artículo:

"III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español."

En este sentido, se considera una propuesta redundante y reiterativa.

Fracción VI

Propuesta del Senado: VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley, de la igualdad de los individuos ante ésta **y propiciar la cultura de la prevención del delito**, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

Los miembros de la comisión consideran adecuado el sentido de esta propuesta, toda vez que refiere a un problema grave que actualmente enfrenta la sociedad mexicana; sin embargo, en atención a que el artículo 7o. se refiere a los fines educativos de la educación impartida por el Estado, parece más pertinente incorporar la idea de "cultura de la legalidad", que se refiere al "estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone [a los ciudadanos] para garantizar la convivencia social y, por otra parte, que el ejercicio de sus derechos se realice en apego a las disposiciones legales",⁸ mientras que la prevención del delito hace referencia a acciones para combatir el crimen. De esta manera se establece una acción formativa, no punitiva.

Adicionalmente, de esta manera se establecerá mayor congruencia con las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Fracción X

Propuesta del Senado: X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar, la paternidad responsable **y la educación sexual y reproductiva**, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Si bien los miembros de esta comisión consideran pertinente y viable el tema al que se refiere esta reforma, se aprecia que la forma en que se formula es poco clara y tiene un sentido distinto al resto de la fracción, que señala los fines que el Estado se propone lograr en los individuos mediante la educación.

Es decir: mediante la educación, el Estado logrará desarrollar actitudes solidarias y logrará crear conciencia sobre la preservación de la salud, pero ¿mediante la educación el Estado "logrará crear conciencia sobre la educación sexual y reproductiva"? Es importante mencionar que las iniciativas que se toman como base para elaborar esta propuesta de reforma son precisas y claras respecto a su propósito, como puede apreciarse enseguida:

Senadora Irma Martínez Manríquez:

X. Desarrollar en los individuos actitudes solidarias, conocimientos y hábitos positivos para la preservación de la salud y la sana nutrición; fomentar la conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la planeación familiar, y la paternidad y maternidad responsables; el respeto a las diferencias y la construcción de una cultura para la igualdad entre mujeres y hombres, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar la prevención y rechazo de todo tipo de adicciones, estereotipos sexuales y homofobia, mediante el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

Senador Jorge Legorreta Ordorica:

XIV. Informar, orientar y poner a disposición información clara, completa y oportuna sobre la salud sexual y reproductiva, sobre la planificación familiar y sobre el uso de los métodos anticonceptivos.

En opinión de los integrantes de esta Comisión, la propuesta no es viable tal como está planteada en el Proyecto de Decreto debido a que generaría confusión; si existe la intención de incluir el tema de la sexualidad como uno de los fines de la educación, parece más adecuado hacerlo de manera clara y directa. En este sentido, se propone la siguiente redacción:

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Fracción XI

Propuesta del Senado: **XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;**

La preocupación por el tema del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales no es reciente, tiene ya más de tres décadas de estar presente en las políticas ambientales y educativas de gobiernos de distintos países, y principalmente, de diversos organismos nacionales e internacionales.

La educación ambiental es una estrategia para el desarrollo sustentable, a partir de considerar que la educación es una práctica social en donde los ciudadanos pueden tomar conciencia de la necesaria protección, preservación y conservación de los sistemas de soporte vital del planeta, constituyendo así la sustentabilidad de los recursos.

Tomando esta orientación como base, la educación ambiental debe ser considerada eje del desarrollo sustentable.⁹ Así, la educación debe ser la base para desarrollar la conciencia sobre la problemática a la que nos enfrentan el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias en el cambio climático.

El cambio climático es un problema mundial cuyas afectaciones concretas son cada vez más evidentes: derretimiento de glaciares, aumento de incendios forestales, incremento de la temperatura, disminución de lluvias en áreas húmedas, incremento de lluvias en áreas secas, variación en los patrones de migración, incremento del nivel del océano, etcétera (Basurto, 2005). La comunidad internacional ha asumido algunos compromisos para afrontar el cambio climático, los cuales derivan esencialmente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la cual México es signatario.

Así, la propuesta de reforma coincide en lo fundamental con las propuestas de dicha convención, la cual en el artículo 4 establece los siguientes compromisos:

"1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y circunstancias, deberán:

a) a h) ...

i) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en este proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales;...

En consecuencia, la propuesta de reforma se considera procedente.

Fracción XIII

Propuesta del Senado: XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo **y del trabajo en equipo;**

Los miembros de la Comisión consideran que la propuesta es redundante, debido a que el cooperativismo alude a la "cooperación en el orden económico y social".¹⁰ Además, el sentido de la propuesta está contemplado en el artículo 49 de la misma ley, que a la letra señala lo siguiente:

"El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas."

Artículo 9o.

Propuesta del Senado: Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación **media superior** y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, **considerará las necesidades del desarrollo económico nacional** y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

A juicio de los miembros de esta comisión, la inclusión de la educación media superior dentro de los niveles educativos que el Estado debe promover y atender es pertinente, toda vez que se trata de un nivel educativo que no está mencionado en el texto actual de este artículo.

Sin embargo, es importante tener presente que el 9 de diciembre de 2009 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, incorporando la esencia de esta propuesta. El proyecto de Decreto se formula en los siguientes términos:

"Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación **inicial, especial, media superior y superior**, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal."

Respecto a la segunda frase que se propone para este párrafo ("considerará las necesidades del desarrollo económico nacional"), los miembros de esta Comisión estiman que es innecesaria, puesto que está contenida en el texto vigente cuando señala que el Estado atenderá los tipos y modalidades necesarios para "el desarrollo de la nación".

Artículo 10, fracción IV Bis

Propuesta del Senado: **IV Bis. Los órganos responsables de la evaluación educativa;**

La adición es redundante, debido a que los órganos responsables de la evaluación educativa son instituciones del Estado o, en su caso, organismos descentralizados, por lo que ya están contemplados en la fracción V del mismo artículo:

"Constituyen el sistema educativo nacional:

I. Los educandos y educadores;

II. Las autoridades educativas;

III. El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas;

IV. Los planes, programas, métodos y materiales educativos;

V. Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados;

VI. Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía."

Artículo 12

Fracción IX

Propuesta del Senado: **IX. Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;**

A partir de la descentralización educativa iniciada en mayo de 1992, la autoridad educativa federal conservó las funciones normativas del sistema educativo nacional; en este marco, la propuesta de regular, coordinar y operar un mecanismo de información sobre el propio sistema educativo es indispensable para la toma de decisiones sobre política educativa.

Por lo que respecta a la propuesta de creación del Sistema Nacional de Información Educativa –como responsabilidad de las autoridades educativas federales, pero alimentada con la información proporcionada por cada entidad-, se considera pertinente y en armonía con el esquema de descentralización de los servicios educativos planteado en la legislación vigente y que opera en nuestro país.

Fracción XIV

Propuesta del Senado: **XIV. Regular a nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción de en el servicio docente y de administración escolar.**

Las relaciones laborales entre las dependencias educativas del Estado y los trabajadores se regulan en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional. En concordancia con lo establecido en la Constitución, esa ley establece los criterios a considerar en la designación de personal; en este marco, las autoridades educativas, en tanto titulares de las dependencias e instituciones públicas, tienen la facultad para definir los criterios, lineamientos, mecanismos e instrumentos aplicables a quienes aspiran a prestar sus servicios como trabajadores de tales dependencias.

La Ley General de Educación, por su parte, regula la función social educativa realizada por el Estado –federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

En atención a las consideraciones anteriores, los miembros de la Comisión consideran innecesario incorporar en la Ley General de Educación disposiciones de regulación laboral ya establecidas en un marco normativo más amplio, y que escapan del ámbito de competencia de esta ley.

Artículo 13

Fracción VII

Propuesta del Senado: **VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa;**

En opinión de los integrantes de la Comisión, la propuesta establece de manera clara funciones operativas que –en el marco de la federalización educativa– competen a las autoridades educativas estatales, complementando lo establecido en la fracción I de este mismo artículo, por lo que se considera pertinente.

Fracción VIII

Propuesta del Senado: **VIII. Coadyuvar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar; y**

También en el marco de las atribuciones de los distintos niveles de autoridad educativa, se considera adecuado el señalamiento; sin embargo, se estima conveniente modificar el término "coadyuvar" por el de "participar", con la finalidad de evitar toda idea de supeditación de la autoridad educativa local a la de nivel federal.

Artículo 14, fracción XIII

Propuesta del Senado: **XIII. Fomentar el consumo de alimentos saludables en las escuelas, y**

Los integrantes de la Comisión consideran que esta propuesta de reforma tiene un carácter mucho más específico que las otras atribuciones establecidas en el artículo, por lo que no se considera adecuada.

Adicionalmente, el 10 de febrero de 2010 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó dos dictámenes con propósito similar, que reforman los artículos 7, 12, 13, 57, 59, 67, 72 y 75; los proyectos de Decreto se orientan no sólo al fomento del consumo de alimentos saludables sino que establecen a la Secretaría de Educación Pública

y la Secretaría de Salud como las instancias responsables de definir una regulación específica para la venta de alimentos y bebidas en las cooperativas escolares. Las reformas aprobadas se formulan en los siguientes términos:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

X. a XIV. . . .

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XI. ...

XI Bis. Establecer la normatividad para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y –en colaboración con la Secretaría de Salud– los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que por sus altos valores nutricionales pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

XII a XIII. ...

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a IV. ...

IV Bis. Observar la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, así como vigilar la aplicación de los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares, establecidos en colaboración con la Secretaría de Salud;

V. a VII. ...

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. al III. ...

III Bis. Cumplir con la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y con la que, en colaboración con la Secretaría de Salud, se establezca respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

IV. a V. ...

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; **cumplir con la normatividad que establezcan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares, y** facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. ...

II. Colaborar para una **adecuada** integración de la comunidad escolar; **en la operación, mejora y vigilancia de las cooperativas, tiendas y comedores escolares,** así como en el mejoramiento de los planteles;

III. a V. ...

...

...

Artículo 72 Bis. Los consejos de participación social a los que se refiere esta sección colaborarán en la **vigilancia de la aplicación de las normas establecidas para el funcionamiento de las cooperativas y tiendas escolares, así como la relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares.**

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a VII. ...

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos, o bien de éstos cuando no cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública –en colaboración con la Secretaría de Salud- respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares;

IX. a XV. ...

...

En virtud de que los dictámenes descritos se encuentran en proceso legislativo, se considera no procedente la propuesta del Senado.

Artículo 20

Fracción II

Propuesta del Senado: II. **La formación continua**, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

La incorporación del término formación continua se considera pertinente, toda vez que actualiza el término utilizado en ese ámbito.

Último párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. **Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docentes.**

La reforma propuesta se considera procedente, puesto que otorga a las autoridades educativas estatales mayor flexibilidad para operar en el campo de la actualización de maestros en servicio, siempre y cuando se ajusten a los lineamientos que establezcan las autoridades educativas federales, de conformidad con el artículo 12 fracción VI de la Ley General de Educación, que señala lo siguiente:

"Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;"

Artículo 21

Primer párrafo

Propuesta del Senado: El educador es promotor, coordinador, **facilitador** y agente directo del proceso educativo. **Las autoridades educativas proporcionarán** los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Las propuestas se consideran pertinentes, toda vez que se agregan elementos respecto al papel del maestro en el proceso educativo y se precisan responsabilidades del Estado en materia educativa.

Tercer párrafo

Propuesta del Senado: El Estado otorgará un salario profesional **digno, que permita al profesorado** de los planteles del propio Estado **alcanzar** un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como **disponer** del tiempo necesario **de** preparación de las clases que impartan y para **realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y** profesional.

Las modificaciones a este párrafo se consideran pertinentes, ya que constituyen precisiones al texto vigente, salvo la preposición "de" preparación de las clases; debe decir "para la".

Quinto párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. **Además, establecerán mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo.**

El sentido de la propuesta se considera pertinente; sin embargo, debido a que el presente artículo se refiere a las obligaciones del Estado respecto a los educadores, se considera más adecuado ajustar la redacción de la propuesta, de manera que sólo se haga referencia al establecimiento de mecanismos para estimular a los docentes con base en la evaluación.

Artículo 22

Primer párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de

simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, **calidad y eficiencia**.

En opinión de los integrantes de esta Comisión, se trata de una reforma apropiada, debido a que tanto la pertinencia como la eficiencia suelen identificarse como elementos de la calidad.

Segundo párrafo

Propuesta del Senado: En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán **prioridad**, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. **Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.**

En lo que toca al segundo párrafo de este artículo, la Comisión coincide con la adición propuesta ya que se introduce la consideración del fortalecimiento de la gestión de las autoridades educativas.

Artículo 27, segundo párrafo

Propuesta del Senado: En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública. Asimismo, sin comprometer la gratuidad de la educación pública, se fomentará la gestión de donaciones en los centros escolares.

En opinión de esta comisión, esta reforma introduce de lleno al debate acerca de la gratuidad de los servicios educativos públicos en nuestro país. En este sentido, los Diputados integrantes reivindicamos el carácter público de la educación impartida por el Estado que establece la fracción IV del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual considera necesario realizar las siguientes consideraciones:

a) El apoyo voluntario con recursos (monetarios, de tiempo y en especie) es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. Es también la más claramente establecida en la Ley General de Educación y en el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.

Las aportaciones de los padres de familia son, en muchos casos, la principal o única fuente directa de ingresos a la escuela, y permiten cubrir los gastos que implica el funcionamiento regular, mantenimiento y mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria: pago de servicios,¹ adquisición y/o mantenimiento de equipo y mobiliario, material didáctico, de oficina, de limpieza e incluso artículos de consumo para los alumnos. Es frecuente también que se deban

afrontar gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado, como el pago de personal de asistencia, la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar, entre otros.

En este sentido, es justo destacar la enorme contribución que los padres de familia realizan a la educación pública. Los miembros de esta Comisión reconocemos la legitimidad del interés que los padres manifiestan porque sus hijos reciban educación en las mejores condiciones posibles, por lo que no se puede cancelar su disposición para aportar a la escuela lo que consideren necesario y esté dentro de sus posibilidades.

b) El reconocimiento anterior de ninguna manera significa que el Estado deposite en los padres de familia una parte importante del costo de la operación del sistema, sobre todo si se considera que tales aportaciones representan un esfuerzo mayor para las familias de escasos recursos y, en este sentido, las aportaciones voluntarias pueden operar como un factor más de inequidad, perjudicando a los grupos sociales menos favorecidos. Al respecto, varios estudios realizados en escuelas mexicanas han demostrado que los padres de alumnos inscritos en planteles pobres aportan a la escuela una proporción de su gasto mayor que aquellos cuyos hijos asisten a planteles menos pobres (Mercado: 1991, Schmelkes: 1994, OCE: 1999).

c) Un asunto más a considerar es el hecho de que frecuentemente se condicionan los servicios educativos al pago de cuotas llamadas voluntarias. En opinión de esta Comisión, las legítimas aportaciones voluntarias de las familias no pueden plantearse como condición para acceder a los servicios de educación básica, puesto que el hecho de que una familia no tenga posibilidades de contribuir con la escuela, o de aportar una cantidad específica, no debe implicar para sus hijos la cancelación del derecho de recibir una educación básica de calidad.

d) Por otra parte, es necesario reconocer la legitimidad del reclamo de los padres de familia y de las asociaciones que conforman, sobre el abuso en que en ocasiones incurren los directores y maestros. El manejo de los recursos aportados por los padres es un motivo frecuente de conflicto entre éstos y los responsables directos de la operación de los servicios de educación básica.

En este sentido, reconocer el derecho que tienen las familias de aportar a la escuela –siempre de manera voluntaria y dentro de sus propias posibilidades– todo aquello que consideren necesario para mejorar las condiciones escolares de sus hijos, plantea la necesidad de establecer medidas para el manejo transparente de los recursos aportados y para la rendición de cuentas. Sin la atención de esta necesidad, una reforma como la propuesta puede convertirse en fuente de conflicto por el uso de los recursos aportados.

Con base en las consideraciones anteriores, los miembros de esta comisión estiman no procedente la reforma propuesta al artículo 27, pues consideran que podría convertirse en la base que ofrezca sustento legal a la práctica de establecer cuotas en los planteles escolares

y, más aún, a la de condicionar los servicios educativos de carácter público. Adicionalmente, se considera que la medida puede también contribuir a profundizar la inequidad en la educación –las escuelas que atienden población pobre tendrían menos posibilidad de recibir recursos–, además de que sería necesario establecer nuevas reglas que aseguraran transparencia en el manejo de los recursos y mecanismos para la rendición de cuentas.

Artículo 33

Fracción II

Propuesta del Senado: II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades **y cumplir con el calendario escolar;**

La propuesta se considera pertinente, pues hace hincapié en la necesidad de cubrir el calendario escolar. Adicionalmente, los miembros de esta Comisión consideran necesario modificar la redacción de la primera frase de la fracción, de manera que los programas de apoyo a los maestros a que se hace referencia consideren tanto localidades aisladas como zonas urbanas marginadas.

Fracción IV

Propuesta del Senado: IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular **y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica,** otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

Se considera pertinente y viable. De esta manera se incluye no sólo a quienes ya abandonaron la escuela, sino a quienes están en riesgo de hacerlo.

Fracción VIII

Propuesta del Senado: **VIII.** Desarrollarán programas con perspectiva de género, **equidad y transparencia,** para otorgar becas y demás apoyos económicos **preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;**

La primera parte de la reforma propuesta para este párrafo ("equidad y transparencia") se considera innecesaria, puesto que tales características deben corresponder a todos los programas del sector y no sólo a los de becas; de manera específica, el texto vigente del artículo 25 de la Ley General de Educación señala:

"Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad

federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan."

La última frase que se adiciona a la misma fracción precisa la población objetivo de las becas, por lo que se considera viable.

Fracción X

Propuesta del Senado: **X. Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;**

La propuesta de reforma es viable, debido a que éste es el término utilizado formalmente para la sociedad civil organizada en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada el 9 de febrero de 2004.

En dicha ley se designa como organizaciones de la sociedad civil a "todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso...", así como a "las organizaciones que constituyan los capítulos nacionales de organizaciones internacionales que cumplan con lo establecido en el artículo 3 (...) siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos."

Fracción XIII

Propuesta del Senado: **XIII. Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y**

La propuesta es pertinente y viable, puesto que ayuda a precisar los términos.

Artículo 40 (adición de segundo párrafo)

Propuesta del Senado: **Los organismos descentralizados y los particulares que impartan educación inicial deberán atender los requisitos pedagógicos que formule la autoridad educativa federal.**

La propuesta resulta redundante respecto a lo establecido en la fracción VII del artículo 12 de la Ley General de Educación, que establece como una de las facultades de la autoridad educativa federal:

"Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares."

Artículo 41

Primer párrafo

Propuesta del Senado: La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La propuesta de reforma resulta en dos errores de concordancia, por lo cual los miembros de la Comisión proponen ajustar la redacción de la reforma, en los términos siguientes:

"La educación especial está destinada a **personas con discapacidad, transitoria o definitiva**, así como a **aquellas** con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género."

Segundo párrafo

Propuesta del senado: Tratándose de menores de edad con **discapacidad**, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

La reforma se considera pertinente, puesto que la utilización del singular incluye a personas con una o varias discapacidades.

Artículo 42

Propuesta del Senado: En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica, social **y nutricional**, sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad **y no afecte su autoestima**.

La propuesta es redundante, porque la "integridad nutricional" está considerada en el aspecto físico, y la "psicológica" incluye la autoestima. No se considera pertinente.

Artículo 43

Propuesta del Senado: La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como **de** formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la **participación** y la solidaridad social.

La primera parte de la propuesta consiste en sustituir un artículo (la) por una preposición (de), lo cual se considera pertinente. También lo es la inclusión de la palabra participación, debido a que complementa la idea de "solidaridad social".

Artículo 44

Primer párrafo

Propuesta del Senado: Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

La reforma propuesta para el primer párrafo consiste en la inclusión de un artículo (los), lo cual se considera pertinente.

Segundo párrafo

Propuesta del Senado: Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, **habilidades, capacidades y destrezas**, recibirán un informe que indique las **asignaturas** y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación **respectiva**.

Las modificaciones al segundo párrafo se consideran adecuadas, porque mantienen el sentido original y actualizan los términos al incluir "habilidades, capacidades y destrezas".

Artículo 45, primero, segundo y tercer párrafos

Propuesta del Senado: La formación para el trabajo procurará el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

La secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir **certificando competencias, conocimientos,**

habilidades y destrezas –intermedios o terminales– de manera parcial, continua y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

La secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la República, para la definición de aquellas **competencias**, conocimientos, habilidades y destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos particulares. Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que señalen los lineamientos citados.

El término competencias no tiene una interpretación única. Si bien en el campo educativo se ha utilizado en los años recientes para designar "la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizand o a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos : saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento",¹² el término "no tiene el mismo sentido en derecho, lingüística, psicología o ciencias del trabajo" y –más aún- "es objeto de controversias ideológicas",¹³ por lo cual se considera que su inclusión en la ley es inadecuado.

De hecho, en la propuesta de reforma el término se utiliza como sinónimo de adiestramiento para el trabajo, lo cual puede generar polémica. En opinión de los miembros de la comisión, es una reforma no necesaria puesto que el texto vigente es claro y suficiente.

Artículo 47, fracción I

Propuesta del Senado: I. Los propósitos de formación general y, en su caso, **la adquisición de conocimientos**, habilidades, **capacidades** y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

El énfasis de esta fracción está en "los propósitos de formación general"; la propuesta agrega características esperadas en tales propósitos, por lo cual se considera pertinente.

Artículo 48, tercero, cuarto y quinto párrafos

Tercer párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Nacional Técnico de la Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la secretaría, contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas, **la economía** y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La inclusión del tema de la economía en los contenidos regionales se considera innecesario, puesto que en la última parte del párrafo se precisa: "y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos". Si se opta por incluir una lista de temas, se corre el riesgo de dejar fuera otros que pueden resultar igualmente relevantes.

Cuarto y quinto párrafos

Propuesta del Senado: La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. **En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.**

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa **y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.**

Las propuestas de reforma en el cuarto y quinto párrafos responden al problema de la actualización de los planes y programas de estudio en las escuelas formadoras de maestros de educación básica, así como al frecuente desfase entre la aplicación de los nuevos programas de estudios en preescolar, primaria y secundaria, y la actualización de los profesores en servicio. Estas modificaciones se consideran pertinentes.

Artículo 49, primer párrafo

Propuesta del Senado: El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. **De igual manera se fomentará en el proceso educativo el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.**

La propuesta se considera pertinente, porque hasta la fecha la Ley General de Educación no precisa el fomento de la utilización de recursos tecnológicos y didácticos en el proceso educativo (se hace notar que es innecesario repetir "en el proceso educativo").

Artículo 50, segundo párrafo

Propuesta del Senado: Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

La propuesta es pertinente y viable, debido a que el término evaluaciones tiene un sentido más amplio que el de exámenes.

Artículo 61, segundo párrafo

Propuesta del Senado: La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, **créditos académicos**, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

La propuesta busca avanzar hacia la flexibilización de los criterios para el tránsito entre distintas instituciones del mismo nivel, lo cual se considera necesario y posible.

Artículo 62

Propuesta del Senado: Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, **créditos académicos**, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Al igual que la propuesta de reforma al artículo 61, con ésta se busca flexibilizar los criterios para el tránsito entre distintas instituciones del mismo nivel, por lo que se considera pertinente.

Artículo 64

Propuesta del Senado: La secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral **o a través de otros procesos educativos**.

Los acuerdos que emita la autoridad señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos, **competencias o destrezas adquiridos**.

Las modificaciones orientadas hacia la acreditación de conocimientos parciales, como es el caso de la propuesta al primer párrafo de este artículo, se consideran pertinentes y adecuadas. Sin embargo, respecto a la reforma al segundo párrafo el uso del término competencias puede prestarse a diversas interpretaciones pues –como ya antes se explicó– no hay consenso respecto a su significado, por lo que parece más adecuado evitarlo en la Ley General de Educación.

Artículo 65, fracciones IV, V y VI

Propuesta del Senado: IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen, y

VI. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

La reforma propuesta a la fracción VI se considera necesaria, en términos de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Adicionalmente, se encuentra en armonía con los mecanismos de control previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Las modificaciones en las fracciones IV y V son necesarias para la mejor comprensión del artículo.

Artículos 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; y 72

Propuesta del Senado: **Artículo 70.** En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de **organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación** y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Artículo 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, **organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación**, así como **los sectores social y productivo** de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

Artículo 72. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, **organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación**, así como los sectores **social y productivo** especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Las reformas propuestas se consideran pertinentes, debido a que éste es el término utilizado formalmente para la sociedad civil organizada.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente dictamen, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea acordar que se devuelva al Senado de la República la presente

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para efecto de que las modificaciones propuestas por esta Revisora sean discutidas por la Cámara de origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se **reforman** los artículos 4, segundo párrafo; 7, fracciones I, VI, X y XI; 12, fracción IX; 20, fracción II y último párrafo; 21, párrafos primero, tercero y quinto; artículo 22; 33, fracciones II, IV, VIII, IX, X, y XIII; el artículo 40; 41, primero y segundo párrafos; el artículo 43; 44, primero y segundo párrafos; 47, fracción I; 48, cuarto y quinto párrafos; 49, primer párrafo; 50, segundo párrafo; 61, segundo párrafo; el artículo 62; 64, primer y segundo párrafos; 65, fracciones I, II y IV; 66, fracciones I, II y III; 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; el artículo 72; y se **adicionan** las fracciones VII y VIII, recorriéndose la actual VII a una IX del artículo 13; la fracción VI del artículo 65; todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus **hijas**, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 7o. ...

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza **plena y responsablemente** sus capacidades humanas;

II. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, **propiciar la cultura de la legalidad**, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

VII. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, **el ejercicio responsable de la sexualidad**, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, **la prevención del cambio climático**, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. **También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;**

XII. a XV. ...

Artículo 12. ...

I. a VIII. ...

IX. Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;

X. a XIII. ...

Artículo 13. ...

I. a V. ...

VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa;

VIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar; y

IX. Las demás que con tal carácter...

Artículo 20. ...

I. ...

II. La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

III. y IV. ...

Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. **Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.**

Artículo 21. El educador es promotor, coordinador, **facilitador** y agente directo del proceso educativo. **Las autoridades educativas proporcionarán** los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

...

El Estado otorgará un salario profesional **digno, que permita al profesorado** de los planteles del propio Estado **alcanzar** un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como **disponer** del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para **realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.**

...

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. **Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación.**

Artículo 22. Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, **calidad y eficiencia.**

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán **prioridad**, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. **Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.**

Artículo 33. ...

I. ...

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que **presten sus servicios** en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y **cumplir con el calendario escolar;**

III. ...

IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular **y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica**, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos **preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación**;

IX. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus **hijas e hijos**;

X. Otorgarán estímulos a las **organizaciones de la sociedad civil** y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XI. ...

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Realizarán las demás actividades que permitan **mejorar** la calidad y **ampliar** la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XIV. ...

...

Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus **hijas**, hijos o pupilos.

Artículo 41. La educación especial está destinada a **personas con discapacidad, transitoria o definitiva**, así como a **aquellas** con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con **discapacidad**, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y

productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

...

...

...

Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la **participación y** la solidaridad social.

Artículo 44. Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos **adquiridos**, mediante **evaluaciones** parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una **evaluación** no acrediten los conocimientos, **habilidades, capacidades y destrezas**, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de **aprendizaje** en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar **nuevas evaluaciones** hasta lograr la acreditación **respectiva**.

...

...

Artículo 47. ...

...

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, **la adquisición de conocimientos**, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II. a IV. ...

...

Artículo 48. ...

...

...

La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. **En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.**

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa **y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.**

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. **De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.**

...

Artículo 50. ...

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados **de las evaluaciones** parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

Artículo 61. ...

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, **créditos académicos**, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 62. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, **créditos académicos**, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 64. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos **parciales o** terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral **o a través de otros procesos educativos.**

Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

Artículo 65. ...

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus **hijas**, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

...

II. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus **hijas**, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;

III. ...

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este **capítulo**;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen, y

VI. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

Artículo 66. ...

I. Hacer que sus **hijas**, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II. Apoyar el proceso educativo de sus **hijas**, hijos o pupilos, y

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes **de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación** y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

...

...

...

Artículo 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, **organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación**, así como **los sectores social y productivo** de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

...

Artículo 72. La secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, **organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación**, así como los sectores **social y productivo** especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

Tercero. La constitución de los sistemas y registros a que hacen referencia la fracción IX del artículo 12 y VII del artículo 13, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestal, de manera gradual y con la participación coordinada de las autoridades educativas de los órdenes de gobierno correspondientes.

Notas

1. Constituyen los dos niveles de la educación obligatoria en los que no se considera la enseñanza de una lengua extranjera, puesto que ya se incluye en las tres modalidades de la secundaria (general, técnica y telesecundaria).

2. Como PISA y ENLACE.

3. Tablas elaboradas con base en: Presidencia de la República (2009). *Tercer informe de gobierno*. México.

4. Ídem.

5. Ídem.

6. Ídem.

7. Presidencia de la República (2009). *Tercer informe de gobierno*. México.
8. Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México.
9. Es importante señalar que la ONU ha definido el desarrollo sostenible como aquel que "... satisface las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades." En este sentido, y si bien se considera un concepto que puede ser valioso incorporar en la legislación en materia ambiental en México, en el presente dictamen se retoma el concepto de **desarrollo sustentable** para ser incorporado en la Ley General de Educación como lo propone la Minuta enviada por el Senado. Para mayor referencia sobre el concepto de desarrollo sostenible ver: ONU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Desarrollo Sostenible, en: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/>
10. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
11. Hay diferencias en las entidades federativas respecto a los servicios cuyo costo es asumido por el gobierno local y los que debe cubrir cada plantel escolar.
12. Perrenoud, Philippe (2001). "La formación de los docentes en el siglo XXI", en *Revista de tecnología educativa*, XIV, núm. 3, pp. 503-523. Santiago de Chile.
13. Perrenoud, Phillipe (2008). *Formación de maestros. Algunas orientaciones*. Universidad de Ginebra.

Palacio Legislativo, a 21 de abril de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra.